

Chalmers Johnson

Las amenazas del imperio

Militarismo, secretismo y el fin de la república

Crítica
Barcelona

Chalmers Johnson

Las amenazas del imperio

Militarismo, secretismo y el fin de la república

Crítica
Barcelona

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original: *The sorrows of Empire
Militarism, Secrecy, and the End of the Republic*

Traducción castellana de ISABEL CAMPOS ADRADOS
Revisión general de LUIS NORIEGA

Diseño e ilustración de la cubierta: Compañía
Fotocomposición: Paemer S. A.

© 2004 by Chalmers Johnson
First published by Metropolitan Books (Henry Holt & Co.)
Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency and B&B Serveis Literaris S. L.
All rights reserved

© 2004 de la traducción castellana para España y América:
CRÍTICA, S. L., Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
e-mail: editorial@ed-critica.es
http://www.ed-critica.es

ISBN: 84-8432-543-1
Depósito legal: M. 17.823-2004
Impreso en España

2004. BROSMAAC, Polígono Industrial 1, calle C, Móstoles (Madrid)

Prólogo

La revelación del imperio americano

Nuestra nación es la mayor fuerza del bien de la historia.

Presidente George W. Bush, Crawford,
Texas, 31 de agosto de 2002.

ADIFERENCIA DE OTROS PUEBLOS, la mayoría de los estadounidenses no admite —o no desea admitir— que su país domina el mundo a través de su poderío militar. Debido al secretismo del gobierno, los norteamericanos desconocen a menudo el hecho de que éste posee cuarteles en cada rincón del planeta. No se percatan de que la gigantesca red de bases militares estadounidenses, a excepción de la Antártica, presente en todos los continentes, constituye en realidad una nueva forma de imperio.

Nuestro país despliega bastante más de medio millón de soldados, espías, técnicos, profesores, contratistas y trabajadores civiles en otras naciones, como también casi una docena de destacamentos militares en portaaviones en todos los océanos y mares del mundo. Contamos con numerosas bases secretas fuera de nuestro territorio para controlar lo que las personas de todo el planeta, e incluso nuestros propios ciudadanos, se dicen o se comunican por fax o correo electrónico. Nuestras instalaciones militares y de espionaje, repartidas por todo el globo, generan beneficios a las industrias civiles que proyectan y fabrican armamentos para nuestros ejércitos y a las que se encargan de la construcción y mantenimiento de nuestras avanzadillas. Una de las tareas de esos contratistas es mantener a los miembros uniformados del im-

perio alojados con comodidad, bien alimentados y entretenidos, y asimismo proporcionarles agradables instalaciones vacacionales a precios razonables. Sectores enteros de la economía estadounidense han pasado a depender de los militares para sus ventas. En las vísperas de nuestra segunda guerra contra Irak, por ejemplo, el Departamento de Defensa encargó 273.000 frascos del protector solar Native Tan (SPF 15), casi el triple de lo que había solicitado en 1999, lo que representó, sin duda, una bendición para el suministrador, Control Supply Co., de Tulsa, Oklahoma, y para su subcontrata, Sun Fun Products, de Daytona Beach, Florida.¹

El nuevo imperio americano lleva mucho tiempo construyéndose. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX, cuando Estados Unidos declaró a toda Latinoamérica como su área de influencia, y se propuso ampliar su territorio a expensas de la población nativa de Norteamérica, los colonialistas británicos, franceses y españoles y sus vecinos mexicanos. Al igual que sus contemporáneos en Australia, Argelia y la Rusia zarista, los estadounidenses dedicaron gran parte de sus esfuerzos a desplazar a los habitantes originarios del continente y entregar sus tierras a nuevos pobladores. Más tarde, al borde del siglo XX, la guerra entre Estados Unidos y España significó un nuevo paso. La forma en que los acartonados imperialistas entonces en el poder utilizaron este conflicto para establecer bases militares en Centroamérica, varias islas del Caribe, Hawái, Guam y Filipinas guarda cierta similitud con la manera en que, un siglo después, un grupo de conservadores bastante parecido intentaría impulsar su propio programa expansionista amparado en la «guerra contra el terrorismo».

De la segunda guerra mundial nuestra nación salió convertida en la más rica y poderosa de la Tierra, y se nombró a sí misma sucesora del Imperio Británico. Sin embargo, mientras algunos de nuestros líderes de la época, en particular, el presidente Franklin D. Roosevelt, se mostraban especialmente entusiastas al respecto, el pueblo estadounidense no era de la misma opinión. Los norteamericanos exigieron que el país desmovilizara sus tropas y centrara su atención en la lucha por el pleno empleo y el desarrollo interno. Con todo, la paz no duró demasiado. La guerra fría y la convicción cada vez más fuerte de que intereses vitales, e incluso la propia supervivencia nacional, requerían la «contención» de la Unión Soviética contribuyeron a transformar el imperio informal iniciado durante la segunda guerra mundial en cen-

tenares de instalaciones, repartidas por todo el mundo, para uso del mayor ejército que hemos mantenido en tiempos de paz.

Durante los casi cincuenta años que duró el pulso entre las superpotencias, Estados Unidos negó que sus actividades constituyeran una forma de imperialismo. Lo nuestro, creíamos, no era más que una forma de reaccionar a la amenaza que suponía el «imperio del mal» de la URSS y sus satélites. Fue sólo poco a poco que empezamos a comprender que el papel de los militares en nuestro país era cada vez mayor y que el poder ejecutivo —la «presidencia imperial»— estaba erosionando los pilares de nuestra república constitucional. No obstante, incluso en la época de la guerra de Vietnam y de los abusos que vinieron a ser conocidos como «Watergate», esa conciencia nunca contó con la fuerza suficiente para revertir la transferencia de poder de los representantes del pueblo al Pentágono y las distintas agencias de espionaje (en especial, la Agencia Central de Inteligencia) que estaba ocasionando la guerra fría.

Cuando en 1991 la Unión Soviética se vino abajo, y con ella los argumentos para las políticas de contención estadounidenses, nuestros dirigentes se habían acostumbrado tanto a dominar la mitad del planeta que les resultaba inconcebible la idea de renunciar a ello. Muchos norteamericanos concluyeron, sencillamente, que habían «ganado» la guerra fría, por lo que se merecían los frutos de la victoria. Una serie de ideólogos empezó a sostener que Estados Unidos era, de hecho, un «imperio bueno» y que, por consiguiente, debía actuar como tal en un mundo con un único poder dominante. Desmovilizarnos y dirigir nuestros recursos hacia fines pacíficos sería, según sus argumentos, cometer el antiguo pecado del «aislacionismo».

En la primera década después de la guerra fría llevamos a cabo numerosas acciones con el fin de perpetuar y extender nuestro poder mundial (incluidas guerras e intervenciones «humanitarias» en Panamá, el golfo Pérsico, Somalia, Haití, Bosnia, Colombia y Serbia), al tiempo que manteníamos las fuerzas desplegadas durante la guerra fría en el este asiático y el Pacífico. A los ojos de su propio pueblo, Estados Unidos continuó siendo, en el peor de los casos, un «imperio informal». Al fin y al cabo, no poseía colonias, y sólo empleaba su inmensa fuerza militar para mantener la «estabilidad», garantizar la «seguridad mutua», o promover un orden mundial liberal fundado en las elecciones libres y el «libre comercio» al estilo americano.

A los estadounidenses les gusta decir que el mundo cambió a consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Sería más exacto afirmar que los atentados generaron un peligroso cambio en la forma de pensar de algunos de nuestros líderes, que empezaron a considerar nuestra república como un auténtico imperio y una nueva Roma, el mayor coloso de la historia, no atado ya por las leyes internacionales, las preocupaciones de sus aliados o algún tipo de restricción respecto al uso de su poderío militar. La mayoría del pueblo norteamericano todavía no entiende las razones por las que fue atacado, o los motivos del Departamento de Estado para desaconsejarle viajar como turista a una lista de países cada vez más grande. («¿Por qué nos odian?» era una pregunta corriente en las tertulias, y la respuesta más frecuente solía ser: «por envidia».) Sin embargo, cada vez más personas han empezado a comprender al fin lo que la mayoría de los no estadounidenses ya sabía o había experimentado directamente a lo largo de los últimos cincuenta años, esto es, que Estados Unidos es algo distinto de lo que proclama ser, que es, de hecho, una apisonadora militar que busca dominar el mundo.

Es posible que los norteamericanos todavía prefieran emplear eufemismos como el de «única superpotencia», pero desde el 11-S nuestro país ha sufrido una transformación de república a imperio que puede demostrarse irreversible. De pronto, cuestionar la «guerra contra el terrorismo» de la administración Bush se convirtió en algo «antiamericano», por no hablar de la guerra contra Irak, o contra todo el «eje del mal», o incluso contra los cerca de sesenta países en los que, según declararon el presidente y su secretario de Defensa, operan células de Al Qaeda y que, por consiguiente, constituyen claros objetivos de la intervención unilateral estadounidense. Los medios de comunicación han permitido que se los manipule y han empezado a emplear expresiones eufemísticas como «daños colaterales», «cambio de régimen», «combatientes ilegales» y «guerra preventiva», como si éstas explicaran y justificaran de algún modo lo que el Pentágono está haciendo. Al mismo tiempo, el gobierno ha realizado un gran esfuerzo para impedir que el nuevo Tribunal Penal Internacional tenga siquiera la opción de admitir a trámite acusaciones contra funcionarios norteamericanos por crímenes de guerra.

Este libro es una guía del imperio americano en el momento en que abiertamente empieza a extender sus alas. Su alcance es mundial: ha-

cia septiembre de 2001, el Departamento de Estado reconocía la existencia de, al menos, 725 bases militares estadounidenses en el exterior. En realidad, son muchas más, dado que algunas existen en forma de arrendamientos, acuerdos informales y distintos tipos de disfraces. Y algunas otras han sido creadas después de que se hiciera pública esta información. El paisaje de ese imperio militar es tan fantástico y poco familiar para la mayoría de los norteamericanos hoy como lo fueron el Tíbet o Tombuctú para los europeos del siglo XIX. Entre sus adiciones más recientes se encuentran la base aérea de al-Udeid en el desierto de Qatar, donde varios miles de militares estadounidenses viven en tiendas con aire acondicionado, y la estación aeronaval de la isla al-Masirah en el golfo de Omán, donde la única diversión es el «wadi ball», un cruce de balonvolea y fútbol. Incluye costosos cuarteles permanentes, construidos entre 1999 y 2001, en lugares tan insólitos como Kosovo, Kirguizistán y Uzbekistán. El moderno imperio americano de las bases también cuenta con lugares para el esparcimiento y las escapadas, a semejanza de esas ciudades en las colinas del norte de la India que los gobernantes del Imperio Británico utilizaban para su descanso y recreo durante los calores estivales. Para las fuerzas armadas, los equivalentes contemporáneos de Darjeeling, Kalimpong y Srinagar los constituyen su centro de esquí y vacaciones de Garmisch, en los Alpes bávaros, su hotel en el centro de Tokio y los 234 campos de golf militares que administran en todo el mundo, por no hablar de los lujosos aviones utilizados para llevar a los almirantes y generales a dichos lugares, una flota compuesta por 71 Learjet, 13 Gulfstream III y 17 Cessna Citation. Cada Gulfstream cuesta alrededor de 50 millones de dólares y transporta doce pasajeros, además de dos pilotos, un ingeniero de vuelo, un operador de comunicaciones y un auxiliar de vuelo.

Tal como ocurría en los antiguos imperios, el nuestro tiene sus prócsules, en este caso militares de alta graduación que hacen cumplir a los gobiernos anfitriones «acuerdos sobre el estatus de las fuerzas armadas», para garantizar que los soldados estadounidenses no sean responsabilizados por los delitos que cometan contra los locales. Nuestro imperio militarizado es una realidad física con un estilo de vida particular, pero constituye asimismo una red de intereses políticos y económicos que lo vincula de mil formas distintas a las empresas, universidades y comunidades americanas, si bien se mantiene separado

de la vida cotidiana en lo que, desde hace muy poco, se ha decidido llamar «tierra natal». Con todo, incluso esta idea de separación está desapareciendo, puesto que la naturaleza cambiante del imperio está modificando también la de nuestra sociedad.

Por ejemplo, poco a poco pero con firmeza, el Departamento de Defensa ha empezado a eclipsar al Departamento de Estado y a ocupar su posición como principal organismo en el diseño y gestión de la política exterior. Hoy situamos en el extranjero a muchísimos más funcionarios militares uniformados que a diplomáticos civiles, trabajadores humanitarios y especialistas en medio ambiente, una cuestión que no pasa inadvertida en los países a los que son destinados. Nuestras guarniciones envían a diario el mensaje de que Estados Unidos prefiere tratar con otros países a través del uso o la amenaza de la fuerza, en lugar de hacerlo por medio de las negociaciones, el comercio y los intercambios culturales, al igual que prefiere las relaciones entre los militares de ambas partes a las relaciones entre el personal civil. Esto resultó bastante claro en un discurso que el presidente George W. Bush profirió el 1 de junio de 2002 en la academia militar de West Point, en el que sostuvo que Estados Unidos ha de estar preparado para entablar una «guerra contra el terrorismo» con nada menos que sesenta países. «Debemos librar esa batalla contra el enemigo, desbaratar sus planes y enfrentarnos a las peores amenazas antes de que surjan.» Los estadounidenses hemos de estar «preparados para actuar de forma preventiva, siempre que sea necesario para defender nuestra libertad y nuestra vida ... En el mundo en que nos hemos adentrado, el único camino para la seguridad es el de la acción. Y este país actuará».

En el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre, Arthur Schlesinger, Jr., historiador y antiguo consejero del presidente John F. Kennedy, señaló que: «Uno de los sucesos más asombrosos de los últimos meses es la presentación de la guerra preventiva como un instrumento legítimo y moralmente válido de la política exterior estadounidense ... Durante la guerra fría, se descartaba a los defensores de la guerra preventiva, que eran considerados unos chiflados ... La política de la contención y disuasión ganó la guerra fría. Después del desmoronamiento de la Unión Soviética, todos dieron gracias al cielo porque los locos de la guerra preventiva nunca hubieran llegado a gobernar en ningún país importante. Hoy, desgraciadamente, pa-

recen estar en el poder en Estados Unidos».² Schlesinger se refería, en concreto, a Dick Cheney, el secretario de Defensa del primer gobierno Bush y hoy, por supuesto, vicepresidente de la nación, así como a Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa del segundo gobierno Bush, y sus amigotes en el Pentágono. La última vez que los militaristas civiles y uniformados se acercaron siquiera al grado de dominio de la vida política americana que encontramos en la actualidad fue cuando el secretario de Defensa Robert McNamara dirigía la política respecto a Vietnam.

Al igual que la mayor parte de los estadounidenses que no están relacionados de forma directa con las fuerzas armadas, presté poca atención a nuestro imperio de bases militares hasta febrero de 1996, cuando visité por primera vez nuestra colonia militar *de facto* en Okinawa, una pequeña isla japonesa que ocupamos sin interrupción desde 1945. Mi último encuentro con el estamento militar había terminado cuarenta años antes, cuando en el verano de 1955 dejé el servicio activo como oficial de marina en el Pacífico occidental. En 1996, después de que dos soldados de infantería de marina y un marino violaran a una niña de 12 años en Okinawa, el gobernador de la isla, Masahide Ota, me invitó a hablar sobre los problemas de nuestras bases. Visité el pueblo de Kin, casi completamente absorbido por Camp Hansen, la gigantesca base de la infantería de marina donde el secuestro y la violación habían tenido lugar, y entrevisté a los funcionarios locales. Me marché muy preocupado, tanto por la hostilidad de los habitantes de Okinawa como por el hecho de que ninguna estrategia seria podría explicar las 38 bases distintas que se encuentran desplegadas en la zona más privilegiada de la isla, de la cual ocupaban el 20 por 100.

Al considerar las innumerables playas, campos de golf y otras instalaciones de recreo reservados para el disfrute de nuestros militares, así como la existencia de aeropuertos independientes para la fuerza aérea, la marina y la infantería de marina, resultaba evidente que las bases sencillamente habían crecido a gusto durante la guerra fría. No se había tenido ninguna consideración por el uso justo de la tierra ni por las vidas de los 1,3 millones de ciudadanos de Okinawa. La situación de los militares en la isla se me antojó similar a la de las tropas soviéticas en Alemania Oriental, tras la caída del muro de Berlín. En ambos casos, los soldados preferían seguir donde estaban, puesto

que los placeres de la vida como legionarios de una guarnición imperial superaban con creces los de la vida en la «tierra natal».

Los militares y sus familias estaban contentos con sus clubes, pisos, gimnasios, piscinas y centros comerciales (conocidos en el argot militar como *base exchanges*), y sin lugar a dudas preferían Okinawa a estar confinados en Estados Unidos en localidades como Oceanside, California, una pequeña ciudad adyacente a la base de los infantes de marina en Camp Pendleton. Además, las penas por violación son considerablemente más altas en California que las impuestas por los japoneses a los militares condenados en Okinawa, lo que no deja de ser un elemento a tener en cuenta. Asimismo, los términos del Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas Armadas que Estados Unidos impuso a Japón en 1953 exigen que se proporcione una alimentación especial a los pocos soldados estadounidenses que han sido entregados a las autoridades japonesas y realmente han ido a parar a prisión. Por término medio, las comidas que se servían a los prisioneros japoneses contenían 2.800 calorías, mientras que las destinadas a los doce norteamericanos encarcelados a finales de 2001 contenían 4.000.³

Después de visitar Okinawa empecé a investigar y a escribir sobre la historia de nuestras fuerzas armadas en la isla, desde la sangrienta batalla final de la segunda guerra mundial contra el ejército japonés hasta los intentos de trivializar la violación ocurrida el 4 de septiembre de 1995 por parte de importantes oficiales norteamericanos y funcionarios del Departamento de Defensa.⁴ Mi perspectiva era la de un académico. Había pasado la vida estudiando las políticas y economías de Japón y China, no analizando la hegemonía militar de Estados Unidos. Al igual que muchos japoneses que no residían en Okinawa, tendía a considerar como única la situación de la isla o, en el peor de los casos, como un triste ejemplo de la complacencia y la negligencia del Pentágono. La solución parecía evidente: cerrar algunas de las bases innecesarias, hacer retornar a suelo americano a buena parte de las fuerzas terrestres y disminuir las cargas impuestas al pueblo de Okinawa, y así conseguir que el odio hacia Estados Unidos que se manifestaba en la isla por doquier empezara a decrecer. Pensaba que si el Pentágono se concentraba en sus prioridades reales podría incluso mantener algunas instalaciones, como la base de la fuerza aérea de Kadena, que tal vez resultaran útiles en un mundo después de la guerra fría. De otra forma, me parecía que tarde o temprano los habitan-

tes de Okinawa se rebelarían y nos echarían, tal como habían hecho los filipinos en 1992 y amenazarían hacer los surcoreanos en 2003, y exactamente como habían hecho los berlineses con los soviéticos en 1989.

Sólo poco a poco empecé a entender que Okinawa no era algo único, sino típico. Lo que había observado allí —la expropiación para las bases de la zona más valiosa de la isla, la extraterritorialidad de los soldados estadounidenses que cometen delitos contra los civiles del lugar, los bares y burdeles apiñándose junto a las entradas principales de las bases, los incontables accidentes, los conductores embriagados, el ruido, la violencia sexual, el consumo de drogas y la contaminación ambiental— se repetía en todos los lugares en que existe una guarnición norteamericana. Cuando se compara Okinawa con las numerosas bases del resto de Japón, la más de una centena de instalaciones de Corea del Sur, y nuestros enormes despliegues en Alemania, Reino Unido, Italia, los Balcanes, el golfo Pérsico, Latinoamérica y otros lugares, ésta no resulta particularmente especial, excepto por la desproporción entre el número de bases y el tamaño de la isla. Dado que los procónsules militares estadounidenses sienten aversión por la publicidad, la prensa nacional apenas visita su imperio de bases o informa al respecto. Yo había conseguido asomarme a un aspecto de la vida norteamericana contemporánea que la mayoría de nuestros compatriotas nunca ve.

A la luz de esa experiencia, a finales de la década de 1990 me dediqué a escribir un libro sobre la política exterior americana, al que titulé *Blowback*, el término con que la CIA se refiere a las consecuencias inesperadas y desagradables de las acciones encubiertas en otros países, el también llamado «efecto bumerán». Mi intención era alertar a mis compatriotas sobre la forma en que se ha dirigido nuestra política exterior a lo largo del último medio siglo, centrándome en especial en la década que siguió a la desaparición de la Unión Soviética y en la evolución de la situación política en el este asiático. El libro fue publicado a comienzos de la primavera de 2000. En él sostenía que mucho de lo que el gobierno de Estados Unidos había hecho en el extranjero prácticamente invitaba a las naciones y pueblos víctimas de su intervención a atacar en represalia. El efecto bumerán de la segunda mitad del siglo XX apenas ha comenzado. En cierto sentido, el término *blowback* no es más que otra manera de decir que un país cosecha lo que

ha sembrado. Si bien los estadounidenses acostumbran saber lo que han sembrado en cuanto individuos, es raro que posean ese mismo conocimiento en cuanto nación, dado que gran parte de lo que los dirigentes de nuestro imperio han hecho ha sido mantenido en secreto.

Aunque empecé a interesarme por nuestras bases en el exterior a raíz de mi visita a Okinawa, ya poseía alguna idea sobre la organización del imperialismo americano y sus operaciones secretas. De 1967 a 1973 había trabajado como consultor de la Oficina de Previsiones Nacionales de la Agencia Central de Inteligencia.⁵ Richard Helms, entonces director de la CIA, me había invitado a unirme a un grupo externo de cerca de veinte especialistas en relaciones internacionales, para leer los borradores de las previsiones de los servicios nacionales de inteligencia y ofrecer críticas no burocráticas de ellos. Las previsiones de inteligencia son el resultado del análisis de la información obtenida a través de las labores de espionaje; el director de la CIA coordina su elaboración con otras agencias de inteligencia y entrega luego las conclusiones al presidente y sus consejeros. Las previsiones no indican las fuentes de la información en estudio y están redactadas en una especie de prosa burocrática inofensiva con el fin de atenuar las diferencias de interpretación entre, digamos, la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Helms sería condenado unos años más tarde por mentir bajo juramento al congreso, al declarar que la agencia no tenía nada que ver con el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende. Esa fue mi introducción al mundo del secreto.

En 1967 se me conocía, ante todo, por ser un especialista en China. A la agencia le interesaban mis opiniones sobre varios asuntos de gran importancia entonces: la guerra de Vietnam, la ruptura sino-soviética y la purga maoísta en el interior del Partido Comunista chino, conocida como Revolución Cultural, así como lo que los chinos denominaban «guerra popular», una cuestión que en aquel tiempo preocupaba a Washington. Las reuniones en que participábamos los consultores externos tenían lugar dos veces al año en la casa de Allen Dulles, antiguo director de la agencia, situada en Camp Peary, Virginia, entonces una base «secreta» de entrenamiento de la CIA.

Aunque me habían otorgado una acreditación muy alta en materia de seguridad, pronto descubrí que no tenía razones para preocuparme por la posibilidad de revelar sin proponérmelo secretos nacio-

nales. El mejor motivo para mantener secretas las previsiones de los servicios nacionales de inteligencia, como le dije un día a mi esposa, era su completa banalidad. Acaso se las consideraba altamente secretas porque habría resultado embarazoso que se supiera que, en el despacho Oval, semejante periodismo convencional se hacía pasar por pensamiento estratégico. Los encuentros eran alegres e interesantes, pero sólo en raras ocasiones las previsiones nacionales se apartaban de la opinión militarista que constituía la norma durante la guerra de Vietnam. (Por otra parte, los analistas de la CIA que conocían bien Vietnam aplaudieron en privado que Daniel Ellsberg hiciera públicos los «Papeles del Pentágono», dado que estaban convencidos de que se trataba de una guerra que era imposible ganar.)

Existía un aliciente asociado al hecho de ser consultor de la Oficina de Previsiones Nacionales que yo apreciaba de forma particular: la biblioteca de la casa de Dulles permanecía abierta toda la noche y estaba repleta de los últimos informes de la CIA sobre asuntos no incluidos en el orden del día, copias de antiguos análisis de inteligencia y publicaciones secretas dedicadas a los métodos de espionaje. Quienes no se pasaban la velada jugando al póquer o contando hazañas de la guerra fría podían ir a la biblioteca y ojear los documentos allí reunidos mientras pudieran mantenerse despiertos. Recuerdo haber estado casi toda una noche leyendo los fascinantes detalles de cómo los rusos habían liberado a su espía George Blake de la prisión londinense de Wormwood Scrubs.

A lo largo de esas instructivas noches de lectura, fui percatándome poco a poco de que, en la CIA, era la cola la que movía al perro, es decir, que para Estados Unidos la cuestión no era la recopilación y el análisis de la información, sino las acciones encubiertas. La agencia era la sucesora de la Oficina de Servicios Estratégicos, el organismo fundado durante la segunda guerra mundial por William J. Donovan, quien, como me enteré más tarde, «consideraba el análisis de la información como una conveniente tapadera para las operaciones subversivas en el exterior, un subterfugio que demostró ser útil con el tiempo». ⁶ ¡Vaya! ¡Y con lo valiosas que eran mis contribuciones como consultor! La experiencia me curó de toda tendencia a pensar que el gobierno guarda secretos por motivos de seguridad nacional. Las agencias clasifican determinados asuntos para protegerse de las investigaciones del congreso y los rivales políticos o burocráticos de otros

organismos gubernamentales; pero los verdaderos secretos no necesitan ser clasificados porque los líderes prudentes se encargan de ellos personalmente. Resulta bastante interesante el hecho de que, en septiembre de 2002, cuando la administración Bush aterrorizaba diariamente al mundo con declaraciones sobre el armamento de Sadam Hussein y la necesidad de una invasión preventiva de Irak, la CIA revelara que no poseía una previsión de los servicios nacionales de inteligencia sobre el país y que no había pensado preparar una durante los últimos dos años.⁷

Parte esencial en el crecimiento del militarismo en Estados Unidos, la CIA ha evolucionado hasta convertirse en el ejército privado del presidente, quien la emplea en proyectos secretos que él, personalmente, desea ver realizados (como sucedió con Nicaragua y Afganistán en la década de 1980). Uno empieza a comprender entonces por qué John F. Kennedy era tan aficionado a las historias de Ian Fleming protagonizadas por James Bond. En 1961 Kennedy incluyó *Desde Rusia, con amor* entre sus libros favoritos. No cabe duda de que envidiaba al Dr. No y al jefe de la SMERSH, que disponían de ejércitos privados y semimilitares para llevar a cabo lo que les apeteciera. Kennedy encontró su primer ejército en la CIA, hasta que ésta le humilló en la fracasada operación de bahía de Cochinos, en Cuba, y otro en los Boinas Verdes.

En la actualidad, la CIA no es más que una de las distintas unidades de comandos secretos que mantiene nuestro gobierno. Durante la guerra de Afganistán de 2001, los agentes semimilitares de la CIA trabajaron tan estrechamente con las tropas de las Operaciones Especiales del ejército (Boinas Verdes, comandos Delta Force, etc.) que resultaba imposible distinguirlos. Estados Unidos ha admitido con orgullo que su primera baja durante la invasión de Afganistán fue un miembro de la CIA. En agosto de 2002 el secretario de Defensa Donald Rumsfeld hizo públicos los planes para ampliar las fuerzas de Operaciones Especiales dentro del ejército y fundirlas con la División de Actividades Especiales de la CIA (los agentes encubiertos de ésta). Aunque parece improbable que los numerosos ejércitos privados de nuestro gobierno lleguen algún día a superar las rivalidades burocráticas y las que enfrentan a los diferentes servicios entre sí, su historia forma parte integral del crecimiento del militarismo norteamericano y el secretismo que lo acompaña.⁸

El presente libro, *Las amenazas del imperio*, representa una continuación de *Blowback*. Allí sostenía que el gobierno estadounidense todavía actuaba, en gran medida, como lo había hecho durante la guerra fría, y subrayaba la posibilidad de que estallara un conflicto en el este asiático. Sin embargo, no me centré en la extensión del militarismo en Estados Unidos, ni en el inmenso imperio de bases militares que había surgido casi sin ser detectado y que en la actualidad constituye un hecho geopolítico. Después del 11 de septiembre de 2001 las advertencias ya no parecen necesarias; sería más indicado, por el contrario, un diagnóstico, e incluso una autopsia. En mi opinión, el crecimiento del militarismo y del secretismo oficial es probablemente un fenómeno irreversible, como también pienso que es irreversible el abandono de la creencia de que «el justo respeto al juicio de la humanidad», al que se refiere nuestra Declaración de Independencia, compromete a Estados Unidos. Haría falta una revolución para que el Pentágono volviera a estar bajo control democrático, o para acabar con la Agencia Central de Inteligencia, o incluso para considerar la idea de hacer cumplir el artículo 1, sección 9, cláusula 7 de nuestra Constitución: «No se sacará dinero del Tesoro, más que a consecuencia de las asignaciones autorizadas por la ley; y de tiempo en tiempo se harán públicas la declaración y la contabilidad de los ingresos y gastos de todo el dinero público».

Es éste el artículo que proporciona verdadero poder al congreso y convierte a Estados Unidos en una democracia. Garantiza que los representantes del pueblo tengan la posibilidad de saber lo que está haciendo en realidad el aparato del estado, y autoriza una amplia divulgación de esas actividades. Este artículo no se ha aplicado al Departamento de Defensa ni a la Agencia Central de Inteligencia desde que fueron creados. Ha existido, por el contrario, una política permanente de «no preguntes, no cuentes». La Casa Blanca siempre ha mantenido en secreto el presupuesto de los servicios de espionaje, y los engaños en el presupuesto destinado a la defensa nacional se remontan al Proyecto Manhattan durante la segunda guerra mundial, cuando se tomó en secreto la decisión de construir bombas atómicas y emplearlas contra los japoneses. En 1997, el entonces senador por Nueva Jersey Robert Torricelli propuso una enmienda a la Ley de Autorización del Presupuesto de Defensa de 1998 que exigía al congreso revelar los gastos totales de los servicios de espionaje. Aunque la enmienda no superó la vota-

ción, Torricelli consiguió demostrar que los organismos de inteligencia gastan más que la suma de los productos internos brutos de Corea del Norte, Libia, Irán e Irak, y lo hacen en nombre del pueblo americano, aunque sin su opinión ni su supervisión.

El tema de este libro es el militarismo estadounidense y su presencia física en el mundo, el crecimiento de las «fuerzas especiales» como un ejército privado del presidente y el secretismo que permite a organismos cada vez más militarizados y herméticos existir y desarrollarse. No constituye un relato optimista. Tal como concluyó Max Weber, el gran sociólogo del estado moderno, «toda burocracia procura incrementar esta superioridad del saber profesional por medio del *secreto* de sus conocimientos e intenciones. El gobierno burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno que excluye la publicidad. La burocracia oculta en la medida de lo posible su saber y su actividad frente a la crítica. ... El concepto del “secreto del cargo” es su descubrimiento específico, y nada es defendido por ella con tal fanatismo como esta actitud ... Si la burocracia se enfrenta con un Parlamento, lucha con un seguro instinto de poder contra todo ensayo realizado por éste para procurarse por sus propios medios conocimientos especiales ... Un Parlamento mal informado y, por tanto, sin poder, es naturalmente mejor acogido por la burocracia, siempre que tal ignorancia sea conciliable con sus propios intereses».⁹

Éste podría ser un retrato del gobierno estadounidense en la actualidad. Durante la guerra de Afganistán, la única información de que disponían el público y sus representantes provenía del Departamento de Defensa. Los militares se han convertido en expertos en el manejo de la información. Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno, a todos los niveles, empezó a restringir los datos a los que podía tener acceso el público, que desconoce incluso las acusaciones que se formulan contra quienes han sido arrestados en Afganistán y otros lugares y se encuentran incomunicados en una prisión del Pentágono en Cuba. Nuestros periódicos han comenzado a parecer prensa oficial; los noticiarios de televisión sencillamente se han rendido y se limitan a acatar las órdenes de los propietarios de los medios de comunicación; y ambos partidos políticos compiten entre sí por mostrarse obsequiosos con la Casa Blanca.

Como resulta inevitable que el militarismo, la arrogancia del poder y los eufemismos necesarios para justificar el imperio entren en

conflicto con la estructura democrática del gobierno de Estados Unidos y distorsionen su cultura y sus valores fundamentales, temo que los americanos estemos perdiendo nuestro país. En caso de que esté exagerando la amenaza, estoy seguro de que las generaciones futuras sabrán perdonarme ya que se alegrarán de que me haya equivocado. El peligro es, en mi opinión, que Estados Unidos emprenda un camino no muy distinto del que siguió la Unión Soviética durante la década de 1980. Fundamentalmente, la URSS se desmoronó por tres razones: las contradicciones económicas internas consecuencia de la rigidez ideológica, el desgaste imperial y la incapacidad para reformarse. Dado que Estados Unidos es más rico que la URSS, se requerirá más tiempo para que esas mismas enfermedades cumplan su cometido. Con todo, las semejanzas son evidentes y no está escrito en ninguna parte que Estados Unidos, en su modalidad de imperio mundial, deba durar para siempre.

Viejos y nuevos imperialismos

¿Cómo se llamaba aquel río que atravesó Julio César? ¿No era el Rubicón? Es posible que Bush cruzara ayer ese mismo río.

Robert Fisk, corresponsal del *Independent* londinense,
informando desde las Naciones Unidas,
13 de septiembre de 2002.

A LOS LÍDERES ESTADOUNIDENSES les gusta actualmente compararse con los romanos de la época del imperio, incluso cuando no saben mucho de la historia romana. Para Estados Unidos, la principal lección debería ser el modo como la república romana se transformó en imperio, y la forma en que durante el proceso se destruyó el sistema para la elección de los dos cónsules (los jefes del ejecutivo), se dejó sin poder al senado y se acabó con las ocasionales asambleas populares y *comitia* legislativos que constituían el centro de la vida republicana, para dar comienzo a una dictadura militar permanente.

De forma muy parecida a lo que ha hecho Estados Unidos en nuestros días, la república romana adquirió un imperio a través de las conquistas militares. En el siglo I a. C., Roma dominaba toda la Galia, la mayor parte de Iberia, la costa norte de África, Grecia, los Balcanes y parte de Asia Menor. Tal como señaló el ensayista canadiense Manuel Miles: «No existe una ley histórica que prohíba a una república poseer un imperio. Sin embargo, en las repúblicas imperiales existe una tendencia hacia los golpes autocráticos, sobre todo después de alcanzar determinada fase de crecimiento. Ahora mismo este proceso está teniendo lugar en Estados Unidos: el presidente, al igual que los pri-

meros emperadores romanos, decide cuándo y dónde emprende una guerra, y el senado aprueba maquinalmente sus decisiones y le consigne los fondos para costear sus aventuras imperiales, tal como el senado original pasó a hacer en tiempos de César y de Octavio».¹

El senado romano, a semejanza del congreso americano, funcionó bien durante dos siglos. Sin embargo, en el siglo I a. C. las dimensiones del imperio y de los ejércitos que se requerían para mantenerlo sobrepasaron la capacidad del senado y de los cónsules. En el año 49 a. C., Julio César transgredió la ley romana al hacer que su ejército atravesara el Rubicón, un pequeño río al norte de Italia, y llevó al país a una guerra civil entre los «emperadores», los generales de los grandes ejércitos de Roma. Tras la batalla de Actium, en el año 31 a. C., Octavio despuntó como el general más poderoso y asumió poderes dictatoriales con el fin de poner término a las guerras civiles militares. En el año 27 a. C., el senado le traspasó la mayor parte de sus poderes y le otorgó el nombre de Augusto, y reinó en calidad de primer emperador hasta el año 14 d. C. En unas cuantas décadas, el senado romano creció hasta superar los mil miembros, al tiempo que se veía reducido a poco más que un club de viejas familias aristocráticas y militares. Con excepción de China, Roma llegó a gobernar todo el mundo conocido; sin embargo, a lo largo de ese proceso, la dictadura suplantó a la democracia y, al final, los romanos fueron derrotados por los enemigos que se habían creado. Hasta el último momento, los ejércitos romanos pretendieron hablar por «el senado y el pueblo romanos», y desfilaron con banderas blasonadas con las iniciales SPQR (*Senatus Populusque Romanus*). No obstante, habían quedado muy lejos los días en que el senado tenía importancia; el imperio se había convertido en un fin en sí mismo.

Mientras la república romana se desintegraba, no todos los ciudadanos se resignaron a la pérdida de sus derechos democráticos. En la famosa versión que nos ofrece Shakespeare de la política de aquellos días, un ciudadano, Casio, pregunta a Bruto: «¿Con qué carne se alimenta nuestro César para que haya crecido tanto?». En cierto sentido, este libro es un intento de responder a esa pregunta en el contexto del imperio americano. Y para empezar, permítanme mencionar sólo una de las premisas que ha engordado a los imperialistas actuales, premisa envenenada por el falso orgullo y los supuestos autoglorificantes. Me refiero a la idea peligrosamente errónea de que fue Es-

tados Unidos quien ocasionó el derrumbe de la Unión Soviética y, por consiguiente, quien «ganó» la guerra fría. La predisposición mental que condujo a esta conclusión nos ofrece una pista sobre la forma en que Estados Unidos, a semejanza de la antigua Roma, emprendió el camino hacia el militarismo y el imperio.

Entre los triunfalistas estadounidenses, los adeptos de Ronald Reagan y los viejos entusiastas de la guerra de las galaxias, existe el mito de que el patrocinio del presidente Reagan a lo que denominó la «Iniciativa de Defensa Estratégica» (SDI) —la defensa espacial nunca completada ni factible contra misiles balísticos intercontinentales— dio inicio a una competición con la URSS en torno al gasto en defensa que condujo finalmente a su caída. Los triunfalistas sostienen que aunque la propuesta de «guerra de las galaxias» de Reagan nunca llegara realmente a ser viable, ésta forzó a la URSS a emprender una carrera armamentística que acabó por llevarla a la quiebra. De acuerdo con este argumento, el discurso de Reagan sobre el «imperio del mal», su apoyo a las guerrillas antisoviéticas en Afganistán y su respaldo ilegal a la Contra nicaragüense, crearon un clima en el que la SDI resultó decisiva. Por tanto, pese a todo un historial, casi sin excepciones, de consejos inoportunos y valoraciones equivocadas sobre el poderío y problemas de la URSS durante su última década, Robert Gates, director de la CIA durante el gobierno de George H. W. Bush, presenta la siguiente conclusión en sus memorias: «En mi opinión, fue el notable resurgimiento de Occidente —simbolizado por la SDI— lo que convenció incluso a algunos de los miembros más conservadores de la dirección soviética de que era necesario emprender grandes cambios dentro de la URSS. Una vez tomada, esta decisión creó el escenario para los espectaculares acontecimientos que tendrían lugar en el interior de la Unión Soviética en los siguientes años».²

Sin embargo, de acuerdo con Anatoly Dobrynin, durante muchos años embajador soviético en Washington, ya en febrero de 1986 el presidente ruso Mijail Gorbachov afirmaba que «Estados Unidos cuenta con que estemos dispuestos a construir un costoso sistema del mismo tipo [la SDI], y espera, mientras tanto, ganar esta carrera empleando su superioridad tecnológica. No obstante, nuestros científicos me dicen que si deseamos destruir o neutralizar el sistema de la SDI, sólo necesitaríamos gastar el 10 por 100 de lo que los americanos planean invertir en él».³ El más importante de los asesores científicos de

Gorbachov era Andrei Sajarov, quien después de haber participado en la construcción de la bomba de hidrógeno soviética se había convertido en un valiente crítico de la situación de los derechos humanos en su país y en 1975 había sido galardonado con el premio Nobel de la Paz.

El 23 de diciembre de 1986 Gorbachov ordenó que Sajarov y su esposa, Yelena Bonner, fueran liberados de su exilio interno en la ciudad de Gorki, donde el Politburó los había encerrado por criticar la invasión soviética de Afganistán. La liberación de Sajarov fue uno de los primeros y más importantes actos de la política de *glasnost* (transparencia) impulsada por Gorbachov, pero éste también deseaba la asesoría de Sajarov con respecto a la SDI. El análisis que el científico proporcionó en febrero de 1987, en una serie de encuentros secretos en Moscú, fue inequívoco: «El sistema de las SDI nunca sería militarmente eficaz contra un antagonista bien armado; por el contrario, sería una especie de “línea Maginot espacial”: una opción costosa y vulnerable a las contramedidas. No serviría para defender a la población y tampoco como escudo tras el cual lanzar un primer ataque, pues resultaría fácil de vencer. Es posible que quienes han propuesto la SDI en Estados Unidos estuvieran contando con una carrera armamentística acelerada para arruinar la economía soviética, pero, en tal caso, se equivocaron, porque el desarrollo de contramedidas no resultaría caro».⁴

En esa época, los soviéticos no estaban aumentando sus inversiones en nuevas armas, sino que, por el contrario, las reducían. A mediados del decenio de 1980 las previsiones revisadas de la CIA sobre el gasto soviético orientado a la obtención de armamento indicaban que la tasa real de su incremento había sido de un ínfimo 1,3 por 100 al año (y no el 4 o 5 por 100 que recogían originalmente los informes de la agencia entregados al presidente), mientras que las asignaciones para el desarrollo de armas ofensivas estratégicas se habían reducido, de hecho, en un 40 por 100. Esas estimaciones le parecieron ideológicamente inaceptables al entonces secretario de Defensa, Caspar Weinberger, que las devolvió a la CIA. El director de ésta, Gates, «dio órdenes a la SOVA [la Oficina de Análisis Soviéticos de la CIA] para que enviara a Weinberger un memorando centrado en el poderío económico soviético».⁵

De hecho, los servicios de inteligencia estadounidenses no anticiparon la crisis que se avecinaba en la Unión Soviética, como tampoco proporcionaron a nuestros líderes políticos una valoración precisa

de las iniciativas que había tomado Mijail Gorbachov. El 19 de agosto de 1991, la URSS acabó por sucumbir a un golpe de estado, gracias a un proceso interno de deslegitimación al que el propio Gorbachov había dado inicio. Estados Unidos tuvo poco o nada que ver con ello.

Mientras dentro de la URSS Gorbachov impulsaba la *perestroika* (reestructuración económica) y la *glasnost* (el fin del secretismo y la liberación de los presos políticos), el acontecimiento que reveló al mundo lo lejos que había llegado el proceso de reformas tuvo lugar la noche del 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín cayó. Tampoco en esto pueden atribuirse el mérito los estadounidenses, y lo que resultó decisivo fue la acción de Alemania Occidental. En su erudita disección (encargada por el Bundestag alemán) de lo que denomina «uno de los mayores casos de discusión de paternidad que ha existido jamás», Hans-Hermann Hertle explica lo ocurrido: «Después de un acuerdo secreto con Bonn, ellos [los húngaros] abrieron la frontera con Austria a los ciudadanos de la RDA [República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental] el 10 de septiembre [de 1989]. A cambio, la República Federal Alemana proporcionó a Hungría un crédito de quinientos millones de marcos alemanes, y se comprometió a compensar las pérdidas que pudieran acarrear a Hungría las posibles represalias de la RDA. Decenas de miles de alemanes orientales se trasladaron a la República Federal a través de Austria en los días y semanas siguientes. La RDA experimentó la mayor ola de emigración desde la construcción del muro de Berlín en 1961. Ese éxodo masivo demostró la fragilidad del liderazgo del SED [Partido Socialista Unitario de Alemania, es decir, el Partido Comunista] en ese asunto y minó la autoridad del régimen de un modo sin precedentes».⁶

Que los imperios no renuncian a sus dominios de forma voluntaria constituye un tópico que conoce todo estudiante de relaciones internacionales. La URSS constituyó una rara excepción a esa generalización. Motivados por el idealismo de Gorbachov y el deseo de convertirse en miembros de lo que denominaban la «casa común europea» y ganarse el reconocimiento internacional como un estado «normal», algunos reformadores de la élite soviética creían que el restablecimiento de relaciones cordiales con los países de Europa occidental contribuiría a que Rusia retomara su estancado proceso de modernización. Tal como señaló el historiador ruso Vladislav Zubok: «En determinados aspectos ... los lazos políticos de la URSS con Francia y

Alemania Occidental adquirieron mayor importancia y, quizá, en términos personales, se hicieron más calurosos, que las relaciones con algunos integrantes del Pacto de Varsovia». ⁷ La actitud de Gorbachov, que estaba en contra de la concepción imperial-revolucionaria de la Unión Soviética heredada de Stalin, fue bastante parecida a la de Imre Nagy, líder del Partido Comunista húngaro, durante el levantamiento antisoviético de 1956 en Budapest, y de Alexander Dubcek, primer secretario del Partido Comunista checo, durante la revuelta de Praga de 1968. Gorbachov renunció de buen grado al imperio soviético en la Europa oriental a cambio de revitalizar el sistema económico de la Unión Soviética.

Los líderes estadounidenses no contaron con la información o la imaginación necesaria para comprender lo que ocurría. Totalmente hipnotizados por el pensamiento «realista», se perdieron uno de los más importantes acontecimientos de la historia moderna y extrajeron del mismo conclusiones casi todas equivocadas. Tras la caída del muro de Berlín, el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética llegó, de hecho, a sugerir en determinado momento que los soviéticos podrían tener que intervenir militarmente en Europa oriental para mantener la «estabilidad» de la región. ⁸

Después de un primer momento de vacilación, el gobierno y los militares estadounidenses decidieron que, si bien la guerra fría había acabado en Europa, no permitirían que lo mismo ocurriera con las guerras frías del este asiático y Latinoamérica, igualmente virulentas. ⁹ En lugar de la Unión Soviética, la «amenaza» china, Fidel Castro, los barones de la droga, la «inestabilidad» y, más tarde, el terrorismo, las armas de destrucción masiva y el «eje del mal» (Irán, Irak y Corea del Norte) habrían de funcionar como los nuevos enemigos. Mientras tanto, Estados Unidos hizo todo lo posible por apuntalar las estructuras y alianzas de la guerra fría, incluso en ausencia de la amenaza soviética, expandiendo la alianza de la OTAN hacia Europa oriental y utilizándola para atacar Serbia, anteriormente un país comunista. El Pentágono, por su parte, solicitó que el gasto militar se mantuviera, de hecho, en los niveles de la guerra fría, y buscó nuevas razones que justificaran a largo plazo sus actividades en el resto del mundo.

A pesar de la lentitud con que Washington se percató de lo que sucedía en la Unión Soviética —todavía en marzo de 1989 algunas destacadas figuras del Consejo de Seguridad Nacional lanzaban adver-

tencias contra el riesgo de «infravalorar la debilidad soviética» y sobre los peligros de la «gorbimanía»—, los estadistas americanos se movilizaron con notable rapidez para asegurarse de que el desplome de la Unión Soviética no afectara al presupuesto del Pentágono ni a la «posición estratégica» que habíamos conquistado en el mundo en nombre del anticomunismo. Poco después de la caída del muro de Berlín y mientras la Unión Soviética se desintegraba, Dick Cheney, el jefe del Pentágono, insistió en incrementar el gasto militar. En enero de 1990, Michael R. Gordon, corresponsal de *The New York Times*, informó de que «en opinión de Cheney, la cual comparte el presidente [George H. W.] Bush, Estados Unidos continuará necesitando una gran armada [y fuerzas de intervención en general] para afrontar conflictos menores y amenazas a los intereses norteamericanos en lugares como Latinoamérica y Asia». Dos meses más tarde, cuando la Casa Blanca reveló al congreso su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, describió al Tercer Mundo como probable foco de conflictos: «En la nueva era, prevemos que nuestro poderío militar continuará siendo un pilar esencial del equilibrio global, aunque de forma menos destacada y de diferentes maneras. Consideramos que lo más probable es que no sea necesario el uso de nuestras fuerzas militares en la Unión Soviética, sino en el Tercer Mundo, donde es posible que se requieran nuevas capacidades y planteamientos». ¹⁰ Es importante observar que el Pentágono y la Casa Blanca presentaron esos planes militares mucho antes de la incursión iraquí en Kuwait y la crisis subsiguiente, que conduciría a la guerra del golfo Pérsico de 1991.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 1990 preveía asimismo la necesidad de «reforzar nuestras unidades avanzadas ya desplegadas y de proyectar nuestro poder en aquellas áreas en las que no contamos con una presencia permanente», sobre todo en Oriente Próximo, ya que «el mundo libre depende del suministro energético proporcionado por esta región fundamental». Estados Unidos debería también estar preparado para afrontar «conflictos de baja intensidad» que involucran «peligros de orden menor, como el terrorismo, la subversión, la insurgencia y el tráfico de drogas, [que] están amenazando de una forma nueva a Estados Unidos, sus ciudadanos y sus intereses. ... Los conflictos de baja intensidad implican una lucha entre principios e ideologías enfrentados, pero ésta no llega a alcanzar el nivel de una guerra convencional». Nuestras fuerzas militares, continuaba señalando

el documento, «deben ser capaces de tratar de un modo eficaz con todo tipo de amenazas, incluidos la insurgencia y el terrorismo». A través de semejantes profecías autocumplidas, el personal militar buscó afrontar el fin de la guerra fría embarcándose en un grandioso proyecto para convertirse en la policía del mundo.

Al mismo tiempo, los ideólogos estadounidenses consiguieron convencer a la opinión pública de que la desaparición de la Unión Soviética era la prueba de la gran victoria americana. Ese triunfalismo generó, a su vez, un sutil cambio en la postura que Estados Unidos había mantenido a lo largo de la guerra fría. El país dejó de describirse como una potencia defensiva que sólo buscaba garantizar su seguridad y la de sus aliados ante una posible agresión comunista. Sin una superpotencia enemiga, los primeros indicios del papel imperial que Estados Unidos asumiría en el nuevo siglo, abiertamente y con orgullo, aparecieron a medida que el Pentágono, lejos de declarar la victoria e iniciar la desmovilización, comenzó a tantear el terreno y explorar nuevas posibilidades, algunas de las cuales serían ampliadas y otras descartadas en los siguientes años.

De forma lenta y paulatina, Estados Unidos asumió nuevas responsabilidades: las intervenciones humanitarias, la difusión de la «democracia del mercado» al estilo americano a través de la globalización, la guerra abierta contra los cárteles de la droga latinoamericanos y los movimientos nativos de reforma política, el aislamiento de los «estados canallas», el liderazgo de una interminable «guerra contra el terrorismo» y, por último, la intervención «preventiva» contra cualquier poder potencialmente hostil que amenazara con conseguir los tipos de armas de destrucción masiva que Estados Unidos había desarrollado primero y deseaba seguir monopolizando. Tras el final de la guerra fría, la posición de Estados Unidos en el mundo experimentó en una década una transformación fundamental. De acuerdo con William A. Galston, asesor adjunto del presidente Clinton para política interior de 1993 a 1995: «En lugar de seguir actuando como el primero entre iguales en el sistema internacional de la posguerra, Estados Unidos procedería dictando sus propias leyes, creando nuevas reglas de enfrentamiento internacionales sin contar con el respaldo de otras naciones». ¹¹ Parecía que el crearse enemigos había dejado de preocuparle a Estados Unidos.

El período comprendido entre la caída del muro de Berlín y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre abarca trece años

y tres presidentes. De 1989 a 2002 tuvo lugar una revolución en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. A comienzos de esa etapa, la conducción de la política exterior todavía era, en gran parte, un asunto civil del que se encargaban hombres y mujeres versados en diplomacia y acostumbrados a defender las acciones estadounidenses en términos de las leyes internacionales, y se basaba en antiguas alianzas con otras naciones democráticas. Siempre había existido un componente militar en la gestión tradicional de la política exterior, y hombres con un pasado castrense desempeñaron a menudo un importante papel como estadistas civiles. De vez en cuando, los militaristas iban mucho más allá de lo que el público esperaba de ellos, como cuando se apoyó y se financió ilegalmente a los ejércitos de derechas en Centroamérica durante la administración Reagan. Sin embargo, por lo general, la balanza se inclinaba en favor de la contención y la utilización constitucional de las fuerzas armadas. En 2002 todo eso había cambiado. Estados Unidos ya no tenía una «política externa» y, a cambio, poseía un imperio militar.

Con el fin de la guerra fría, países antes vedados por situarse dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética quedaron disponibles a la expansión imperial. Esto fue lo que ocurrió con el inmenso territorio del continente euroasiático comprendido entre los Balcanes y Pakistán. Estados Unidos se apresuró a desplegar sus fuerzas militares en esta región crítica y se preparó para combatir contra los regímenes que se interpusieran en su camino. Durante este período de poco más de una década, se tejió un inmenso complejo de intereses, compromisos y proyectos, hasta que, al final, surgió una nueva cultura política en sustitución de la defendida por la sociedad civil. Este complejo, que es a lo que denomino imperio, posee una geografía definida —e incluso definitoria—, gran parte de la cual fue obtenida en el transcurso de la segunda guerra mundial y la guerra fría, pero a la que no se reconocía como lo que era porque la idea de estar conteniendo el avance de la Unión Soviética disimulaba su verdadera naturaleza. Se trata de un imperio de bases permanentes que abarca todos los continentes del globo e incluye bases navales, aeropuertos militares, guarniciones del ejército, puestos de escucha para el espionaje y enclaves estratégicos.

Por supuesto, las bases militares y las colonias han constituido una característica común de los regímenes imperiales desde la antigüedad, aunque en el pasado servían para asegurar o defender los territorios

conquistados y explotarlos económicamente. Estados Unidos empezó como un imperio tradicional. Ocupamos y colonizamos el norte del continente americano y establecimos, de costa a costa, avanzadillas militares a las que denominamos «fuertes»: Fuerte Apache, Fuerte Leavenworth, Fuerte de Sutter, Fuerte Sam Houston, Fuerte Laramie, Fuerte Osage. Sin embargo, en tiempos más recientes y a diferencia de tantos otros imperios, Estados Unidos no se anexiona ningún territorio. Por el contrario, tomamos (y, en ocasiones, sencillamente alquilamos) zonas militares exclusivas dentro de los territorios, con lo que no creamos un imperio de colonias, sino un imperio de bases. Éstas, unidas por medio de la cadena de mando y supervisadas por el Pentágono, sin apenas control civil, pasaron a formar parte de nuestro complejo militar-industrial y ejercieron un profundo efecto sobre las culturas locales, casi sin excepción para peor. Han contribuido a transformarnos en un nuevo tipo de imperio militar: una Esparta consumista, una cultura guerrera que alardea de las viviendas con aire acondicionado, cines, supermercados, campos de golf y piscinas de sus legionarios. Existe otra importante característica que diferencia el imperio americano de las bases de otros imperios del pasado: éstas no son necesarias para hacer la guerra, sino que constituyen, por el contrario, manifestaciones puras del militarismo y el imperialismo.

La distinción entre el estamento militar y el militarismo es fundamental. Son propias del estamento militar todas las actividades, cualidades e instituciones que un país necesita para defenderse en caso de una guerra. El estamento militar debe ocuparse de garantizar la independencia nacional, condición *sine qua non* para el mantenimiento de la libertad personal. Sin embargo, tener un estamento militar no tiene necesariamente que conducir al *militarismo*, fenómeno que tiene lugar cuando las fuerzas armadas de un país colocan su preservación institucional por encima del objetivo de la seguridad nacional o de su compromiso con la integridad de la estructura de gobierno de la que forman parte. Tal como observa el gran historiador del militarismo, Alfred Vagts: «El ejército permanente en tiempos de paz es la mayor de todas las instituciones militaristas». ¹² Además, cuando las fuerzas armadas se transforman en una institución militarista, empiezan por naturaleza a desplazar a todas las demás instituciones del gobierno encargadas de las relaciones con otros países. Una señal de la llegada del militarismo la constituye el que las fuerzas armadas de un país com-

mienzan a asumir numerosas tareas que habrían de estar reservadas a los civiles.

Las bases en el extranjero, de las que el Departamento de Defensa reconoce unas 725, entran dentro del ámbito del ejército permanente en tiempos de paz y demandan continuamente recursos de la nación, al tiempo que son, de hecho, casi siempre inadecuadas para hacer la guerra. Los grandes enclaves de bases, como los de Okinawa y Alemania, no han entrado en combate desde la segunda guerra mundial, y su finalidad no es, en realidad, la de contribuir a la capacidad del país para hacer la guerra. Son el cuartel general de nuestros procónsules, la manifestación visible del alcance de nuestro imperio. Durante la segunda guerra de Irak, por ejemplo, Estados Unidos no utilizó sus bases en el golfo Pérsico y en Asia central más que como plataforma para lanzar bombardeos contra las ciudades iraquíes, una actividad que, dada la superioridad aérea americana, ésta más cerca de un ejercicio de entrenamiento que de cualquier cosa que pueda llamarse combate. Prácticamente toda la fuerza de combate real provenía de la «tierra natal»: la Tercera División de Infantería, del Fuerte Stewart, Georgia; la Cuarta División de Infantería, del Fuerte Hood, Texas; la Primera División de Infantería de Marina, de Camp Pendleton, California; y la 101.^a División Aerotransportada, del Fuerte Campbell, Kentucky. Las bases de Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán y otros países sirvieron sobre todo como cómodos lugares que los oficiales de alto rango podían utilizar como puestos de mando a larga distancia. La red de bases estadounidenses no es un signo de la preparación de sus fuerzas armadas, sino de su militarismo, el compañero inevitable del imperialismo.

Con todo, esta red tiene un serio problema de financiación. La mayor parte de los imperios del pasado se autofinanciaban o, al menos, intentaban hacerlo. Los imperios español, holandés y británico enriquecieron a sus respectivas metrópolis por medio de la explotación de sus colonias. Éste no es el caso del imperio de las bases militares. Militarizado y unilateral, tiende a subvertir el mercado y la globalización, puesto que debilita las leyes internacionales y las normas de reciprocidad en las que se basa el comercio. De esta forma, contribuye a incrementar de manera notable las cargas económicas de nuestro imperio, un asunto al que volveré más adelante en este libro. En ocasiones, nuestro imperio de bases gana dinero porque, a semejan-

za de los gánsteres de la década de 1930, que obligaban a las personas y los negocios que se encontraban bajo su dominio a pagar por ser protegidos, Estados Unidos presiona a los gobiernos extranjeros para que costeen sus proyectos imperiales. Durante la primera guerra de Irak, Estados Unidos consiguió de los japoneses trece mil millones de dólares, y se vanaglorió más tarde por haber logrado incluso un pequeño beneficio neto con el conflicto. Sin embargo, cuanto más explícitos y enérgicos nos volvemos en nuestra pretensión de dominar el mundo, menos atractivos resultan a los demás países ricos, pero militarmente impotentes, los viejos esquemas de la «seguridad mutua». La reducción del comercio, las transferencias de capitales y los subsidios directos socavarán el imperio de bases estadounidense con mucha más rapidez de lo que ocurrió con los antiguos imperios autofinanciados.

La vida en nuestro imperio recuerda en ciertos aspectos al Raj británico, con sus rituales militares, su racismo, sus rivalidades, su esnobismo y su estructura de clases. Una vez en sus bases, los modernos procónsules americanos y sus subordinados guerreros nunca han de mezclarse ni con los «nativos» ni con los civiles estadounidenses. Como ocurría con los jóvenes ingleses y franceses del siglo XIX, estas ciudades-estado militares enseñan a la juventud americana a ser arrogante y racista e inculcan en ella los ingredientes básicos de la idea de superioridad racial. Las comodidades de que disponen las bases incluyen los equivalentes militares, siempre en expansión, de Disneylandia y el Club Med, reservados para el uso exclusivo del personal en activo, y asimismo alojamientos, instalaciones de atletismo, iglesias y colegios, todo proporcionado gratuitamente o a precios módicos. Esas instalaciones integran una red global más o menos secreta, algunos de cuyos componentes tuvieron posiblemente algún uso estratégico durante un tiempo, pero luego se convirtieron en puestos permanentes en el exterior. Todo eso ha ido surgiendo de manera informal y, según se dice al gran público, sin premeditación. Si este imperio es mencionado de algún modo, es en términos de soldados estadounidenses que liberan a mujeres afganas del fundamentalismo islámico, ayudan a las víctimas de un desastre natural en Filipinas o protegen a bosnios, kosovares y kurdos iraquíes (pero no a ruandeses, kurdos turcos o palestinos) de campañas de «limpieza étnica».

Cualquiera que fuera el motivo por el que inicialmente Estados Unidos entró en determinado país y estableció en él una base, las ra-

zones por las que ésta continúa existiendo son imperiales: la hegemonía regional o global, no ceder el territorio a los rivales, permitir el acceso a las empresas norteamericanas, mantener la «estabilidad» o la «credibilidad» como fuerza militar, o pura y simple inercia. Para algunas personas, nuestras bases otorgan validez al estilo de vida americano y a nuestra «victoria» en la guerra fría. La cuestión de si Estados Unidos puede o no permitirse estar para siempre en todas partes no se considera un tema apropiado de discusión nacional; como tampoco resulta oportuno, en medio de la atmósfera propagandística que impregna el país en el nuevo milenio, insistir en lo que cuestan los imperios o cómo terminan.

El nuevo imperio no es sólo una entidad física. Constituye también un preciado objeto de análisis y adulación para el nuevo ejército de los autodenominados «pensadores estratégicos», que trabajan en los modernos monasterios patrióticos conocidos como *think tanks*.^{*} Es asimismo el centro de atención de los grupos de interés, tanto los más recientes como los antiguos, desde los relacionados con el suministro y el precio del petróleo hasta los que se benefician con la construcción y mantenimiento de guarniciones militares en lugares improbables. Hay tal cantidad de intereses, aparte de los propios de los oficiales militares que viven en los lugares lejanos del imperio, que la existencia de éste se encuentra claramente más que decidida, hasta el punto de que resulta difícil pensar que Estados Unidos pueda algún día decidirse a abandonar el negocio imperial de forma voluntaria. Además de a los militares y sus familias, el imperio sostiene el complejo militar-industrial, centros universitarios de investigación y desarrollo, compañías refinadoras y distribuidoras de petróleo, incontables cuerpos de oficiales extranjeros a los que ha entrenado, fabricantes de vehículos deportivos y utilitarios y de munición para armas ligeras, empresas multinacionales y la mano de obra barata que éstas emplean para producir sus productos, bancos de inversiones, fondos de alto riesgo y especuladores de todo tipo y defensores de la «globalización», es decir, los teóricos que quieren obligar a todas las naciones a abrirse a la explotación y el capitalismo al estilo americano. Entre los valores e institu-

* Instituciones o grupos de expertos, generalmente apoyados por fondos privados, encargados de estudiar importantes cuestiones sociales y económicas y de política exterior para hacer propuestas informadas a los gobiernos. (N. de la t.)

ciones del imperio se encuentran el machismo militar, la ortodoxia sexual, la medicina socializada para unos pocos elegidos, la seguridad de la cuna a la tumba, los salarios bajos, las relaciones familiares tensas (lo que incluye esposas asesinadas), el conservadurismo político, y la cantinela machacona sobre ser un guerrero, repetida con insistencia pese a que muchas de las guerras de la última década e incluso algunas anteriores tuvieron menos que ver con el combate físico tradicional que con los videojuegos.

Entre las miles de páginas de propaganda que el Pentágono distribuyó para celebrar su victoria sobre los talibán en Afganistán, se encontraba la historia de una mujer, capitán de la Fuerza Aérea, que controlaba desde un puesto de mando en Pakistán un avión Predator no tripulado que sobrevolaba Afganistán. De pronto, divisó a un grupo de hombres afganos arremolinados alrededor de un todoterreno Toyota, y llegó a la conclusión de que se trataba de «terroristas». Envió una aeronave de la marina cargada con una bomba convencional, a la que se le había adosado un aparato que, por medio de un sistema de posicionamiento global vía satélite y guiado por inercia, estaba programado para hacer caer dicha bomba en un radio de nueve a catorce metros del blanco. Cuando el piloto de la marina lanzó su carga, ella no pudo evitar gritarles a las confiadas figuras en la pantalla de su ordenador: «¡Corran! ¡Apártense! ¡Los van a matar!». En efecto, unos segundos más tarde habían muerto. Tal vez esta historia fue distribuida para evidenciar la innata humanidad de nuestra nueva camada de guerreros, incluso cuando éstos pueden combatir situados a centenares de kilómetros de distancia o estar a cien mil metros de altura a bordo de bombarderos silenciosos. Sin embargo, M. Franklin Rose, un especialista en robótica que trabaja para la marina, piensa que esos arrebatos de empatía no durarán mucho: «un gran número de esos jóvenes soldados ha crecido con videojuegos y ordenadores y se ha acostumbrado a confiar en las máquinas».¹³

Muertes antisépticas como las que tienen lugar en cualquier videojuego son ahora de rigor en las operaciones de unas fuerzas armadas dotadas de lo último en tecnología, y por regla general escapan a las constricciones de las leyes nacionales e internacionales. El 4 de noviembre de 2002, por ejemplo, el gobierno reconoció que había iniciado un ataque en Yemen similar al que acabamos de describir para el caso de Afganistán. Un avión de vigilancia Predator no tripulado,

y en este caso controlado por agentes de la CIA situados en una instalación militar francesa en Djibouti y en el cuartel general de la agencia en Virginia, disparó un misil que destruyó un todoterreno que supelementalmente transportaba a un importante terrorista de Al Qaeda.¹⁴ El problema no es sólo que el ataque hubiera prácticamente hecho desaparecer el vehículo, lo que impide verificar la afirmación del gobierno estadounidense, sino que su propia naturaleza —fue efectuado después de que el gobierno yemení se negara a actuar sobre la base de la información proporcionada por la CIA— ha de haber dejado estupefactos a los gobernantes de otros países. ¿No podría un misil Hellfire, lanzado desde un avión teledirigido, destruir de igual modo a supuestos terroristas en Filipinas, Singapur o Alemania, con independencia de lo que pensara o deseara el gobierno local?

En el período que siguió al fin de la guerra fría, un nuevo grupo de administradores tomó el mando de las fuerzas militares. Éstos tenían más interés que sus predecesores en hacer la guerra empleando armamento que pudiera ser lanzado desde una gran altura, desde más allá del horizonte o desde el espacio exterior. Estaban decididos a evitar las bajas en sus propias filas, con el doble fin de hacer más atractivo el servicio en las fuerzas armadas voluntarias y de evitar alarmar a los ciudadanos que suministran los soldados y costean las actividades y estilo de vida militares. Esta forma de guerra continúa la práctica de la segunda guerra mundial de bombardear áreas residenciales, y es incapaz de evitar, a pesar de la pregonada «precisión» del armamento, la matanza indiscriminada de la población no beligerante e inocente. No hay ninguna novedad en ello. Los romanos mataban o esclavizaban a sus prisioneros, saqueaban y destruían las ciudades de sus enemigos y asesinaban poblaciones enteras sin hacer distinciones entre combatientes y no combatientes. A la «guerra total» del siglo xx, asociada ante todo con el poderío aéreo, se la conocía en la Edad Media como «guerra romana». Por lo general, señala Sven Lindquist en su historia de los bombardeos, «las leyes sobre la guerra protegen a enemigos de la misma raza, clase y cultura. Dejan a los extranjeros y a los extraños sin protección».¹⁵ Hiroshima y Nagasaki ejemplifican esta última observación. Lo que resulta novedoso hoy es nuestra hipocresía acerca de nuestra «munición guiada de precisión». La propaganda estadounidense ignora de forma decidida las carnicerías que nuestras fuerzas armadas de alta tecnología ocasionan en las poblaciones civiles al de-

clarar que nuestras intenciones son buenas por definición, y que las matanzas y las mutilaciones resultantes no son más que «daños colaterales». Semejante confusión es intrínseca al mundo del imperialismo y de su lacayo, el militarismo.

El imperialismo resulta difícil de definir pero fácil de reconocer. En palabras de John Hobson, el economista y político inglés de principios del siglo xx, los imperialistas son los «parásitos del patriotismo». ¹⁶ Los imperialistas esperan obtener «negocios ventajosos y empleos lucrativos» durante la creación y explotación del imperio. Ocupan puestos militares y civiles en el poder imperial, realizan transacciones comerciales con los pueblos dominados en condiciones estructurales favorables, fabrican armamento y municiones para la guerra y las acciones policiales y proporcionan y gestionan capitales para invertir en las colonias, las semicolonias y los satélites que el imperialismo crea.

La forma más simple de definir el imperialismo es como la dominación y explotación de los estados más débiles por parte de los más fuertes. Incontables tragedias se derivan de ese fenómeno antiguo y fácil de observar. El imperialismo es, por ejemplo, la raíz de una de las peores enfermedades que la civilización occidental ha infligido al resto del mundo: el racismo. David Abernethy, una autoridad en imperialismo europeo, ha señalado que: «Los pueblos superiores en fuerza no necesitaron más que un pequeño salto mental para concluir que su intelecto, su moral y su civilización también eran superiores. El complejo de superioridad sirvió para justificar los gobiernos coloniales y, al reducir los escrúpulos acerca de si era correcto o no dominar a otros pueblos, los legitimaba». ¹⁷

De acuerdo con una vieja tradición académica de los estudios sobre el imperialismo, si el dominio que un estado más fuerte ejerce sobre otro más débil no incluye la «colonización» de este último, no existe imperialismo. Algunos escritores han hablado de *hegemonía* para referirse al imperialismo sin colonias, y en la época de las superpotencias que siguió a la segunda guerra mundial, hegemonía se convirtió en un término vinculado a la idea de los «bandos» oriental y occidental. Para complicar aún más el asunto tenemos el viejo afán estadounidense por encontrar eufemismos que suavicen y disimulen la versión americana del imperialismo, al menos ante otros norteamericanos. Theodore Roosevelt, por ejemplo, declaraba que no era imperialista, sino «expansionista». En defensa de la anexión de Filipinas, dijo: «No

hay ningún imperialista en el país. ... ¿Expansión? Sí. ... La expansión ha sido la ley de nuestro crecimiento nacional». ¹⁸

La insistencia de Abernethy en que en un imperio auténtico el estado más fuerte ha de presentar una reivindicación *formal* sobre el más débil es en este sentido típica. «El colonialismo», escribió, «es el conjunto de políticas formales, prácticas informales e ideologías que una metrópoli emplea para mantener el control sobre una colonia y beneficiarse del mismo. El colonialismo es la consolidación del imperio, el esfuerzo para extender y ahondar las proclamaciones de autoridad realizadas en una fase anterior de la construcción del imperio.» ¹⁹

En efecto, el imperialismo europeo se encontraba íntimamente asociado a las colonias y fomentaba la emigración hacia sus posesiones a una escala en verdad extraordinaria. Millones de europeos emigraron a las comunidades que el imperialismo había creado en el norte y el sur de América, en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Por otro lado, millones de africanos fueron trasladados, como esclavos, a las colonias de América y el Caribe. A medida que los europeos se expandían por todo el mundo, sus líderes políticos y sus administradores coloniales pagaron o engañaron a millones de chinos e indios para que emigraran —en ocasiones, en calidad de sirvientes— a las colonias europeas y americanas y a territorios del sureste asiático, el océano Índico, el Caribe, África y Estados Unidos.

Los países europeos también utilizaron de forma sistemática sus colonias como vertederos en los cuales deshacerse de delincuentes y disidentes políticos, procurando anticiparse de ese modo a posibles revoluciones en la metrópoli. Los gobiernos impusieron sentencias de «deportación» con el objetivo de librarse de aquellos que, a su juicio, podían convertirse en extremistas o revolucionarios. Después del levantamiento obrero de París de 1848, el gobierno francés pagó a más de 15.000 parisienses para que se trasladaran a la Argelia colonial. Los británicos acostumbraban a deportar a los irlandeses y otros radicales a las prisiones coloniales de Norteamérica y, tras la revolución americana, a Australia. Ante este panorama, Abernethy lógicamente sostiene que el concepto mismo de imperialismo carece de sentido en ausencia de colonialismo y colonialistas.

Sin embargo, esta perspectiva sólo es válida para determinado momento histórico. Con el tiempo, la emigración y el colonialismo dejaron de acompañar al imperialismo. El imperialismo contemporáneo

se manifiesta de formas distintas y cambiantes, y ninguna institución en concreto —a excepción del militarismo— define el fenómeno en toda su amplitud. El imperialismo y el militarismo son inseparables; los dos tienen por objetivo extender su dominio; según Vagts, «mientras el uno busca, básicamente, más territorios, el otro ambiciona más hombres y más dinero».²⁰ Es cierto que diversos tipos de imperialismo no implican la creación de colonias. La institución característica del llamado neocolonialismo es la empresa multinacional, a la que apoya, de forma encubierta, un poder imperialista. Al mantener una fachada de independencia política nominal en el país explotado, esta modalidad de imperialismo reduce las responsabilidades y costes políticos del colonialismo. Como observó en una ocasión el revolucionario Ernesto «Che» Guevara, el neocolonialismo «es la forma más temible del imperialismo debido a los disfraces y engaños que encierra y la larga experiencia que tienen las potencias imperialistas en este tipo de confrontación».²¹

Las empresas multinacionales repiten, en parte, una de las primeras instituciones del imperialismo: la compañía privilegiada. En esa organización mercantilista clásica, el país imperialista autorizaba a una empresa privada la explotación y, en ocasiones, el gobierno de un territorio extranjero en forma de monopolio, y luego repartía los beneficios derivados de esa actividad entre los funcionarios gubernamentales y los inversores privados. Entre las empresas de este tipo más conocidas se encuentran la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, creada en 1600; la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, creada en 1602; la Compañía Francesa de las Indias Orientales, creada en 1664, y la Compañía de la Bahía de Hudson, creada en 1670. La compañía privilegiada y la empresa multinacional contemporánea se diferencian básicamente en que la primera nunca pretendió creer en el libre mercado, mientras que las multinacionales utilizan el «libre mercado» como mantra.

El colonialismo formal y el neocolonialismo de las empresas multinacionales no agotan las posibilidades institucionales del imperialismo. Por ejemplo, el dominio neocolonial no tiene por qué ser económico. Puede fundarse en una especie de chantaje bajo la apariencia de protección internacional: tratados de defensa mutua, grupos de asesoramiento militar y fuerzas militares estacionadas en países extranjeros para proporcionarles una «defensa» contra unas amenazas a me-

nudo poco definidas, exageradas o inexistentes. Estos arreglos producen «satélites», países aparentemente independientes, cuyas relaciones exteriores y preparación militar giran alrededor de la potencia imperialista. Tal fue el caso, durante la guerra fría, de los satélites de la antigua Unión Soviética en Europa oriental y de los satélites de Estados Unidos en el este asiático, que en determinada época incluyeron a Taiwán, Filipinas, Vietnam del Sur y Tailandia, pero que en el presente se reducen a Japón y Corea del Sur.

Otra variedad de satélite es la representada por los dominios autónomos del Imperio Británico. Canadá, Australia y Nueva Zelanda se distinguieron de otras colonias de la corona británica basándose por completo en el aspecto racial: a diferencia de las que no recibieron el estatus de dominios, fueron pobladas principalmente por emigrantes blancos europeos. Otra variante adicional la constituye el estado cliente, una dependencia de una potencia imperial cuyos recursos, localización estratégica o influencia le proporcionan el margen necesario para imponer determinada política a la potencia dominante sin dejar de depender del amplio respaldo de ésta. Esta variante puede ser ejemplificada por la relación entre Israel y Estados Unidos, las relaciones de China y Vietnam con la URSS antes de la ruptura sino-soviética, y la posición de Corea del Norte entre 1960 y 1990, cuando podía generar enfrentamientos entre China y la Unión Soviética.

Durante la guerra fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética afirmaron oponerse al imperialismo al viejo estilo europeo, por lo que no se consideraban a sí mismas potencias imperiales. Con todo, ambos países habían levantado imperios mucho antes de la segunda guerra mundial —Estados Unidos en Latinoamérica y el Pacífico, los rusos en el Cáucaso y Asia central—, y ambos consiguieron nuevos territorios al participar en ella. Los dos, sin embargo, tuvieron que disfrazar sus viejas prácticas imperialistas como algo mucho más benigno, y durante los años de la guerra fría cada uno desarrolló una colección de complejos mitos sobre la amenaza que representaba el otro bando y la necesidad de mantener las fuerzas militares «avanzadas desplegadas», en todo momento preparadas para repeler un «primer ataque». Las dos naciones más poderosas de la Tierra estuvieron de acuerdo en al menos una cosa: en que su presencia militar era necesaria en todos los continentes del mundo para prever una guerra de superpotencias.

Las bases militares en el exterior de ambas superpotencias se convirtieron en la institución característica de una nueva forma de imperialismo. Ambas abrazaron con entusiasmo la idea de que se encontraban en peligro mortal a causa de la otra, pese a haber sido aliadas durante la segunda guerra mundial. La guerra fría, y en especial el punto muerto alcanzado en Europa central, había definido de manera conveniente el objetivo de las alrededor de 1.700 instalaciones militares que Estados Unidos tenía repartidas en cerca de cien países durante este período.²² Todas las fuerzas de esas bases estaban dedicadas al gran proyecto de «contener el expansionismo soviético», del mismo modo que las de la URSS se ocupaban de impedir la «agresión norteamericana».²³ En 1989, mientras la Unión Soviética empezaba a dar libertad a sus satélites y desintegrarse, procurando explicar cómo se había hecho con ellos en primer lugar, Estados Unidos estaba todavía entregado a la brutal represión de las sublevaciones y regímenes rebeldes centroamericanos para, según decía, evitar que los soviéticos se hicieran con el poder en el Nuevo Mundo.

La paranoia militar de la guerra fría fomentó gigantescos complejos militares-industriales tanto en Estados Unidos como en la URSS, y contribuyó a mantener altos niveles de empleo a través de un «keynesianismo militar», es decir, de una importante inversión gubernamental en armamento y preparativos bélicos. La guerra fría impulsó asimismo el empleo en las propias fuerzas armadas, en un gigantesco aparato de servicios de espionaje y operaciones clandestinas, y en institutos universitarios de investigación científica y estratégica que pasaron a formar parte de la maquinaria bélica. Ambos países desperdiciaron recursos internos, recortaron la democracia siempre que ésta representó un inconveniente en el exterior, promovieron sangrientos golpes de estado e intervenciones contra todo aquel que se resistió a sus planes y contaminaron el medio ambiente con plantas de producción de armas nucleares desprovistas de controles eficientes. Los propagandistas oficiales justificaban los crímenes y represiones perpetrados o promovidos por su respectivo imperio con el argumento de que, al menos, se había evitado un cataclismo nuclear y las malvadas intenciones del otro habían sido frustradas o contenidas.

Con todo, ¿llegó a existir, en algún momento, una amenaza real? En 1945, durante su famoso encuentro en Yalta en previsión de la rendición alemana que tendría lugar pocos meses más tarde, Roosevelt

y Stalin dividieron Europa mediante el río Elba en esferas de influencia «occidental» y rusa, y acordaron cómo sería el reparto del este asiático tras la derrota de Japón. A lo largo de los siguientes 45 años, ninguno de los dos bandos demostró jamás cualquier intención seria de sobrepasar las fronteras acordadas en Yalta. A pesar de las pruebas militares realizadas en Berlín y Corea, de la decisión norteamericana de construir un estado independiente en su mitad de la Alemania ocupada, de la intensa rivalidad entre los servicios de inteligencia de las dos superpotencias, de las amargas guerras «por poderes» en Vietnam y Afganistán y del único momento en que la conflagración nuclear pareció cercana, en 1962, la guerra fría se transformó más que nada en una explicación fácil de aceptar por ambos bandos de por qué el mundo permaneció dividido en gran parte de acuerdo con los puntos en que el avance de los ejércitos victoriosos de la segunda guerra mundial se había detenido.

La cuestión fue planteada del siguiente modo por los periodistas Diana Johnstone y Ben Cramer: «Si el peligro [de una guerra entre estadounidenses y soviéticos en Europa] en realidad nunca existió, entonces puede argumentarse que la principal misión de las fuerzas norteamericanas en Europa ha sido, en verdad, la de *mantener* la amenaza soviética. Mientras un gran número de fuerzas americanas estuviera desplegado en Europa occidental en posición de atacar (o contraatacar) a la Unión Soviética, ésta podía continuar en posición de atacar (o contraatacar) a las fuerzas americanas desplegadas en el continente europeo. Las “amenazas” soviética y estadounidense se sostenían una a otra, como también a su doble hegemonía militar en el continente europeo».²⁴ Estas ideas han recibido un sorprendente respaldo tras el fin de la guerra fría por parte de una fuente inusitada: el presidente George W. Bush y su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. En la Declaración sobre la Seguridad Nacional hecha pública el 17 de septiembre de 2002, Bush y Rice señalaron que: «Durante la guerra fría, en especial después de la crisis de los misiles cubanos [de 1962], nos enfrentamos a un adversario que, por lo general, evitaba correr riesgos y era partidario de mantener el *statu quo*». Hubiera resultado imposible que esas palabras se pronunciaran en la Casa Blanca antes de la caída del muro de Berlín de 1989.

Ambos bandos utilizaron la supuesta amenaza del otro —en el caso de Estados Unidos en el este asiático, la «amenaza» era la Chi-

na comunista— para justificar su ocupación y explotación de territorios en el extranjero. Estados Unidos aplicó el mismo tipo de razonamiento en Latinoamérica y definió como amenazas comunistas el gobierno democráticamente electo de Guatemala en 1954, el gobierno revolucionario de Cuba en 1959 y el gobierno sandinista de Nicaragua en 1979. Esa excusa sirvió de tapadera a una serie cada vez mayor de intervenciones y golpes de estado contra aquellos gobiernos latinoamericanos que Estados Unidos consideraba hostiles a sus intereses. Tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala por parte de la CIA y su desastroso intento de invadir Cuba por bahía de Cochinos, sólo quedaba un pequeño paso para el «efecto dominó» en el sureste asiático y la ruinosa intervención en Vietnam.

El efecto inicial de la guerra fría fue que justificó el control de ambas superpotencias sobre numerosos territorios que cada una había defendido o liberado durante la segunda guerra mundial: en el caso soviético, principalmente sobre Europa central; en el de los norteamericanos, sobre Inglaterra, el Atlántico Norte, Alemania Occidental, Italia, Japón y Corea del Sur. En 1953, por ejemplo, el gobierno estadounidense obligó en secreto a parte de la población nativa de Groenlandia, colonia danesa desde 1721, a trasladarse —les dio cuatro días de plazo y los amenazó con destruir sus casas con escavadoras—, para dejar sitio a una gran ampliación de la base de la fuerza aérea en Thule, una extensión estratégica de casi 95.000 hectáreas disfrazada de «estación climática» desde la segunda guerra mundial. De hecho, a lo largo de la guerra fría, la base de Groenlandia era el lugar donde se esperaba que repostaran los bombarderos programados para volar sobre la Unión Soviética en caso de que estallara la tercera guerra mundial. (En la actualidad, se la considera un punto fundamental para el sistema de defensa contra misiles balísticos de la administración Bush.²⁵) Después de más de cincuenta años, la fuerza aérea no ha dado ninguna muestra de estar interesada en abandonar la isla, pese a las continuas protestas de los esquimales de Groenlandia y las numerosas demandas presentadas ante el tribunal supremo de Dinamarca.

Una vez que han conseguido una base, los militares son extremadamente reacios a renunciar a ella y, en cambio, le encuentran nuevas aplicaciones. La presencia estadounidense en Okinawa, por ejemplo, se justificó en un primer momento por la necesidad de organizar la invasión de las principales islas de Japón (que resultó innecesaria tras

las bombas atómicas y la rendición nipona); luego se la utilizó como un enclave seguro durante la guerra de Corea; a continuación pasó a ser una base avanzada para el despliegue de fuerzas contra China; después se convirtió en una base para bombarderos B-52 y en una área de estacionamiento para la guerra de Vietnam. También fue utilizada como zona de entrenamiento para la guerra en la jungla y, más recientemente, como cuartel para las tropas y aviones que podrían ser utilizados en algún lugar de Asia u Oriente Próximo. Tal como escribe el historiador y coronel retirado del ejército, Patrick Lloyd Hatcher: «Los bienes raíces en el extranjero ejercen sobre los encargados de los planes de defensa americanos la misma atracción que los portaaviones de la clase Nimitz sobre los almirantes, y los bombarderos silenciosos B-2 y tanques pesados Abrams sobre los generales. ... Nunca tienen bastante».²⁶ En resumen, el imperialismo de las superpotencias se centró, durante la guerra fría, en el despliegue de fuerzas militares en los países de los demás; y asumió en concreto la forma del establecimiento de bases militares en el exterior y el patrocinio de satélites dóciles en la esfera de influencia de cada uno.

Aunque difieren de las colonias desde el punto de vista estructural, legal y conceptual, los enclaves militares estadounidenses en el extranjero son en sí mismos una especie de microcolonias, en el sentido de que se encuentran por completo fuera de la jurisdicción del país ocupado. En prácticamente todos los casos, Estados Unidos negocia un «Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas Armadas» (SOFA) con la supuestamente independiente nación «anfitriona», una versión moderna de la práctica imperialista de la «extraterritorialidad» tal como se implantó en China en el siglo XIX: el «derecho» de un extranjero acusado de un delito a ser entregado a sus propios representantes diplomáticos y ser juzgado de acuerdo con la ley de su país de procedencia, en lugar de tener que presentarse ante un tribunal chino para ser juzgado según la legislación china. Esta práctica, que los chinos sólo aceptaron a punta de pistola, se originó porque los extranjeros sostenían que la ley china era bárbara, y que no se debía obligar a los «hombres blancos» a someterse a ella. En efecto, la legislación china se preocupaba más por las consecuencias sociales de un crimen que por establecer la culpabilidad o inocencia individual de los acusados, en especial de aquellos huéspedes que no habían sido invitados. Tras la guerra del opio anglo-china de 1839-1842, Estados Unidos fue el pri-

mer país en exigir la «extraterritorialidad» para sus ciudadanos, pero luego todas las naciones europeas solicitaron el mismo tipo de derechos. A excepción de los alemanes, que perdieron sus colonias en China durante la primera guerra mundial, los estadounidenses y los europeos vivieron en la «extraterritorialidad» hasta que los japoneses acabaron con ella en 1941 y el Kuomintang (partido nacionalista) de Chiang Kai-Chek la aboliera en 1943 en la «China libre».

Rachel Cornwell y Andrew Wells, dos autoridades en lo que a los acuerdos sobre el estatus de las fuerzas armadas se refiere, concluyen que: «La mayor parte de los SOFA están redactados de tal modo que los tribunales nacionales carecen de jurisdicción sobre el personal militar norteamericano que cometa delitos contra la población local, a excepción de casos especiales en los que las autoridades militares de Estados Unidos aceptan traspasar la jurisdicción del caso».²⁷ Dado que los militares en servicio están también exentos de los controles de inmigración y pasaportes normales, los militares tienen la opción de, sencillamente, sacar del país al presunto violador o asesino antes de que las autoridades locales puedan llevarle a juicio, un recurso del que a menudo han hecho uso los oficiales al mando de las bases del Pacífico. Hasta los atentados terroristas de Nueva York y Washington, en septiembre de 2001, Estados Unidos había reconocido públicamente la existencia de ese tipo de acuerdo con 93 países, si bien algunos tratados resultan tan embarazosos para la nación anfitriona que se mantienen en secreto, en especial en el mundo islámico.²⁸ Por consiguiente, el verdadero número de tales acuerdos no es del conocimiento público.

Las bases militares de Estados Unidos no están bajo el control de un funcionario colonial ni del ministro de Asuntos Exteriores, sino del Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, así como de una plétora de otros organismos oficiales, y en ocasiones, secretos. Esas instituciones construyen las bases, las dotan de personal y las supervisan; unos recintos vallados y protegidos en suelo ajeno, a menudo contruidos para imitar la vida tal como sería en casa. Puesto que no todos los militares tienen familia o desean ser acompañados por ésta, excepto en los países musulmanes, las bases por lo general atraen una impresionante cantidad de bares y de burdeles, así como a los delincuentes que los manejan, que se agolpan a sus puertas. Es inevitable que la presencia de esas bases usurpe, dis-

torsione y subvierta todas las instituciones de gobierno democrático que puedan existir en la sociedad que las acoge.

Colocar a varios miles de jóvenes norteamericanos de entre 18 y 24 años en culturas que les son extrañas y sobre las que desconocen absolutamente todo es una receta para una interminable serie de «incidentes» que atormentan a los países que han aceptado albergar bases. Los embajadores estadounidenses aprenden enseguida el protocolo para visitar al ministerio de Asuntos Exteriores del país anfitrión con el fin de presentarle sus excusas por el comportamiento de nuestras tropas. Incluso en países estrechamente aliados, en los que se habla inglés, los residentes locales acaban hartos de las agresiones sexuales cometidas por los extranjeros, así como de que éstos conduzcan embriagados. Durante la segunda guerra mundial, los británicos se burlaban de nuestras tropas afirmando que estaban «demasiado pagadas, demasiado sexualizadas y demasiado aquí». Nada de eso ha cambiado.

Antes de comenzar una gira por estas bases y de analizar cómo crecieron y se multiplicaron, hemos de considerar brevemente el pensamiento militarista contemporáneo en Estados Unidos y sus orígenes. Las bases sostienen a los militares y constituyen su esfera de influencia, pero han sido los propios militares y el que crecieron durante la guerra fría y continuaran haciéndolo al terminar ésta lo que generó la transformación definitiva de las bases, que pasaron de ser áreas de estacionamiento para diversos conflictos armados a convertirse en guarniciones permanentes para vigilar el imperio.

Cuando César estaba acampado en Rávena y sopesaba avanzar hacia el sur cruzando el Rubicón, en flagrante violación de las órdenes del senado romano, ocurrió algo que forzó su decisión. Según Suetonio, el historiador y biógrafo romano, los pastores y los soldados se acercaron al río atraídos por el sonido de una flauta. Entre ellos había varios trompetistas. Uno de ellos, por razones oscuras, tocó una marcha militar. Las tropas lo interpretaron como la señal de que debían cruzar con decisión el río. Se dice que César comentó: «Vayamos a donde nos llaman los augurios de los dioses y los crímenes de nuestros enemigos. La suerte está echada». De manera análoga, los militaristas norteamericanos también pensaron que tras la guerra fría la suerte estaba echada, y el pueblo estadounidense cruzó a ciegas su propio Rubicón para convertirse en un imperio de pretensiones mundiales.²⁹

Las raíces del imperialismo americano

El excesivo crecimiento de las fuerzas militares es, bajo cualquier forma de gobierno, poco propicio para la libertad, y ha de ser considerado hostil especialmente para la libertad de la República.

Presidente George Washington,
discurso de despedida, 17 de septiembre de 1796.

Esta conjunción de unas fuerzas militares gigantescas y una gran industria armamentística es nueva en la experiencia estadounidense. ... En los consejos de gobierno, hemos de evitar que el complejo militar-industrial adquiera una influencia injustificable, tanto si éste la busca como si no. El potencial para la ascensión desastrosa de un poder equivocado existe y persistirá. No debemos permitir nunca que el peso de esa combinación ponga en peligro nuestras libertades y nuestros procesos democráticos. No deberíamos dar nada por supuesto.

Presidente Dwight D. Eisenhower,
discurso de despedida, 17 de enero de 1961.

EN ESTADOS UNIDOS, las primeras tendencias militaristas surgieron a finales del siglo XIX. Antes y durante la guerra contra España de 1898, la prensa fue manipulada con el fin de generar en el pueblo una fiebre belicista, al tiempo que las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por las tropas americanas en Filipinas eran ocultados al público. Gracias a este conflicto, Estados Unidos adquirió sus primeras posesiones coloniales y creó su primer estado mayor de las fuerzas armadas. El jingoísmo norteamericano de esa época —un sentimien-

to popular de un chovinismo jactancioso y agresivo— siguió el ejemplo que proporcionaban tendencias similares en la Inglaterra imperial. Incluso el término *jingoism* se derivó del estribillo de una canción británica del teatro de variedades de 1878, de la que se apropiaron quienes apoyaban el envío de una flota británica a aguas turcas para contrarrestar el avance de Rusia.

En la noche del 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, una misteriosa explosión destruyó y provocó el hundimiento del acorazado *Maine*. La deflagración mató a 262 de los 374 miembros de la tripulación. El *Maine* había llegado a La Habana tres semanas antes, como parte de una misión «amistosa» que tenía por fin rescatar a los estadounidenses atrapados en medio de la insurrección cubana contra el gobierno español. Sus objetivos tácitos, sin embargo, eran practicar la «diplomacia de las cañoneras» contra España, en apoyo de los rebeldes cubanos, e imponer la Doctrina Monroe, advirtiendo a otras potencias europeas, como Alemania, de que no debían aprovecharse de la situación.

Dos investigaciones oficiales de la marina concluyeron que una explosión externa, probablemente causada por una mina, había incendiado uno de los depósitos de pólvora del acorazado, a pesar de que España sostuvo que no había tenido nada que ver con el hundimiento del *Maine*. Quienes han analizado más tarde la cuestión, como el almirante Hyman Rickover, han sugerido que la combustión espontánea de una carbonera pudo haber sido la causa de lo que, probablemente, fue una explosión accidental.¹ Aunque la marina reflató el buque en 1911 y después lo barrenó, lo sucedido en 1898 continúa siendo un enigma.

Sin embargo, no existe ninguna incógnita sobre la reacción en Estados Unidos ante la noticia. El subsecretario de la marina, Theodore Roosevelt, declaró de inmediato que el hundimiento representaba «un acto de sucia traición» por parte de España. El embajador francés en Washington avisó a su gobierno de que «una especie de furia bélica se ha apoderado de la nación norteamericana».² El *New York Journal* de Randolph Hearst publicó ilustraciones que mostraban cómo los saboteadores españoles habían adosado una mina al *Maine* y la habían detonado desde la playa. Hearst envió después a Cuba al artista Frederic Remington para que informara sobre la revuelta cubana contra la opresión española. «No hay guerra. Solicito

regresar», escribió Remington a su jefe. Hearst le telegrafió una contestación que se haría famosa: «Por favor, permanezca ahí. Usted me da las ilustraciones, yo le daré la guerra».³ Y así lo hicieron. Gracias al periodismo de Hearst y al de Joseph Pulitzer y su *New York World*, el país explotó en un ataque de ira justiciera y fervor patriótico. El 25 de abril de 1898 el congreso declaró la guerra a España.

El 1 de mayo el Escuadrón Asiático del almirante George Dewey, quien se vio forzado a abandonar la colonia británica de Hong Kong debido a la declaración de guerra, atacó a la flota española en la bahía de Manila y obtuvo una fácil victoria. Con la ayuda de los nacionalistas filipinos, los estadounidenses ocuparon Manila y empezaron a sopesar qué hacer con el resto de las islas del archipiélago. El presidente William McKinley declaró que las Filipinas «nos llegaron como un regalo de los dioses», si bien admitió que no sabía exactamente dónde estaban.⁴

En el verano de 1898, Theodore Roosevelt dejó el gobierno y se dirigió a Cuba con propio su regimiento personal. Compuesto de vaqueros, nativos americanos y jugadores de polo de la promoción de 1880 de Harvard, los Jinetes de las Montañas Rocosas de Roosevelt (a los que la prensa se refería como los Jinetes Rudos) fueron diezmados por la malaria y la disentería en la isla, aunque sus escaramuzas con los españoles en la colina de San Juan, al este de Santiago, proporcionarían a su líder la Medalla de Honor del congreso y le impulsarían al más alto cargo político obtenido mediante elecciones.

El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, restauró la paz y lanzó a Estados Unidos a un papel, hasta entonces unimaginable, de potencia explícitamente imperialista en el Caribe y el Pacífico. El tratado concedió la independencia a Cuba, pero la Enmienda Platt, que el congreso norteamericano aprobó en 1901, transformó a la isla en un satélite de Estados Unidos al permitirle establecer una base naval en la bahía de Guantánamo, en la costa sur de la isla. La enmienda fue iniciativa del senador Orville Platt, de Connecticut, que la agregó a la Ley de Gastos del Ejército, y en ella se especificaban las condiciones bajo las cuales Estados Unidos intervendría en los asuntos internos de Cuba. La enmienda exigía a ese país que no firmara tratados que pudieran limitar su soberanía ni contrajera deudas que no pudiera pagar con sus ingresos habitua-

les. Además, obligaba a Cuba a otorgar a Estados Unidos privilegios especiales para que éste pudiera intervenir en cualquier momento, con el fin de preservar la independencia cubana o apoyar un gobierno que fuera «adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual». La marina desembarcaría en la isla, para ejercitar esos derechos autoproclamados, en 1906, 1912, 1917 y 1920.

En 1901 Estados Unidos obligó a Cuba a incorporar la Enmienda Platt a su propia constitución, en la que permaneció hasta 1934, si bien se mantuvo un artículo que permitía a Estados Unidos conservar su base en Guantánamo hasta que ambas partes «acordaran» su devolución, algo sobre lo que el gobierno norteamericano insistió alegando que la base era esencial para la defensa del canal de Panamá. La Enmienda Platt representó una tremenda humillación para todo el pueblo cubano, pero aceptarla era la única manera de evitar la ocupación militar permanente del país.

A pesar de que la Zona del Canal ha dejado de ser posesión estadounidense, la bahía de Guantánamo continúa siendo una colonia militar, y es utilizada hoy como campo de prisioneros para los detenidos durante las guerras contra Afganistán, en 2001-2002, e Irak, en 2003. (Dado que Guantánamo no pertenece a Estados Unidos, el gobierno sostiene que estos prisioneros no se encuentran protegidos por las leyes norteamericanas, y como la administración Bush apodó a esos reclusos de «combatientes ilegales», una expresión inexistente en la legislación internacional, sostiene asimismo que tampoco están sujetos a lo estipulado por la Convención de Ginebra y no pueden ser tratados como prisioneros de guerra. El 9 de octubre de 2002, el gobierno destituyó al comandante de Guantánamo, el general de brigada Rick Baccus, con el argumento de que se mostraba «demasiado blando» con los presos.)⁵ Estados Unidos no se anexionó directamente Cuba en 1898 por varias razones: sus pretensiones de nación antiimperialista, su deseo de evitar asumir la deuda de cuatrocientos millones de dólares que entonces tenía Cuba, la gran población afroamericana de la isla y los temores que albergaba Florida de la competencia que, en materia de agricultura y turismo, Cuba representaría al pasar a formar parte del país.

El Tratado de París traspasó también los territorios españoles de Puerto Rico y Guam a la soberanía norteamericana, bajo la que per-

manecen hoy.* Y, lo que todavía es más importante, a cambio de pagar a España sólo veinte millones de dólares, el tratado concedió a Estados Unidos todo el archipiélago filipino: 3.141 islas situadas a lo largo de la costa de China y Vietnam, a casi trece mil kilómetros de Los Ángeles, pero a poco más de tres mil de Tokio. El pago, pese a ser módico, fue importante para los líderes estadounidenses, pues evidenciaba que, en contra de las acusaciones de sus críticos, no se habían lanzado a una «apropiación de tierras» análoga a la de las otras nuevas potencias imperialistas de la época —Alemania, Rusia, Italia, Bélgica y Japón—, por no mencionar a las viejas, como el Reino Unido, Francia, España y Holanda.

Los filipinos, por su parte, no se mostraron demasiado deseosos de ser «benevolentemente asimilados», según la expresión del presidente McKinley, y capitaneados por el patriota nacionalista Emilio Aguinaldo, que había ayudado al almirante Dewey a arrebatar a los españoles el control de Manila, se rebelaron contra sus nuevos señores. Pese a que las tropas estadounidenses capturaron a Aguinaldo en 1901 y le obligaron a jurar lealtad a Estados Unidos, la lucha prosiguió hasta 1903. Mientras que durante la guerra hispano-americana (a la que los cubanos llaman, guerra hispano-cubano-americana) sólo 385 estadounidenses murieron en combate, alrededor de 4.234 militares perdieron la vida luchando contra los rebeldes filipinos. El ejército, muchos de cuyos oficiales habían adquirido su experiencia en las guerras contra los indios, exterminaron al menos a 200.000 filipinos, de una población de menos de ocho millones. Durante la segunda guerra mundial, en un nuevo y vano intento de escapar al dominio imperialista con la ayuda de una potencia imperial rival, Aguinaldo colaboró con los conquistadores japoneses de las islas.

Estados Unidos, haciendo gala de lo que el historiador Stuart Creighton Miller denominó su «exagerado sentido de la inocencia», descri-

* En 1898 Estados Unidos también orquestó un golpe de estado contra la reina Lili'oukalani, de Hawái, y se anexionó sus islas; asimismo, en 1903 Theodore Roosevelt, convertido ya en presidente, fomentó una revolución en el istmo de Panamá, con el fin de separarlo de Colombia y obtener el territorio necesario para la construcción del canal de Panamá, pieza esencial de la estrategia imperial. Un siglo después, estas técnicas se han hecho normales dentro del repertorio americano, sólo que en la actualidad se ejecutan bajo el sello de las «acciones encubiertas» gestionadas por la CIA y el Pentágono. (N. del a.)

bió la brutal colonización de los filipinos como designio divino y algo racialmente inevitable y económicamente indispensable.⁶ Esas ideas tuvieron un gran impacto en los japoneses, entonces divididos entre la posibilidad de intentar liderar un renacimiento asiático antioccidental y la de unirse a los imperialistas en la explotación de las naciones más débiles del este asiático. Su decisión de emular el comportamiento de otros países «avanzados» y seguir el camino del imperio acabaría por llevarlos a entrar en guerra con Estados Unidos.

Un importante imperialista americano de la época, el senador por Indiana, Albert Beveridge, proclamó con orgullo que: «Las Filipinas son nuestras para siempre ... y justo después de Filipinas, se encuentran los ilimitados mercados de China. ... El océano Pacífico es nuestro». Un comentario recurrente en los debates del congreso sobre la anexión de Filipinas era que las islas representaban un «trampolín hacia China». Beveridge pensaba que era deber de Estados Unidos llevar el cristianismo y la civilización a «los pueblos salvajes y atrasados», sin que le importara el hecho de que la mayoría de los filipinos fueran católicos desde hacía siglos.⁷ Incluso los que se oponían a la anexión, como el senador «Pitchfork Ben» Tillman, de Carolina del Sur, consideraban que era un absurdo hablar de enseñar autogobierno a un pueblo «racialmente incapaz de gobernarse a sí mismo».⁸ En la época en que Tillman realizó ese comentario, el Tammany Hall de Nueva York, que no era precisamente un modelo de autogobierno ilustrado, constituía la fuerza política más poderosa de Estados Unidos. El presidente McKinley se refirió a los filipinos como sus «hermanitos morenos», mientras que las tropas cantaban en el campo de batalla una cancioncilla con la siguiente estrofa: «Es posible que sean hermanos de McKinley, pero es cierto como que el infierno existe que no son hermanos míos». Esas actitudes, presentes por igual en los estratos altos y bajos de la sociedad americana, contribuyeron de forma irónica a incrementar el incipiente sentido de superioridad racial de los japoneses y su creencia en que habían sido elegidos y que la liberación de Asia de la influencia occidental era su «destino manifiesto».*

* La expresión fue acuñada en 1845 por John Louis O'Sullivan, político y periodista estadounidense, para referirse a la expansión territorial americana, a la que consideraba no sólo inevitable sino verdadero designio divino. (*N. de la t.*)

La guerra hispano-americana no sólo inauguró la era del imperialismo estadounidense, sino que también puso a Estados Unidos en el camino del militarismo. En el pensamiento político norteamericano tradicional, los grandes ejércitos permanentes no sólo habían sido considerados innecesarios, puesto que Estados Unidos estaba decidido a evitar la guerra en el extranjero, sino que también eran vistos como una amenaza a la libertad, dado que se pensaba que la disciplina y los valores militares eran incompatibles con la naturaleza abierta de la vida civil.⁹ En su famoso discurso de despedida del 17 de septiembre de 1796, George Washington dijo a sus compatriotas que: «Al extender nuestras relaciones comerciales, nuestra principal norma de conducta para con las naciones extranjeras debe ser la de reducir al mínimo los vínculos políticos con ellas».¹⁰ En el siglo XXI, este pronunciamiento parece de entrada demasiado idealista y, aunque quizá resulte apropiado para un país nuevo y débil, es sin duda impracticable para la única «superpotencia» mundial. En Estados Unidos todavía se reverencia el nombre de Washington, pero su consejo se descarta habitualmente por que se lo considera «aislacionista».

No obstante, Washington tenía en mente algo muy concreto. Temía que Estados Unidos desarrollara un aparato estatal que fuera comparable al de los estados autocráticos de Europa y pudiera desplazar el orden constitucional. Tal cosa implicaría, inevitablemente, el incremento de los impuestos federales para costear las fuerzas armadas y la burocracia estatal, así como el traspaso del poder político de los estados constituyentes de la Unión al gobierno federal y el cambio, dentro del gobierno federal, de la primacía del congreso por la del presidente, lo que redundaría en lo que hemos empezado a llamar «presidencia imperial». El camino más seguro hacia estos indeseables resultados era, en opinión de Washington, las guerras en el extranjero. Como escribió James Madison, el principal autor de la Constitución: «Entre todos los enemigos de la libertad pública, la guerra es, quizá, el más temible, puesto que contiene y desarrolla el germen de todos los demás. La guerra es la madre de los ejércitos; éstos generan deudas e impuestos; y los ejércitos, las deudas y los impuestos son instrumentos conocidos para llevar a los muchos a ser dominados por los pocos».¹¹ La Declaración de Independencia acusaba al rey de Inglaterra de haber «hecho a los militares independientes y superiores al poder civil», y el Primer Congreso Continental había condenado la

utilización de las fuerzas armadas para hacer cumplir el pago de los tributos. Estas actitudes duraron alrededor de un siglo. Con la guerra hispano-americana, el gobierno comenzó a construir una maquinaria militar —y a tolerar el militarismo que la acompaña— que, a finales del siglo XX, había llegado a parecer invencible.

En el verano de 1898, en Tampa, Florida, donde las fuerzas estadounidenses se habían concentrado antes de asaltar Santiago de Cuba, no existía ninguna autoridad al mando, ni política ni militar. El caos era completo, había enfermos por todas partes y las basuras se extendían por doquier. Theodore Roosevelt sacó partido de esta desorganización para crear su propio regimiento personal, los Jinetes Rudos. En 1899 el presidente William McKinley nombró secretario de guerra a Elihu Root, quien realizó una significativa contribución al militarismo norteamericano al crear, en 1903, un «estado mayor», compuesto por oficiales militares de alta graduación y bajo el mando directo del secretario de guerra, con el fin de planear y coordinar los futuros conflictos armados. En sus declaraciones ante el congreso y en sus informes anuales como secretario de guerra, Root mencionó, ocasionalmente, la confusión reinante en Tampa en 1898 como una prueba de la necesidad de semejante organización. No obstante, su objetivo real era bastante más amplio. Root sostenía que «el éxito casi extraordinario obtenido ... por las fuerzas armadas alemanas (prusianas) durante los últimos treinta años se debe, en gran parte, al cuerpo de oficiales altamente entrenados del estado mayor que posee el ejército alemán». Y concluía que: «La experiencia común del género humano es que las tareas de las que el personal del estado mayor se encarga deben hacerse en todo ejército bien gestionado y dirigido, y ha de realizarlas un conjunto de hombres especialmente nombrado para ello. Debemos contar con ese cuerpo, seleccionado y organizado a nuestra manera y de acuerdo con nuestro propio sistema, para llevar a cabo esas tareas esenciales».¹²

El 14 de febrero de 1903 el congreso, siguiendo el consejo de Root, aprobó la ley que creó el predecesor del actual Estado Mayor Conjunto. Root difícilmente habría imaginado que su modesta contribución a la eficacia militar daría lugar, un siglo más tarde, a los miles de oficiales militares que trabajan en el Pentágono en asuntos relativos al armamento, el planeamiento estratégico, la estructura de las fuerzas y, en la jerga militar, C4ISR (comando, control, comunicaciones, com-

putadoras, inteligencia, supervisión y reconocimiento). En 1903, una semana después de constituir el estado mayor, Root estableció una institución complementaria del militarismo, la Escuela de Guerra del Ejército, situada primero en Washington, DC, y posteriormente trasladada a Carlisle, Pensilvania. En el discurso que profirió al colocar la primera piedra del centro original, Root afirmó que: «No es extraño que en la ribera del bello Potomac, en una tierra amante de la paz, se levante una estructura dedicada a mejorar la eficacia de un ejército para la guerra. El mundo se vuelve más pacífico; cada vez se condena más la guerra. ... Sin embargo, el egoísmo, la codicia, la envidia y el deseo de crecer a través de la injusticia no han desaparecido, y la humanidad sólo progresa con lentos y pequeños pasos. Mientras la codicia y la envidia existan entre los hombres, el país ha de estar preparado para defender sus derechos».¹³ Además, como parte de su afán de modernización, Root trasladó las normas y métodos federales a las milicias estatales semi-independientes y las rebautizó como Guardia Nacional.

Tal vez Root tuviera razón y, al haber alcanzado los fundamentos industriales del poder militar, Estados Unidos necesitaba tener en cuenta el equilibrio global del poder y modificar sus instituciones en función de ello. Sin embargo, no cabe duda sobre lo que perdimos al hacerlo. Con el paso del tiempo, las advertencias de Washington sobre el riesgo para la libertad que entraña la existencia de un estamento militar grande y permanente han sido veneradas cada vez más y atendidas cada vez menos, y paralelamente la semejanza entre gobierno y el sistema político esbozado en la Constitución de 1787 es cada vez más tenue.

En 1912, Woodrow Wilson, entonces gobernador de Nueva Jersey y antes rector de la Universidad de Princeton, un eminente politólogo, autor de *Congressional Government*, una de las pocas obras verdaderamente clásicas sobre el sistema político estadounidense, llegó a la Presidencia tras liderar la candidatura demócrata. Había resultado muy beneficiado de la división que se produjo entre los republicanos a consecuencia del intento del ex presidente, Theodore Roosevelt, de regresar a la política. Como líder del primer gobierno demócrata en veinte años, Wilson emprendió con decisión una reforma para acabar con la corrupción y las injusticias asociadas a la «edad dorada» de Estados Unidos. Rebajó los aranceles, creó un impuesto sobre la renta

basado en la 16.^a Enmienda, creó el sistema de la Reserva Federal, con funciones de banco central, promulgó una ley federal sobre trabajo infantil, recaudó el primer impuesto estatal y dio inicio a gran número de cambios que trasladaron el poder político de Estados Unidos hacia Washington y la presidencia de manera irreversible.

Sin embargo, para bien o para mal, fue en la política exterior donde realizó las mayores innovaciones. Wilson empezó con la revolución mexicana que estalló en 1910, pues fue incapaz de dejar de interferir para respaldar a una facción en contra de la otra. Esto, por supuesto, no era ninguna novedad para un gobierno que ya poseía colonias y semicolonias en el Caribe. Lo que diferenció a Wilson de los imperialistas republicanos de finales de siglo XIX fue el modo como justificó sus actos, lo que además lo llevó a convertirse en el santo patrón de las «cruzadas» que caracterizarían la política exterior estadounidense desde su intervención en la primera guerra mundial hasta la invasión de Irak en 2003. En materia de política exterior, Woodrow Wilson fue un idealista y se comportó como un misionero cristiano. Siempre se preocupó más por hacer el bien que por ser eficaz.

Hijo de un capellán del ejército confederado, Wilson pertenecía a la iglesia presbiteriana y leía diariamente la Biblia. Uno de sus biógrafos, Arthur S. Link, observó: «Nunca pensó en los asuntos públicos, como tampoco en los privados, sin sopesar primero lo que la fe y el amor cristiano ordenaban hacer dadas las circunstancias».¹⁴ Natural de Virginia, Wilson era, asimismo, un racista y un mojigato. Debido a la forma de gobierno republicana de Estados Unidos, la seguridad del país, protegido por dos océanos, así como por lo que consideraba las virtudes innatas del pueblo americano, Wilson albergaba una firme creencia en la excepcionalidad del país y en que éste estaba destinado a lograr una «definitiva paz mundial». No entendía las actividades que Estados Unidos realizaba en el exterior desde una perspectiva realista, ni desde la necesidad de mantener el equilibrio de poder mundial. Pensaba, por el contrario, que la paz dependía de que la democracia se extendiera, y que Estados Unidos tenía la obligación de expandir sus principios y sus prácticas democráticas por todo el planeta.¹⁵

Antes de dejar atrás su intervención en México, Wilson había dado órdenes a la marina para que ocupara Veracruz, en abril de 1914; había provocado el asalto de Francisco («Pancho») Villa a Columbus, Nuevo México, del 9 de marzo de 1916, y había enviado al general

John J. Pershing a una expedición punitiva para capturar a Villa, que, tras adentrarse en territorio mexicano, resultó un completo fracaso. Wilson creía haber enseñado a México su forma de gobierno y lo afirmaba públicamente, lo que avinagró las relaciones entre ambos países durante décadas. Apenas evitó la guerra con México, pero su intromisión autoritaria en los asuntos del país vecino, envuelta en una retórica exaltada sobre los ideales liberales, constitucionales y norteamericanos, no pasó desapercibida. Japón utilizó en repetidas ocasiones este precedente, unido a su propia retórica de «liberación» del imperialismo occidental, para justificar sus intervenciones armadas en Manchuria y la China revolucionaria. Estados Unidos carecía de una respuesta convincente, excepto entrar en guerra con Japón por un comportamiento que este país había aprendido de Estados Unidos.

Cuando estalló la primera guerra mundial en Europa, Wilson siguió el consejo de George Washington y permaneció neutral. Ésa era una postura extremadamente popular en el país, y en 1916 Wilson fue reelegido; el lema de su campaña había sido: «Él nos mantuvo fuera de la guerra». Desde el inicio de la conflagración, el ex presidente Theodore Roosevelt y Elihu Root, entonces senador, se habían mostrado abiertamente críticos con la insistencia de Wilson en la neutralidad. No obstante, cuando por fin Wilson llevó el país a la guerra en 1917, resultó ser, tal como indicaban sus aventuras en México, mucho más que un imperialista clásico al estilo de 1898. Era, en efecto, precisamente el tipo de presidente contra el que George Washington había advertido. Roosevelt y sus compañeros defendían un imperialismo estadounidense inspirado en el modelo británico, que buscara el poder y la gloria por sí mismos, mediante la conquista militar y la explotación colonial. Wilson, en cambio, proporcionó un fundamento idealista al imperialismo americano, que en nuestra época se convertiría en la «misión» de «democratizar» el mundo. Fue especialmente él quien suministró las bases intelectuales de una política exterior intervencionista, apoyada en una retórica humanista y democrática. Wilson es el padrino de los ideólogos contemporáneos que justifican el poder imperial americano en términos de exportación de la democracia.

La actitud de la población hacia Alemania cambió poco a poco, lo que reflejaba la existencia de un sentimiento favorable a los británicos y la efectividad de la propaganda anglo-americana según la cual la guerra submarina de los alemanes contra los buques ingleses era «in-

civilizada». El asunto llegó a un punto decisivo el 7 de mayo de 1915, cuando un submarino alemán torpedeó el *Lusitania*, un navío de pasajeros de la línea británica Cunard, frente a las costas irlandesas. Unos 128 estadounidenses, junto a varios centenares de ciudadanos de otros países, perdieron la vida. Los alemanes alegaron que el transatlántico transportaba soldados canadienses, lo que técnicamente no era cierto (los hombres aún no se habían incorporado al ejército de Canadá), como también que el capitán del *Lusitania* había evitado deliberadamente zigzaguear, tal como prescribían las ordenanzas del almirantazgo británico. El káiser sugirió que, con esta conducta, el capitán había provocado el hundimiento de su propio buque, con el fin de enardecer a la opinión estadounidense en contra de Alemania. Los británicos llevaban a cabo un bloqueo igualmente eficaz de los puertos alemanes, pero antes de hundir los navíos que intentaban violarlo, se los detenía y se obligaba a sus pasajeros y tripulación abandonarlos. Por otro lado, el submarino alemán no había dado al *Lusitania* ningún aviso de advertencia. El secretario de Estado de Wilson, William Jennings Bryan, contrario a la guerra y al imperialismo, se sentía inclinado a una política de conciliación con Alemania y evitar la guerra. Sin embargo, el 9 de junio de 1915, Bryan dimitió y Wilson nombró en su lugar a Robert Lansing, diplomático de carrera y defensor de la entrada de Estados Unidos en la guerra, al lado de los británicos, franceses y rusos.

Wilson y Lansing continuaron negociando con Alemania durante casi dos años, con el fin de obtener el compromiso de que los barcos de pasajeros no serían atacados. Sin embargo, el 31 de enero de 1917 los alemanes declararon una política de guerra submarina ilimitada contra toda actividad marítima en puertos británicos, tanto de navíos beligerantes como neutrales; y el 3 de febrero Wilson rompió relaciones diplomáticas con ellos. Le había irritado, asimismo, enterarse de que agentes alemanes ofrecían en secreto ayuda a los revolucionarios mexicanos contra Estados Unidos. En el mensaje de guerra pronunciado en el congreso el 2 de abril de 1917, Woodrow Wilson declaró que la agresión alemana representaba una amenaza no sólo para Estados Unidos, sino para la propia humanidad. Alemania, afirmó, estaba haciendo una «guerra contra el género humano, una guerra contra todas las naciones». No satisfecho con que la derrota de Alemania bastara en sí misma para justificar la participación norteamericana,

añadió un objetivo de guerra nuevo y más ambicioso: «Hay que hacer que el mundo sea seguro para la democracia». Estados Unidos, explicó, ha de luchar «por los derechos y la libertad de las pequeñas naciones y por el dominio universal de la justicia, a través de un concierto de los pueblos libres que lleve la paz y la seguridad a todos los países y convierta al final en libre al propio mundo». De acuerdo con Wilson, éstos eran los propósitos «que siempre hemos tenido más cerca de nuestros corazones». ¹⁶ Solicitó la declaración de guerra y la obtuvo cuatro días después. Durante el año y medio que aún duró el conflicto, alrededor de 130.274 soldados norteamericanos perdieron la vida en el frente occidental.

El 8 de enero de 1918, Wilson presentó en un discurso al congreso sus famosos Catorce Puntos, con los que pretendía conseguir la paz y la reconciliación en Europa. El primer punto solicitaba «convenios abiertos acordados de forma pública». Sin embargo, en la conferencia de paz, Wilson descubrió que el Reino Unido, Francia y Japón, aliados durante la guerra, ya habían negociado una serie de tratados secretos que traspasaban a Japón parte de China, a cambio de que los japoneses reconocieran las esferas de influencia europeas en Asia. Wilson aceptó que Japón controlara parte de China para conseguir que este país permaneciera en la Sociedad de Naciones por él propuesta, pero no se percató de lo mucho que había avanzado la revolución china y de que empezaba a contar con apoyo popular. La revolución bolchevique de 1917 había despertado en muchos chinos el deseo de estudiar el marxismo-leninismo y buscar la ayuda de la Rusia soviética para la creación de partidos comunistas locales, y algo similar sucedía en las colonias europeas y estadounidenses del este asiático. Nada hacía al bolchevismo más atractivo que el miedo que parecía suscitar en todo el mundo capitalista.

No obstante, cuando Wilson rechazó la solicitud japonesa de incluir en el Tratado de Versalles un artículo que reconociera el principio de igualdad racial, los japoneses endurecieron sus posiciones y decidieron arrancar todo lo que pudieran del tratado de paz. Sin embargo, quizá lo más perjudicial para la futura paz fue el hecho de que los pueblos colonizados por británicos, franceses, holandeses y estadounidenses descubrieran que el más famoso de los Catorce Puntos de Wilson —«la autodeterminación para todos los pueblos»— se aplicaba únicamente a los imperios derrotados, el Imperio Austro-Hún-

garo y el Imperio Otomano, e incluso en esos casos, sólo a los blancos. No ofrecía la autodeterminación a los habitantes de la India británica, ni de la Indochina francesa, ni de las Indias Orientales holandesas, o de Filipinas. El secretario de Estado Lansing escribió en su diario acerca de las propuestas de Wilson sobre Europa: «Cuanto más pienso en la declaración del presidente con respecto al derecho a la autodeterminación, más me convenzo de que en la conferencia de paz se convertirá en el fundamento de exigencias imposibles; cuánta desgracia va a causar».¹⁷ Gran parte del resto del siglo xx estaría dedicada a la lucha de los pueblos colonizados por obtener, por medio de la rebelión, la insurrección urbana y la guerra de guerrillas, aquello que Wilson les había denegado en el tratado que selló el fin de la primera guerra mundial.

Esas tragedias, causadas por la soberbia y la ingenuidad, redundaron en una tragedia personal para Wilson. A su llegada a París para las negociaciones de paz, éste había declarado que: «Acabamos de terminar la guerra para acabar con todas las guerras». La Sociedad de Naciones que procuraba fundar, creía, evitaría futuras guerras al actuar contra los agresores. Sin embargo, el 19 de noviembre de 1919, y una vez más el 19 de marzo de 1920, el senado de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Henry Cabot Lodge, se negó a ratificar el Tratado de Versalles por considerar que reducía la soberanía americana; y de hecho, Estados Unidos jamás llegó a ser miembro de la Sociedad de Naciones. Hasta el secretario de Estado Lansing se opuso al tratado, y Wilson, entonces con una parálisis parcial a causa de una apoplejía, solicitó su dimisión. Los republicanos regresaron al poder en noviembre de 1920, y el nuevo presidente, Warren G. Harding, se apresuró a firmar una paz por separado con Alemania. A finales de 1920 Wilson fue finalmente galardonado con el premio Nobel de la Paz, en un gesto carente de sentido (incluso más de lo acostumbrado). El mariscal Ferdinand Foch, de Francia, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas al final de la guerra, se refirió así a la paz propuesta por Wilson en Versalles: «Esto no es un tratado de paz, es un armisticio de veinte años».¹⁸ Foch no vivió lo suficiente para comprobar lo acertado de su predicción.

Con Woodrow Wilson se establecieron con firmeza los fundamentos intelectuales del imperialismo americano. El imperialismo militarista de Theodore Roosevelt y Elihu Root era una derivación del

europeo y se respaldaba sólo en la idea de que el «destino manifiesto» de Estados Unidos era gobernar a los pueblos de Latinoamérica y el este asiático, racialmente inferiores. Wilson, en cambio, defendió su propia idea, hiperidealista, sentimentalista y ahistórica, de que lo que debía buscarse era una democracia mundial basada en el ejemplo americano y liderada por Estados Unidos. Se trataba de un proyecto político no menos ambicioso y apasionado que el de un comunismo mundial lanzado casi al mismo tiempo por los líderes de la revolución bolchevique. Como señala el experto en relaciones internacionales William Pfaff: Estados Unidos «todavía se encuentra sometido intelectualmente al megalómano y pretencioso presidente-pastor que proporcionó a la nación la blasfema convicción de que, al igual que él mismo, ella había sido creada por Dios “para enseñar a las demás naciones del mundo cómo han de caminar por los senderos de la libertad”».¹⁹

Mientras que la primera guerra mundial dio lugar a los fundamentos ideológicos del imperialismo americano, la segunda guerra mundial desencadenó su creciente militarismo. Tal como escribió el coronel de la marina James Donovan, fue entonces cuando «el espíritu marcial estadounidense pasó a primer plano».²⁰ La guerra contra Alemania y Japón contó con el respaldo popular; la opinión pública y los miembros de las fuerzas armadas sabían por qué luchaban y, comparativamente, la controversia sobre los objetivos del conflicto era poca. Aun así, el gobierno manejó con sumo cuidado la información para mantener un estado de ánimo favorable a la guerra. La publicación de fotos de soldados norteamericanos muertos en periódicos y revistas no fue permitida hasta 1943, y el Pentágono proporcionó a los periodistas un amplio asesoramiento de cómo informar sobre el conflicto.²¹

La segunda guerra mundial fue testigo de la más alta tasa de participación militar (MPR) —esto es, el porcentaje de personas en servicio— observada en cualquiera de las guerras en que ha participado Estados Unidos. Con unos 16.353.700 hombres y mujeres sirviendo en las fuerzas armadas de una población total de 133,5 millones, la segunda guerra mundial tuvo una MPR del 12,2 por 100. Sólo la supera la MPR del bando confederado durante la guerra civil, que alcanzó un 13,1 por 100; no obstante, la tasa total del conflicto fue del 11,1 por 100. Las MPR más bajas han sido las de la guerra con México (1846-1848) y las de la guerra hispano-americana, ambas de un 0,4 por 100, seguidas por la de la guerra del golfo Pérsico de 1991, que fue de un

1,1 por 100.²² (Sin embargo, esa última cifra no es fiable, puesto que durante la guerra del Golfo un número significativo de las fuerzas no entraron en combate y muchas ni siquiera estuvieron en la región del Golfo, sino que sirvieron en los innumerables buques y cuarteles de Estados Unidos repartidos por todo el mundo.)

La segunda guerra mundial produjo un país de veteranos orgullosos de lo que habían conseguido y respetuosos hacia sus líderes militares, aunque no confiaran totalmente en ellos, que apoyaba de forma casi unánime el uso de bombas atómicas que había logrado poner fin a la guerra con semejante rapidez. El presidente Franklin Roosevelt desempeñó el papel de comandante supremo como ningún presidente lo había hecho antes. En una ocasión, envió un memorando al secretario de Estado Cordell Hull en el que le decía: «Por favor, diríjase a mí como Comandante en Jefe, no como presidente».²³ El congreso no impuso a Roosevelt un Comité Conjunto para la Conducción de la Guerra, como había hecho con el presidente Lincoln durante la guerra civil, e instituciones militares como el Estado Mayor Conjunto todavía eran organizaciones informales y carentes de supervisión, creadas por el ejecutivo y que sólo respondían ante él. Como escribió el coronel Donovan: «Una vez acordada la política de guerra ilimitada, el congreso abdicaba con satisfacción de su responsabilidad de controlar el estamento militar. ... Determinados líderes militares consideraban que el control civil de las fuerzas armadas constituía una reliquia del pasado que no tenía lugar en el futuro».²⁴

El más ilustre de los militaristas estadounidenses de la segunda guerra mundial, el general Douglas MacArthur, desafió la autoridad constitucional del presidente Harry Truman durante la guerra de Corea al escribir que «un concepto nuevo y peligroso, y hasta ahora desconocido, es el de que los miembros de nuestras fuerzas armadas deban obediencia y lealtad en primer lugar a quienes ejercen de forma temporal la autoridad del poder ejecutivo, más que al país y la Constitución que han jurado defender. Ninguna otra afirmación resulta más peligrosa».²⁵ El 11 de abril de 1951, Truman acusó a MacArthur de insubordinación, lo destituyó y le obligó a retirarse. Ésta fue, probablemente, la última reafirmación memorable del principio constitucional según el cual el presidente y los civiles designados por él controlan a los militares. Durante las presidencias de John F. Kennedy y de Bill Clinton, en particular, el alto mando se mostró con frecuencia

públicamente inquieto respecto a las cualidades del comandante en jefe, y estuvo cerca de cruzar la frontera de lo constitucional sin llegar a hacerlo. Como veremos, durante la administración Kennedy, el Estado Mayor Conjunto llegó a proponer que los militares llevaran a cabo una serie de atentados terroristas en Estados Unidos para utilizarlos como pretexto para una guerra con Cuba; por otro lado, después del acalorado debate sobre los homosexuales en el ejército que tuvo lugar al comienzo de su gobierno, la autoridad del presidente Clinton sobre el alto mando se vio seriamente afectada y éste nunca logró recuperarla por completo.

Después de la segunda guerra mundial los militares de alta graduación, incluidos los generales Marshall y Eisenhower, pasaron a ocupar posiciones clave en la jerarquía civil del poder político, de un modo sin precedentes desde la guerra civil. George C. Marshall, el jefe del estado mayor durante la guerra, se convirtió en el primer secretario de Estado del país proveniente del estamento militar. (Desde entonces, sólo ha habido otros dos casos: el del general Alexander Haig, durante la administración Reagan, y el del general Colin Powell, durante el gobierno de George W. Bush.) Resulta paradójico que el general Marshall haya dado su nombre al que probablemente sea el mayor fracaso de la política exterior estadounidense, la Misión Marshall, de 1946, el intentó de mediar entre comunistas y nacionalistas durante la guerra civil china, así como a su mayor éxito, el Plan Marshall, de 1947, que ayudó económicamente a la reconstrucción de la Europa de la posguerra.

Con todo, aunque la segunda guerra mundial haya recibido el apoyo popular, no fue ella la que creó el militarismo americano, y si no hubiera sido seguida por la guerra fría, hay razones para creer que la tradicional oposición estadounidense a los ejércitos permanentes y las guerras en el exterior habría logrado reafirmarse con fuerza. De hecho, si bien es cierto que existe una tendencia creciente hacia el militarismo, también lo es que todavía subsiste una corriente de profunda sospecha hacia el ejército. Los militares se desmovilizaron casi por completo en los años inmediatamente posteriores a 1945, a pesar de que la llamada a filas se mantuvo hasta 1973, cuando se creó un ejército totalmente voluntario tras casi una década de protestas contra la guerra de Vietnam. A nivel práctico, la opinión pública se ha mostrado ambivalente hacia las guerras a causa de las muertes que ocasiona

nan. Y la segunda guerra mundial produjo el segundo mayor número de bajas de todas las guerras estadounidenses.

La guerra civil, con diferencia el conflicto más sangriento de nuestra historia, afectó profundamente la actitud de la opinión pública y generó en el pueblo norteamericano una gran resistencia a enviar a sus hijos e hijas al frente. El número de muertos en combate de ambos bandos durante la guerra civil fue de 184.594, una cifra considerablemente menor que la de americanos muertos en la segunda guerra mundial, que asciende a 292.131. No obstante, cuando a los muertos en combate de la guerra civil se añaden las 373.458 defunciones ocurridas por otras causas —enfermedades, privaciones, accidentes e incluso las muertes entre prisioneros de guerra—, el número total de fallecimientos en esa conflagración es de 558.052. Las cifras, para la segunda guerra mundial, que contó con 115.185 muertes por otras causas, totalizan 407.316 decesos.²⁶

La segunda guerra mundial no fue tan sangrienta como la guerra civil, excepto en un aspecto muy importante, el de la intensidad del combate, que se mide calculando el número de soldados muertos *por mes*.* La guerra civil duró 48 meses y costó 3.846 muertos al mes, mientras que la segunda guerra mundial duró 44 meses (en el caso de Estados Unidos) y costó 6.639 muertos al mes. Es la intensidad del combate lo que los norteamericanos recuerdan de la segunda guerra mundial. Fue esto lo que los hizo escépticos respecto a futuras guerras, en especial aquellas en las que no existiera amenaza inmediata para Estados Unidos o el país no hubiera sido atacado. El legado de la segunda guerra mundial para el desarrollo del militarismo fue, por consiguiente, ambiguo. Por un lado, en el esfuerzo bélico participaron más norteamericanos y con mayor entusiasmo que en cualquier otro conflicto, con lo que el escepticismo tradicional hacia el valor de la guerra parecía haber acabado. Por otro lado, el país se desmovilizó

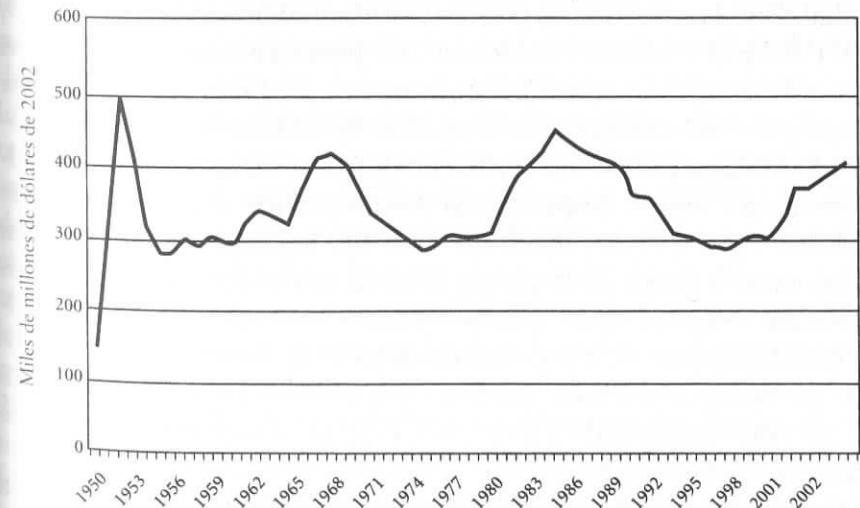
* Durante la guerra civil, el número de hombres y mujeres muertos en combate en ambos bandos asciende al 4,8 por 100 de la población en servicio, mientras que en la segunda guerra mundial sólo falleció el 1,8 por 100. Los fallecidos por todas las causas durante la guerra civil constituyeron el 14,4 por 100; en la segunda guerra mundial la cifra se reduce a apenas el 2,5 por 100. El porcentaje de bajas, tanto por muerte como por heridas, fue de 25,1 por 100 durante la guerra civil, pero sólo de 6,6 por 100 durante la segunda guerra mundial. (N. del a.)

con rapidez al terminar el conflicto y las personas regresaron a sus ocupaciones normales en tiempos de paz.

En los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial, la gran maquinaria de producción militar se detuvo de súbito, lo que ocasionó despidos y el cierre de industrias. Algunos fabricantes de aeronaves probaron a construir canoas de aluminio y caravanas, mientras que otros sencillamente dejaron el negocio. No obstante, con el inicio de la guerra fría y el aumento de los militares profesionales, pronto se restablecieron muchas de las normas características de las épocas de guerra, y la industria armamentística entró en plena producción. Entre 1950 y 2003, Estados Unidos experimentó cuatro períodos de intensa movilización militar, acompañados de grandes incrementos en la compra de armamento (véase el gráfico).

El primer y más significativo repunte de las compras de armamento tuvo lugar durante la guerra de Corea (1950-1953), aunque sólo una parte de éstas se destinó a armas para combatir en ella. La mayor parte del dinero fue a parar al desarrollo de armas nucleares y al abastecimiento de las gigantescas guarniciones de la guerra fría, que

Gráfica de los presupuestos del Departamento de Defensa, 1950-2002



Fuente: Michael E. O'Hanlon, «Limiting the Growth of the U.S. Defense Budget», Bookings Institution, *Police Brief*, n.º 95, marzo de 2002. Autorizada la reproducción.

se estaban construyendo entonces en el Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Corea del Sur. El gasto en defensa se elevó de unos 150.000 millones de dólares en 1950, calculados según el poder adquisitivo de 2002, a casi 500.000 millones en 1953. El segundo gran aumento financió la guerra de Vietnam. El gasto de defensa en 1968 sobrepasó los 400.000 millones, en dólares de 2002. El tercer incremento significativo se debió al derroche de Ronald Reagan, e incluyó enormes inversiones en sistemas como el bombardero silencioso B-2 y en investigaciones de alta tecnología para el desarrollo de su iniciativa de defensa estratégica, fondos que en gran parte se ocultaron en el «presupuesto negro» del Pentágono. En 1989 los gastos alcanzaron los 450.000 millones de dólares. El último atracón de nuevos armamentos, en parte alimentado por la reacción popular ante los atentados del 11 de septiembre, lo dirigió la segunda administración Bush. El 14 de marzo de 2002, la cámara de representantes aprobó un presupuesto militar de 393.800 millones de dólares, el mayor aumentó en el gasto de defensa en casi veinte años.²⁷

Sin embargo, lo ocurrido con el presupuesto militar entre un gran incremento y otro no es menos significativo. En ningún momento entre 1955 y 2002 el presupuesto de defensa regresó a los niveles anteriores a la guerra fría, y menos aún a los anteriores a la segunda guerra mundial. Por el contrario, los períodos comprendidos entre 1955-1965, 1974-1980 y 1995-2000 establecieron la pauta de la guerra fría de los gastos militares en la época del militarismo. El gasto real en defensa durante esos años alcanzó un promedio de 281.000 millones de dólares (de 2002) anuales. Los gastos en defensa, incluso durante la administración Clinton, después de la desintegración de la Unión Soviética, fueron por término medio de 278.000 millones de dólares, casi exactamente la pauta de la guerra fría. La reiterada acusación de los republicanos según la cual Clinton recortó los gastos militares es falsa. Tras el aumento de los gastos de defensa de Reagan, quien arruinó de tal modo las finanzas públicas que Estados Unidos se convirtió en el país más endeudado del mundo, Clinton sencillamente dejó que los gastos militares regresaran al que ya era su nivel normal.

Desde la guerra de Corea hasta los primeros años del siglo XXI, la institucionalización de estos inmensos desembolsos para defensa alteró de manera fundamental la economía política de Estados Unidos. Los asombrosos niveles del gasto en defensa se convirtieron en una ca-

racterística normal de la vida «civil», y todos los miembros del congreso, sin importar su orientación política, procuraron llevarse los contratos de defensa a sus respectivos distritos electorales. Regiones como el sur de California pasaron a depender de los desembolsos para defensa, y las recesiones y cierres durante los años de gasto «normal» se han transformado en una característica corriente de la economía californiana. En septiembre de 2002 se calculó que el Pentágono había encauzado cerca de una cuarta parte de sus fondos para investigación y desarrollo hacia empresas californianas, que empleaban, de lejos, el mayor número de trabajadores en defensa de todos los estados. El cálculo, sin embargo, no es completo y la cifra real debe ser sin duda más alta, puesto que muchas empresas del sur de California, como Northrop-Grumman en Century City, TRW en Redondo Beach, Lockheed Martin en Palmdale y Raytheon en El Segundo, están implicadas en programas militares secretos con presupuestos también secretos.²⁸

Actualmente, los estadounidenses están acostumbrados a que sus líderes digan o hagan cualquier cosa con tal de impulsar el gasto militar local. Por ejemplo, las senadoras demócratas por el estado de Washington, Patty Murray y Maria Cantwell, así como el senador republicano por Alaska, Ted Stevens, votaron a favor de que se incluyera en el presupuesto de defensa del año fiscal 2003 cerca de treinta mil millones de dólares para arrendar aviones Boeing 767 y modificarlos para ser utilizados como tanques aéreos para que los cazabombarderos reposten en vuelo. Este proyecto no aparecía ni siquiera entre los sesenta planes prioritarios de la fuerza aérea, y ésta no tenía intención de llevarlo a cabo en los siguientes seis años. Además, la ley aprobada proporcionaba los fondos para que, al término del arrendamiento, la fuerza aérea pagara la readaptación de los aviones al uso civil antes de devolverlos a Boeing. «Es cuestión de interés nacional ... mantener en forma a nuestro único fabricante de aeronaves comerciales en tiempos difíciles», comentó Murray.²⁹ Boeing, por supuesto, construye sus aviones en fábricas situadas en el estado de Washington. En 2000, el senador Stevens, un influyente miembro del Comité de Asignaciones del senado, así como del Subcomité de Asignaciones de Defensa, recibió de Boeing una donación de diez mil dólares para su campaña de reelección y otra de mil dólares para su comité de acción política; en 2001, Boeing le dio tres mil dólares adicionales. A Dennis Hastert, el presidente de la cámara de representantes, le gustaron tan-

to esas asignaciones que añadió fondos para el arrendamiento de cuatro nuevos aviones Boeing 737 para los viajes de placer de los congresistas. La evidente indiferencia hacia cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes en formas que bordean la corrupción ya no llama la atención. Se ha transformado en una característica habitual de la política.

El complejo militar-industrial se ha convertido, asimismo, en una rica fuente de puestos de «retiro» para oficiales de alto rango, del mismo modo que muchos ejecutivos de las contratas de defensa son nombrados altos funcionarios del Pentágono. Esta «circulación de las élites» tiende a minar los intentos del congreso de supervisar ya sea al Departamento de Defensa o a sus contratistas. El resultado es que la capacidad de exigir responsabilidades por el dinero público empleado en todo tipo de proyectos militares se ha perdido casi por completo. Tal como señaló la periodista Kelly O'Meara en la revista *Insight*, en mayo de 2001 el subinspector general del Pentágono «admitió que para conseguir el estado contable deseado fue necesario amañar los libros del Pentágono para hacer ajustes por 4,4 billones de dólares, y que 1,1 billones ... sencillamente habían desaparecido, y nadie está seguro de cuándo había ocurrido y a dónde o a quién había ido a parar ese dinero». ³⁰ Esta cifra supera con creces los 855.000 millones de dólares que los estadounidenses pagaron en concepto de impuestos sobre la renta en el año fiscal 1999. El hecho de que a nadie parezca importar-le esto es otra muestra del avance del militarismo.

Existen tres indicadores que acostumbra a señalar la aparición del militarismo. El primero es el surgimiento de una clase de militares profesionales y la posterior glorificación de sus ideales. El profesionalismo se convirtió en una salida durante la guerra de Corea (1950-1953); su objetivo es crear soldados que luchan única y exclusivamente porque se les ha ordenado, y no necesariamente porque sientan una identificación con, o interés por, los fines políticos de la guerra. Durante la segunda guerra mundial, Estados Unidos luchó contra dos enemigos, la Alemania nazi y el Japón militarista, que, con la ayuda de la propaganda gubernamental, pudieron ser presentados como verdaderamente malvados. ³¹

Estados Unidos hizo todo lo que pudo para presentar a los norcoreanos y, en especial, a los comunistas chinos, que entraron en la guerra a finales de 1950, como «hordas amarillas» y «hormigas azules»,

pese a lo cual, como tan bien lo describe James Michener en su novela *Los puentes de Toko-Ri* (1953), el pueblo americano se implicó emocionalmente mucho menos que durante la segunda guerra mundial. Dada la disminución del apoyo popular, el alto mando militar decidió entonces centrarse en inculcar valores marciales a las tropas, lo que se convirtió en la meta más importante de la instrucción militar, por encima incluso del entrenamiento en el uso de las armas. Esos valores incluían la lealtad, el *esprit de corps*, la tradición, la disciplina y la acción: en términos generales, el mundo según John Wayne. Y dado que los reclutas constituían la mayoría del ejército todavía civil de esa época, era mucho lo que había por hacer. Los combatientes veteranos de la segunda guerra mundial tendían a criticar a Wayne por el machismo estilo Hollywood del que hacía gala en películas como *Fighting Seabees* (1944). William Manchester, biógrafo del general Douglas MacArthur y veterano de la guerra del Pacífico, recuerda cómo, poco después de la batalla de Okinawa, los soldados e infantes de marina heridos abuchearon al actor, que no había prestado el servicio militar, cuando apareció en el teatro del Hospital Naval de Aiea Heights, en Hawái, luciendo sombrero tejano, pañuelo, camisa a cuadros, pistolas, zahones, botas y espuelas. ³²

El tipo de profesionalismo que tenían en mente los líderes militares nunca llegó a hacerse realidad durante la guerra de Corea y tampoco, de hecho, durante la de Vietnam, principalmente porque los hombres que luchaban eran en su mayoría reclutas. Las injusticias del alistamiento, así como el elevado número de bajas entre quienes no consiguieron evitar el servicio militar, acabaron con gran parte del orgullo que antes producía el pertenecer a las fuerzas armadas. Los oficiales lo comprendieron, y se dedicaron, ante todo, a progresar en sus propias carreras y a «hacer puntos». Durante los años de la guerra de Vietnam, en especial, los militares comenzaron a agilizar las rotaciones en las zonas de combate con el fin de evitar el descontento e, incluso, los motines. Corea y Vietnam no rozaron siquiera las cifras de bajas de la segunda guerra mundial, sin embargo, dado que nuestros soldados eran en su mayor parte civiles y no comprendían el propósito de esos conflictos, tanto ellos como sus familias se mostraron muchas veces descontentos y profundamente en contra de estas guerras.

La guerra de Corea tuvo una tasa de participación militar del 3,8 por 100; la de Vietnam, del 4,3 por 100. En Corea murieron 33.651 es-

tadounidenses; en Vietnam, 47.369. Se desconoce el número de fallecidos fuera del campo de batalla en Corea; en Vietnam, alcanzan los 10.799. Unos 2,7 millones de norteamericanos sirvieron en este último país, de ellos 304.000 fueron heridos en combate y más de 75.000 quedaron incapacitados de forma permanente por sus heridas. En el Día de los Caídos de 1996, había 58.202 nombres inscritos en el Monumento a los Caídos en la guerra de Vietnam de Washington, DC. Aproximadamente 1.300 hombres siguen constando como desaparecidos en combate.³³ Ambas guerras fueron sumamente impopulares, y en tres ocasiones la presidencia del país fue ganada por candidatos que habían prometido poner fin a alguno de los dos conflictos: Eisenhower en la época de Corea y Johnson y Nixon en la de Vietnam (estos dos últimos, sin embargo, incrementaron la participación estadounidense en la guerra una vez elegidos).

Cuando se hizo evidente durante la guerra de Vietnam que el reclutamiento militar estaba siendo realizado de manera injusta —mientras los estudiantes universitarios estaban exentos, el peso del servicio militar obligatorio recaía de forma desproporcionada sobre las minorías y sobre aquellos que no contaban con medios suficientes para evitarlo—, el gobierno optó por abolirlo, en lugar de buscar una forma equitativa de llevarlo a cabo. Desde entonces, el servicio en las fuerzas armadas es enteramente voluntario y se ha convertido en una forma de movilidad social para quienes están vedados otros canales de ascenso, de modo muy parecido a lo que ocurrió con el ejército imperial japonés durante la década de 1930, cuando los habitantes de las ciudades podían obtener permisos para aplazar su alistamiento «por razones de salud» y el servicio militar era considerado una forma de salir del campo empobrecido. En 1997, el 41 por 100 del personal alistado en el ejército de Estados Unidos no pertenecía a la raza blanca (un asunto sobre el que volveremos más adelante).

Además de acabar con el reclutamiento obligatorio y convertir así a las fuerzas armadas en un ejército estrictamente «profesional», Vietnam contribuyó al avance del militarismo (en contra de lo que el sentido común sugeriría) precisamente porque Estados Unidos perdió la guerra. Esa derrota, que provocó una profunda desilusión en las élites políticas estadounidenses, inició un debate nunca finalizado acerca de las «lecciones» que era necesario extraer de ella.³⁴ Para una extrema derecha que hacía poco había comenzado a ganar terreno, Vietnam se

convirtió en una guerra justa que la izquierda no había tenido la voluntad o el valor de ganar. Creyeran o no de verdad en ello, los líderes políticos de la derecha llegaron a algunas conclusiones bastante concretas. Como señala Christian Appy: «Para Reagan y Bush [entonces vicepresidente del primero], la principal enseñanza de Vietnam no fue que la política exterior debía ser más democrática, sino todo lo contrario: ésta tenía que convertirse todavía más en feudo de los encargados de la seguridad nacional, que podían actuar sin ser vigilados de cerca por los medios de comunicación, libres de la supervisión del congreso o de tener que responder ante la opinión pública».³⁵ El resultado ha sido la aparición de una camarilla de militaristas profesionales que clasifican todo lo que hacen como secreto y que han sido nombrados para desempeñar altos cargos del poder ejecutivo.

No todos estos militaristas visten uniforme. El historiador Alfred Vagts define el «militarismo civil» como «la interferencia e intervención de líderes civiles en ámbitos que, por costumbre y tradición, pertenecen a los profesionales». Sus efectos son, con frecuencia, todo excepto positivos. En general, el militarismo civil conduce «a un incremento de los horrores de la guerra. [En la segunda guerra mundial, por ejemplo] los civiles no sólo ... esperaban la guerra con más entusiasmo que los profesionales, sino que desempeñaron un importante papel en hacer que el combate, una vez iniciado, fuera más absoluto y terrible de lo que tienen por costumbre o hábito los militares».³⁶ Los civiles están más impulsados por la ideología que los militares profesionales, y cuando trabajan con éstos a menudo sienten la necesidad de exhibir una cultura guerrera que, con frecuencia y dado su desconocimiento de lo que realmente ocurre en el campo de batalla, creen asociada a una crueldad de hierro. Esto se hizo notar de un modo especial en la segunda guerra de Irak, en 2003, cuando muchos civiles ideológicamente comprometidos pertenecientes al Departamento de Defensa y que carecían de experiencia en el servicio militar, por no hablar de la guerra, dictaron las estrategias, la intensidad de los ataques y los objetivos de la conflagración a generales y almirantes. Los oficiales de alto rango, con más edad y verdadera experiencia, los llamaban los «halcones gallinas».³⁷ El destacado papel de los militaristas civiles fue una consecuencia no buscada de la guerra de Vietnam.

Durante esta guerra, el Estado Mayor Conjunto (JCS) se opuso con frecuencia a las decisiones del presidente Lyndon Johnson. Los mili-

tares deseaban una guerra más amplia que el presidente, incluso advirtiendo el riesgo de desencadenar con ello una guerra nuclear con China. Como explica H. R. McMaster, historiador del JCS: «El presidente y [el secretario de Defensa Robert] McNamara trasladaron la responsabilidad del planeamiento real del JCS a comités ad hoc, compuestos sobre todo por analistas y abogados civiles, cuyo principal objetivo era lograr un consenso acorde con la búsqueda, impulsada por el presidente, de un camino intermediario entre la retirada y la guerra. ... A medida que los estadounidenses se involucraban cada vez más en el conflicto, la vulnerabilidad de Johnson ante los altos oficiales descontentos se incrementó, puesto que el presidente estaba engañando deliberadamente al congreso y al público sobre la naturaleza del esfuerzo bélico en Vietnam».³⁸

La antigua e institucionalizada división entre funcionarios elegidos y militares profesionales, en la que los segundos aconsejaban a los primeros y después ejecutaban sus políticas, se desmoronó y nunca volvió a ser reconstruida. Durante la administración Reagan, una serie siempre creciente de estrategias aficionados y entusiastas de la «guerra de las galaxias» ocupó la Casa Blanca y procuró colocar a sus aliados en puestos de autoridad en el Pentágono. El resultado de ello fue el desarrollo de una especie de oportunismo militar en el corazón del gobierno, con los militares dedicados a cortejar los proyectos favoritos de unos políticos inexpertos a prepararse para asumir tras su retiro lucrativos cargos en la industria armamentística o en los *think tanks* dedicados a asuntos militares. Importantes líderes militares empezaron a decir lo que pensaban que sus superiores políticos querían oír, mientras protegían de forma solapada los intereses de sus propios cuerpos, o de sus pequeños feudos dentro de ellos.³⁹ Las fuerzas militares se transformaron progresivamente en un gigantesco cártel, que actuaba para beneficiar a los cuatro cuerpos principales —el ejército, la marina, la infantería de marina y la fuerza aérea— de forma análoga a como la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) actúa en beneficio de sus miembros. Las partidas del presupuesto de defensa para cada cuerpo no han variado en más de un 2 por 100 a lo largo de los últimos veinticinco años; durante ese período la Unión Soviética se desintegró y Estados Unidos libró guerras bastante diferentes entre sí en Panamá, Kuwait, Haití, Somalia, Bosnia, Kosovo, Afganistán e Irak. Las necesidades militares no eran entonces las que dictaban esa estabilidad del presupuesto.

Durante la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, los «lobistas» y representantes de los grupos que deseaban enfrentarse a países que, como China, podrían suponer en el futuro un desafío a la hegemonía americana se encargaron de diseñar prácticamente toda las directrices político-militares.⁴⁰ Con frecuencia, procuraron purgar el gobierno de aquellos expertos que pudieran obstaculizar sus metas, y la influencia del Departamento de Estado se redujo de forma significativa. Por ejemplo, Kurt M. Campbell, secretario adjunto de Defensa para el este asiático y el Pacífico durante el gobierno Clinton, señala con aprobación que la política hacia China ha sido asumida de forma progresiva por una nueva «clase estratégica», un conjunto de académicos, analistas y estadistas cuyas ideas contribuyen a definir los intereses nacionales». Campbell sostiene que es probable que esta nueva cosecha de expertos militares, de la que él es miembro fundador civil, no sepa mucho sobre China, pero que en cambio posee «una formación en estudios estratégicos o relaciones internacionales» y está particularmente atenta a «indicios de la capacidad de China para convertirse en una amenaza».⁴¹ En política exterior, esta actitud no es propia de estadistas prudentes, pero sí de militaristas.

La segunda característica política del militarismo es la preponderancia de los oficiales militares y los representantes de la industria armamentística en altos cargos gubernamentales. En 2001, el gobierno de George W. Bush ocupó gran parte de los principales puestos diplomáticos estadounidenses con militares o militaristas, entre los que se incluyen el secretario de Estado, el general Colin Powell, antiguo presidente del Estado Mayor Conjunto, y el subsecretario de Estado, Richard Armitage, subsecretario de Defensa durante la administración Reagan. En el Pentágono, el presidente Bush nombró a Peter B. Teets, ex presidente y director operativo de la empresa Lockheed Martin, como subsecretario de la fuerza aérea; al anterior brigadier general y ejecutivo de la empresa Enron, Thomas E. White, como secretario del ejército (dimitió en abril de 2003); a Gordon England, vicepresidente de General Dynamics, como secretario de la marina, y a James Roche, ejecutivo de Northrop Grumman y brigadier general retirado, como secretario de la fuerza aérea.⁴² Es importante resaltar que Lockheed Martin es el mayor fabricante de armas del mundo, y que vendió 17.930 millones de dólares en material militar en 1999. El 26 de octubre de 2001, el Pentágono otorgó a Lockheed Martin un contrato

de 200.000 millones, el mayor contrato militar de nuestra historia, para que construyera el F-35 Joint Strike Fighter, un cazabombardero que, posiblemente, habría sido útil durante la guerra fría, pero que resulta irrelevante para los probables problemas militares del siglo XXI.

Richard Gardner, ex embajador en España e Italia, calcula que Estados Unidos gasta más en prepararse para la guerra que en tratar de prevenirla, en una proporción de, al menos, dieciséis a uno.⁴³ Durante la década de 1990, Estados Unidos incumplió notoriamente el pago de sus cuotas a Naciones Unidas, y fue responsable de al menos 490 millones de dólares en atrasos a varios bancos multilaterales de desarrollo. Por el contrario, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos iba camino de contar con un presupuesto de defensa de más de 400.000 millones de dólares al año.

La tercera característica del militarismo es su devoción por políticas en las que la preparación militar se transforma en la más alta prioridad del estado. En su discurso de investidura, el presidente George W. Bush dijo: «Construiremos nuestras defensas de modo que resulten imposibles de desafiar, para que la debilidad no invite al desafío. Nos enfrentaremos a las armas de destrucción masiva, de modo que el nuevo siglo esté libre de nuevos horrores». Sin embargo, ningún país tiene la capacidad para desafiar militarmente a Estados Unidos. Mientras el presidente hablaba, el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) preparaba la edición de 2001 de su anuario. La publicación evidencia que el gasto militar global ascendió a 798.000 millones en 2000, un aumento del 3,1 por 100 con relación al año anterior. Estados Unidos era responsable del 37 por 100 de ese total, de lejos la mayor proporción. Actuó, asimismo, como el mayor vendedor de armas del mundo, al responder del 47 por 100 de todos los intercambios de armamento entre 1996 y 2000. El país, por consiguiente, ya se encontraba bien preparado para la guerra cuando el joven Bush tomó posesión de su cargo. Dado que su gobierno se ha dedicado a incrementar aún más la capacidad militar norteamericana —una señal de militarismo, más que de preparación militar—, ha debido inventarse nuevas amenazas con el fin de convencer al pueblo de que ese incremento es necesario. En muchos sentidos, los atentados terroristas del 11 de septiembre cayeron como maná del cielo sobre un gobierno decidido a elevar los presupuestos militares.

A principios del siglo XXI, el arsenal nuclear de Estados Unidos comprendía 5.400 ojivas de varios megatonnes montadas en misiles balísticos intercontinentales ubicados en tierra firme y en alta mar; además, cuenta con 1.750 bombas nucleares y misiles de crucero listos para ser lanzados desde los cazabombarderos B-2 y B-52, y con 1.670 armas nucleares adicionales, clasificadas como «tácticas». Otras 10.000 ojivas nucleares, no completamente desplegadas, pero disponibles en caso de ser necesarias, se encuentran almacenadas en búnkeres a lo largo de Estados Unidos.⁴⁴ Cualquiera pensaría que semejante arsenal constituye una preparación más que suficiente para disuadir a los tres débiles países que el presidente identificó a comienzos de 2002 como principales adversarios en potencia de Estados Unidos (dos de los cuales, Irán y Corea del Norte, han estado intentando, sin éxito, construir unas relaciones algo más amistosas con Estados Unidos). La asombrosa capacidad de destrucción del arsenal nuclear norteamericano, su potencial para destruir por completo el planeta varias veces y la ausencia de cualquier conexión racional entre los medios y los fines nucleares son otra prueba de la llegada al poder de la mentalidad militarista.

No fue una única guerra o acontecimiento lo que generó el militarismo americano. Éste surgió, más bien, de las diversas experiencias de los ciudadanos estadounidenses en las fuerzas armadas, de las ideas sobre la guerra a medida que se pasaba de una guerra a otra y del crecimiento de una gigantesca industria armamentística. El teórico de las relaciones internacionales Ronald Steel señaló esto durante la fase más álgida de la guerra de Vietnam: «Pensamos que tenemos la responsabilidad de defender del comunismo a todos los países del mundo. Ésta no constituye una ambición imperial, y sin embargo ha llevado a nuestro país a emplear métodos imperiales: a establecer guarniciones militares por todo el planeta, a conceder subsidios a políticos y gobiernos clientes, a aplicar sanciones económicas e incluso la fuerza militar contra los estados recalcitrantes, y a utilizar un auténtico ejército de administradores coloniales en organizaciones como el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Información de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia. Al habernos acostumbrado a nuestro imperio y descubrir que nos resultaba agradable, hemos pasado a dar por supuestas sus instituciones y premisas. En efecto, ésta es la característica de un poder imperial con-

vencido: sus defensores no cuestionan nunca las virtudes del imperio, aunque puedan discutir el modo como se administra, y no dudan ni por un instante de que es por el bien de aquellos a quien domina». ⁴⁵

La utilización habitual de métodos imperiales a lo largo de cuarenta años se convirtió en adictiva. Al final, transformó en militarista el estamento de defensa, y aumentó enormemente el tamaño de las fuerzas militares y su influencia en la vida política y económica de la nación.

3

Hacia una nueva Roma

Es el viejo sueño de siempre: dominar el mundo.

Ian Fleming, Doctor No (1958).

EN LA TRADICIÓN POLÍTICA ESTADOUNIDENSE, la palabra «imperio» ha sido por lo general un término deshonroso. El presidente Ronald Reagan, como es sabido, la utilizó para demonizar a la Unión Soviética, a la que denominó el «imperio del mal». No obstante, desde el fin de la guerra fría y, en especial, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la noción de imperio ha ganado cierto atractivo en Estados Unidos. Andrew Bacevich, profesor de relaciones internacionales, describe el cambio del siguiente modo: «En toda la vida pública norteamericana, prácticamente no existe [hoy] ninguna figura de importancia a la que le parezca mal que Estados Unidos continúe siendo la única superpotencia militar del mundo hasta el fin de los tiempos». ¹ Desde el jingoísmo que animó la guerra hispano-americana, no había habido nunca tantos estadounidenses que aprobaran el imperialismo y defendieran abiertamente que se abandone hasta la apariencia misma de una política exterior democrática y constitucional. Hoy, como entonces, los imperialistas se dividen en dos grupos: aquellos que defienden que Estados Unidos domine el mundo de forma unilateral y sin restricciones (una posición en ocasiones formulada en términos de seguir los pasos del Imperio Británico), y los que preconizan un imperialismo dedicado a objetivos «humanitarios».

Charles Krauthammer, el conocido columnista del *Washington Post*, es un típico representante del primer grupo. Tras los atentados terro-

ristas de 2001, celebró el «éxito» del bombardeo estadounidense sobre Afganistán con un artículo titulado «La victoria lo cambia todo». En él escribió: «La verdad elemental, que los expertos parecen eludir una y otra vez —la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la próxima guerra— es que el poder es su propia recompensa. La victoria lo cambia todo, principalmente desde el punto de vista psicológico. Hoy, la psicología de la región [Asia central] es la del temor y el respeto profundo hacia el poderío americano. Ahora es el momento de utilizarlo para disuadir, derrotar o destruir a los demás regímenes que en esta área dan abrigo al terrorismo islámico radical». ² Incluso seis meses antes de que el presidente declarara la «guerra contra terrorismo», Krauthammer afirmó: «Estados Unidos no es un simple ciudadano internacional. Es la potencia dominante del mundo, más que cualquiera desde Roma. Por consiguiente, Estados Unidos está en posición de modificar las normas, alterar las expectativas y crear nuevas realidades. ¿Cómo? Por medio de la demostración implacable y orgullosa de voluntad». ³

Entre los analistas políticos, muchos están de acuerdo con Krauthammer. Robert D. Kaplan cree que Estados Unidos tiene que asumir el papel de sucesor del Imperio Británico, pero que debe hacerlo en secreto y no abiertamente. «Los medios encubiertos son más discretos y baratos que la guerra declarada y la movilización a gran escala. ... Cada vez habrá menos tiempo para consultas democráticas, bien sea en el congreso o en las Naciones Unidas.» ⁴ Walter Russell Mead, del Consejo de Relaciones Exteriores, considera que Estados Unidos es «el giroscopio del orden mundial», y teme que si se permite al pueblo norteamericano seguir sus propias preferencias tras la guerra fría, éste se desmovilice como hizo en el pasado y el país regrese a las reglas constitucionales consagradas por el tiempo, y, con ellas, a los límites al poder ejecutivo. Para impedir que esto ocurra, Mead defiende el imperialismo manifiesto, con el fin de llenar el vacío dejado por la guerra fría. ⁵

A pocos de esos escritores les agrada extenderse para comentar, en concreto, qué ha hecho Estados Unidos en el pasado y qué habría de hacer en el futuro para mantener su imperio. Desde que a finales de la década de 1940 convertimos a Japón y Corea del Sur en nuestros satélites políticos, Estados Unidos ha pagado a sus regímenes clientes, tanto de forma directa como a través de arreglos comerciales, para conseguir que permanezcan dóciles y leales. Hemos enseñado terrorismo de estado a miles de militares y oficiales de policía latinoamericanos

en la Escuela de las Américas, en Forte Benning, Georgia. Hemos utilizado la Agencia Central de Inteligencia y el Fondo Monetario Internacional para producir «cambios de régimen» por medio de golpes de estado, asesinatos o desestabilización económica, y hemos bombardeado e invadido países que rompieron abiertamente nuestra hegemonía o se opusieron a ella. Estas operaciones de la guerra fría tuvieron elevados costes civiles. Para poner sólo un ejemplo, los militaristas a los que Estados Unidos ayudó a conseguir el poder en Indonesia en 1965 asesinaron al menos a medio millón de sus compatriotas, a quienes acusaban de respaldar al Partido Comunista. Nuestra embajada proporcionó al ejército indonesio listas de las personas que, consideraba, debían ser ejecutadas. ⁶

En América Latina, Estados Unidos aplicó una política que era reflejo exacto de la antigua «doctrina Breznev» de la URSS, que defendía la intervención de sus fuerzas militares en cualquier país socialista que intentara salirse del bloque soviético, como ocurrió con Checoslovaquia en 1968. El 20 de diciembre de 1989, George H. W. Bush envió a Panamá 26.000 efectivos, entre los que se incluían miembros de los Navy SEAL, los Army Rangers y la 82.ª División Aerotransportada, con el fin de derrocar a Manuel Noriega, un antiguo aliado y agente de la CIA que había dejado de acatar las órdenes de Washington. Durante el bombardeo de Ciudad de Panamá, los militares estadounidenses acabaron con la vida de entre tres mil y cuatro mil civiles panameños. (Se desconoce el total exacto, y nadie en Estados Unidos se ha molestado en averiguarlo.) Testigos presenciales y varios grupos humanitarios independientes han señalado que en el transcurso de la invasión se cometieron atrocidades de forma generalizada, incluidas el asesinato de civiles desarmados, cuyos cuerpos fueron luego arrojados a fosas comunes, y el incendio del barrio obrero de El Chorrillo, que quedó reducido a cenizas. Resultaba evidente que Bush intentaba diezmar al ejército panameño, la principal fuerza que apoyaba a Noriega, y garantizar que el país permaneciera dentro de la órbita americana incluso después de que le fuera devuelta la soberanía sobre el canal de Panamá. La historia que se utilizó como cobertura para la «Operación Causa Justa» fue que Noriega estaba involucrado en el tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense.

Esta demostración de fuerza tuvo lugar sólo unas pocas semanas después de la caída del muro de Berlín. Gorbachov ya había renun-

ciado a la doctrina Breznev en un discurso pronunciado el año anterior en las Naciones Unidas. Cuando en la Nochebuena de 1989 el embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack F. Matlock, se reunió con el viceministro de Asuntos Exteriores, I. P. Aboimov, para sondear cuáles eran las intenciones soviéticas en Europa oriental, éste le dijo: «Estamos en contra de cualquier tipo de interferencia en los asuntos internos de otros países, y tenemos la intención de mantenernos firmes y no desviarnos de esta postura. Los americanos pueden considerar ahora suya la “doctrina Breznev”, un regalo de nuestra parte».

Acciones como la invasión de Panamá son intrínsecas al comportamiento imperialista. Es posible que desde una perspectiva histórica la política exterior estadounidense de los últimos cincuenta años no resulte particularmente excepcional o malintencionada, pero lo cierto es que la distancia entre lo que el gobierno hace y las explicaciones que ofrece continúa aumentando. A nuestros imperialistas les agrada afirmar que no hacen más que proporcionar «estabilidad» al mundo. Para ellos, las manos sucias son cosa de los viejos imperios, no del nuestro y —en caso de que crean que seguimos los pasos de los británicos— tampoco de nuestro predecesor. Max Boot, antiguo redactor jefe del *Wall Street Journal*, piensa, por ejemplo, que: «Somos un imperio atractivo. ... Afganistán y otros países convulsionados claman por el tipo de administración extranjera ilustrada que en un tiempo proporcionaron los ingleses, seguros de sí mismos, con sus pantalones de montar y sus salacots». ⁸ No está claro si a Boot le resulta indiferente la sangrienta y despiadada represión que había detrás del Imperio Británico, o si simplemente nunca escuchó hablar de acontecimientos como la masacre de Amritsar de 1919, en la que el ejército británico estuvo asesinando punjabís hasta quedarse sin munición; o de la utilización de las islas Andaman como campo de prisioneros políticos, a los que se sometía a torturas y trabajos forzados; o del uso de bombas, ametralladoras y, en ocasiones, gas venenoso, contra los rebeldes iraquíes, después de que el Reino Unido arrebatara Mesopotamia a Turquía, tras la primera guerra mundial, o de la partición de la India, un hecho que condujo a una gran matanza de hindúes y musulmanes y a cincuenta años de sangrienta guerra en torno a Cachemira. Si a esto es lo que se entiende administración extranjera ilustrada, mejor no preguntar en qué consistiría un imperialismo no ilustrado.

El patrimonio intelectual de los triunfalistas neoconservadores es una compleja amalgama del imperialismo militar de Theodore Roosevelt y del imperialismo idealista de Woodrow Wilson. Muchos neoconservadores no provienen de la derecha, sino de la izquierda. Algunos pertenecieron al movimiento trotskista de las décadas de 1930 y 1940. Durante los primeros treinta años de la guerra fría, adoptaron un liberalismo anticomunista, que los llevó, durante la administración Reagan, a respaldar el militarismo y el imperialismo de derechas. Esos intelectuales neoconservadores de la defensa apoyan la guerra preventiva, cuyo modelo es el ataque lanzado en 1981 por Israel contra el reactor nuclear iraquí de Osirak, pero al tiempo los anima la idea de extender a la fuerza la democracia, o al menos eso afirman en su propaganda. Max Boot, uno de sus apologistas, denomina la política exterior neoconservadora «wilsonismo duro». ⁹ Su máximo logro, hasta el momento, fue la guerra de 2003 contra Irak, país que, en ataque militar unilateral, Estados Unidos devastó y después ocupó. Tal como observa el historiador Paul Kennedy, Irak fue empujado a la democracia al estilo occidental mediante «una extraña combinación de idealismo wilsoniano y de fuerza reaganita». ¹⁰

Otro grupo de ideólogos estadounidenses lo conforman quienes podríamos llamar imperialistas humanitarios. Se trata de liberales globales, descendientes directos de Woodrow Wilson, que esperan poder construir un mundo «seguro para la democracia» y creen que Estados Unidos tiene la historia a su favor, una idea que en su momento respaldó el presidente Bill Clinton. (En 1998, justo antes de viajar a Pekín, Clinton acusó a China, entre las actuales, la civilización más antigua del mundo, de languidecer en «el lado equivocado de la historia».) Esos imperialistas blandos prefieren emplear la palabra *imperialismo* en compañía de algún vocablo o partícula que la embellezca: apoyan el «imperialismo posmoderno», el «imperialismo *light*», el «neoimperialismo» o el «imperialismo liberal» y, sobre todo, defienden el «derecho a la intervención humanitaria». ¹¹ Como genuinos wilsonianos, respaldan, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de pueblos como el palestino, mientras que los neoconservadores tienen un largo historial de indiferencia hacia ellos.

Sebastian Mallaby, editorialista y columnista del *Washington Post*, es un representante típico de ese imperialismo liberal. «El mundo rico» escribe, «cada vez es más consciente de que el caos amenaza sus inter

ses, y de que carece de las herramientas para solucionar el problema.»¹² Para afrontar el peligro que representan los estados «fallidos» o desestructurados, Mallaby considera que la brecha global debe ser llenada por «una América imperial». «La cuestión no es si Estados Unidos procurará llenar el vacío creado por la desaparición de los imperios europeos, sino si reconocerá que es eso lo que está haciendo.» Sin embargo, Mallaby no señala en ningún momento que el imperialismo europeo (así como el norteamericano y el japonés) fue una de las causas primordiales de los estados fallidos que hoy observamos en lo que antes se denominaba Tercer Mundo. Para «llenar el vacío de seguridad dejado por los imperios», Mallaby propone, entre otras cosas, la creación de una nueva organización «internacional», dominada por Estados Unidos, siguiendo el modelo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Central para el imperialismo liberal, es la difícil cuestión de la «intervención humanitaria». (Los triunfalistas neoconservadores, en rasgos generales, no se interesan por nada que lleve el adjetivo «humanitario».) La idea que subyace a esta expresión es la siguiente: un país poderoso puede violar la soberanía de otro, e incluso provocar la caída de su gobierno mediante el uso de la fuerza, con el fin de detener o evitar flagrantes violaciones de los derechos humanos, la limpieza étnica, el genocidio, el terrorismo de estado, las operaciones de los «escuadrones de la muerte» o las represalias militares a gran escala contra la población civil. La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal, copresidida por un antiguo ministro de Asuntos Exteriores australiano, considera que este tipo de acciones son resultado de «la responsabilidad de proteger» y ofrece una detallada serie de condiciones que, desde su punto de vista, han de cumplirse para considerarlas justificadas.¹³ Por ejemplo, que se esté causando realmente un daño serio e irreparable a los seres humanos o que éste sea inminente, que la utilización de la fuerza militar sea el último recurso que se la emplee en una escala apropiada y que existan perspectivas razonables de éxito.

Desde principios de la década de 1990, Estados Unidos ha aducido motivaciones humanitarias similares para justificar diversas incursiones armadas en Somalia, Haití, Bosnia y Kosovo. Inicialmente, la idea de intervención humanitaria no se encontraba entre las razones esgrimidas para justificar nuestra invasión de Afganistán; no obstante, una

vez llegamos allí, la administración Bush señaló que una de nuestras preocupaciones era la violenta forma en que las mujeres eran tratadas bajo el régimen talibán. Sin embargo, esta cuestión no había suscitado el interés de los líderes estadounidenses en la década de 1980, cuando armaron y respaldaron generosamente a las fuerzas que se convertirían en los talibán. En ese mismo período, Estados Unidos y muchos de sus aliados fueron incapaces de reconocer su «responsabilidad» para con los habitantes de Ruanda, Chiapas, Chechenia, el Tíbet, Cachemira, Timor Oriental y Palestina.

Nadie niega que, en casos extremos, una intervención extranjera pueda ser necesaria para salvar vidas inocentes. La cuestión es quién decide cuándo una intervención es humanitaria. La Comisión Internacional considera que únicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la capacidad de autorizar y legalizar tales acciones, cualesquiera sean las razones que las apoyen; por consiguiente, proclamar intervenciones humanitarias fuera de este marco, como hizo Estados Unidos en los casos de Somalia y Serbia, constituye un acto de imperialismo. Postular una novedosa y unilateral «responsabilidad de proteger» como asunto exclusivo de la última gran potencia mundial y asumir luego que sólo es aplicable cuando esa superpotencia lo considere conveniente, es algo que puede, de hecho, empeorar las relaciones entre las naciones.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, nuestro gobierno ya no parece desear la autorización del Consejo de Seguridad para sus guerras en el extranjero (si es que alguna vez la deseó) y tampoco parece pensar que la necesite. El discurso del presidente Bush en las Naciones Unidas del 12 de septiembre de 2002 fue más un ultimátum que una solicitud: si esta organización no estaba dispuesta a actuar contra Irak, Estados Unidos lo haría solo. El 19 de marzo de 2003, ante la posibilidad de tener que enfrentarse a un veto casi seguro y a una probable derrota claramente mayoritaria si intentaba obtener la autorización del Consejo de Seguridad, Bush hizo efectiva su amenaza y se lanzó solo a la guerra contra Irak. Imperialismo significa, entre otras cosas, unilateralidad: que un país tome decisiones y actúe de forma unilateral lo convierte en imperialista independientemente de los motivos humanitarios o de cualquier otra índole que pueda alegar. *The Rule of Power or the Rule of Law?* (¿El gobierno de la fuerza o el gobierno de la ley?), un importante estudio realizado por dos

organismos de investigación sin ánimo de lucro, el Instituto para la Investigación de la Energía y el Medio Ambiente y el Comité de Abogados sobre Política Nuclear, analizó la respuesta de Estados Unidos a ocho grandes acuerdos internacionales, entre ellos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y el Tratado de Misiles Antibalísticos. «Estados Unidos ha violado, puesto en peligro o actuado para socavar de forma crucial todos los tratados que hemos estudiado con detenimiento», afirma Nicole Deller, coautora del informe.¹⁴ Estados Unidos «no sólo se niega a participar en los mecanismos legales creados recientemente, sino que incumple las obligaciones que recogen los tratados que ha ratificado».

Según el informe, Estados Unidos está «dejando de considerar los tratados como un elemento esencial de la seguridad mundial para asumir una actitud más oportunista y acatar los tratados únicamente cuando le conviene hacerlo». El intento de Estados Unidos de socavar el Tribunal Penal Internacional (TPI), el primer tribunal permanente del mundo para crímenes de guerra, constituye un vivo ejemplo de la unilateralidad de sus motivaciones. El 31 de diciembre de 2000, el presidente Bill Clinton firmó el tratado que creaba el tribunal, cuyo borrador había sido redactado durante las conversaciones multilaterales que tuvieron lugar en Roma en julio de 1998 y que posteriormente ha sido firmado y ratificado por todos los aliados democráticos más cercanos de Estados Unidos. No obstante, el gobierno de George W. Bush, temiendo que algún día el tribunal pudiera citar a altos funcionarios norteamericanos (a pesar de que las «salvaguardias» existentes en el documento lo hacían improbable), no sólo se negó a someter el tratado al senado para su ratificación, sino que, en un acto sin precedentes, lo «desfirmó» de forma retroactiva. El periodista David Moberg escribió al respecto: «El rechazo del tribunal por parte de Estados Unidos es, por consiguiente, sobre todo una declaración simbólica de que Estados Unidos no es responsable ante nadie. ... Bush quiere que Estados Unidos desempeñe el papel de investigador, policía, fiscal, juez y verdugo del mundo. Esto es un ideal imperial, no una afirmación de soberanía».¹⁵ Al mismo tiempo, el gobierno declaró que ya no se sentía comprometido con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que exige que los países no tomen medidas para debilitar los tratados que firmen, incluso cuando

no los ratifiquen. Al igual que en el caso del tratado del Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos ha firmado pero no ratificado el acuerdo de Viena.

Nuestro gobierno se volvió tan paranoico con respecto al Tribunal Penal Internacional que intentó incluso impedir que el antiguo embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Richard Holbrooke, testificara en el juicio por crímenes de guerra contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic ante el tribunal especial sobre crímenes de guerra de la ONU en La Haya. El Departamento de Estado declaró que temía sentar un precedente de cooperación con un tribunal penal internacional con jurisdicción sobre los individuos, dado que el tratado del TPI había sido ratificado con éxito por un número suficiente de países y se había convertido en una realidad a pesar de la oposición norteamericana.¹⁶

El 11 de marzo de 2003, el TPI empezó a funcionar en La Haya de manera formal estudiando acusaciones sobre crímenes de guerra que hubieran sido cometidos a partir del 1 de julio de 2002. En previsión de esos acontecimientos, las dos cámaras del congreso aprobaron la Ley de Protección del Personal Militar Estadounidense, que permitiría, de hecho, que Estados Unidos liberara a cualquier ciudadano norteamericano detenido por el tribunal mediante el uso de la fuerza. Los políticos holandeses, desde hace tanto tiempo aliados estadounidenses, quedaron perplejos y escandalizados por lo que consideraron un gesto de ostentación carente de sentido, y se refirieron a la ley como la «Ley de Invasión de La Haya».¹⁷

El gobierno Bush alega temer que un fiscal internacional enjuicie de forma «caprichosa» a sus funcionarios y oficiales militares, pese a que el Tratado de Roma contiene numerosas salvaguardias contra los procesamientos arbitrarios, incluso el derecho de precedencia de cualquier nación sobre el TPI para juzgar a sus propios ciudadanos por crímenes de guerra. Si Estados Unidos se resiste a la formación de un tribunal que pueda procesar a los individuos por crímenes de guerra, es precisamente porque sus actividades de imperialismo global implican, de forma casi inevitable, este tipo de delitos. Estados Unidos es el único país al que el viejo Tribunal Mundial (que sólo puede juzgar naciones, no individuos) condenó por terrorismo, a causa de las operaciones encubiertas de la administración Reagan para desestabilizar y derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua en 1984.

El gobierno siempre ha sostenido que su oposición al TPI se deriva del deseo de proteger a los soldados y a oficiales de menor graduación de las acusaciones de crímenes de guerra, pero resulta claro que su preocupación real es que el tribunal pueda intentar llevar a juicio al presidente Bush o a otros destacados líderes civiles y militares. Al tener muy presente el impacto que tuvo la investigación del fiscal especial Kenneth Starr sobre el escarceo sexual del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky, el gobierno teme el terrible efecto que tendría el que un fiscal internacional abriera una investigación pública sobre las acciones del presidente Bush, incluso aunque nunca llegara a producirse una acusación formal.¹⁸

En cierto sentido, esos temores no son tan descabellados. Al fin y al cabo, el general Wesley Clark, comandante de la OTAN durante la guerra contra Serbia y quien habría debido poner fin a los bombardeos ilegales de plantas de tratamiento de agua, hospitales y escuelas, que mataron a casi dos mil civiles, se encuentra tan amenazado por la Convención de Ginebra de 1949 como el general serbio-bosnio Dragan Obrenovic, que dirigió el asalto de Srebrenica en julio de 1995 y fue luego entregado al tribunal de crímenes de guerra de La Haya. Hay fiscales en Chile, Argentina, España y Francia a los que les gustaría llevar a juicio al ex secretario de Estado Henry Kissinger por el apoyo y patrocinio que prestó a las dictaduras militares de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Ecuador durante la década de 1970, mientras éstas mataban, torturaban y «desaparecían» a sus propios ciudadanos y los de los países vecinos.¹⁹

De forma similar, a Timor Oriental, una nación que acaba de obtener su independencia, le gustaría preguntar a Kissinger bajo juramento qué pretendía cuando, en la víspera de la invasión de ese antiguo territorio portugués por Indonesia, pareció dar luz verde al hombre fuerte de este último país, el general Suharto. El 6 de diciembre de 1975, de regreso a Estados Unidos tras una visita a Pekín, el presidente Gerald R. Ford y Kissinger se detuvieron en Yakarta y mantuvieron un encuentro con Suharto. El general les informó de sus planes de apoderarse de Timor Oriental, en contra de la voluntad de los ciudadanos, e incorporarlo a Indonesia. A pesar de que el ejército indonesio estaba equipado, en parte, con armamento norteamericano, y de que la utilización de esas armas era ilegal de acuerdo con la legislación estadounidense, Kissinger dijo: «Es importante que, haga lo que haga,

se imponga con rapidez», y preguntó si los indonesios esperaban una «guerra de guerrillas prolongada». El general Ali Murtopo, uno de los arquitectos de la toma de Timor Oriental, contestó que «todo el asunto estará resuelto en tres semanas».²⁰ El ejército indonesio siguió adelante con su plan y mató alrededor de 200.000 timorenses.

El gobierno de Estados Unidos no sólo ha intentado socavar los tratados que considera inconvenientes, sino que se ha negado también a entablar conversaciones diplomáticas con sus aliados para conseguir que esos acuerdos resulten más aceptables. Así, los representantes del gobierno sencillamente se retiraron del Protocolo de Kioto de 1997 sobre el calentamiento global, que intentaba regular las emisiones de dióxido de carbono, con el argumento de que sus costes económicos serían demasiado elevados. (Estados Unidos es responsable de más emisiones de este tipo que cualquier otro país.) Todas las democracias aliadas de Estados Unidos continuaron trabajando en el tratado, pese al boicoteo. El 23 de julio de 2001, en Bonn, Alemania, se alcanzó un compromiso en torno a la severidad de los recortes de las emisiones que los países industrialmente avanzados deberían conseguir y las sanciones en caso de incumplimiento, lo que resultó en un tratado de obligado cumplimiento que fue suscrito por más de 180 países. No se puede decir que el Protocolo de Kioto modificado sea perfecto, pero es un comienzo hacia la reducción de los gases de efecto invernadero.

De igual forma, Estados Unidos e Israel abandonaron la conferencia de las Naciones Unidas sobre racismo, que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, entre agosto y septiembre de 2001. Los países que permanecieron en la conferencia terminaron votando en contra de la petición siria de incluir un texto que acusara a Israel de racismo. Se aprobó, asimismo, que la declaración final incluyera un pedido de disculpas por la esclavitud, considerada un «crimen contra la humanidad», si bien éste fue redactado de tal manera que no comprometiera a los países que se beneficiaron de ella al pago de reparaciones económicas. Teniendo en cuenta la historia de la esclavitud en Estados Unidos al respecto y hasta qué punto el documento final fue ajustado para que se acomodara a las preocupaciones norteamericanas, retirarse de la conferencia pareció simplemente una muestra de petulancia imperial, o un mensaje más de que «nosotros» no necesitamos de «ustedes» para gobernar el mundo.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, muchos observadores nacionales y extranjeros expresaron su esperanza de que Estados Unidos abandonase su unilateralidad imperial al descubrir que su guerra contra el terrorismo —o, al menos, sus esfuerzos para controlar la financiación de éste— requería aliados, así como un gran esfuerzo internacional coordinado.²¹ Sin embargo, esa esperanza se mostró infundada. Meses después de los atentados, la administración Bush se negó de forma unilateral a reconocer los derechos normalmente concedidos a los prisioneros de guerra a los combatientes que había capturado en Afganistán y los retuvo en Camp X-Ray, un complejo de jaulas de tela metálica al aire libre situado en la vieja base militar de la bahía de Guantánamo, en Cuba.²² Declaró de forma unilateral que Irán, Irak y Corea del Norte eran «estados canallas» y que formaban el «eje del mal», y se reservó el derecho de destruir preventivamente a cualquiera de ellos o a todos, o, de hecho, a cualquier otro país considerado potencialmente hostil que poseyera, o planeara adquirir, «armas de destrucción masiva»: armamento nuclear, químico o biológico. Entre tanto, Estados Unidos aprobaba el desarrollo de nuevas y más «utilizables» armas nucleares propias, y ampliaba de manera notable las circunstancias en que en un futuro conflicto el Pentágono podía considerar la posibilidad de «ponerse nuclear», todo ello en flagrante violación de lo prometido en el Tratado No Proliferación de Armas Nucleares, en el que el país asumió el «compromiso inequívoco» de eliminar su arsenal nuclear.²³ De igual modo, el gobierno Bush se ha eximido también del tratado que prohíbe la fabricación de armas biológicas para evitar tener que abrir las plantas farmacéuticas «privadas» a inspectores internacionales.

Este tipo de hechos llevaron a Flora Lewis, la recientemente desaparecida analista de *The New York Times*, a concluir que: «Estados Unidos le está dando la espalda a todas las normas internacionales». Le preocupaba en especial el intento estadounidense de subvertir un acuerdo internacional dirigido a limitar el comercio mundial de armas pequeñas. En julio de 2001, John R. Bolton, subsecretario de Estado para el control de armas, declaró que Estados Unidos procuraría frustrar todo acuerdo que pudiera limitar el derecho de sus ciudadanos a poseer armas.²⁴ El profesor Michael Glennon, especialista en legislación internacional de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia en la Universidad de Tufts, concluye que la unilateralidad de la adminis-

tración Bush y su rechazo a someterse al Consejo de Seguridad de la ONU tienen un claro significado: «sencillamente, las disposiciones de la Carta [de la ONU] que reglamentan el uso de la fuerza ya son consideradas una ley internacional de obligado cumplimiento. ... La Carta ha seguido, trágicamente, el destino del pacto Kellogg-Briand de 1928, que pretendía ilegalizar la guerra y fue firmado por todos los principales participantes en la segunda guerra mundial».²⁵

«En seis meses [desde los atentados], nos hemos reinventado para convertirnos en el pueblo más belicoso de la tierra. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?», se pregunta James Carroll, columnista del *Boston Globe*. «Porque», responde, «los atentados de septiembre fueron el primer acto de violencia masiva que ha sufrido el Estados Unidos continental desde la guerra civil, y nos han dejado sumidos en la incertidumbre y el miedo. Mientras en el resto del mundo la devastación producto de la guerra es demasiado común, para nosotros ésta continúa siendo algo abstracto. El recuerdo de lo ocurrido en septiembre subraya el hecho de que los horrores de la guerra moderna nunca habían tocado a las ciudades norteamericanas. Ésa es la única razón por la que somos capaces de reorganizar el futuro de nuestras fuerzas armadas alrededor de bombarderos robot, bombardeos estratégicos e, incluso, armas nucleares utilizables. Hacemos la guerra sin saber realmente en qué consiste.»²⁶

En fecha tan tardía como 1874, bastante después de terminada la guerra civil, el ejército permanente de nuestro país sólo estaba autorizado a contar con 16.000 soldados, y el estamento militar era bastante menos importante para la mayoría de los estadounidenses que, digamos, el correo. En aquel entonces, los norteamericanos no necesitaban un pasaporte o un permiso del gobierno para viajar al exterior. Cuando los inmigrantes llegaban, sólo se les examinaba en búsqueda de enfermedades infecciosas, y no tenían que presentarse ante nadie. No había drogas prohibidas. Los aranceles aduaneros constituían la principal fuente de ingresos del gobierno federal; el impuesto sobre la renta no existía.²⁷

Ciento veinticinco años después, el ejército americano tiene 480.000 miembros, la marina, 375.000, la fuerza aérea, 359.000 y la infantería de marina, 175.000, sumando un total de 1.389.000 hombres y mujeres en servicio activo. En 2003, la nómina de ese personal uniformado ascendía a 27.100 millones de dólares en el ejército,

22.000 en la marina, otros tantos en la fuerza aérea, y 8.600 en la infantería de marina. En la actualidad, el gobierno federal puede, si así lo desea, interceptar las llamadas telefónicas, faxes y correos electrónicos de todos los ciudadanos. Ha comenzado a encarcelar a ciudadanos nacionales y nacionalizados, así como a inmigrantes y turistas, en prisiones militares sin presentar cargos contra ellos. El presidente decide él solo quién es un «combatiente ilegal», expresión que introdujo la administración Bush, y tal decisión es inapelable. Gran parte del presupuesto de defensa y la totalidad del de los servicios de información son secretos. Todos éstos son síntomas de militarismo y de la creación de un estado de seguridad nacional.

Un aspecto insólito del militarismo norteamericano del siglo XXI es que el gobierno ha elaborado planes para dominar el mundo no sólo mediante una inmensa maquinaria militar en la superficie del planeta, sino también mediante el control del espacio. El primer indicio de semejante ambición lo constituye el bombardeo aéreo de Serbia entre el 24 de marzo y el 3 de junio de 1999. En total, los pilotos estadounidenses realizaron más de 38.000 misiones sobre Serbia, incluidas las de los bombarderos silenciosos B-2, que empezaban y terminaban en Misuri. A lo largo de toda la campaña, sólo fueron derribados dos cazabombarderos, y no hubo ninguna baja norteamericana en combate. El general Richard B. Myers, entonces jefe del Comando Espacial de Estados Unidos, comentó que Kosovo fue «una guerra que el espacio hizo posible», «un nuevo punto de referencia» para el futuro. Los satélites militares y el sistema de posicionamiento global permitieron a las aeronaves estadounidenses efectuar, con más o menos precisión, bombardeos y ataques con misiles guiados, lo que mantuvo a soldados y pilotos lejos del peligro. En agosto de 2001, el presidente George W. Bush nombró al general Myers jefe del Estado Mayor Conjunto: era la primera vez que el cargo militar más importante del país se confiaba a un oficial proveniente del Comando Espacial.²⁸

La siguiente guerra que el espacio haría posible tuvo lugar menos de un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los norteamericanos comenzaron a bombardear Afganistán, un país que se encontraba tan devastado por más de dos décadas de guerra que derribar al represivo régimen talibán resultó relativamente fácil. Aunque el Pentágono sostiene que sólo se produjeron «daños colaterales» ocasionales, Estados Unidos mató al menos a tantos civiles

en Afganistán como víctimas tuvieron los atentados terroristas del World Trade Center y del Pentágono.²⁹ Sin embargo, los militares afirmaron haber obtenido una gran victoria, sin apenas bajas estadounidenses, y consideraron aún más que justificado su nuevo modo de hacer la guerra basado en la alta tecnología y el espacio.

En 2001 el presidente Bush nombró a Peter Teets, ex jefe de operaciones de Lockheed Martin, subsecretario de la fuerza aérea y director de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), en términos de presupuesto, nuestro mayor servicio de inteligencia. En abril de 2002, durante el 18.º Simposio Nacional sobre el Espacio que tuvo lugar en Colorado Springs, el general Ed Eberhart, que sucedió al general Myers al frente del Comando Espacial, se unió a Teets para subrayar que Estados Unidos podía controlar el mundo a través del dominio del espacio y que tenía la intención de asegurarse ese dominio.

Teets y Eberhart recalcaron el papel desempeñado por el espacio en la victoria sobre los talibán con el argumento de que en la guerra los satélites se habían empleado de forma masiva, lo que había «permitido que los cazabombarderos y las aeronaves no tripuladas realizaran bombardeos extremadamente precisos sobre Afganistán».³⁰ Eberhart declaró que fue tan importante haber proporcionado a los soldados servicios de banda ancha desde el espacio como haberles suministrado información recopilada por los servicios de espionaje. «En el Comando Espacial le dimos [al general] Tommy Franks [comandante en Afganistán] un ancho de banda siete veces mayor que el que tuvo [el general] Norman Schwarzkopf, y cada soldado contó con un ancho de banda 322 veces mayor del que estuvo disponible en la Tormenta del Desierto.» Jeff Harris, antiguo director de la NRO y, en la actualidad, ejecutivo de Space Systems Company, de Lockheed, dijo en la convención: «Estados Unidos debe ahora anticiparse y actuar de manera regular de forma preventiva en todo el mundo, valiéndose de los recursos que posee en el espacio para afrontar las escaramuzas locales. ... Las fuerzas armadas de Estados Unidos han de hacer que todos sus posible adversarios teman su capacidad y no alberguen dudas sobre ella». El subsecretario Teets se mofó de toda referencia a la cooperación con la OTAN o la ONU, así como a cualquier otra forma de «compartir las cargas» y de «multilateralismo». Afirmó que Estados Unidos debía sentirse orgulloso de su capacidad para actuar de forma unilateral y que debíamos explotar «nuestra supremacía es-

pacial, nuestro dominio del espacio, con el fin de lograr el éxito bélico». ³¹ La superioridad militar cibertecnológica es, más que cualquier otra cosa, lo que hoy alimenta el completo replanteamiento del estamento militar y de su misión. ³²

El grupo de derechas conocido como los «intelectuales de la defensa» había comenzado a preconizar una nueva y completa estrategia para dominar el mundo incluso antes de la guerra de Afganistán. Muchos de sus miembros habían trabajado en anteriores gobiernos republicanos, y cuando George W. Bush alcanzó la presidencia, la mayoría de ellos fueron nombrados para ocupar altos cargos. De forma parecida a lo ocurrido a finales del siglo XIX, cuando el capitán Alfred T. Mahan, el senador Henry Cabot Lodge y el subsecretario de marina Theodore Roosevelt subrayaban la importancia de las fuerzas navales, de las bases en el Pacífico y de una marina capaz de operar en ambos océanos, esta nueva camarilla centra sus planes en los próximos diez o veinte años. Sus componentes raras veces confían en la opinión pública y son verdaderos maestros en la manipulación de los medios de comunicación, algo que admiten haber «aprendido» tras la amarga experiencia de la guerra de Vietnam. Los ataques terroristas de 2001, como en su momento el hundimiento del acorazado *Maine*, dieron un tremendo impulso a su agenda privada. Los atentados dirigieron el sentimiento y el patriotismo populares hacia iniciativas militares que en otro contexto hubieran suscitado serias dudas y provocado protestas.

La determinación de militarizar el espacio exterior y dominar el mundo a partir de estaciones de combate orbitales provistas de todo un abanico de armas incluye el desarrollo de láseres de alta energía que puedan ser dirigidos hacia cualquier blanco en la Tierra o contra los satélites de otros países. En un documento titulado «Visión para 2020», el Comando Espacial sostiene que «la globalización de la economía mundial proseguirá y aumentará la distancia entre ricos y pobres» y que, por tanto, la misión del Pentágono es «dominar la dimensión espacial de las operaciones militares, con el fin de proteger los intereses y las inversiones estadounidenses» en un mundo cada vez más peligroso e, implícitamente, antiamericano. Un objetivo esencial de esta política debería ser el de «denegar a otros países el acceso al espacio». ³³

Una iniciativa tan agresiva para garantizar una hegemonía militar estadounidense unilateral exige que el país abandone todos los acuerdos y regulaciones sobre control de armas, incluyendo el Tratado del

Espacio Exterior de 1967, que establecía límites a la militarización del espacio, dado que éste es fundamentalmente global (los satélites no se mantienen dentro de las fronteras nacionales). La lógica que respalda este programa es antigua, y se encuentra implícita en prácticamente todos los proyectos imperialistas: la necesidad de proteger algún territorio o capacidad cuya vulnerabilidad ha sido exagerada y respecto a la cual no han sido ni siquiera consideradas alternativas distintas de la militar. Estados Unidos afirma que, militarmente, ha pasado a depender de las comunicaciones y el espionaje satelitales, y que un adversario podría aprovecharse de esta circunstancia desplegando armas anti-satélite para alterar sus señales. Así como a finales del siglo XIX el Reino Unido se vio obligado a crear colonias en Egipto y Sudáfrica con el fin, según alegó, de proteger las vías marítimas de su enclave imperial en la India, y después tuvo que conquistar Sudán y el Alto Nilo para proteger Egipto y gran parte del África subsahariana para, a su vez, proteger Sudáfrica, Estados Unidos argumenta hoy que debe dominar por completo el espacio con el objetivo de salvaguardar sus nuevas tecnologías para la guerra a prueba de bajas.

Sin embargo, ese tipo de lógica —comparable a la teoría del efecto dominó durante la guerra de Vietnam— conduce a una progresión interminable de lugares y compromisos que deben ser protegidos, lo que de forma inevitable lleva al imperio a ponerse en situación comprometida, a su quiebra y al descontento popular, que son precisamente los males que aquejaron a la Gran Bretaña eduardiana. Tal planificación estratégica tiende, asimismo, a producir consecuencias no deseadas en forma de guerras de conquista injustificablemente brutales, como la emprendida por el Reino Unido contra los bóers en Sudáfrica. La guerra bóer se extendió de 1899 a 1902 y ocasionó la muerte de 22.000 soldados británicos. Mientras procuraban derrotar a los colonos, que para hacer frente a un enemigo mucho más poderoso acudieron a la guerra de guerrillas, los británicos construyeron el primer campo de concentración del mundo, donde murieron al menos 28.000 civiles bóers (la mayoría, mujeres y niños), y entre 14.000 y 20.000 bosquimanos, zulúes y miembros de otras tribus. ³⁴ Las muertes en los campos de concentración correspondieron al 10 por 100 de la población bóer. La causa fundamental de semejante masacre no fue la defensa de la India, sino el ansia por dominar el mundo: en resumen, el imperialismo y el militarismo. Nunca se llegaron a sopesar

con seriedad formas alternativas de conseguir el mismo objetivo, como tampoco se planteó la posibilidad de dejarlo de lado como algo que no merecía la pena.

Las principales figuras de la camarilla imperialista del siglo XXI que promueven la militarización del espacio son Donald Rumsfeld (nacido en 1932), un antiguo guerrero de la guerra fría y secretario de Defensa en el gobierno Ford (1975-1977), al que George W. Bush llevó nuevamente al Pentágono un cuarto de siglo después, y el vicepresidente Dick Cheney (nacido en 1941), secretario general del presidente Ford y secretario de Defensa de Bush padre (1989-1993). Inmediatamente antes de convertirse en secretario de Defensa en 2001, Rumsfeld presidía la Comisión para Analizar la Administración y Organización de la Seguridad Nacional en el Espacio, cuyo informe final concluye: «Es de interés nacional ... utilizar el potencial del país en el espacio para apoyar sus objetivos internos, económicos, diplomáticos y de seguridad nacional; desarrollar y desplegar los medios de disuasión y defensa ante actos hostiles dirigidos contra los bienes espaciales estadounidenses y ante usos del espacio contrarios a los intereses de Estados Unidos».³⁵

Rumsfeld y Cheney han sido respaldados en sus análisis desde el interior del Pentágono en la persona de Andrew W. Marshall (nacido en 1921), antiguo «pensador de lo impensable» de la Rand Corporation, especializado, desde hace muchos años, en promover una «revolución de los asuntos militares», una etiqueta para formas avanzadas de hacer la guerra utilizando cibertecnología. Rumsfeld le encargó de inmediato el diseño de un proyecto sobre el futuro del Pentágono, y emprendió una campaña a gran escala en favor de una gigantesca estrategia de alta tecnología para transformar las fuerzas armadas y garantizar el dominio mundial durante las próximas décadas.³⁶ En una típica jugada del pensamiento imperialista paranoico, los generales norteamericanos lanzan ahora advertencias sobre lo mucho que depende el país de los satélites y del peligro de un «Pearl Harbor espacial». Con el fin de evitar esa catástrofe imaginaria, los militares sostienen que Estados Unidos debe conquistar y dominar el espacio lo antes posible. En 2003, el país creó su primera unidad militar destinada a defender los satélites meteorológicos, de comunicaciones, de navegación y de alarma sobre misiles, de posibles ataques «enemigos» a las estaciones terrestres y espaciales. Se trata del 614.º Escuadrón de Inteligencia Espacial, perteneciente a la base de la fuerza aérea de Van-

denburg, en California. «Todas las bombas y armas inteligentes están controladas por el GPS (sistema de posicionamiento global)», afirma el mayor Kurt Gaudette, director de operaciones del nuevo escuadrón. «Si éste no funciona, no tenemos más bombas inteligentes. Por tanto, es fundamental que los satélites permanezcan allí y a salvo».³⁷

Como parte esencial de este programa, Estados Unidos debe no sólo invertir una importante cantidad de sus recursos en el desarrollo de satélites «asesinos» para impedir que otras naciones «ocupen» el espacio, sino que también tiene que construir defensas, igualmente basadas en el espacio, contra misiles balísticos de otros países. Ese último programa, que constituye la cara visible de un proyecto más secreto, ha sido tema de gran cantidad de intervenciones presidenciales y políticas destinadas a impresionar a la opinión pública. En 2001, abogar por la defensa contra misiles balísticos se convirtió para nuestros líderes en el principal modo de evidenciar su compromiso con la «unilateralidad», de la que la decisión del presidente, el 13 de diciembre de 2001, de retirarse del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972 firmado con la antigua Unión Soviética constituyó una poderosa demostración. El presidente asumió esa actitud mucho antes de que Estados Unidos hubiera desarrollado algún tipo de defensas de misiles antibalísticos y, por supuesto, mucho antes de haberlas probado o desplegado, y a pesar de la abierta oposición de Rusia, China y los principales miembros de la OTAN.

No es de extrañar que China sospeche que la defensa contra misiles balísticos (BMD) es, en realidad, un programa destinado a neutralizar su minúscula fuerza nuclear disuasoria, con lo que están de acuerdo, implícitamente, los principales aliados de Estados Unidos, por lo que se han mostrado reacios a respaldarla, dado que temen que la BMD desate una nueva carrera armamentista en la medida en que los países que se sientan desafiados desde el punto de vista nuclear, como China, construyan más y mejores misiles para vencer esas defensas. No obstante, la administración Bush se muestra decidida a seguir adelante con ese sistema todavía no probado —de hecho, aún inexistente— y sumamente desestabilizador, para el cual, dada la manía patriótica desatada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el congreso aprobó hasta el último dólar solicitado por el Pentágono.

Mientras tanto, el gobierno ha hecho todo lo que ha podido para clasificar como confidencial, y por lo tanto esconder, la información

oficial sobre el sistema, vista la gran probabilidad de que no funcione bien. Por ejemplo, el Pentágono no hizo público un informe que Philip E. Coyle, su propio director de pruebas operativas y evaluación, redactó en agosto de 2000, a pesar de que el congreso cursó seis peticiones distintas al respecto. Entre otras cosas, Coyle documentó que el sistema de comando y control de la BMD se confunde con facilidad, lo que ya ha ocasionado el lanzamiento simulado de interceptores múltiples contra misiles inexistentes. Como señaló el diputado demócrata por Massachusetts John Tierney: «Un peligro inmediato de este tipo de situaciones es que los adversarios pueden interpretar esos lanzamientos como un primer ataque hostil y responder en consecuencia». ³⁸ El secretario de Defensa Rumsfeld ha afirmado que desea una defensa nacional contra misiles, aunque ésta no se encuentre enteramente probada y se admita que no es capaz de funcionar de acuerdo con las especificaciones.

La BMD cuenta con cierta legitimidad en los círculos del Partido Republicano, derivada de la defensa realizada por el presidente Reagan de su «iniciativa de defensa estratégica» (SDI), que tenía como objetivo construir una especie de gigantesco escudo electrónico de cohetes y láseres encargado de proteger al país y cuya viabilidad técnica nunca llegó a ser demostrada. No cabe duda de que Reagan pensaba en la SDI en términos defensivos; sin embargo, lo cierto es que tanto la SDI como la BMD son sistemas ofensivos. Para sus actuales defensores puede ser una buena operación de relaciones públicas insinuar que la BMD tiene como único objetivo defendernos de los que hoy se denomina «estados canallas», países como Corea del Norte e Irán que no han aceptado la hegemonía estadounidense y que acaso tengan la capacidad de producir misiles intercontinentales. Con todo, nadie cree seriamente que algún país, sea grande o pequeño, planea suicidarse lanzando contra Estados Unidos algo tan fácil de rastrear como un misil nuclear. Como señala el gurú neoconservador Lawrence F. Kaplan: «La defensa contra misiles no tiene, en realidad, la finalidad de proteger a Estados Unidos. Es un instrumento para dominar el mundo». ³⁹ O, en palabras de Jim Walsh, investigador del Centro Belfer sobre Ciencia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Harvard, «la defensa contra misiles tiene más de misiles que de defensa». ⁴⁰

En la eventualidad de que la BMD fuera una auténtica estrategia de defensa, estaría sujeta a los mismos problemas que la Gran Murar-

lla china, que no consiguió detener a los invasores mongoles ni a los manchúes, o que la línea Maginot francesa, que hubiera debido impedir la invasión alemana, pero falló de manera espectacular porque los alemanes la rodearon al entrar por Bélgica. Incluso en el caso improbable de que se comprobara la perfección tecnológica de nuestra BMD, su misma existencia acarrearía de inmediato planes para superarla con más misiles que el número de interceptores de que dispusiera. Sin embargo, esto no les importa a los que hacen planes para nuestro futuro militarizado. Para ellos, la BMD es una tapadera razonable para el amplio programa de investigación necesario para «armar» el espacio; un buen conducto para proporcionar abundantes fondos a contratistas clave de defensa, y, por último, una manera de complicar la toma de decisiones de cualquier oponente que pudiera amenazar con «disuadir» a Estados Unidos mediante un ataque nuclear. Los estrategas de la BMD consideran que, ante las defensas contra misiles, un enemigo semejante tendría primero que sopesar si su amenaza sería creíble. Como resume el columnista de *The New York Times* Bill Keller, los teóricos militares «temen que cualquier país con unas pocas armas nucleares pueda hacer con nosotros lo que nosotros hicimos con los soviéticos: disuadirnos de desplegar nuestras fuerzas convencionales, enormemente superiores, por el mundo». ⁴¹ El hecho es que la defensa contra misiles no tiene nada que ver con la defensa. Se trata de una ofensiva, y proporciona suficiente combustible para una nueva carrera armamentista nuclear mundial, al tiempo que, irónicamente, convierte a Estados Unidos en un país mucho más inseguro.

No es de extrañar que la comisión que en 1998 desarrolló los planes para el presente sistema de la BMD fuera dirigida por Donald Rumsfeld. ⁴² Uno de sus miembros era Paul Wolfowitz, una figura que representa bastante bien a este grupo. Con un doctorado en ciencias políticas, pero sin experiencia en la guerra o en el ejército, Wolfowitz ha utilizado sus numerosos cargos en los gobiernos de Reagan y de ambos Bush para impulsar la búsqueda de una supremacía militar siempre mayor con relación a todos los rivales de Estados Unidos, incluidos nuestros aliados de la guerra fría. En 1992, Wolfowitz declaró que el objetivo de la política exterior debía ser «evitar que cualquier potencia hostil pudiera dominar una región cuyos recursos, una vez consolidado su control, fueran suficientes para generar poder a escala global». Estas regiones, sugirió, incluían Europa occiden-

tal, el este asiático, el territorio de la antigua Unión Soviética y Oriente Próximo; exceptuando África y América Latina (regiones que ya controlábamos), se trataba prácticamente de todo el mundo. En 2001, justo antes de regresar al Pentágono para colaborar con Rumsfeld como nuevo subsecretario de Defensa, Wolfowitz no dejó de señalar que, pese a haber sido muy criticada en su momento, su anterior insistencia en la necesidad de establecer una «pax americana» se había convertido ahora en la corriente dominante del pensamiento estratégico.⁴³

Esa necesidad se siente con más intensidad (al tiempo que se la niega con vehemencia) con relación a China que a ningún otro país. Los que respaldan la BMD insisten en que el sistema no está dirigido a China en absoluto. «No creemos que deban preocuparse realmente por la defensa contra misiles», comentó John Bolton, subsecretario de Estado para el control de armas y asuntos de seguridad internacional. «No está dirigida contra ellos. Al fin y al cabo, es defensiva.»⁴⁴ Sin embargo, defensiva es precisamente lo que la BMD no es, y el estatus de Taiwán se encuentra en el corazón del proyecto.

Desde la época de la guerra civil china (1946-1949) y la intervención de las tropas de este país en 1950 en la guerra de Corea, la derecha republicana nunca ha podido aceptar que nuestro aliado durante la guerra, el Kuomintang (partido nacionalista) de Chiang Kai-Chek, fuese derrotado por los comunistas debido a su corrupción e incompetencia irremediables. Después de que Chiang se retirase a la isla de Taiwán con lo que quedaba de sus tropas, el llamado «China lobby»* presionó al gobierno estadounidense para que lo defendiera. Lo hizo hasta 1971, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por mayoría sacar a Taiwán del asiento reservado a China en la Carta de la ONU. A pesar de que la administración Carter reconoció a China en 1978, Estados Unidos continuó armando a Taiwán. Quienes en el congreso respaldan a Taiwán han hecho todo lo que han podido para que Estados Unidos se comprometiera a defender la isla militarmente, incluso en caso de que Taiwán propiciara una acción militar china al declarar unilateralmente su independencia.

* Poderoso grupo de presión que incluía a importantes figuras del Partido Republicano que se oponían al reconocimiento de la China comunista por parte de Estados Unidos. (N. de la t.)

A lo largo de la década de 1990 el Washington político abundó en declaraciones, actos y provocaciones en contra de China. Uno de éstos es el informe presentado el 25 de mayo de 1999 por el Comité Selecto de la Cámara sobre Asuntos de Seguridad Nacional y Comerciales/Militares con relación a la República Popular China, presidido por Christopher Cox, diputado republicano por California. El Informe Cox afirmaba que el espionaje había permitido a China conseguir una capacidad nuclear «en pie de igualdad» con la de Estados Unidos. Por entonces China apenas poseía veinte viejos misiles intercontinentales de combustible líquido y una única ojiva, mientras que Estados Unidos tenía unas 7.150 ojivas con capacidad de ser lanzadas contra China por medio de misiles, submarinos y bombarderos. No obstante, la histeria generada por el Informe Cox contribuyó a una caza de brujas gubernamental contra Wen-Ho Lee, un investigador norteamericano de origen taiwanés que trabajaba en el laboratorio de armas nucleares de Los Álamos. Acusado de ser un espía al servicio de China, Lee pasó 277 días de brutal confinamiento solitario hasta que un juez federal rechazó la demanda presentada por el gobierno y denunció al FBI y al Departamento de Justicia por haber acosado al científico, un hecho probablemente consecuencia del racismo de los oficiales responsables del caso.⁴⁵

En 2001, con la llegada de la administración Bush, el Pentágono cambió buena parte de sus objetivos nucleares en Rusia por objetivos chinos. Asimismo, comenzó a mantener regularmente conversaciones militares de alto nivel con Taiwán sobre la defensa de la isla, ordenó una redistribución de personal y suministros del ejército hacia Asia y el Pacífico, y se esforzó intensamente para promover la remilitarización de Japón. El 1 de abril de 2001, el avión espía EP-3E Aries II, de la marina estadounidense, colisionó con un avión de caza chino a la altura de la isla de Hainan. La misión de la aeronave norteamericana era dejarse detectar por los radares de la defensa china para poder registrar las transmisiones y los procedimientos que empleaban los chinos para lanzar sus interceptores.⁴⁶ Los vuelos habían sido ordenados por el comandante en jefe del Pacífico, uno de los cada vez más independientes procónsules militares de Estados Unidos, los verdaderos autores de la política exterior en las regiones bajo su mando. Mientras que el avión chino envuelto en el incidente se estrelló y su piloto perdió la vida, el norteamericano realizó un aterrizaje seguro en la isla de

Hainan y su tripulación, compuesta por veinticuatro espías, recibió un buen trato de las autoridades chinas.

Pronto quedó patente que China, país que, tras Estados Unidos y el Reino Unido es hoy el tercer mayor receptor de inversiones directas extranjeras, no estaba interesada en una confrontación. Gran número de sus principales inversores tiene sus sedes centrales en Estados Unidos. Sin embargo, China no podía devolver de inmediato la tripulación del avión espía sin riesgo de provocar una fuerte oleada de críticas internas al mostrarse obsequiosa ante la provocación. Por consiguiente, retrasó la devolución hasta once días después, cuando recibió una disculpa pro forma de Estados Unidos por haber causado la muerte de un piloto chino en el límite del espacio aéreo de la República Popular China y realizar un aterrizaje no autorizado en uno de sus aeropuertos militares. Entretanto, nuestros medios de comunicación empezaron de inmediato a referirse a los miembros de la tripulación como «rehenes», animaron a los parientes a poner lazos amarillos en los árboles de sus barrios, proclamaron que el presidente estaba llevando a cabo «un trabajo de primera» y criticaron sin cesar a China por sus «medios de comunicación controlados por el estado». Washington tuvo el cuidado de no mencionar que Estados Unidos mantiene una zona de interceptación de aeronaves de 200 millas alrededor del país, lo que excede en mucho sus aguas territoriales.

El 25 de abril de 2001, durante una entrevista en una cadena de televisión nacional, le preguntaron a Bush si usaría «toda la fuerza militar estadounidense» contra China para proteger a Taiwán. «Lo que fuese necesario para ayudar a Taiwán a defenderse», contestó. Algunos militaristas norteamericanos sostienen que una defensa contra misiles haría que este compromiso resultara creíble al proteger a las ciudades estadounidenses de cualquier represalia china. Sin embargo, después del 11-S, China desapareció temporalmente de las pantallas de los radares del Pentágono, a medida que Estados Unidos empezaba a obsesionarse con Al Qaeda, Afganistán e Irak. La cuestión de la disuasión nuclear volvería a primer plano en el este asiático en 2002-2003, pero no con relación a China, sino a Corea del Norte.

Del mismo modo que los intransigentes del Partido Republicano nunca han sido capaces de aceptar que China no es ni será un satélite americano, también tienen grandes problemas para aceptar el régimen decididamente desafiante de Corea del Norte, un pequeño país

golpeado por la pobreza. En su discurso sobre el estado de la Unión del 29 de enero de 2002, el presidente incluyó a Corea del Norte en su corta y famosa lista de países que Estados Unidos sopesaba «sacarse de encima» de forma preventiva. Con la caída de Bagdad en abril de 2003, la fase de «conmoción y pavor» y sangrientas matanzas de la «liberación» estadounidense de Irak llegó a su fin. Nuestra flota de bombarderos B-1, B-2 y B-52, nuestros cinco portaaviones en el golfo Pérsico y sus correspondientes destacamentos, nuestros innumerables buques y submarinos armados con misiles de crucero, así como el personal de control y mando, que hizo la guerra desde sus tiendas con aire acondicionado en Qatar, pasaron a estar disponibles para un nuevo despliegue. Eufóricos con su éxito, es posible que elijan como próximo objetivo —si no Oriente Próximo— Corea del Norte. Es probable que los propios norcoreanos estén pensando lo mismo y crean que George W. Bush planea ordenar un ataque contra ellos. Corea del Norte ilustra el tipo de situación explosiva que Estados Unidos, en su papel de Nueva Roma, crea por sí mismo.

Cabe aquí una pequeña historia. En 1994 Estados Unidos descubrió que el régimen de Pyongyang estaba produciendo plutonio a través de un viejo reactor nuclear para la generación de energía eléctrica diseñado por los rusos. La crisis abierta por la posibilidad de que Corea del Norte pudiera ser capaz de producir unas cuantas bombas atómicas se solucionó ese mismo año mediante el llamado «Marco acordado». A cambio de la promesa de Pyongyang de aparcar su viejo reactor y permitir las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Estados Unidos y sus aliados prometieron construir dos nuevos reactores que no produjeran material de fisión que pudiera ser utilizado en la fabricación de bombas atómicas, así como establecer algún tipo de relaciones económicas y diplomáticas con el aislado país. Estados Unidos acordó, asimismo, suministrar fuel en sustitución de la energía perdida con el cierre del reactor (dado que Corea del Norte no posee fuentes de energía de ningún tipo). Durante tres años la administración Clinton evitó cumplir el acuerdo, con la esperanza de que el militarizado régimen norcoreano se derrumbara a causa de la hambruna padecida por el pueblo.

Al final de la década, este empate se había transformado en punto muerto. En junio de 2000 el presidente de Corea del Sur, Kim Dae-Jung, actuó por iniciativa propia sin consultar a Estados Unidos, y

emprendió un histórico viaje de reconciliación a Pyongyang, con la esperanza de erradicar los últimos vestigios de la guerra fría de la península coreana. Su visita produjo un avance significativo, y Kim Dae-Jung recibió el premio Nobel de la Paz por su empeño. Y, lo que fue todavía más importante, la iniciativa del presidente Kim desató la imaginación de su propio pueblo, al igual que la apertura hacia China de Richard Nixon en 1971 estimuló la imaginación de millones de norteamericanos.

Corea del Sur tiene una población de 47 millones de habitantes, más de dos veces la de Corea del Norte, que sólo tiene 21 millones, y es entre 25 y 30 veces más rica que su afligido vecino; la voluntad de ayudarlo es un reflejo de su creciente confianza económica y democrática en sí misma. Es importante tener en cuenta que Corea del Sur es uno de los tres únicos países del este asiático (los otros dos son Filipinas y Taiwán) que han alcanzado la democracia desde abajo. En Corea del Sur y en Filipinas, los movimientos de masas se enfrentaron a dictadores opresivos impuestos y apoyados por Estados Unidos: el general Chun Doo-Hwan en Seúl y Ferdinand Marcos en Manila.

Durante el año 2000, las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur siguieron mejorando, lo que condujo a la visita de la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright a Pyongyang, en el mes de octubre. En los primeros días de la administración Bush, sin embargo, esta tendencia favorable se interrumpió de forma abrupta. Cuando Kim Dae-Jung visitó Washington en marzo de 2001, Bush se libró de él con brusquedad, y el gobierno estadounidense empezó a incluir a Corea del Norte en sus cada vez más agresivas declaraciones.

En septiembre de 2002, cuando la administración Bush incluyó en su Estrategia de Seguridad Nacional el derecho a librar «guerras preventivas», su retórica adquirió casi de inmediato visos de realidad para el líder norcoreano Kim Jong-il. En vista de que Estados Unidos empezó a movilizar un poderoso ejército de invasión hacia la frontera de Irak, Corea del Norte se preparó para defenderse de la única manera que, consideró, los norteamericanos entenderían. Se retiró del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, expulsó a los inspectores internacionales y volvió a poner en marcha su viejo reactor nuclear.

Al principio, la respuesta de la administración Bush fue el silencio. Ya había emprendido una guerra. Iniciar otra con Corea del Norte sería poner en peligro a Seúl, una ciudad de 10,8 millones de habi-

tantes que caía fácilmente dentro del radio de alcance de la artillería norcoreana. También se encontraban allí miles de efectivos estadounidenses, apostados, desde hace décadas, en las proximidades de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas a manera de *tripwire* (alambre trampa) en caso de un ataque norcoreano: su presencia, entre otras cosas, garantizaba que, en cuanto se dieran las primeras bajas, el pueblo norteamericano no tendría otra alternativa que respaldar la guerra.

Por otra parte, los hombres (y mujeres) de la administración Bush no alteraron su postura o hicieron algún esfuerzo por suavizarla y tampoco se ofrecieron a negociar. El régimen de Kim Jong-il llegó entonces a la conclusión casi inevitable de que era, con toda probabilidad, la próxima víctima del abusón y comenzó a intentar «disuadir» a los norteamericanos. Insistió en un tratado de no agresión con Estados Unidos, a cambio de apagar su peligroso reactor y detener su programa de desarrollo de armas nucleares, y se ofreció también a permitir el regreso de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica para que examinaran sus instalaciones nucleares.

Después de que Estados Unidos invadiera Irak, Corea del Norte retiró incluso estas propuestas. El 6 de abril de 2003, anunció que sólo podía garantizar su propia seguridad armándose con una «tremenda fuerza disuasoria». «La guerra de Irak evidencia que permitir el desarme a través de las inspecciones no contribuye a evitar la guerra, sino que, por el contrario, la desencadena. ... Esto sugiere que incluso la firma de un tratado de no agresión con Estados Unidos no ayudaría a evitar la guerra.» Como Winston Churchill durante la batalla de Gran Bretaña, Corea del Norte le estaba diciendo ahora a sus ciudadanos: «Si has de morir, llévate a uno contigo». Entre los lugares que amenazaba llevarse consigo estaban Seúl, algunas de las 38 bases estadounidenses en Okinawa y todas las ciudades japonesas que pudiera alcanzar (si bien es posible que sus misiles dotados de ojivas nucleares no posean la capacidad de llegar hasta Okinawa o las principales islas de Japón). Los surcoreanos estiman que Corea del Norte posee entre 175 y 200 misiles Rodong con un alcance de 1.300 km (lo que los hace capaces de alcanzar cualquier parte de Japón) y entre 650 y 800 misiles Scud de alcance intermedio apuntados a Corea del Sur y almacenados en instalaciones subterráneas.⁴⁷

En los dos años anteriores, la opinión pública de Corea del Sur había experimentado un cambio radical con relación a Corea del Norte.

El pueblo de Corea del Sur, próspero y bien informado, es consciente de que sus hermanos del norte —hambrientos, desesperados y oprimidos, pero bien armados— se encuentran atrapados por las ironías del fin de la guerra fría y por la dureza del régimen de Kim Jong-il, al tiempo que el orgullo y la arrogancia de Estados Unidos, en su recién proclamado papel de coloso militar mundial, los está llevando a una posición extremadamente peligrosa. Corea del Sur ya no teme demasiado a Corea del Norte, a menos que Washington la empuje a actos extremos. Teme, por el contrario, el entusiasmo bélico que emana de Washington, y los constantes problemas ocasionados por las tropas norteamericanas estacionadas en su territorio durante los últimos cincuenta años.

Aquí también cabe algo de la historia de esta península, en la que el pasado difícilmente se olvida. Desde que ocupó la mitad sur de la península de Corea en 1945 y creó la «República de Corea», Estados Unidos ha mantenido una fuerte presencia militar en el lugar. Hacia 2002 el Departamento de Defensa señalaba que poseía 101 instalaciones militares independientes en Corea del Sur, manejadas por 37.605 efectivos y 2.875 funcionarios civiles estadounidenses y en las que, además, vivían 7.027 familiares y otros americanos residentes a cargo de las fuerzas militares.⁴⁸ Entre esas instalaciones se encuentran la base Osan, conocida durante la guerra de Corea como K-55 y actualmente cuartel general de la 7.^a Fuerza Aérea, y la base Kunsan, en la costa oeste del país, la principal base de aviones de combate. Sin embargo, la instalación más sorprendente en Corea del Sur es, sin duda, la base Yongsan; perteneciente al ejército de tierra. Monumento a la insensibilidad cultural e histórica estadounidense, Yongsan se encuentra en el lugar en que se alzaba el antiguo cuartel general japonés, creado en 1894 y símbolo de la odiada ocupación japonesa. Situada en un principio en lo que era la periferia de Seúl, ocupa hoy 255 privilegiadas hectáreas justo en el centro de una capital densamente poblada. Yongsan ha sido el cuartel general de las operaciones militares norteamericanas en Corea desde 1945.⁴⁹

En la actualidad, en Yongsan funciona el Centro Recreativo Dragon Hill, «el mayor *exchange* de Corea», y está dotado de galerías comerciales, media docena de bares y restaurantes, un hotel a la última moda (con distintos precios por habitaciones según el rango), un gimnasio y muchos otros servicios. Dragon Hill es un centro vacacional para los

oficiales y soldados americanos y sus familias, situado en pleno centro de Seúl y vedado a los coreanos. Esta instalación ha irritado a los coreanos hasta tal punto que el 9 de abril de 2003 Estados Unidos aceptó trasladarla a otro lugar, probablemente a alguna otra base situada en un área remota. Queda por ver con qué rapidez el mando de las fuerzas estadounidenses en Corea hace efectivo este acuerdo.

Precisamente a 64 km de Seúl y 19 al sur de la zona desmilitarizada se encuentra Camp Casey, la posición más avanzada y mejor equipada de la 2.^a División de Infantería del ejército. Alberga a más de 6.300 efectivos, lo que representa una gran proporción de las tropas estadounidenses en Corea. Casey es una propiedad de casi 7.700 hectáreas cubierta de edificios de ladrillos rojos y cobertizos de uralita que la hacen parecer una prisión. A esta base pertenecía el soldado raso Kenneth Markle, sin duda el estadounidense más tristemente célebre en Corea del Sur después de que en 1993 violara y asesinara a una coreana, Kum E. Yoon. El estrangulamiento en 1996 de otra coreana, Lee Ki Sun, por Eric Munnich, un soldado raso de 22 años, durante una discusión sobre el pago de sus servicios sexuales, ocurrió en Tongduchon, un pueblo cercano.

El 13 de junio de 2002, un vehículo de orugas militar de más de sesenta toneladas salió de Camp Casey y circuló con estrépito por una estrecha carretera de dos carriles, atravesando algunos pequeños pueblos al norte de Seúl. Los dos sargentos que conducían el vehículo no vieron a dos niñas de trece años que caminaban por la carretera y se dirigían a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Ambas murieron aplastadas. No está claro si los dos soldados conducían el vehículo como parte de sus deberes oficiales, si no consiguieron ver a las chicas debido a equipos mal colocados dentro del vehículo, si el sistema de comunicaciones internas falló o si, sencillamente, había sido mal conectado.

El gobierno coreano solicitó que los sargentos le fueran entregados para ser juzgados por homicidio, pero Estados Unidos se negó a hacerlo invocando el Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas Armadas (SOFA) impuesto al país durante la guerra. En vez de enfrentarse a un tribunal coreano, los soldados fueron acusados de «negligencia criminal» y juzgados por un tribunal militar norteamericano, que los absolvió de las muertes «accidentales». La acusación no presentó verdaderas pruebas durante el juicio, como tampoco se llegó a llamar al oficial al mando de los acusados, que se encontraba en Corea, para que

testificara sobre el entrenamiento y supervisión de los soldados. Después de estos sucesos, estallaron revueltas contra los norteamericanos por toda Corea del Sur, exigiendo primero la revisión del SOFA y, más tarde, pidiendo la salida de las tropas estadounidenses del país.⁵⁰

El 19 de diciembre de 2002, Corea del Sur eligió a Roh Moo-Hyun, un abogado especialista en derechos humanos, para suceder a Kim Dae-Jung en la presidencia. Durante su campaña electoral, Roh se comprometió a proseguir la apertura hacia Corea del Norte iniciada por Kim, y solicitó, asimismo, cambios en las relaciones militares entre Corea del Sur y Estados Unidos. Al parecer el gobierno entrante dijo a Bush que Corea del Sur preferiría vivir con una Corea del Norte dotada de armas nucleares antes que unirse a Estados Unidos en otra guerra. El 9 de abril, el día de la caída de Bagdad, el Pentágono y el gobierno de Roh iniciaron las negociaciones sobre el futuro de las fuerzas estadounidenses en la República de Corea, durante las cuales la delegación norteamericana mostró de pronto una extraordinaria impaciencia por trasladar a la 2.^a División de Infantería lejos de la zona desmilitarizada lo antes posible. Según una fuente, el almirante Thomas B. Fargo, jefe del Comando del Pacífico, había dicho: «Me gustaría estar fuera de aquí ayer».⁵¹

Tal como era su intención, los norteamericanos consiguieron atemorizar a los políticos y ciudadanos de Corea del Sur. La preocupación de los surcoreanos era que una súbita retirada de las tropas estadounidenses hacia una zona segura no sólo podía ser interpretada por Corea del Norte como parte de las preparaciones para un ataque preventivo, sino que, efectivamente, lo fuera. Tanto o más preocupante resultó la decisión de la administración Bush de enviar bombarderos estratégicos B-1 y B-52 a Guam, «en caso de que pudieran ser necesarios en Corea», y su anunció, más tarde, de que un número no precisado de cazabombarderos silenciosos F-117 y de F-15E Strike Eagles, desplegados en Corea del Sur para unos ejercicios militares ya concluidos, permanecerían en el país. Los F-117, indetectables por los radares, serían muy apropiados para atacar gran variedad de objetivos en Corea del Norte, entre otros la planta nuclear de Yongbyon. La última vez que los F-117 permanecieron estacionados en Corea del Sur fue en 1994, cuando el gobierno de Clinton contempló también la posibilidad de dar un «golpe quirúrgico» en Corea del Norte. Esa crisis sólo encontró una solución pacífica cuando el

ex presidente Jimmy Carter fue a Pyongyang y abrió negociaciones directas con Kim Jong-il.

Como era de esperar, la administración Bush considera que los recientes acontecimientos en la península coreana constituyen una prueba adicional de la necesidad de una defensa contra misiles balísticos como protección contra los futuros misiles Taepodong II norcoreanos, dotados de cabezas nucleares. No obstante, la verdad es que, incluso si el sistema lograra derribar una ojiva nuclear norcoreana, la lluvia radiactiva que caería sobre Corea del Sur, y quizá sobre Japón y Okinawa, podría ser casi tan peligrosa como un ataque directo. La consecuencia más seria de esta crisis generada por Estados Unidos ha sido la de proporcionar un gran ímpetu a la proliferación de armas nucleares por todo el mundo. Pequeños países están ahora descubriendo que adquirir una capacidad nuclear es la única manera de impedir que Estados Unidos ejerza su voluntad imperial sobre ellos.⁵² Desde este punto de vista, el problema de Irak es que no poseía en realidad ninguna arma de destrucción masiva.

Corea del Norte sigue siendo un régimen comunista fracasado, con gran parte de su población viviendo en el límite de la hambruna. Ha intentado, de forma intermitente y siempre con gran temor, salir de aislamiento de forma parecida a como China lo hizo, con éxito, a lo largo de los últimos veinte años. Tal como comprendió Kim Dae-Jung, Estados Unidos y Corea del Sur deberían actuar como vencedores magnánimos en lugar de amenazar con volver a utilizar la fuerza. Ningún país de la región —ni la República de Corea, ni Japón, ni China, ni Rusia— desea o cree necesaria otra guerra civil en la península coreana.

El gobierno de Bush está intentando calmar los temores de Corea del Sur con respecto a una posible guerra preventiva hablando sobre los «misiles guiados con precisión» que posee Estados Unidos, su compromiso de evitar la muerte de civiles, sus magníficas y preparadas fuerzas de combate y su convicción de que los norcoreanos que sobrevivan a nuestros bombardeos vitorearán a americanos y surcoreanos como liberadores. Sin embargo, los surcoreanos piensan de otra manera y resulta poco probable que apoyen las ideas estadounidenses sobre la necesidad de una guerra preventiva. Una clara consecuencia de la guerra de Irak es que ya no es posible creer o confiar en los líderes políticos y militares norteamericanos.

Las instituciones del militarismo americano

Descubrí, por ejemplo, el secreto de que, en contra de todas sus declaraciones públicas, el presidente Eisenhower había delegado a los comandantes de los principales teatros de operaciones la autoridad para dar comienzo a un ataque nuclear en determinadas circunstancias, tales como la interrupción de las comunicaciones con Washington —un acontecimiento casi diario, hoy en día—, o la incapacitación presidencial (ocurrida en dos ocasiones con el presidente Eisenhower). El asistente del presidente Kennedy para la seguridad nacional, McGeorge Bundy —y, por consiguiente el presidente— desconocía esa delegación de poderes a inicios de 1961, después de llevar casi un mes en el cargo, cuando le informé al respecto. Kennedy mantuvo la autorización en secreto, al igual que el presidente Johnson.

Daniel Ellsberg, *Secrets* (2002).

EL OBJETIVO DEL EJÉRCITO PARA 2002 consistía en contratar a 79.500 jóvenes como nuevos reclutas. La demografía y el arte de vender tienen su importancia a la hora de procurar reclutar y retener a un ejército formado únicamente por voluntarios y, hasta hace poco, los principales lemas para alentar el reclutamiento eran «Sé todo lo que puedes» y «Un ejército de uno» (o sea, que el ejército sería la reunión de la quintaesencia de los individualistas norteamericanos). Un artículo reciente consiste en un juego de ordenador gratuito denominado *America's Army*, que se destina claramente a conquistar los corazones y las mentes de los adolescentes prendados de la tecnología. En otoño del año 2002 se habían descargado más de 500.000 copias de

www.americasarmy.com, y los reclutadores cuentan ahora con un paquete con los dos discos del juego para regalarlo a los posibles candidatos. En el verano de 2002 muchas revistas de videojuegos incluyeron los discos con alguna edición.

El juego se diferencia de otros videojuegos de combate presentes actualmente en el mercado en que los impactos de las balas no se señalan más que con pequeños puntos rojos, en lugar de los usuales borbotones de sangre y los cuerpos que vuelan despedazados. El ejército desea evitar cualquier sugerencia de que un combate real puede resultar desagradable. De acuerdo con las instrucciones del juego: «Cuando muere un soldado, sencillamente cae y deja de formar parte de la misión en curso. El juego no muestra ningún desmembramiento ni desfiguración». En «Soldados», la segunda parte del juego, los jugadores progresan en el ejército a través de una carrera virtual, durante la cual sirven en distintas unidades y puntúan en apartados tales como lealtad, honor y valor personal a medida que suben en el escalafón. A los enemigos se les representa tanto de la raza negra como blanca, pero con una característica en común: casi todos están sin afeitar. El gobierno se ha gastado hasta el momento 7,6 millones de dólares en desarrollar el juego, y planea dedicar otros 2,5 millones para actualizarlo cada año, además de 1,5 millones para mantener la infraestructura necesaria para que puedan participar múltiples jugadores. En 2003, el ejército esperaba atraer con él entre 300 y 400 reclutas.¹

Otra modalidad de estrategia para interesar a los adolescentes en la carrera militar es el patrocinio de *drag racing* (carreras de aceleración). «El Sargento», el coche especialmente diseñado para competiciones de este tipo tiene 7,2 metros de largo y 6.000 caballos de potencia, utiliza nitrometano como combustible (treinta dólares por algo menos de cuatro litros) y ostenta en el costado la inscripción «EN-TRA EN EL EJÉRCITO» escrita en letras doradas. Todo el que haya estado alguna vez en una carrera y haya visto (u oído) al vehículo pasar de 0 a 320 km por hora en 2,2 segundos se percatará del machismo mecánico que está utilizando el ejército para atraer a los jóvenes reclutas. En la década de 1970 el ejército ya había patrocinado coches de carreras con su nombre, aunque desistió del esfuerzo al considerarlo un desperdicio de dinero. En 1999 inició una nueva colaboración con la National Hot Rod Association, en esta ocasión para presentar su propio coche e instalar cabinas de reclutamiento en las pistas, con he-

licópteros y vehículos de asalto para que los chicos se montaran en ellos. Durante la temporada de 2002, el comando de reclutamiento del ejército invirtió alrededor de 5,5 millones de dólares para competir en 23 carreras de aceleración. Todos los conductores son profesionales, aunque pocos son veteranos de las fuerzas armadas. Se alienta a los institutos del país a que realicen salidas con sus alumnos para disfrutar de «un día en la pista». En 2001, de los cerca de 56.000 jóvenes que asistieron a una carrera de aceleración con sus colegios, 300 se apuntaron al ejército.² Algo que parece funcionar para atraer reclutas es el ofrecimiento de becas universitarias de hasta 50.000 dólares, aunque pocos de los que se alistan terminan por sacarle partido a este programa.

Tanto los videojuegos como los coches de carreras son ejemplos muy norteamericanos del arte publicitario, si bien parece improbable que consigan grandes cambios en la composición de las fuerzas armadas. La raza, la clase socioeconómica y la situación de la economía estadounidense, al igual que la posibilidad de una guerra cercana, influyen en la decisión de alistarse; por otra parte, las mujeres no responden a los videojuegos y a las carreras de la misma manera que los hombres. Durante los preparativos para la segunda guerra contra Irak, los reclutadores militares observaron que prácticamente nadie se presentaba para servir al país en una guerra real.

Un verdadero freno para los reclutamientos es la posibilidad de que el nuevo o la nueva soldado tenga que entrar en combate. Aproximadamente cuatro de cada cinco jóvenes norteamericanos que se alistan en nuestras fuerzas armadas de forma voluntaria eligen específicamente tareas no relacionadas con el combate y se convierten en técnicos en informática, jefes de personal, encargados de logística, mecánicos de camiones, meteorólogos, analistas de información, cocineros, conductores de carretillas elevadoras, ocupaciones, todas ellas, en las que la posibilidad de entrar en contacto con el enemigo es muy baja. Estos jóvenes a menudo se alistan por la escasez de buenos empleos en la economía civil, por lo que buscan refugio en el viejo sistema de socialismo estatal de las fuerzas armadas: una paga fija, vivienda decente, asistencia médica y odontológica, formación profesional y la promesa de una educación universitaria. Hace poco la madre de uno de esos reclutas, cuya hija de diecinueve años estaba a punto de convertirse en analista de informaciones reservadas del ejército, se refirió

a ello; con orgullo pero también con cinismo declaró que: «Los ricos no entran en el ejército ni asumen riesgos, ¿por qué deberían hacerlo? Ya lo tienen todo regalado».³

Esos reclutas no esperan que les disparen. Por consiguiente, los soldados rasos no combatientes debieron haberse sentido tremendamente impactados cuando, en marzo de 2003, los fusiles iraquíes dispararon contra un convoy de municiones del ejército, mataron a once uniformados e hicieron prisioneros a otros seis, entre ellos a la soldado de primera clase Jessica Lynch, de Palestina, Virginia Occidental, que formaba parte de los encargados de suministros. La respuesta del ejército fue: «No hace falta estar en una unidad de combate para encontrar y tener que matar al enemigo». Pese a su llamativa historia, Jessica Lynch es todavía la excepción que confirma la regla. Es raro que el personal militar no combatiente se encuentre expuesto a un tiroteo. Sin embargo, eso no significa que los soldados que realizan tareas de no combatientes no asuman riesgos. Lo que el Pentágono no dice a los soldados Lynch y sus familias es que todo militar, con independencia de su cometido, tiene una probabilidad real de ser herido o morir, dado que ha elegido las fuerzas armadas como una vía de ascender socialmente.

Nuestras guerras más recientes han producido serias consecuencias imprevistas, que han recaído casi con el mismo peso sobre los soldados no combatientes como sobre sus compatriotas en la primera línea de fuego. El factor más importante en la proporción de bajas es la enfermedad conocida como «síndrome de la guerra del Golfo», un trastorno médico potencialmente fatal que apareció por primera vez entre los veteranos que combatieron en el conflicto de 1990-1991 con Irak. Así como durante la guerra de Vietnam el Pentágono minimizó inicialmente los efectos del Agente Naranja aduciendo que eran consecuencia del «trastorno de estrés postraumático», la «fatiga de combate» o la «neurosis de guerra», el gobierno Bush ha restado importancia a los posibles efectos tóxicos de la munición que las fuerzas armadas utilizan de forma generalizada en la actualidad. Las implicaciones son devastadoras, no sólo para los adversarios de Estados Unidos y para los civiles atrapados en su país, convertido en campo de batalla, sino para las propias fuerzas norteamericanas (y es incluso posible que también para su descendencia).

La primera guerra de Irak ocasionó cuatro tipos de bajas: muertos en combate, heridos en combate, muertos en accidentes (entre los que

se incluye el «fuego amigo») y los que presentaron lesiones y enfermedades que surgieron con posterioridad al fin de las hostilidades. A lo largo de 1990 y 1991, unas 696.778 personas sirvieron en el golfo Pérsico, como participantes de las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. De ellos, 148 murieron en combate, 467 fueron heridos y 145 murieron en accidentes, sumando un total de 760 bajas, una cifra bastante reducida ante la proporción de las operaciones. Sin embargo, a partir de mayo de 2002 la Administración de Veteranos (AV) informó que habían fallecido otros 8.306 soldados y que 159.705 se encontraban lesionados o enfermos a consecuencia de «exposiciones» relacionadas con su participación en la guerra. Lo que aún resulta más alarmante, la AV comunicó que 206.861 veteranos, casi un tercio de todo el ejército del general Norman Schwarzkopf, había presentado solicitudes para recibir asistencia médica, compensaciones y pensiones por lesiones y enfermedades cuyo origen estaba en los combates de 1991. Después de revisar los casos, la institución ha clasificado como «veteranos incapacitados» a 168.011 solicitantes. A la luz de esas muertes e incapacidades, la tasa de bajas de la primera guerra del Golfo puede alcanzar, en realidad, un asombroso 29,3 por 100.

Doug Rokke, antiguo coronel del ejército y profesor de ciencia medioambiental en la Universidad de Jacksonville, estuvo encargado de la limpieza del medio ambiente realizada por las fuerzas armadas tras la primera guerra del Golfo. El Pentágono lo despidió posteriormente a consecuencia de sus críticas a los comandantes de la OTAN por no haber protegido de forma adecuada a sus tropas en las áreas donde se emplearon proyectiles de uranio empobrecido (UE), como fue el caso de Kosovo en 1999. Rokke señala que miles de efectivos norteamericanos han permanecido acuartelados en Kuwait y sus alrededores desde 1990, y que su exposición al uranio empobrecido parece producir una cifra más elevada de bajas que la ofrecida por la AV. Rokke indica que entre agosto de 1990 y mayo de 2002 un total de 262.586 soldados se convirtieron en «veteranos incapacitados», mientras que 10.617 fallecieron. Sus cifras alcanzan una tasa de bajas para toda la década del 30,8 por 100.⁴

La sugerencia de que los proyectiles de uranio empobrecido constituyen un factor significativo en esas muertes e incapacidades suscita respuestas acaloradas. Algunos investigadores, a menudo a sueldo del Pentágono, argumentan que es imposible que el UE generara las en-

fermedades relacionadas con la guerra, y que el polvo y los escombros resultantes de la voladura, en 1991, de las fábricas de producción de armas químicas y biológicas constituyen una explicación más probable; otra posible causa sería el «cóctel» de partículas volátiles causado por los proyectiles de UE, la destrucción de los búnkeres de gas nervioso y el aire contaminado por el incendio de los campos petrolíferos. No obstante, toda la información disponible —lo que incluye la anormal concentración de cánceres y deformidades infantiles en Irak y en las regiones de Kosovo en que utilizamos armamento con uranio empobrecido durante los bombardeos de 1999— apunta a un importante papel del UE. Aún más, con su insistencia en emplear ese tipo de armamento, las fuerzas armadas están burlándose de la resolución de 1996 de las Naciones Unidas, la cual clasifica los proyectiles de uranio empobrecido como armas de destrucción masiva ilegales.

El uranio empobrecido, o uranio-238, es un subproducto de los reactores nucleares para producción de energía. Se emplea en proyectiles, como los obuses de los tanques y los misiles de crucero, porque es 1,7 veces más denso que el plomo, se incendia mientras vuela y penetra con facilidad en los blindajes, aunque, por otro lado, se disuelve y se vaporiza con el impacto, característica que lo hace potencialmente mortífero de maneras imprevistas. Cada proyectil disparado por un tanque norteamericano contiene entre 1,3 y 4,5 kg de uranio empobrecido. Esas ojivas son, en esencia, «bombas sucias», y, si bien en sí mismas no son demasiado radiactivas, se sospecha que pueden causar graves enfermedades e, incluso, defectos congénitos cuando se emplean en grandes cantidades. En 1991 las fuerzas estadounidenses lanzaron la asombrosa cantidad de 944.000 proyectiles de UE en Kuwait e Irak. El Pentágono admite que dejó atrás, como mínimo, 320 toneladas de UE en el campo de batalla. Un estudio de los veteranos de la guerra del Golfo demostró que sus hijos tenían mayores posibilidades de nacer con malformaciones y dolencias graves, como la ausencia de ojos, infecciones sanguíneas, problemas respiratorios y los dedos unidos. Dado que las fuerzas armadas emplearon una mayor cantidad de munición con UE durante la segunda guerra de Irak, Rokke teme que las bajas en la posguerra sean todavía más elevadas que en la primera. Cuando vio en la televisión las imágenes de soldados norteamericanos y civiles iraquíes que sin protección pasaban junto a camiones que ardían por los disparos de los tanques, o inspeccionaban edificios

alcanzados por misiles, tuvo la sospecha de que se estaban envenenando con uranio empobrecido.⁵

Los jóvenes estadounidenses a los que se seduce en la actualidad para que entren en las fuerzas armadas pueden convertirse así, literalmente, en «carne de cañón», aunque se hayan asegurado puestos de no combatientes. Esos hombres y mujeres componen un grupo étnicamente heterogéneo que, no obstante, es muy diferente en aspectos importantes de la población de la que proviene. Puesto que la pertenencia a las fuerzas armadas es por completo voluntaria, esos jóvenes ya no constituyen, en ningún sentido, un ejército de ciudadanos, aunque el Pentágono así lo plantee. Las fuerzas armadas contemporáneas apenas guardan relación con los ejércitos que lucharon en la segunda guerra mundial o en las guerras de Corea y Vietnam, formados por alistamiento obligatorio. Tampoco se parecen nuestras fuerzas armadas a los ejércitos que se fundan en la obligación universal de defender al país, como por ejemplo el de Israel, del que sólo se encuentran exentos los judíos ortodoxos. Dado que los soldados y los marinos de hoy saben que constituyen un estrato especial de la sociedad, se sienten cada vez más inclinados a pensar en términos corporativos —lo que constituye un aspecto del militarismo— y no ya como personas que esperan regresar en breve a la vida civil. Además, como los militares facilitan la salida de aquellos que se alistán y después descubren que no se adaptan a la vida en las fuerzas armadas, la subcultura de los barracones y los buques no hace más que fortalecerse. En 2002 el ejército perdió el 13,7 por 100 de los reclutas durante el período de formación.

De acuerdo con el 26.º informe del Departamento de Defensa sobre la «Representación de la población en el servicio militar», correspondiente al año fiscal 1999, los militares en servicio activo a tiempo completo eran casi 1,4 millones.⁶ Además, las reservas activas —formadas por la Guardia Nacional del Ejército, la Reserva del Ejército, la Reserva Naval, el Cuerpo de Reserva de la Infantería de Marina, la Guardia Aérea Nacional y la Reserva de la Fuerza Aérea— totalizaron poco menos de 871.000 personas. Existían, asimismo, más de 405.000 hombres y mujeres en la reserva inactiva y en la Guardia Nacional inactiva. En el año fiscal 1999 los distintos cuerpos admitieron en conjunto a aproximadamente 184.000 nuevos reclutas, y casi 6.000 estadounidenses que antes habían estado en las fuerzas armadas re-

gresaron al servicio activo. Más de 16.000 nuevos oficiales se presentaron al servicio activo. También en 1999 cerca de 55.000 reclutas sin experiencia militar previa y 88.000 con ella se alistaron en la reserva. Más de 17.000 oficiales pasaron a pertenecer a la Guardia Nacional o a otras unidades de la reserva activa.

Los militares en servicio activo son, por supuesto, mucho más jóvenes que la población civil en su conjunto. Casi la mitad de los que estaban alistados en las fuerzas armadas en servicio activo tenía entre 17 y 24 años, en contraste con el 15 por 100 de la fuerza de trabajo civil que tiene esa misma edad. Los oficiales eran mayores que los soldados rasos (con una edad media de 34 años), pero también en este caso eran más jóvenes que sus equivalentes civiles, los licenciados, cuya edad media es de 36 años. Esto significa que los estadounidenses con los que los extranjeros entran en contacto con mayor frecuencia tienden a estar en el final de la adolescencia o a ser jóvenes veinteañeros, que desconocen casi por completo otras culturas e idiomas, pero han sido adoctrinados para pensar que representan a una nación a la que el presidente George W. Bush se ha referido como «la mayor fuerza del bien de la historia».

En materia de razas y etnias, los afroamericanos se encuentran representados en exceso en las tropas alistadas. Alrededor del 20 por 100 de los reclutas en servicio activo en 1999 eran afroamericanos, que en cambio constituyen sólo el 12,71 por 100 de la fuerza de trabajo civil del país en edad militar. Ese mismo grupo tiene, además, una tasa de permanencia en las fuerzas armadas más elevada, lo que aumenta su representación entre los alistados en activo al 22,5 por 100.

Los hispanos se encontraban poco representados; sumaban sólo el 11 por 100 de los nuevos reclutas, pese a ser el 13 por 100 de la población general. Aunque contribuyeron con un 9,5 por 100 de todo el personal reclutado en servicio activo, estaban representados en exceso en las posiciones de combate, donde constituían el 17,7 por 100 de las fuerzas que empuñaban armas de forma directa. La baja presencia de latinos puede explicarse, probablemente, por las altas tasas de abandono de la escuela secundaria —los reclutas necesitan haber concluido los estudios en un instituto de segunda enseñanza o presentar un diploma equivalente—, así como por el hecho de que muchos viven en el país de forma ilegal. En ciudades fronterizas, como San Diego, los reclutadores del ejército se han desplazado al otro lado de la

frontera, a Tijuana, para intentar alistar a jóvenes mexicanos ofreciéndoles permisos de residencia o la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense tras un período en el ejército.⁷ La marina y la infantería de marina reclutan por lo general más hispanos que el ejército y la fuerza aérea. La infantería de marina presenta la tasa de permanencia de hispanos más elevada. «Otras» minorías (nativos americanos, asiáticos y originarios de las islas del Pacífico), que constituyen poco más del 5 por 100 de la población civil, contribuyen con un 7 por 100 de los reclutas. Por tanto, en 1999 el 38 por 100 del total de la tropa alistada en activo eran personas no blancas (el 22 por 100, afroamericanos, el 9 por 100, hispanos, y el 7 por 100, otros).

Entre los oficiales, los porcentajes fueron distintos. Casi el 9 por 100 de los nuevos oficiales eran afroamericanos, el 4 por 100, hispanos y el 9 por 100, otros. En los cuerpos de oficiales en servicio activo, el 8 por 100 eran afroamericanos, el 4 por 100, hispanos y el 5 por 100, otros. Los afroamericanos, por consiguiente, constituían entre los oficiales una proporción muy inferior de la que constituían entre los soldados. La misma pauta se mantenía entre los reservistas. Las tres academias militares, West Point para los oficiales del ejército, Annapolis para los de la marina y la infantería de marina y Colorado Springs para los de la fuerza aérea, tienen políticas explícitas de preferencias raciales en cuanto a la admisión. West Point mantiene objetivos porcentuales específicos. Procura conseguir que exista, en cada promoción entrante, entre un 10 y un 12 por 100 de afroamericanos, y acostumbra a obtener entre un 7 y un 9 por 100. Las tres academias buscan de manera activa reclutar a las minorías raciales, para lo que envían a candidatos prometedores pero poco cualificados a escuelas preparatorias durante un año antes de admitirlos. (Esas políticas entran en contradicción directa con las del gobierno Bush, que anunció, el 15 de enero de 2003, su oposición a que la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan empleara la «acción positiva» para obtener un cuerpo estudiantil «diverso».)

Las fuerzas armadas defienden la utilización del factor racial para las admisiones al considerar que, como el 28 por 100 del personal de la fuerza aérea y el 44 por 100 del personal del ejército pertenecen a minorías raciales, un cuerpo de oficiales compuesto únicamente por blancos podría influir negativamente en la moral de las tropas, una posibilidad que trae a la mente el temor a los llamados «fraggings» de la

guerra de Vietnam, episodios en los que reclutas que habían sido enviados a una guerra que no eran capaces de soportar lanzaban granadas de fragmentación (*frags*) en los alojamientos de los oficiales.⁸ En muchos de los 209 incidentes de ese tipo que se registraron en Vietnam, los hombres que lanzaban las granadas o disparaban a sus superiores eran afroamericanos, mientras que el objeto de los ataques eran, en su mayor parte, jóvenes oficiales de campo de raza blanca. El racismo en las fuerzas armadas fue claramente una de las causas de esos sucesos. En enero de 2003, durante una sesión informativa del Pentágono sobre las fuerzas armadas totalmente voluntarias, surgió el asunto de los ataques con granadas de fragmentación. «No es un asunto agradable», comentó el oficial del Departamento de Defensa que ofreció la conferencia. El 23 de marzo siguiente, durante la guerra de Irak, tuvo lugar al menos un incidente de ese tipo.⁹

En 1999 las mujeres representaban el 18 por 100 de los nuevos reclutas y el 24 por 100 de los nuevos miembros de las reservas en activo. De todo el personal alistado en el servicio activo, el 14 por 100 eran mujeres. Alrededor del 20 por 100 de los nuevos oficiales eran de sexo femenino, lo que representa el 15 por 100 de todo el cuerpo de oficiales. Resulta muy significativo que tanto entre los soldados de tropa como en el cuerpo de oficiales, el servicio activo o la reserva activa, las mujeres militares tengan mayores probabilidades de pertenecer a minorías raciales o étnicas que los hombres. La mitad de las mujeres alistadas en las fuerzas armadas de EE.UU. provienen de grupos minoritarios. En 1999 las mujeres afroamericanas constituían el 35,3 por 100 de las personas del sexo femenino alistadas en las fuerzas armadas.

Las agresiones sexuales continúan siendo un problema generalizado para las mujeres en todos los cuerpos de las fuerzas armadas, incluso en los desplegados en el exterior. De acuerdo con un artículo del *American Journal of Industrial Medicine*, el 28 por 100 de las mujeres veteranas afirmaban haber sufrido durante su carrera algún tipo de agresión sexual, o TSM, «trauma sexual militar», el término empleado por el Pentágono y las oficinas de la Administración de Veteranos. En 1996 el Departamento de Defensa realizó una encuesta entre las mujeres de las fuerzas armadas acerca de las experiencias que habían tenido en los últimos doce meses, y encontró que el 9 por 100 de las que servían en la infantería de marina había sufrido una violación o un in-

tento de violación en el transcurso del año; en el ejército la cifra era de un 8 por 100, en la marina de un 6 por 100 y en la fuerza aérea de un 4 por 100. Puesto que alrededor de 200.000 mujeres sirven en las fuerzas armadas, esos porcentajes representan unas 14.000 agresiones o intentos de agresión al año. Sin embargo, pocos casos son denunciados. Según el Departamento de Defensa, en realidad sólo llegaron a denunciarse 24 casos de agresión sexual durante la preparación y el desarrollo de la primera guerra del golfo Pérsico.

Marie Tessier, una autoridad en violencia contra las mujeres, escribió: «Todo el sistema de justicia penal de las fuerzas armadas se encuentra sumamente distanciado del mundo civil. ... La diferencia más importante consiste en que las decisiones acerca de la investigación y la acusación no las toma una institución externa independiente, como la oficina del fiscal, sino que siguen la cadena de mando. Esto hace que el proceso suponga un conflicto de intereses para los comandantes».¹⁰ El escándalo sobre las violaciones en la Academia de la Fuerza Aérea que estalló en 2003 puso esto en evidencia. La fuerza aérea llevó al congreso 54 denuncias por violación y otras agresiones sexuales sucedidas en la institución durante la última década, pero el secretario de la fuerza aérea, James G. Roche, afirmó que: «Existe, con toda probabilidad, otro centenar de casos del que no hemos oído hablar».¹¹ El director del centro civil de asistencia para víctimas de violaciones de la localidad observó que la queja más frecuente de las cadetes que recurrían al centro era su temor a que los oficiales e investigadores de la academia no respetaran la confidencialidad de sus casos. Debido a la jerarquía la cuestión del consentimiento o no de una relación sexual es también más compleja en la vida militar que en la civil. Tanto los varones como las mujeres militares han sido adoctrinados para obedecer las órdenes de un oficial superior o de mayor graduación.

En la actualidad, una ligera mayoría de los soldados, marinos, infantes de marina y personal de la fuerza aérea está casada, en comparación con el 40 por 100 que lo estaba en 1973. El porcentaje es más alto entre los hombres. En cuanto a la educación, el Departamento de Defensa informa de que los reclutas de 1999 poseían una capacidad de lectura media correspondiente al penúltimo curso de bachillerato, mientras que la capacidad de lectura media de los jóvenes civiles del mismo grupo de edad estaba exactamente un grado por debajo. El sur del país, en especial los estados del Atlántico y del centro suroeste (Te-

xas, Arkansas, Luisiana), contaba con la mayor representación geográfica. Más de dos quintos de los nuevos reclutas procedían de allí. El noreste y centro norte se encontraban infrarrepresentados, mientras que los reclutas del oeste tenían aproximadamente la misma proporción que los jóvenes de 18 a 24 años en la población de esa región. A partir de una encuesta sobre la educación, nivel de empleo, propiedad de la vivienda y ocupación de los padres, los datos de 1999 demuestran además que tanto los reclutas del servicio activo como los de la reserva provenían sobre todo de familias de los estratos medio y medio-bajo. El mismo informe concluía: «Aunque las fuerzas armadas cuentan con personas de distintas procedencias, no son una réplica exacta de la sociedad como un todo. El estilo de vida militar resulta más atractivo a determinados miembros de la sociedad que a otros».

El estamento militar se funda en los ideales de patriotismo, defensa de la nación y lealtad al conjunto abstracto de valores que, a menudo, se denomina «estilo de vida norteamericano». No obstante, a la mayor parte de sus miembros le motiva la posibilidad de hacer una carrera en el sector de la defensa, de utilizar a las fuerzas armadas para salir de guetos económicos y raciales, así como la fascinación, con frecuencia inspirada por los medios de comunicación, por la tecnología militar. Los jóvenes afroamericanos se unen en gran número a las fuerzas armadas entre otras razones para escapar de los guetos de los barrios pobres y de los trabajos en la «economía informal», que muchas veces los conducen a la prisión. Casi ninguno se alista en primer lugar por motivos patrióticos o de servicio público. En repetidas conversaciones con periodistas, los jóvenes soldados y marinos hicieron referencia al problema de la alta tasa de paro en la vida civil, que la tendencia de las industrias a contratar mano de obra en el exterior había agravado, y a la probabilidad de entrar en conflicto con la ley si intentaban seguir por cuenta propia. Uno afirmó que si no hubiera entrado en la marina, «habría acabado en la cárcel». ¹² Una joven de diecinueve años dijo: «Lo más probable es que, si no me hubiera alistado en la marina, estaría haciendo lo mismo que la mayoría de mis amigas: trabajar en un establecimiento de comida rápida». ¹³

El periodista de investigación Kevin Heldman, que en 1997 entrevistó a las tropas en Camp Casey, a veinte kilómetros de la zona desmilitarizada de Corea del Sur, cita a un soldado cuyo sargento le espetó, por no desear realistarse: «¿Qué vas a hacer cuando salgas de

aquí, trabajar en un McDonald's?». El soldado contestó: «Cuando salga, si me pongo a servir hamburguesas en un McDonald's, al menos estaré usando un uniforme del que me enorgullezco». ¹⁴ El caso del soldado Michael Waldron, de 23 años, es típico. Le contó a Heldman que se unió al ejército por la siguiente razón: «Cuando salí del instituto, los empleos eran muy malos». Sirvió durante dos años y luego durante seis meses más en la primera guerra del Golfo. Después dejó las fuerzas armadas, entró en la Guardia Nacional, se casó y vivió en una caravana en Georgia, donde trabajó en la construcción y en la colocación de tejados y marcos de aluminio. Se divorció, su coche se estropeó, suspendió el examen para oficial de policía, regresó a casa de sus padres y, después de haber estado apartado del servicio activo por dos años, volvió a alistarse. Hay que reseñar que muchos reclutas, al igual que Waldron, declaran haber entrado en el ejército para conseguir trabajar después como oficiales de policía. En numerosas ciudades, a los aspirantes a la fuerza policial se les permite sustituir los créditos universitarios necesarios por dos años de servicio militar.

Los delitos y el racismo son omnipresentes en las fuerzas armadas. A pesar de que éstas siempre procuran presentar todos los incidentes delictivos o de origen racista como casos únicos, cometidos por un número ínfimo de «manzanas podridas», y ante los cuales los oficiales reaccionan de manera tajante, una realidad muy distinta se evidencia en las bases militares estadounidenses repartidas por todo el planeta. Heldman enumera los casos más conocidos desde mediados de la década de 1990: «Unos soldados con vínculos con grupos defensores de la superioridad blanca fueron detenidos por matar a una pareja negra en Carolina del Norte; un soldado fue sentenciado a muerte por abrir fuego sobre una formación, matar a uno y herir a dieciocho, tras lo que explicó: "Quería enviar un mensaje a la cadena de mando, que se ha olvidado del bienestar de los soldados corrientes"; diez soldados negros del Fuerte Bragg apalearon a un militar hasta dejarle en coma; un soldado del Fuerte Campbell [Kentucky] lanzó su vehículo contra un grupo de soldados y civiles que se peleaban y mató a dos personas; dos soldados fueron muertos y otro herido en el Fuerte Riley, Kansas, en el segundo homicidio doble ocurrido en esa base en menos de un año; catorce militares fueron arrestados por contrabando de cocaína y heroína; veintitrés mujeres que trabajaban en el Fuerte Bliss [Texas] presentaron una denuncia colectiva en la que señalaban que

se las había acosado para posar desnudas o realizar actos sexuales; en Japón, un militar fue acusado de hacer exhibicionismo ante una niña; otros cuatro fueron condenados por violar a una chica de catorce años; uno más fue detenido por cortarle el cuello a una japonesa y robarle el bolso; dos infantes de marina fueron arrestados por violar y robar a otra japonesa de 56 años, y tres militares violaron a una niña de doce años en Okinawa, lo que desencadenó una protesta de más de 50.000 personas.¹⁵ Únicamente en Corea del Sur, en 1996, fueron declarados 861 delitos cometidos por militares estadounidenses que involucraban a civiles coreanos.

Esos incidentes sólo llegan a la prensa norteamericana en contadas ocasiones. Sin embargo, en el verano de 2002 los estadounidenses se conmocionaron al leer que, en el intervalo de seis semanas, cuatro soldados de élite de las Fuerzas Especiales y la Delta Force, pertenecientes a la base del Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, asesinaron a sus esposas. En un quinto caso de asesinato, fue la esposa la que mató a su marido, también miembro de las Fuerzas Especiales, mientras dormía. Tres de los soldados habían regresado recientemente de Afganistán, lo que llevó a *U.S. News & World Report* a preguntarse si la formación de las Fuerzas Especiales podría «preparar a los hombres para el homicidio». Al final, el reportaje concluía que, sencillamente, no existía explicación para los asesinatos, más allá de «la complicada alquimia del servicio militar y los tristes misterios de unos matrimonios que salieron demasiado mal».¹⁶

De acuerdo con un informe de 1999, la tasa de episodios de violencia doméstica en las fuerzas armadas se incrementó de 18,6 por cada mil soldados en 1990 a 25,6 por cada mil en 1996. Por el contrario, a lo largo de ese mismo período, el número de ese tipo de incidentes entre la población general bajó. Algunos estudios sugieren que la tasa de violencia doméstica es de dos a cinco veces más elevada en las fuerzas armadas que entre la población civil.¹⁷ Resulta probable que las experiencias de los asesinos del Fuerte Bragg en Afganistán ejercieran alguna influencia sobre sus inclinaciones hacia la violencia. Poco después de los crímenes, *Newsweek* informó de forma detallada que las tropas de las Fuerzas Especiales y de la 82.^a División Aerotransportada se comportaban de un modo sumamente brutal con los civiles afganos desarmados. Por ejemplo, los soldados hacían turnos para sacarse fotos mientras apuntaban con un rifle a la cabeza de un anciano

afgano que pedía clemencia de rodillas. Un informe dijo que los soldados de la 82.^a División Aerotransportada eran tan indisciplinados que habían acabado «en minutos con seis meses de trabajo de construcción de la comunidad».¹⁸

Las fuerzas armadas son conscientes del problema. La infantería de marina canceló en 2002 su encuentro anual de tiradores de élite, programado para finales de octubre en la base de Quantico, Virginia, puesto que un francotirador, que resultó tener formación militar, acechaba entonces a todo el distrito de Columbia.¹⁹ En el mismo mes pero al otro lado del país, otro francotirador, un veterano de la guerra del Golfo que había permanecido durante once años en el servicio activo y recibido formación en la unidad de élite Ranger, disparó y mató a tres profesores auxiliares de enfermería en el campus de la Universidad de Arizona.²⁰

En septiembre de 2002 la marina hizo pública una serie significativa de episodios relacionados con el portaaviones *Kitty Hawk*, perteneciente a la base naval de Yokosuka, al sur de Tokio, Japón, y que había servido en el mar Arábigo en 2001-2002, durante el ataque inicial a Afganistán. En agosto de 2002 el portaaviones regresó a Japón, donde la tripulación cometió una serie de delitos, lo que provocó la destitución del capitán por perder el control del buque y los hombres a su cargo. El 11 de agosto un contramaestre agredió y robó a un japonés de 68 años, y la policía de Yokosuka le arrestó a las puertas de la base naval. Dos días más tarde, un miembro de la tripulación de 19 años fue arrestado por robarle el coche, tras agredirla, a una japonesa de 43 años mientras se encontraba en el interior de su vehículo, detenido frente a un semáforo. Diez días después, los funcionarios de la aduana japonesa arrestaron a otro contramaestre del *Kitty Hawk* que intentaba introducir en el país un kilo de marihuana, procedente de Bangkok, a través del aeropuerto de Narita. La publicidad que recibieron estos hechos en Japón fue devastadora. El vicealmirante Robert Willard, comandante de la 7.^a Flota estadounidense, relevó al capitán Thomas Hejl y lo sustituyó por el capitán Robert Barabee, del crucero *Seattle*, para que restaurara la disciplina. (El 13 de febrero de 2003, el oficial superior del capitán Barabee, el contralmirante Steven Kunkle, jefe del grupo de batalla del portaaviones *Kitty Hawk*, fue asimismo relevado del mando, por haber mantenido «una relación inapropiada con una oficial naval».)

Mientras trabajaban en el problemático caso del *Kitty Hawk*, dos periodistas británicos descubrieron que existía en el buque una situación de racismo institucionalizado semejante a la que generó las revueltas raciales en ese mismo navío durante la guerra de Vietnam. Roland Watson y Glen Owen escribieron acerca de su reacción al visitar el portaaviones: «Subir [al buque] es como entrar en el túnel del tiempo y volver al sur profundo de antaño. En las entrañas del portaaviones, donde la tripulación permanece confinada durante períodos de seis meses, cada camarote acoge una docena de trabajadores. La mayoría son negros o puertorriqueños, y ganan entre 7.000 y 10.000 dólares al año por trabajar a temperaturas infernales en las cocinas y las salas de máquinas. A medida que se asciende a través de los once niveles que separan a este grupo de los alojamientos de los pilotos bajo la cubierta, los aposentos se van haciendo más grandes, el aire más fresco y los tonos de la piel más claros. Los oficiales viven con un desconocimiento casi completo del mundo que hormiguea debajo de ellos, y cuentan historias de segunda mano sobre asesinatos, luchas de bandas y drogadicción. Está prohibido que los visitantes se aventuren hasta las sofocantes cubiertas inferiores, al lado de los inmensos motores movidos por energía nuclear. ... El acceso a la cubierta de aterrizaje, donde zumban los F-14 y F-18 que toman parte en ejercicios, se encuentra vedado a todos, a excepción de la tripulación de vuelo». ²¹ Este tipo de situaciones es corriente en las fuerzas armadas. En Corea, por ejemplo, los soldados han organizado sus propias pandillas raciales: los NFL («Niggas for Life») para los afroamericanos, los «Wild Ass Cowboys» y los «Silver Star Outlaws» para los blancos, y «La Raza» para los latinos. ²²

En estas condiciones, reclutar y retener gente suficiente para dotar de personal a todos los puestos avanzados y navíos del imperio es un trabajo incesante, y los militares se han vuelto en extremo creativos a la hora de encontrar formas de atraer a jóvenes de ambos sexos a las filas. Una táctica empleada comúnmente por los reclutadores consiste en obtener el nombre, las señas y el número de teléfono de los estudiantes de un instituto e inundar su casa con envíos postales no solicitados, llamadas de teléfono, vídeos a favor de la guerra y camisetas estampadas con lemas militares. El mensaje se dirige tanto a los padres como a los estudiantes, y hace hincapié en las ventajas de servir en las fuerzas armadas, entre las que se incluye una posible ayuda para

la universidad. Cuando los reclutadores entrevistan a un candidato, están obligados a preguntarle si ha fumado marihuana alguna vez. De acuerdo con numerosos relatos, si el estudiante responde afirmativamente, los entrevistadores se limitan a repetir la pregunta una y otra vez hasta que el candidato contesta que no: sólo entonces anotan su respuesta. ²³

Fueron tantas las quejas sobre el acoso ejercido por los reclutadores en San Diego, California, en 1993 que el Distrito Escolar Unificado de San Diego decidió dejar de proporcionar a éstos cualquier tipo de información sobre los estudiantes. A partir de entonces, los militares movilizaron a los políticos, la cámara de comercio, el superintendente de las escuelas e incluso el gran jurado del condado, con el fin de que presionaran a la junta escolar para que echara atrás esa medida. No obstante, durante los años que duró «la prohibición», el mensaje del Pentágono nunca estuvo ausente de los colegios de San Diego, puesto que existen once unidades Junior ROTC (Cuerpos de Entrenamiento para Oficiales de Reserva) dentro de los institutos de la ciudad, donde funcionan como centros de reclutamiento permanentes. Finalmente, el estamento militar decidió recurrir a la vía legislativa para obligar a todos los institutos a permitir el trabajo proselitista de los reclutadores, con la amenaza de recortar los fondos federales para la educación.

En 2000, el presidente Clinton firmó una ley, impulsada por el Pentágono, que otorgaba a los reclutadores del ejército el mismo acceso a los institutos que el que tenían garantizado los reclutadores de empresas y universidades. Sin embargo, la ley no preveía sanciones por negarse a recibir a los militares, y eximía a los institutos de aquellos distritos en los que, como en San Diego, se hubiera adoptado oficialmente una política para restringir el acceso de los reclutadores. Con el fin de superar tales obstáculos, en 2001 el Pentágono ideó una enmienda a una nueva ley que tenía por objeto ayudar a los estudiantes desfavorecidos. Esa enmienda, incluida en la que el presidente Bush llamó (aparentemente sin ironía) su «Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001», declara: «Todos los institutos de enseñanza secundaria que reciban fondos federales de acuerdo con esta ley deben permitir que los servicios de las fuerzas armadas estadounidenses realicen con regularidad actividades de reclutamiento en las dependencias del instituto, de modo que resulten accesibles a todos los estudiantes

del mismo». La cámara de representantes aprobó esa ley por 366 votos a favor y 57 en contra. El senado hizo lo mismo, mediante el voto a mano alzada, y el 8 de enero de 2002 el presidente Bush firmó la ley. Tal como dijo en tono victorioso el diputado republicano por Illinois John Shimkus: «Sin reclutadores no hay dinero».²⁴

Al Pentágono le agradó tanto esa disposición que decidió extender su recién descubierta influencia a las universidades y facultades del país, la mayor parte de las cuales rechaza que sus servicios de colocación de estudiantes colaboren con empleadores que realicen discriminaciones en función de la raza, el sexo, la religión, el origen nacional, las discapacidades o la orientación sexual. Hasta agosto de 2002, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard consiguió impedir que actuaran en ella los reclutadores del Cuerpo de Auditores Generales de las fuerzas armadas, porque los estudiantes cualificados que deseaban alistarse eran rechazados si mostraban abiertamente ser homosexuales o bisexuales. No obstante, el Departamento de Defensa ha realizado una nueva interpretación de la ley según la cual ésta dice que, si alguna parte de la universidad niega el acceso a los reclutadores militares, la totalidad de la universidad perderá el acceso a los fondos federales. Harvard no podía arriesgarse a perder 300 millones de dólares en subvenciones, y por consiguiente forzó a su Facultad de Derecho a aceptar a los reclutadores. Las fuerzas armadas afirman que continuarán vetando de manera abierta a los abogados homosexuales y bisexuales, dado que, supuestamente, amenazan «la cohesión de la unidad». George Fisher, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, comentó al respecto: «En el campo de batalla, esa justificación es meramente improbable, pero en los despachos del Cuerpo de Auditores Generales, es absurda».²⁵

Otro aspecto de los creativos esfuerzos del Pentágono para atraer a más reclutas consiste en prestarle apoyo a las películas de Hollywood favorables a la guerra. Esto no es, precisamente, una novedad. La primera película de Hollywood sobre combates aéreos, realizada con asesoramiento, personal y equipamiento militares, a cambio de que las fuerzas armadas examinaran por anticipado el guión y tuvieran el derecho de efectuar cambios en el mismo, fue *Wings* (Alas) en 1927. Lawrence H. Suid, historiador de películas militares, escribió: «El precio de la gloria, Alas, Fuerza aérea, Arenas sangrientas, El día más largo y centenares de otras películas de Hollywood han creado la imagen de

que la guerra es emocionante, un lugar para demostrar la masculinidad y para desafiar a la muerte de un modo socialmente aceptable. Por consiguiente, hasta finales de la década de 1960, las películas de guerra norteamericanas siempre terminaban en victoria, con nuestros soldados, marinos, infantes de marina y aviadores corriendo más deprimidos, que el enemigo, fuera éste alemán, italiano o japonés. Esas victorias de ficción reforzaron la imagen de que las fuerzas armadas estadounidenses pueden conquistarlo todo, son todopoderosas y siempre tienen la razón».²⁶ Durante la guerra de Vietnam y después de la misma, sucedieron algunos cambios: *Patton* (1970) introdujo cierto realismo en las películas bélicas, y el Pentágono rehusó colaborar en *Apocalypse Now*, que ambientada en Vietnam cuenta la historia de un oficial al que envían a matar a otro que ha enloquecido. En la era post-Vietnam tampoco prestó su apoyo a películas como *La teniente O'Neil*, con Demi Moore, sobre una mujer decidida a formar parte de los SEALs, unidad élite totalmente masculina. Sin embargo, pronto regresaron las viejas pautas. Cada rama de las fuerzas militares posee hoy un despacho en Los Ángeles, y la relación entre los productores y los «oficiales de proyecto» del Pentágono enviados a los rodajes de las películas para observar todo lo que se está filmando y ofrecer su asesoramiento es más cercana que nunca.²⁷

Un ejemplo contemporáneo de los estrechos vínculos entre Hollywood y los esfuerzos para el reclutamiento es *Pearl Harbor*, de los estudios Disney. La película se estrenó el 21 de mayo de 2001, con una proyección especial en la cubierta de aterrizaje del portaaviones nuclear *John C. Stennis*. Se montaron las gradas, se instaló una inmensa pantalla y se trasladó el portaaviones (sin aviones) de su puerto base en San Diego a Pearl Harbor específicamente para ello. La marina y Disney invitaron al estreno a más de 2.500 personas. Tal como muestran los créditos, gran número de mandos de las fuerzas armadas ayudaron a realizar la película; a cambio pudieron realizar modificaciones en el escenario con el fin de presentar a los militares bajo una óptica favorable y promover la idea de que el servicio es romántico, patriótico y divertido. Según el *Chicago Tribune*, los reclutadores militares llegaron a colocar mesas en los vestíbulos de los cines donde se proyectaba la película, con la esperanza de atrapar a unos cuantos jóvenes a la salida de este ardid reclutador de tres horas de duración.²⁸

Disney y el Pentágono también trabajaron estrechamente con los medios de comunicación para divulgar la idea de que *Pearl Harbor* relataba los logros de lo que el presentador de la NBC Tom Brokaw ha denominado «la generación más grande» en su libro del mismo título (una generación totalmente distinta de la generación de Vietnam, de la que el Pentágono preferiría que el público se olvidara). El 26 de mayo de 2001, un día después del estreno de la película, la cadena ABC-TV, propiedad de Disney, emitió un programa especial de una hora de duración sobre el ataque a Pearl Harbor narrado por David Brinkley, y al día siguiente su rival, la cadena NBC, emitió un especial de dos horas elaborado por la *National Geographic* y con la participación del mismo Tom Brokaw. La televisión por cable MSNBC, filial de la NBC, difundió luego un programa de dos horas sobre los supervivientes del ataque, narrado por el general Norman Schwarzkopf, comandante de la guerra del Golfo.²⁹

Después de los atentados del 11 de septiembre, el Pentágono realizó un cortometraje, posiblemente con la intención de alentar el respaldo civil a las fuerzas armadas, para ser exhibido antes de numerosas películas. El corto, titulado *Enduring Freedom: The Opening Chapter* (Libertad Duradera: el primer capítulo) y creado por el teniente coronel James Kuhn, costó 1,2 millones de dólares. «Libertad Duradera» era, por supuesto, el nombre de la campaña militar contra Afganistán. Pese a que algunos padres se opusieron a la exhibición del corto —que muestra escenas de los aviones chocando contra las Torres Gemelas de Nueva York— antes de las películas infantiles, el público pareció aceptar su proyección antes de filmes del estilo de *Las cuatro plumas* o *Sweet Home Alabama*. Durante su elaboración, las cámaras de las fuerzas armadas rodaron más de 250 horas de película, lo que incluye escenas filmadas en Kabul, Afganistán, con un comando antiterrorista, en la base de los infantes de marina de Twentynine Palms, California, en el océano Índico, en Hawái, en Yuma, Arizona, y en Norfolk, Virginia. Las escenas sobrantes se utilizarán en propagandas y DVD a favor del reclutamiento. Además, tras un acuerdo con Regal Entertainment Group, la mayor cadena de cines del país, el Pentágono planea la proyección del corto antes de todas las películas que se exhiban en las 4.000 pantallas de la cadena.³⁰

En estrecha relación con las actividades cinematográficas del Pentágono están sus operaciones generales de relaciones públicas. Éstas

consisten, entre otras cosas, en ayudar a los medios de comunicación a mostrar una visión favorable de las fuerzas armadas, en fomentar sus relaciones con grupos civiles promilitares a expensas de los contribuyentes y en suprimir la información que las fuerzas armadas no desean que se encuentre a disposición del congreso o de la opinión pública. Al igual que el patrocinio de las películas de guerra, la manipulación de los medios de comunicación con el fin de difundir los pretextos para las acciones militares cuenta asimismo con una larga historia en Estados Unidos. La propaganda a favor de la guerra y contra el comunismo ha sido una constante en la vida pública del país desde que éste entró en la segunda guerra mundial. En la década de 1970, la obsesión de los militaristas civiles y uniformados por cerrar la «brecha de credibilidad» consecuencia de la guerra de Vietnam los condujo a emprender un nuevo esfuerzo. Las mentiras oficiales sobre los progresos militares durante el conflicto y su posterior desenmascaramiento por parte de la prensa llevaron a los jefes del Pentágono a profesionalizar el manejo de las noticias y a buscar formas de suprimir los aspectos negativos de cualquier campaña militar estadounidense.

La operación «Furia Urgente», nombre que recibió la invasión de la pequeña isla de Granada ordenada por el gobierno Reagan en octubre de 1983 para, supuestamente, rescatar a algunos estudiantes norteamericanos, ocupa un lugar relevante en la historia de la manipulación de la prensa por parte del Pentágono. Con las memorias de Vietnam todavía frescas en la mente, el secretario de Defensa Caspar Weinberger y el comandante de las fuerzas invasoras, el vicealmirante Joseph W. Metcalf III, prohibieron la presencia de cualquier periodista en la isla. Fue el primer conflicto estadounidense del que se excluyó a los medios de comunicación al comienzo de las operaciones militares. Después de tomar la isla, las fuerzas armadas incluso pusieron bajo custodia a un periodista que había estado allí antes de la invasión y lo condujeron al buque insignia. Y, lo que aún es más importante, los reporteros que intentaron llegar a Granada de forma independiente acusaron a los aviones de la marina de atacar sus barcos. La afirmación realizada por reporteros críticos de que las restricciones impuestas a la prensa tenían por fin ocultar hechos embarazosos para las fuerzas armadas era casi con seguridad cierta, dado el gran número de episodios de ineptitud en el espionaje, fallos en las comunica-

ciones e incompetencia general durante la toma de una isla en gran parte desprovista de defensas.

La fuerza de invasión estaba compuesta por unos 5.000 infantes de marina, los Army Rangers y parte de la 82.^a División Aerotransportada, además de un equipo de los Navy SEAL; la resistencia era inexistente. Al tercer día de una campaña que duró cinco, los militares permitieron que un pequeño grupo (*pool*) de reporteros cuidadosamente elegido visitaran Granada. Ésa fue la primera vez en que se utilizó el sistema del «pool» para informar sobre un conflicto: se agrupa a unos pocos periodistas y se les proporciona un recorrido escoltado por el área de batalla. Hasta la segunda guerra del Golfo, este método constituyó la forma habitual de garantizar que no se revelara ninguna información que pudiera resultar molesta para las fuerzas armadas.

En Afganistán, los militares llegaron incluso a distribuir tarjetas plastificadas a todos los soldados, con instrucciones sobre cómo tratar a los periodistas. Las tarjetas incluían preguntas hipotéticas y sus respectivas respuestas, por ejemplo: «¿Cómo se sienten con lo que están haciendo en Afganistán?». Respuesta: «Estamos unidos en torno a nuestro propósito y comprometidos a alcanzar nuestras metas». «¿Cuánto les parece que esto va a durar?» «¡Permaneceremos aquí el tiempo que sea necesario para hacer el trabajo, señor!» Para dar una sensación de espontaneidad, se proporcionaban algunas alternativas. «¿Cómo se siente por estar aquí?» «Me enorgullezco de servir a mi país, señor. Tenemos un trabajo que hacer, y estoy contento de formar parte de él». Las conversaciones con los reporteros en la base aérea de Bagram, cerca de Kabul, resultaban tan poco naturales que un periodista de la BBC empezó a sospechar y, finalmente, dos militares le enseñaron sus tarjetas.³¹

Mientras preparaba el ataque a Irak en la primavera de 2003, el Pentágono se inventó una nueva estratagema, en su interminable campaña para controlar lo que llega al público y presentar a las fuerzas armadas de manera favorable. Decidió «incrustar» (*embed*, en la terminología militar) a unos 600 reporteros, fotógrafos y equipos de televisión de ambos sexos en las unidades de combate y permitir que acompañaran a las tropas en una guerra que se esperaba que fuera —y en gran parte, fue— pan comido. Todos los periodistas elegidos, al igual que las fuerzas combatientes, fueron vacunados contra la viruela y el ántrax, y alrededor de la mitad completó unos programas de

entrenamiento (llamados «campos») de una semana de duración en el Fuerte Dix, Nueva Jersey, y otras bases militares nacionales, para exponerse a las «condiciones de combate», incluido el uso de una máscara de gas. No se les permitió portar armas o dispararlas, como tampoco conducir sus propios vehículos. Las normas del Pentágono les prohibían informar sobre una acción en curso sin el permiso del oficial al mando de la operación, o divulgar la fecha, el lugar, la hora o el resultado de una misión, excepto en términos muy generales. En la primera guerra del golfo Pérsico, los militares confiaron en el sistema del «pool». En la segunda, se sintieron más seguros de que no se mostrara nada que no desearan que trascendiera y consideraron que llevar a las salas de estar del país una de las nuevas y antisépticas guerras americanas resultaría beneficioso para el reclutamiento.³²

Además de manipular a los medios de comunicación para conseguir que divulguen su mensaje, el Pentágono procura estrechar sus lazos con grupos civiles capaces de brindarle apoyo político o que poseen intereses directos en el gasto de defensa. Este *lobbying* había pasado desapercibido hasta que un funesto caso de negligencia a bordo del submarino *Greeneville* lo sacó a la luz. El 9 de febrero de 2001, este submarino nuclear de ataque, de 6.500 toneladas, salió repentinamente a la superficie frente la costa de Honolulu durante una emergencia simulada, colisionó con el *Ehime Maru*, un buque escuela japonés de 130 metros de eslora, lo hundió y ocasionó la muerte a nueve jóvenes japoneses.

El *Greeneville* había zarpado con el único fin de dar una vuelta a dieciséis ricos patrocinadores de la marina. Faltaba casi un tercio de la tripulación y navegaba cerca de la playa de Waikiki con varias piezas del equipo fuera de servicio. El capitán, el comandante Scott D. Waddle, declaró primero ante un tribunal que ni los civiles ni el capitán de la marina que los acompañaba le habían distraído de sus funciones, aunque todos se encontrasen apretujados en la sala de control. Sin embargo, la colisión entre un submarino que sale a la superficie y otro barco sólo puede atribuirse a la falta de atención. El 16 de abril de 2001, el *Honolulu Advertiser* informó de que Waddle se había retractado. Afirmó que, si se le sometía a un consejo de guerra, su principal defensa sería declarar que se le había ordenado llevar a los civiles de paseo y que, tal como declaró al *Times*, «tenerlos en la sala de control como mínimo interfirió en nuestra concentración».³³ De hecho, cuan-

do el submarino emergió quien estaba en los controles era un ejecutivo de una empresa petrolera de Texas.

Para evitar que Waddle repitiera su comentario en una declaración oficial, el tribunal de la marina no llamó a declarar a ninguno de los vitados civiles, y el almirante Thomas B. Fargo, comandante de la Flota del Pacífico, decidió no llevarle ante un consejo de guerra porque consideró que el hacerlo incidiría negativamente en la moral del cuerpo.³⁴ En un tribunal militar, Waddle podría haber presentado su defensa, algo que, evidentemente, no deseaba la marina, que permitió, en cambio, que el capitán se retirara con pensión integral. Sin embargo, el caso del *Greeneville* sacó por primera vez a la luz hasta qué punto la marina utilizaba sus navíos y portaaviones para apuntalar sus relaciones públicas. En 2000, únicamente la Flota del Pacífico recibió a bordo de sus buques a 7.836 visitantes. Realizó 21 viajes con submarinos nucleares de ataque de la clase Los Ángeles, similares al *Greeneville*, transportando a 307 civiles, y 74 viajes con portaaviones en los que participaron 1.478 civiles. No existe registro de que algún miembro del congreso cuestionara esta manera de promocionar sus intereses por parte de la marina, o que al menos se interesara por ella.

Con mucho, el instrumento más poderoso del Departamento de Defensa para divulgar su imagen y proteger sus intereses de los ojos del público es el secreto oficial, es decir, los llamados programas negros, financiados mediante el «presupuesto negro». La práctica de utilizar un presupuesto que, de manera sistemática, procura confundir y desinformar al público empezó durante la segunda guerra mundial, con el Proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica. Todos los fondos asignados para la investigación y el desarrollo de armas nucleares se ocultaron en cuentas falseadas del Departamento de Guerra y nunca se revelaron al congreso o la opinión pública. El presidente y las fuerzas armadas tomaron la decisión de desarrollar la primera «arma de destrucción masiva» enteramente solos.

Con el inicio de la guerra fría, el Pentágono se volvió adicto a los presupuestos negros. Desde la aprobación, en 1949, de la Ley de la Agencia Central de Inteligencia, todos los fondos de la CIA han sido incluidos en secreto en el presupuesto del Departamento de Defensa bajo falsas denominaciones. A medida que el presidente, el Pentágono y la CIA creaban nuevos servicios de inteligencia, el presupuesto negro creció de forma exponencial. En 1952 el presidente Truman

firmó una carta fundacional de siete páginas, todavía hoy secreta, por la que creaba la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que se dedica al espionaje de las señales y las comunicaciones; en 1960 en presidente Eisenhower fundó la todavía más secreta Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que gestiona los satélites espía; en 1961 el presidente Kennedy impulsó la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), el servicio de información particular del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa, y en 1996 el presidente Clinton reunió varios servicios en la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía. Los presupuestos de estos servicios no son públicos, aunque es posible calcular su magnitud. En agosto de 1994 se filtró accidentalmente un documento interno del Pentágono que fue publicado por *Defense Week*, una revista dedicada al comercio de armas. De acuerdo con él, la NSA gastaba entonces 3.500 millones de dólares al año, la DIA, 621 millones, y la NRO, 122 millones (la CIA no estaba incluida).³⁵

El nombre oficial del presupuesto negro es «Programas de Acceso Especial» (SAP), clasificados como «alto secreto». (Es posible que «SAP», en inglés, *crédulo*, sea una sutil o involuntaria referencia burocrática al contribuyente.) Los SAP se dividen en tres tipos básicos: investigación y obtención de armamentos (AQ-SAP), operaciones y apoyo (OS-SAP), e inteligencia (IN-SAP). Únicamente unos pocos congresistas pueden asistir a las sesiones informativas sobre ellos, y este limitado acceso a la información sólo surgió bastante avanzada la guerra fría, tras los escándalos de Watergate. Además, el secretario de Defensa puede decidir eximir a determinado programa del informe exigido, una decisión de la que sólo se notifica, oralmente, a un total de ocho congresistas pertenecientes a los comités de defensa. Esos «SAP eximidos» son los agujeros negros más negros de todos. La Oficina General de Contabilidad (GAO) ha identificado al menos 185 programas negros, y señala que éstos aumentaron ocho veces en el período de 1981-1986. No existe un total oficial, aunque la GAO estimó en una ocasión que se dedicaban entre 30.000 y 35.000 millones de dólares al año a secretos militares y de inteligencia. De acuerdo con un informe del Centro para Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, una institución independiente, los fondos para programas negros incluidos en el presupuesto de defensa para 2004 del presidente Bush son los más elevados desde 1988.³⁶

Las armas y las operaciones se identifican en el presupuesto público del Pentágono con una serie de nombres de fantasía: «Grass Blade», «Chalk Eagle», «Dark Eyes», «Guardian Bear», «Senior Citizen», «Tractor Rose», «Have Blue», «Sea Nymph» y muchos otros. Analistas independientes de los presupuestos de defensa han señalado que la primera palabra de esos apodos no confidenciales es un indicio del sector del ejército al que pertenece el programa: en los programas de la fuerza aérea se utilizan con frecuencia las palabras «have», «senior» y «constant», en los del ejército, «tractor», y en los de la marina, «tiza».³⁷ Entre los proyectos negros que, poco a poco y, en general, de forma inadvertida, han salido a la luz, se encuentran: una base secreta para pruebas aeronáuticas en los límites del lago Groom, un lago seco en el desierto de Nevada, al norte de Las Vegas, más conocida como Área 51, y que aparece en los libros como parte de la base de la fuerza aérea en Edwards, California; tres UAV (vehículos aéreos no tripulados) de reconocimiento que empezaron a ser diseñados entre 1994 y 1995, el Predator, el Dark Star y el Global Hawk, el primero de los cuales fue empleado intensamente durante la invasión de Afganistán, y el vehículo de maniobras espaciales (SMV) de la fuerza aérea estadounidense, un proyecto originalmente de Rockwell que hoy está desarrollando Boeing. Algunas de las operaciones negras más interesantes son el 160.º Regimiento Aéreo de Operaciones Especiales del ejército, que proporciona helicópteros a las unidades de la Delta Force, y el 4.477.º Escuadrón de Pruebas y Evaluación de la fuerza aérea, oficialmente localizado en la base aérea de Nellis, Nevada. Desde 1970, el 4.477.º ha comprado o robado cazabombarderos soviéticos para probarlos en el Área 51. En 1998, la fuerza aérea anunció que por primera vez había comprado un MiG-29 a la ex república soviética de Moldavia, pero todos los demás detalles de la operación continúan estando clasificados.

La extrema obsesión de las fuerzas armadas con el secreto y la desinformación —la divulgación de datos plausibles, aunque falsos— transforma en una farsa la supervisión del congreso. A cualquiera que no posea una alta acreditación de la seguridad le resulta imposible comprender las asignaciones de «defensa». Aún más, todo el sistema se encuentra tan compartimentado que, con frecuencia, programas negros diferentes están en realidad dedicados a lo mismo sin que nadie parezca tener control sobre ello. En la demanda por la cancelación del

proyecto del cazabombardero silencioso de la marina, el A-12 Avenger II, un programa negro, las empresas McDonnell Douglas y General Dynamics denunciaron que las tecnologías que se habían desarrollado en otros programas secretos habrían solucionado algunos de los problemas que llevaron a la cancelación del proyecto, pese a lo cual no se informó de esto a quienes trabajaban en el A-12.³⁸ El secretismo llega hasta tal punto que en Phantom Works (ningún otro nombre hubiera sido más apropiado), la división de Boeing dedicada a proyectos negros ubicada en Palmdale, California, suena constantemente música de fondo para ahogar las conversaciones que, se supone, son de naturaleza secreta.

La situación hoy es, probablemente, peor que nunca. Un escándalo reciente, relacionado con unos contratos firmados por el Departamento de Defensa, Lockheed Martin y Boeing para proyectar y construir nuevos cohetes destinados al lanzamiento de satélites pesados en el espacio, resulta típico: el Departamento de Defensa ha clasificado como secretos los propios contratos, «para proteger los intereses comerciales de dos de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos».³⁹

Al igual que ocurre con el crecimiento, al parecer imparable, del secretismo gubernamental, el Pentágono también ha ejercido una presión implacable con el fin de expandir sus funciones y apoderarse de la cobertura burocrática de otras instituciones. Este problema tiene distintos aspectos, aunque quizá el más importante desde el punto de vista político, como también una de las señales más patentes del militarismo en Estados Unidos, es la disposición de algunos oficiales de alta graduación y de civiles militaristas a entrometerse en la política interna. La Constitución de Estados Unidos establece una separación clara entre las actividades de las fuerzas armadas en la defensa del país y el cumplimiento de la ley de acuerdo con el código penal de los distintos estados de la Unión. James Madison temía tanto el dominio del estamento militar que en el n.º 41 de *The Federalist* escribió que «una fuerza [militar] permanente es una disposición peligrosa». Si bien ese miedo se originaba a partir de las preocupaciones políticas de la revolución americana, no se convirtió en un asunto apremiante hasta las reñidas elecciones presidenciales de 1876, cuando se enviaron tropas a los colegios electorales de tres estados sureños (Carolina del Sur, Florida y Luisiana). Rutherford B. Hayes, un norteño de Ohio, venció

por un solo voto en una situación comparable a las disputadas elecciones de 2000 en Florida, cuando fue el tribunal supremo, en vez de las fuerzas armadas, el que interfirió en los asuntos estatales.

El propósito de la Ley Posse Comitatus de 1878 era que las fuerzas armadas no volvieran a mezclarse jamás en las actividades políticas sin el consentimiento del congreso o el presidente. *Posse comitatus*, una expresión latina que significa «el poder del país», designa la costumbre inglesa de que el gobernador civil convoque a los ciudadanos para que le ayuden a detener a un delincuente o a controlar una agitación civil. En el Estados Unidos del siglo XIX, la expresión se redujo sencillamente a «posse». A pesar de que la ley ha sido reformada en diversas ocasiones para permitir que las fuerzas armadas colaboren en la lucha contra las drogas y ayuden a patrullar la frontera mexicana, sigue teniendo por fin asegurar que el ejército permanente no ejerza ningún papel en la vigilancia de los ciudadanos norteamericanos en su propio país.

No obstante, el ascenso del militarismo, al que han contribuido los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha erosionado estas antiguas distinciones. El Pentágono, al ampliar el significado de la seguridad nacional para que abarque el contraterrorismo y el control de la inmigración, campos en los que ahora participa activamente, se ha introducido en asuntos de política interna. El Departamento de Defensa, por ejemplo, ha redactado órdenes de servicio para responder a lo que denomina CIDCON («situación de desorden civil»). Durante la convención del Partido Republicano en Filadelfia, en agosto de 2000, por ejemplo, el Pentágono puso en alerta, en previsión de un incidente terrorista a gran escala, a un «Destacamento Conjunto de Apoyo Civil», con base en el Fuerte Monroe, Virginia, y al «Destacamento 250». Este último es, en realidad, la 82.^a División Aerotransportada del ejército, con base en el Fuerte Bragg, Carolina del Norte.⁴⁰

Es evidente que Estados Unidos no es inmune al terrorismo, como lo atestiguan el atentado en el World Trade Center de Nueva York en 1993, el coche bomba contra el edificio federal Alfred Murrah en Oklahoma en 1995 y los ataques contra Nueva York y Washington en septiembre de 2001. De una forma u otra —uno de los terroristas del atentado de Murrah era un veterano de la guerra del Golfo—, todos esos episodios parecen ser consecuencia de las actividades del gobierno estadounidense en países extranjeros. Estados Unidos ha vivido,

asimismo, episodios de terrorismo de estado, como el ataque de los agentes federales contra un defensor de la superioridad blanca, el ex boina verde Randy Weaver, y su familia, en Ruby Ridge, Idaho, en 1992, y el ataque del FBI contra disidentes religiosos en Waco, Texas, en 1993.⁴¹ Es previsible que, en el futuro, ese tipo de incidentes implique el uso de tropas. Sin embargo, todavía más importante es el hecho de que el «terrorismo» es una noción sumamente flexible, abierto a los abusos de unas fuerzas armadas ambiciosas y poco escrupulosas.

En el verano de 2002, el gobierno Bush ordenó a los abogados de los Departamentos de Defensa y de Justicia que revisaran la Ley Posse Comitatus y cualquier otra que pudiera limitar la participación de las fuerzas armadas en la defensa y promoción del cumplimiento de la ley en el interior del país. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa creó un nuevo mando regional para la protección de Norteamérica, comparable a los existentes para la defensa de Latinoamérica, Europa, Oriente Próximo y el Pacífico. El Comando Norte, con sede en la base aérea Peterson, en Colorado Springs, tiene por finalidad mejorar la posición de las fuerzas armadas para responder al terrorismo cerca del país y evitar la introducción de armas químicas, biológicas y nucleares en Estados Unidos. (El gobierno federal no creó un mando central para Norteamérica ni siquiera durante la segunda guerra mundial, debido al temor de que pudiera dar origen a una dictadura militar.) Dentro de la jurisdicción del Comando Norte se encuentran Estados Unidos, México, Canadá y Cuba; pero es evidente que tanto los mexicanos como los canadienses y, por supuesto, los cubanos no fueron consultados. Del mismo modo que los demás «CINC» (comandantes en jefe) regionales, el oficial a cargo de este nuevo cuartel general, se situará, en gran parte, fuera de las cadenas de mando civil y militar. En efecto, los CINC son comparables a los procónsules romanos, excepto por el hecho de que en la república romana los elegidos para estos puestos ya habían ejercido el cargo más alto posible, el de cónsul, y gozaban de la profunda confianza de los civiles y los militares veteranos.

El primer CINC del Comando Norte es el general de la fuerza aérea Ralph E. Eberhart, otro antiguo jefe del Comando Espacial. Eberhart dijo en su nombramiento: «Deberíamos estar siempre revisando cosas como la Posse Comitatus y otras leyes, si consideramos que nos atan las manos para proteger al pueblo norteamericano».⁴² Al parecer, a

Eberhart no se le ocurrió que el fin de la Ley Posse Comitatus era proteger a los estadounidenses de generales como él. Distintas instituciones civiles, como el FBI, el Servicio de Salud Pública y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, han mostrado su consternación por el creciente papel de las fuerzas armadas en ámbitos que son de su responsabilidad. El nuevo Departamento de Seguridad Nacional, creado en 2003, engloba varios organismos antes civiles, y trabaja estrechamente con el Pentágono y el Comando Norte. Su primer director adjunto es Gordon R. England, ex secretario de la marina y antiguo vicepresidente ejecutivo de General Dynamics Corporation, de Fort Worth, Texas, la empresa que fabrica el principal avión de caza de las fuerzas armadas, el F-16.⁴³ No resulta claro qué amenaza es mayor para la seguridad e integridad de los estadounidenses: la posibilidad de un ataque terrorista con armas de destrucción masiva o el intento de unos militares fuera de control de apartar a los funcionarios electos que les entorpezcan el camino.

Además de crear el Comando Norte y de procurar socavar la Ley Posse Comitatus, el estamento militar expande sus funciones y su influencia en incontables frentes. Por ejemplo, ha desafiado directamente al Departamento del Tesoro con la exigencia de que toda adquisición extranjera significativa de empresas estadounidenses debe someterse a un examen de seguridad nacional. El Pentágono desea tener una voz mucho más fuerte en el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), e incluso la notificación obligatoria, por parte del CFIUS, de todas las adquisiciones realizadas por extranjeros por valor superior a los cien millones de dólares. Esa exigencia puede representar una forma apenas encubierta de proteccionismo, aunque, tal como observó el *Financial Times*: «El intento del Pentágono de extender su influencia sobre las inversiones en el país es un síntoma evidente de su creciente poder en el interior de la administración Bush».⁴⁴

Abundando en el tema, en 2003 el gobierno introdujo una propuesta sorpresa en un proyecto de ley más amplio sobre las competencias de los servicios de inteligencia, que hubiera otorgado a las fuerzas armadas (y la CIA) la potestad de emitir citaciones para obligar a los servidores de internet, las empresas de tarjetas de crédito, las bibliotecas y otros tipos de organizaciones a proporcionarles materiales de todo tipo tales como grabaciones de teléfono, transacciones bancarias

y mensajes de correos electrónicos. Eso representaría la quiebra total del requisito, con muchos años de vigencia, según el cual sólo el FBI está autorizado a obtener ese tipo de información acerca de los ciudadanos norteamericanos dentro de Estados Unidos, y aún así sólo con autorización judicial, en especial si tiene intención de utilizarla ante un tribunal. La nueva propuesta permitiría a las fuerzas armadas y la CIA recoger información sobre los ciudadanos sin estar sujetas siquiera a la supervisión judicial.⁴⁵

El Pentágono de Rumsfeld también ha procurado activamente eximir a las fuerzas armadas del cumplimiento de varias leyes de protección ambiental. Por ejemplo, la infantería de marina se ha quejado de que la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 no permite que las tropas caven pozos de tirador donde les apetezca en los 50.000 hectáreas de la base de Camp Pendleton, California. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre desea declarar una pequeña parte de la base «hábitat crítico» para algunas especies de aves amenazadas, entre ellas el chorlo nevado occidental y la golondrina marina menor de California. Ya existe una disposición en la Ley de Especies en Peligro de Extinción que prevé excepciones por razones de seguridad nacional, pero los infantes de marina nunca han hecho uso de la misma. Dan la impresión de estar más interesados en establecer el principio de que las fuerzas militares son, en sí mismas, la ley que en compatibilizar el entrenamiento de los infantes con la protección del medio ambiente.⁴⁶

Los campos de expansión prioritarios para el Pentágono son las funciones diplomáticas del Departamento de Estado y las de inteligencia y acciones encubiertas de la CIA. Tanto las Fuerzas Especiales militares como los puestos de comandante en jefe regionales tienen su origen en la toma de nuestra embajada en Teherán y el desastroso intento de rescatar a los rehenes norteamericanos que tuvo lugar entre el 24 y el 26 de abril de 1980. Ese fracaso evidenció que el Pentágono necesitaba ser mucho más serio al entrenar y equipar comandos para la «guerra de baja intensidad», así como crear un mando unificado que pudiera solicitar los recursos necesarios sin tener que luchar por abrirse camino a través de una cadena de mando laberíntica y de las rivalidades inevitables entre los cuerpos. El coronel Charlie A. Beckwith, comandante de la Delta Force que fue destruida en Desert One, al sureste de Teherán, como consecuencia de su propia chapucería, declaró ante el congreso: «En Irán, tuvimos un problema de improvisa-

ción. Salimos, encontramos cosas y piezas, personas y materiales, lo juntamos todo y entonces les pedimos que realizaran una misión sumamente compleja. Todas las partes funcionaban, pero no necesariamente como un equipo. Tampoco poseían la misma motivación. Mi recomendación es crear una organización que contenga todo lo que pueda llegar a necesitarse en un momento dado, y que incluiría a la Delta Force, a los Rangers, a los Navy SEAL, a pilotos de la fuerza aérea, que tuviera su propio equipo, su propio personal de apoyo y sus propios aviones y helicópteros. Hacer que esta organización sea una unidad militar permanente. Darle un lugar que pueda llamar su casa. Asignar fondos suficientes para gestionarla. Y darle el tiempo necesario para reclutar, evaluar y entrenar a su gente. De otro modo, no estaremos siendo serios en el combate contra el terrorismo».⁴⁷

Estas recomendaciones condujeron gradualmente al fortalecimiento de los mandos regionales y al notable crecimiento durante la década de 1990 de las Fuerzas Especiales, que fueron utilizadas para las «intervenciones humanitarias» respaldadas por la administración Clinton. En 1997, la responsabilidad de diseñar importantes estrategias militares y de política exterior fue entregada oficialmente a los comandantes regionales (denominados comandantes en jefe, o CINC, hasta octubre de 2002, cuando el secretario de Defensa Rumsfeld, que al parecer se sintió amenazado por el poder creciente de éstos, les cambió el nombre a «comandantes combatientes»). Esos generales y almirantes casi autónomos realizan funciones de las que hasta el decenio de 1990 básicamente se había encargado el personal civil.

En Oriente Próximo (CENTCOM), el Pacífico (PACOM), Europa (EUCOM) y Latinoamérica (SOUTHCOM), los CINC supervisan, entre otras cosas, las labores de inteligencia, las operaciones especiales, los activos espaciales, las fuerzas nucleares, la venta de armas y las bases militares; y se encargan también de lo que denominan «planes de compromiso regional». Éstos consisten, en esencia, en pequeña declaraciones de política exterior en cada región, e incluyen programas explícitos para cultivar relaciones estrechas con las organizaciones militares locales.⁴⁸ Todo eso se lleva a cabo mediante el despliegue de aproximadamente 7.000 soldados de las Fuerzas Especiales en ciento cincuenta países, que entrenan a los militares de la región en lo que se denomina «defensa interna del exterior» (FID), lo que, en muchas ocasiones, no es más que un eufemismo para técnicas de terrorismo de

estado. Las misiones de entrenamiento permiten que Estados Unidos espíe a esos países, les venda armas y aliente a sus ejércitos a adoptar las políticas que el Pentágono desea. Todo se realiza con mucha discreción y prácticamente sin supervisión política.

Con el tiempo, los CINC se han vuelto más influyentes en sus regiones que los embajadores. Cuando el general de la infantería de marina Anthony C. Zinni era el jefe del CENTCOM, tenía veinte embajadores bajo su mando y un consejero político personal con rango de embajador. El PACOM (también denominado CINCPAC) supervisa los asuntos de cuarenta y tres países. Cada CINC tiene a su disposición fondos prácticamente ilimitados, sus propias aeronaves y helicópteros, y numerosos oficiales en su equipo. Un CINC rinde cuentas directamente al presidente y al secretario de Defensa, pasando por alto a los jefes de los distintos cuerpos y a la cadena de mando usual.

Cuando, en octubre de 1999, el general Pervez Musharraf dio un golpe de estado en Pakistán, el presidente Clinton le llamó por teléfono para protestar, y solicitó que le devolviera la llamada. Sin embargo, Musharraf no llamó a Clinton sino al general Zinni y comenzó su relato así: «Tony, quiero contarte lo que estoy haciendo».⁴⁹ El general Zinni decidió ignorar la orden del congreso que prohíbe proporcionar ayuda externa a un país que ha sufrido un golpe militar y se convirtió en uno de los principales apoyos de Musharraf antes del 11-S. Asimismo, fue Zinni, y no los funcionarios del Departamento de Estado, quien tomó la decisión de que los buques de guerra repostaran en el puerto yemení de Aden, donde, en octubre de 2000, los terroristas suicidas atentaron contra el destructor *Cole* y mataron a diecisiete marinos.

Independientemente de la política exterior estadounidense, los CINC parecen más interesados en mantener relaciones amistosas con sus colegas militares extranjeros que en las violaciones de los derechos humanos cometidas por determinado régimen. El almirante Dennis Blair, jefe del PACOM, se mostró decidido a restablecer los lazos con los militares indonesios, a pesar de su implicación en la masacre de cientos de civiles desarmados y de funcionarios de Naciones Unidas en Timor Oriental. Aunque nuestro embajador en Yakarta se opuso de forma explícita a su colaboración ilegal con los militares, Blair se convirtió en el primer oficial norteamericano de alto rango que visitó Indonesia después de que el congreso de Estados Unidos le impusiera sanciones.

Gracias a los servicios militares de inteligencia, Blair estaba bien informado de la situación en Timor y conocía la posibilidad de que se desencadenara la violencia si los ciudadanos votaban por la independencia, aunque en ningún momento procuró detener a sus colegas indonesios. Cinco oficiales de esa nacionalidad, todos producto de la formación militar estadounidense, fueron más tarde acusados de crímenes contra la humanidad. El senador demócrata Patrick J. Leahy comentó al respecto: «Desde que estoy en el senado, el Pentágono ha sostenido que la colaboración de Estados Unidos profesionalizaría las fuerzas armadas indonesias. Eso se ha demostrado falso una y otra vez, y el colmo ha sido el desastre de Timor Oriental».⁵⁰

El jefe del PACOM no era una excepción. El jefe del SOUTHCOM restableció estrechos lazos con el ejército de El Salvador, que ostenta, con toda probabilidad, el peor expediente en materia de derechos humanos de todas las fuerzas armadas latinoamericanas. El 15 de octubre de 1979, Estados Unidos patrocinó un golpe de estado en el país que condujo a una guerra atroz contra la población civil, en su mayor parte desarmada, a cargo de los *escuadrones de la muerte** del ejército. Los militares salvadoreños asesinaron a unas 38.000 personas antes de que el gobierno Reagan enviara al vicepresidente Bush para decirles que se detuvieran. A mediados de 1986, un funcionario del Pentágono se vanagloriaba de ello: «Todos los soldados del ejército [de El Salvador] han sido entrenados, de un modo u otro, por nosotros».⁵¹ Todavía en 1989 las Fuerzas Especiales del ejército estaban «entrenando» a miembros del Batallón Atlacatl, que en noviembre de ese año asesinaría a seis curas jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta, acusados de ser simpatizantes de la guerrilla. Son los oficiales del ejército de El Salvador «quienes han permanecido cercanos a las fuerzas armadas norteamericanas en esta década, desde que terminó la guerra civil», y quienes hoy son nuestros aliados en este minúsculo país.⁵² Ninguno de los países de la región se encuentra amenazado por un enemigo exterior; por lo tanto, el objetivo de nuestra presencia militar allí, a través del SOUTHCOM, es puramente imperialista.

Dejar la política exterior en manos de procónsules regionales contribuye al avance del militarismo porque resulta inevitable que recurran a sus contactos militares locales para alcanzar los objetivos de

* En castellano en el original. (N. de la t.)

esta política. En estas circunstancias, es difícil imaginar por qué alguien desearía trabajar para el Departamento de Estado. La CIA también está sufriendo recortes, pero en este caso la iniciativa no parte de los CINC, sino directamente del Pentágono y de las queridas actuales de los militares: las «fuerzas especiales».

Inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre —y una vez se había determinado que Al Qaeda era probablemente la organización terrorista responsable—, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz ordenaron al subsecretario de Defensa para asuntos políticos Douglas J. Feith que creara una unidad de inteligencia especial dentro del Pentágono. Ésta tenía como propósito exclusivo encontrar vínculos entre Al Qaeda y el régimen de Sadam Husein, pese a que la CIA no creía que existiera tal relación. Feith, al igual que sus jefes, había ocupado varios cargos en defensa durante el gobierno Reagan, incluido el de asesor especial del entonces secretario adjunto de Defensa, Richard Perle, y además formaba parte de un grupo de funcionarios sobre el que el vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Defensa, ejercía gran influencia. Desde el momento en que se formó la nueva administración Bush, ese grupo deseó vivamente ir a la guerra contra Irak. Para encontrar una conexión entre Al Qaeda y Sadam Husein que justificara esa guerra, Feith se dedicó, según *The New York Times*, a la «minería de datos». Wolfowitz, Feith y sus asociados «procuraron politizar los servicios de inteligencia para que éstos confirmaran el punto de vista de los halcones».⁵³

Pronto resultó claro que el principal obstáculo a esos esfuerzos era la Agencia Central de Inteligencia. Ni sus operativos ni sus analistas pudieron encontrar una mínima conexión entre Irak y los atentados del 11 de septiembre. Además, la agencia pensaba que era improbable que el régimen laico de Irak tuviera algo que ver con el islamismo militante de Al Qaeda, y ponía en duda que Sadam Husein suministrara a terroristas fuera de su control cualquier tipo de armamento que pudiera ser rastreado hasta él.⁵⁴ Esa diferencia de opinión enseguida evolucionó a una guerra abierta en torno a la influencia política.

En marzo de 2002, una comisión presidencial dirigida por el teniente general retirado Brent Scowcroft, el primer consejero de seguridad nacional del presidente Bush, recomendó que tres importantes servicios de inteligencia financiados por el Pentágono —la Agencia de

Seguridad Nacional, la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía—quedaran bajo el control del director de la CIA. Esto representó un serio desafío al imperio de Rumsfeld. El 21 de junio de 2002 el secretario Rumsfeld contestó con lo que el *U.S. News & World Report* denominó «un golpe brillante y furtivo». Insertó calladamente en un proyecto de ley del senado sobre la defensa la potestad de crear un nuevo subsecretario de Defensa para la inteligencia. «El nuevo puesto de subsecretario es una jugada burocrática que ha permitido al Pentágono alcanzar muchos de sus objetivos de un solo golpe. ... En la práctica, [Rumsfeld] está creando otro DCI [director de inteligencia central].»⁵⁵ El nuevo subsecretario es el neoconservador Stephen Cambone, amigo de Rumsfeld. Tiene autoridad sobre los tres servicios de información civiles, además de sobre la Agencia de Inteligencia de la Defensa. De acuerdo con Jay Farrar, antiguo funcionario del Departamento de Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional, que trabaja para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un importante *think tank* conservador: «Es un paso más en el camino del Departamento de Defensa hacia la consolidación de su control sobre el aparato de inteligencia de Estados Unidos». *The New York Times* añade: «Wolfowitz y compañía no se creen ningún análisis que no respalde sus conclusiones preconcebidas. La CIA es territorio enemigo, en lo que a ellos respecta».⁵⁶

Según se ha informado, el secretario de Defensa Rumsfeld también se ha mostrado «ansioso porque las fuerzas especiales de Estados Unidos usurpen el papel tradicional de la Agencia Central de Inteligencia en la dirección y ejecución de las operaciones encubiertas».⁵⁷ Las razones para ello son varias y se relacionan entre sí. El secretario llegó al Pentágono ansioso por apartar al ejército de su obsesión por la artillería pesada y los blindados, una obsesión que había sido alimentada por los tanques de combate de la antigua Unión Soviética, pero que ya no tenía justificación. Rumsfeld y otros diseñadores de las políticas de defensa pensaban, asimismo, que las operaciones encubiertas constituían el medio más lógico para llevar a cabo la nueva estrategia militar nacional del presidente, basada en la «guerra preventiva». Parte de esa estrategia consiste en infiltrar operativos encubiertos en los países objetivo con el fin de realizar actos de provocación que, se espera, hagan salir de la sombra a los terroristas y proporcionen una excusa para la intervención militar. Al estar bajo control del ejército,

esas operaciones encubiertas no necesitarían rendir cuentas al congreso, como ocurre en el caso de la CIA. De este modo, para Estados Unidos sería más fácil intervenir en los países objetivo, e incluso estaría sujeto a menos supervisión civil de la que tendría si esas actividades ilegales se dejaran a la agencia oficial de servicios clandestinos. Ante todo, este énfasis en las operaciones especiales amplía las funciones de los militares y les otorga jurisdicciones que antes eran casi en su totalidad territorio civil.

Pese a que la prensa glorifica a las Fuerzas Especiales como a un «ejército de élite secreto» y pese al hecho de que se les ha asignado el mayor incremento de gastos en el presupuesto de defensa de 2003 —un aumento de cerca del 20 por 100, hasta alcanzar los 3.800 millones de dólares—, éstas no poseen una buena reputación.⁵⁸ En Vietnam, los Boinas Verdes del ejército eran tan famosos por su brutalidad como por su ineficacia, y el fracaso del 1.º Destacamento de Fuerzas Especiales-Delta, como se le conocía formalmente, en la operación de rescate de los rehenes en Teherán, condujo al primer gran crecimiento de las Fuerzas Especiales durante el gobierno Reagan y, en 1981, a la creación de una supersecreta Actividad de Apoyo de Inteligencia (ISA) en el ejército. Tal como observó el periodista Tim Weiner, del *Philadelphia Inquirer*, la ISA «abrió negocios por toda América Central —El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá— para apoyar la guerra contra los sandinistas y sus aliados de izquierda. Creó empresas privadas con el fin de servir de tapadera para el espionaje, incluyendo una carnicería y un almacén de carne en Panamá. Montó casas seguras, aeropuertos secretos y escondites para el dinero y las armas, y abrió así el camino para las operaciones futuras contra el enemigo [a saber, el gobierno sandinista electo] en Nicaragua».⁵⁹ Muy pronto, sin embargo, sus oficiales se ganaron toda una reputación por malversación de dinero, tráfico de cocaína y obstrucción de la justicia. Aunque la ISA nunca dejó los negocios por completo, a mitad de la década de 1980 faltaban 324 millones de dólares de sus fondos, y tribunales secretos sentenciaron a varios de sus oficiales a largas condenas en el Fuerte Leavenworth. En esa misma época, se acusó a miembros de la Delta Force de doble facturación en los gastos de viajes al exterior realizados para proteger a embajadores de Estados Unidos; el fraude alcanzaba los 200.000 dólares.⁶⁰

Con el fin de poner algún orden en este caos, en 1987 el congreso creó un nuevo cuartel general para el Comando de Operaciones Especiales en la base aérea de MacDill, en Tampa, Florida. Esta organización paraguas, dirigida por un general de cuatro estrellas, reunió por fin a todos los cuerpos de operaciones especiales del ejército, la marina y la fuerza aérea, que antes competían entre sí, bajo un mando único, si bien las rivalidades entre los servicios de inteligencia todavía persisten. Las fuerzas especiales, que en la actualidad cuentan con unos 47.000 soldados, marinos y aviadores, comprenden cuatro grupos del ejército: las Fuerzas Especiales (los Boinas Verdes), con su cuartel general en Fuerte Bragg, Carolina del Norte; los Rangers, unidades de reacción rápida cuya misión principal es combatir detrás de las líneas enemigas; los comandos Delta Force, especializados en rescate de rehenes, y el 160.º Regimiento Aéreo de Operaciones Especiales, el escuadrón de helicópteros de ataque que transporta a los operativos de la Delta Force al lugar de la acción. La marina contribuye con los SEAL, considerados el grupo mejor preparado de todas las fuerzas de operaciones especiales, y la fuerza aérea aporta un «ala de operaciones especiales», con escuadrones por todo el mundo, responsables de la infiltración a larga distancia de los equipos de operaciones especiales y de las misiones de rescate. Estaba programado que en 2002 se unieran a esta gran agrupación algunos miembros de la infantería de marina. En junio de ese año, el secretario de Defensa Rumsfeld asignó al Comando de Operaciones Especiales el principal papel en la caza de Al Qaeda.⁶¹

En septiembre de 2002, el Consejo Científico de Defensa, un respetadísimo grupo de ejecutivos de la industria privada que asesora al Pentágono en materia de tecnología y políticas de defensa, publicó su informe sobre «Las operaciones especiales y las fuerzas conjuntas en la lucha contra el terrorismo». Abogó por la creación de lo que denominó un «Grupo Proactivo de Operaciones Preventivas», una nueva fuerza especial (otra más) que tendría la misión de idear formas de provocar una respuesta abierta por parte de los terroristas, para poder señalarlos como objetivo y atacarlos. El informe proponía gran número de otros proyectos, como el de conformar un equipo SWAT (armas y tácticas especiales) para, de manera subrepticia, encontrar y destruir armamento químico, biológico y nuclear en todo el mundo. El coste total se estimó en siete mil millones de dólares al año. Ante

todo, el Consejo Científico de Defensa era partidario de que se autorizara a las fuerzas armadas la ejecución de operaciones encubiertas de manera independiente de los demás servicios de inteligencia y de policía (y sin que éstos fueran informados al respecto).⁶² Las recomendaciones reflejaban el pensamiento del grupo de Cheney y Rumsfeld en el interior del estamento militar, e implicarían una notable expansión de los servicios militares clandestinos y su centralización en manos del secretario de Defensa. Destacados observadores han recomendado cautela. En un artículo titulado «Los soldados no deberían espiar», dos importantes funcionarios del Consejo de Relaciones Exteriores, Lawrence J. Korb, antiguo secretario adjunto de Defensa, y el analista Jonathan D. Tepperman condenan la idea —implícita en los nuevos planes de operaciones encubiertas del Pentágono— de enviar fuerzas especiales a los países aliados sin informar a sus gobiernos, y se preguntan cómo reaccionaría el gobierno alemán si sorprendiese a los soldados de la Delta Force llevando a cabo una redada contra una supuesta célula de Al Qaeda en Hamburgo sin contar con su aprobación.⁶³ A pesar de esas advertencias, el Pentágono ha decidido seguir adelante. Planea desplegar a centenares de espías procedentes de los cuatro servicios bajo el control de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.⁶⁴

Esas últimas propuestas amenazan con institucionalizar, y convertir en estilo de vida, el tipo de actividades que dio lugar al escándalo Irán-Contra en la década de 1980. Cuando el congreso dejó de proporcionar fondos para la guerra de la CIA en Centroamérica, los militares utilizaron a Oliver North, un oficial de la infantería de marina que, vestido de civil, trabajaba en la Casa Blanca, para obtener fondos de manera ilegal a través de la venta de armas a Irán y destinarlos en secreto a la Contra, el ejército privado de los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Dado lo mucho que ha avanzado el militarismo desde entonces, no resulta descabellado pensar que esta forma de actuar pueda convertirse en un recurso corriente de nuestra futura política exterior.

Soldados sustitutos y mercenarios privados

Los soldados europeos en los trópicos, a menudo confinados en cuarteles ... pasaban por largos períodos de inactividad y aburrimiento, tendían a presentar altos niveles de consumo de alcohol y a caer enfermos debido a «la infección física y moral producida por las enfermedades venéreas». Contratar soldados nativos, que no sólo resultaban más baratos sino que también eran más sanos, fue la solución. El problema, sin embargo, era saber si se podía confiar en ellos.

David Killingray, *Guardians of Empire* (1999).

LOS BRITÁNICOS TUVIERON SUS GURJAS, sijs y cipayos; los franceses, su Legión Extranjera; los holandeses, sus amboneses; los rusos, sus cosacos; y los japoneses, sus ejércitos títeres en Manchuria, China, Indonesia y Burma. Una de las tradiciones imperialistas más importantes es la de que el país hegemónico reclute extranjeros para hacer el trabajo sucio. Sustituir a los soldados nacionales por la carne de cañón local y azuzar a un grupo étnico o religioso nativo contra otro con frecuencia facilitaron y abarataron el control de un pueblo sometido.

Los norteamericanos intentaron hacerlo en Vietnam en 1962, cuando enviaron a unos dos mil Boinas Verdes al sur del país para que entrenaran a los «montañeses» —un pueblo étnicamente distinto de los vietnamitas— y organizaran con ellos un grupo irregular de defensa civil. En términos generales, los montañeses aportaron poco al esfuerzo bélico, y sus puestos fueron fácilmente tomados por el Vietcong cada vez que esto servía a sus propósitos.¹ No obstante, al igual

que todos los imperialistas que los antecedieron, los estadounidenses nunca abandonaron la esperanza de encontrar la clave para conseguir que los nativos hicieran la guerra por ellos.

En especial desde el fin de la guerra fría, los militares norteamericanos han estrechado las relaciones con incontables gobiernos y cuerpos militares del Tercer Mundo y se han volcado de manera notable en programas de adiestramiento destinados a ellos. En la década de 1990, los líderes demócratas y republicanos concluyeron que esos contactos entre militares y la venta de armas eran la mejor forma de alcanzar muchos de los objetivos de la política exterior estadounidense, en oposición a los lazos económicos y diplomáticos tradicionales.² Un programa del Departamento de Estado para implementar esta estrategia, el Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET), se ha multiplicado por cuatro desde 1994. En 1990 ofrecía instrucción militar a las fuerzas armadas de 96 países; en 2002, esa cifra, ya de por sí impresionante, ascendía a 133 países. No existen más que 189 países en las Naciones Unidas, lo que significa que ese único programa «instruye» a los militares del 70 por 100 de los países del mundo. En estos últimos años hemos estado formando aproximadamente a unos cien mil soldados extranjeros al año, y hablamos por lo general de oficiales que, más tarde, transmiten a sus tropas los métodos americanos. Únicamente en América Latina, los militares proporcionaron formación a 15.030 oficiales y soldados en 2001. El Pentágono trae reclutas para ser formados en alguna de las cerca de 150 instituciones educativas militares del país, y también envía instructores al extranjero, casi siempre de las Fuerzas Especiales del ejército. La guerra contra el terrorismo no hizo más que acelerar esa tendencia. La financiación del IMET se elevó de 58 millones de dólares en el año fiscal 2001 a 80 millones en 2003, un salto del 38 por 100.

Estados Unidos asegura que entrena a las fuerzas armadas de otros países con el fin de enseñarles los valores americanos y su modelo de relaciones entre civiles y militares. Los oficiales del Pentágono aseguran constantemente a los comités del congreso que formar a los soldados extranjeros contribuye a corregir el historial de violación de los derechos humanos de ciertas fuerzas armadas. No obstante, Lora Lumpe, una de las principales autoridades en la materia, opina que «la mayor parte de los programas no han evidenciado una preocupación clara por los derechos humanos, y han sido desarrollados de ma-

nera altamente, si no completamente, irresponsable».³ Las Fuerzas Especiales no son en absoluto un modelo que hay seguir en cuanto al cumplimiento de elevadas normas de conducta en el tratamiento de prisioneros y civiles.⁴ Además, ese estrecho contacto entre los instructores militares norteamericanos y los soldados y oficiales extranjeros pone a Estados Unidos en una posición ventajosa en el comercio de armas, un negocio gestionado directamente por el Pentágono. (Las empresas privadas también pueden vender armas, pero para hacerlo necesitan la autorización de la Oficina de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado.) Desde 1991 Estados Unidos ha sido, de lejos, el mayor vendedor de armas del mundo. De 1997 a 2001 exportó armas por un valor de 44.820 millones de dólares; las ventas del segundo mayor proveedor, Rusia, ascendieron a 17.350 millones. Instruir y vender: un sistema perfecto para captar aliados y ganar dinero a costa de los países menos desarrollados.

El principal objetivo declarado que se encuentra detrás de la formación militar de extranjeros es hoy el reclutamiento de más soldados para la guerra contra el terrorismo y su preparación para las operaciones conjuntas con las unidades norteamericanas. Entre los motivos ocultos de esos programas está el de encontrar sustitutos para las tropas estadounidenses, con el fin de evitar bajas que puedan irritar a la opinión pública americana. Desde que en 1993 la televisión mostró cómo era arrastrado el cuerpo del sargento Randy Shughart por las calles de Mogadiscio, la capital de Somalia (acontecimiento que llevaría al presidente Clinton a ordenar cuatro días después la retirada de nuestras fuerzas del país), el Pentágono ha procurado evitar todo aquello que pueda poner a la opinión pública en contra de sus planes. Tal como dijo el presidente Bush en un discurso, el 11 de marzo de 2002: «No enviaremos a nuestras tropas a todas las batallas, pero Estados Unidos preparará activamente a otros países para las batallas por venir».⁵

A menudo los instructores de tropas son enviados al exterior —suestamente para aprender idiomas y familiarizarse con culturas exóticas— con el fin de soslayar las prohibiciones del congreso acerca de mantener contactos oficiales con países que violan los derechos humanos. El Pentágono considera conveniente instruir a la policía y las fuerzas militares extranjeras para que éstas emprendan programas secretos de terrorismo de estado, incluido el asesinato de líderes ex-

tranjeros, sin que se le acuse de crímenes de guerra o de violar la Convención de Ginebra.⁶ La formación de militares extranjeros es, asimismo, una forma de comprar influencia política. Por ejemplo, Estados Unidos gasta doce mil dólares al año en entrenar las fuerzas militares del minúsculo archipiélago de Tuvalu, en el Pacífico. Tuvalu fue uno de los cuatro únicos países que, en octubre de 2000, se unieron a Estados Unidos e Israel para votar en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba a este último por el uso indiscriminado de la fuerza en Palestina.

Estados Unidos posee dos modalidades alternativas para llevar a cabo sus programas de formación, cada una con distintas consecuencias imprevistas. Ambas cuentan con precedentes bien establecidos por el Imperio Británico, del cual Estados Unidos se ha convertido en un alumno muy cumplidor, aunque no especialmente dotado. Las denomino la «estrategia cipayo» y la «estrategia de las empresas militares privadas». La palabra *cipayo* se deriva, probablemente, del vocablo urdu para «jinete» o «soldado», y la estrategia cipayo consistió, en su tiempo, en entrenar a tropas «nativas» para que sirvieran en regimientos comandados por oficiales británicos, o en regimientos imperiales indios que se suponían leales a la corona británica y que solían componerse de mercenarios sijs y gurjas. En 1857, durante la rebelión de los cipayos —a la que los nacionalistas indios denominan su «primera guerra de independencia»—, el Reino Unido desplegó un ejército de trescientos mil soldados en la India, de los cuales el 96 por 100 eran cipayos. El hecho de que, a la hora de la verdad, no se mostraran leales a Gran Bretaña realza uno de los principales problemas potenciales de este modelo.

El ejemplo norteamericano clásico de la utilización de cipayos tuvo lugar durante la «guerra secreta» de Laos, que duró de 1960 a 1975. Los Boinas Verdes y la CIA proporcionaron ayuda clandestina al general de formación francesa Vang Pao, del ejército laosiano, el cual, a su vez, reclutó un ejército de treinta mil hombres de la tribu hmong para luchar contra las fuerzas comunistas del Pathet Lao, aliadas de Vietnam del Norte. Vang Pao se transformó en un héroe para los estrategas americanos de Saigón y Washington: el mejor títere jamás encontrado en Indochina. Le ayudamos sobre todo por medio de la fuerza aérea. Respaldamos a los combatientes hmong realizando misiones de bombardeo desde nuestras bases en Tailandia. Emplea-

mos también la línea aérea privada de la CIA, Air America, para suministrar armas, arroz y otros artículos a las dispersas aldeas hmong, y después transportamos su principal cosecha de exportación, el opio, hasta el cuartel general de Vang Pao, en la planicie de Jars. Desde allí el opio se dirigía a abastecer las tropas norteamericanas que luchaban en Vietnam y, a través del submundo del tráfico de drogas, al mercado internacional.

Cuando, después de 1969, el Pathet Lao empezó a derrotar a las guerrillas hmong, Air America evacuó a miles de hmongs a campos de refugiados controlados por Vang Pao y realizó bombardeos masivos sobre las aldeas que habían sido invadidas. Al final, después de que la resistencia anticomunista se viniera abajo en toda Indochina, la CIA evacuó a Vang Pao y a miles de sus partidarios a Estados Unidos, donde viven en la actualidad. A diferencia de los cipayos de Gran Bretaña, Vang Pao y los hmongs permanecieron siempre leales a la CIA. Alfred McCoy, la principal autoridad sobre el comercio de opio que acompañó a esta guerra secreta, observa: «Mientras que las fuerzas armadas estadounidenses enviaron medio millón de efectivos a luchar una guerra convencional en Vietnam del Sur, para esa guerra de montaña no hizo falta más que un puñado de personal militar norteamericano».⁷

La estrategia de las empresas militares privadas se encuentra representada por la Vinnell Corporation, de Fairfax, Virginia, una subsidiaria del gran conglomerado de defensa Northrop Grumman. Oficiales militares norteamericanos retirados crearon Vinnell, la cual recibió autorización gubernamental en 1975 para instruir a la Guardia Nacional saudí, la fuerza de cien mil efectivos que protege a la monarquía y sirve de contrapeso a las eventuales amenazas de las fuerzas armadas regulares. A lo largo del tiempo, Vinnell ha construido, dirigido, establecido las normas y proporcionado el personal para cinco academias militares saudíes, siete campos de tiro y un sistema de salud, al tiempo que ha formado y equipado a cuatro brigadas mecanizadas saudíes y cinco brigadas de infantería. A cambio, Arabia Saudí ha pagado centenares de millones de dólares a las principales empresas de defensa que proporcionan los equipos de estas fuerzas, las cuales entraron en acción por un corto período, durante la primera guerra del Golfo, cuando recuperaron la ciudad saudí de Kafji, en la frontera con Kuwait.⁸

Vinnell es una de las cerca de treinta y cinco empresas privadas que alquilan desde instructores hasta mercenarios y policías, y cuyos jefes y empleados, casi todos oficiales de alta graduación y miembros de las Fuerzas Especiales retirados, se alquilan a sí mismos al gobierno y sus aliados extranjeros para realizar cualquier tipo de tarea militar, incluso la instrucción de tropas. Dado que esas empresas son contratistas privados, no se encuentran sujetas a la disciplina militar, y sus operaciones son secretos de su propiedad y no están sujetas a ningún tipo de vigilancia pública. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, los británicos y los sudafricanos fundaron también empresas de mercenarios para formar a las fuerzas tanto gubernamentales como rebeldes de Oriente Próximo, Angola y Sierra Leona y, en ocasiones, luchar junto a ellas. Estados Unidos contrató, asimismo, a empresas privadas para instruir a las fuerzas militares y a la policía survietnamitas en los decenios de 1960 y 1970, aunque no sirvieron de mucho. Más adelante volveré sobre la cuestión de las empresas privadas norteamericanas, pero antes debemos analizar nuestra historia con los cipayos.

El IMET fue creado en 1976 en la estela de la «doctrina Nixon», ese triste intento de «vietnamizar» la guerra de Vietnam, es decir, de adoptar el principio según el cual «los chicos asiáticos debían librar las guerras asiáticas». La principal forma de operar del IMET era —y continúa siendo— la de pagar a los oficiales y soldados extranjeros por recibir cursos en lugares como la Universidad Nacional de la Defensa, en Washington, DC; el Centro de Inteligencia del Ejército, en Fuerte Huachuca, Arizona; el Centro de Guerra Naval Especial (cuartel general de los SEAL), en Coronado, California; la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas en la base aérea de Lackland, en San Antonio, Texas; la escuela de Comandos de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Hurlburt Field, en Fort Walton Beach, Florida, y el Centro de Guerra Especial Kennedy del Fuerte Bragg, en Carolina del Norte.

La más notoria de esas instituciones es, de lejos, la Escuela de las Américas (SOA), cuyos cursos se imparten en español, que, con el fin de burlar una orden del congreso para que cerrara, se rebautizó en 2000 como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHISC). Ese ardid no engañó a nadie, aunque detuvo formalmente el movimiento para acabar con la SOA. Fundada en 1946, se situaba en la Zona del Canal, que entonces era una colonia norteamericana,

hasta que en 1984 fue expulsada por el gobierno de Panamá, cuyo presidente, Jorge Illueca, la llamó «la mayor base para la desestabilización de América Latina». La SOA/WHISC se encuentra hoy en la base del ejército del Fuerte Benning, Georgia. Durante estos años ha entrenado a más de sesenta mil militares y oficiales de policía latinoamericanos, muchos de los cuales han estado implicados en casos de torturas, violaciones, masacres y asesinatos. Uno de ellos fue Roberto D'Aubuisson, el líder de los escuadrones de la muerte de la derecha salvadoreña. Diplomados de la SOA de baja graduación han participado en todo tipo de violaciones de los derechos humanos, como el asesinato, el 24 de marzo de 1980, del arzobispo de San Salvador Oscar Romero (en el cual la CIA puede haber estado implicada) y la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, en la que murieron novecientos civiles salvadoreños. Todavía en 2002, el ejército de Colombia, un país desgarrado por la guerra civil, contaba con unos diez mil diplomados de la SOA/WHISC.

En 1996 la prensa norteamericana descubrió que, entre 1982 y 1991, la SOA adoptó como libros de texto siete manuales distintos en lengua española basados en un original del ejército estadounidense que llamaba a «la neutralización [esto es, el asesinato] de funcionarios gubernamentales, líderes políticos y miembros de la infraestructura». Esos manuales se distribuyeron a miles de oficiales militares en once países de América central y del sur. Según el portavoz del Pentágono, el teniente coronel Arne Owens, «el problema se descubrió en 1992, y fue debidamente informado y solucionado». El WHISC es el blanco de un amplio movimiento de protesta dirigido por el padre Roy Bourgeois, antiguo oficial de la marina y hoy sacerdote de la orden Maryknoll, que en numerosas ocasiones ha sido arrestado en el Fuerte Benning. En caso de que Bourgeois y sus partidarios consigan algún día cerrar este centro en suelo estadounidense, la administración Bush ha anunciado que dispone de un plan alternativo para crear un sucesor en Costa Rica.

El rival adinerado del programa IMET del Departamento de Estado es el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) del Pentágono, que proporciona dinero a los países para que compren armamento norteamericano y después les ofrece la formación necesaria para utilizarlo. La asignación de fondos del IMET fue de 57.875.000 dólares en el año fiscal 2001, y presentó una propuesta de gastos para

2003 de 80.000.000 de dólares; por su parte, la asignación del FMF es de miles de millones de dólares y no para de crecer. En 2001 el Pentágono recibió 3.576.240.000 dólares, y solicitó inmediatamente 4.107.200.000 para 2003. Esas diferencias entre los dos programas reflejan el hecho de que el presupuesto del Pentágono es casi veinte veces mayor que el del Departamento de Estado. Una parte importante de los fondos del Pentágono va a parar tradicionalmente a Israel, y sin embargo los principales receptores del presupuesto del FMF de 2003 fueron Jordania, con 198 millones de dólares (más 2,4 millones por parte del IMET); Colombia, con 98 millones (más 1,2 millones del IMET); India, con 50 millones (más 1 millón del IMET); Pakistán, con 50 millones (más 1 millón del IMET); Turquía, con 17,5 millones (más 350.000 del IMET), y Uzbekistán, con 8,75 millones (más 1,2 millones del IMET). Esos importes representan los primeros pagos del FMF a Colombia, India y Pakistán en los últimos años. Uzbekistán, que posee uno de los peores historiales del mundo en cuanto al respeto a los derechos humanos, es un nuevo receptor. El Departamento de Defensa propuso inicialmente que Azerbaiyán también obtuviera una donación del IMET por un importe de 750.000 dólares y otra del FMF de tres millones en 2003, a cuenta de la guerra contra el terrorismo, aunque más tarde admitió que los fondos tenían como objetivo, en realidad, proteger el acceso de Estados Unidos al petróleo del mar Caspio y sus alrededores.

Otro programa de instrucción del Departamento de Defensa fue creado con el principal objetivo de engañar al congreso. De 1950 hasta noviembre de 1991, cuando el ejército indonesio abrió fuego sobre una manifestación y mató a 270 personas desarmadas en la ciudad de Dili, la capital de Timor Oriental, el gobierno financió la formación de más de 7.300 oficiales indonesios. Tras conocerse que tropas entrenadas y armadas por Estados Unidos habían llevado a cabo la masacre de Dili, el congreso prohibió la entrega de nuevos fondos militares a Indonesia. Al año siguiente, el Pentágono comenzó un nuevo programa, el Entrenamiento Conjunto Combinado (JCET), que envía a las Fuerzas Especiales a distintos países, supuestamente para aprender sus idiomas y «familiarizarse» con los militares locales. Sin embargo, en gran medida, este programa fue diseñado para mantener las relaciones militares con Indonesia. De 1992 a marzo de 1998, sin que se informara al congreso, las unidades de las Fuerzas Especiales realizaron

treinta y seis ejercicios de entrenamiento con unidades de las fuerzas especiales indonesias, al amparo del JCET.

En 1999, después de que Timor Oriental consiguiera la independencia a través de un referéndum patrocinado por las Naciones Unidas, las milicias dirigidas por las fuerzas militares indonesias emprendieron una implacable campaña de «limpieza étnica» contra la población civil de la isla. En esta ocasión, la administración Clinton prohibió cualquier forma de asistencia militar a Indonesia, prohibición que aún estaba vigente el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, en diciembre de ese año, el Pentágono introdujo una cláusula en la Ley de Asignaciones de Defensa para crear un nuevo «Programa de Becas para la Defensa Regional Contraterrorista», con un presupuesto de 17,9 millones de dólares. Este programa, que goza de total independencia con relación al IMET, el FMF y el JCET, lleva actualmente a oficiales militares indonesios a Estados Unidos para ser entrenados. El Pentágono se vale de diversos métodos para burlar las restricciones impuestas por el congreso a sus relaciones con los militares extranjeros, lo que demuestra una mentalidad propia del militarismo.

Pese a la semejanza entre estos programas y las costumbres imperiales británicas, es posible que los militares estadounidenses no recuerden su reverso: la rebelión de los cipayos. Esta rebelión multitudinaria se prolongó durante casi un año, desde su estallido el 10 de mayo de 1857, en Meerut, hasta marzo de 1858, cuando se levantó el sitio de Lucknow. Durante un breve período, los rebeldes llegaron incluso a tomar Delhi. La insurrección de los cipayos constituye uno de los pocos ejemplos, en la historia moderna, de un auténtico choque de civilizaciones. En la India, los británicos habían empezado a considerarse una raza superior y miraban con desprecio a los indios, tanto hindúes como musulmanes, que servían en su ejército. Llegaron incluso a colocar a misioneros cristianos entre las tropas para intentar convertirlos. En 1857 introdujeron una de las primeras versiones del fusil Enfield, cuyos cartuchos venían envueltos en un papel untado de grasa animal para que la pólvora se mantuviera seca; esa grasa era una combinación de grasa de vaca y de cerdo. Las vacas son sagradas para los hindúes, y a los musulmanes les repugnan los cerdos. Una de las particularidades de este fusil era que había que arrancar de un mordisco el extremo de los cartuchos para poder cargarlo.¹⁰ Enseguida se extendió entre los cipayos el rumor de que los británicos intentaban hu-

millarlos forzándoles a violar sus tabúes religiosos. Así que cuando un comandante inglés ordenó a sus tropas que mordieran sus cartuchos, un soldado le disparó.

La revuelta se extendió con rapidez por todo el ejército indio, y los británicos respondieron con una crueldad despiadada. Los cipayos capturados eran acuchillados con las bayonetas, cosidos a pieles de cerdos y vacas o atados a las bocas de cañones que luego eran disparados. Tal como ocurrió cuando la república romana reprimió la rebelión de Espartaco, los británicos alinearon los cuerpos de los soldados indios que habían sido ahorcados a lo largo de la carretera que unía Kanpur con Allahabad. Inglaterra despojó de toda autoridad a la Compañía de las Indias Orientales, que había contratado a los cipayos y a sus oficiales, y durante los siguientes noventa años gobernó el país de forma directa como una colonia británica. Abolió los regimientos indios y absorbió a sus soldados en formaciones más amplias, en las que también participaban ingleses. La utilización de la artillería quedó reservada a los soldados británicos. Con estos cambios los británicos abandonaron su papel de mercaderes y, de hecho, se convirtieron en ocupantes de una tierra hostil en la que no eran bien recibidos.

Algo parecido ocurrió con los norteamericanos en Afganistán. Entre 1979 y 1989, la CIA suministró a los grupos de muyahidín (guerreros islámicos) más de dos mil millones de dólares en armas ligeras, entre las que se incluían lanzamisiles antiaéreos Stinger, y les instruyó en su utilización contra las fuerzas soviéticas que ocupaban el país. Los estadounidenses no se interesaron por las creencias religiosas, las lealtades políticas o la actitud hacia Occidente de aquellos a los que reclutaba, entrenaba y armaba.¹¹ Tras la derrota de la Unión Soviética, los norteamericanos abandonaron Afganistán a su suerte, y los guerrilleros afganos, en su mayoría fundamentalistas islámicos, se volvieron contra Estados Unidos. El despliegue de miles de efectivos militares americanos en Arabia Saudí, sede de dos de los lugares más sagrados del islam, y el apoyo de Estados Unidos a Israel, sólo agravaron el resentimiento. Los militantes musulmanes tomaron represalias a lo largo de la década de 1990 a través de los atentados al World Trade Center de Nueva York en 1993, a los edificios donde residían los militares estadounidenses en Arabia Saudí en 1996, a las embajadas americanas en Kenia y Tanzania en 1998 y al destructor *Cole* en 2000. Es posible interpretar los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001

como una versión contemporánea de la rebelión de los cipayos, aunque el gobierno Bush ha hecho todo lo que ha podido para asegurarse de que los norteamericanos no piensen tal cosa.

Las fuerzas armadas norteamericanas instruyen y equipan a sus cipayos directamente, si bien lo hacen cada vez más a través de empresas privadas, fuera del control del congreso. En la actualidad, las treinta y cinco principales empresas militares privadas se encuentran entre las más rentables del país. Las más importantes son: Vinnell Corporation; Military Professional Resources, Inc., más conocida por sus siglas MPRI, situada en Alexandria, Virginia, y de propiedad de L3 Communications; Kellogg Brown & Root, la legendaria empresa texana que suscribió los gastos de la carrera política de Lyndon Johnson y que hoy es una sucursal de la Halliburton Corporation; DynCorp, de Reston, Virginia, que se hizo famosa al final del decenio de 1990 cuando se descubrió que algunos de sus empleados en Bosnia mantenían a menores de edad como esclavas sexuales y después las vendían en otros lugares de Europa (DynCorp se limitó a despedirlos); Science Applications International Corporation (SAIC), de San Diego, cuyos cinco principales ejecutivos tenían en 2001 salarios que oscilaban entre 825.000 y 1,8 millones de dólares, y poseían opciones sobre acciones con un valor de más de 1,5 millones de dólares cada uno; BDM International, de Fairfax, Virginia; Armor Holdings, de Jacksonville, Florida; Cubic Applications, Inc., de San Diego; DFI International (originalmente, Defense Forecasts, Inc.), de Washington, DC, e International Charter, Inc., de Oregon.¹²

Desde el fin de la guerra fría, además del dinero gastado en el IMET, el FMF y el JCET, el Departamento de Defensa ha contratado a estas y otras empresas para entrenar a las fuerzas armadas de más de cuarenta y dos países. (En ocasiones, es el país extranjero el que contrata a la empresa, aunque esto también requiere la licencia de exportación del Departamento de Estado y la aprobación de la Agencia de Cooperación sobre Seguridad de la Defensa, del Pentágono.) En 1995, por ejemplo, MPRI fue contratada para instruir y equipar a las fuerzas armadas de Bosnia y Croacia, que luego perpetraron el sistemático y sangriento exterminio de los serbios y otros crímenes de guerra. MPRI obtuvo, asimismo, un contrato de seis millones de dólares para formar en 2001 a la policía y las fuerzas armadas de Colombia. Además, MPRI y Cubic dirigieron programas destinados a preparar a

algunos países del antiguo bloque soviético para su ingreso en la OTAN. Varias empresas han participado en la instrucción militar de unos 120 líderes africanos y en el entrenamiento de más de 5.500 efectivos del África subsahariana en las técnicas militares modernas.

DynCorp fue contratada para proporcionar protección oficial al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y se encargará de la instrucción del ejército afgano cuando los Boinas Verdes abandonen el país. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Haití en 1994, DynCorp «entrenó» a la policía de ese país. La empresa ha tenido tanto éxito que, a principios de 2003, fue comprada por Computer Sciences Corporation, de El Segundo, California. Después de la segunda guerra de Irak, DynCorp obtuvo un lucrativo contrato para suministrar un millar de asesores al nuevo departamento de policía, al nuevo poder judicial y al nuevo sistema penitenciario del país. La administración Bush decidió sacar el dinero para pagar a DynCorp de los fondos destinados a las operaciones contra la droga en Afganistán.

Las personas que realizan ese tipo de instrucción son, casi invariablemente, militares retirados: mercenarios, amantes de la guerra y, en general, hombres que se encontraron sin empleo al final de la guerra fría y deseaban seguir haciendo lo mismo que habían hecho durante el servicio activo. La mayor parte de las empresas para las que trabajan en la actualidad fueron ideadas por Boinas Verdes y oficiales de alta graduación recién retirados. El ejemplo clásico es MPRI, fundada por el general Carl E. Vuono, jefe del estado mayor del ejército durante la primera guerra del Golfo; el general Crosbie E. Saint, antiguo comandante del ejército en Europa; el general Ron Griffith, antiguo vicejefe del estado mayor del ejército, y otros generales y almirantes retirados. El portavoz de la empresa, Harry E. Soyster, antiguo director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, es un simple teniente general. Junto a otros treinta y cinco accionistas, estos hombres se transformaron en millonarios en julio de 2000, al vender MPRI a L3 Communications por cuarenta millones de dólares al contado.

Las empresas militares privadas no son, precisamente, pequeñas organizaciones. DynCorp posee 23.000 empleados, Cubic, unos 4.500, y MPRI, cerca 700, además de una lista de diez mil militares retirados a los que puede llamar. Deborah Avant, profesora de la Escuela Elliot de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y una autoridad en lo que a estos nuevos mercenarios se refiere, calcula que

los ingresos de las empresas militares privadas, que en 1990 ascendían a 55.600 millones, alcanzarán los 202.000 millones hacia 2010. Las empresas cuentan, incluso, con su propio grupo comercial de la industria, la Asociación para las Operaciones de Paz Internacionales, un nombre que le hubiera encantado a George Orwell.

Esas empresas no se limitan a formar a extranjeros. Hasta marzo de 2002, MPRI estaba contratada para dirigir los programas ROTC (Cuerpos de Entrenamiento para Oficiales de Reserva) en unas 217 universidades norteamericanas. Los ROTC ofrecen a los estudiantes dinero para sus estudios, a cambio de asistir a algunos cursos militares, vestir uniforme dentro del campus, recibir instrucción en una base militar durante parte del verano y aceptar ser oficiales del ejército después de licenciarse. Cuando perdió el concurso para seguir dirigiendo los programas ROTC, MPRI logró un contrato para gestionar los puestos de reclutamiento del país. Tanto MPRI como Cubic se muestran activas en el desarrollo de currículos, la redacción de doctrinas y la dirección de los programas para oficiales militares, así como en la instrucción de los agregados de prensa militares. En realidad, gran parte de esta privatización de nuestras fuerzas armadas desagrada profundamente a los profesionales uniformados. Tal como observa el coronel Bruce Grant: «La privatización es un modo de rehuir al congreso y de no informar a la opinión pública. La política exterior está siendo diseñada por consultores militares privados, motivados sólo por beneficios prácticos».¹³

Otro de los servicios que ofrecen las empresas militares privadas es la reparación de equipos, se trata en este caso de equipos tan complejos que las propias fuerzas armadas sencillamente no pueden encargarse de su mantenimiento. Ésta es una vieja historia. Presté mi servicio militar en la época de la guerra de Corea, como oficial de operaciones de un buque anfíbio, el *LST-883*, en el Pacífico occidental, y recuerdo bastante bien que el radar de navegación en el puente de mando siempre se estaba estropeando. Ni siquiera los mejores especialistas en electrónica entre nuestros compañeros conseguían arreglarlo, e invariablemente teníamos que llamar a un representante civil de los fabricantes para que lo reparara. En la actualidad, incontables sistemas de armamento complejos son en gran medida contratista-dependientes, incluyendo los misiles Patriot, los helicópteros Apache, las piezas de artillería Paladin, los tanques M1A1 Abrams y prácticamente todos

los vehículos aéreos no tripulados que utilizan las fuerzas armadas y la CIA. Algunos fabricantes llegan a prometer a los militares soporte técnico «de la fábrica a la trinchera».¹⁴

Se ha argumentado que la logística especializada y las actividades de apoyo técnico se apartan en exceso de los principales objetivos militares, y que el Departamento de Defensa tiene la posibilidad de imponer un mejor control de calidad a los contratistas privados que a las unidades militares regulares. Durante el decenio de 1990, el Pentágono empezó a contratar fuera toda clase de servicios, con excepción de disparar fusiles o pilotar aviones, con lo que dio lugar a un nuevo sector, en extremo lucrativo y de rápido crecimiento, del complejo militar-industrial. Dada la inclinación del Pentágono por los contratos del tipo «costes más honorarios»* (léase, «sin límites»), se han creado muchas firmas dedicadas al «apoyo» de las bases. Con el tiempo, los militares se han acostumbrado a contratar fuera de las fuerzas armadas la construcción, el mantenimiento y la seguridad de las bases. Los días de trabajar en la cocina, limpiar barracones y letrinas y hacer guardia, típicos del servicio durante la segunda guerra mundial y la guerra fría, son prácticamente desconocidos para los soldados contemporáneos.

Un ejemplo notable de este cambio lo constituye el lujosísimo complejo de Camp Bondsteel, en los Balcanes. Inmediatamente después de terminar la campaña de bombardeos contra Yugoslavia, en junio de 1999, Estados Unidos se adueñó de unas cuatrocientas hectáreas de tierras de labranza privadas en Uresevic, al sureste de Kosovo, cerca a la frontera con Macedonia; allí construyó, entre julio y octubre de 1999, Camp Bondsteel en un tiempo record. En los alrededores, edificó asimismo una base más pequeña, aunque igualmente lujosa, Camp Monteith. Bondsteel recibió este nombre en honor del sargento primero James L. Bondsteel, que ganó una Medalla de Honor en Vietnam; Monteith, a su vez, rinde homenaje al primer teniente Jimmy W. Monteith Jr., que ganó la Medalla de Honor en Francia, durante la segunda guerra mundial. Bondsteel es la base más grande y más cara construida desde la guerra de Vietnam: su construcción costó unos 36,6 millo-

* *Cost-plus contract*, tipo de contrato en el que se reembolsa al contratista todos los gastos en que haya incurrido más una cantidad fija o un porcentaje de esos gastos a modo de honorarios. Dado que los beneficios dependen del dinero invertido, este tipo de contratación se presta fácilmente a toda clase de abusos. (N. de la t.)

nes de dólares y su mantenimiento anual ronda los 180 millones.¹⁵ Los graciosos del ejército acostumbran decir que desde el espacio exterior sólo se pueden ver dos construcciones humanas: la Gran Muralla china y Camp Bondsteel.

Kellogg Brown & Root, la compañía que construyó Camp Bondsteel, continúa haciendo allí todo tipo de cosas, excepto las tareas militares. Con uno de los contratos más caros de la historia del Pentágono, Brown & Root, como se la conocía inicialmente, mantiene los cuarteles, prepara la comida, pasa la fregona por el suelo, transporta todos los suministros y gestiona los sistemas de agua y alcantarillado. La empresa, que emplea a cerca de un millar de antiguos militares estadounidenses y a unos siete mil albaneses, suministra 2.274.000 litros de agua al día, proporciona electricidad suficiente para una ciudad de 25.000 habitantes, lava 1.200 bolsas de ropa, y cocina y sirve 18.000 comidas al día. Según un informe de septiembre de 2000 de la Oficina General de Contabilidad, el organismo del congreso que supervisa los presupuestos, Brown & Root compró muebles por un valor de 5,2 millones de dólares para Camp Bondsteel y Camp Monteith, donde ni siquiera había espacio suficiente para almacenarlos. El informe también señalaba que en Camp Bondsteel había tal exceso de personal que los despachos se limpiaban cuatro veces al día, mientras que las letrinas sólo tres. Los soldados que prestan servicio allí dicen que la única pegatina que falta en sus trajes de faena es una que ponga *Patrocinado por Brown & Root*. La empresa presta servicios similares a muchas otras bases, entre ellas las situadas en Kuwait y Turquía, y a la nueva instalación norteamericana en Janabad, en Uzbekistán.¹⁶

Brown & Root, conocida hace mucho en Texas por sus vínculos políticos, fue adquirida en 1962 por la empresa petrolera y de construcción Halliburton. Dick Cheney era el secretario de Defensa cuando Brown & Root empezó a suministrar servicios logísticos al ejército. De acuerdo con un artículo de investigación de Robert Bryce, publicado en el *Austin Chronicle*, Cheney fue quien ideó e impulsó la privatización de las operaciones de logística de las fuerzas armadas. Su intención no era tanto mejorar la eficacia de éstas, como la de recompensar al sector privado. Básicamente, preguntó cómo podrían las empresas privadas ayudar al ejército a recortar cientos de miles de puestos de trabajo. «En 1992, el Pentágono, entonces bajo la dirección de Cheney, pagó a Brown & Root 3,9 millones de dólares para que

redactara un informe confidencial en el que se detallara cómo las empresas privadas —como ella misma— podían encargarse de la logística de las tropas norteamericanas en posibles zonas de guerra en todo el mundo. Meses más tarde, el Pentágono entregó a la empresa 5 millones de dólares adicionales para que actualizara el informe. Ese mismo año, la empresa obtuvo un contrato logístico de cinco años del Cuerpo de Ingenieros del ejército para trabajar con los militares en lugares como Zaire, Haití, Somalia, Kosovo, los Balcanes y Arabia Saudí.»¹⁷

Tras las elecciones de 1992, Cheney dejó el Departamento de Defensa y, entre 1995 y 2000, fue director ejecutivo de Halliburton. Bajo su dirección, Brown & Root obtuvo 2.300 millones en contratos gubernamentales, casi el doble de los 1.200 millones que había ganado del gobierno en los cinco años anteriores a su llegada a la compañía. Por unos 23,8 millones de dólares, Halliburton reconstruyó los campos de petróleo de Sadam Husein, dañados durante la guerra, a pesar de que Cheney, como secretario de Defensa durante la primera guerra del Golfo, había participado en su destrucción. En 1999 Halliburton se había transformado en el mayor empleador de trabajadores no sindicalizados de Estados Unidos, aunque Wal-Mart pronto la desplazó. Además, Cheney contrató a David Gribben, su jefe de gabinete cuando estuvo en el Pentágono, como uno de los principales «lobistas» de Halliburton. En 2001 Cheney regresó a Washington como vicepresidente, mientras Brown & Root continuaba construyendo, manteniendo y protegiendo bases estadounidenses, desde Asia central hasta el golfo Pérsico.¹⁸

Durante el período de Cheney como alto ejecutivo de Halliburton, la empresa avanzó desde el puesto 73.º al 18.º en la lista de los principales contratistas del Pentágono. El número de sus filiales situadas en paraísos fiscales en el extranjero ascendió, asimismo, de 9 a 44. Como resultado, Halliburton pasó de pagar 302 millones de dólares por impuesto de sociedades en 1998 a obtener 85 millones en devoluciones en 1999. Después de la segunda guerra del Golfo, mientras Cheney era vicepresidente, el Cuerpo de Ingenieros del ejército recompensó a la empresa con un contrato, sin que mediara concurso público, para apagar los pozos de petróleo incendiados en Irak. El contrato era abierto, sin límite de tiempo o de dólares, y era del tipo «costes más honorarios», es decir, que la empresa, además de tener garantizada la

recuperación del capital invertido, se aseguraba también unos altos beneficios. Esos contratos son típicos de los métodos de actuación de Brown & Root, y valen decenas de millones de dólares.¹⁹ El 4 de abril de 2003, para conmemorar su «Día de los Grandes Negocios de 2003», Citizen Works, una organización sin ánimo de lucro creada por el defensor de los consumidores Ralph Nader, galardonó a Dick Cheney con su premio «Papá Warbucks»* por su fundamental contribución a la especulación bélica que ha enriquecido a las grandes corporaciones norteamericanas.

Camp Bondsteel, un producto Brown & Root, es un lugar horripilante, rodeado por bermas de tierra de 2,5 metros de alto y nueve torres de guardia de madera. Todos los árboles de la zona han sido talados para obtener un campo de tiro abierto. Dominada por un enjambre de antenas de comunicación, antenas parabólicas y helicópteros de combate en vuelo, la base tiene un perímetro de casi diez kilómetros, y da la impresión de ser demasiado grande y permanente como para tener únicamente como objeto el mantenimiento de la paz en el sur de Serbia, una misión que el presidente Clinton afirmó que no tomaría más de seis meses y con la que el presidente George W. Bush, según dijo durante su campaña electoral, quería terminar. Lo más probable es que la base de Camp Bondsteel esté destinada a desempeñar algún papel en una gran estrategia para asegurarnos los yacimientos de petróleo de Oriente Próximo y Asia central, así como para controlar el crudo que se dirija a otros países.

Camp Bondsteel, de hecho, se sitúa sobre la ruta para el oleoducto transbalcánico propuesto por la compañía AMBO (Albanian-Macedonian-Bulgarian Oil). Se trata de un proyecto de 1.300 millones de dólares que, si llega a construirse, bombeará petróleo del Caspio desde el puerto búlgaro de Burgas hasta el puerto albanés de Vlore, en el Adriático, a donde llegará después de atravesar Macedonia. (El petróleo del Caspio, proveniente de la terminal de un oleoducto en Georgia, llega a Bulgaria en petroleros a través del mar Negro.) Una vez en

* Oliver «Papá» Warbucks, el hombre más rico del mundo en la tira cómica *Little Orphan Annie* (Anita, la huerfanita), creada por Harold Gray en 1924 y más tarde convertida en musical (1977). Warbucks debe su fortuna al comercio de armas durante la primera guerra mundial, algo que subraya su nombre (*war*, «guerra»; *bucks*, «dólares»). (N. de la t.)

Vlore, gigantescos petroleros se encargarían de transportarlo hasta Europa y Estados Unidos, y de ese modo se evitaría el congestionamiento estrecho del Bósforo —en la actualidad, la única salida marítima del mar Negro—, donde no pueden circular petroleros de más de 150.000 toneladas. El estudio inicial de viabilidad para el oleoducto AMBO fue realizado en 1995 por Brown & Root, que lo actualizó en 1999.²⁰ Bondsteel parece ser un campo base, al que James K. Galbraith, politólogo de la Universidad de Texas, ha denominado el «complejo militar-petrolero», del que Dick Cheney es, con toda seguridad, padrino.²¹

No fue una casualidad que, en febrero de 2003, Estados Unidos también empezara a construir dos nuevas bases militares en Burgas. El 14 de noviembre de 2001, el parlamento búlgaro ratificó un acuerdo por el que otorgaba a Estados Unidos el derecho a utilizar su espacio aéreo durante la guerra de Afganistán; cuando Turquía retiró su apoyo a la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos buscó el apoyo de Sofía para levantar una instalación permanente en el país, a lo que los búlgaros accedieron. La fuerza aérea se adueñó de gran parte del aeropuerto internacional de Burgas, uno de los tres aeropuertos comerciales de Bulgaria, y envió a numerosos equipos de trabajadores para edificar en una playa cercana una guarnición destinada al personal militar norteamericano: Camp Sarafovo. Un gran número de hombres de la fuerza aérea pareció surgir de la noche a la mañana en el lugar; se trata de la primera vez que tropas extranjeras ejercen el mando sobre el aeropuerto de Burgas desde que la Luftwaffe lo tomó en 1943. Durante la segunda guerra de Irak, Estados Unidos utilizó Burgas para enviar aviones cisterna KC-10 y KC-135 en misiones de reabastecimiento, en apoyo a las operaciones aéreas sobre Bagdad. En el puerto de Burgas se sitúa la mayor refinería de petróleo del país y, de acuerdo con las cláusulas del acuerdo entre los dos países, Bulgaria suministra todo el combustible que la fuerza aérea estadounidense necesita. A sólo a unos centenares de kilómetros, en el puerto rumano de Constanza, en la costa del mar Negro, la fuerza aérea norteamericana está construyendo un complejo de bases similar. Constanza es el centro de la gran industria petrolífera de Rumania. La guerra de Afganistán y la segunda guerra de Irak han resultado ser una espléndida oportunidad para que Estados Unidos consolide su estrategia petrolera para los Balcanes, cuya primera etapa fue Camp Bondsteel.²²

Las empresas militares y los contratistas privados se han convertido en indispensables para nuestras más de setecientas bases militares alrededor del mundo. Suministran —con ánimo de lucro— la logística que mantiene en funcionamiento el imperio. Camp Doha es un buen ejemplo de lo que ofrecen. Es la mayor base del ejército norteamericano en Kuwait y ha permanecido en uso continuo desde la guerra del golfo Pérsico de 1991. (Es importante distinguir Camp Doha, en Kuwait, de la ciudad de Doha, la capital de Qatar.) Camp Doha es un inmenso complejo de almacenes en el desierto a unos treinta y dos kilómetros de Kuwait City. Mientras en la época de la primera guerra del Golfo, la base poseía sólo dos pequeños edificios, en la actualidad es un inmenso depósito de más de doscientas hectáreas. Ha sido, desde diciembre de 1994, el cuartel general del Comando Central del Ejército en Kuwait (ARCENT-KU). En junio de 1991, cuatro meses después de terminada la operación Tormenta del Desierto, el Pentágono trasladó el 11.º Regimiento de Caballería Acorazada desde Alemania hasta Camp Doha, para crear una fuerza de reacción rápida en el caso de que se renovaran las hostilidades con Irak. Dado que esa unidad era entonces el único activo del ejército en la región, se la mantuvo en estado de máxima alerta, con los tanques preparados en todo momento para el combate. Se almacenaron en la base innumerables vehículos y enormes reservas de combustible y municiones, para ser usados en caso de emergencia.

Con el paso de los años, Camp Doha se ha convertido en modelo de los depósitos de municiones del ejército, el prototipo y ejemplo de una base avanzada para «preposicionar» el equipamiento, la munición y el combustible que requiere un destacamento acorazado de las dimensiones de una brigada. En teoría, todo lo que tiene que hacer el ejército es traer hasta estas bases a las tropas, que subirán a sus tanques y transportes ya preparados y se dirigirán al frente de batalla en los campos petrolíferos de nuestro planeta. Sin embargo, Doha no ha sido siempre una base modelo. En la mañana del 11 de julio de 1991, un calentador defectuoso en el interior de un camión de transporte de municiones cargado con proyectiles de 155 mm se incendió y explotó. Los proyectiles salieron disparados y cayeron sobre otros vehículos y depósitos de municiones, y provocaron incendios y nuevas explosiones que se prolongaron durante el resto del día. No murió nadie, pero cuarenta y nueve soldados resultaron heridos, y dos docenas de

edificios sufrieron graves daños. Entre la munición destruida, valorada en catorce millones de dólares, se encontraban unos 660 proyectiles de 120 mm de uranio empobrecido.²³

A consecuencia de este accidente, el ejército decidió entregar el mantenimiento de los vehículos y las municiones almacenados a contratistas privados. La empresa que recibió el contrato para encargarse de Camp Doha en 1991 fue DynCorp, de Reston, Virginia. En el año 2000 esta compañía ocupaba el vigésimo lugar en la lista de los doscientos principales contratistas de las fuerzas armadas. (Halliburton se situaba en el puesto número veintiuno.)²⁴ En 1994, el contrato para la manutención del equipamiento «preposicionado» en Camp Doha pasó de DynCorp a la ITT Corporation. Justo antes de la segunda guerra contra Irak, el contratista era Combat Support Associates, de Orange, California, una empresa conjunta de tres proveedores militares de California, Colorado y Texas. El contrato, que tiene una duración prevista de diez años y cubre todos los servicios de manutención y funcionamiento de los tanques y demás vehículos de orugas de Camp Doha, es del tipo «costes más incentivos»* y se calcula que podría alcanzar los 546.751.502 dólares, importe que el gobierno de Kuwait se ha comprometido a reembolsar al gobierno de Estados Unidos. A finales de 2002, Combat Support Associates tenía a 546 civiles norteamericanos y 747 nacionales de terceros países trabajando en la base.²⁵ Camp Doha se convirtió en el punto de partida de las fuerzas de asalto estadounidenses durante la segunda guerra de Irak.

Al igual que Camp Doha, las demás bases militares americanas en la región del golfo Pérsico dependen de contratistas privados para cuestiones de defensa, funcionamiento y servicios. Lo que este enorme cambio implica en términos de la eficacia de las fuerzas militares y el cómo afecta a nuestra idea de un gobierno civil responsable son asuntos que rara vez se mencionan en el congreso o en la prensa. Se supone que recurrir a contratistas privados resulta más rentable desde el punto de vista de la relación coste-eficacia; sin embargo, cuando los contratos sólo van a parar a unas pocas compañías con influencias y los concursos públicos no son del todo concursos incluso esa rentabilidad es cuestionable.

* *Cost-plus-award fee contract*, este tipo de contrato prevé, además del pago de honorarios, incentivos adicionales por buen desempeño. (N. de la t.)

A largo plazo, uno se pregunta si esas empresas privadas serán capaces de reclutar con éxito empleados para trabajar en los países donde existan fuertes resentimientos contra las bases estadounidenses. El 21 de enero de 2003, a las 9.15 de la mañana, un hombre armado disparó 24 tiros con un Kalashnikov a dos civiles norteamericanos que se encontraban detenidos ante una señal de tráfico en un todoterreno Toyota, a menos de cinco kilómetros de Camp Doha. Mató a Michael R. Pouliot, vicepresidente ejecutivo y cofundador de Tapestry Solutions Corporation, una pequeña empresa de desarrollo de *software* de San Diego, que produce modelos informáticos y ejercicios de simulación para los militares. El compañero de Pouliot, David Caraway, recibió seis impactos y quedó gravemente herido, pero sobrevivió. Es un alto ingeniero de programación de la empresa.

Unos meses más tarde, el 12 de mayo de 2003, poco después del final de los combates de la segunda guerra de Irak, unos terroristas volaron tres complejos residenciales para extranjeros en Riad, Arabia Saudí, y mataron a 34 personas, entre ellas ocho norteamericanos. Uno de sus principales objetivos fue un edificio de pisos para unos setenta empleados de Vinnell Corporation, militares mercenarios contratados para entrenar a la Guardia Nacional saudí. Afortunadamente para Vinnell, cincuenta de ellos se encontraban fuera, en un «ejercicio de entrenamiento», en el momento del atentado. Se especuló ampliamente sobre la posibilidad de que el ataque fuera una respuesta a la conquista de Irak. Vinnell tiene unos ochocientos empleados en Riad, trescientos de ellos son norteamericanos.

Un gran número de contratistas militares trabaja en Kuwait y Arabia Saudí en distintas tareas, incluidas la de ayudar al ejército a manejar y a mantener su equipamiento y la de instruir y equipar a los militares locales. Tras el asesinato de Camp Doha, un portavoz del ejército, el mayor Steve Stover, se limitó a comentar: «El mundo es un lugar peligroso, sobre todo para los estadounidenses en el extranjero».²⁶

El imperio de las bases

La presencia de fuerzas norteamericanas en el extranjero es uno de los símbolos más profundos del compromiso estadounidense con nuestros aliados y amigos. Mediante nuestra voluntad de usar la fuerza en nuestra propia defensa y en defensa de otros, Estados Unidos demuestra su determinación de mantener un equilibrio del poder que favorece la libertad. Para bregar con la incertidumbre y enfrentar los muchos retos de seguridad que encaramos, Estados Unidos necesitará bases y estaciones dentro y más allá de Europa occidental y el noreste de Asia, como así también arreglos de acceso temporal para el despliegue de las fuerzas de Estados Unidos a gran distancia.

«La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos»,
17 de septiembre de 2002.

DURANTE LA GUERRA FRÍA, la doctrina militar oficial sostenía que las bases en el exterior tenían cuatro objetivos. Existían para proyectar el poder militar convencional en las áreas de interés de Estados Unidos; para preparar, si fuera necesario, una guerra nuclear; para servir como *tripwires* (alambres trampa) y así garantizar la respuesta norteamericana a un ataque (sobre todo en los «sitios calientes» divididos, como Alemania y Corea del Sur), y para funcionar como símbolos del poder norteamericano.¹ Desde el final de la guerra fría, Estados Unidos ha permanecido en una búsqueda continua de nuevas justificaciones para su estructura de bases en permanente crecimiento, que van desde las «intervenciones humanitarias» hasta la de «desarmar a Irak».

Pienso que, en la actualidad, cinco objetivos posteriores a la guerra fría han reemplazado a los cuatro anteriores: mantener una preponderancia militar absoluta sobre el resto del mundo, tarea que incluye la vigilancia del imperio para asegurarse de que ninguna parte de éste se escape al control; espiar las comunicaciones, tanto de los propios ciudadanos como de los aliados y los enemigos, muchas veces, por lo visto, sólo para demostrar que ningún ámbito de privacidad es impermeable a la capacidad tecnológica de nuestro gobierno; procurar controlar tantas fuentes de petróleo como sea posible, para satisfacer la demanda insaciable de combustibles fósiles de Estados Unidos, como también para utilizar ese control como moneda de cambio con las regiones aún más dependientes del petróleo; proporcionar trabajo e ingresos al complejo militar-industrial (como, por ejemplo, los beneficios desorbitados que Halliburton ha sacado de la construcción y operación de Camp Bondsteel y Camp Monteith); y asegurar que el personal militar y sus familias vivan cómodamente y estén bien entretenidos mientras sirven en el exterior.

Sin embargo, ninguno de esos objetivos, o siquiera todos juntos, pueden explicar por completo nuestro imperio de bases en expansión. Existe algún otro factor, y creo que es el descubrimiento, tras la guerra fría, de nuestro inmenso poder, sumado al razonamiento halagador de que, puesto que lo tenemos, nos lo merecemos. Los únicos elementos verdaderamente comunes a todas las bases norteamericanas en el extranjero son el imperialismo y el militarismo: el impulso, por parte de nuestras élites, de dominar a otros pueblos, en gran medida porque tenemos el poderío para hacerlo, seguido del razonamiento estratégico según el cual, para defender estos puestos avanzados recién adquiridos y controlar las regiones donde se sitúan, hemos de expandir las áreas bajo nuestro control con todavía más bases. Para conservar ese imperio, el Pentágono ha de inventarse constantemente nuevos motivos para mantener en nuestras manos tantas bases como sea posible, mucho tiempo después de que las guerras y las crisis que condujeron a su creación hayan desaparecido. Tal como observó ya en 1970 el Comité de Relaciones Exteriores del senado: «Una vez que se ha establecido una base en el exterior, ésta adquiere una vida propia. Es posible que los objetivos iniciales se queden anticuados, pero se crean otros nuevos, no sólo con la intención de mantener las instalaciones en funcionamiento, sino que, a menudo, para aumentarlas de hecho.

En los departamentos del gobierno que poseen una implicación más directa —el Departamento de Estado y el de Defensa— apenas encontramos iniciativas para reducir o eliminar cualquiera de esas instalaciones». ² El Pentágono procura evitar que las poblaciones locales reclamen o ejerzan sus derechos sobre esas bases creadas hace tiempo (como en los casos del movimiento puertorriqueño para que la marina abandone la isla de Vieques, a la que utiliza sobre todo para las prácticas de tiro al blanco, y del movimiento de Okinawa para conseguir que los infantes de marina y los miembros de la fuerza aérea se marchen a casa o, al menos, a otra parte). Asimismo, trabaja con ahínco para idear una forma de recuperar el derecho a las bases en los lugares en que Estados Unidos se ha retirado, o le han echado (sitios como Filipinas, Taiwán, Grecia y España).

Dado que muchas de nuestras bases alrededor del mundo son secretas, que algunas se encuentran camufladas con banderas de conveniencia, y que muchas consisten en múltiples instalaciones distintas, ¿cómo se puede determinar con precisión el alcance y el valor de nuestro imperio militar? No resulta una tarea fácil. Si el secretario de Defensa hubiera de preguntar a sus asesores más cercanos, con acceso a la información más confidencial, cuántas bases tiene bajo su control, ellos tendrían que contestar, echando mano de la vieja excusa de los oficiales de marina: «No lo sé, señor, pero lo averiguaré».

Para empezar a responder a esta pregunta, hay que analizar dos fuentes oficiales de datos; las dos son de gran importancia, si bien difieren en cuanto a los criterios de compilación. El *Base Structure Report* (BSR, Informe sobre la Estructura de las Bases), del Departamento de Defensa, detalla las propiedades que pertenecen al Pentágono, mientras que el informe *Worldwide Manpower Distribution by Geographical Area* (Distribución mundial del personal según áreas geográficas), en adelante, *Manpower Report*, proporciona el número de efectivos militares de las bases, desglosado en el ejército, la marina, la infantería de marina y la fuerza aérea, además del número de civiles que trabajan para el Departamento de Defensa, civiles locales contratados y personas a cargo del personal militar. ³

Los dos informes habrían de tener una publicación trimestral, si bien, en la práctica, salen a intervalos irregulares. Ninguno de los dos es completo, puesto que muchas bases son secretas. Por ejemplo, Charles Glass, que fue corresponsal jefe de ABC News para Oriente Pró-

ximo entre 1983 y 1993 y es una autoridad sobre el conflicto palestino-israelí, escribe: «Israel ha proporcionado a Estados Unidos emplazamientos en el [desierto del] Negev para bases militares, ahora en construcción, que estarán bastante menos expuestas a los fundamentalistas islámicos que las de Arabia Saudí». ⁴ Esos emplazamientos no existen oficialmente. En la prensa han aparecido informes que señalan que aviones pertenecientes al grupo del portaaviones *Eisenhower* operan desde el aeropuerto de Nevatim, en Israel, y un especialista en asuntos militares, William M. Arkin, añade que: «Estados Unidos ha "preposicionado" vehículos, equipamiento militar (incluido un hospital con quinientas camas para los infantes de marina), Fuerzas Especiales y bombarderos y cazas de la Fuerza Aérea en al menos seis emplazamientos en Israel, todo ello como parte de lo que asépticamente se denomina "cooperación estratégica americano-israelí"». ⁵ A esas bases en Israel se las conoce sencillamente como Emplazamiento 51, 53 y 54. Se considera que su situación concreta es información confidencial y extremadamente delicada. No existe ninguna mención sobre bases norteamericanas en Israel en ningún documento oficial del Departamento de Defensa.

De los dos informes, el Manpower Report es el más completo, pues abarca todo el mundo, pero el BSR es fundamental por dos razones. En primer lugar, porque ofrece, para cada emplazamiento relacionado, un cálculo del «valor de sustitución de la instalación» (PRV) en millones de dólares. En segundo lugar, porque proporciona detalles de unas 725 bases situadas en 38 países extranjeros, de las cuales define a 17 como «grandes instalaciones» (las que tienen un PRV superior a 1.500 millones de dólares), a 18 como «instalaciones medianas» (con un PRV entre 800 millones y 1.500 millones de dólares) y a 690 como «instalaciones pequeñas» (con un PRV inferior a 800 millones). Según el Departamento de Defensa: «El PRV representa el coste declarado de la sustitución de la instalación, así como de la infraestructura que le da soporte, de acuerdo con los costes (mano de obra y material) y los estándares (métodos y códigos) actuales».

Si bien hay que poner en duda la exactitud de cualquiera de esas valoraciones, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del Pentágono en materia de contabilidad incompetente, aun así son útiles para establecer comparaciones. Así, de acuerdo con los especialistas del Pentágono, la base de la fuerza aérea de Ramstein, cercana a Kai-

serslautern, en Alemania, que es la mayor base aérea de la OTAN en Europa, tiene un PRV de 2.458.800.000 dólares; mientras que, por su parte, la base de la fuerza aérea de Kadena, en Okinawa, la mayor instalación de Estados Unidos en el sureste asiático, tiene un PRV casi dos veces mayor: 4.758.500.000 dólares (cifra a la que el almacén de municiones anexo a la base añade otros 964.300.000 dólares). Se trata de sumas astronómicas, aunque, con toda probabilidad, infravaloran los costes reales de la sustitución. En sus informes detallados por países, el BSR sólo incluye en su relación las bases que superan las cuatro hectáreas y tienen un PRV superior a diez millones de dólares. Los emplazamientos que no satisfacen esos criterios se incluyen, para cada país, bajo la rúbrica «otros». Únicamente no se contabilizan los lugares con un PRV equivalente a cero. Éstos comprenden locales pequeños, como los de auxilio a la navegación no tripulada o los emplazamientos de misiles estratégicos de la fuerza aérea. Las 725 bases en el extranjero, entre las que se incluyen las instalaciones relacionadas como «otras», poseen, según el Pentágono, un valor total de reemplazo de 118.000 millones de dólares. Ésta es una asombrosa suma para los bienes raíces y edificios propiedad de las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero.

El Manpower Report, por el contrario, no enumera las bases de forma individual, sino los países. Refiere que, en septiembre de 2001, Estados Unidos tenía desplegados en 153 países a un total de 254.788 militares. Si se incluyen los trabajadores civiles y personas a cargo de los miembros de las fuerzas militares, la cifra se dobla hasta alcanzar los 531.227. Dado que el Manpower Report no especifica qué misión cumple el personal militar en cada país en concreto, no es posible diferenciar entre uno con bases estadounidenses y otro que simplemente cuenta con unos guardias en la embajada, algunos efectivos de fuerzas especiales en misión de entrenamiento y quizá unos cuantos encargados de comunicaciones. Por consiguiente, parece útil considerar sólo los países con al menos cien militares en activo, pues resulta probable que éstos estén asignados a una base. De acuerdo con el Manpower Report, tendríamos entonces un total de treinta y tres países, lo que se aproxima bastante a los treinta y ocho países que recoge el BSR.

Existen algunas discrepancias importantes entre el Manpower Report y el BSR que no resultan fáciles de explicar. Para dar un ejemplo significativo, en el BSR de septiembre de 2001 no consta ninguna en-

trada para Bosnia-Herzegovina ni para Yugoslavia, Serbia o Kosovo. Para ese mismo mes, el Manpower Report habla de 3.100 efectivos del ejército en Bosnia y 5.675 en la provincia serbia de Kosovo. Es posible que el BSR omitiera de forma intencionada las bases de Camp Eagle en Bosnia (construida entre 1995 y 1996) y de Camp Bondsteel y Camp Monteith en Kosovo (construidas en 1999) con el fin de disimular que su propósito era proteger oleoductos, y no tanto contribuir a las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

Con estas salvedades, la tabla de las páginas 179-181 ofrece una instantánea del imperio americano por lo que se refiere al personal militar desplegado en el extranjero justo antes del 11 de septiembre de 2001. En los meses siguientes, Estados Unidos expandió enormemente el despliegue de sus fuerzas militares en todo el mundo, pero ante todo en Afganistán, otros lugares de Asia central y el golfo Pérsico.

Innumerables bases son «secretas», o se las disimula para que no consten en los libros oficiales; sin embargo, sabemos con seguridad que existen, dónde se encuentran muchas de ellas y, aproximadamente, qué hacen. Se trata de puestos de escucha, manejados por el Departamento de Defensa, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), dos de nuestros servicios de inteligencia más secretos, o bien de puestos avanzados secretos de nuestro complejo militar-petrolero. Los oficiales nunca discuten esto de forma abierta, pero ello no modifica el hecho de que el espionaje y el petróleo sean sus intereses obsesivos.

Estados Unidos cuenta con tantas bases de espionaje en el exterior que Michael Moran, de NBC News, sugirió en una ocasión: «Hoy podríamos tirar un dardo a un mapa del mundo y es bastante probable que caiga a pocos centenares de kilómetros de una operación de obtención de información confidencial establecida sigilosamente por Estados Unidos. ... La red de vigilancia de Estados Unidos se ha vuelto tan grande y formidable que, en ciertos aspectos, es tan temida como su armamento». ⁶ El secretismo oficial hace que resulte imposible conocer el número total de estas bases, pero podemos hacernos una idea de su alcance e identificar las más importantes. Por lo general, se localizan en instalaciones militares extranjeras y están dotadas con personal militar estadounidense, aunque disfrazado como pertenecientes al país donde se sitúan. Normalmente se trata de puestos de escucha y recuperación de información, que transmiten sus interceptaciones

DESPLIEGUE DE PERSONAL MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN LA FECHA DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA EL WORLD TRADE CENTER Y EL PENTÁGONO

Por región y país
Septiembre de 2001

Sólo se enumeran los países con al menos cien militares norteamericanos en servicio activo. La suma de los totales de los países citados no coincide con los totales regionales, puesto que estos últimos incluyen a todos los países con efectivos militares de Estados Unidos, con independencia del tamaño del contingente.

Ejército	Marina	Infantería de marina	Fuerza aérea	Total de personal militar	Civiles norteamericanos del Departamento de Defensa	Familiares y demás personas a cargo	Total
EUROPA							
68.640	12.474	3.368	33.623	118.105	23.346	136.807	278.258
<i>Alemania</i>							
55.149	322	279	15.248	70.998	16.488	97.571	185.057
<i>Bélgica</i>							
894	105	30	549	1.578	634	2.827	5.039
<i>Bosnia y Herzegovina</i>							
3.100	10	5	1	3.116	6	1	3.123
<i>España</i>							
38	1.554	141	257	1.990	406	1.938	4.334
<i>Grecia</i>							
71	283	84	68	506	104	98	708
<i>Groenlandia</i>							
0	0	0	153	153	3	0	156
<i>Holanda</i>							
360	23	12	281	676	298	1.283	2.257
<i>Islandia</i>							
3	1.022	48	670	1.743	277	1.465	3.485
<i>Italia</i>							
2.326	5.174	149	4.055	11.704	2.406	12.804	26.914
<i>Macedonia (antigua República Yugoslava de Macedonia)</i>							
350	0	0	1	351	1	3	355

Ejército	Marina	Infantería de marina	Fuerza aérea	Total de personal militar	Civiles norteamericanos del Departamento de Defensa	Familiares y demás personas a cargo	Total
<i>Portugal (Azores inclusive)</i>							
15	58	7	925	1.005	164	1.302	2.471
<i>Reino Unido</i>							
410	1.217	165	9.526	11.318	2.084	14.905	28.307
<i>Serbia (Kosovo inclusive)</i>							
5.675	1	1	2	5.679	13	0	5.692
<i>Turquía</i>							
172	26	196	1.759	2.153	399	2.195	4.747
<i>Embarcados</i>							
0	2.632	2.071	0	4.703	0	0	4.703
<i>ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán inclusivos)</i>							
39	6	81	25	151	3	49	203
SURESTE ASIÁTICO Y PACÍFICO							
30.584	19.110	20.157	21.819	91.670	9.457	50.283	151.410
<i>Australia</i>							
8	61	663	71	803	9	218	1.030
<i>Japón (Okinawa inclusive)</i>							
1.827	6.189	19.073	13.128	40.127	6.431	42.653	89.301
<i>República de Corea (Corea del Sur)</i>							
28.654	327	110	8.514	37.605	2.875	7.027	47.507
<i>Singapur</i>							
8	92	16	44	160	48	111	319
<i>Tailandia</i>							
42	9	30	32	113	3	64	180
<i>Embarcados</i>							
0	12.382	196	0	12.578	0	0	12.578
ORIENTE PRÓXIMO (NORTE DE ÁFRICA y SUR DE ASIA inclusivos)							
2.945	16.159	409	7.365	26.878	833	927	28.638
<i>Arabia Saudí</i>							
285	29	47	4.444	4.805	305	43	5.153
<i>Bahrein</i>							
38	1.843	157	27	2.065	286	543	2.894

Ejército	Marina	Infantería de marina	Fuerza aérea	Total de personal militar	Civiles norteamericanos del Departamento de Defensa	Familiares y demás personas a cargo	Total
<i>Diego García</i>							
4	557	0	29	590	5	44	639
<i>Egipto</i>							
341	30	57	72	500	67	110	677
<i>Emiratos Árabes Unidos</i>							
0	7	7	190	209	5	8	217
<i>Kuwait</i>							
2.150	7	41	2.010	4.208	98	5	4.311
<i>Omán</i>							
0	122	7	544	673	5	16	694
<i>Qatar</i>							
97	3	2	14	116	19	4	139
<i>Embarcados</i>							
0	13.546	0	0	13.546	0	0	13.546
ÁFRICA SUBSAHARIANA							
46	6	209	18	279	7	138	424
HEMISFERIO OCCIDENTAL							
307	12.560	764	384	14.015	300	1.064	15.379
<i>Canadá</i>							
13	53	9	88	163	21	203	387
<i>Chile</i>							
5	5	319	8	337	0	39	376
<i>Cuba (Guantánamo)</i>							
6	419	132	0	557	201	475	1.233
<i>Honduras</i>							
176	1	11	206	394	20	31	445
<i>Embarcados</i>							
0	12.014	0	0	12.014	0	0	12.014
TOTALES MUNDIALES							
102.561	60.315	24.988	63.234	251.098	33.946	189.268	474.312

FUENTE: U.S. Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate for Information, Operations and Reports, *Worldwide Manpower Distribution by Geographical Area*, 30 de septiembre de 2001.

sin procesar al cuartel general de la NSA en Fort George Meade, Maryland, o a la principal base de espionaje de la NSA, Menwith Hill, estación de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), situada en los páramos cercanos a Harrogate, en North Yorkshire, Inglaterra («la mayor estación de espionaje del mundo», como la llama la Campaña para el Desarme Nuclear).

Existen tres formas principales de telecomunicaciones. La primera comprende las llamadas de teléfono, faxes, correos electrónicos, conexiones a internet, telegramas y télex enviados y recibidos a través de los satélites de comunicaciones propiedad de Intelsat (International Telecommunications Satellite), una organización internacional creada a través de un acuerdo entre los países miembros. Esos satélites se encuentran en órbitas geoestacionarias, lo que quiere decir que siempre se mantienen en la misma posición en el espacio con relación a la Tierra. Intelsat fue creado en 1964 y puso en órbita su primer satélite en 1967; en 1999 ya gestionaba 19 satélites. En 2002, el 24 por 100 de sus acciones eran propiedad de Lockheed Martin Corporation. Resulta bastante sencillo, aunque costoso, enfocar una antena desde un puesto de escucha en la Tierra hacia uno de los satélites de Intelsat, o cualquier otro de comunicaciones, y fisgonear lo que está siendo enviado o recibido. Sin embargo, para obtener una cobertura plena, es necesario colocar puestos de escucha en lugares estratégicos por todo el planeta.

El volumen de mensajes interceptados de esa manera es inmenso. Según el director de la NSA, el teniente general de la fuerza aérea Michael V. Hayden, el tráfico internacional de las comunicaciones telefónicas ascendió, durante la década de 1990, de la impresionante cifra de 38.000 millones de minutos al año a más de 100.000 millones. A lo largo de 2002, la población mundial se habrá pasado más de 180.000 millones de minutos al teléfono, sólo en *llamadas internacionales*.⁷ Es posible interceptar con facilidad todos estos mensajes, aunque la tecnología del reconocimiento de voz sigue siendo poco fiable. El espionaje se realiza, habitualmente, vigilando números de teléfono concretos.

En contraste con ese tipo de mensajes, la segunda forma de telecomunicaciones, constituida por las señales de radio de onda corta y de VHF (muy alta frecuencia), alcanza poco más de 320 kilómetros antes de perderse debido a la curvatura de la tierra. A las estaciones de

escucha situadas a ras del suelo les resulta difícil interceptar estas emisiones. En la década de 1960, Estados Unidos instaló un gran número de monstruosas antenas de cuatrocientos metros de diámetro para captar las señales de radio de alta frecuencia en lugares como RAF Chicksands Priory, cerca de Bedford, a menos de sesenta kilómetros de Londres; San Vito dei Normanni, cerca de Brindisi, en el «tacón» de Italia; Ayios Nikolaos, al este de Chipre; la base aérea de Misawa, en Japón; la base aérea de Elmendorf, en Alaska; Udorn, en Tailandia, y Karamursel, en Turquía. Estas antenas tenían como objetivo interceptar las comunicaciones de las fuerzas aéreas de la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia, así como mensajes diplomáticos de todos los países del mundo.

En la actualidad, la NSA escucha este tipo de mensajes —los de los teléfonos móviles y las transmisiones interurbanas que emplean microondas de radio— desde el espacio. Con este propósito, la Oficina Nacional de Reconocimiento lanza satélites espía en órbitas estacionarias alineadas a lo largo del ecuador. Allí funcionan como «aspiradoras electrónicas», que interceptan y envían de vuelta a la Tierra un inmenso conjunto de mensajes. Esos satélites también sacan fotos, vigilan los océanos, detectan explosiones nucleares, avisan sobre lanzamientos de misiles y registran la telemetría de sus vuelos, transmiten mensajes secretos codificados entre las estaciones de la NSA y siguen el rastro de las emisiones de los radares. Esto requiere disponer de una gran cantidad de antenas en tierra para recibir los mensajes interceptados.

Entre las principales estaciones norteamericanas dedicadas a recibir las transmisiones de los satélites espía se encuentran RAF Menwith Hill; RAF Morwenstow, en Cornualles, Inglaterra; la base de la fuerza aérea de Bad Aibling, cerca de Augsburg, Alemania; Pine Gap, cerca de Alice Springs, en la zona central de Australia (que también trabaja con los satélites de la CIA); Sabana Seca, en Puerto Rico; «Summit Communications», situada en los suburbios de Taipei, Taiwán, y la Naval Air Facility, dentro de la base aérea estadounidense en Misawa, prefectura de Aomori, al norte de Japón.⁸ El 29 de noviembre de 2002, el experto en geopolítica Paul Rogers, de Opendemocracy.net, reveló que se había designado a Pine Gap y a Menwith Hill para que captaran las señales de un nuevo Sistema Infrarrojo Basado en el Espacio (SBIRS) de satélites, que informa de forma inmediata sobre lanzamientos de misiles en cualquier lugar de la Tierra y constituye un

componente clave del plan de defensa contra misiles balísticos de la administración Bush.

En 1975, el primer ministro australiano, el laborista Gough Whitlam, quiso cerrar la base de satélites de espionaje de Pine Gap, entonces secreta. Amenazó con hacer público que la base (a excepción de las antenas, en su mayor parte subterránea) constituía una operación militar enteramente dirigida por estadounidenses, bajo el mando de un funcionario de la CIA, hecho que se le había ocultado. El 11 de noviembre de 1975, en lo que consistió la mayor crisis constitucional australiana, el gobernador general de Australia, sir John Kerr, tras recibir instrucciones de la CIA, echó servicialmente a Whitlam y designó al líder de la oposición, Malcolm Fraser, como primer ministro provisional hasta una nueva convocatoria electoral. Fraser se preparó para movilizar al ejército para mantener el orden, y Australia estuvo al borde de la revolución. En 1977 Warren Christopher, entonces secretario adjunto de Estado para el este asiático y, posteriormente, secretario de Estado, prometió al depuesto Whitlam que Estados Unidos nunca volvería a interferir en la política interna de Australia. Sin embargo, Pine Gap no fue cerrada y, por supuesto, tampoco quedó bajo control del gobierno australiano.⁹

Un tercer tipo de comunicaciones se efectúa a través de cables de cobre y redes de fibra óptica de alta capacidad. A diferencia de los mensajes enviados por medio de los teléfonos celulares y las microondas, que pueden ser interceptados en la atmósfera, sólo es posible espiar los mensajes que se transmiten por cable si se coloca una derivación física en el propio cable. La seguridad de los cables de cobre corrientes acabó en octubre de 1971, cuando un submarino norteamericano, el *Halibut*, consiguió pinchar un cable militar soviético que se destinaba a la península de Kamchatka. Desde entonces, la marina ha pinchado muchos otros. En 1999 el congreso autorizó unos seiscientos millones de dólares para modificar uno de los submarinos nucleares más recientes, el *Jimmy Carter* (bautizado en honor del único presidente que ha servido en una de estas embarcaciones), de tal forma que pudiera intervenir cables de fibra óptica submarinos. Según el *Wall Street Journal*, el *Jimmy Carter* «será el primer submarino espía estadounidense ... [con] la tecnología más moderna para pinchar cables de fibra óptica bajo el mar». ¹⁰ Las bases para este tipo de misiones comprenden los puertos para submarinos de Diego García, en el

océano Índico; White Beach, en Okinawa; la isla de la Maddalena, en la costa de Cerdeña; Holy Loch, en Escocia, y Rota, cerca de Cádiz, España. La marina presiona para conseguir más submarinos, con el argumento de que son necesarios para las misiones de espionaje, si bien al coste aproximado de cada uno (unos 2.300 millones de dólares) los convierten en un modo algo costoso de obtener información confidencial.¹¹ Con todo, muchos expertos consideran que es más difícil intervenir los cables de fibra óptica que los de cobre, por lo que los primeros continúan siendo la forma de comunicación más segura, a excepción, por supuesto, de los humanos y las palomas mensajeras. La planificación de las pruebas de las armas nucleares indias de 1998, por ejemplo, se realizó a través de líneas de fibra óptica, y ésta fue la razón por la que los servicios de inteligencia norteamericanos no lograron enterarse de ellas con antelación. Los chinos son uno de los mayores compradores de cables de fibra óptica del mundo.

Las bases de «inteligencia de señales» (SIGINT) diseñadas para interceptar comunicaciones de los dos primeros tipos resultan bastante llamativas, pues consisten en campos repletos de antenas cubiertas mediante sólidas cúpulas de plástico, con el fin de protegerlas de las inclemencias del tiempo y ocultar hacia dónde apuntan. En Menwith Hill, por ejemplo, hay más de veinte reveladoras antenas parabólicas; y en Misawa, catorce. Cubiertas por sus cúpulas, las antenas parecen gigantescas pelotas de golf. En Inglaterra, las bases de este tipo están disfrazadas de estaciones de la Real Fuerza Aérea británica, aunque el personal británico con que cuentan es escaso o nulo. Por ejemplo, Chicksands Priory, creada por la RAF en 1941 para el espionaje electrónico del norte de Alemania y de Polonia durante la segunda guerra mundial, fue traspasada a la fuerza aérea estadounidense en 1950. Desde entonces, Estados Unidos ha utilizado Chicksands Priory para su beneficio exclusivo, sin compartir siquiera con la OTAN la información recopilada. Estos arreglos reflejan el hecho histórico de que los dos gobiernos nunca han llegado a realizar acuerdos formales sobre las bases norteamericanas en Inglaterra. Más aún, el parlamento nunca ha sometido a votación el asunto. Lo único que existe son cartas, fechadas en los primeros tiempos de la guerra fría, redactadas por funcionarios civiles británicos y firmadas por el embajador norteamericano, que otorgaban a Estados Unidos el derecho a usar las bases de la RAF.¹² Por esa razón, nunca ha sido posible precisar cuántas ba-

ses americanas existen en el Reino Unido (aunque una fuente bien informada declara que, al final de la guerra fría, eran ciento cuatro).¹³

Buena parte de la información sobre las bases norteamericanas disimuladas en el Reino Unido proviene de pacifistas como Lindis Percy, que impulsa en el Reino Unido la Campaña para la Responsabilidad de las Bases Americanas y quien ha sido detenida en numerosas ocasiones por colarse en sus instalaciones. Una de sus aventuras más recientes tuvo lugar en RAF Croughton, a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Stratford-upon-Avon, donde Percy fue acusada de «invasión de la propiedad privada con agravantes». Percy reveló a la prensa que el nombre RAF era falso, y que Croughton era, en realidad, una base de la fuerza aérea estadounidense. Una fuente autorizada, aunque no oficial, afirma que el personal de la base en servicio activo incluye 400 norteamericanos y 109 empleados del Ministerio de Defensa británico.¹⁴ RAF Croughton se ocupa de las comunicaciones con los aviones de la fuerza aérea americana, incluso con los bombarderos nucleares. Los estadounidenses retiraron los cargos contra Percy para evitar que se presentaran «pruebas comprometedoras» en un juicio público.¹⁵ En junio de 2002, Percy había recibido cinco citaciones judiciales por acciones semejantes en otras bases, incluida la de Menwith Hill.

Desde 1948, un acuerdo sumamente secreto entre los servicios de inteligencia del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda les permite intercambiar información no sólo sobre los países considerados objetivos, sino también sobre ellos mismos. Este convenio permite que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ), el Servicio de Seguridad para las Comunicaciones de Canadá, la Dirección de Transmisiones de la Defensa (DSD) de Australia y la Agencia de Seguridad para las Comunicaciones de Nueva Zelanda intercambien informaciones entre sí sobre sus propios ciudadanos —incluidos líderes políticos—, sin estar violando formalmente las leyes nacionales contra el espionaje interior. Por ejemplo, pese a que, al igual que ocurre con todos los demás países de este consorcio, la ley prohíbe al gobierno de Estados Unidos espiar a sus propios ciudadanos excepto con una orden judicial, la NSA puede, y con frecuencia lo hace, solicitar a uno de sus socios que espíe en su lugar para obtener la información que desea. Un ex empleado del Servicio de Seguridad para las Comunicaciones de Canadá reveló que, a pedido de

la primera ministra Margaret Thatcher, el GCHQ solicitó a los canadienses que espieran a determinados líderes políticos británicos.¹⁶

Desde 1981, al menos, lo que en sus inicios fue un acuerdo informal encubierto para compartir información confidencial entre los países de habla inglesa se formalizó con el nombre en código de «Echelon». Hasta entonces, el consorcio sólo intercambiaba informes de inteligencia «acabados». Con el surgimiento de Echelon, esos países empezaron a compartir interceptaciones brutas. Echelon es, en efecto, un programa específico para satélites y ordenadores, diseñado para interceptar las comunicaciones no militares de gobiernos, organizaciones privadas, empresas e individuos, en nombre de lo que se conoce como «alianza de la inteligencia de señales UKUSA». Cada miembro de la alianza maneja sus propios satélites y crea sus propios superordenadores «diccionario», que relacionan las palabras clave, los nombres, números de teléfono y todo lo que pueda convertirse en algo que una máquina pueda leer. Entonces se busca en las masivas descargas de información que los satélites proporcionan diariamente. Cada país intercambia su entrada diaria de datos y su análisis con los demás. Un miembro puede solicitar que se añada al diccionario de otro país una palabra o un nombre que desea vigilar. Echelon supervisa o controla aproximadamente ciento veinte satélites en todo el mundo.

El sistema, que tiene como objetivo los canales de comunicaciones *civiles* internacionales, es tan secreto que la NSA se ha negado incluso a reconocer su existencia o a discutirla con las delegaciones del parlamento europeo que han ido a Washington a protestar contra semejante vigilancia. Francia, Alemania y otros países europeos acusan a Estados Unidos y al Reino Unido, los dos países que inicialmente crearon Echelon, de espionaje comercial, lo que denominan «piratería de la información patrocinada por el estado».¹⁷ Existen algunas pruebas de que Estados Unidos ha utilizado información obtenida de forma ilegal a través de Echelon para asesorar a sus negociadores en las conversaciones comerciales con Japón, así como para ayudar a Boeing a vender aviones a Arabia Saudí, en competencia con la compañía europea Airbus. En enero de 1995, la CIA utilizó Echelon para seguir las gestiones británicas que tenían por fin obtener un contrato para la construcción de una central eléctrica de setecientos megavatios de potencia cerca de Bombay, India. Como resultado, Enron, General Electric y Bechtel lograron el contrato. En octubre de 1999, activistas y

funcionarios gubernamentales europeos celebraron un «Día del ataque de Echelon» enviando durante veinticuatro horas tantos mensajes de correo electrónico como fuera posible con palabras como *terrorismo* y *bomba*, para intentar sobrecargar el sistema.

La existencia de Echelon ha dado un gran impulso al desarrollo de sistemas de cifrado casi imposibles de violar, como los procedimientos basados en claves aleatorias de uso único. Éstos utilizan claves que sólo conocen el remitente y el destinatario y están protegidos contra toda forma de criptoanálisis; cada clave ha sido generada de forma aleatoria por un ordenador y una vez un mensaje ha sido cifrado con ella, ésta nunca vuelve a ser utilizada. Como el remitente y el destinatario deben usar la misma clave, el punto débil del sistema es conseguir que este último la reciba a través de un canal que no pueda ser manipulado; por lo general, esto se resuelve mediante el envío de un CD por correo.¹⁸ Las claves de uso único representan un avance al que la NSA se muestra en extremo hostil. No obstante, al saber que ésta tiene acceso a todo tipo de comunicaciones electrónicas, los usuarios que buscan privacidad han empezado a utilizar mensajes cifrados. Se dice que la NSA, a su vez, está intentando que Microsoft incluya claves de descodificación secretas que sólo ella conozca en todos sus programas informáticos.

El problema con respecto a Echelon no es sólo que los países lo utilicen de forma ocasional para favorecer sus actividades comerciales, ni que sea simplemente un club de hablantes de lengua inglesa, ni siquiera que se le pueda derrotar mediante los cables de fibra óptica y el sistema de cifrado. Su defecto esencial es que el personal militar y de inteligencia de los principales países de lengua inglesa lo gestiona con total secretismo y, por consiguiente, sin rendir cuentas de ningún tipo a los representantes de aquellos a los que dice proteger. Entre las farsas a que ha dado lugar Echelon está el caso de una mujer cuyo nombre y número de teléfono fueron a parar a los directorios de posibles terroristas porque dijo por teléfono a una amiga que su hijo había fracasado (en inglés, *bombed*) en la representación teatral del colegio.¹⁹ De acuerdo con varias fuentes informadas, el gobierno británico ha incluido la palabra *amnistía* en todos los diccionarios del sistema con el objetivo de recoger información contra la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional. A pesar de que, en la actualidad, los gobiernos de todo el mundo conocen la exis-

tencia de Echelon, no pueden hacer nada al respecto, excepto tomar medidas para defender la privacidad de sus mensajes, lo que no es más que otra muestra del implacable avance del militarismo en los países que afirman ser democráticos.

Como ya he dicho, no existe ningún objetivo único que sea capaz de explicar las más de 725 bases norteamericanas diseminadas por todo el mundo. Sin embargo, la adicción del gobierno a la vigilancia explica seguramente por qué algunas bases se encuentran donde se encuentran y por qué son tan secretas. Otra explicación para algunas de esas bases nos la ofrece la increíble dependencia estadounidense de los yacimientos de petróleo extranjeros, una dependencia que crece de año en año. Numerosas guarniciones en otros países tienen como objetivo defender concesiones petroleras de posibles competidores o proporcionar protección policial a oleoductos, aunque se afirme, invariablemente, que están realizando algún trabajo completamente diferente: librando la «guerra contra el terrorismo» o la «guerra contra las drogas», ofreciendo formación a militares extranjeros, participando en algún tipo de intervención «humanitaria». La búsqueda de recursos constituye, por supuesto, un objetivo tradicional de la política exterior. No obstante, Estados Unidos se ha vuelto excesivamente dependiente del petróleo extranjero porque se niega a ahorrar o a poner límites al consumo de combustibles fósiles, y también porque las empresas petroleras multinacionales y los políticos a los que apoyan obtienen enormes beneficios del despilfarro americano. Un año después de los atentados del 11-S, las ventas del todoterreno Chevrolet Suburban, un voraz consumidor de gasolina de más de dos toneladas que apenas supera los cinco kilómetros por litro de combustible, se han duplicado.²⁰

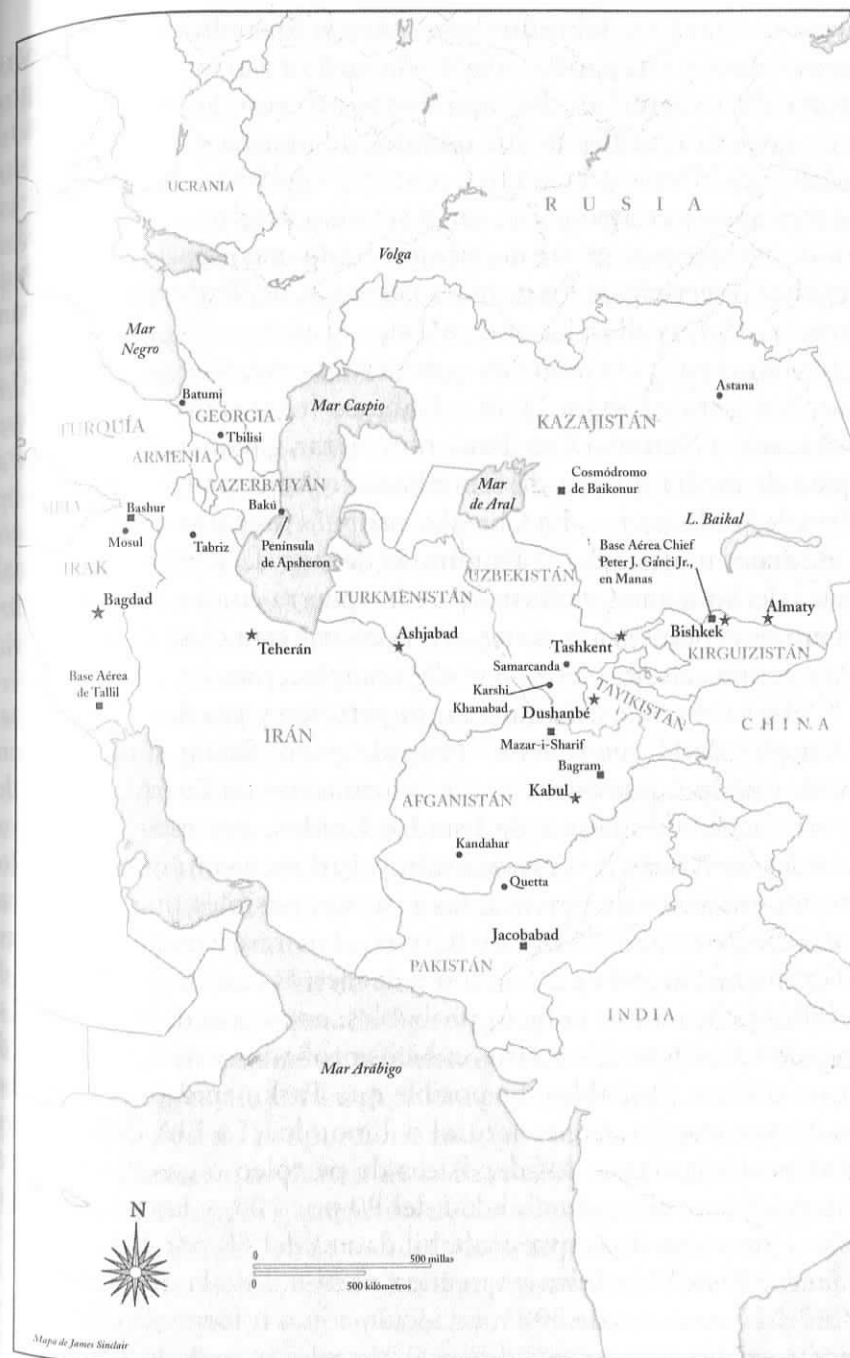
Empezando por el derrocamiento del gobierno de Irán por la CIA en 1953 para favorecer los intereses de British Petroleum, la política estadounidense hacia Oriente Próximo —a excepción de su apoyo a Israel— ha estado dictada por el petróleo. Éste ha sido un motivo constante detrás de la inmensa expansión de las bases por el golfo Pérsico. Las guerras de Estados Unidos en los campos petrolíferos de esta región son tema de un capítulo posterior; lo que deseo analizar aquí son otros casos en los que el petróleo es la *única* explicación plausible para adquirir más bases. En estos casos, el gobierno ha creado sofisticadas historias para encubrir la utilización de las fuerzas armadas

y recursos públicos en beneficio de intereses capitalistas privados. La invasión de Afganistán y la rápida expansión de las bases por el centro y suroeste de Asia son algunos de los mejores ejemplos de esta forma de actuar, aunque también en América Latina es posible encontrar un buen número de situaciones similares.

El petróleo es un asunto muy antiguo en el mar Caspio y, en especial, en la ciudad de Bakú, la capital de Azerbaiyán, situada en la península de Apsheron, en la costa oeste del mar Caspio. En el siglo XIII, Marco Polo contó que existían en la región unas fuentes de las que manaba un líquido negro que ardía con facilidad y que se utilizaba para curar la sarna de los camellos. Bakú era también el lugar de los «pilares de fuego eterno» —obviamente alimentados por petróleo— a los que adoraban los devotos del zoroastrismo. En los siglos XIX y XX, fue la localidad donde los hermanos Nobel, Robert y Ludwig, revolucionaron las técnicas de perforación de pozos de petróleo y los sistemas de transporte del crudo a los mercados internacionales, con lo que establecieron las bases de su inmensa fortuna, así como la de la rama parisina de la familia Rothschild. En la patente de un tercer hermano, Alfred, el inventor de la dinamita y, más tarde, creador del premio Nobel, se encuentra el origen del éxito de la empresa DuPont en Estados Unidos y de la Royal Dutch Shell en Holanda. El petróleo de Bakú fue el objetivo de Hitler en el Cáucaso, hasta que su ejército fue detenido y derrotado en Stalingrado.

En 1978, en un viaje por Azerbaiyán, Armenia y Georgia, me bañé en el Caspio y no pude evitar darme cuenta de su textura ligeramente aceitosa y de su olor. Sin embargo, en esa época, la región era más conocida por sus esturiones beluga y su caviar, puesto que la extracción del petróleo y el gas de la cuenca apenas se desarrolló durante los años en que sólo dos naciones, la URSS e Irán, tenían acceso al Caspio. Los soviéticos preferían invertir en sus inmensos campos de petróleo en Siberia y dejar las áreas musulmanas del Caspio para la producción dirigida sobre todo a los mercados locales. Irán, por supuesto, tiene sus propios pozos de petróleo.

Tras la desintegración de la URSS en 1991, cinco países independientes pasaron de repente a tener costas sobre el Caspio —Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán—, y comenzó la actual carrera por el control de los recursos de crudo y gas de la región. Las empresas multinacionales de petróleo con sede en Estados Unidos to-



ASIA CENTRAL

maron la delantera, y pronto las siguieron los militares norteamericanos en uno de sus papeles más tradicionales y arraigados: el de protectores de los intereses del capitalismo privado. Smedley Butler, teniente general retirado de los infantes de marina y ganador de dos Medallas de Honor del congreso, escribió en 1933: «He estado treinta y tres años y cuatro meses en el servicio activo. ... Y durante ese período trabajé gran parte del tiempo como una especie de matón de categoría al servicio de los grandes negocios, de Wall Street y los banqueros. ... Así, ayudé a hacer de México, y en especial de Tampico, un lugar seguro para los intereses petroleros norteamericanos en 1914. Contribuí a transformar Haití y Cuba en lugares decentes para que los chicos del National City Bank obtuvieran ganancias allí. Ayudé al saqueo de media docena de repúblicas de América Central para beneficio de Wall Street. ... En China, contribuí a asegurar que la Standard Oil no fuera molestada».²¹ Durante la década de 1990 y, en especial, tras las declaraciones de Bush sobre la «guerra contra el terrorismo», las empresas petroleras volvieron a necesitar esta clase de servicios, y el Pentágono se sintió feliz de poder complacerlas.

Nadie sabe con exactitud cuánto petróleo y gas hay en la cuenca del Caspio, dado que se ha investigado poco. Según el cálculo conservador de la Administración de Información de Energía (EIA), del Departamento de Energía de Estados Unidos, mientras las reservas probadas de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán no superan los ocho mil millones de barriles, las reservas posibles pueden superar los doscientos mil millones de barriles. Las reservas de gas natural de Turkmenistán son de 2,8 billones de metros cúbicos probados y de 4,5 billones de metros cúbicos probables; en el caso de Kazajistán, se habla de 1,8 billones de metros cúbicos probados y de 2,5 billones de metros cúbicos probables. Es posible que Turkmenistán posea la octava mayor reserva de gas natural del mundo. (La EIA define las reservas probadas como los depósitos de petróleo o gas natural cuya existencia tiene una probabilidad del 90 por 100, y las reservas probables como aquellos cuya probabilidad es del 50 por 100.)²² El documento sobre la política energética nacional de la administración Bush del 17 de mayo de 2001, conocido como Informe Cheney y tristemente celebre porque una de sus principales fuentes de información fue el presidente de la hoy desacreditada y quebrada Enron Corporation, sugiere que «las reservas probadas de petróleo en Azerbaiyán y

Kazajistán son de alrededor de unos veinte mil millones de barriles, algo superiores a las del mar del Norte».²³ Esas reservas probadas, cuyo valor oscila entre los tres y los cinco billones de dólares, podrían abastecer todas las necesidades de petróleo de Europa durante once años.²⁴ A las perspectivas de grandes beneficios se añaden otros dos factores: los costes laborales son en extremo bajos en la región, y las normativas medioambientales, inexistentes.

Incluso si la cuenca del mar Caspio resulta no ser el Eldorado que algunos afirman, es el último gran yacimiento de crudo y gas prácticamente inexplorado del mundo capaz de competir con el golfo Pérsico en el suministro de petróleo a Europa, el este asiático y Norteamérica. Posee, al parecer, el 6 por 100 de las reservas de petróleo probadas del planeta y el 40 por 100 de las de gas.²⁵ China, que cuenta con la economía de más rápido crecimiento del mundo, se convirtió en importadora bruta de crudo en noviembre de 1993, y sigue negociando un posible oleoducto desde Kazajistán a Shanghai, a través de la provincia de Xinjiang. China intenta, asimismo, obtener petróleo de Rusia a través de un oleoducto que se extendería desde Angarsk, en Siberia, hasta el campo petrolífero de Daqing, en Manchuria.²⁶

Sin embargo, imaginarse a las cinco repúblicas de Asia central, que obtuvieron su independencia cuando la URSS se desintegró en 1991, como suministradoras potenciales de petróleo a Estados Unidos, resulta muy problemático. Tanto Kazajistán (de lejos, la más extensa de todas) como Kirguizistán y Tayikistán comparten fronteras con China. Turkmenistán limita con Irán. Uzbekistán, en el centro, es la única que linda con todas las demás, así como con Afganistán. Todas, excepto una, están gobernadas por antiguos miembros del Partido Comunista. Únicamente el presidente Askar Akayev, de Kirguizistán, no es un antiguo jefe soviético, y ha conseguido que una firma de propiedad de su yerno proporcione todo el combustible necesario a los aviones militares que parten de la base norteamericana situada en el país, que es la mayor guarnición de Estados Unidos en Asia central.²⁷

Todos los dirigentes de estas repúblicas poseen penosos historiales de derechos humanos, siendo los dos peores el presidente de Uzbekistán (país en el que se encuentra la gran base aérea estadounidense de Khanabad) y el presidente vitalicio de Turkmenistán, quien ha establecido un culto a la personalidad que supera el de Stalin y ha colocado todos los ingresos procedentes del petróleo en una cuenta en el

exterior que sólo él controla. Incluso Kazajistán, una nación relativamente desarrollada y sofisticada (el famoso cosmódromo ruso de donde partieron las primeras misiones espaciales del mundo se encuentra en Baikonur, en el centro sur del país) y cuya población incluye entre un 35 y un 40 por 100 de rusos, difícilmente puede ser considerada una república modelo. Su primer ministro reveló que en 1996 el presidente Nursultan Nazarbayev depositó en una cuenta secreta en Suiza mil millones de ingresos provenientes del petróleo sin informar al parlamento.²⁸

Esos países se encuentran, asimismo, entre los principales productores de narcóticos del mundo, y sus regímenes represivos y monopolistas han demostrado ser un terreno propicio para la militancia islámica. Su «cultura del Kalashnikov» convierte en casi imposibles los acuerdos comerciales normales. El presidente George W. Bush dijo al director adjunto del *Washington Post*, Bob Woodward, que odiaba al dictador norcoreano Kim Jong-il porque mata de hambre a su pueblo, separa a las familias y tortura a los disidentes.²⁹ El historial de los autócratas de Asia central guardan un incómodo parecido con el de Kim, pese a lo cual Bush ha recibido en el despacho Oval al presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, así como a los de Kirguizistán y de Kazajistán. Además, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el entonces jefe del CENTCOM, general Tommy Franks, llamaron a todos, incluso a Saparmurat Niyazov, el estalinista presidente de Turkmenistán, para agradecerles efusivamente el haber permitido que nuestros aviones utilizaran su espacio aéreo y su apoyo a la ayuda «humanitaria» a Afganistán.³⁰

Sin embargo, el problema más grave es que estas repúblicas están encerradas en el continente asiático y, para llegar a los mercados, el petróleo y el gas deben ser transportados a través de oleoductos y no es posible garantizar plenamente la seguridad de ninguna de las rutas propuestas para ellos. Los rebeldes chechenos, los irredentistas armenios, los *mulás* iraníes y las guerrillas afganas y kurdas amenazan todos los caminos conocidos al oeste y al sur de Bakú.³¹ En la actualidad, los únicos oleoductos en funcionamiento conectan la cuenca del Caspio con Rusia, al norte. Se han creado consorcios internacionales para extender oleoductos en el fondo del mar Caspio, aunque los cinco países que lo bordean no han alcanzado un acuerdo acerca de cómo habrían de repartirse los derechos sobre el mar. Antes del ata-

que de Estados Unidos contra Afganistán, todas las grandes empresas petroleras presentes en la región —Chevron (ahora Chevron Texaco), Union Oil Company of California (Unocal), Amoco (ahora British Petroleum-Amoco), Exxon (ahora ExxonMobil), y unas pocas más— intentaron sin mucho éxito obtener concesiones y cerrar contratos para los oleoductos con Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. La situación sólo empezó a mejorar para estas empresas después de que los norteamericanos comenzaran a construir un complejo de bases militares en al menos cuatro países distintos: Afganistán, Kirguizistán, Pakistán y Uzbekistán.

La carrera por los oleoductos tuvo su inicio en 1993, cuando Chevron estableció un convenio con el gobierno de Kazajistán para explotar, durante cuarenta años, los yacimientos petrolíferos de Tengiz y exportar el petróleo por medio de un futuro complejo de oleoductos a través del mar Caspio hasta Bakú, y desde allí al puerto ruso de Novorossiisk, en el mar Negro.³² Los obstáculos que ha encontrado este proyecto, en el que Chevron lleva varios miles de millones de dólares invertidos, han resultado hasta el momento insalvables. El tramo occidental del oleoducto, ya completado, tiene dos partes. Una pasa por Chechenia, donde está en curso una rebelión contra Rusia, y la otra, hacia el norte, atraviesa Daguestán, apenas más estable políticamente. Se trata de oleoductos cuya protección contra los sabotajes resulta muy difícil. Tampoco es demasiado ventajosa la exportación desde el mar Negro, dado que los turcos han establecido serias limitaciones al paso de superpetroleros por el angosto estrecho del Bósforo con el propósito de evitar un desastroso derramamiento de crudo en las costas de Estambul. El tramo del oleoducto de Kazajistán a Bakú, a través del mar Caspio, sigue afrontando dificultades legales, a causa de los conflictos acerca de los derechos sobre el fondo del mar. El proyecto, además, es una empresa conjunta con Rusia, un acuerdo que irrita al gobierno de Estados Unidos, que desea que el petróleo y el gas dejen Asia central sin pasar por Rusia o Irán.

La relación de las personas que respaldaron el oleoducto de Kazajistán se parece al «quién es quién» de los políticos republicanos del petróleo. La asesora jefe de Chevron era Condoleezza Rice, entonces una profesora de Stanford que había entrado en la junta directiva de Chevron en 1991, tras trabajar un año en el Consejo de Seguridad Nacional de Bush padre. Recibió un anticipo anual sobre los honora-

rios de 35.000 dólares, además de un generoso paquete de opciones sobre acciones y otros alicientes, y dejó el cargo una década más tarde, días antes de convertirse en la consejera para asuntos de seguridad nacional de Bush hijo. La prensa se refiere a menudo a Rice como la «principal experta en Kazajistán» de Chevron, aunque nunca ha publicado nada sobre Asia central. (El único libro que ha escrito sin un colaborador es su tesis doctoral de 1984: *The Soviet Union and the Czechoslovak Army, 1948-1983: Uncertain Allegiance*.) No obstante, Chevron se sintió tan complacida con su desempeño que bautizó con su nombre a un superpetrolero de 129.000 toneladas, registrado en las Bahamas. A finales de abril de 2001, sin hacer ruido, la empresa cambió el nombre del buque por *Altair Voyager*, «para evitar atraer una atención innecesaria, generada por el nombre original del petrolero». ³³ Los marinos consideran que rebautizar un buque atrae la mala suerte, pero éste, al menos, cuenta con doble casco.

Dick Cheney, secretario de defensa de Bush, padre, y vicepresidente de Bush, hijo, participó en el acuerdo entre Chevron y Kazajistán como miembro de la Junta Asesora sobre Petróleo de este país. También colaboró en las negociaciones James A. Baker III, antiguo secretario de Estado, cerebro de la estrategia para conseguir que el tribunal supremo nombrara presidente a Bush hijo en 2001, y socio mayoritario del despacho de abogados Baker Botts, de Houston y Washington. La firma de Baker tiene un despacho en Bakú, que cuenta con cinco abogados. Él, al igual que Cheney, es miembro del consejo asesor de la Cámara de Comercio Americano-Azerbaiyana. Durante el decenio de 1990, el copresidente de este consejo fue Richard Armitage, un gestor veterano de la guerra antisoviética de Afganistán, patrocinada por Estados Unidos en la década de 1980, y subsecretario de Estado en el segundo gobierno Bush. Brent Scowcroft, jefe y mentor de Rice cuando era consejero de seguridad nacional de Bush padre, es miembro de la junta de Pennzoil, activa inversora en el consorcio del petróleo del mar Caspio.

El proyecto de oleoducto preferido en la actualidad por nuestro gobierno es un conducto de 1.750 km que partiría de Bakú y se prolongaría en dirección noroeste, pasando por Azerbaiyán justo al norte del enclave rebelde armenio de Nagorno-Karabaj (quizá no sea éste el sitio adecuado para colocar un oleoducto con destino a Turquía, dado que los armenios odian a los turcos), a través de Georgia hasta su puer-

to de Batumi, en el mar Negro, y luego hacia suroeste por el inestable Kurdistán turco, hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo. Sus costes de construcción estarían alrededor de los tres mil millones de dólares. A Estados Unidos le gusta este proyecto porque evita el paso por Rusia e Irán, y alcanza el Mediterráneo sin atravesar el estrecho del Bósforo ni los Dardanelos. Incluso si resulta posible construirlo y las tropas estadounidenses consiguen protegerlo, el oleoducto serviría, no obstante, sólo a Europa, un mercado maduro, con unas perspectivas de crecimiento limitadas, mientras que los verdaderos mercados para el petróleo y el gas de Asia central se encuentran en el este asiático. Además, para que el proyecto Bakú-Ceyhan resulte rentable, los precios del crudo han de mantenerse por encima de los veinte dólares el barril, un nivel que puede mostrarse poco realista.

Sin embargo, tanto la administración Clinton como la administración Bush han prestado un fuerte respaldo a ese oleoducto, que va a seguir adelante. En septiembre de 2002 el secretario de Energía de Estados Unidos, Spencer Abraham, pasó fugazmente por Azerbaiyán para presidir la ceremonia de colocación de la piedra inaugural del oleoducto, y a finales de noviembre el gobierno de Georgia aprobó el trazado a través del valle de Borjomi, una de las regiones más bellas del país y fuente de agua mineral, producto que constituye una de las principales exportaciones del país. Un funcionario de una empresa de agua mineral protestó argumentando que el plan equivalía a construir un oleoducto «junto a una reserva de Perrier o Evian en Francia». ³⁴

El gobierno Clinton, que ofreció un respaldo entusiasta al proyecto Bakú-Ceyhan, al igual que a la propuesta del oleoducto transafgano, que discutiremos más adelante, colocó a las fuerzas militares norteamericanas en Asia central con la intención de poner una cuña entre las nuevas repúblicas de esta región y Rusia. En 1997, Estados Unidos envió a Kazajistán quinientos paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada, con base en Carolina del Norte, para que instruyeran a tropas locales y de otros países de Asia central. Se consideró que la experiencia había sido tan exitosa que, al año siguiente, Estados Unidos hizo lo mismo en Uzbekistán, con tropas de la 10.ª División de Montaña. Luego formalizó esos lazos con una especie de versión militar de los programas de «ciudades hermanas» tan apreciados por las cámaras de comercio municipales. El Departamento de Defensa entregó a varias unidades estatales de la Guardia Nacional misiones de instruc-

ción en Asia central, al igual que la responsabilidad de dar formación a las tropas de esa región que visitaran Estados Unidos. A la Guardia Nacional de Arizona le correspondió Kazajistán, a la de Montana, Kirguizistán, y a la de Luisiana, Uzbekistán. Dos de esos países de Asia central albergan en la actualidad grandes bases militares permanentes de Estados Unidos.³⁵ La 10.^a División de Montaña del Fuerte Drum, Nueva York, está de vuelta en Khanabad, Uzbekistán.

Sin duda, el principal despliegue militar tras el 11-S para respaldar el oleoducto de Bakú-Ceyhan fue el envío, realizado en febrero de 2002, de aproximadamente ciento cincuenta efectivos de las Fuerzas Especiales y diez helicópteros de combate a la república de Georgia, en el Cáucaso. La historia utilizada como tapadera para esta operación fue que los estadounidenses estaban preparando a las fuerzas georgianas para luchar contra rebeldes chechenos, con supuestos vínculos con Al Qaeda, escondidos en el desfiladero de Pankisi, al noreste del país. Sin embargo, el 27 de febrero de 2002 el ministro de Defensa georgiano Mirian Kiknadze dijo en Radio Free Europe: «Los militares norteamericanos entrenarán a nuestra fuerza de reacción rápida, que vigila lugares estratégicos de Georgia, en especial los oleoductos».³⁶ La presencia de militares estadounidenses en una zona a la que considera dentro de su área de influencia irritó en extremo a los rusos, y dos regiones separatistas de Georgia —Abjazia y Osetia del Sur— decidieron de inmediato estrechar relaciones con Rusia.

Estados Unidos ha propuesto un tercer gran proyecto en Asia central: tender oleoductos y gasoductos dobles desde el sur de Turkmenistán hasta la costa pakistaní, a través de Afganistán. El respaldo a esta empresa parece haber tenido un gran peso en la decisión de la administración Bush de atacar Afganistán el 7 de octubre de 2001. El gobierno talibán de Afganistán había bloqueado hasta tal punto el desarrollo de este proyecto que su derrocamiento se transformó en el *casus belli* secreto de la «guerra contra el terrorismo» que se siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Como señaló el periodista Patrick Martin: «Si la historia se hubiera saltado el 11 de septiembre y los acontecimientos de ese día nunca hubieran sucedido, es sumamente probable que Estados Unidos hubiera ido a la guerra contra Afganistán de todos modos, y más o menos en las mismas fechas».³⁷

La idea original de explotar las inmensas reservas de gas de Turkmenistán pertenece a Carlos Bulgheroni, el duro y ambicioso presi-

dente de la empresa argentina Bidas, la tercera compañía de petróleo y gas de América Latina. En 1993, Bulgheroni negoció un acuerdo con el presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, y con Benazir Bhutto, entonces primera ministra de Pakistán, para construir conductos separados de gas y crudo a través de Afganistán hacia el puerto paquistaní de Gwadar, en el mar Arábigo. Sin embargo, Bidas no era lo suficientemente grande como para cubrir todos los costes del proyecto (dos mil millones de dólares para el gasoducto de 1.470 km y cuatro mil millones para el oleoducto de 1.600 km), por lo que intentó crear un consorcio con la Union Oil Company of California (Unocal), una empresa famosa por burlarse de las normativas medioambientales de California, y con frecuentes problemas legales debido a ello, y tristemente celebre por su colaboración con los generales asesinos de Burma y su indiferencia hacia los derechos humanos de sus empleados en las numerosas concesiones petrolíferas que posee. A Unocal le gustó tanto la idea que se dirigió directamente a Turkmenistán y Pakistán y negoció un nuevo acuerdo que dejó a Bidas fuera del negocio. Bulgheroni demandó de inmediato a Unocal por robarle su idea ante un tribunal de Texas, pero la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción. Al haber aprendido que el tamaño importa, en 1997 Bidas se fusionó con la gigantesca empresa norteamericana Amoco, la cual, al año siguiente, se fusionó a su vez con British Petroleum, dando origen a la mayor empresa británica. Sin embargo, para entonces BP-Amoco ya no estaba interesada en lo que se estaba transformando en uno de las aventuras petroleras más arriesgadas de los tiempos modernos.

El problema era, por supuesto, la interminable guerra civil en el fragmentado Afganistán. A mitad de la década de 1990, Unocal necesitaba un gobierno en Kabul con el que pudiera negociar los derechos de tránsito. Además, la financiación internacional necesaria para la construcción del oleoducto y gasoducto no llegaría hasta que las Naciones Unidas, Estados Unidos y muchos otros países pudieran reconocer a un gobierno en la capital afgana. En ese contexto, Estados Unidos y Pakistán decidieron que un extraño vástago de los muyahidín (guerreros islámicos) antisoviéticos de la década de 1980 era su mejor apuesta para acabar la guerra y obtener la legitimidad internacional. Patrocinaron y respaldaron una nueva organización que se autodenominaba los talibán (estudiantes del islam). Resulta difícil exa-

gerar los desastres que ha tenido que padecer Afganistán como consecuencia de la «ayuda» recibida de los norteamericanos, entre ellos la creación y posterior destrucción de los talibán. Durante los casi diez años que duró la ocupación soviética del país y nuestro reclutamiento y armamento de militantes islámicos del todo mundo para que lucharan contra los rusos, un tercio de la población abandonó el país. (En determinado momento, Pakistán e Irán acogían a más de seis millones de refugiados afganos, y en 1999 todavía había cerca de 1,2 millones en Pakistán y de 1,4 millones en Irán.) Después de que la Unión Soviética se retirara en 1989 y hasta la aparición de Unocal, Afganistán se sumergió en una de las guerras civiles más brutales de nuestra época. En el proceso, el país se convirtió en uno de los mayores productores de opio del mundo y el tráfico de narcóticos pasó a ser su principal fuente de ingresos.

Los talibán, compuestos sobre todo por miembros de la etnia pashtún originarios de los alrededores de Kandahar, declararon la guerra a los corruptos señores de la guerra tayikos y uzbekos de la «Alianza del Norte». Los afganos, cansados del conflicto, respaldaron a menudo las victorias de los talibán, puesto que sus líderes, al menos, acabaron con la corrupción, restauraron la ley y el orden (incluso cuando ese orden era el de una versión extremista de las prácticas islámicas medievales) y permitieron que, en parte del país, la vida recuperara cierta normalidad. El 27 de septiembre de 1996, los talibán tomaron Kabul, y continuaron empujando a los señores de la guerra hacia el norte, hasta las fronteras con Tayikistán y Uzbekistán. Tanto Unocal como el gobierno norteamericano estaban convencidos de que podrían trabajar con los talibán, y que el trato implacable que éstos proporcionaban a las mujeres y los delincuentes no era peor que el de los afganos aliados de Estados Unidos durante la década de 1980.

Estados Unidos comenzó a colaborar de todas las maneras posibles. El despliegue de los instructores militares norteamericanos en distintas repúblicas de Asia central a partir de 1997 era una señal de que Unocal, la avanzadilla norteamericana en la carrera por los derechos de los oleoductos, era la empresa que había que apoyar. Incluso después de que el extremista saudí Osama bin Laden regresara a Afganistán en 1996, como «invitado» de los talibán, y de los atentados de Al Qaeda contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, ni el Departamento de Estado de Clin-

ton ni el de Bush consideraron que Afganistán fuese un país que patrocinara el terrorismo, dado que eso hubiera puesto fin a la posibilidad de obtener financiación internacional para los oleoductos. Los dos gobiernos estaban dispuestos a aceptar el régimen talibán, aunque patrocinara el terrorismo, con tal de que cooperara con los planes para la explotación de los recursos petrolíferos y de gas natural de Asia central.

Un notable grupo de personas con información privilegiada en Washington se unió para promocionar el proyecto de Unocal. Ésta contrató a Henry Kissinger, antiguo asesor para la seguridad nacional, como consultor para sus negociaciones con Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. Kissinger trabajó entonces con el general Alexander Haig, consultor jefe para Turkmenistán y su antiguo asistente en la Casa Blanca y, posteriormente, secretario de Estado de Ronald Reagan. (Mientras tanto, Amoco contrató a otro antiguo asesor para la seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, que había contribuido a instigar la guerra afgano-soviética de la década de 1980.) Unocal pagó, asimismo, los servicios de Robert Oakley, quien se había ocupado de contraterrorismo en el Departamento de Estado y había sido embajador en Pakistán, Zaire y Somalia.³⁸

Haciendo gala de su creatividad, Unocal empleó a dos afganos influyentes para que intercedieran ante los talibán: un ciudadano pashtún con nacionalidad norteamericana, Zalmay Khalilzad, que obtuvo en 1979 un doctorado en la Universidad de Chicago, y Hamid Karzai, un pashtún de Kandahar con vínculos con el antiguo rey afgano, Zahir Shah, que entonces vivía en Quetta, Pakistán. En 1991 y 1992 George Bush padre nombró a Khalilzad subsecretario adjunto de defensa para planificación política, subordinado a Paul Wolfowitz, con quien mantuvo una estrecha relación. Mientras estaba en el Pentágono, Dick Cheney, entonces secretario de Defensa, también se fijó en Khalilzad y lo nombró en 2001 para dirigir el equipo de transición de Bush hijo para asuntos de defensa. El 23 de mayo de 2001, el presidente Bush nominó a Khalilzad para el Consejo de Seguridad Nacional, donde trabajó a las órdenes de Condoleezza Rice, y el 31 de diciembre de 2001 Khalilzad se convirtió en el «enviado especial» de Estados Unidos (es decir, en su embajador no oficial) en Afganistán, sólo nueve días después de que el gobierno interino de Hamid Karzai, respaldado por Estados Unidos, asumiera el poder en Kabul. En

1996, sin embargo, tanto Khalilzad como Karzai estaban a favor de los talibán, y consideraban que el nuevo gobierno era la mejor opción de «estabilidad» para Unocal. En noviembre del año siguiente, Unocal invitó a una delegación de funcionarios afganos a su sede de ingeniería en Houston (con una visita al Centro Espacial de la NASA incluida) y Khalilzad colaboró con la empresa en sus esfuerzos por impresionarlos. La continuidad de la colaboración entre Khalilzad y Karzai en Afganistán después del 11-S es un fuerte indicio de que el interés de la administración Bush en la región estaba —y sigue estando— tan centrado en el petróleo como en el terrorismo.³⁹

A mediados de la década de 1990, Unocal creó el consorcio Central Asia Gas (CentGas), del que entraron a formar parte el gobierno de Turkmenistán y otras seis empresas: Delta Oil Company de Arabia Saudí, Indonesia Petroleum, Itochu Oil Exploration Company de Japón, Hyundai Engineering and Construction Company de Corea del Sur, Crescent Group de Pakistán, y Gazprom, el gigante ruso del gas natural. Delta Oil fue incluida por ser cercana al rey Fahd de Arabia Saudí, y los asesores de Unocal pensaron que éste podría ayudar a legitimar la compañía estadounidense frente a los talibán. (Los únicos países que llegaron a reconocer al gobierno talibán fueron Arabia Saudí, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos.) Gazprom fue invitada con el fin de neutralizar cualquier oposición rusa. Unocal poseía el 46,5 por 100 de las acciones, Delta, el 15 por 100, y el gobierno de Turkmenistán, el 7 por 100. Según el periodista pakistaní Ahmed Rashid, toda una autoridad en la política de la región, en 1996 «la estrategia acerca de los oleoductos se había convertido en la fuerza impulsora tras el interés de Washington por los talibán».⁴⁰

Aunque el proyecto de Unocal parecía bueno en teoría, no funcionó. Los talibán se dividieron en dos facciones, una a favor de Bidas y otra a favor de Unocal, y estuvieron permanentemente solicitando a CentGas más dinero e inversiones en carreteras y otros proyectos de infraestructuras. Se rumorea que Osama bin Laden prefería trabajar con Bidas en lugar de con Unocal, en parte porque no le agradaba que sus compañeros de militancia colaboraran con los estadounidenses. La empresa, además, estaba encontrando resistencia en un ámbito al que, normalmente, no se dignaba prestar atención. La indiferencia de Unocal hacia los antecedentes de los talibán en materia de derechos humanos ofendió profundamente al movimiento feminista norteamer-

icano. La Fundación de la Mayoría Feminista, con sede en Los Ángeles, pidió al estado de California que revocara la licencia de Unocal, y en junio de 1998 Mavis Leno, esposa de Jay Leno, el presentador del programa *The Tonight Show*, asistió a un encuentro de los accionistas de Unocal y denunció a la empresa por su disposición a colaborar con los talibán.⁴¹ Entonces vinieron los ataques del 7 de agosto de 1998 a embajadas de Estados Unidos en el este de África, perpetrados por terroristas de Osama bin Laden. La respuesta de los norteamericanos no se hizo esperar: el 20 de agosto, el presidente Clinton ordenó disparar misiles crucero Tomahawk contra los campos de entrenamiento de Bin Laden en Afganistán. Al día siguiente, Unocal suspendió los trabajos del oleoducto hasta que Estados Unidos reorganizara el gobierno de Afganistán, y el 4 de diciembre se retiró formalmente del consorcio CentGas, alegando que los precios del crudo y el gas estaban demasiado bajos para que el proyecto resultara rentable. La mayoría de los analistas concluyó que ninguna otra gran empresa petrolera la reemplazaría y que el proyecto estaba muerto.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a desistir. Su propósito no era sólo ganar dinero, sino establecer la presencia norteamericana en Asia central. Estaba satisfecho con las enérgicas medidas que habían tomado los talibán con respecto a la producción de opio en Afganistán, y deseaba que se volvieran contra Osama bin Laden. Los talibán, además, estaban ganando la guerra contra la Alianza del Norte y consolidaban su régimen por todo el país. No obstante, tenían muy mala prensa, y la merecían. En noviembre de 1999, las Naciones Unidas impusieron sanciones a Afganistán por violación de los derechos humanos, y el 1 de marzo de 2001, los talibán fueron condenados internacionalmente por destruir dos monumentales y antiguas estatuas budistas en Bamiyán. Estados Unidos perdió la paciencia y concluyó que un «cambio de régimen» era necesario.

Tal como informó *Asia Times Online* en enero de 2002, «meses antes del 11 de septiembre, los planes para acabar con los talibán habían constituido el tema de discusiones diplomáticas y no tan diplomáticas a escala internacional. Hubo una reunión crucial en mayo de 2001 en Ginebra, entre el Departamento de Estado norteamericano y funcionarios iraníes, alemanes e italianos, cuyo principal asunto fue la estrategia para derribar a los talibán y reemplazar su teocracia por un «gobierno de base más amplia». La cuestión volvió a surgir con gran

fuerza en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) en Génova, Italia, en julio de 2001, cuando la India —que participaba como observadora— presentó sus propios planes.⁴² Poco después del encuentro del G-8 tuvo lugar otra reunión, en Berlín, entre funcionarios estadounidenses, rusos, alemanes y pakistaníes; y además fuentes de alto nivel dentro del gobierno pakistaní han señalado que ya en julio de 2001 existía un detallado plan americano para lanzar antes de mediados de octubre un ataque militar contra los talibán desde bases situadas en Uzbekistán y Tayikistán. Hay que recordar que el «afgano preferido de Bush», Zalmay Khalilzad, entró en el Consejo de Seguridad Nacional el 23 de mayo de 2001, con el tiempo justo para diseñar un plan de operaciones para un ataque contra Afganistán. El 2 de agosto de 2001, la subsecretaria de Estado para asuntos del sur asiático, Christina Rocca, antigua funcionaria de la CIA, mantuvo en Islamabad el último encuentro oficial de Estados Unidos con los talibán.

Dada esta trayectoria, parecería que los atentados del 11 de septiembre ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad de actuar de forma unilateral para acabar con los talibán, sin la ayuda de Rusia, India o cualquier otro país. En las semanas que siguieron al 11-S, el formidable aparato de relaciones públicas del Pentágono se puso en marcha para contar a una opinión pública que prácticamente no sabía nada sobre Afganistán y desconocía, en general, los intereses petroleros detrás de la política estadounidense en Asia central, cómo nos proponíamos aplastar a Osama bin Laden y a Al Qaeda. Estados Unidos quería a Bin Laden «vivo o muerto», y Donald Rumsfeld se transformó en una especie de cómic que día a día ofrecía un monólogo sobre los pormenores de su búsqueda. Con todo, la principal estrategia fue reanudar la guerra civil afgana distribuyendo, a través de la CIA, setenta millones de dólares en efectivo entre los señores de la guerra tayikos y uzbekos, que los talibán habían derrotado años atrás.⁴³ El resurgimiento de la Alianza del Norte, respaldada por el gran poder aéreo norteamericano, produjo el colapso casi instantáneo del régimen talibán, lo que permitió que Afganistán regresara a las luchas entre los sátrapas locales y al cultivo de la adormidera del opio.

Haciendo gala de una rapidez y una eficacia sorprendentes, los militares estadounidenses lograron utilizar la guerra para establecer bases militares en Afganistán y los países vecinos. Para sus operaciones militares inmediatas, que habían concluido en su mayor parte a prin-

cipios de 2002, Estados Unidos ocupó tres puntos principales dentro del propio Afganistán: el aeropuerto de Mazar-i-Sharif, en el extremo norte del país, la base aérea de Bagram, en los suburbios de Kabul, y el aeropuerto internacional de Kandahar, en el sur. Colocó asimismo tropas en Kabul para proporcionar de inmediato seguridad al recién instalado gobierno de Hamid Karzai, cuyos poderes difícilmente iban más allá de Kabul, y mucho menos alcanzaban al resto del país. Durante las primeras semanas, las Fuerzas Especiales, la infantería de marina y las tropas de vanguardia del ejército ocuparon todos estos lugares; sin embargo, cuando los talibán cayeron y Al Qaeda se dispersó por el interior del país y hacia la frontera con Pakistán, estas fuerzas de combate fueron reemplazadas por unidades del ejército que empezaron a construir guarniciones semipermanentes. En agosto de 2002, el jefe del CENTCOM, el general Tommy Franks, comentó que los soldados estadounidenses estarían en Afganistán «por mucho, mucho tiempo» y comparó la situación con la de Corea del Sur, donde tropas del ejército y la fuerza aérea llevan más de medio siglo acuarteladas.⁴⁴

Además de ocupar puntos estratégicos en Afganistán, el gobierno Bush llegó a un acuerdo con el general Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, para hacerse cargo de tres importantes bases de la fuerza aérea pakistaní: Jacobabad, a 480 km al noreste de Karachi; Pasi, a 288 km al oeste de Karachi, en la costa del mar Arábigo, y Dalbandin, a 272 km al suroeste de Quetta y a poco más de treinta de la frontera afgana. Fue desde estas bases que Estados Unidos envió a Afganistán sus Fuerzas Especiales y agentes de la CIA, y también fue de ellas que salieron los aviones artillados AC-130 y los aviones teledirigidos Predator. En total, Estados Unidos realizó hasta 57.800 misiones contra objetivos afganos desde bases situadas en Pakistán, o cruzando el espacio aéreo de ese país. En Jacobabad, Estados Unidos emprendió enseguida un gran programa para mejorar las carreteras, instalar un radar para control del tráfico aéreo, así como viviendas y oficinas con aire acondicionado. La pista de aterrizaje de Dalbandin había sido construida a finales de la década de 1980 con dinero saudí, para permitir que los príncipes de Arabia Saudí y el golfo Pérsico la utilizaran en sus expediciones de cetrería. A la CIA le resultó muy conveniente su cercanía a la frontera afgana. Sin embargo, en enero de 2002, ante la posibilidad de entrar nuevamente en guerra con la

India, Pakistán desplazó sus fuerzas de esa frontera hacia el sur y recuperó Jacobabad y Pasni. Aunque disgustados, a los estadounidenses no les quedó más remedio que compartir las instalaciones.⁴⁵

Todas estas bases afganas y pakistaníes, además de algunos pequeños campos de la CIA en la frontera entre Tayikistán y Afganistán destinados a las relaciones con los señores de la guerra de la Alianza del Norte, apoyaron directamente la corta campaña militar de otoño e invierno de 2001 que derrocó a los talibán. Sin embargo, el caso de las bases que se construyeron en Kirguizistán y Uzbekistán es muy distinto. Menos de un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos negoció con estos países el arrendamiento de las bases por un largo período de tiempo, una reacción sorprendentemente rápida para un gobierno que estaba respondiendo a un acontecimiento inesperado.

Esas bases no incrementaron de forma apreciable el alcance del poderío aéreo norteamericano en Afganistán. Los portaaviones del mar Árabe estaban igualmente cerca de los objetivos del sur de Afganistán, y resultaban mucho más económicos. Las bases tampoco estaban destinadas a permitir el despliegue de un gran número de fuerzas terrestres. La base de Kirguizistán se sitúa a casi a mil kilómetros de la frontera afgana, y la estrategia bélica de Washington no implicaba el uso de grandes concentraciones de tropas. De hecho, las bases kirguizas y uzbekas sólo proporcionaron un apoyo tangencial durante el conflicto, y estaban demasiado lejos de Irak para ser de gran utilidad en la guerra que ya se planeaba contra el régimen de Sadam Husein. Tampoco tenían como objetivo suministrar una cantidad significativa de ayuda humanitaria a Afganistán, dado que ésta estaba a cargo de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, que normalmente no tienen permitido el uso de bases estadounidenses.⁴⁶ Asimismo, no estaban allí para proteger a los regímenes locales de militantes islámicos, puesto que esos gobiernos no confiarían tal misión a los norteamericanos y tienen un acuerdo para ello con Rusia (que ha desplegado unos veinte mil efectivos con ese objetivo).

Según *The New York Times*, las instalaciones de Kirguizistán y Uzbekistán son prácticamente una copia de Camp Bondsteel. «Es posible que su función sea en realidad más política que militar», reconoció en una entrevista el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, quien, sin embargo, no especificó cuál podría ser esa función política.⁴⁷ La

base de mayor tamaño ocupa las quince hectáreas del, antes civil, aeropuerto internacional de Manas, a treinta kilómetros al oeste de Bishkek, la capital de Kirguizistán. Los norteamericanos han rebautizado el centro como Base Aérea Chief Peter J. Ganci Jr., en homenaje al oficial de mayor graduación del Departamento de Bomberos de Nueva York que falleció cuando se derrumbaron las torres del World Trade Center. Kirguizistán arrendó Manas inicialmente por un año, si bien el presidente Akayev aseguró a los funcionarios norteamericanos que estaba dispuesto a renovar el acuerdo por el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, el cuartel general de los militares norteamericanos en Kirguizistán no se encuentra realmente en la base, sino en el centro de Bishkek, en el hotel Hyatt Regency, donde también han montado una oficina de empleo para contratar a trabajadores locales. La base alberga a unos tres mil soldados e incluye un centro recreativo con gimnasio, transmisiones en directo de eventos deportivos americanos en televisores panorámicos y un cibercafé. Los pilotos de la fuerza aérea francesa y sus cazabombarderos Mirage se alojan también en Manas, al igual que las tropas británicas y danesas. No obstante, en lugar de utilizar las dos cocinas de tamaño industrial que proporciona Estados Unidos, los franceses tienen sus propias instalaciones para la preparación de alimentos, donde cocinan según los gustos de su país. Un piloto declaró a *The New York Times*: «desde el principio pensé que ésta sería una de las mejores bases».⁴⁸

En Uzbekistán, la guarnición gemela de Manas se sitúa en una antigua base soviética en Khanabad, cerca de la ciudad de Karshi, a unos ciento sesenta kilómetros al norte de la frontera con Afganistán. En mayo de 2002, se desplegaron allí un millar de soldados norteamericanos de la 10.^a División de Montaña y un escuadrón de cazabombarderos F-15E. Según fuentes rusas, Uzbekistán ha alquilado la base a Estados Unidos por veinticinco años. El Pentágono dice que esta información es falsa, pero se niega a revelar la duración real del contrato. El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, rehusó publicar el acuerdo porque, según se dice, le insta a «intensificar la transformación democrática de la sociedad».⁴⁹ El Pentágono ha otorgado a Kellogg Brown & Root, la vieja empresa del vicepresidente Cheney y subdivisión de Halliburton, un contrato sin límites de costes ni tiempo para que proporcione la logística de la base de Khanabad: todo, desde preparar la comida hasta suministrar el combustible para los avio-

nes, o sea, el mismo servicio que, con tantos beneficios, Halliburton presta a Camp Bondsteel y a innumerables instalaciones militares en todo el mundo.

En relación con las demás repúblicas de Asia central, la administración Bush ha declarado que construirá al menos una base en Tayikistán, si bien aún no ha especificado dónde. Ya tiene acuerdos para sobrevolar Azerbaiyán y Kazajistán, y está enviando oficiales kazajos a Estados Unidos para ser entrenados. Kazajistán ha dado permiso para que se utilice el aeropuerto de su antigua capital, Almaty, en caso de emergencia, y Estados Unidos está negociando con el país los derechos para una base en la costa del mar Caspio. La única república de Asia central que denegó a Estados Unidos el derecho a establecer bases o a sobrevolar su espacio aéreo fue Turkmenistán, que adoptó una política de neutralidad acerca del conflicto de Afganistán.

La subsecretaria de Estado para asuntos europeos y de Eurasia, que tomó posesión del cargo el 31 de mayo de 2001, es una diplomática de carrera, Elizabeth Jones. Habla ruso, alemán y árabe, y fue, de 1995 a 1998, embajadora en Kazajistán. En esa época solía conducir por la capital kazaja con un letrero en el parachoques que decía: «La felicidad son los múltiples oleoductos». En una conferencia de prensa en diciembre de 2001, prometió: «Cuando termine el conflicto afgano, no nos marcharemos de Asia central. Tenemos planes e intereses a largo plazo en esta región».⁵⁰ Tal como espero demostrar, existen abundantes razones para creerle.

7

El botín de guerra

Con el tiempo, el objetivo real de muchas de esas bases en el exterior ha cambiado y éstas han dejado de ser posiciones tácticas y estratégicas de valor militar para convertirse en sofisticadas viviendas americanas e instalaciones de logística. Proporcionan alojamiento y servicios a unidades que no tendrían razón de ser si se encontraran en Estados Unidos, y justifican que las tropas y sus familias emprendan interesantes y atractivos viajes al extranjero.

Coronel (retirado) James A. Donovan,
de la Infantería de Marina de Estados Unidos,
Militarism, U.S.A. (1970).

LA GUERRA Y EL IMPERIALISMO SON HERMANOS siameses: crecen juntos reforzándose el uno al otro y es imposible separarlos. El imperialismo es la principal causa de la guerra, y la guerra es la comadrona de las nuevas adquisiciones imperialistas. Las guerras suelen comenzar porque los líderes políticos convencen al pueblo de que es necesario emplear la fuerza para defender el país o alcanzar alguna meta abstracta: lograr que Cuba se independice de España, impedir la victoria de los comunistas en la guerra civil coreana, mantener las repúblicas bananeras de Centroamérica dentro del «mundo libre» o, incluso, llevar la democracia a Irak. Por lo general, para librar cualquier guerra que no implique la defensa del propio suelo es necesario, por razones estratégicas, poseer bases militares en el exterior. Sin embargo, una vez terminada la guerra, es posible que el vencedor quiera conservar esas bases y le resultará fácil encontrar razones para hacerlo; y

es común que se invoque la necesidad de estar preparado para el retorno de las hostilidades. Con el paso del tiempo, si la nación desarrolla ambiciones imperialistas, las bases formarán el esqueleto de su imperio. En los últimos siglos, las guerras lanzadas desde tales bases han constituido el principal medio del imperialismo para prosperar y expandirse, si bien la dependencia económica inducida es capaz, en ocasiones, de conseguir el mismo efecto. Desde el final de la segunda guerra mundial, los gobiernos estadounidenses han ofrecido numerosos argumentos para mantener las bases que han ido coleccionando por todo el mundo, y se ha señalado la necesidad de contener el comunismo, de evitar el «efecto dominó», de luchar contra las campañas de «limpieza étnica» y de impedir la diseminación de las «armas de destrucción masiva».

Desde la época de los romanos y de la dinastía Han en China hasta el presente, todos los imperios han contado con campamentos, fuertes o bases militares permanentes de algún tipo. El objetivo era establecer guarniciones en los territorios conquistados, mantener bajo control a poblaciones descontentas y servir como punto de partida para ulteriores conquistas imperiales. Sin embargo, lo más curioso y fascinante de la forma americana de imperio es que, en su fase más reciente, éste se presenta formado únicamente por bases, y no por territorios, y que en la actualidad esas bases rodean el planeta de un modo que, a pesar de los sueños seculares de dominación mundial, antes hubiera sido inconcebible.

No obstante, aunque nuestro propio país se encuentra repleto de instalaciones militares —existen 969 bases distintas en cincuenta estados—, la nuestra nunca ha sido una cultura guerrera, por extraño que parezca.¹ La mayor parte de nuestra población no viste uniforme, como tampoco (hasta la reciente «guerra contra el terrorismo») eran corrientes los uniformes en nuestros aeropuertos y ciudades; pocas veces podemos ver desfiles militares en nuestras calles, y es raro escuchar música marcial en los conciertos; y sin embargo, nuestro imperio se encuentra totalmente militarizado (si bien nuestro modelo de guerrero al parecer es el burócrata militar). Sólo es posible percibir y entender al moderno imperio norteamericano a través de un examen a fondo de nuestra política de bases, la manera específica en que acuartelamos la tierra. Buscar las pautas históricas de la consecución de esas bases y analizar nuestro sistema mundial de guarniciones es revelar la fuerza

de lo que, hasta hace muy poco, era para la mayoría de los norteamericanos un imperio oculto.

Nuestra historia imperial está repleta de bases en suelo extranjero. Hoy nuestra política exterior se diseña en gran parte en el Pentágono, y es aplicada por comandantes que se pasan la vida encerrados en nuestros innumerables puestos avanzados, los cuales forman un mundo profundamente interconectado, con sus propios hábitos, costumbres y estilo de vida, al igual que con su propia jerarquía y sus clases profesionales, cada vez más apartadas del resto de la población. Resulta incluso difícil recordar que, en la víspera de la segunda guerra mundial, nuestro ejército regular sólo tenía 186.000 hombres. Hoy, nuestras fuerzas armadas en «tiempo de paz», financiadas por un presupuesto de defensa superior al presupuesto nacional de la mayoría de los países, se componen de 1,4 millones de hombres y mujeres que viven en el mundo cerrado y autosuficiente de las bases, servido por su propia línea aérea —el Comando de Movilidad Aérea, con su flota de C-17 Globemasters, C-5 Galaxies, C-141 Starlifters, KC-135 Stratotankers, KC-10 Extenders y C-9 Nightingales—, que conecta los puestos avanzados desde Groenlandia hasta Australia. Deseo analizar aquí, empezando por su inicio a finales del siglo XIX, cómo se reunió ese mundo de bases para transformarlo en el motor imperial que conduce a Estados Unidos a más y más guerras.

Aunque, como antes he señalado, ya éramos un gran imperio continental en 1898, fue la guerra hispano-americana la que nos colocó en nuestro moderno camino imperialista. Algunas de las bases que adquirimos entonces —la bahía de Guantánamo, Pearl Harbor, Guam— son todavía hoy puestos militares avanzados, o se encuentran en territorios que más tarde nos anexionamos directamente. Al estar bajo la influencia del idealismo wilsoniano, no seguimos el ejemplo de nuestros aliados británicos, franceses y japoneses, que utilizaron la victoria en la primera guerra mundial para conseguir nuevas colonias. Nuestro imperio de bases sólo adquirió su alcance planetario tras la segunda guerra mundial, y Estados Unidos aún parece considerar la ocupación continuada del territorio de sus anteriores enemigos del Eje como un derecho de nacimiento. La guerra de Corea, pese a haber terminado en tablas, nos proyectó hacia Asia continental. Después de Vietnam, el número de nuestras bases decreció, no sólo en el sureste asiático, sino también en otros lugares donde nuestra derrota habí

alentado a los gobiernos y los pueblos a oponerse a nuestra presencia militar en su país; los tres ejemplos más importantes son España, Grecia y Filipinas. Con el fin de la guerra fría, retomamos nuestra marcha hacia el imperio. Nuestra guerra de 1999 contra Serbia, nuestras dos guerras contra Irak y nuestra guerra contra los talibán y Al Qaeda en Afganistán nos permitieron expandir nuestro imperio de bases en el exterior hacia la amplia región del sureste eurásico, desde los Balcanes en el oeste hasta la frontera con China en el este, un área rica en petróleo que se abrió a nuestros sueños imperiales tras el desplome de la Unión Soviética. En la actualidad, Irán es el único obstáculo para nuestro dominio militar de toda la región.

Tal como mencioné en el capítulo anterior, el Pentágono calcula los «valores de sustitución de las instalaciones» en dólares para todas las bases en el exterior cuya existencia reconoce. El valor total de esas 725 guarniciones militares en el extranjero reconocidas era, el 11 de septiembre de 2001, de 117.838.500.000 de dólares. Se calcula que las bases tomadas a los vencidos en la segunda guerra mundial que todavía se encuentran en nuestro poder valen 78.000 millones de dólares: 38.000 millones las de Alemania y 40.000 millones las de Japón, lo que representa el 66 por 100 del total. El Pentágono valora en 11.500 millones las guarniciones que estableció en Corea, a consecuencia de la guerra. En otras palabras, según los cálculos del Departamento de Defensa, en términos de «valor», la segunda guerra mundial y la guerra de Corea son el origen de tres cuartas partes de nuestro imperio de bases contemporáneo. Sin embargo, el Pentágono no incluye en sus cálculos ninguna de las bases adquiridas recientemente en los Balcanes, el golfo Pérsico o Asia central. No se han publicado valores de sustitución de sus instalaciones porque nuestro gobierno es reacio a admitir que éstas representan, en realidad, avanzadillas del imperio. (En algunos casos, además, los gobiernos islámicos del golfo Pérsico no desean dar publicidad a nuestra «huella» en la región.) El hecho, no obstante, es que aumentamos y consolidamos de forma notable nuestras bases en el golfo Pérsico, como preparación para nuestra nueva guerra contra Irak. Dedicaré a ese acontecimiento el próximo capítulo, y éste a los botines de guerras precedentes.

LA GUERRA HISPANO-AMERICANA Y NUESTRAS BASES EN LATINOAMÉRICA

La mayoría de nuestras bases en América Latina son consecuencia de la Doctrina Monroe de 1823 y de la guerra hispano-americana de 1898. Después de que, en 1776, Estados Unidos declarara su independencia del Imperio Británico, los norteamericanos en general consideraron su nuevo país la quintaesencia del estado antiimperialista. Durante su primer siglo de existencia, esta creencia tenía algún fundamento (siempre que uno estuviera dispuesto a considerar deshabitadas las tierras de los mexicanos y los nativos norteamericanos). La revolución americana inspiró una ola de levantamientos por todo el Caribe y Suramérica que condujo a la independencia de casi todas las colonias españolas y portuguesas. Estas rebeliones llevaron, a su vez, a la Doctrina Monroe, por medio de la cual —según el relato oficial que encontramos en los libros de texto norteamericanos— Estados Unidos se designó a sí mismo como el protector de las naciones del hemisferio occidental contra ulteriores incursiones europeas.

La propia Doctrina Monroe reflejaba, en realidad, las ideas de John Quincy Adams, un miembro del Partido Federalista, y no las del presidente James Monroe, que era republicano. Cuando en 1823 Adams decidió presentarse como republicano a las siguientes elecciones presidenciales, hubo de contrarrestar la sospecha de que albergaba inclinaciones «pro británicas» y, para ello, ideó la Doctrina Monroe.² Sin embargo, ésta no fue proclamada principio fundamental de nuestra política exterior hasta la presidencia de James K. Polk (1845-1849) —quien añadió más territorio a Estados Unidos que cualquier otro presidente, a excepción de Thomas Jefferson—, y para entonces su efecto ya era imperialista. La Doctrina Monroe fue invocada por primera vez durante una disputa con Gran Bretaña acerca del territorio de Oregón, y luego con el fin de advertir a las potencias europeas de que no debían interferir en los conflictos que condujeron a la guerra mexicana de 1846-1848.

Las interpretaciones tradicionales del imperialismo estadounidense siguen el estilo ya familiar de los textos sobre el imperialismo británico, es decir, «conquistamos medio mundo sin darnos cuenta», fuimos «imperialistas renuentes» y nuestras acciones carecían de «racionalidad de propósito».³ Tal como subrayó el analista de relaciones inter-

nacionales Ronald Steel: «El tema de la renuencia constituye una de las explicaciones más extendidas en las historias del colonialismo».⁴ Además de sostener que, en realidad, nunca tuvimos la intención de volvernos imperialistas, los historiadores norteamericanos diferencian entre la vertiente continental y la vertiente marítima de la conquista estadounidense de otros pueblos, y señalan que únicamente la segunda puede ser considerada imperialismo «real». La vertiente continental —el movimiento de conquista en dirección oeste a costa de México y de los indígenas norteamericanos— es interpretada, por lo general, como simple «expansionismo», como si una presión inexorable, superior a cualquier plan o voluntad, nos hubiera forzado a ello.

El paso de la vertiente continental a la marítima a finales del siglo XIX fue consecuencia, según la famosa tesis de Frederick Jackson Turner de 1893, de la desaparición de la «frontera», una vez completada la colonización del oeste americano. Serios trabajos académicos han demostrado hace tiempo las pretensiones ideológicas que sostienen la tesis de Turner, pero ésta constituyó, sin duda, una de las defensas más sofisticadas del giro hacia la expansión en ultramar. Aun así, eminentes historiadores estadounidenses, como Samuel Flagg Bemis, de la Universidad de Yale, han sostenido que el imperialismo iniciado en 1898 fue ante todo «una gran aberración en la historia americana», que, en su opinión, sería finalmente corregida por los líderes políticos liberales del siglo XX, como Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt.⁵

La Doctrina Monroe adoptó nuevas formas de manera oportunista. En diciembre de 1904, al defender la intervención de Estados Unidos en todo el continente americano para suprimir los movimientos políticos que pudieran interferir en el pago de las deudas de los países latinoamericanos, el presidente Theodore Roosevelt enunció su corolario a esa doctrina. El «corolario Roosevelt» señalaba que, puesto que Estados Unidos era una «nación civilizada», tenía el deber de ejercer su poder a escala internacional para garantizar el cumplimiento de la ley y detener las «fechorías crónicas», dondequiera que ocurrieran. El sucesor en la presidencia de Roosevelt, William Howard Taft, antiguo gobernador de Filipinas, proclamó lo que denominó la «diplomacia del dólar» —otro eufemismo para referirse al imperialismo—, e invocó el corolario Roosevelt para promover y proteger los intereses empresariales norteamericanos en el exterior, en particular en el Caribe y Centroamérica.⁶ Entre 1898 y 1934, Estados

Unidos envió a los infantes de marina cuatro veces a Cuba, siete a Honduras, cuatro a República Dominicana, dos a Haití, una a Guatemala, dos a Panamá, tres a México, cuatro a Colombia y cinco a Nicaragua (donde construyó bases y mantuvo una presencia ininterrumpida durante veintiún años, a excepción de un corto período en 1925).⁷ Tal como observa el politólogo David Abernethy: «El país que había proclamado la Doctrina Monroe para proteger la independencia de los países de habla hispana en el Nuevo Mundo se encontraba ahora en la extraña situación de estar reemplazando a España como soberano colonial y de reprimir los movimientos nacionales de independencia».⁸ El corolario Roosevelt sólo fue suplantado, en 1934, por la Política del Buen Vecino de Franklin Roosevelt.

La primera guerra dedicada, de forma explícita, a la creación de bases militares fuera de Norteamérica fue la guerra hispano-americana. A pesar de que, oficialmente, tenía como objetivo prestar apoyo a los rebeldes cubanos contra el dominio español y vengar el hundimiento del *Maine*, el verdadero motivo era el establecimiento de bases militares y navales en el Caribe y el Pacífico occidental, de acuerdo con los planes de Theodore Roosevelt, entonces secretario adjunto de la marina, de John Hay, secretario de Estado, de varios senadores republicanos relevantes, como Henry Cabot Lodge y Albert Beveridge, del capitán Alfred T. Mahan, teórico militar defensor del poderío naval, y de varios promotores de la guerra, como Brooks Adams y Elihu Root. Como consecuencia de la victoria en ese conflicto, Estados Unidos transformó en colonias Puerto Rico, Guam y Filipinas, se anexionó Hawái y la Zona del Canal de Panamá (donde situó gran número de bases) y creó una base militar en Cuba.

Después de la segunda guerra mundial, le otorgamos la independencia a Filipinas, aunque mantuvimos allí, hasta que en 1992 el senado filipino nos echó, dos de nuestras mayores bases en el exterior: la base aérea Clark, en Angeles City, y la base naval de la bahía de Subic, en Olongapo, ambas situadas en la isla de Luzón. Desde entonces, el Pentágono ha estado intentando encontrar una manera de reestablecer la presencia militar estadounidense en las islas, tanto exagerando la amenaza de China como por medio de los «intercambios» militares patrocinados por los acuerdos de fuerzas visitantes (VFA) y, más recientemente, con el pretexto de la «guerra al terrorismo». En 2002, la administración Bush logró reintroducir a nuestras fuerzas armadas en

Filipinas para instruir a los militares de este país en la lucha contra las guerrillas musulmanas de las islas del sur.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LAS BASES ALEMANAS

La segunda guerra mundial debilitó fatalmente todos los principales imperios coloniales y, al mismo tiempo, dejó a Estados Unidos convertida en la nación más poderosa de la Tierra, una verdadera potencia imperial de primer orden. Con el inicio de la guerra fría, Estados Unidos decidió no sólo aferrarse a los territorios que había ganado durante la guerra, sino ampliar su presencia en el exterior hasta formar un inmenso anillo de bases desde Islandia hasta Japón que rodeara por completo la Unión Soviética y China, cuyo Partido Comunista había salido victorioso de una amarga guerra civil.

Independientemente de si la mayor parte de esas bases hubiera tenido o no verdadera importancia en caso de una guerra con la URSS, se justificó su existencia como parte esencial de la política de «contención» del comunismo. En ocasiones se adujo, además, que era necesario retener esas bases sólo para que no cayeran en manos de los soviéticos. La contención y la negativa estratégica a ceder puestos avanzados a los soviéticos sirvieron de fundamento a una nueva versión del imperialismo, que vino a reemplazar la vieja y desacreditada práctica del colonialismo. Las bases militares, vagamente legitimadas a través de alianzas y pactos de seguridad mutua, se convirtieron en la forma institucional adoptada por ese nuevo imperialismo. Esto ocurrió incluso en Latinoamérica, donde utilizando viejas explicaciones imperiales los norteamericanos había mantenido durante más de un siglo una forma más tradicional de dominación económica y política. La ideología de la guerra fría permitió que Estados Unidos proclamara que el derrocamiento de los gobiernos electos de Guatemala, Chile y Nicaragua y el entrenamiento de miles de oficiales latinoamericanos en técnicas de represión estatal eran una parte esencial de la contención del comunismo y de la influencia soviética en el hemisferio.

Los dos grandes premios de la segunda guerra mundial fueron Alemania y Japón. Mientras el ejército norteamericano ocupó Japón totalmente, el caso de Alemania, donde los dos ejércitos victoriosos se habían encontrado en la ribera del Elba en 1945, era diferente y el

empate entre Estados Unidos y la URSS convirtió al país en el símbolo por excelencia de la guerra fría. Con la división de la Alemania ocupada entre las cuatro potencias, Estados Unidos pasó a controlar los estados del centro y sur de Baviera, parte de lo que hoy es Baden-Württemberg y Hesse; Francia ocupó las regiones occidentales; el Reino Unido, el norte, y la URSS, la mitad este del país. Y los cuatro países gobernaron conjuntamente la capital, Berlín. En el centro-sur de Alemania, un territorio del tamaño de Oregón, Estados Unidos desplegó a unos 285.000 efectivos dotados de armas nucleares en casi 800 bases. A lo largo de la frontera que se creó artificialmente cuando los ejércitos se detuvieron, la URSS acuarteló a aproximadamente 380.000 efectivos y cerca de 20.000 tanques, uno de los mayores ejércitos de tierra jamás reunidos. En un principio, los planes militares de la OTAN para rechazar una invasión soviética contemplaban una línea defensiva en el Rin; por consiguiente, las principales bases aéreas y comandos de la OTAN se emplazaron por detrás del Rin, en Francia. Sin embargo, en mayo de 1966, en plena guerra de Vietnam, el gobierno francés, presidido por el general Charles de Gaulle, declaró que deseaba retomar «la soberanía total [sobre] el territorio francés» y que no «aceptaría la presencia en Francia de unidades, instalaciones y bases extranjeras que estuvieran, en cualquier sentido, bajo control de autoridades diferentes a las francesas».⁹ Francia, además, optó por retirar sus fuerzas del mando militar de la OTAN porque éste estaba dominado por un general norteamericano. (Francia se reintegraría a la estructura militar de la organización en 1995.)

El 31 de marzo de 1967, la OTAN dejó Francia y trasladó a Bélgica el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE). Los principales comandos del ejército norteamericano fueron reubicados en Stuttgart y Heidelberg, con lo que la región centro-sur de Alemania quedó aún más congestionada de bases militares norteamericanas. A pesar de que la posibilidad de una guerra con la URSS ya era entonces menor, Estados Unidos desarrolló una nueva estrategia «defensiva» y colocó sus bases aéreas lo más cerca posible de la frontera francesa. Los estrategas estadounidenses situaron seis aeropuertos de combate (Bitburg, Hahn, Ramstein, Sembach, Spangdahlem y Zweibrücken) en el pequeño estado alemán de Renania-Palatinado, que se convirtió en zona de influencia norteamericana (y lo continúa siendo). Los comandantes de Estados Unidos consideraron que, en

caso de producirse, la invasión soviética comenzaría a través del valle situado entre el macizo del Rhön y las montañas Vogelsberg, donde el terreno es propicio para el avance de los tanques. La pequeña ciudad de Fulda, situada a sólo treinta y dos kilómetros de la frontera con Alemania Oriental, se encontraba justo en el camino de esa posible invasión. El ejército, por consiguiente, creó una «comunidad militar» en Fulda que ocupaba el centro de la ciudad y otros veintidós emplazamientos en los alrededores, pertenecientes todos al cuartel general del 104.º Grupo de Apoyo de Área de la cercana Hanau. Tras la reunificación alemana en 1990, la importancia militar de la ciudad desapareció de un día para otro. Los últimos soldados norteamericanos dijeron adiós a Fulda en el verano de 1994.

Muchas de las bases situadas en Alemania están, en realidad, conformadas por numerosas bases más pequeñas o «emplazamientos» separados entre sí, una fragmentación que multiplica el efecto de nuestra presencia militar sobre las comunidades civiles de los alrededores. El Departamento de Defensa prefiere contar sólo las bases más grandes en sus informes, con lo que la cifra que declara es inferior a la real, mientras que las personas que viven en las proximidades de los acuartelamientos piensan que contar todos los «emplazamientos» es lo que importa. Keith B. Cunningham y Andreas Klemmer, investigadores del Centro Internacional para la Conversión de Bonn, han estudiado los efectos económicos del cierre de las bases en Alemania y las implicaciones a largo plazo de mantener en Europa central unos acuartelamientos que carecen de función militar. Según ellos, en el momento de la unificación alemana, Estados Unidos tenía 47 grandes bases militares en Alemania (37 «comunidades militares» y 10 bases aéreas).¹⁰ Sin embargo, si se modifica el criterio del cálculo, se constata que «Estados Unidos mantenía 285.000 efectivos en Alemania, en casi 800 emplazamientos distintos. En 1995 ese número había caído a aproximadamente 94.000 efectivos situados en unos 260 emplazamientos».¹¹

Lo que el ejército denomina comunidad militar existe únicamente en Alemania. En Estados Unidos, las principales bases militares son normalmente grandes reservas autosuficientes, más o menos apartadas de las áreas urbanas civiles, y a menudo forman por sí solas el equivalente a un pueblo o una ciudad de tamaño pequeño o mediano. Por ejemplo, el Fuerte Hood, en Texas, situado a menos de 96 km de Austin, ocupa 88.000 hectáreas y tiene una población de 130.000 personas.

Por el contrario, «cada comunidad militar [alemana] consta de uno o más cuarteles, o *Kasernen*, cercanos al centro de la ciudad, que funciona como centro administrativo y social de la comunidad. Los soldados y sus familias pueden vivir en «complejos de viviendas familiares» contiguos, gestionados por Estados Unidos, o conseguir su propia vivienda en barrios alemanes vecinos. La mayoría de las comunidades militares también gestionan polígonos de tiro y campos aéreos fuera del centro de la ciudad. Además, con frecuencia, las comunidades ofrecen apoyo a cierto número de emplazamientos aislados, como estaciones de radio, depósitos, almacenes y hospitales. Todo esto conduce a que, por término medio, una comunidad gestione más de diecisiete emplazamientos distintos en al menos dos ciudades alemanas diferentes. ... Poco después del fin de la guerra fría, las comunidades militares se reorganizaron bajo el mando protector de los Grupos de Apoyo de Área (ASG), para facilitar su consolidación. En 1991, se establecieron trece ASG en Alemania, que comprendían un total de treinta y cuatro Comunidades Militares».¹²

Resulta poco probable que cualquier ciudad o pueblo norteamericano, con la posible excepción de Honolulu, soportase lo que los alemanes, los coreanos, los ciudadanos de Okinawa y muchos otros han aguantado durante más de medio siglo. Michael Goldfarb, un productor de cine y televisión estadounidense, captó la atmósfera de la Alemania de la guerra fría en la descripción que hizo en 1970 de un recorrido en coche por Fráncfort: «En cada semáforo se detiene un todoterreno con un puñado de soldados americanos. Continuamos conduciendo por la ciudad e intentamos encontrar el Departamento de Vehículos Motorizados o su equivalente alemán, y en todos los semáforos hay todoterrenos con soldados americanos. En las calles parece haber más todoterrenos que coches de policía, y más militares estadounidenses que policías alemanes. La guerra terminó hace más de veinticinco años. Ciertamente, la relación entre el número de soldados americanos y el de policías alemanes debería haberse inclinado en favor de estos últimos. Estamos ya muy lejos de la fase de ocupación y pacificación. Mientras otro todoterreno nos adelanta, la expresión «legionarios romanos» me viene a la mente».¹³

Todavía en septiembre de 1991, el 103.º ASG, que comprendía las comunidades militares de Fráncfort —su cuartel general—, Darmstadt y Wiesbaden, reunía a un total de 25.598 efectivos y ocu-

paba 1.937 hectáreas repartidas en setenta emplazamientos diferentes. El 26.º ASG tenía su centro administrativo en la antigua ciudad universitaria de Heidelberg, que era asimismo el cuartel general del Ejército de Europa (USAEUR), el 7.º Ejército y el 5.º Cuerpo. El ASG de Heidelberg incluía las ciudades de Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim y Worms, contaba con un total de 36.014 militares y ocupaba 7.416 hectáreas en 78 emplazamientos diferentes. La actual oficina de asuntos públicos del 26.º ASG refiere que la «comunidad» abarca doce instalaciones distintas en la ciudad de Heidelberg y sus alrededores y añade lacónicamente que se puede ir a pie al complejo comercial» de las fuerzas armadas «desde los acuartelamientos de Campbell y Patton».¹⁴

Las oficinas principales de esas comunidades militares acostumbran a estar en el centro de las ciudades, dado que, en 1945, el ejército simplemente puso sus despachos en los antiguos cuarteles alemanes, con frecuencia imponentes edificios construidos en el siglo XIX. Las numerosas unidades de viviendas familiares de las comunidades de las fuerzas armadas han recibido pintorescos nombres norteamericanos, como Pattonville, en la comunidad militar de Stuttgart, y Mark Twain Village, en Heidelberg. Una de las comunidades militares más agradables es Garmisch, situada en los Alpes bávaros, cerca del antiguo refugio de Hitler, Berchtesgaden. Allí se ubica un gran número de hoteles, residencias de solteros, un centro comercial, un campo de golf y otro de tiro al plato, todos bautizados en honor de distintos generales norteamericanos. Constituye, en efecto, el Centro Recreativo de las Fuerzas Armadas para Europa, es decir, una estación de esquí oficial para los militares. Para que el alto mando pueda aparentar estar trabajando cuando visita Garmisch, también se encuentra allí el Centro Europeo George C. Marshall para Estudios de Seguridad, un *think tank* militar. Las fuerzas armadas no han considerado necesario reducir el tamaño del 543.º ASG, que incluye Garmisch.¹⁵

Garmisch no es más que la punta del iceberg recreativo, en lo que a la vida en las bases alemanas se refiere. En diciembre de 2002, el ejército destinó 375.000 dólares para mejoras en el campo de golf de Rheinblick, en Wiesbaden, nueve millones para un centro de diversiones y bolos en Baumholder, dieciséis millones para un gimnasio en Bamberg, y 290.000 para un restaurante con «área infantil» y un centro de diversiones en los cuarteles Pulaski, y todos esos proyectos no eran más que para el 104.º Grupo de Apoyo de Área de Hanau. Los

demás ASG cuentan todos con planes de expansión semejantes. Es posible, sin embargo, que no llegue a construirse ninguno de esos proyectos, debido al resentimiento que la administración Bush guarda hacia Alemania por su negativa a apoyar la guerra contra Irak.

En contra de la regla general según la cual una base en el exterior, una vez construida, nunca se cierra, después del fin del Pacto de Varsovia en 1990, ni siquiera el ejército pudo seguir alegando que era necesaria una gran fuerza militar en Europa central. Por consiguiente, el Pentágono recortó en dos tercios las fuerzas armadas desplegadas en Alemania, y las transfirió a las nuevas bases que estaba creando en los Balcanes y el golfo Pérsico. El aspecto más sorprendente de la disminución de efectivos en Alemania consistió, sin embargo, en el número de bases que Estados Unidos decidió *mantener*: unas 325, ocupadas, de acuerdo con el Manpower Report de septiembre de 2001, por 70.998 soldados y personal de la fuerza aérea, 16.488 empleados civiles del Departamento de Defensa y 97.571 personas a cargo de las fuerzas militares. Dado que no existe un uso creíble para todas estas fuerzas en Europa, éstas se limitan a vivir allí a la espera de «operaciones fuera del área». A lo largo de cuarenta y un años, entre 1948 y 1989, desplegamos a las tropas estacionadas en Alemania fuera de su área de operaciones en dieciocho ocasiones. No obstante, durante los cuatro años posteriores a la operación Tormenta del Desierto, el Pentágono envió a los soldados acuartelados en Alemania a cuarenta y nueve misiones fuera de su área.¹⁶

Alemania se ha transformado en una versión europea de Okinawa, un área de estacionamiento de tropas para las actividades imperiales en el Mediterráneo, Oriente Próximo y Asia central. Tal como sucede en Okinawa, las regiones alrededor de las bases se encuentran expuestas constantemente a la contaminación ambiental, al ruido de los aviones de guerra, a la elevada incidencia de delitos sexuales y a las disputas acerca de la jurisdicción legal aplicable al gran número de norteamericanos que viven en la sociedad anfitriona. La primera señal sería de que Alemania empezaba a hartarse de su situación semicolonial llegó con las elecciones generales de septiembre de 2002, cuando Gerhard Schröder consiguió la reelección como primer ministro por su compromiso explícito de disociar a Alemania de los planes estadounidenses para hacer la guerra contra Irak. La tensión creciente entre los dos países debido a nuestras aspiraciones globales puede redundar en la transferencia a gran escala del personal militar desde Alemania

a los países ex comunistas de Europa oriental, así como a las bases recientemente creadas en Irak y Asia central. Han sido numerosas las personas en la administración Bush, entre ellas el general James L. Jones, comandante de la OTAN, que han abogado por una reducción radical de las bases norteamericanas en Alemania.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y JAPÓN

El caso de Japón es muy similar al de Alemania, pero existen dos diferencias relevantes: en primer lugar, en su territorio no hubo confrontación alguna entre soviéticos y norteamericanos, y en segundo lugar, desde el principio, el nivel de las protestas contra el acuartelamiento de las tropas extranjeras fue mucho más elevado. Como consecuencia de la devastación producida por la guerra y el bombardeo atómico, Japón se convirtió en un país en extremo pacifista. Cuando se redactó la nueva constitución japonesa, la ocupación aliada introdujo una cláusula pacifista explícita, el artículo 9, por el que Japón renunciaba para siempre al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El idealismo que animaba esa disposición atrajo a muchos japoneses, y si bien es cierto que el sentimiento antibélico de los primeros años de la posguerra ha disminuido, una gran parte del electorado todavía acepta la idea de que las fuerzas armadas niponas sólo deberían destinarse a fines defensivos.

No obstante, con el inicio de la guerra fría en el este asiático, el Pentágono decidió que necesitaba un gran número de bases militares en Japón, dado que juzgaba este país como una «retaguardia segura» en su lucha por contener al comunismo. Esto iba en dirección contraria al sentir que prevalecía en Japón y a las estipulaciones formales de su nueva constitución. Además, después de recobrar su independencia en 1952, Japón había renunciado para siempre al uso de las armas nucleares y había prohibido formalmente a Estados Unidos almacenarlas en el país. Por consiguiente, durante la posguerra, los estrategas del Pentágono concluyeron con rapidez que necesitaban encontrar un lugar en Japón que no estuviera sujeto a las políticas del gobierno. El resultado fue la práctica anexión de Okinawa, una gran isla en el extremo sur del archipiélago nipón que en 1945 había sido escenario de una lucha terriblemente sangrienta y de ataques kamikazes.

De 1945 a 1972, Estados Unidos mantuvo la isla como una colonia gobernada directamente por el Pentágono. Puesto que ni Japón ni Estados Unidos reconocían como ciudadanos a sus 1,3 millones de habitantes, durante este período éstos se convirtieron en apátridas gobernados por un teniente general norteamericano. No les estaba permitido viajar a Japón o a cualquier otro lugar sin una documentación especial proporcionada por las autoridades militares estadounidenses. Okinawa fue cerrada al exterior, y se transformó en un enclave secreto de aeropuertos militares, puertos para submarinos, instalaciones de espionaje y pisos francos de la CIA. Los habitantes de Okinawa que protestaron por esta situación fueron declarados probables comunistas, y centenares de ellos fueron enviados a Bolivia y abandonados a su suerte en la selva.¹⁷ En plena guerra fría, el congreso no mostró ningún interés por lo que ocurría en la isla, y su supervisión del gobierno militar fue mínima.

A principios de la década de 1970, los habitantes de Okinawa se habían rebelado abiertamente contra la utilización de la isla como base para los bombarderos utilizados en la guerra de Vietnam y estaban encolerizados por el descubrimiento de que las fuerzas armadas almacenaban gas nervioso y armamento nuclear en la isla, sin siquiera advertir a la población local de los peligros que eso implicaba. Con renuencia, Estados Unidos aceptó la «reversión» pro forma de Okinawa a la soberanía japonesa, a condición de que el gobierno nipón nos permitiera mantener nuestras bases allí. La devolución fue una manera conveniente de mantener el *statu quo*, al tiempo que se transfería a Japón la responsabilidad por la población de Okinawa.

A lo largo de los años, el gobierno japonés ha hecho todo lo posible para que los militares estadounidenses limitaran su presencia en el archipiélago a Okinawa. Alrededor del 75 por 100 de nuestras bases en Japón se encuentran en la isla, pese a que ésta representa menos del 1 por 100 del área terrestre total del país y es la prefectura japonesa más pobre. La relación de la isla con Japón es muy parecida a la de Puerto Rico con Estados Unidos. Al gobierno de Tokio le gusta este arreglo, pues sabe que el pueblo sólo tolera a las tropas norteamericanas en suelo japonés si están a la vista. Desde que Japón se anexionó a la fuerza el reino de Ryukyu (del que Okinawa es la mayor isla), a finales del siglo XIX, el país ha discriminado a los habitantes de Okinawa, que poseen una cultura distinta.¹⁸ Las condiciones semicolonial de la isla no han cambiado hasta hoy. En 2002, el gobierno japonés aceptó construir allí

otra base aérea para uso norteamericano, lo que destruirá un sensible arrecife de coral y varias especies amenazadas que dependen de él.

Mientras imponían el colonialismo militar a los habitantes de Okinawa, nuestros líderes siempre fueron conscientes de que violaban la Carta de las Naciones Unidas, los objetivos mismos que declaramos al luchar en la segunda guerra mundial y prácticamente todos los ideales y valores políticos que Estados Unidos ha adoptado en cuanto nación. La ausencia del debido proceso en la forma en que los militares se apropiaron de las tierras de los granjeros de Okinawa contribuyó a comprometer nuestro intento de promocionar la democracia en el Japón de la posguerra, así como en el resto del este asiático. Retener Okinawa durante veinte años después de firmar el tratado de paz de 1952 y sólo renunciar a ella bajo intensas presiones fue, como han reconocido numerosos altos oficiales estadounidenses, burlarse de la promesa realizada en la Carta Atlántica de agosto de 1941 de no buscar «el engrandecimiento territorial o de otro tipo» en la segunda guerra mundial.¹⁹ U. Alexis Johnson, antiguo embajador en Japón y subsecretario de Estado, admitió que la entrega de Okinawa a las fuerzas armadas a finales de la década de 1940 fue simplemente el precio que se pagó para lograr que el Pentágono apoyara el tratado de paz, que restauraba la soberanía japonesa sobre las cuatro islas mayores, pero mantuvo Okinawa bajo el mando de los militares norteamericanos.²⁰

Okinawa no es el único lugar de Japón con bases norteamericanas; es sólo el que más tiene. La vieja base naval japonesa de Yokosuka, al sur de Yokohama, es el puerto base de la 7.^a Flota de la marina, y un destacamento completo de portaaviones se encuentra estacionado allí de forma permanente. Cuando el portaaviones entra en el puerto, la marina envía sus aeronaves a la Estación Aérea Naval de Atsugi, en la cercana y densamente poblada prefectura de Kanagawa, donde las protestas de los residentes a causa del ruido de los despegues y aterrizajes se han convertido en un asunto recurrente en la política local. La marina utiliza otra importante bahía para portaaviones y submarinos en Sasebo, cerca de Nagasaki, en la isla de Kyushu. Por su parte, la fuerza aérea controla la base aérea de Misawa, situada al norte de la isla de Honshu, además de sus gigantescas instalaciones en Kadena, Okinawa, y de la base aérea de Yokota, en Tokio, cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses en Japón. Misawa alberga una división de bombarderos F-16, un campo para prácticas de tiro, el «Ripsaw

Range», e innumerables puestos de escucha para espionaje gestionados por la marina.

La infantería de marina es quien controla la mayor parte de las bases de Okinawa. La 3.^a División de Infantería de Marina, que tiene allí su cuartel general, es el único cuerpo de infantes de marina situado fuera de Estados Unidos. La infantería de marina maneja también la gran estación aérea de Iwakuni, al sur de Honshu, donde durante muchos años almacenamos de forma ilegal armas nucleares en el *San Joaquin County*, detenido a poca distancia de la costa. En la década de 1960, el buque permaneció estacionado en la base durante al menos seis años en contravención del tratado de seguridad suscrito entre Japón y Estados Unidos, en el que los americanos se habían comprometido a no almacenar armas nucleares en territorio japonés. Sin embargo, existía un acuerdo «secreto» que permitía la presencia de armas nucleares en navíos en tránsito (las armas no podían ser descargadas) y Estados Unidos decidió que ésta era la situación del *San Joaquin County* y que su arsenal no había realmente entrado en el país. El gobierno japonés aceptó esta artimaña hasta junio de 1981, cuando el ex embajador Edwin O. Reischauer reveló en una entrevista a *Washington Post* la existencia del acuerdo. Durante la ola de protestas que siguió a esta revelación, el Pentágono no confirmó ni negó la presencia de armas nucleares en Japón y los japoneses se limitaron a declarar que confiaban en que Estados Unidos respetara lo dispuesto en el tratado.²¹ Por supuesto, nadie mencionó la posibilidad de llamar a los inspectores de armas de la ONU.

De acuerdo con el Base Structure Report de septiembre de 2001, Estados Unidos posee 73 bases en Japón. (Un análisis cuidadoso y bien documentado de los activistas japoneses en contra de las bases ofrece, en cambio, la cifra de 91.²²) Esas bases alojan a 40.217 militares uniformados, 6.431 empleados civiles del Departamento de Defensa y 42.653 familiares y personas a cargo del personal militar. Además, emplean a 29.205 japoneses y naturales de Okinawa para cortar el césped, arreglar las tuberías, servir las mesas en los clubes de los oficiales, cuidar las máquinas de las piscinas y traducir libros y revistas en japonés y comunicaciones interceptadas por los servicios de inteligencia. El gobierno japonés desembolsa unos cuatro mil millones de dólares al año para ayudar a sufragar los costes de esos servicios, lo que transforma a Japón en el único país que paga a otro para que lo espíe.

Las tropas acuarteladas en esas bases carecen de función militar. Se las mantiene en la reserva, con el fin de desplegarlas en otros lugares de Asia —en Afganistán, el golfo Pérsico, Filipinas, Timor Oriental y otros lugares— cuando surge la necesidad (o la oportunidad). Estados Unidos no necesita consultar al gobierno japonés sobre su utilización.

En 1950, cuando empezó la guerra contra Corea, Japón todavía se encontraba bajo nuestra ocupación, y sirvió como principal estacionamiento y refugio privilegiado para nuestras fuerzas armadas. Esa pauta se repitió durante la guerra de Vietnam, pues entonces Okinawa era todavía colonia norteamericana y se la podía utilizar como base para los bombarderos y centro de suministros, a pesar de la considerable oposición popular. Sin embargo, hoy resulta improbable que Estados Unidos pueda emplear cualquiera de sus bases en Japón para una guerra en la que éste no esté también involucrado de manera directa —sobre todo, si la administración Bush entrara en guerra con Corea del Norte a causa de su programa nuclear o con China a causa de Taiwán—, sin generar una resistencia violenta.

La extensa red de bases estadounidenses en Corea del Sur, creada en los años de la guerra de Corea y que hemos analizado en el tercer capítulo, es un cruce entre nuestros emplazamientos de la guerra fría en Alemania y los de la actualidad en Japón: las bases se sitúan en un país soberano (y no en un enclave neocolonial como Okinawa), pero son mucho más odiadas que las ubicadas en Alemania. A pesar de que artificialmente se ha mantenido un empate militar con Corea del Norte, las numerosas tropas acuarteladas en Corea del Sur no tienen nada que hacer desde el armisticio de 1953. Pasan la mayoría de los días dormitando en sus tanques, y las noches en brazos de las prostitutas. Entre 1961 y 1993, Estados Unidos respaldó o instaló a una serie de dictadores militares en Corea del Sur, e incluso en la actualidad los representantes de los militares, los comandantes y los oficiales del 8.º Ejército, por su sola presencia, dificultan los esfuerzos que lleva a cabo Corea del Sur para lograr una reconciliación pacífica con Corea del Norte. Corea del Sur es el único lugar al que, en plena guerra fría, Estados Unidos envió dos embajadores que, con anterioridad, habían sido funcionarios de alta graduación de la CIA.

LAS SECUELAS DE LA GUERRA DE VIETNAM

La derrota norteamericana en Vietnam subrayó nuestra tendencia a construir bases y prestar apoyo militar a países donde prevalecían los militaristas, los fascistas y los dictadores de derechas, en ocasiones después de que nuestras fuerzas armadas o la CIA los hubieran colocado en el poder. Prácticamente no existe ningún caso en Asia, Europa o Latinoamérica en que, al sopesar la decisión de establecer allí una base, se hubiera tenido en consideración si el gobierno era o no democrático. Las bases que se levantaron en 2001 en Kirguizistán y Uzbekistán demuestran que esa regla continúa vigente, puesto que ambos países ostentan un atroz historial de violaciones de los derechos humanos. Los militares estadounidenses argumentan, por supuesto, que han de tratar con los regímenes que encuentran, y que la presencia de una base norteamericana no significa, necesariamente, que se respalde el gobierno del país. Sin embargo, el hecho es que, sólo en Asia, Estados Unidos ayudó de forma directa a que llegaran al poder, y después sostuvo, a los gobiernos militares brutalmente represivos de Indonesia, Vietnam del Sur, Corea del Sur, Taiwán, Camboya y Filipinas. Con excepción de Camboya e Indonesia, hubo un momento en que tuvimos grandes bases militares en todos ellos.

Cuando, en 1975, las fuerzas norvietnamitas finalmente conquistaron Vietnam del Sur, pese al generoso respaldo de Estados Unidos al régimen de este país, otras naciones se animaron a plantar cara a su propia combinación, potencialmente letal, de derechistas locales y bases militares estadounidenses. La muerte de Francisco Franco en España el 20 de noviembre de 1975 puso fin a la última de las dictaduras fascistas que florecieron en Europa durante la década de 1930. Franco, vencedor de la guerra civil española, aliado de los nazis y «Caudillo de España» (como todavía reza una inscripción sobre su tumba), era del agrado de Estados Unidos por su ferviente anticomunismo.

Franco nos había alquilado por tiempo indefinido las bases aéreas de Torrejón, Zaragoza (con sus casi cuatro kilómetros de pista para uso de los bombarderos B-52) y Morón, así como la base naval de Rota. El gobierno democrático que vino después comenzó de inmediato a renegociar todos esos acuerdos; y si conservamos los emplazamientos fue principalmente porque España buscaba integrarse en Europa e ingresar en la OTAN, algo que hubiera podido peligrar si se

hubiera limitado a echar a los americanos. No obstante, desde la muerte de Franco, las bases constituyeron el blanco del latente antiamericanismo español; y hoy sólo Morón y Rota continúan funcionando.

En el caso de España, el argumento de que Estados Unidos se vio obligado a tratar con el líder que se encontró en el país, aunque fuera un fascista, tiene cierta verosimilitud. Sin embargo, en Grecia el asunto fue diferente. Contribuimos a que los militares se instalaran en el poder y nuestra complicidad con ellos todavía envenena la actitud del país hacia Estados Unidos. Es probable que no exista ningún pueblo democrático en el mundo con una opinión tan arraigadamente antiamericana como el griego.²³ El origen de esa actitud se remonta a los orígenes de la guerra fría, a la guerra civil griega de 1946-1949 y a la decisión estadounidense, expresada en la doctrina Truman, de apoyar al bando neofascista dado que los partisanos griegos estaban dominados por los comunistas. En 1949, los neofascistas vencieron y crearon un gobierno de derechas brutal, protegido por una policía secreta compuesta por oficiales formados en Estados Unidos por la Oficina de Servicios Estratégicos y su sucesora, la CIA.

En la década de 1950, al futuro primer ministro Georgios Papandreu le gustaba decir que Grecia era un títere de Estados Unidos y que sus funcionarios «ejercían un control casi dictatorial ... y exigían que en todo documento de importancia constara la firma del jefe de la Misión Económica norteamericana junto a la del ministro de Coordinación griego».²⁴ En tales condiciones, no tuvimos dificultades para construir bases navales y campos aéreos en la bahía de Souda y en Iraklion, en la isla de Creta, ni la base aérea de Hellenikon, cerca de Atenas, ni la estación de comunicaciones de Nea Makri, en la bahía de Maratón, al noreste de Atenas.

En febrero de 1964, Georgios Papandreu fue elegido primer ministro por amplia mayoría. Procuró mantener relaciones amigables con los norteamericanos, pero la administración Johnson le presionó para que sacrificara los intereses griegos con respecto a la disputada isla de Chipre a favor de Turquía, donde Estados Unidos también estaba construyendo bases militares. Tanto Grecia como Turquía habían sido miembros de la OTAN desde 1952, pero a mediados de la década de 1960 Estados Unidos parecía más interesado en cultivar las relaciones con Turquía. Cuando el embajador griego le dijo al presidente Johnson que la solución que éste había propuesto para la disputa de

Chipre le resultaba inaceptable al parlamento griego, se dice que Johnson le contestó: «Jódase su parlamento y su constitución. Pagamos a los griegos un montón de buenos dólares americanos. Si su primer ministro me da la tabarra con la democracia, el parlamento y la constitución, es posible que él, su parlamento y su constitución no duren demasiado».²⁵ Y no lo hicieron.

La CIA, cumpliendo las órdenes de su jefe en Atenas, John Maury, comenzó de inmediato a conspirar con los oficiales militares griegos a los que había entrenado y promovido durante más de veinte años. Para crear una atmósfera de crisis, el KYP, el servicio de inteligencia griego, llevó a cabo un amplio programa de atentados terroristas, incluida la colocación de bombas, del que culpó a la izquierda. La película *Z* (1969), de Constantin Costa-Gavras, describe con precisión esos días. El 21 de abril de 1967, inmediatamente antes del inicio de la campaña electoral que hubiera llevado nuevamente a Papandreu al cargo de primer ministro, los militares actuaron. Tras declarar que protegían al país de un golpe comunista, una junta de cinco hombres, cuatro de los cuales poseían estrechos vínculos con la CIA o los militares estadounidenses en Grecia, estableció uno de los regímenes más represivos de los promovidos por cualquiera de los dos bandos durante la guerra fría.

Los «coroneles griegos», como serían conocidos, abrieron el país a las bases de espionaje y las instalaciones para el lanzamiento de misiles norteamericanos, y en 1968 donaron unos 549.000 dólares para la campaña electoral de Richard Nixon y Spiro Agnew.²⁶ El senado de Estados Unidos sospechó que se trataba del dinero de la CIA que regresaba a casa desde Grecia para influir en la política interna, pero Henry Kissinger, el consejero de seguridad nacional del presidente Nixon, solicitó que se cancelara de inmediato cualquier investigación del congreso. Desde 1995, el Departamento de Estado tiene preparado un libro con los documentos que atañen a las relaciones entre Estados Unidos y Grecia entre 1964 y 1968, perteneciente a la serie *Foreign Relations of the United States*, cuya realización es ordenada por la ley, pero la CIA ha impedido su publicación.²⁷

El líder de la junta, el coronel Georgios Papadopoulos, era un fascista declarado y admirador de Adolf Hitler. Había recibido formación en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, y antes del golpe estuvo en la nómina de la CIA durante quince años. Su ré-

gimen fue famoso por la brutalidad. Durante su primer mes en el poder, unos ocho mil profesionales, estudiantes y demás personas que no agradaban a la junta fueron apresados y torturados. Muchos de ellos serían ejecutados. En 1969, los dieciocho países miembros de la Comisión Europea de Derechos Humanos amenazaron con expulsar a Grecia —se marchó antes de que la comisión pudiera actuar—, pero ni siquiera eso tuvo efecto en la política norteamericana.

El 15 de julio de 1974, después de siete años de mal gobierno, la junta griega, en asociación con sus colegas militaristas de la isla de Chipre, intentó realizar un golpe militar contra el presidente chipriota Makarios, que era, asimismo, el primado y arzobispo de la iglesia ortodoxa griega y que había promovido la coexistencia pacífica de las comunidades griega y turca de la isla. El 20 de julio, Turquía respondió con la invasión de la isla y su división en una región bajo el dominio turco, al norte, y otra bajo dominio griego, al sur. El único país que ha reconocido la República Turca del Norte de Chipre ha sido Turquía. En Atenas, en gran parte debido a que el ataque turco representó una vergonzosa derrota para el país, la junta se vino abajo.²⁸ La sustituyó un gobierno civil, presidido por el político conservador Constantine Karamanlis, que retiró a las tropas griegas de la estructura militar de la OTAN, pero siguió cooperando diplomáticamente con Estados Unidos hasta las elecciones de 1981.

Andreas Papandreu, hijo de Georgios Papandreu, se había exiliado en Suecia y Canadá durante el régimen de los coroneles. En agosto de 1974, tras la caída de la junta, regresó a Atenas y creó un nuevo partido político, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK). Su plataforma era explícitamente antiamericana, un reflejo de los acontecimientos de la década anterior así como de la victoria comunista en Vietnam. Papandreu se comprometía a sacar a las bases de Grecia y al país de la OTAN. En 1981, el PASOK obtuvo un triunfo electoral aplastante y Andreas Papandreu se convirtió en primer ministro. El partido repitió su éxito en las elecciones de junio de 1985. Papandreu nunca llegó a cumplir del todo sus promesas, aunque sí lo hizo en lo relativo a las bases: hoy apenas existen dos pequeños destacamentos de personal técnico de la fuerza aérea y la marina de Estados Unidos en Grecia, ambos en bases militares griegas.

LAS BASES FILIPINAS

Si la guerra hispano-americana fue el origen de las bases filipinas, la guerra de Vietnam dio inicio al proceso que en 1992 acabaría con ellas. Los casi cien años de presencia estadounidense en Filipinas están marcados por el colonialismo, el neocolonialismo y el patrocinio de un dictador odiado, lo que acabó por conducir a una exitosa revolución antiamericana. El caso filipino es comparable al griego, excepto por el hecho de que las bases existieron durante un tiempo mucho más largo y de que menospreciábamos a los filipinos mucho más que a los griegos. En 1946, al tiempo que otorgaba la «independencia» a Filipinas, nuestro gobierno tomaba medidas para asegurarse de que las islas permaneciesen indefinidamente bajo nuestro control. Filipinas fue gravemente dañada durante la segunda guerra mundial y necesitaba ayuda económica de manera desesperada; el nuevo gobierno del país no tenía más elección que aceptar las bridas que iban aparejadas a la concesión de la independencia. El sistema neocolonial que resultó demostró ser aún menos favorable para Filipinas que el propio colonialismo y limitó durante cuarenta años su capacidad para gozar de un desarrollo democrático, hasta que la revolución de febrero de 1986 derribó a Ferdinand Marcos y ocasionó el cierre de todas las bases militares de Estados Unidos.

Entre 1946 y 1947, tres iniciativas norteamericanas, vaciaron prácticamente de sentido la independencia filipina. Son la Ley Bell de 1946, el Acuerdo sobre Bases Militares de 14 de marzo de 1947 y el Pacto de Ayuda Militar de 21 de marzo de 1947. La Ley Bell obligó a los filipinos a modificar su Constitución de 1935, que estipulaba que todas las empresas del país habían de ser, en un 60 por 100, propiedad de los filipinos. La Ley Bell exigía la «paridad», lo que quería decir que los norteamericanos tendrían los mismos derechos y privilegios que poseían los filipinos para ser propietarios y explotar las empresas de las islas. Establecía el «libre comercio» entre los dos países durante diez años, y eliminaba, por consiguiente, la capacidad de Filipinas para controlar las importaciones norteamericanas. Permitía, asimismo, que los estadounidenses fueran propietarios de instalaciones públicas en el país y que las manejaran. El resultado fue que los filipinos quedaron atados a, en palabras del periodista William J. Pomeroy, «la vieja pauta del comercio colonial según la cual producían y suministraban productos

agrícolas y minerales sin procesar a Estados Unidos, a cambio de los productos estadounidenses manufacturados». ²⁹ La Ley Bell, en efecto, impedía que las islas se industrializaran, a pesar de la existencia en abundancia de carbón, minerales de hierro, metales para formar aleaciones, capacidad hidroeléctrica y abundante mano de obra. En la actualidad, las islas Filipinas se parecen mucho más a Okinawa que a Taiwán, pues este último se ha transformado en uno de los países más ricos e industrializados del este asiático. Taiwán es un ejemplo de aquello en que podrían haberse convertido Okinawa y Filipinas, si Estados Unidos no hubiera desempeñado con relación a ellas un papel neocolonial.

Estados Unidos condicionó todos los pagos a Filipinas por los daños de la guerra a que el país aceptara la Ley Bell. La mayoría del congreso filipino se oponía con vehemencia a introducir una enmienda en la Constitución que garantizara la paridad, pese a lo cual los norteamericanos y sus partidarios actuaron entre bastidores para conseguir la expulsión de ocho diputados y tres senadores opositores por supuestos fraudes y por terrorismo, con lo que lograron obtener el número mínimo de votos necesarios para su aprobación.

Tres días después de la aprobación de la enmienda constitucional, el gobierno filipino firmó un acuerdo sobre las bases de las fuerzas armadas, por el que arrendaba, durante 99 años, 16 bases en activo y 7 más en la reserva a Estados Unidos. El acuerdo autorizaba a Estados Unidos a utilizar esos emplazamientos como le conviniera. Puesto que la ley filipina del suelo público especifica que los arrendamientos del gobierno sólo pueden darse por un máximo de 25 años, la redacción del acuerdo sobre las bases originó de inmediato un movimiento de protesta popular. Varios gobiernos estadounidenses permanecieron atascados en ese punto durante 19 años, hasta que la administración Johnson negoció un nuevo acuerdo de alquiler por 25 años, a causa de la disposición de Manila a enviar un contingente militar a Vietnam. Las dos instalaciones más importantes eran la base aérea Clark (cuyo tamaño sólo superaba la base Vandenberg, en California) y la base de la bahía de Subic, que era la principal instalación de operaciones y reparación de la 7.^a Flota en el Pacífico occidental. Los terrenos de la base Clark ocupaban más de cuatro mil hectáreas, superando en tamaño a Singapur, y estaban rodeados por una verja de seguridad de treinta y cinco kilómetros. El derecho al aprovecha-

miento de su vertedero dio lugar a la creación de dos nuevos pueblos, apropiadamente bautizados con el nombre de dos presidentes filipinos, Macapagal y Marcos. El 15 de junio de 1991 el volcán del monte Pinatubo, situado a dieciséis kilómetros de distancia, entró en erupción por primera vez en seiscientos años y cubrió completamente de cenizas el aeropuerto, lo que ocasionó su pérdida total. Por consiguiente la concesión de la bahía de Subic y sus instalaciones de dique seco fueron los principales puntos de controversia en 1991, durante la última negociación filipino-americana sobre las bases.

Una semana después de la firma del primer acuerdo sobre las bases, en 1947, el gobierno filipino adoptó asimismo otro tratado, el Pacto de Ayuda de las Fuerzas Armadas, que estableció la Junta del Grupo Asesor Militar de Estados Unidos (JUSMAG) en Manila. Esa organización, compuesta por oficiales militares norteamericanos, fue autorizada a «asistir y aconsejar a la República de Filipinas acerca de las cuestiones navales y militares», lo que incluía el suministro de armamento y municiones al ejército filipino; de esta forma, básicamente, se restablecía un mando militar supremo análogo al de la época colonial. El 30 de agosto de 1951 Estados Unidos y Filipinas firmaron el Tratado de Defensa Mutua (aunque éste no tuviera nada de «mutuo»), y el 8 de septiembre de 1954 Estados Unidos, Filipinas y otras naciones adoptaron otro acuerdo, dando lugar a la creación de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (OTASE). Ambos tratados entregaban el control efectivo de las fuerzas armadas filipinas a Estados Unidos por intermedio de la JUSMAG, la cual, con la ayuda de la CIA, eligió a Ramón Magsaysay, un antiguo capitán del ejército y congresista del partido del gobierno, como servicial secretario de defensa nacional. De ese modo, con Estados Unidos controlando la economía y las fuerzas armadas filipinas, y con nuestras propiedades militares seguras, estábamos en posición de dictar unos gigantescos presupuestos militares que Filipinas mal podía permitirse, y de involucrar a sus fuerzas armadas en las guerras de Vietnam y Corea. Las bases filipinas se transformaron en estacionamientos esenciales durante la guerra de Vietnam, y Estados Unidos utilizó, asimismo, sus instalaciones en Luzón para llevar a cabo las conspiraciones contra Indonesia organizadas por la CIA en 1958 y 1965.

En noviembre de 1965 Ferdinand Marcos, un abogado de Manila, fue elegido presidente. Al principio, pareció ser un líder dinámico,

dedicado a las obras públicas, que intentaba llevar a la encorsetada economía filipina hacia un mayor desarrollo. En noviembre de 1969 fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años, lo que ocurría por primera vez en la corta historia democrática del país. No obstante, Marcos estaba interesado, ante todo, en llenar sus propios bolsillos —todos sus biógrafos señalan que consta en el *Libro Guinness de los Récords* como el mayor ladrón de todos los tiempos—, y, a finales de la década de 1960, la calidad de vida en Filipinas empezó a deteriorarse de manera alarmante. Los levantamientos guerrilleros, inspirados en el ejército de liberación vietnamita y en la propaganda china acerca de la «guerra popular», surgieron en todas las islas principales. Algunos estaban dirigidos por el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el brazo militar del Partido Comunista filipino. En la isla sureña de Mindanao, los secesionistas musulmanes se organizaron alrededor de la bandera del Frente Moro de Liberación Nacional. En agosto de 1969 Marcos lanzó grandes campañas militares contra el NPA y los Moros.

En 1972 la situación había empeorado hasta tal punto que Marcos simuló un intento de asesinato contra su ministro de Defensa, Juan Ponce Enrile, con el fin de utilizarlo como excusa para declarar la ley marcial. Detuvo entonces a los políticos de la oposición (entre ellos, a su probable sucesor, el senador Benigno «Ninoy» Aquino), así como a periodistas, estudiantes y líderes obreros. Cerró periódicos e ilegalizó las manifestaciones, las huelgas y los boicoteos. Marcos asumió poderes dictatoriales y suspendió la Constitución, que sólo autorizaba a los presidentes a ejercer dos mandatos, e introdujo en 1973 una nueva carta magna que le permitía seguir en el cargo de manera indefinida, al igual que gobernar por decreto. Designó a su esposa, Imelda, gobernadora de Manila y ministra de «asentamientos humanos y ecología».

Todo eso no ocurrió en el vacío. Tal como reconoció Alva Bowen, oficial de carrera de la marina e investigador del Servicio de Referencias del congreso estadounidense: «Hacia 1975 Estados Unidos había sido echado de Vietnam, y todos los países del sureste asiático estaban reexaminando sus acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Filipinas fue uno de los primeros en solicitar la revisión de sus tratados. En 1975, pocos meses después de que Estados Unidos se retirara de Saigón, el presidente Gerald Ford visitó Filipinas y convino con el presidente Ferdinand Marcos modificar el acuerdo de 1947 sobre el uso

por Estados Unidos de las bases militares filipinas para que reconociera, en esta ocasión de forma clara, la soberanía filipina».³⁰

El acuerdo entre los presidentes Ford y Marcos mejoró un poco la situación, pero los viejos problemas persistían. Las bases habían generado una inmensa industria alrededor del sexo y las drogas que empleaba a miles de filipinas pobres. Angeles City, la sede de la base Clark, era la ciudad de Filipinas más afligida por esos males en la década de 1980. Mientras tanto, con el país sometido a la ley marcial, Marcos expandió y politizó a su propio estamento militar, nombrando a sus amigos, que le eran personalmente leales, y otorgando a las fuerzas armadas poderes ilimitados para el arresto de civiles. La «desaparición» y asesinato de cualquiera que se involucrara en política se convirtió en algo corriente. Mientras Estados Unidos cerraba los ojos, Marcos nacionalizó numerosas fábricas y empresas para entregarlas a familiares, que desviaron los beneficios para su enriquecimiento personal.

En 1983, después de pasar tres años en el exilio, Benigno Aquino regresó a Filipinas para intentar unir a quienes se oponían al régimen. El 21 de agosto, minutos después de aterrizar en el aeropuerto de Manila, Aquino fue asesinado por un pistolero que, a continuación, moriría también allí mismo, alcanzado por los disparos de los guardaespaldas del político. Marcos sostuvo que un comunista era el responsable del asesinato, pero luego una comisión oficial de investigación determinó que los hechos habían sido obra de una conspiración de los militares. Marcos rechazó este dictamen y liberó a los conspiradores. La viuda de Aquino, Corazón Cojuangco Aquino, se convirtió en el líder de la oposición cuando centenares de miles de personas participaron, en Manila, en la procesión del funeral de su marido. Se trató de la mayor manifestación en la historia de Filipinas y del comienzo de un movimiento que se apodaría el «Poder Popular». Esa agrupación no llegaría nunca a ser tan abiertamente antiamericana como la oposición iraní al sha o la campaña de Papandreu contra la junta griega, pero la presencia de nuestras bases en el país y el apoyo descarado de Washington a Marcos contribuyó, con seguridad, a movilizar a la opinión pública.

A finales de 1985, en un intento de conseguir mayor legitimidad y asegurarse la continuidad del respaldo estadounidense, Marcos anunció que se celebrarían elecciones presidenciales en febrero de 1986. Corazón Aquino presentó su candidatura. Después de la votación, la iglesia católica, a través del cardenal Jaime Sin, denunció a

Marcos por fraude electoral e intimidación, y cuestionó su proclamación de victoria. La administración Reagan, angustiada por las dificultades que afrontaba su amigo, no sabía si debía reconocer la validez de la elección de Corazón Aquino. Entre tanto, ante las continuas manifestaciones populares contra Marcos, las fuerzas armadas filipinas abandonaron al dictador, y mostraron su apoyo a las fuerzas en favor de Aquino al negarse a obedecer cuando se les ordenó que dispararan contra los manifestantes desarmados.³¹

El 25 de febrero de 1986, después de más de veinte años en el poder, Ferdinand e Imelda Marcos huyeron del palacio de Malacañang y se dirigieron a la base aérea Clark, desde donde salieron al exilio en Estados Unidos. Según se dice, al llegar a Hawái Marcos llevaba maletas repletas de joyas, barras de oro y certificados de miles de millones de dólares en lingotes de oro. El gobierno de Aquino, que le sucedió en el poder, calculó que Marcos había desviado al menos tres mil millones de dólares a cuentas en bancos suizos, si bien algunos analistas sitúan esa cifra en treinta y cinco mil millones. Hasta hoy, nada ha podido recuperarse. Marcos falleció en Honolulu el 28 de septiembre de 1989.

El 2 de febrero de 1987, el pueblo filipino ratificó, por una mayoría aplastante, la nueva Constitución nacional. Su artículo 2, titulado «Declaración de Principios y Políticas Estatales», dio inicio al proceso que terminaría con el acuerdo con Estados Unidos sobre las bases. Las secciones 2 y 3 postulaban lo siguiente: «Filipinas renuncia a la guerra como un instrumento de la política nacional, adopta como parte de la ley del país los principios del derecho internacional generalmente aceptados y se adhiere a la política de paz, igualdad, justicia, libertad, cooperación y amistad con todas las naciones. La autoridad civil tiene la supremacía sobre la militar en todo momento. Las fuerzas armadas de Filipinas son las protectoras del pueblo y del Estado. Tienen por objetivo asegurar la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional». Todos los filipinos pensaban que Estados Unidos guardaba armamento atómico, listo para ser usado, en Subic y Clark. La sección 8 de las políticas estatales representaba el tiro de gracia para esos emplazamientos: «Filipinas, en coherencia con los intereses nacionales, adopta y promueve una política contraria a la presencia de armas nucleares en su territorio». El 6 de junio de 1988, el senado filipino, por 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, aprobó la Ley de Prohibición de Armas Nucleares, en cumplimiento del man-

dato constitucional. El gobierno filipino tenía así serios argumentos cuando la concesión de las bases expiró en 1991.

Los negociadores estadounidenses malinterpretaron por completo el nuevo clima político y realizaron un intento chapucero de prorrogar el alquiler de las bases. De acuerdo con Roland G. Simbulan, profesor de la Universidad de Filipinas y asesor del senado de su país, Estados Unidos «intentó conseguir con prepotencia su objetivo. El antiguo secretario de Salud Alfredo Bengzon, que actuó como vicepresidente de la plataforma de negociadores filipinos, confirmó más tarde en un artículo publicado “la mentalidad estrecha y arrogante de los negociadores estadounidenses, bajo la dirección de [Richard] Armitage, durante las negociaciones. Intentaron forzar un tratado de prórroga prolongada”, dijo Bengzon».³² Armitage, el representante especial de George H. W. Bush para el acuerdo sobre las bases militares en Filipinas, era un antiguo funcionario de la CIA. (Más tarde, se convertiría en subsecretario de Estado durante el gobierno de Bush hijo.)

Los estadounidenses creían que los filipinos eran demasiado pobres para echarlos, y que los conservadores del senado filipino les respaldarían. Sin embargo, después de que el volcán Pinatubo destruyera la base Clark, Estados Unidos había recortado su ofrecimiento de asistencia a Filipinas de cerca de setecientos millones de dólares a sólo doscientos tres millones; y el 16 de septiembre de 1991, irritado por la tacañería norteamericana y su negativa a limpiar la contaminación de la base Clark, el senado filipino rechazó, por doce votos contra once, la propuesta de renovación del acuerdo de 1947.³³ Aunque el hecho apenas fue advertido en Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1992 los militares norteamericanos se habían retirado por completo de Filipinas.

Desde su expulsión, Estados Unidos ha intentado, con varias estrategias, que sus fuerzas armadas regresen a Filipinas, y siempre ha ofrecido como aliciente sus necesitadas divisas. A principios de 2002, enviamos a un millar de miembros de las Fuerzas Especiales y tropas de apoyo para ayudar a los filipinos a combatir a Abu Sayyaf, una «banda terrorista» musulmana de la isla de Basilan, al sur de Filipinas, un grupo con gran número de secuestros y extorsiones en su haber, pero sin connotaciones de terrorismo político.³⁴ El principal objetivo norteamericano en Filipinas ha sido negociar un «Acuerdo de Apoyo Logístico Mutuo» que permitiese a nuestros buques acceder a sus bases para repostar combustible, reaprovisionarse o ser reparados

sin necesidad de debatir cada caso en particular. El 3 de agosto de 2002, el secretario de Estado Colin Powell dijo en Manila que «Estados Unidos no tenía interés en regresar a Filipinas con bases o con una presencia permanente», pero es poco probable que alguien, en el este asiático, le haya creído.³⁵ El 20 de febrero de 2003, el Pentágono anunció que estaba enviando un contingente de casi dos mil efectivos a Filipinas, en el marco de una operación contra «terroristas» que «no contaba con una fecha tope fija».³⁶

DE LA GUERRA AL IMPERIALISMO

A medida que el imperio americano crece, vamos a la guerra con una frecuencia significativamente mayor que antes de la guerra fría y durante ella. Las guerras promueven, a su vez, el crecimiento de las fuerzas armadas, y son una excelente forma de hacer propaganda del poder y de la eficacia de nuestros armamentos, así como de las empresas que los fabrican, que de este modo pueden venderlos a otros países con más facilidad. Según el periodista William Greider, «el volumen estadounidense [de ventas de armas] representa el 44 por 100 del mercado mundial, más del doble de la cuota de mercado que tenía Estados Unidos en 1990, cuando la Unión Soviética era el principal exportador de armas».³⁷ Como el complejo militar-industrial engorda de forma progresiva y adquiere un exceso de capacidad, necesita ser «alimentado» cada vez con mayor frecuencia. La creación de nuevas bases requiere, a su vez, más bases para proteger a las que ya existen, lo que genera ciclos cada vez más ajustados de militarismo, guerras, venta de armas y expansión de bases.

Después del desmoronamiento de la Unión Soviética, comenzamos a emprender guerras a una velocidad creciente, y los objetivos que se declararon públicamente fueron cada vez más engañosos y menos convincentes. Hemos estado, asimismo, cada vez más dispuestos a ir a la guerra fuera del marco legal internacional y con la oposición popular de todo el mundo. Fueron, de hecho, guerras imperialistas, que se defendieron por medio de invocaciones propagandísticas a la intervención humanitaria, la liberación de la mujer, la amenaza presentada por armas no convencionales, o de cualquier otra expresión con gancho que se les ocurriera a los portavoces de la Casa Blanca y del

Pentágono. En cada guerra conseguimos importantes bases militares que por localización y tamaño eran desproporcionadas para las tareas militares requeridas, bases que después de la guerra supimos mantener y consolidar. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hicimos dos guerras, una en Afganistán y otra en Irak, y obtuvimos bases nuevas, catorce en total, en Europa oriental, Irak, el golfo Pérsico, Pakistán, Afganistán, Uzbekistán y Kirguizistán. Se dijo que esas guerras eran una respuesta a los atentados terroristas y que disminuirían nuestra vulnerabilidad al terrorismo en el futuro. Sin embargo, parece que tanto las nuevas bases como otros objetivos estadounidenses seguirán estando expuestos a ataques terroristas y que éstos probablemente se incrementarán.

De acuerdo con la práctica acostumbrada, situamos nuestras bases en estados débiles, la mayor parte de los cuales poseen gobiernos represivos y antidemocráticos. Inmediatamente después de nuestra victoria en la segunda guerra de Irak, comenzamos a reducir nuestra presencia en Alemania, Turquía y Arabia Saudí, lugares donde la guerra nos hizo mucho más impopulares. Trasladamos nuestras fuerzas y guarniciones a las monarquías, autocracias o dictaduras menos pobladas y exigentes, como es el caso de Qatar, Bahrein, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.³⁸

Una nueva imagen de nuestro imperio ha empezado a surgir. Mantenemos nuestro feudo de siglos en Latinoamérica y nuestra estrecha colaboración con el gobierno monopartidista de Japón, a pesar de la profunda antipatía que sienten por nosotros en Okinawa y Corea del Sur, donde la situación es cada vez más inestable. Nuestra falta de legitimidad en la guerra contra Irak ha empeorado nuestra posición en lo que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld denominó, despectivamente, «la vieja Europa», lo que estamos procurando compensar buscando aliados y construyendo bases en los antiguos países comunistas de Europa oriental, mucho más pobres y todavía llenos de problemas. En el área sur de Eurasia, rica en petróleo, estamos estableciendo puestos avanzados en Kosovo, Irak, Afganistán, Pakistán y Asia central, en un intento de imponer en toda la región la hegemonía americana. Únicamente Irán se ha mostrado, hasta el momento, insensible a nuestros esfuerzos. No hemos hecho todo esto para luchar contra el terrorismo, liberar a Irak, desencadenar un efecto dominó favorable a la democratización de Oriente Próximo o cualquier otra

excusa que hayan alegado nuestros dirigentes. Lo hicimos, tal como demostraré, a causa del petróleo, de Israel y de la política interior, como también con el fin de realizar lo que creemos es nuestro destino como una nueva Roma. El próximo capítulo examina el imperia- lismo americano en el actual campo de batalla del poder mundial, el golfo Pérsico, región en la que tenemos una larga historia.

8

Las guerras de Irak

«Desde el punto de vista del marketing», dijo Andrew H. Card, Jr., jefe de gabinete de la Casa Blanca durante el lanzamiento esta semana de la campaña para la guerra contra Irak, «no debe hacerse la presentación de un producto nuevo en agosto.»

The New York Times, 7 de septiembre de 2002.

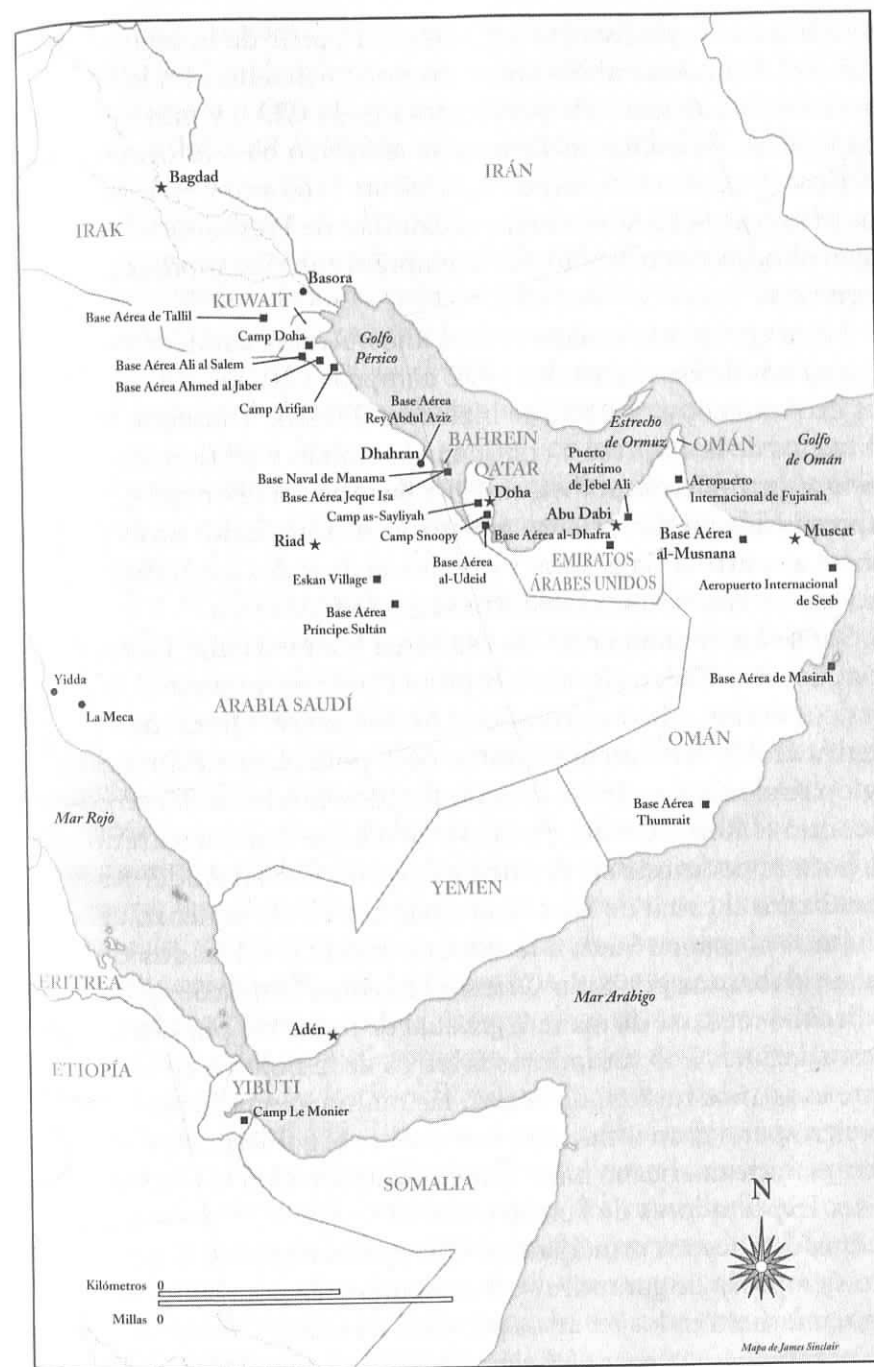
Al fin y al cabo, este es el tío [Sadam Husein] que intentó matar a mi papá.

Presidente George W. Bush, en Houston,
26 de septiembre de 2002.

EL GOLFO PÉRSICO, una prolongación del océano Índico con unos 960 kilómetros de extensión, separa la península Arábiga, al oeste, de Irán, al este. En la cabecera del golfo está Irak, cuyo acceso al mar se encuentra bloqueado en gran parte por Kuwait. A lo largo de la costa oeste del golfo, desde Kuwait hasta Omán, se sitúan los que se conocieron en el siglo XIX como los «estados de la tregua», reinos feudales que vivían entonces de la piratería y con los que el Reino Unido firmó las «treguas» que los convirtieron en protectorados británicos. A los ingleses les interesaba, ante todo, proteger las rutas de navegación hacia su imperio en la India, por lo que estaban dispuestos a defender a esas tribus de sus vecinos, a cambio de la promesa de los líderes tribales de la región de cesar la piratería contra los británicos. De ese modo, Gran Bretaña se convirtió en supervisora no sólo de las relaciones entre los estados de la tregua, sino también de las relaciones entre éstos y los países fuera del golfo Pérsico.

Antes de la segunda guerra mundial el área del Golfo era, por consiguiente, un reducto del imperialismo británico. Sólo en Arabia Saudí los acontecimientos tomaron un curso distinto, cuando, en mayo de 1933, la Standard Oil Company, de California, consiguió los derechos para realizar perforaciones en las provincias orientales del país, que poseían una fabulosa riqueza en petróleo. Por el pago de treinta y cinco mil libras esterlinas, Standard of California (SoCal), conocida hoy como Chevron, obtuvo del rey Ibn Saud, una concesión de sesenta años para explotar y exportar el crudo. Dada la importancia indiscutible de la influencia británica en la región, los estadounidenses con toda seguridad no habrían logrado una posición allí, si no hubiera sido por una de las figuras más singulares de la historia, H. Saint John Philby, consejero de Ibn Saud y especialista en asuntos árabes. (Philby fue además el padre de Kim Philby, el funcionario de los servicios de inteligencia británicos que trabajó en secreto para la Unión Soviética y quien, tras desertar a ese país, se convirtió en el espía más famoso de la guerra fría.) Molesto por el grosero imperialismo que las empresas petroleras británicas practicaban en Irán, Philby persuadió al rey Ibn Saud de apostar por los norteamericanos. SoCal empezó a extraer petróleo en Arabia Saudí en 1938. Poco después, la empresa y la monarquía formalizaron su sociedad por medio de la creación de una nueva entidad, la Arabian-American Oil Company (Aramco), de la que pasaron a participar nuevos socios: Texaco, Standard Oil de New Jersey (Exxon) y Socony-Vacuum (Mobil). Aramco ha sido descrita como «el consorcio más grande y más rico de la historia del comercio».¹ Su sede central todavía se encuentra en Dhahran, Arabia Saudí.

Desde el principio, Aramco hizo todo lo posible para evitar la arrogancia que se asociaba con el imperialismo británico en Oriente Próximo. Sus empleados no disfrutaban de inmunidad en lo que a las estrictas leyes saudíes se refiere, y la empresa trabajó con ahínco para beneficiar al poco poblado país, dotándolo de carreteras, centrales eléctricas y los muy necesarios pozos de agua. Se apresuró a responder cuando los gobernantes saudíes solicitaron más dinero y cooperación en proyectos de especial interés para ellos. Estados Unidos ha sido siempre extremadamente cuidadoso en su relación con Arabia Saudí. En febrero de 1943, el presidente Franklin Delano Roosevelt escribió en una carta al subsecretario de Estado Edward Stettinius: «Considero que la defensa de Arabia Saudí es de vital importancia



GOLFO PÉRSICO

para la defensa de Estados Unidos».² A partir de la segunda guerra mundial Aramco también colaboró informalmente con la Oficina de Servicios Estratégicos (la predecesora de la CIA), y más tarde con la propia CIA. Washington siempre se mantuvo bien informado acerca del parecer de Aramco respecto a Oriente Próximo y el resto del mundo. Mientras la CIA mantuvo su Consejo de Previsiones Nacionales, algún alto ejecutivo retirado de la empresa contó siempre con un asiento en él.

Hace aproximadamente treinta años, Arabia Saudí empezó a aflojar algunos de esos lazos. En 1972 compró el 20 por 100 de las acciones de Aramco, y en 1980 se hizo con el resto. Y aunque autorizó a los socios de la empresa a continuar operando y gestionando los yacimientos petrolíferos saudíes, en 1988 llevó a cabo, por real decreto, una expropiación notablemente amistosa. Arabia Saudí pasó desde entonces a controlar la gestión y operación de todos sus recursos de crudo y gas, y Aramco se transformó en Saudi Aramco.

Sobre los fundamentos de esa larga y en extremo lucrativa relación, Estados Unidos levantó el primer pilar de su política en el golfo Pérsico: sus estrechos vínculos con Arabia Saudí. Quizá, desde la perspectiva árabe, el momento cumbre de la política norteamericana en la región se alcanzó en 1956, cuando Estados Unidos se alineó con Egipto contra el Reino Unido, Francia e Israel, que habían entrado en guerra para impedir que el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, nacionalizara el canal de Suez. Esa crisis marcó el comienzo del declive británico al este de Suez, a la vez que permitió a Estados Unidos cosechar alabanzas por todo Oriente Próximo.³ En 1968 el Reino Unido decidió retirarse de manera gradual de todos sus puestos avanzados al este de Suez. Los verdaderos árbitros de la política en la región durante esos años fueron, de hecho, las multinacionales petroleras, que ejercieron una gran influencia tanto sobre el gobierno británico como sobre el norteamericano hasta que en 1960 se creara la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Una de nuestras principales preocupaciones políticas y militares ha sido siempre la de garantizar que ninguna otra potencia, amiga o enemiga, interfiera en los recursos petrolíferos saudíes. En agosto de 1945, el Cuerpo de Ingenieros del ejército empezó a construir un campo de aviación en Dhahran, muy cerca de la sede de Aramco. Estados Unidos obtuvo de los saudíes, de 1952 a 1963, el arriendo de este campo de

aviación, donde emplazó un escuadrón del Comando Aéreo Estratégico que incluía bombarderos dotados de armas nucleares. En 1963, preocupado por la magnitud de la presencia estadounidense en el país, el rey Faisal ordenó que la fuerza aérea abandonara la base de Dhahran, cuyo nombre cambió de inmediato por el de Base Aérea Rey Abdul Aziz de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí. Con todo, los saudíes continuaron permitiendo su uso por parte de militares norteamericanos, pero siempre estudiando antes cada solicitud; situación que se mantuvo hasta la guerra del Golfo, cuando la base regresó a manos estadounidenses para las operaciones destinadas a expulsar a Irak de Kuwait. Dhahran fue de lejos el campo aéreo aliado más importante en el ataque relámpago contra Irak capitaneado por los norteamericanos. De las aproximadamente 7.248 aeronaves que llegaron a Arabia Saudí entre el 7 de agosto de 1990 y el 26 de marzo de 1991, 6.755 aterrizaron en Dhahran.⁴

De 1953 a 1979, el segundo gran pilar de la política de Estados Unidos en el golfo Pérsico fue Irán, entonces el segundo mayor exportador de crudo y poseedor de la tercera mayor reserva petrolífera del mundo. Los británicos, que habían estado extrayendo petróleo de Irán desde 1908, gestionaban en el país la mayor refinería del mundo. La Anglo-Persian Oil Company (después de 1935, la Anglo-Iranian Oil Company) había pagado al tesoro británico 24 millones de libras esterlinas en impuestos, y 92 millones de libras en divisas extranjeras. A los británicos no les interesaba que su lucrativa empresa petrolera fuese nacionalizada, y tenían el apoyo de las grandes petroleras norteamericanas. Por consiguiente, en 1953 los británicos lograron que la administración Eisenhower cooperara con ellos en un plan ostensiblemente ilegal para derrocar al gobierno iraní, que deseaba recibir una proporción más justa de los beneficios provenientes del crudo.

Eisenhower ordenó a la CIA que ayudara a los británicos a proteger sus activos, y los estadounidenses redefinieron la crisis del petróleo anglo-iraní como un caso de resistencia del «mundo libre» contra la amenaza comunista en Oriente Próximo. Los agentes de la CIA guiaron a los oficiales del ejército iraní en el derrocamiento del primer ministro Mohamed Mossadegh, un patricio político conocido por su incorruptible defensa de los intereses nacionales de Irán, y lo sustituyeron por el joven sha Mohamed Reza Pahlavi, cuyo reinado había sido interrumpido por Mossadegh. Aunque el sha proclamó ser un nacio-

nalista, se mostró mucho más dispuesto que Mossadegh a cooperar con los británicos y los estadounidenses, al considerarlos un contrapeso a la influencia soviética en la frontera norte de Irán. Tras el exitoso golpe, el nuevo gobierno iraní recompensó con concesiones petrolíferas a un consorcio formado por importantes empresas occidentales. El 40 por 100 de las acciones de ese consorcio fue a parar a la Anglo-Iranian Oil Company, ya con el nuevo nombre de British Petroleum, y el 14 por 100 a su aliada, la Royal Dutch Shell, lo que garantizaba el control accionario por parte de los británicos. Un grupo de empresas norteamericanas recibió el 40 por 100, en recompensa por la participación de Estados Unidos en el golpe, y la empresa estatal francesa, el 6 por 100.⁵

La posición de Estados Unidos en la región más rica en petróleo del mundo dependía, por consiguiente, de su estrecha relación con los dos países de mayor tamaño del golfo Pérsico. En vista de que las fuerzas militares británicas todavía se encontraban en el lugar y eran bastante efectivas, nuestro gobierno sólo se preocupó por buscar en la región bases para sus fuerzas navales. En 1948, Estados Unidos había negociado un acuerdo informal con los británicos para la utilización de las instalaciones portuarias de la base naval (y campo de aviación) que éstos poseían hacía tiempo en Manama, en la isla de Bahrein, la mayor de las 33 islas de la colonia británica de Bahrein; en 1949, la Fuerza para Oriente Próximo de Estados Unidos se estableció allí bajo el mando de un capitán de navío, promovido a vicealmirante en 1951. El 15 de agosto de 1971, Bahrein obtuvo su independencia del Reino Unido, y Estados Unidos cerró con el país un acuerdo ejecutivo para mantener acceso a su base naval, a cambio de cuatro millones de dólares anuales.⁶

Antes de la guerra del Golfo de 1991, el único territorio de la región afianzado en manos de los militares norteamericanos era la isla de Diego García, en el océano Índico. Junto a Mauricio, Diego García había permanecido como posesión británica desde que Inglaterra se la arrebatara a Francia durante las guerras napoleónicas. Estados Unidos deseaba construir allí una instalación para comunicaciones navales, puesto que las bases de radio y espionaje de la guerra fría del occidente de Australia no podían cubrir todo el océano. En 1965, el Reino Unido desgajó Diego García de Mauricio para crear el «Territorio Británico del Océano Índico», y después «prestarla» gratuitamente a Es-

tados Unidos durante cincuenta años (aunque quedó sobreentendido que los norteamericanos no exigirían el pago de algunos misiles submarinos Polaris enviados al Reino Unido y valorados en catorce millones de dólares).

A los funcionarios estadounidenses les gusta presumir de que Diego García es «inmune a los acontecimientos políticos locales», para lo que existe una buena razón. Los ingleses deportaron a toda su población a Mauricio y las Seychelles, donde siguen viviendo en condiciones de pobreza y de discriminación racial. Londres pagó a Mauricio 650.000 libras para que acogiera a la población originaria de Diego García, sin embargo, décadas después los refugiados todavía luchan en los tribunales londinenses contra su reasentamiento, y éstos ya han fallado que la deportación fue ilegal. Entre tanto, en 1974 Estados Unidos convirtió su estación de comunicaciones en una base naval a gran escala, aumentó la pista del aeropuerto hasta alcanzar los 3.600 metros, hizo la laguna más profunda para poder fondear en ella un portaaviones y almacenó combustible suficiente para el abastecimiento de sus buques y aeronaves durante 30 días. En 2001, el Departamento de Defensa comentó que en Diego García había más edificios que personal militar —654 efectivos, para ser exacto—, y que la instalación tenía un valor de sustitución de 1.917,8 millones de dólares.⁷ Fue utilizada como la principal plataforma para los B-52 que bombardearon Afganistán entre 2001 y 2002. A finales de 2002, el Pentágono construyó, a un coste de 2,5 millones de dólares, cuatro hangares de mantenimiento destinados a cobijar nada menos que dieciséis bombarderos silenciosos B-2, de una flota que en total cuenta con veintiuno. Junto con los B-52 y los B-1, los B-2 de Diego García encabezaron los bombardeos de «conmoción y pavor» efectuados sobre Bagdad el 22 de marzo de 2003, cuando se lanzaron 2.100 kilos de «bombas antibúnker» sobre una ciudad que prácticamente carecía de defensas. Fue la primera vez en la historia que los tres tipos de bombarderos estratégicos de largo alcance norteamericanos atacaron el mismo sitio al mismo tiempo, un experimento comparable al bombardeo efectuado por la aviación de Hitler sobre Guernica en 1937. Diego García se encuentra a 5.374 km de Bagdad, y es la más lejana de todas las bases norteamericanas en el sur de Asia.

En la década de 1970, la marcha de los ingleses de la región amenazaba con dejarla sin supervisión imperialista, lo que, para Estados

Unidos, constituía cada vez más un motivo de preocupación. Kuwait era independiente desde 1961; Bahrein y Qatar obtuvieron ambos su independencia en 1971. El 2 de diciembre de 1971, un día después de que los británicos se retiraran oficialmente de la zona, los seis emiratos restantes, entre ellos los dos más ricos, Abu Dabi y Dubai, crearon una confederación soberana conocida como los Emiratos Árabes Unidos. El Reino Unido aplazó su retirada de Omán hasta 1977 debido a la grave desunión interna existente en el país. Estados Unidos hubo entonces de tratar solo con esas nuevas entidades, sin tener la experiencia de siglo y medio que poseían los británicos. No intentó obtener bases de ninguna de ellas hasta que la guerra del Golfo le proporcionó una espléndida oportunidad.

Antes de ello, sin embargo, el plácido mundo del golfo Pérsico sufrió un cambio radical en 1979, un año tan trascendental para la política exterior estadounidense como 1949, cuando los comunistas llegaron al poder en China, la URSS detonó su primera bomba atómica y se creó la alianza de la OTAN. En 1979, uno de los pilares gemelos de la política norteamericana se vino abajo. En enero, una revolución popular contra el represivo gobierno del sha lo obligó a exiliarse, y un régimen fundamentalista islámico encabezado por el ayatolá Jomeini asumió el poder en Irán; en noviembre los revolucionarios asaltaron la embajada norteamericana y tomaron como rehenes a todos sus empleados, a los que retuvieron hasta enero de 1981. Para complicar todavía más las cosas, en diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán con la intención de proteger el régimen izquierdista del país. Esto provocó una gigantesca operación de la CIA en Pakistán y en todo el mundo islámico para reclutar y armar a guerrilleros muyahidín dispuestos a unirse a la resistencia antisoviética.

En este contexto, en 1979 la administración Carter creó lo que denominó la Fuerza de Intervención Rápida, con el objeto de proteger los intereses norteamericanos en el golfo Pérsico. Al no contar con bases en la región, ubicó el cuartel general de la fuerza en la base aérea MacDill, en Tampa, Florida. El 23 de enero de 1980, justo antes de dejar el cargo, el presidente Carter proclamó la «doctrina Carter»: «Cualquier intento de controlar la región del Golfo por parte de una potencia extranjera será considerado un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos, y se emplearán todos los medios necesarios para repelerlo, incluida la fuerza militar». En aquella época resultaba más fá-

cil decirlo que hacerlo, y Estados Unidos empezó a buscar un sustituto al pilar iraní. El 1 de enero de 1983, la administración Reagan convirtió la Fuerza de Intervención Rápida (todavía con base en Florida) en el Comando Central (CENTCOM), el primer mando regional creado en 35 años.

En julio de 1979, Irak también pasó a tener un nuevo líder, Sadam Husein, del Partido Baaz. Poco más de veinte años antes, en 1958, los militares iraquíes habían tomado el poder y conducido el país hacia el ámbito soviético. El golpe, inspirado en la rebelión nacionalista contra la monarquía egipcia dirigida por Gamal Abdel Nasser en 1952, había sido liderado por el general Abdel Karim Kassem, quien proclamó la república, retiró a Irak del antisoviético Pacto de Bagdad, legalizó el Partido Comunista, decretó una amplia reforma agraria y llegó incluso a garantizar la autonomía kurda en el norte. En plena guerra fría, estos cambios eran demasiado para Estados Unidos —el director de la CIA, Allan Dulles, llamó públicamente a Irak «el lugar más peligroso del mundo»—, y en 1963 la CIA prestó su apoyo al esfuerzo del anticomunista Partido Baaz por acabar con la república de Kassem. Los baazistas, entre los que se encontraba un joven Sadam Husein, fusilaron a Kassem y a muchas otras personas cuyos nombres constaban en una lista proporcionada por la CIA. Sin embargo, los conspiradores sólo consiguieron formar un gobierno de coalición. En 1968, la CIA volvió a fomentar una revuelta palaciega, mediante la cual los baazistas eliminaron a sus socios en la coalición y asumieron directamente el control. Según Roger Morris, miembro del equipo del Consejo de Seguridad Nacional durante las administraciones Johnson y Nixon: «No hay duda de que Estados Unidos colaboró activamente en el nacimiento del régimen, y el papel de la CIA fue fundamental».⁸ En julio de 1979, el mismo año de la revolución antiamericana en Irán, Sadam Husein sustituyó a su mentor, Ahmad Hasan al Bakr, como presidente, cargo que mantuvo hasta 2003. Era, al igual que muchos otros beneficiarios famosos de las intrigas políticas norteamericanas antes y después de él, un colaborador de la CIA.

En septiembre de 1980, Sadam, temeroso de la influencia iraní sobre la mayoría chií de Irak, invadió Irán. Cuando, a principios de 1982, las fuerzas iraníes adquirieron el control del campo de batalla, Estados Unidos lanzó otra operación encubierta para armar y ayudar a Sadam. La NSDD (Directiva de Decisión de Seguridad Nacional) 114, del 26

de noviembre de 1983, es una de las pocas decisiones importantes de la era Reagan en materia de política exterior que todavía están clasificadas. La única frase de ese texto que se ha filtrado hasta hoy dice que Estados Unidos haría «todo lo que fuera necesario y legal» para impedir que Irak perdiera la guerra. El gobierno Reagan pronto abandonó los escrúpulos acerca de la legalidad.⁹ Comenzó a suministrar a Sadam, de forma clandestina, información de los satélites espía acerca de la situación de las tropas iraníes. Canalizó hasta 5.500 millones de dólares a Irak para la compra de armamento, en forma de préstamos fraudulentos a través de la sucursal en Atlanta de un banco italiano (Banca Nazionale del Lavoro), todo ello avalado por la Corporación de Crédito para Productos Básicos «para la promoción de las exportaciones agrícolas estadounidenses». También se enviaron armas directamente a Bagdad a través de fachadas de la CIA en Chile y en Arabia Saudí. Entre 1986 y 1989, llegaron a realizarse unas 73 transacciones que incluían cultivos de bacterias para la producción de ántrax como arma biológica, ordenadores avanzados y equipamiento para la reparación de cohetes y de motores de aeronaves. En diciembre de 2002, cuando Irak se vio forzado a entregar al Consejo de Seguridad de la ONU, en cumplimiento de su resolución 1441, un expediente de 11.800 páginas sobre la historia de su programa de armamento, funcionarios del gobierno Bush corrieron a Nueva York a hacerse con el documento antes de que los demás miembros del consejo pudieran examinarlo. A continuación, extirparon y ocultaron 8.000 páginas que detallaban las armas y la tecnología de doble uso que compañías occidentales habían vendido a Irak antes de 1991. Entre las empresas estadounidenses se encontraban Honeywell, Unisys, Rockwell, Sperry, Hewlett-Packard, DuPont, Eastman Kodak y muchas otras.¹⁰

Aunque Estados Unidos no mantenía relaciones diplomáticas con Irak desde la guerra árabe-israelí de 1967, en diciembre de 1983 el presidente Reagan mandó a Bagdad a su enviado personal, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa durante la administración Ford, para que se reuniera con Sadam Husein. Rumsfeld regresaría a Irak en marzo de 1984, precisamente cuando tanto Irán como las Naciones Unidas acusaban al régimen de emplear armas químicas en una guerra cada vez más cruel. No obstante, Rumsfeld no mencionó los ataques iraquíes con gas letal. Declaró, por el contrario, que la derrota de Irak «sería contraria a los intereses estadounidenses».¹¹ En noviembre de 1984,

Washington restableció las relaciones diplomáticas plenas con Bagdad e incrementó las ventas de todo tipo de armamento a Sadam, incluidos los helicópteros que luego utilizaría en los ataques con gases venenosos. Uno de éstos tuvo lugar en marzo de 1988, cuando los iraquíes gasearon el poblado kurdo de Halabja y mataron a unas cinco mil personas. Estados Unidos mantuvo relaciones amistosas con Irak hasta que Sadam reavivó las antiguas reivindicaciones territoriales iraquíes sobre Kuwait y atacó por sorpresa el país el 2 de agosto de 1990. Apenas habían transcurrido dos años desde el fin de la sangrienta guerra entre Irak e Irán.

En un primer momento Estados Unidos pareció no saber cómo debía reaccionar. El presidente Bush y la primera ministra Margaret Thatcher asistieron a una conferencia en Colorado poco después del ataque. Según los comparecientes, Bush murmuró algo así como «está bien entrar, pero ¿cómo vamos a salir?», y comentó que la mayoría de los norteamericanos eran incapaces de encontrar Kuwait en el mapa. Se cuenta que, en ese momento, Thatcher cogió el micrófono y dijo: «Mira, George, éste no es el momento para ponernos a temblar. No podemos detenernos ante el primer obstáculo». No obstante, las pruebas sugieren que el gobierno permitió que Sadam llevara a cabo la invasión y que después rechazó todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y los demás países de Oriente Próximo para encontrar una solución pacífica al conflicto. Bush sostuvo que defender los derechos humanos en Kuwait y el resto de Oriente Próximo era su responsabilidad, pese al hecho de que los antecedentes de Kuwait en materia de derechos humanos no eran, precisamente, dignos de admiración.

Estados Unidos reunió una fuerza de coalición compuesta por más de 600.000 efectivos de tierra, mar y aire (de los cuales 573.000 eran americanos) en Arabia Saudí y, el 16 de enero de 1991, dio inicio a la operación Tormenta del Desierto para «liberar» Kuwait. El 28 de febrero de 1991, declaró terminada la operación. Estados Unidos había realizado unos 110.000 vuelos y lanzado 88.500 toneladas de bombas sobre Irak, incluidas bombas racimo y bombas con uranio empobrecido. Destruyó plantas potabilizadoras de agua, fábricas de alimentos, centrales eléctricas, hospitales, escuelas, centrales telefónicas, puentes y carreteras por todo el país. Expulsó definitivamente a las fuerzas iraquíes de Kuwait y las diezmó en el campo de batalla (masacró a miles de soldados que se retiraban en lo que los pilotos norteamericanos lla-

maron «tiro al pavo»), pese a lo cual la coalición no continuó avanzado hasta Bagdad ni intentó capturar o derrocar a Sadam Husein.

En lugar de eso, lo que hicimos entre el 16 de enero de 1991, cuando el general Norman Schwarzkopf lanzó su ataque, y el 19 de marzo de 2003, cuando el general Tommy Franks ordenó el inicio de la invasión anglo-americana, fue expandir nuestro imperio de bases militares en la región. Tras la tregua que siguió a la primera guerra, consolidamos las bases que habíamos adquirido en Kuwait y Arabia Saudí, y «preposicionamos» los tanques y las municiones que serían necesarios en caso de que reabriésemos las hostilidades. A mitad del período entre las dos guerras contra Irak, alrededor de 1995, una serie de incidentes terroristas nos obligaron a trasladar gran parte de nuestros blindados, aviones y tropas a lugares más seguros, o en extremo remotos, como la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. A finales de la década de 1990, durante la segunda administración Clinton, el Pentágono empezó a preparar seriamente una segunda guerra contra Irak. El *Strategic Assessment 1999* (Análisis Estratégico de 1999) del Estado Mayor Conjunto decía concretamente que una «guerra del petróleo» en el golfo Pérsico representaba una contingencia grave, y que «las fuerzas de Estados Unidos deberían emplearse para garantizar un suministro de crudo suficiente». ¹² Se pensaba que una nueva guerra eliminaría definitivamente la influencia de Sadam Husein, permitiría conseguir el control del petróleo iraquí y extendería nuestra influencia en el vacío que la desintegración de la Unión Soviética había dejado en el sur de Eurasia y sus tierras ricas en petróleo.

Ese renovado interés por Asia central, sur y suroeste incluía, tal como hemos visto, la creación de vínculos entre los militares norteamericanos y los de las repúblicas independientes de Kirguizistán y Uzbekistán, y el respaldo al régimen talibán en Afganistán, como un modo de lograr que un consorcio encabezado por empresas estadounidenses se hiciera con los derechos para la construcción de gasoductos y oleoductos en la región. Sin embargo, la joya de la corona de esa gran estrategia era un plan para sustituir el régimen iraquí por un gobierno títere favorable a Estados Unidos, y construir bases militares permanentes en Irak. Con el fin de prepararse para la campaña militar, el Pentágono centró sus esfuerzos en las bases ubicadas en sus estados clientes alrededor del golfo Pérsico; su objetivo era aislarlas de las poblaciones locales, mayoritariamente antiamericanas, y preparar sus instala-

ciones para prestar apoyo a una fuerza expedicionaria para la conquista de Irak. Los atentados terroristas del 11-S, la guerra contra los talibán y la «guerra contra el terrorismo» de Bush no hicieron más que proporcionar un impulso adicional a un plan que llevaba por lo menos una década desarrollándose.

En las horas posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld abogó por un ataque inmediato contra Irak. Al día siguiente, en una reunión en la Casa Blanca, Rumsfeld volvió a insistir en que Irak debería ser «un objetivo importante en el primer asalto de la guerra contra el terrorismo». ¹³ Según se dice, advirtió al presidente de que «era necesario preparar a la opinión pública antes de que fuera posible un ataque contra Irak», y éste eligió Afganistán por ser un objetivo mucho más fácil.

Estas declaraciones y el momento en el que se produjeron son dignos de atención, puesto que entonces Estados Unidos ni siquiera había determinado que los terroristas suicidas provenían de la red de Osama bin Laden y, aunque más tarde el presidente maldeciría a Sadam Husein por ser un «aliado» de Al Qaeda, la administración Bush nunca llegó a proporcionar ninguna prueba que avalara esa conexión. De hecho, la edición de 2001 de *Patterns of Global Terrorism*, publicación anual del Departamento de Estado, no citaba ningún acto de terrorismo mundial relacionado con el gobierno de Irak. El 22 de septiembre de 2001, el secretario de Estado Colin Powell se comprometió a presentar pruebas de que Al Qaeda y Osama bin Laden eran los culpables de planear y ejecutar los atentados de Nueva York y Washington, y sólo después de eso Condoleezza Rice, consejera de seguridad nacional, declaró a la CNN: «Es evidente que tenemos pruebas, históricas y de otro tipo, acerca de la relación de la red Al Qaeda con lo que ocurrió el 11 de septiembre». En realidad, esas pruebas nunca aparecieron. Hasta que la lista de pasajeros no demostró que los secuestradores de los aviones provenían en su mayor parte de Arabia Saudí, yo mismo pensaba que los atentados podían ser consecuencia de nuestras acciones en un gran número de lugares, como Chile, Argentina, Indonesia, Grecia, toda Centroamérica y Okinawa, por no hablar de Palestina e Irán. El hecho de que Rumsfeld apuntara apresuradamente hacia Irak sugiere, por tanto, que la administración Bush y el Pentágono poseían hacía tiempo una agenda oculta sobre el «cambio de régimen» en ese país.

Desde la llamada guerra del Golfo de 1991, cierto número de importantes figuras en el Pentágono y la Casa Blanca han deseado regresar y terminar lo que empezaron. Eso dijeron en informes escritos destinados al entonces secretario de Defensa Cheney, durante los últimos años del primer gobierno Bush; y desde 1992 hasta 2000, mientras estuvieron fuera del poder, redactaron extensos planes sobre qué hacer cuando los republicanos volvieran a la Casa Blanca. En la primavera de 1997, esas personalidades fundaron la organización Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC) y comenzaron a ejercer una fuerte presión para que Irak fuera atacado y así rehacer Oriente Próximo.

En una carta dirigida al presidente Clinton, del 26 de enero de 1998, abogaban por «el derrocamiento del régimen de Sadam Husein», y en otra misiva, fechada el 29 de mayo de 1998 dirigida al presidente de la cámara de representantes, Newt Gingrich, y al líder de la mayoría en el senado, Trent Lott, se quejaban de que Clinton no les hubiera prestado atención y reiteraban su recomendación de que Sadam fuera derribado. Así expresaban la cuestión: «Deberíamos establecer y mantener una presencia militar norteamericana fuerte en la región y estar preparados para usar esa fuerza con el fin de proteger nuestros intereses vitales en el Golfo y, en caso de que fuera necesario, para ayudar a sacar a Sadam del poder». Esas cartas estaban firmadas por Donald Rumsfeld; William Kristol, director de la revista de derechas *Weekly Standard* y presidente del PNAC; Elliott Abrams, condenado por mentir al congreso respecto a la conspiración Irán-Contra y quien en 2002 sería nombrado director para la política sobre Oriente Próximo del Consejo de Seguridad Nacional; Paul Wolfowitz, que posteriormente colaboraría con Rumsfeld como subsecretario de Defensa; John Bolton, que sería luego subsecretario de Estado para el control de armamento y seguridad internacional en el gobierno de Bush hijo; Richard Perle, que se convertiría en el presidente de la Junta Científica de Defensa; William J. Bennett, secretario de Educación del presidente Reagan; Richard Armitage, que trabajaría junto a Colin Powell como subsecretario de Estado; Zalmay Khalilzad, antiguo asesor de Unocal, que se convertiría en el «embajador» de Bush para Afganistán y, más tarde, en el principal enlace con los kurdos y los exilados contrarios a Sadam, y varios otros relevantes militaristas norteamericanos. También formaban parte del PNAC, además de los signatarios de la carta, el vicepresidente

Dick Cheney; I. Lewis Libby, jefe de gabinete de Cheney, y Stephen Cambone, un burócrata del Pentágono en las dos administraciones Bush. Todos ellos han expuesto sus ideas en un informe publicado en septiembre de 2000 con el título de *Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces, and Resources for a New Century*, así como en un libro editado por Robert Kagan y William Kristol, *Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy*.¹⁴

Cuando George W. Bush alcanzó la presidencia, diez de los dieciocho firmantes de las cartas a Clinton y a los líderes republicanos del congreso se convirtieron en miembros del gobierno. Sólo tuvieron que aguardar nueve meses. En palabras de *Rebuilding America's Defenses*, estaban a la espera de «un acontecimiento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor», que movilizara a la población y les permitiera llevar a la práctica sus teorías y planes. El 11-S era, precisamente, lo que buscaban. En cuestión de días, Condoleezza Rice reunió a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y les solicitó que «pensaran en “cómo capitalizar esta oportunidad” para cambiar de manera fundamental la doctrina norteamericana y la forma del mundo, tras el 11 de septiembre». Dijo Rice: «Pienso realmente que este período es similar al de 1945 a 1947», en referencia a los años en que el miedo y la paranoia condujeron a Estados Unidos a la guerra fría con la URSS.¹⁵

Con todo, la administración Bush no podía simplemente entrar en guerra con Irak sin asociar de algún modo el régimen de Sadam Husein con los atentados del 11-S. Por consiguiente, impulsó primero una guerra fácil contra Afganistán, dado que existía una conexión entre Osama bin Laden y el régimen talibán, a pesar de que Estados Unidos contribuyó más de lo que jamás hizo el grupo extremista afgano a la transformación de Osama en un terrorista. La estrategia de esa guerra se fundamentaba en los bombardeos masivos y, por medio de carteras repletas de dinero, en el reclutamiento de los señores de la guerra de la Alianza del Norte, que habían sido derrotados por los talibán, para que llevaran a cabo la lucha real, como nuestros cipayos. Mientras tanto, la Casa Blanca lanzó una de las campañas de propaganda más extraordinarias de los tiempos modernos para convencer al pueblo de que un ataque contra Sadam Husein era parte esencial de la «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos. Ese intento calculado de alentar el fervor guerrero ocasionó, a su vez, profundas especulaciones en

todo el mundo acerca de los auténticos motivos del presidente y su evidente obsesión con respecto a Irak.

La primera y más obvia táctica de los halcones fue la de proclamar, en palabras del presidente Bush, que Sadam poseía «las armas más mortíferas de nuestra época». El único problema de ese argumento es que, probablemente, era falso. Es cierto que Irak tuvo en algún momento armas de destrucción masiva (ADM), sin embargo, entre 1991 y 1998, la combinación de la primera guerra del Golfo con las sanciones y las inspecciones de la ONU parece haberlas destruido en su mayor parte o en su totalidad, al igual que parece haber acabado con la capacidad del país para producir más. Tal como lo expresó Scott Ritter: «Personalmente soy testigo, tras siete años como jefe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas en Irak, tanto del alcance de los programas iraquíes de armas de destrucción masiva, como de la eficacia de las inspecciones de la ONU para eliminarlas finalmente».¹⁶ Rumsfeld, que jamás desiste de ninguna táctica que pueda contribuir a su causa, contestó: «la ausencia de pruebas no prueba la ausencia». Esta cuestión condujo al regreso a Irak de los inspectores de armas de la ONU, aunque, como fue evidente, no generó el apoyo internacional a los planes bélicos de la Casa Blanca. En todo caso, el PNAC nunca tuvo demasiado interés en las armas de destrucción masiva de Sadam, excepto como un pretexto conveniente. «Si bien el conflicto irresuelto con Irak proporciona la justificación inmediata, la necesidad de una significativa presencia de las fuerzas estadounidenses en el Golfo trasciende la cuestión del régimen de Sadam Husein», escribieron los autores de *Rebuilding America's Defenses*.¹⁷ Bush no buscó otros argumentos para proteger su apuesta y se aferró a la existencia de las armas de destrucción masiva. E incluso en una fecha tan tardía como el 6 de marzo de 2003, en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Este de la Casa Blanca, exclamó: «Sadam no se está desarmando. Es un hecho. No puede negarse».

La reiteración del gobierno acerca del peligro que entrañaba el que Sadam pudiera proporcionar armas no convencionales a los «malhechores» sonó como una canción familiar a los que recordaban la propaganda que acompañó el prólogo de la primera guerra de Irak. En aquella ocasión, el cuento que el gobierno de Bush padre utilizó para movilizar a los estadounidenses fue que los soldados iraquíes habían sacado a bebés kuwaitíes de las incubadoras de los hospitales y, en pa-

labras del presidente, «los habían tirado por el suelo como si fueran bebés». El presidente se refirió en repetidas ocasiones a los «312 bebés prematuros del hospital de maternidad de Kuwait City que murieron después de que los soldados iraquíes robaran sus incubadoras y los dejaran en el suelo». Sin embargo, según el doctor Mohamed Matar, director del sistema de atención primaria de Kuwait, y de su esposa, la doctora Fayeza Yousef, responsable de la unidad de obstetricia de la maternidad, sólo había un puñado de incubadoras en todo Kuwait, y apenas había bebés en ellas, si es que había alguno, cuando ocurrió la invasión iraquí. Bush realizó estos comentarios pocos días antes de que las Naciones Unidas autorizaran, el 29 de noviembre de 1990, el empleo de «todos los medios necesarios» para expulsar a los iraquíes de Kuwait. Después de la guerra se supo que Kuwait había contratado a Hill & Knowlton, la gran empresa de relaciones públicas de Washington, para divulgar la historia, y el 10 de octubre de 1990 consiguió que una «testigo presencial» declarara ante el congreso que tal cosa había ocurrido en efecto. Esa testigo, que resultó ser la hija del embajador de Kuwait en Washington, no había estado en absoluto cerca de ningún hospital de Kuwait City en agosto de 1990. Otros «testigos» que afirmaron haber visto las atrocidades iraquíes reconocieron más tarde que Hill & Knowlton había preparado sus declaraciones.¹⁸

El 7 de octubre de 2002, el presidente Bush hijo ofreció el más extraño de sus argumentos sobre el dictador-homicida-con ADM destinados a justificar la guerra contra Irak. En un discurso pronunciado en Cincinnati, después de señalar que «Sadam Husein es un dictador homicida adicto a las armas de destrucción masiva», advirtió de que «Irak tiene una flota creciente de vehículos aéreos tripulados y no tripulados que podría utilizar para dispersar armas químicas y biológicas sobre áreas de gran extensión. Nos preocupa que Irak esté investigando la forma de usar esos [vehículos aéreos no tripulados] en misiones que tengan como objetivo Estados Unidos». Posiblemente, Bush se refería a los aviones de entrenamiento checos L-29, de los que Irak había comprado 169 unidades en las décadas de 1960 y 1980. El L-29 es un avión monomotor de dos plazas, diseñado para la instrucción básica de los pilotos principiantes. Representa la versión soviética del Cessna norteamericano, y posee una autonomía de vuelo de 1.351 kilómetros y una velocidad máxima de unos 233 kilómetros por hora.

Existen indicios de que, antes de la guerra del Golfo, Irak había intentado convertir esas aeronaves en aviones no tripulados, si bien es posible que no tuviera otro fin que emplearlos para la fumigación de cultivos.¹⁹ En todo caso, el presidente no explicó cómo esas aeronaves de escasa velocidad podrían alcanzar Maine, el punto de los Estados Unidos continentales más cercano a Irak, situado a unos 8.850 kilómetros de distancia, o por qué no podría derribárselas en el momento en que cruzaran la frontera iraquí.

Otra afirmación importante en la marcha de la administración Bush hacia la guerra fue que Sadam había dado apoyo a la red Al Qaeda para los atentados terroristas del 11 de septiembre. En agosto de 2002, Rumsfeld dijo a Tom Brokaw de NBC News que «hay gente de Al Qaeda en Irak». El 26 de septiembre de 2002, afirmó que el gobierno poseía la confirmación «a prueba de balas» de la existencia de vínculos entre Irak y componentes de Al Qaeda, e incluso «pruebas sólidas» de la continua presencia de miembros de la red terrorista en Irak (aunque no en Pakistán, nuestro aliado en ciernes). Rumsfeld prosiguió con la sugerencia de que Irak habría ofrecido refugio a Bin Laden y al *mulá* Mohamed Omar, líder de los talibán. En un discurso proferido el 11 de octubre de 2002, el presidente Bush afirmó: «Algunos líderes de Al Qaeda que huyeron de Afganistán se fueron a Irak». Puesto que las «pruebas sólidas» nunca se hicieron públicas, cabe suponer que Rumsfeld y Bush se referían a los cerca de ciento cincuenta miembros del grupo Ansar al Islam («Seguidores del Islam») que se refugiaron en las zonas kurdas al norte de Irak. El problema es que eran los kurdos, futuros aliados de Estados Unidos, quienes controlaban esa zona, no Sadam. No había pruebas de la existencia de vínculos reales entre Sadam y Osama bin Laden, algo que la CIA subrayó en repetidas ocasiones, una cooperación que, en todo caso, sería poco plausible, dado el compromiso religioso de Osama y el régimen implacablemente laico de Sadam.

El único episodio de apoyo por parte del gobierno iraquí al terrorismo antiamericano fue el supuesto intento de asesinato de George H. W. Bush, durante la vuelta de la victoria que el presidente efectuó por Kuwait a mediados de abril de 1993, origen del comentario de su hijo de que Sadam «intentó matar a mi papá». El 26 de junio de 1993, dos meses y medio después del atentado, el presidente Clinton lanzó en represalia algunos misiles crucero sobre Bagdad, lo que ocasionó la

muerte de varios inocentes. Sin embargo, las evidencias sugieren que no sólo el intento de asesinato nunca ocurrió, sino que los servicios de inteligencia kuwaitíes probablemente estaban encubriendo su descubrimiento de una red de contrabando en la frontera con Irak diciendo que los detenidos iban a por papá Bush.²⁰

Quizá la menos convincente de las razones oficiales para desear librarse de Sadam era la afirmación de que el gobernante iraquí no respetaba las resoluciones de la ONU. El 30 de septiembre de 2002, Rumsfeld montó un espectáculo en el Pentágono, cuya estrella era una filmación que mostraba a la artillería antiaérea iraquí disparando contra los aviones de guerra británicos y estadounidenses que patrullaban las «zonas de exclusión aérea» al norte y al sur de Irak. «Con cada misil que lanza contra la tripulación de nuestros aviones, Irak expresa su desprecio por las resoluciones de la ONU, un hecho que ha de tenerse en mente cuando se juzguen sus últimos ofrecimientos de permitir las inspecciones», sostuvo Rumsfeld. No obstante, el secretario de Defensa sabía con seguridad que no existía ninguna resolución de la ONU (como tampoco de ninguna otra autoridad internacional) que legitimara las zonas de exclusión aérea. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia las habían creado de forma unilateral en marzo de 1991, en teoría para proteger a rebeldes kurdos al norte y a los chiíes al sur, que se habían levantado contra Sadam después de la primera guerra del Golfo. Aunque esas zonas de prohibición de vuelo en efecto disuadieron al presidente iraquí de usar su fuerza aérea, el primer gobierno Bush no intervino cuando Sadam aplastó ambos levantamientos, sin duda por temer tanto a un Irak de tendencia islamista radical como a la apuesta kurda por la independencia, algo que destabilizaría a Turquía, un país aliado que llevaba mucho tiempo entregado a la represión implacable de su propia minoría kurda. Mientras Francia abandonó enseguida el control de las zonas de exclusión aérea, Estados Unidos y el Reino Unido continuaron e incrementaron sus ataques aéreos hasta la misma víspera de la segunda guerra de Irak, a pesar de que eran claramente ilegales según la legislación internacional.²¹

Estaba, además, la insistencia del gobierno estadounidense en que el derrocamiento de Sadam llevaría la democracia a Irak y a otros países alrededor del golfo Pérsico. En una entrevista concedida al *Financial Times* de Londres, Condoleezza Rice comentó que la libertad, la

democracia y la libre empresa no se «detenían al borde del islam», y que Estados Unidos, tras derribar a Sadam mediante el empleo de la fuerza militar, se «dedicaría por completo» a la reconstrucción de Irak como un estado democrático y unificado.²² Esto sonaba demasiado parecido a la afirmación realizada por las fuerzas armadas, después de haber pulverizado el país con bombardeos, de que en realidad habían ido a Afganistán para liberar a las mujeres locales de los talibán. Resulta claro que si Estados Unidos en verdad tuviera algún interés en llevar la democracia a los estados del Golfo, habría empezado hacía mucho con Arabia Saudí o cualquiera de las monarquías feudales de la región, como Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, en las que ha construido importantes guarniciones militares.

Puesto que ninguno de los argumentos del gobierno para explicar su beligerancia hacia Irak tenía demasiado sentido, observadores de todo el mundo buscaron en otra parte los motivos reales de tal actitud. Una de las principales teorías se refería al petróleo iraquí. Sus reservas son, después de las de Arabia Saudí, las segundas más grandes del mundo. Dado que tanto el presidente como el vicepresidente habían sido ejecutivos de empresas petroleras, y que el padre del presidente fue el fundador, en 1954, de la Zapata Offshore Oil Company, resultaba razonable suponer que estuvieran, como mínimo, bastante familiarizados con la riqueza petrolífera de Irak. La Zapata Company perforó su primer pozo de petróleo en la costa kuwaití. En 1963 Bush padre fusionó Zapata con otra empresa para crear el gigante petroero Pennzoil, del que en 1966 vendió sus acciones para convertirse en multimillonario. Todavía en 1998 y en 1999, cuando Dick Cheney era aún presidente de la Halliburton Company de Houston, esta empresa vendió a Sadam unos 23,8 millones de dólares en equipos para la explotación de yacimientos petrolíferos. Según esta argumentación, tal vez la obsesión de Bush hijo con Irak se debiera a su deseo de hacerse con el petróleo del país.

Estados Unidos necesita gran cantidad de petróleo para su inmenso sector automovilístico, que, especialmente en el caso de los terrenos civiles y militares, cada vez tiene un consumo de combustibles más elevado. Pero, además, también existen razones estratégicas por las que le gustaría controlar los yacimientos petrolíferos de Oriente Próximo y Asia central, algo que le permitiría supervisar los embarques de crudo destinados a aquellas regiones que tienen una dependen-

cia creciente del petróleo importado y que algún día podrían desafiar el actual predominio mundial estadounidense. Europa y China son evidentes rivales en potencia. Anthony Sampson, experto en petróleo y autor de *The Seven Sisters*, un libro clásico sobre las grandes petroleras, observa: «Los intereses occidentales en torno al petróleo influyen en las políticas diplomáticas y militares, y no es una casualidad que mientras las empresas norteamericanas compiten por el acceso al crudo en Asia central, Estado Unidos esté construyendo bases militares en la región».²³

La prueba más significativa de que el petróleo constituía una motivación fundamental fue el comportamiento que tuvieron las tropas norteamericanas en Bagdad después de entrar en la ciudad, el 9 de abril de 2003. Protegieron con gran eficacia la sede del Ministerio del Petróleo iraquí, al tiempo que se mostraron indiferentes hacia los saqueadores que quemaron los Archivos Nacionales y la famosa Biblioteca Coránica de la ciudad y durante dos días desvalijaron el Museo Nacional, despojándolo de unas antigüedades de valor incalculable. Lo mismo sucedió con el Museo Nacional de Mosul. Mientras los infantes de marina hacían pintadas en algunas de las murallas más antiguas del mundo, en el lugar donde se alzaba la ciudad sumeria de Ur, cerca de Nasiriya, el ejército ya estaba construyendo una guarnición permanente junto a la base aérea de Tallil, para proteger los yacimientos de petróleo del sur del país.²⁴

Otra teoría popular afirma que el Partido Likud, de Israel, era y sigue siendo la principal influencia en la forma de pensar de la administración Bush con respecto a Oriente Próximo, y que el deseo de derrocar a Sadam reflejaba los intereses a largo plazo de los derechistas israelíes, que desearían garantizar la continuidad de su superioridad militar en la región. Muchas figuras clave del segundo gobierno Bush y del PNAC tienen vínculos estrechos con Ariel Sharon y el Likud. Entre ellas se encuentran el presidente del Consejo de Política de Defensa, Richard Perle, el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa para asuntos políticos, Douglas Feith, y David Wurmser, asesor especial de un fundador del PNAC, John Bolton, el subsecretario de Estado para asuntos relacionados con el control de armas. Michael Ledeen, antiguo conspirador del Irán-Contra y miembro del consejo del Instituto Judío de Asuntos de Seguridad Nacional de Washington, coopera estrechamente con sus colegas del Instituto de

Empresa Americano (AEI) para la promoción de las causas israelíes. Todos estos hombres no sólo poseen un largo historial de oposición a las iniciativas de paz y a los acuerdos entre israelíes y palestinos, sino que además han promovido que Estados Unidos vaya a la guerra contra Irak, así como contra Siria, Líbano e Irán; de hecho, abogan por rehacer toda la región de un modo que sólo beneficiaría a Israel.

Perle pertenece al consejo del periódico conservador *Jerusalem Post* y es el autor del capítulo «Irak: Saddam desatado» del libro del PNAC *Present Dangers*. Feith es, en su vida privada, socio de una pequeña firma de abogados especializada en representar a los fabricantes de armamento israelíes que buscan conexiones con la industria armamentista norteamericana. Antes de irse al Departamento de Estado, Wurmser era el jefe de los proyectos para Oriente Próximo en el derechista Instituto de Empresa Americano. Es autor del libro, publicado por este instituto en 1999, *Tyranny's Ally: America's Failure to Defeat Saddam Hussein*, prologado por Perle. Durante el gobierno Reagan, Feith sirvió como consejero especial de Perle, quien era entonces subsecretario de Defensa para asuntos de seguridad internacional. Otra figura influyente, Meyrav Wurmser, esposa de David Wurmser y cofundadora del Instituto de Investigación sobre los Medios de Comunicación en Oriente Próximo (Memri), traduce y distribuye noticias de la prensa árabe que puedan favorecer la imagen negativa de este pueblo.

En julio de 1996, estas cuatro personas escribieron un documento con sus planteamientos políticos para el primer ministro entrante de Israel, Benjamin Netanyahu, del Likud, titulado «Una ruptura clara: una nueva estrategia para proteger el reino». Animaba a Israel a rechazar los Acuerdos de Oslo y su idea de «paz por territorios» y proponía que se anexionara de forma permanente la franja de Gaza y Cisjordania. Recomendaba, asimismo, que Israel abogara por la eliminación de Saddam Husein, como un primer paso para conseguir un cambio de régimen en Siria, Líbano, Arabia Saudí e Irán. En noviembre de 2002, el primer ministro Ariel Sharon respaldó esta postura cuando instó a Estados Unidos a afrontar la cuestión de Irán en cuanto hubiera acabado con Saddam. Gran número de funcionarios y parásitos del segundo gobierno Bush comparte tales opiniones u otras similares. Teniendo en cuenta sus conocidas simpatías, no resulta descabellado pensar que han estado intentando ponerlas en práctica tras la consigna de la «guerra contra el terrorismo».²⁵

Otra teoría razonable postulaba que astutos políticos de la Casa Blanca alimentaban el entusiasmo bélico de Estados Unidos, y que la campaña contra Saddam Husein estaba destinada, ante todo, a influir en la política interna, tanto en las elecciones de mitad de período de 2002 como en las presidenciales de 2004. Distintos analistas llamaron a tal cosa el empleo de las «armas de distracción masiva».²⁶ Entre sus objetivos, se encontraban el de reforzar la dudosa legitimidad de George W. Bush como presidente y el de distraer la atención de los electores de sus discutibles logros durante sus dos primeros años en el cargo. Frente a las elecciones de mitad de período de 2002, los líderes del Partido Republicano buscaban desesperadamente desviar el debate público de cuestiones tales como los estrechos vínculos del presidente y el vicepresidente con la corrupta Enron Corporation, el gigantesco y creciente déficit del presupuesto federal, el saqueo de los fondos de pensiones de los trabajadores por altos ejecutivos con sueldos astronómicos, las amplias rebajas de impuestos que favorecían a los ricos, la grave pérdida de las libertades civiles promovida por el fiscal general de Bush y, en el ámbito de la política exterior, el embarazoso hecho de que, a pesar de la guerra contra Afganistán, como era evidente, Al Qaeda y Osama bin Laden estaban en libertad y seguían siendo fuertes.

En este aspecto, importantes consejeros políticos de la Casa Blanca, como Karl Rove y el jefe de gabinete Andrew Card, ejercían mucha más influencia sobre el presidente que el secretario de Defensa, Rumsfeld, o el secretario de Estado, Powell. Y así como durante la guerra de Vietnam los presidentes Kennedy, Johnson y Nixon tomaron, hasta un punto sorprendente, decisiones de política exterior críticas basándose en consideraciones internas, en lugar de actuar según una estrategia más amplia o las valoraciones de los servicios de inteligencia, la evidencia sugiere que Rove capitaneó a los halcones del Pentágono, partidarios de las acciones unilaterales, y envió al presidente a pronunciar su discurso del 12 de septiembre de 2002 en las Naciones Unidas y exigir nuevas inspecciones en Irak. Rove había descubierto que la opinión pública se mostraba tibia con respecto a librar una guerra en Oriente Próximo sin el apoyo de aliados.²⁷ Para George W. Bush, la estrategia funcionó. Después de dos años en la presidencia, el partido que ocupaba la Casa Blanca salió fortalecido en el congreso y consiguió el control de las dos cámaras, una verdadera rareza en la moderna historia política de Estados Unidos.

Resultaría difícil negar que el petróleo, Israel y la política interna desempeñaron todos un papel crucial en la guerra de Irak del gobierno Bush, pero pienso que una explicación más amplia de esta segunda guerra contra ese país no difiere de la de nuestra guerra en los Balcanes en 1999 o en Afganistán en 2001-2002: las inexorables presiones del imperialismo y el militarismo. Jay Bookman, columnista del *Atlanta Journal-Constitution*, formuló la pregunta esencial meses antes de que empezara el conflicto: «¿Por qué el gobierno no parece interesado en diseñar una estrategia para la salida de Irak, una vez que Sadam haya sido derribado? Porque no nos marcharemos. Después de conquistar Irak, Estados Unidos creará allí bases militares permanentes, a partir de las cuales dominará Oriente Próximo, incluido Irán».²⁸

Estados Unidos ya había emprendido, entre la derrota de Irak en 1991 y el regreso de las hostilidades en marzo de 2003, la adquisición y construcción de bases en la región. Comenzó consolidando y ampliando las instalaciones que había empleado durante la guerra, sobre todo las de Kuwait y Arabia Saudí. La decisión de permanecer en Arabia Saudí resultó tener serias consecuencias imprevistas, en especial para la ciudad de Nueva York. Cierta número de influyentes jóvenes saudíes se resintieron por lo que consideraron el ensalzamiento de la coalición liderada por Estados Unidos y del comandante de la misma, el general Norman Schwarzkopf, en detrimento de su análogo saudí, el teniente general Khalid al Saud, quien pese a estar al mando de las veinticuatro unidades de países no occidentales fue permanentemente ignorado. Esos jóvenes saudíes consideraban que habría sido preferible que el papel de liderar el castigo a Sadam se le hubiera confiado a Arabia Saudí y a los países del golfo Pérsico, y no a los norteamericanos y europeos, aunque, probablemente, pensar que Arabia Saudí y sus aliados tenían la capacidad para asumir ese cometido no pasaba de ser una fantasía. Y, lo que era todavía más importante, algunos pensaban también que la monarquía saudí deseaba que las fuerzas armadas estadounidenses permanecieran en el país ante todo para protegerla de las crecientes exigencias de un régimen más moderno y menos represivo. Además, dado que la defensa de La Meca y Medina, los lugares más sagrados del mundo musulmán, es responsabilidad de la monarquía saudí, otros disidentes (aunque difícilmente se les pueda llamar demócratas) sostuvieron que la presencia de tantos infieles en Arabia Saudí representaba una afrenta no sólo al nacionalismo saudí, sino al propio islam.

Al principio, no ocurrieron más que unos pocos incidentes antiamericanos. En febrero y en marzo de 1991, hubo algunos disparos contra vehículos militares estadounidenses y algún intento de quemar un autobús. En 1994, sin embargo, las cosas se pusieron más serias con el aumento de las amenazas terroristas; y el 13 de noviembre de 1995 los disidentes hicieron explotar un coche bomba con 110 kilos de explosivos en Riad, lo que ocasionó la muerte de cinco norteamericanos y dos indios. Su objetivo era la Misión de Entrenamiento Militar de Estados Unidos (USMTM) para el Reino de Arabia Saudí, unidad bajo directo control del Comando Central (CENTCOM), con sede en la base aérea MacDill, en Florida, pero que estaba en Riad subcontratada por Vinnell Corporation, una empresa de mercenarios. En mayo de 1996, el gobierno saudí condenó y decapitó a cuatro militantes musulmanes por el crimen.

Durante la primera guerra del Golfo, los saudíes instalaron a varios centenares de comandantes estadounidenses, británicos y franceses, así como a sus respectivos equipos, en las Torres Khobar, un grupo de edificios de apartamentos de ocho pisos situado en Dhahran, en la periferia de la base aérea Rey Abdul Aziz. Los norteamericanos colocaron de inmediato baterías de misiles antiaéreos Patriot alrededor del conjunto y en las proximidades del aeropuerto de Dhahran. En julio de 1992, cuando la guerra había terminado y los saudíes habían acordado permitir que las fuerzas armadas norteamericanas permanecieran en el país, el Comando Central del Ejército en Arabia Saudí (ARCENT-SA) estableció su cuartel general en las Torres Khobar. El 25 de junio de 1996, junto a la cerca de malla metálica que rodeaba los edificios de apartamentos, terroristas antiamericanos detonaron un camión bomba con una fuerte carga explosiva y mataron a diecinueve miembros de la fuerza aérea e hirieron a centenares más. Después de la carnicería, en lugar de retirarse de Arabia Saudí, considerada entonces un país esencial para nuestra estrategia en todo el golfo Pérsico, la Casa Blanca y el Pentágono decidieron afincarse aún más, si bien aislándose todo lo posible de la sociedad saudí.

Tras el atentado de las Torres Khobar, el Pentágono recolocó a unos seis mil militares en lugares más apartados y más fácilmente defendibles. Ordenó a las principales unidades de comando —el ARCENT-SA, la Misión de Entrenamiento Militar y otras— que trasladaran sus oficinas y alojamientos de Dhahran y el centro de Riad a Eskan Vi-

llage, un complejo rodeado de baterías de misiles Patriot situado a unos veinticuatro kilómetros de la capital. La fuerza aérea envió a su personal y su equipamiento a la base aérea Príncipe Sultán, ubicada en Al Kharij, en una carretera sin señalizar a unos 112 km al sur de Riad, en pleno desierto. Se trata de un complejo de casi seiscientos kilómetros cuadrados, con lo que supera con creces el tamaño de muchas ciudades, pero no consta en ningún mapa. De acuerdo con las normas impuestas por los saudíes, está prohibido sacar fotos que evidencien la más mínima presencia de las tropas norteamericanas en Príncipe Sultán: nada de señales, nada de signos, nada de saudíes paseando en el fondo que indiquen que lo retratado se sitúa en el país, nada de vehículos con matrículas saudíes. Todas las instantáneas son examinadas y se confiscan las que contengan algo más que un fondo neutral.²⁹

El gobierno saudí construyó Eskin Village en 1983 para proporcionar viviendas a una de las numerosas tribus de beduinos nómadas del país, que luego decidió que prefería continuar viviendo en sus tiendas tradicionales en el desierto. El complejo residencial nunca había sido ocupado. Es, en efecto, una pequeña ciudad independiente, formada por 836 chalés y 37 torres de apartamentos. Desde la guerra del Golfo hasta el atentado de las Torres Khobar, Eskin Village fue, estrictamente, una urbanización residencial para el personal militar norteamericano que trabajaba en la capital saudí o en la base de la fuerza aérea de Riad. Desde 1996 y a lo largo de la segunda guerra del Golfo, se transformó en hogar y lugar de trabajo a la vez. El chalé normal —cinco dormitorios, tres baños, salón y cocina— está totalmente equipado con horno, televisión y lavadora. Sólo las casas destinadas al personal femenino están dotadas con secadoras (en deferencia a la sensibilidad saudí, que no soporta que haya ropa interior femenina ondulando al viento). Eskin Village se ha convertido en una comunidad totalmente estadounidense, con comedores, clínicas médicas y dentales, una cancha de baloncesto, varias de balonvolea, un campo de golf en miniatura, un «Pizza Inn», un restaurante chino de comida rápida y un «club» con piscina.³⁰ No obstante, las bebidas alcohólicas de todo tipo están prohibidas.

Las instalaciones, servicios y dimensiones de Eskin Village palidecen en comparación con las de la base aérea Príncipe Sultán, a sólo mil kilómetros de Bagdad. Ésta fue durante una década la mayor instalación militar utilizada por Estados Unidos en el golfo Pérsico y tie-

ne, aproximadamente, el mismo tamaño que todo Bahrein. El gobierno de Arabia Saudí diseñó Príncipe Sultán antes de la primera guerra del Golfo, aunque inicialmente sólo construyó la pista de aterrizaje de 4.500 metros y las pistas de rodaje y aparcamiento para las aeronaves. Todavía no existían edificios en octubre de 1990, cuando la fuerza aérea de Estados Unidos envió, desde la base aérea de Aviano, en Italia, a uno de sus escuadrones Red Horse, compuesto de 435 efectivos, para que acondicionara el lugar. Los escuadrones Red Horse (Rapid Engineer Deployable Heavy Operational Rapid Squadron Engineers) fueron creados durante la guerra de Vietnam y son un grupo de ingenieros especializados en la construcción y reparación de pistas durante el combate, aunque en ocasiones se emplean para inutilizar los campos aéreos enemigos, tal como hicieron durante la guerra del Golfo en Irak. Están completamente equipados. En Príncipe Sultán trabajaron durante todo el invierno de 1990 en más de 25 grandes proyectos, que costaron más de 14,6 millones de dólares. En enero de 1991, la base aérea Príncipe Sultán empezó a recibir aeronaves y, al comienzo de la guerra del Golfo, contaba con 4.900 miembros de la fuerza aérea y tenía capacidad para alojar, prestar servicios y armar a cinco escuadrones de combate aéreo y a su personal de apoyo (un escuadrón norteamericano normal se compone de veinticuatro aeronaves). Con el fin del conflicto, en 1991, la base permaneció inactiva, hasta que el atentado de las Torres Khobar la volvió a situar en el primer plano de la actualidad.

Príncipe Sultán, al estar rodeada por un desierto plano con líneas de tiro abiertas, era un lugar perfecto para «esconder» la presencia norteamericana. Además, la fuerza aérea asignó a labores de «seguridad del perímetro» a un 10 por 100 de los seis mil efectivos allí emplazados. Aun así, los F-15 y F-16 tenían órdenes de subir lo más rápido posible tras el despegue, para evitar posibles atentados con misiles tierra-aire. Las tropas norteamericanas, que servían por períodos de noventa días, prácticamente no salían nunca de la base. El traslado de las operaciones a Príncipe Sultán costó unos quinientos millones de dólares. Tanto antes como durante la segunda guerra de Irak, fue la principal base para las operaciones que empleaban aviones radar AWAC (vigilancia y control aéreos) y aeronaves espía U-2.

Desde el verano de 1996 hasta 2002, las tareas de construcción fueron continuas en Príncipe Sultán. En 1997, el Ministerio de De-

fensa y Aviación Saudí concedió a la División de Sensores y Sistemas Electrónicos de Aviación de la compañía Northrop un contrato por 60,7 millones de dólares, para la construcción e integración del nuevo control de tráfico aéreo y los sistemas de navegación, meteorología y comunicaciones. Al inicio de 1999, las tropas, que habían estado alojadas en tiendas con aire acondicionado, se trasladaron a una nueva instalación residencial de 4.257 camas, a 3,2 km de la base. El gobierno saudí pagó 112 millones por ella; por consiguiente, siguió siendo una propiedad del gobierno de Arabia Saudí, aunque la fuerza aérea estadounidense la gestionara y mantuviera. Las instalaciones incluían comedores con nombres como Camel Lot y Mirage, un teatro, un gimnasio, un centro recreativo, una piscina exterior *enfriada* constantemente a 27,7 °C (la temperatura ambiente en Príncipe Sultán se encuentra, por lo general, entre los 43,3 °C y los 44,1 °C) y el Centro de Salud Príncipe Sultán (con un coste de 5,87 millones de dólares), que fue inaugurado por el propio príncipe el 22 de junio de 1999. Se ha calculado que el precio total de la base, desde su inicio a finales de la década de 1980, ha sido de aproximadamente unos 1.070 millones de dólares. En los años previos a la segunda guerra de Irak, la fuerza aérea efectuó un total de 286.000 misiones aéreas desde Príncipe Sultán y otras bases del golfo Pérsico para vigilar la zona de exclusión aérea del sur de Irak. Operaciones análogas para el norte de Irak partieron de la base aérea de Incirlik, en Turquía.

La principal construcción nueva de Príncipe Sultán, terminada justo antes de la guerra contra Afganistán, fue un Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC), con mandos y sistemas de control de última tecnología, y un Centro de Inteligencia Conjunto que comprendía tres redes distintas de internet: una para el tráfico de las fuerzas aliadas, otra para el secreto y otro para el abierto. La fuerza aérea inauguró el centro en junio de 2001, y en octubre el gobierno saudí autorizó su uso para la coordinación de las operaciones aéreas contra objetivos situados en Afganistán. La supersecreta Agencia de Comunicaciones de la Fuerza Aérea supervisó su diseño e instalación. El nuevo CAOC de Príncipe Sultán coordinaba las operaciones aéreas de las bases que Estados Unidos construía entonces en Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, a medida que se acercaba la segunda guerra de Irak, los norteamericanos no tenían claro si el gobierno saudí les permitiría utilizar la base Príncipe Sultán, ni, en el caso de autori-

zarlo, para qué funciones lo haría, de modo que el Pentágono construyó enseguida un complejo centro de comando aéreo alternativo en la base aérea al-Udeid, en Qatar.³¹

Tal como acostumbra ser la vida en nuestro imperio de bases en expansión en las tierras del petróleo, los días en Príncipe Sultán transcurrían, cuando no se estaba trabajando, entre la natación y la televisión. Sin embargo, el aislamiento en ocasiones no sentaba bien a las tropas. En un episodio que se hizo famoso, la teniente coronel Martha McSally, la piloto de más alta graduación de la fuerza aérea, llevó a los tribunales al Departamento de Defensa, por exigirle que se vistiera con una *abaya* —una vestimenta que cubre por completo el cuerpo, usada en público por las mujeres saudíes— siempre que saliese de la base. Adujo que tal requerimiento era inconstitucional e infringía los derechos de las mujeres norteamericanas. Ganó (en Washington, DC) y el CENTCOM retiró tal exigencia.³²

El gobierno estadounidense siempre ha entendido que la presencia de nuestras fuerzas armadas en Arabia Saudí se encontraba en la raíz de las actividades terroristas de Al Qaeda contra objetivos tanto de la monarquía saudí como de los norteamericanos, dentro y fuera del país. Sin embargo, lejos de trasladar enseguida sus tropas después del 11-S, el gobierno Bush aguardó hasta que pudo disimular lo que hacía bajo la tapadera de los habituales cambios de emplazamientos militares. El 29 de abril de 2003, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y su análogo saudí, el príncipe Sultán bin Abdul Aziz, anunciaron al fin en Riad que la caída de Sadam Husein significaba que la misión de las fuerzas armadas estadounidenses en el país había terminado, y que «todas las fuerzas de combate» se retirarían. Aun así, parece que el gobierno Bush se demoró en exceso. El 12 de mayo de 2003, los terroristas atacaron cuatro complejos, vallados y protegidos, destinados a extranjeros en Riad, y mataron a más de treinta norteamericanos y saudíes. Además, Estados Unidos en realidad no se marcha de Príncipe Sultán ni de Arabia Saudí: ha conservado una pequeña unidad de mantenimiento en la base aérea, y Vinnell Corporation continúa a cargo de la formación de la Guardia Nacional Saudí. La retirada norteamericana fue anunciada a bombo y platillo en la televisión del país, si bien resulta improbable que alguien se haya creído que los imperialistas estadounidenses habían dejado en efecto de interesarse por el país más rico del mundo en producción de petróleo. Niall Ferguson,

historiador inglés del imperialismo, comentó en una entrevista *The New York Times*: «Entre 1882 y 1922 los británicos prometieron en 66 ocasiones a la comunidad internacional que abandonarían Egipto, y sin embargo nunca llegaron a hacerlo».³³

Príncipe Sultán fue, durante algunos años, la base de las bases en Oriente Próximo, aunque, dado que Estados Unidos había creado tal exceso de capacidad militar en la región del Golfo, la decisión de retirar a casi todo el personal de las fuerzas armadas norteamericanas de Arabia Saudí tras la guerra de Irak apenas repercutió sobre su capacidad bélica. La proliferación de bases, si tenemos en cuenta sólo a los vecinos Kuwait, Bahrein y Qatar, sobrepasa cualquier posible necesidad militar que Estados Unidos haya de afrontar. Y existen más instalaciones en Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Israel y Yibuti, además de las que Estados Unidos adquirió recientemente en Afganistán, Pakistán, Kirguizistán y Uzbekistán. Antes del final de 2003, existirán con toda probabilidad cuatro nuevas bases en Irak. La marina, asimismo, puede desplegar hasta cinco grupos de portaaviones de combate, cada uno con alrededor de 75 aviones, además de misiles crucero y armamento atómico, en el mar Arábigo, el mar Rojo y el golfo Pérsico. Un grupo de portaaviones de combate se compone del propio portaaviones, además de dos cruceros, dos o tres destructores, una fragata, un submarino de ataque y un navío de apoyo de combate, con lo que es, en esencia, una base flotante.

En la víspera de la segunda guerra de Irak, Camp Doha, la mayor base del ejército en Kuwait, era el punto de partida de una inmensa fuerza terrestre que aguardaba las órdenes para avanzar hacia la frontera iraquí, y que incluía el 5.º Cuerpo del ejército, de Heidelberg, Alemania; la 1.ª Fuerza Expedicionaria de la infantería de marina, de Camp Pendleton, California; la 3.ª División (Mecanizada) de la infantería de marina, de Fuerte Stewart, Georgia; tres escuadrones de helicópteros de ataque Apache; una unidad de las Fuerzas Especiales; y un pelotón avanzado de la 1.ª División Acorazada británica. El principal armamento de esas unidades consistía en 230 tanques de combate Abrams, 120 vehículos de combate Bradley y 40 piezas de artillería de 155 mm autopropulsadas Paladin. General Dynamics fabrica el tanque Abrams, que pesa 68,7 toneladas y cuesta 4,3 millones de dólares la unidad. El vehículo Bradley es un «taxi de batalla» acorazado de 22 toneladas, equipado con modernas ametralladoras, proyectiles

antitanque y granadas de humo, y utilizado para el transporte de tropas hacia el combate, por detrás de los tanques. El Paladin es el cañón más avanzado del arsenal del ejército, y pesa unas 32 toneladas.

Desde el atentado de las Torres Khobar, una de las principales metas del ejército ha sido reemplazar Camp Doha, que está demasiado cerca de la capital, Kuwait City, por unas instalaciones de «preposicionamiento» más modernas y protegidas contra posibles ataques terroristas. En julio de 1999, el gobierno de Kuwait empezó a trabajar en la nueva base, una instalación de doscientos millones de dólares llamada Camp Arifjan y ubicada en el desierto, al sur de la capital. En 2002, fueron trasladados allí unos diez mil efectivos no combatientes procedentes de Camp Doha. En Arifjan, prácticamente todo el equipamiento para una brigada completa del ejército se encuentra guardado en almacenes, en vez de permanecer expuesto a las condiciones ambientales del desierto, como ocurría en Camp Doha. El Cuerpo de Ingenieros del ejército diseñó la base, que cuenta con modernos alojamientos dotados con cristales Mylar inastillables en todas las ventanas, y naves especiales para el mantenimiento de los tanques. La mayor parte de Camp Arifjan fue completada durante 2002, y sólo faltan por construirse algunas carreteras y servicios. Mientras Camp Doha, que ha sido utilizada ininterrumpidamente desde la primera guerra del Golfo, fue siempre considerada una instalación provisional, Camp Arifjan es la prueba de que los americanos tienen la intención de permanecer largo tiempo en el país.

A finales de la década de 1990, el ejército llevaba cada cuatro meses a Kuwait, desde Europa o Estados Unidos, a una nueva brigada para que recibiera instrucción. El aeropuerto empleado era la base aérea Ahmed al Jaber, situada precisamente a ciento veinte kilómetros al sur de la frontera iraquí; pese a que la base pertenece a la fuerza aérea kuwaití, tiene un área separada destinada únicamente a las operaciones de la fuerza aérea norteamericana. Hasta finales de 1996, nuestra fuerza aérea utilizaba el aeropuerto internacional de Kuwait City para sus cazas F-15 y F-16; sin embargo, después de los atentados terroristas de Riad y Dhahran, trasladó todo a lo que las tropas llaman inevitablemente «the Jab» (el bofetón). De acuerdo con la organización de Global Security, «la base aérea Ahmed al Jaber es un objetivo difícil. La fuerza aérea emplea todos los medios disponibles, desde las barreras físicas hasta los sensores de alta tecnología y las cá-

maras de infrarrojos, para garantizar la seguridad de las personas instaladas en ella. Además, una fuerza de seguridad abrumadora y en estado de alerta somete a un severo examen hasta los acontecimientos más inocuos». ³⁴ La fuerza aérea subcontrata casi todos los servicios que requieren los miles de efectivos instalados en el Jaber.

Otra instalación militar estadounidense en Kuwait, la base Ali al Salem, a sólo 62,5 kilómetros de la frontera con Irak, era hasta hace poco un duro puesto de trabajo, dedicado a la vigilancia con radares del espacio aéreo iraquí. Una descripción del Ali al Salem señala que «hace tanto calor aquí como en el sitio más caluroso en que se haya estado jamás». ³⁵ A mediados del año 2000, comenzaron los trabajos para la construcción de nuevos edificios y sistemas de seguridad, con el fin de convertir Ali al Salem en una base permanente. Los servicios en al Salem también los proporcionan subcontratistas.

A los norteamericanos les gusta pensar que Kuwait está en deuda con Estados Unidos porque fuimos en su ayuda en 1991, y que, por consiguiente, recibe de buen grado la instalación de bases militares permanentes en su suelo. Esta es una idea errónea. Kuwait no ha demostrado ser un aliado particularmente amistoso. Al ser una nación árabe, Kuwait se opone a que los norteamericanos apoyen el expansionismo israelí y juzguen con un doble rasero a los terroristas palestinos y a los soldados israelíes, cuando ambos matan civiles indefensos. Los kuwaitíes tampoco se muestran más contentos que otros pueblos por tener a las tropas de Estados Unidos viviendo entre ellos, en especial por tratarse de unos extranjeros que no respetan su religión. Kuwait ha aceptado, sin embargo, la protección estadounidense y paga por ella.

La situación es más compleja en los demás estados del Golfo. Qatar y Omán son países pequeños, que sienten gran temor de sus vecinos de mayor tamaño: Irán, Irak y Arabia Saudí. Han invitado a los norteamericanos a sus respectivos países como una forma de protegerse, de manera similar a cómo sus antepasados aceptaron a los británicos. A cambio, Estados Unidos exige bases militares, a ser posible en áreas seguras y apartadas de los centros urbanos. El Pentágono es consciente de que no es demasiado bienvenido en la región y de que los gobiernos del Golfo prefieren no hacer comentarios sobre las bases, ni reconocer su presencia más que cuando resulta absolutamente necesario. Mientras Omán es, probablemente, el estado del Golfo más

tolerante con los norteamericanos, los Emiratos Árabes Unidos se ubican en el otro extremo. Todos corren el riesgo de tener que afrontar la ira de sus propios ciudadanos por colaborar con Estados Unidos.

Bahrein es un buen ejemplo. Era un sitio bastante tranquilo hasta julio de 1995, cuando la marina trasladó allí el cuartel general de la 5.^a Flota, con unos 4.200 efectivos. Global Security observa al respecto: «La actual ASU [unidad de soporte administrativo naval] apenas guarda algún parecido con el pequeño complejo de cuatro hectáreas que fue hasta una fecha tan reciente como 1991. En los últimos siete años, este valle dormido se ha extendido hasta superar las veinticinco hectáreas y se han empleado 36,5 millones de dólares en nuevas construcciones, entre las que se encuentran los nuevos alojamientos, una clínica médica y dental, una cancha para *racquetball*, una capilla, una oficina de correos y distintos campos para la práctica de diversos deportes». ³⁶ Gran número de soldados estadounidenses considera que Bahrein es el mejor puesto en la región del Golfo. A diferencia de Arabia Saudí, que se conecta mediante la autovía Rey Fahd con Bahrein, en este último país los norteamericanos pueden beber alcohol. No obstante, aunque Manama, la capital de Bahrein, es una ciudad en la que viven especialmente extranjeros (no sólo americanos) y que el reino tiene una población de apenas 660.000 habitantes, la marina ha ubicado muchos hoteles y bares destinados a su personal fuera del perímetro urbano, en prevención de atentados terroristas.

Bahrein se esfuerza para no parecer servil con los norteamericanos. Sus habitantes son ricos y viven cómodamente, pero se manifiestan contra Estados Unidos a la menor provocación. Para mantener un equilibrio en los asuntos políticos, el rey Hamad bin Isa al Jalifa cruzó el golfo en 2002 y realizó una visita formal a Irán, donde fue recibido por el presidente Mohamed Jatamí. Ésa fue la primera visita que un jefe de estado de Bahrein hizo a Teherán desde la revolución iraní, en 1979. ³⁷ Con o sin la 5.^a Flota, resulta claro que a Bahrein no le impresionó la declaración efectuada en enero de 2002 por el presidente George W. Bush, en la que citaba a Irán como parte del «eje del mal».

La marina heredó la base británica de Manama, por lo que los buques militares constituyen una presencia familiar en el lugar. La fuerza aérea es otra cuestión. En 1987, la fuerza aérea nacional empezó a construir una gran base aérea en la isla de Bahrein, situada a unos 32 kilómetros de Manama. La base aérea Jeque Isa se destinaba a su

única escuadrilla de combate. Todavía estaba inconclusa cuatro años después, al comienzo de la primera guerra del Golfo, cuando la infantería de marina norteamericana la tomó y los SeaBee de la marina la terminaron. A mediados de la década de 1990, la fuerza aérea de Estados Unidos amplió la base y, en 1997, trasladó allí a la 366.^a Escuadrilla Aérea Expedicionaria desde la base de la fuerza aérea de Mountain Home, en Idaho, con sus 1.200 efectivos y aeronaves tan avanzadas como los bombarderos B-1B, los cazas F-15 y F-16 y los aviones cisterna para repostar en vuelo KC-135. Con el fin de proteger a las 44 aeronaves de la escuadrilla, el Pentágono trasladó, asimismo, a los miembros de un batallón de antimisiles Patriot desde Fuerte Bliss, en Texas. En 2000, tanto la infantería de marina como la fuerza aérea se habían instalado de forma permanente en la base aérea Jefe Isa, aunque su presencia era un tema sobre el que el gobierno de Bahrein prefería no hacer comentarios.

Justo al sur de Bahrein se encuentra el rico país de Qatar. El jefe del estado, el emir, no rinde cuentas a nadie. Se rige únicamente por las tradiciones tribales y la ley islámica, y procura ante todo preservar los intereses feudales y económicos de su familia. Eso, sin embargo, no resulta fácil, debido a las presiones que existen en la actualidad sobre el reino, que posee una población que sobrepasa los ochocientos mil habitantes, el 80 por 100 de los cuales son trabajadores extranjeros, en su mayor parte árabes, pakistaníes, indios e iraníes instruidos. Gracias a la gran riqueza petrolífera de Qatar y a sus estupendas reservas de gas natural, los qataríes disfrutaron, en 2000, de una renta per cápita de alrededor de los 20.300 dólares, equivalente a la de los países más desarrollados. El alto nivel de vida entre la población general, que carece de vínculos firmes con Qatar o con la familia gobernante, supone la existencia de una agitación constante desde la base para acabar con la autocracia y para que el sistema político se abra a los cambios sociales.

Qatar formó parte de la coalición en contra de Irak durante las dos guerras del Golfo. En junio de 1992, otorgó a Estados Unidos el derecho de instalarse y situar su armamento allí, a cambio de la garantía implícita de recibir ayuda si el reino fuera atacado. Los temores de ese país no son abstractos. A pesar de que Qatar es mucho más grande y mucho más rico que Bahrein, los qataríes genuinos representan una minoría tan pequeña que el país corre el riesgo de ser tomado

por una potencia extranjera, de sufrir una revolución interior o de ambas cosas. Qatar comparte una frontera en disputa con Arabia Saudí, luchó contra Bagdad durante las dos guerras del Golfo y, con frecuencia, tiene conflictos con Irán. Espera que, al apoyar a Estados Unidos con discreción, al tiempo que lo critica públicamente, y al denunciar a Israel, mientras hace alarde de cuantiosas donaciones monetarias a los palestinos, logre contener la indignación popular. Su objetivo es conservar intactos los poderes dictatoriales de su pequeña élite gobernante durante el mayor tiempo posible.

El joven emir, el jeque Hamad bin Jalifa al Thani, después de destituir a su padre, un conservador, en un golpe incruento en junio de 1995, realizó un gesto significativo hacia la apertura, aunque no la democracia. Aceptó patrocinar lo que se transformaría en la fuente más influyente de noticias de los países musulmanes, la cadena de información por cable Al Jazeera (que significa «la península», o sea, Qatar), cuyos estudios se ubican en Doha, su capital. Arabia Saudí había expulsado del país a la BBC en 1996, por informar de asuntos tan controvertidos como las decapitaciones y la disidencia interna. Pocos meses después, el nuevo emir contrató a la mayor parte de los editores, periodistas y técnicos del Servicio Árabe de la BBC, que pasaron a constituir el núcleo de Al Jazeera. Su intención parece haber sido acabar con la censura en Qatar y, de ese modo, disminuir de alguna forma la presión de las reivindicaciones de apertura, sin llegar a la desestabilización del país. El emir dio, más tarde, una libertad casi completa a su cadena de televisión, desde el punto de vista periodístico. Hasta el momento, Al Jazeera ha sido criticada por prácticamente todos los países islámicos, desde Arabia Saudí hasta Argelia, además de, por supuesto, Israel. En octubre de 2001, el secretario de Estado Colin Powell y la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice solicitaron que el emir censurara las entrevistas en las que se sostuviera que la política exterior norteamericana era la responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al mes siguiente, Estados Unidos bombardeó la oficina de Al Jazeera en Kabul, Afganistán, al igual que atacaría su estudio de televisión en Bagdad durante la segunda guerra del Golfo. El emir continúa patrocinando Al Jazeera con la friolera de cien millones de dólares anuales —resulta difícil que aparezcan empresas anunciantes—, y la estación sigue emitiendo noticias de todo el mundo. Los únicos asuntos vetados son las entrevistas

tas con los disidentes políticos qataríes y los detalles de la política de bases estadounidenses en el emirato.³⁸

Entre las bases qataríes de las que se ha apropiado el Pentágono se encuentra uno de los mejores campos aéreos del Golfo, situado a 144 km al sur de Doha, en pleno desierto. A finales de la década de 1990, el gobierno de Qatar construyó, de hecho, la base aérea de al-Udeid, con un coste de 1.400 millones de dólares, con la intención de atraer a los norteamericanos, dado que resultaba evidente que éstos no mantendrían sus bases saudíes para siempre, y quizá de sobornarlos para que se convirtieran en protectores del país. Es la única base de Qatar que las autoridades permiten mencionar en la prensa. Su pista, de 4,5 km, es una de las más extensas de la región, y supera en mucho las necesidades de la poco más de una docena de aviones de caza que posee Qatar. El aeropuerto cuenta con búnkeres de hormigón armado para guarnecer hasta ciento veinte aviones de guerra.

La fuerza aérea estadounidense tragó el anzuelo con entusiasmo. Aunque el ejército tiene otra ubicación en Qatar, es en al-Udeid donde «preposiciona» su armamento, combustible, medicamentos, material médico y municiones. En marzo de 2002, la fuerza aérea empezó a construir en al-Udeid un centro de operaciones aéreas combinadas que, si bien no es tan avanzado como la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, podría servir de alternativa. Después del ataque a Afganistán, la fuerza aérea puso su propio dinero para finalizar todas las instalaciones de al-Udeid lo antes posible. En marzo de 2002, el vicepresidente Dick Cheney visitó el emplazamiento, lo que también hizo en junio el secretario de Defensa. La principal unidad de la fuerza aérea en el lugar es la 379.^a Escuadrilla Aérea Expedicionaria, compuesta de cazas F-15E y F-16, y de aviones cisterna KC-10, KC-130 y KC-135. Al-Udeid desempeñó un papel importante en la guerra de Afganistán, al ser la principal base para el abastecimiento de combustible de los aviones de caza que se dirigían a este país. La fuerza aérea calcula que los aviones cisterna de la 379.^a Escuadrilla suministraron casi cien mil toneladas de combustible sobre cielo afgano, cerca de la mitad de todo el que los cazas repostaron durante la guerra.³⁹

Al-Udeid también desempeñó un papel clave en el ataque a Irak de 2003, pues alojó a unos 6.500 efectivos de la fuerza aérea, aunque está diseñada para albergar hasta diez mil. El personal vive en una gran ciudad de tiendas en el desierto, a la que la fuerza aérea llama Camp

Andy, en homenaje al sargento mayor Evander Andrews, la primera baja de la operación de Afganistán, que murió a causa de un accidente con una carretilla elevadora. Resulta difícil decidir si los oficiales que escogen esos nombres están siendo empalagosos adrede o si se están quedando sin verdaderos héroes. Estaba previsto que para finales de 2003 la base de 1.200 hectáreas contara con un complejo residencial permanente, rebautizado como Expeditionary Village. En el verano de 2002, según una fuente bien informada, la primera piscina de al-Udeid ya había sido terminada, lo que acostumbra a ser una señal de que la fuerza aérea planea una larga estancia en la localidad.⁴⁰ Dyn-Corp, de Reston, Virginia, es la responsable del suministro de este y otros servicios recreativos, así como de recibir, almacenar, mantener y proteger el material bélico de al-Udeid, al igual que hace con las bases aéreas de Omán y Manama, en Bahrein.

Otras dos instalaciones en Qatar son Camp as-Sayliyah, ubicado en las afueras de Doha, y Camp Snoopy, en el aeropuerto internacional de Doha, que son dos emplazamientos de «preposicionamiento» del ejército para tanques y otros vehículos de combate, así como para el combustible y la munición correspondientes a una brigada acorazada completa. Se trata de instalaciones modernas, terminadas en el verano de 2000. Mientras que la mayoría de las bases situadas en la región del golfo Pérsico son costeadas por el país anfitrión, el congreso pagó, de hecho, un total de 110 millones de dólares para levantar estas dos. El gobierno de Qatar contribuyó únicamente con el suelo y los servicios públicos.

Durante la segunda guerra de Irak, Camp as-Sayliyah fue el cuartel general avanzado del comandante en jefe general Tommy R. Franks, quien, usando como tapadera unos ejercicios de instrucción militar, trasladó allí en diciembre de 2002 a unos 750 oficiales de la base aérea MacDill, en Florida, para que dirigieran la guerra desde las pantallas de los ordenadores y los videos ubicados en las tiendas con aire acondicionado. La base fue, asimismo, el emplazamiento del espectacular «Centro de Medios de Comunicación de la Coalición», que costó 1,5 millones de dólares; desde ese centro el general de brigada Vincent Brooks, el guapo portavoz afroamericano del CENTCOM con más de 1,90 m de estatura y cara de actor de Hollywood, presentó diariamente a centenares de periodistas sus videos editados.⁴¹ Michael Wolff, el corresponsal durante la guerra de la revista *New York*, describió

Camp as-Sayliyah como un «puro paisaje lunar. Sin ningún árbol ni arbusto. Apenas existe alguna estructura. Sólo el horizonte de piedra caliza plana. Entonces se encuentra uno con la base estadounidense, en realidad sólo un anillo de alambradas, y luego una tierra de nadie, tras la que está la base. La falta de escondites en todas las direcciones debe proporcionar un alto grado de seguridad, pero además la base está fortificada con medidas de protección extraordinarias, el máximo de la paranoia. Se encuentra hundida en el terreno. No sólo está defendida, sino que es defensiva». Tanto la guerra de alta tecnología como la extrema atención dedicada al control de la cobertura mediática eran lo último en materia de militarismo e imperialismo al estilo americano.

Parece que as-Sayliyah es el mayor lugar del ejército estadounidense en todo el mundo para «preposicionar» material bélico. Camp Snoopy es una instalación logística situada en el principal aeropuerto comercial de Qatar, y se encarga del envío de comida y otros suministros a las bases de todo el Golfo. Mientras que un alto muro interno y ametralladoras de calibre 0,5 defienden las quince hectáreas de as-Sayliyah y sus veintisiete almacenes, Camp Snoopy sólo está defendido por torres de guardia. En mayo de 2003, tras la derrota de Irak, el general Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Snoopy ya no era necesario, por lo que sería eliminado. El número de efectivos situados allí ya había caído de los mil ochocientos desplegados durante la guerra a sólo ochocientos.

El estado del Golfo al que menos atrae la presencia imperial de Estados Unidos es, sin duda, Emiratos Árabes Unidos. Situado al este de Qatar, tiene la particularidad de poseer un buen puerto marítimo en el golfo Pérsico y otro cerca del estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán. A pesar de todas sus ventajas, los Emiratos llegaron en 1994 a un acuerdo de cooperación para defensa con los norteamericanos, que proporcionaba a la fuerza aérea de Estados Unidos acceso a la base aérea al-Dhafra, a más o menos una hora de la capital, Abu Dabi. Estados Unidos ha utilizado esa instalación como punto de partida de los aviones U-2 tripulados y de los aparatos de reconocimiento no tripulados Global Hawk en sus ataques contra Irak, Irán y Afganistán, y allí guarda los aviones cisterna KC-10 de la 763.^a Escuadrilla Aérea Expedicionaria de Abastecimiento.

Cuando por primera vez la fuerza aérea se desplegó en los Emiratos Árabes Unidos, su personal se alojó en el centro de Abu Dabi, una

de las ciudades más sofisticadas de la región, en un edificio de viviendas denominado Residencia Sahara. No obstante, después de los atentados terroristas en Arabia Saudí, el Pentágono trasladó a todo su personal de Abu Dabi a la base aérea al-Dhafra. El Holliday Inn local suministra, como subcontratación, todas las comidas de los norteamericanos en el campo aéreo, incluso las destinadas a la tripulación de los aviones. En mayo de 2003, el Cuerpo de Ingenieros del ejército abrió una licitación para el edificio del cuartel general, los dormitorios, el comedor, el gimnasio y las instalaciones médicas, así como las carreteras y el aparcamiento de al-Dhafra, en lo que consistió una indicación más de que el Pentágono planeaba permanecer largo tiempo en el país.⁴²

Los Emiratos Árabes Unidos resultan también familiares a las tripulaciones de los grandes buques, dado que Jebel Ali, el puerto de la ciudad de Dubai, es el más frecuentado por la marina fuera de Estados Unidos. Los grupos de portaaviones de combate que patrullan el golfo Pérsico acuden allí con regularidad para repostar y reabastecerse de suministros, así como para los permisos de desembarco. Jebel Ali, quizá el centro comercial más importante del golfo Pérsico, tiene la mayor bahía del mundo construida por el hombre, con 67 atracaderos y extensos diques secos. Una buena carretera, que atraviesa los Emiratos, lo conecta con el puerto de Fujairah, en el golfo de Omán. La mayoría de los buques de carga procedentes de Japón y de Diego García se descargan en Fujairah, desde donde la carga es transportada en camiones a Jebel Ali o en avión a Bahrein. Esa ruta permite que las fuerzas del golfo Pérsico reciban suministros, en la eventualidad de que se cerrara el estrecho de Ormuz. Ningún puerto de los Emiratos cuenta con una presencia naval norteamericana permanente, aunque hay oficiales en los dos, para prestar asistencia a los navíos militares en tránsito.

El último y el menos característico de los estados del golfo Pérsico es Omán, y se localiza al este de los Emiratos Árabes Unidos. Con una renta per cápita de 7.700 dólares al año y una población de 2,5 millones de habitantes, de los cuales medio millón son extranjeros, es el más pobre de entre los pequeños estados del golfo. No posee tierras cultivables y sólo un 5 por 100 de su territorio sirve para el pastoreo. Las ventas de crudo constituyen el 80 por 100 de los ingresos obtenidos con las exportaciones, y el 40 por 100 del producto interior bruto.

El petróleo de Omán sólo fue descubierto en cantidad comercial en 1962, más tarde que en los demás estados de la región, y el coste de su extracción es bastante más elevado que el de sus vecinos. El país no pertenece a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, lo que es del agrado de Estados Unidos. Una de las razones por las que Omán acepta la presencia de las bases militares norteamericanas es que generan unos ingresos considerables, al tiempo que ayudan a diversificar la economía. Además, el servicio de inteligencia británico, el MI6, atrincherado en Omán durante décadas, recomendó los militares estadounidenses al sultán.

El Omán de hoy es lo que queda de un antiguo imperio árabe que, un día, se extendió hasta el mismo Zanzíbar, al sureste de la costa africana. Se sitúa justo enfrente de Irán, al otro lado del estrecho de Ormuz, y posee largas fronteras sin definir con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Yemen. El primer embajador norteamericano sólo llegó a la vieja ciudad de Muscat, su capital, en 1972. En 1980, a consecuencia de la caída del sha de Irán y la invasión soviética de Afganistán, Omán negoció un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. En 1990 ese acuerdo de cooperación militar fue renovado y ampliado. Hasta hace poco, Omán compraba la mayor parte de las aeronaves de su fuerza aérea a los fabricantes británicos, y en septiembre de 2001, de acuerdo con lo acordado con anterioridad a los atentados de ese mes en Nueva York y Washington, llevó a cabo un ejercicio conjunto a gran escala con 22.000 efectivos británicos en el desierto. En octubre de 2001, firmó un contrato con el Departamento de Defensa norteamericano para comprar doce aviones de caza avanzados F-16C/D por 1.120 millones de dólares. Al pueblo omaní no le agrada la subordinación militar del gobierno a Estados Unidos, pero el sultán, astutamente, ofrece más empleos y beneficios cada vez que las tensiones internas empiezan a parecer peligrosas.

Omán es una localidad importante para el «preposicionamiento» de equipamientos y suministros bélicos, y tanto el ejército como la marina y la fuerza aérea usan sus cuatro aeropuertos principales para que los aviones reposten, así como para la logística y las operaciones de inteligencia en el golfo Pérsico y el mar Árabe. La familia real de Omán sostiene que no existen bases militares extranjeras en el país, y que los norteamericanos están presentes únicamente en calidad de «invitados». No obstante, Omán está construyendo una nueva base aérea altamen-

te secreta en al-Musnana, a unos 128 km al oeste de Muscat, en el desierto, a un coste de ciento veinte millones de dólares. Estados Unidos sufraga los costes de la instalación, que contará con una pista capaz de recibir los bombarderos, cazas y aviones de carga norteamericanos más avanzados. Al-Musnana proporcionará, asimismo, el comando aéreo y las instalaciones de control. Cuando la base esté terminada, la fuerza aérea omaní trasladará sus aviones de caza desde Seeb, el aeropuerto internacional que sirve a la capital, a al-Musnana, y aumentará Seeb para que pueda acoger más tráfico civil.⁴³ Esa concentración de fuerzas estadounidenses en Omán podría representar un signo de hostilidad hacia Irán.

En Dhofar, en el extremo sur del país, cerca de la frontera yemení, se encuentra la base aérea Thumrait, un emplazamiento para «preposicionar» material bélico, y que asimismo guarda los aviones Hunter y Jaguar de fabricación británica pertenecientes a la fuerza aérea omaní. Durante la guerra del Golfo de 1991, se estacionó a la 1660.ª Escuadrilla de Transporte Aéreo Táctico de la fuerza aérea estadounidense en Thumrait. En abril de 1996, Estados Unidos envió un escuadrón Red Horse para ampliar la pista de despegue y la situada delante de los hangares, y en noviembre de 1998 el Pentágono trasladó al 28.º Grupo Aéreo Expedicionario de la fuerza aérea desde la base Ellsworth, en Dakota del Sur, a Thumrait. Tras el atentado del 12 de octubre de 2000 contra el destructor *Cole* en el puerto yemení de Adén, los 219 marinos supervivientes fueron evacuados a Thumrait, que queda al norte de Adén, a una distancia relativamente corta.

Un cuarto aeropuerto omaní se ubica en la isla de Masirah, en el mar Árabe. Omán ha permitido que Estados Unidos usara la base aérea de Masirah desde la segunda guerra mundial, la cual hoy es un emplazamiento más para el «preposicionamiento» del material bélico norteamericano y la sede de un escuadrón de patrulla de la marina, que cuenta con aviones de reconocimiento P-3 Orion y aparatos espía EP-3E Aries II, como el que realizó un aterrizaje forzoso en la isla china de Hainan el 1 de abril de 2001. Es uno de los cuatro únicos lugares del mundo que aloja un escuadrón permanente de espionaje de la marina, dotado de aviones P-3; los demás se ubican en Manama, en Bahrein; en la base aérea de Kadena, en Okinawa, y en Diego García. La isla de Masirah es un lugar remoto, y se considera un puesto difícil.

Esta compilación de las bases militares norteamericanas en la región del golfo Pérsico no es en absoluto completa. Desde diciembre de 2002 Estados Unidos está construyendo un nuevo emplazamiento para sus Fuerzas Especiales en la antigua colonia francesa de Yibuti, que se encuentra separada por una franja de agua de apenas 32 kilómetros del puerto de Adén, a la entrada del mar Rojo. Teníamos hace largo tiempo varios miles de efectivos estacionados en la base aérea de Incirlik, en Turquía, así como unos cincuenta cazas F-15 y F-16 y antitanques A-10, aunque, después de que Turquía se negara a permitir que Estados Unidos utilizara su territorio para el ataque de 2003 contra Irak, el Pentágono retiró enseguida la mayor parte de los mismos. Poseemos, igualmente, decenas de aviones en dos bases en Jordania, cercanas a la frontera iraquí, y hemos empleado a menudo la base aérea «Cairo West», en Egipto, para las operaciones de reabastecimiento y de transporte aéreo.

La mayoría de las bases militares en Oriente Próximo fueron adecuadas y equipadas específicamente para afrontar la segunda guerra de Irak, y fueron utilizadas durante la misma. Sin embargo, Irak no es más que una parte de un escenario más amplio. A lo largo del último medio siglo Estados Unidos ha estado adquiriendo enclaves militares permanentes, cuyo único propósito parece ser el dominio de una de las áreas de mayor importancia estratégica del mundo. Es evidente que Estados Unidos está interesado en el petróleo de la región, si bien los destacamentos de fuerzas de los portaaviones que ya han transformado el golfo Pérsico en un lago norteamericano serían suficientes para proteger esos intereses.

El despliegue permanente de soldados, marinos y aviadores estadounidenses, que poseen una cultura, un estilo de vida, una riqueza y una apariencia física que les garantiza el conflicto cultural con los pueblos de Oriente Próximo, es irracional según cualquier análisis de costes-beneficios. De hecho, dada la agitación política generalizada y el fuerte renacimiento del islamismo militante, Estados Unidos parece, inexplicablemente, estar buscándose futuros enemigos con resentimientos suficientes como para causarnos un daño considerable. No hace falta más que recordar que los norteamericanos armaron a Saddam Husein, o que proporcionaron alegremente los misiles Stinger portátiles a los guerrilleros afganos que al final se volvieron contra nosotros. La cuestión es: ¿se han convertido esas bases en un fin en sí mis-

mas? ¿Su propia existencia lleva a que Estados Unidos busque la manera de hacer uso de ellas? ¿El ataque contra Irak fue ocasionado por las acciones iraquíes, o por la capacidad militar que se encuentra en manos norteamericanas? Es posible que la causa última de la matanza del siglo XXI en Oriente Próximo sea el militarismo y el imperialismo norteamericanos, es decir, nuestro imperio de bases en sí.

¿Qué ocurrió con la globalización?

Toda guerra se basa en el engaño. Por consiguiente, cuando podamos atacar, hemos de parecer incapaces de hacerlo; cuando empleemos nuestras fuerzas, deberemos dar la impresión de que estamos inactivos; cuando estemos cerca, hemos de hacer creer al enemigo que estamos lejos; cuando estemos lejos, hemos de hacerle creer que estamos cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Fingir desorganización, y aplastarlo.

Sun Tzu, *El arte de la guerra* (500 a.C.)

SEGÚN LA LÓGICA DE SUN TZU, Bill Clinton fue, en realidad, un imperialista mucho más eficaz que George W. Bush. Durante el gobierno Clinton, Estados Unidos impuso su voluntad de manera indirecta a las demás naciones. El gobierno de George W. Bush, por el contrario, dejó a un lado todos los principios legitimadores y adoptó la posición de que la fuerza hace el derecho. La historia nos enseña que un país expansionista debe, al menos, disimular lo que hace si desea consolidar sus ganancias. Ha de fingir que explota a los débiles por su propio bien, o por su propia culpa, o como resultado de un proceso inevitable, más allá del control humano, o como consecuencia de la extensión de la civilización o de acuerdo con leyes científicas; lo que sea, excepto como resultado de la agresión deliberada por parte de una superpotencia.

Clinton enmascaró su política tras la bandera de la «globalización». Ésta demostró ser muy eficaz para convencer a las naciones ricas pero crédulas de que debían seguir las órdenes de Estados Unidos —por ejemplo, Argentina—, para desestabilizar a rivales en potencia

—como Corea del Sur e Indonesia, durante la crisis económica de 1997— y para proteger los intereses económicos internos —mantener los precios desmesurados de las empresas farmacéuticas norteamericanas con la excusa de estar defendiendo los «derechos de propiedad intelectual»—. En la década de 1990 los argumentos del libre mercado y la economía capitalista fueron empleados para disimular el poder hegemónico de Estados Unidos y hacerle parecer benigno o, al menos, natural e inevitable. Los principales agentes de ese imperialismo fueron Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Clinton, y su adjunto (en la actualidad rector de la Universidad de Harvard), Lawrence Summers. Estados Unidos gobernó el mundo, pero lo hizo de una forma tan cuidadosamente disimulada que consiguió un alto grado de aceptación en los países dominados.

George W. Bush, por el contrario, pasó al ataque frontal, basado en el empleo del inigualable poderío militar de Estados Unidos. Incluso antes del 11-S, la administración Bush había dado muestras evidentes de la unilateralidad de su posición ante mundo. Se retiró de importantes tratados internacionales, incluso de los que pretendían la prohibición de los misiles antibalísticos, el control de las emisiones de los gases de efecto invernadero o la creación de una corte internacional para juzgar los crímenes de guerra. Además, Bush proclamó abiertamente su adhesión a la doctrina de la guerra preventiva. Estados Unidos afirmó ser una nueva Roma, más allá del bien y del mal y sin las ataduras de las convenciones establecidas por la comunidad internacional. Afirmó, al atacar Irak en la primavera de 2003, que ya no necesitaba (o no le importaba) la legitimidad internacional, y que las fuerzas internas del militarismo dictaban su política externa. Esa posición tuvo como consecuencia el aislamiento internacional y la pérdida general de confianza en la política externa norteamericana. Tras dos años y medio de gobierno Bush, la mayoría de nuestros aliados nos había abandonado, nuestras fuerzas armadas estaban sobredimensionadas y ningún país del mundo ponía en duda que estábamos dispuestos a emplear la fuerza militar para solucionar cualquier problema.

Al final del gobierno Clinton, la globalización era el blanco de constantes ataques políticos provenientes de sus víctimas y de los aliados de éstas. Muchos de los que habían sido importantes partidarios de esa teoría, como el especulador internacional de divisas George Soros y el antiguo economista jefe del Banco Mundial, Joseph E. Stiglitz, soca-

aban entonces los principales dogmas de la misma. Con todo, la globalización no estaba muerta. El mundo, e incluso la administración Bush, todavía fingían que la Organización Mundial del Comercio aún importaba, que el libre mercado acabaría con la pobreza del Tercer Mundo y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial funcionaban tal como se suponía que debían hacerlo. Los banqueros, los industriales y los economistas seguían asistiendo a su conclave anual en Davos, Suiza, mientras aumentaba el proteccionismo en los países ricos y la pobreza en el resto del mundo.

El 11 de septiembre de 2001 marcó de algún modo el fin de la globalización. Mientras que la administración Clinton había abrazado con fuerza el imperialismo económico, la segunda administración Bush se comprometió de manera indiscutible con el imperialismo militar. El hecho de que el gobierno Bush adoptara como política las acciones militares preventivas unilaterales debilitó las reglas y normas internacionales de las que depende el comercio. Cada vez son más las personas que, desesperanzadas, se llevan las manos a la cabeza; e incluso quienes en un principio habían confiado en las soluciones globales de los problemas medioambientales y económicos internacionales ya no están tan seguros de ello. En la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo, en agosto de 2002, los delegados se pusieron pegatinas con la pregunta: «¿Qué hacemos con Estados Unidos?».

«La idea política central del imperialismo es que la expansión es el objetivo permanente y supremo de la política», escribió Hannah Arendt.¹ Eso es verdad para todos los imperios: lo atestiguan las guerras interminables de la antigua Roma, la dominación de Asia por los mongoles y los turcos otomanos, el saqueo del hemisferio occidental por España, la ambición de Napoleón de unir Europa bajo la bandera francesa, la búsqueda británica de nuevas oportunidades de inversión para sus capitalistas, el intento del Tercer Reich de conquistar espacio vital para su nación aria y ahora el insaciable apetito de bases militares de los americanos. El imperialismo no puede existir sin un poderoso aparato militar que subyugue y controle a los pueblos que le estorban, ni sin un sistema económico que financie un estamento militar costoso y en gran parte improductivo. Hasta el momento, me he concentrado en el aspecto militar del imperialismo estadounidense. Ahora quiero analizar la hegemonía *económica* que Estados Unidos

intenta ejercer sobre gran parte del mundo. Me propongo examinar la elaborada ideología del «neoliberalismo» que ha oscurecido los esfuerzos internacionales de Estados Unidos antes del triunfo del militarismo unilateral, y exponer cómo éste ha desplazado y desacreditado el liderazgo económico del país. Irónicamente, es muy probable que el imperio americano empiece a deshacerse por la esfera económica.

Tras la segunda guerra mundial, el poderío militar y las bazas económicas de Estados Unidos eran de tal magnitud que el país apenas encontró resistencia, excepto por parte de la Unión Soviética y de sus aliados y satélites. Desde el inicio de la guerra fría hasta alrededor de 1980, los países que eligieron no pertenecer ni al ámbito comunista ni al capitalista —el llamado Tercer Mundo— tenían cierto espacio para maniobrar, al provocar enfrentamientos entre las superpotencias. Éstas, aunque poseían armas de destrucción masiva, a menudo no se decidían a ejercer un control imperial directo sobre los países en disputa, pues temían que esto los impulsara a pasarse al otro bando. Asimismo, las naciones no alineadas poseían alguna libertad para probar diferentes caminos y arreglos para alcanzar el «desarrollo económico» de acuerdo con tradiciones culturales propias y con las normas de justicia distributiva que hubieran elegido. Se denominaba a esas naciones «subdesarrolladas», lo que quería decir que tenían poca industria y tecnología y que, no obstante, suministraban a los países desarrollados del norte productos agrícolas y materias primas. En teoría, éste era un comercio beneficioso para ambas partes, que terminaría por conducir el Tercer Mundo a la industrialización y le proporcionaría riqueza y verdadera soberanía.

Esa situación empezó a cambiar a principios de la década de 1980. A medida que Estados Unidos y la Unión Soviética se acostumbraron a sus respectivos papeles en el complicado ballet de la distensión y el control armamentístico, la amenaza de una guerra entre las dos superpotencias se redujo. Además, ambos países empezaron a dar muestras de fatiga económica a medida que la guerra fría se estancaba. La URSS, bastante más pobre que Estados Unidos, fue con mucho la más afectada, puesto que la rigidez de su doctrina económica constituía un obstáculo para el espíritu empresarial y la innovación industrial. Pese a que la URSS era todavía una potencia militar importante, su economía se fue dividiendo en un sector oficial, por un lado, y un sector

informal o «sumergido», por otro; sin este último, la URSS se hubiera derrumbado mucho antes. A partir de mediados de la década de 1980, el primer ministro Mijail Gorbachov intentó reformar la debilitada economía del país; sin embargo, su iniciativa sería finalmente socavada por intereses creados profundamente arraigados. Estados Unidos conocía la existencia de estos problemas, pero en los análisis de sus servicios de inteligencia fingió no haberse percatado de ellos para así poder continuar inyectando dinero en su propia maquinaria militar.

A pesar de que la Unión Soviética había dejado de ser un rival económico, Estados Unidos y sus aliados llevaban algún tiempo preocupados por otros acontecimientos. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que contenía las normas que regían la apertura del comercio mundial, fue diseñado por Estados Unidos y el Reino Unido a finales de la segunda guerra mundial, y posteriormente firmado por unos veintiún países, y había propiciado un crecimiento espectacular del comercio internacional. (El propósito del GATT era evitar la reaparición del nacionalismo económico y el desplome del comercio internacional que habían ocasionado la Gran Depresión y contribuido de forma directa al surgimiento de los regímenes totalitarios en Europa y Asia.) Entre 1948 y 1995, cuando la Organización Mundial del Comercio sustituyó al GATT, los intercambios comerciales mundiales habían pasado de los 124.000 millones de dólares a los 10.772 billones.² Este sistema fue estupendo para Estados Unidos, en la medida en que su balanza comercial se mantuvo positiva y el país pudo dictar las reglas según las cuales los demás participaban de los buenos tiempos.

El decenio de 1970, sin embargo, había dado inicio a un período de cuestionamiento respecto hacia dónde se dirigía el mundo capitalista. Las economías americana y británica se vieron aquejadas por la «estagflación» (altas tasas de inflación, combinadas con un bajo crecimiento económico), las elevadas tasas de desempleo, los elevados déficit del sector público, dos grandes crisis del petróleo (resultado del intento por parte de los países productores de influir en las políticas de los países consumidores), los conflictos raciales y, en el caso de Estados Unidos, la derrota de Vietnam. Y, lo que resultaba igualmente inquietante, a mediados de la década de 1980 Japón había desplazado a Estados Unidos como principal país acreedor del mundo, y el país norteamericano se habían convertido en el mayor deudor del planeta,

debido a su déficit fiscal y a la incapacidad para cubrir los costes de sus importaciones.

Estas circunstancias propiciaron el ascenso de los partidos conservadores y de sus líderes —Ronald Reagan y Margaret Thatcher— en Estados Unidos y el Reino Unido. Para reactivar el comercio internacional y, sobre todo, devolver a Estados Unidos el control del mismo, los nuevos gobiernos se comprometieron a resucitar la teoría fundamentalista del capitalismo del siglo XIX. Esto significaba evitar la participación del Estado en la economía todo lo que fuera posible, abrir los mercados internos, al menos en principio, al comercio internacional y la inversión extranjera, privatizar la inversión en servicios públicos y recursos naturales, acabar con las leyes laborales más proteccionistas, legislar para establecer importantes garantías internas e internacionales acerca del derecho a la propiedad privada, y en particular el «derecho a la propiedad intelectual» (es decir, las patentes de todo tipo), y poner en vigor políticas fiscales conservadoras, incluso a costa de la salud y el bienestar públicos. Se suponía que este programa, que enseguida se transformó en el pensamiento económico dominante en ambos países, tendría como consecuencia «una mejora generalizada de los ingresos medios», tal como lo expresó Bruce R. Scott, de la Escuela de Negocios de Harvard. Su argumentación proseguía: «Las empresas cosecharán mayores economías de escala en un mercado más amplio, y las rentas convergirán, puesto que los países pobres crecen más deprisa que los ricos. Según este punto de vista, en que las dos partes ganan, la importancia de los estados-nación se debilita a medida que la “aldea global” crece y la integración de los mercados y la prosperidad toman el mando».³

Dado que la nueva ortodoxia derivaba de las ideas de economistas ingleses y escoceses como Adam Smith y David Ricardo, asociados al «liberalismo» político de los siglos XVIII y XIX, su credo recibió con frecuencia el nombre de «neoliberalismo». En los círculos políticos la nueva ley económica pasó a ser conocida como el «consenso de Washington»; entre los académicos, se la llamó «economía neoclásica», y entre el público, «globalismo» o, de una forma más activa, «globalización». Uno de los principales especialistas académicos en el tema, Manfred Steger, opina que la globalización no era más que «un gigantesco y nuevo empaque» para dos siglos de liberalismo clásico etiquetados como «la nueva economía». Steger escribió: «Desde el punto de vis-

ta conceptual, las afirmaciones y maniobras políticas de la globalización siguen ligadas al ... discurso decimonónico sobre la “modernización” y la “civilización” que presenta a los países occidentales —en especial a Estados Unidos y el Reino Unido— como la vanguardia privilegiada de un proceso evolutivo aplicable a todos los países».⁴

Quizá el aspecto más engañoso de la globalización haya sido su pretensión de encarnar desarrollos tecnológicos fundamentales e inevitables, y no tanto los propósitos conscientes de las élites políticas angloamericanas que intentaban promover los intereses de sus propios países a costa de los demás.⁵ Con su cientificismo espurio, el globalismo ha demostrado ser semejante al marxismo, cuyas raíces provienen del mismo terreno intelectual. Tal como señala Steger: «Aunque disienten de los marxistas en su concepción del objetivo final del desarrollo histórico, los globalizadores comparten con sus adversarios ideológicos la afición por palabras como “irresistible”, “inevitable” e “irreversible”, que utilizan para describir el proyectado camino de la globalización».⁶ En 1999, el presidente Bill Clinton dijo en público: «Debemos adoptar hoy la lógica inexorable de la globalización: que absolutamente todo, desde la fortaleza de nuestra economía hasta la seguridad de nuestras ciudades y la salud de nuestra gente, depende de acontecimientos que ocurren no sólo dentro de nuestras fronteras, sino a medio mundo de distancia». Y en otras ocasiones, subrayó, en efecto, que la globalización era «irreversible».⁷ Su sucesor, George W. Bush, ha continuado impulsando esta misma panacea ante una Latinoamérica reacia mediante su proyecto de un «Área de Libre Comercio de las Américas».⁸

El distinguido diplomático Oswaldo de Rivero, embajador de Perú en la Organización Mundial del Comercio, se percató del marxismo al revés que entraña el globalismo patrocinado por EE.UU. De Rivero escribió al respecto: «La guerra ideológica entre el capitalismo y el comunismo durante la segunda mitad del siglo XX no fue un conflicto entre dos ideologías completamente diferentes. Fue, más bien, una guerra civil entre dos puntos de vista extremos acerca de la misma ideología occidental: la búsqueda de la felicidad a través del progreso material que la revolución industrial había generalizado».⁹ Como funcionario de un gobierno de una parte del mundo devastada por la globalización, De Rivero concluyó que «el coste de la versión soviética del desarrollo fue la escasez y la falta de libertad; hoy, el coste

de la variante capitalista y neoliberal es el desempleo y la exclusión social». ¹⁰

Los defensores del globalismo, en especial los economistas académicos y los científicos políticos, se aferran a él con un fervor religioso. El teólogo Harvey Cox ha llamado la atención sobre esa devoción en un artículo titulado «El mercado como Dios». ¹¹ Muchos líderes políticos y empresariales de Estados Unidos, sensatos en otros aspectos, se han dejado arrastrar por las proclamas mesiánicas de la globalización. Este fenómeno tampoco es nuevo. El liberalismo clásico cegó a no pocos ingleses con respecto al racismo, el genocidio y la explotación implacable que acompañaron el crecimiento del Imperio Británico. Tal como señaló Hannah Arendt acerca de este temprano período de adoración del mercado: «El hecho de que “la responsabilidad de los blancos” sea hipocresía o racismo no ha impedido que algunos de los mejores ingleses se tomaran en serio tal responsabilidad e hicieran el papel de los tontos trágicos y quijotescos del imperialismo». ¹²

Es fundamental comprender que la doctrina del globalismo es una especie de sedante intelectual que adormece y distrae a sus víctimas en el Tercer Mundo mientras los países ricos las paralizan, con lo que éstos garantizan que sus poderes imperiales nunca serán desafiados. Asimismo, el globalismo es una teoría diseñada para persuadir a los nuevos imperialistas de que los países «subdesarrollados» son la causa de su propia pobreza, debido al «capitalismo de amigotes», la corrupción y la incapacidad para aprovecharse de las espléndidas oportunidades que se les ofrecen. La afirmación de que los mercados libres conducen a la prosperidad a otros que no sean las empresas multinacionales, que presionaron para conseguirlos y que poseen la influencia y los recursos para manipularlos, sencillamente no se sostiene de acuerdo con los datos históricos. Se trata de algo que ha llegado a reconocer incluso Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel de economía y ex economista jefe del Banco Mundial: «Hoy es un lugar común decir que los acuerdos sobre el comercio internacional, de los que Estados Unidos habló con tanto orgullo hace unos años, eran sumamente injustos con los países del Tercer Mundo. ... El problema [con los globalizadores es] ... su ideología fundamentalista acerca del mercado, la fe en los mercados libres y sin trabas a la que no respaldan ni la teoría moderna ni la experiencia histórica». ¹³ Es necesario añadir que, hasta noviembre de 1999, cuando cincuenta mil personas se manifestaron en Seattle

contra la Organización Mundial del Comercio, y empezaron a forzar al Primer Mundo a reconocer su explotación e hipocresía, declaraciones como la efectuada por Stiglitz no eran en absoluto un «lugar común», ni tampoco la teoría académica económica «moderna» había llegado a enfrentarse con la naturaleza real del globalismo.

No se ha verificado ningún caso en el que la globalización haya llevado la prosperidad a un país del Tercer Mundo, al igual que ninguna de las veinticuatro naciones capitalistas razonablemente desarrolladas del mundo llegaron a donde están, con independencia de sus posiciones ideológicas, al seguir cualquiera de las prescripciones que contiene la doctrina de la globalización. La globalización, sostiene De Rivero, no ha producido ningún «país recientemente industrializado» (NIC), pero sí alrededor de ciento treinta «economías nacionales no viables», o, lo que aún es peor, «entidades caóticas ingobernables». ¹⁴ Existe alguna que otra prueba de que este resultado era precisamente el que buscaban los autores de la globalización.

En 1841, el eminente economista político alemán Friedrich List (que había emigrado a Estados Unidos) dijo en su obra maestra *Sistema Nacional de Economía Política*: «Una conducta muy frecuente e inteligente consiste en que, cuando alguien alcanza la cumbre de la grandeza, tira de una patada la escalera por la que subió, con el fin de privar a los demás de los medios para que puedan subir detrás». ¹⁵ Gran parte de la economía moderna angloamericana y la totalidad de la teoría de la globalización son intentos de disimular esa patada a la escalera.

Si dejamos a un lado la antigua Unión Soviética, los principales países desarrollados —el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Holanda, Suiza, Japón y los NIC del este asiático (Corea del Sur, Taiwán y Singapur)—, todos se hicieron ricos más o menos de la misma forma. Con independencia de cómo justificaban sus políticas, en la práctica protegieron su mercado interno por medio del muro de los altos aranceles aduaneros y de una multitud de «barreras no aduaneras» al comercio. Gran Bretaña, por ejemplo, no aceptó el libre comercio hasta la década de 1840, mucho después de haberse convertido en la mayor potencia industrial del mundo. Entre 1790 y 1940, Estados Unidos poseía, probablemente, la economía más protegida del mundo. En los decenios de 1970 y 1980, el único país del mundo sin un solo coche japonés era Corea del Sur, porque estaba protegiendo su propia industria automovilística. Todos esos países «en

desarrollo» pidieron, compraron o robaron tecnologías avanzadas a los países que primero las tuvieron, y después, por medio de ingeniería inversa e inversiones dirigidas, las perfeccionaron. Utilizaron el poder del estado para apoyar y proteger a los capitalistas eficaces dentro de sus propias fronteras nacionales, siempre que tenían la posibilidad de convertirse en exportadores. Inyectaron subsidios en las industrias no competitivas con el fin de sustituir la importación de bienes por la producción doméstica, con frecuencia a casi cualquier precio. Algunos tomaron los mercados de ultramar a través de las conquistas imperiales y el colonialismo, y luego los defendieron de otros posibles conquistadores mediante sus poderosos ejércitos y armadas. Incluso cuando habían sido derrotados, como fue el caso de Japón tras la segunda guerra mundial y de la URSS y los países ex comunistas de la Europa del Este tras la guerra fría, emplearon todos los artificios y estratagemas a su alcance para subvertir los programas de reformas económicas que los estadounidenses intentaban hacerles aplicar para transformarlos en economías capitalistas de libro de texto.¹⁶ Comprendieron, a diferencia de los academicistas, que la introducción prematura de las normas económicas americanas probablemente conduciría más a un capitalismo mafioso que al desarrollo, tal como ocurrió con Rusia.

En síntesis, las pocas economías exitosas del mundo hicieron exactamente lo contrario de lo que los gurús de la globalización les decían que debían hacer. En los lugares donde los responsables de la economía no tuvieron más elección que seguir las directrices de la globalización —el «libre» mercado, la venta de las empresas de servicios públicos, la ausencia de control sobre los movimientos de capital, el fin de toda preferencia nacional— los resultados han sido catastróficos. En el Perú del propio De Rivero, durante los veinticuatro años que precedieron a la gran explosión de la violencia terrorista de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Túpac Amaru, el crecimiento medio de la renta per cápita anual fue del 0,1 por 100, mientras que el incremento anual de la población fue superior al 2,3 por 100. Entre 1960 y 1980, en toda Latinoamérica y el Caribe el producto interior bruto creció un 75 por 100 por persona, mientras que, en los siguientes 20 años —durante la gran marea de la globalización— el PIB sólo se incrementó en un 6 por 100.¹⁷

A partir de 1981, aproximadamente, Estados Unidos introdujo, bajo el pretexto de la globalización, una nueva estrategia destinada

a conseguir dos objetivos principales: en primer lugar, desacreditar el capitalismo apoyado por el estado, como el de Japón, e impedir que se extendiera a otros países que no fueran los NIC del este asiático, que ya se habían industrializado siguiendo el modelo japonés, y en segundo lugar, debilitar la soberanía de los países del Tercer Mundo para hacerlos aún más dependientes de la generosidad de los países desarrollados e incapaces de organizarse como un bloque de poder para negociar de manera equitativa con los países ricos.

Los instrumentos elegidos por Estados Unidos para poner en funcionamiento esta estrategia fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Del mismo modo que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Banco Mundial y el FMI fueron creados después de la segunda guerra mundial para dirigir la economía internacional y evitar el retorno de las políticas de «empobrecer al vecino» de la década de 1930. Es fundamental comprender que tanto el uno como el otro son, en realidad, vicarios del Tesoro estadounidense. Los dos están situados en Washington, exactamente en la misma calle, frente a frente, y sus reglas de votación garantizan que no puedan hacer nada sin la aprobación del secretario del Tesoro estadounidense. El politólogo Thomas Ferguson compara el FMI con el famoso perro de los viejos anuncios de la RCA, que escucha «la voz de su amo» —el Tesoro— en un gramófono.¹⁸

Además del GATT, el FMI y el Banco Mundial, los reformadores económicos de la posguerra crearon un sistema verdaderamente innovador de tasas de cambio fijas entre las monedas de todos los países capitalistas, de forma que, por ejemplo, el dólar estadounidense pudo cambiarse, desde 1949 hasta 1971, por exactamente trescientos sesenta yenes japoneses. Este sistema resultaba creíble al vincular el valor de cada divisa con el dólar estadounidense, y por la garantía ofrecida por los americanos de que, en última instancia, todos los dólares podrían cambiarse por oro. Las tasas de cambio fijas incrementaron los negocios internacionales, pues hacían que las transacciones comerciales fueran estables y previsibles, y al mismo tiempo constituyeron un importante obstáculo al retorno de la ruinosa especulación que había desembocado en la Gran Depresión.

Según ese sistema, el FMI se encargaba de otorgar préstamos para corregir los desequilibrios ocasionales entre la divisa de un país y la de sus socios comerciales (o, en raras oportunidades, para ayudar a mo-

dificar una tasa de cambio fija en un sentido más realista), y el Banco Mundial tenía la responsabilidad de otorgar préstamos para el desarrollo a los países que necesitaban invertir en infraestructuras e industrias incipientes, con la esperanza de que alcanzaran el nivel de los países desarrollados. El economista inglés John Maynard Keynes fue quien primero formuló las ideas que se encontraban tras esas instituciones, y al final de la segunda guerra mundial los principales aliados discutieron a fondo los compromisos necesarios para ponerlas en práctica. Estados Unidos no aceptó todas las propuestas de Keynes, y las objeciones de este país prevalecieron en gran parte debido a su gran poder y riqueza; sin embargo, tanto Estados Unidos como el Reino Unido estuvieron de acuerdo en que los gobiernos ilustrados mantuvieran el orden económico mundial. El mercado no era el «rey». Era, sencillamente, un medio convencional y ampliamente aceptado para que individuos, hogares y empresas intercambiaran bienes y servicios a precios aceptables para las dos partes. El sistema de tasas de cambio fijas, un organismo para los ajustes de las divisas y un prestamista para el desarrollo económico de los pobres, produjo unos magníficos resultados durante sus primeros veinte años.

En 1971, no obstante, Estados Unidos ya no fue capaz de garantizar el valor fijo del dólar en oro. Había arruinado sus finanzas públicas con el gasto desmesurado en la guerra de Vietnam, las armas nucleares y los sistemas de lanzamiento de las mismas, así como en los pagos a aquellos países que, temía, podían unirse a los comunistas o «volverse neutrales» si dejaba de financiarlos. Con el fin de detener la hemorragia de dólares, el presidente Richard Nixon cerró la «ventana del oro» norteamericana y acabó con el sistema de tasas de cambio fijas. A partir de entonces, se permitió que las monedas de los distintos países «fluctuaran» y que sus valores se fijaran diariamente, de acuerdo con la oferta y la demanda, en los mercados internacionales de divisas. Con las tasas de cambio fluctuantes, el mercado en efecto se convirtió en el rey, y los gobiernos pasaron a un segundo plano. El FMI y el Banco Mundial poco pudieron hacer en lo que quedaba de la década.

El fin de las tasas de cambio fijas alentó las inversiones de riesgo y la especulación. Puesto que los beneficios que podían alcanzar eran inmensos y los costes, bajos, los bancos norteamericanos empezaron a efectuar «sobrepéstamos» (es decir, préstamos muy superiores a las garantías subsidiarias o a sus propias reservas) a los países del Tercer Mun-

do. Algunos bancos, como el Citicorp y el Bankers Trust, pronto estaban obteniendo casi el 80 por 100 de sus ingresos a partir de las transacciones de alto riesgo en el extranjero.¹⁹ Muchos préstamos fueron a parar a regímenes corruptos y dictatoriales, que tenían escasa posibilidad de devolverlos. Sin embargo, los bancos supusieron que era poco probable que los gobiernos de los «países en desarrollo» quebraran, y que, si lo hacían, alguna institución internacional les sacaría del apuro.

Eso generó el extraño fenómeno del «riesgo moral», es decir, los banqueros estadounidenses podían otorgar préstamos escandalosamente irresponsables sin el menor peligro de tener que asumir la pérdida o resarcir el dinero que habían administrado mal. Antes de que acabara la década, la bonanza de préstamos de los años setenta ocasionó precisamente el tipo de desastre que Keynes y los reformadores económicos habían intentado evitar al final de la segunda guerra mundial. Prácticamente todos los países de África y Latinoamérica se encontraban profundamente endeudados. En agosto de 1982, el ministro de Finanzas mexicano, Jesús Silva Herzog, comunicó que su país estaba en quiebra y que no podría seguir pagando los intereses de sus préstamos. Tal como habían previsto los banqueros, el gobierno de Estados Unidos actuó, no para salvar a México, sino para asegurarse de que los bancos norteamericanos no se hundieran. En ningún momento, ni entonces ni después, nuestro gobierno sugirió que las personas que habían aprobado los préstamos tenían alguna responsabilidad por los resultados de los mismos.

A principios de la década de 1980, tras el desastre de los préstamos, Estados Unidos encargó al FMI y al Banco Mundial la cuestión de la deuda del Tercer Mundo, y les dio, en esencia, dos instrucciones: mantener a los países deudores desembolsando algo, para evitar el incumplimiento oficial de los pagos, y sacarles todo el dinero posible. Las dos instituciones, casi moribundas, aceptaron con júbilo su nuevo papel, encantadas de actuar como agencias recaudadoras de los bancos que habían efectuado malos préstamos. Así nacieron los «préstamos de ajuste estructural» del Banco Mundial y los «programas de ajuste estructural» del FMI.

De acuerdo con el ajuste estructural, el Banco Mundial presta fondos a un país deudor de modo que éste pueda continuar pagando el «servicio» de la deuda (los intereses) en pequeñas cantidades, pro for-

ma. No obstante, como condición para recibir el préstamo, el FMI impone al país una drástica revisión socioeconómica según el programa neoliberal. En el caso de que un país deudor no acepte estos términos, se le niega todo acceso al capital internacional, con lo que se desestabiliza todavía más su economía y, quizá, se le prepara para un golpe de estado incitado por la CIA. El derrocamiento de Salvador Allende en Chile, en 1973, y el establecimiento de la dictadura militar del general Augusto Pinochet constituyen un ejemplo temprano y clásico de este proceso, si bien han sucedido muchos otros casos después. Muy pronto, todo el Tercer Mundo cayó bajo la supervisión de los ideólogos económicos del FMI, y a finales del decenio de 1990 cerca de noventa países estaban sufriendo «ajustes estructurales» a través de la terapia de choque ordenada por Washington.²⁰

En un programa de ajuste estructural usual, el FMI y el Banco Mundial exigen al país que «liberalice» sus transacciones comerciales, es decir, que dé a los extranjeros libre acceso a su economía. También obligan al país a reducir las inversiones en programas sociales, como la atención sanitaria y la educación, con el fin de liberar fondos públicos para la devolución de los préstamos a los bancos extranjeros y las empresas multinacionales. Se eliminan los subsidios a la agricultura local, lo que suele convertirlas en poco rentables, mientras que se aumentan las subvenciones a aquellos cultivos destinados a la exportación, como las flores y las frutas. El FMI insiste en que el país abandone todo control sobre los movimientos de capital y permita que los inversores y empresas extranjeros compren sus empresas de servicios públicos estatales, como las compañías de energía eléctrica, telefonía, transporte, recursos naturales y energía. Lo que aún es más importante, el país que esté recibiendo un préstamo del Banco Mundial ha de aceptar mantener la convertibilidad de su divisa, es decir, no puede prohibir que se cambie su moneda por la de otro país, lo que detendría transitoriamente la salida de capitales. Por el contrario, mantener la libre convertibilidad, con independencia de la tasa de cambio, posibilita la especulación con el futuro valor de la divisa. Lo que un país obtiene con esa mezcla de «reformas» no es la recuperación económica, el crecimiento a largo plazo o la estabilidad, sino un gobierno tan debilitado que es usual que derive en «cleptocracia» y atraviese colapsos económicos periódicos precipitados por la especulación desenfrenada (México, 1994-1995; Tailandia, Corea del Sur e Indone-

sia, 1997; Brasil y Rusia, 1998; Argentina, 2000; Venezuela, 2002), además de verse forzado a contar con empresas norteamericanas para el suministro de prácticamente todos los productos de consumo, puestos de trabajo e, incluso, servicios públicos.²¹

Estados Unidos fue el arquitecto y principal beneficiario de estos esfuerzos. De 1991 a 1993, Lawrence Summers fue el economista jefe del Banco Mundial y el hombre que supervisó la confección de las «medidas de austeridad» que debían efectuar los países que necesitaban préstamos. Él decidía exactamente qué tenía cada país que a Washington pudiera interesarle tener acceso. El 12 de diciembre de 1991, Summers se hizo famoso debido a la filtración de un memorando interno dirigido a altos funcionarios del banco, en el que animaba a que las industrias contaminantes de los países ricos se trasladaran a los países menos desarrollados. Summers había escrito en él: «Pienso que la lógica económica que hay detrás de la idea de deshacerse de un montón de basura tóxica vertiéndola en los países con los salarios más bajos es impecable, y que deberíamos afrontarla». El secretario de Medio ambiente de Brasil, Jose Lutzenburger, contestó: «Lo mejor que le podría pasar al Banco sería desaparecer».²²

Mientras tanto, en Washington, al otro lado de la ciudad, Jeffrey Garten, subsecretario de Comercio en el gobierno Clinton y otro de los autores de esos planes, explicó en el Departamento de Comercio: «Teníamos una misión: [Ron] Brown [secretario de Comercio] la llamó la “diplomacia comercial”, es decir, la intersección de la política exterior, el poder gubernamental y las transacciones comerciales. Empleamos el poder oficial de Washington para lograr que las empresas abrieran mercados en el exterior con mayor facilidad. La atmósfera estaba cargada de electricidad: montamos una “sala de guerra” económica y construimos un centro de operaciones donde se le seguía la pista a los principales proyectos comerciales del mundo». Garten reconoció que numerosas transacciones comerciales involucraban información confidencial proporcionada por altos funcionarios gubernamentales y eran, con toda probabilidad, poco limpias, aunque se justificó con el siguiente argumento: «Cuando se abre un bazar salvaje, tal como hicimos nosotros, es de esperar que aparezca algún ratero de vez en cuando».²³

Se puede ilustrar lo que esos rateros consiguieron con la difícil situación de Filipinas. Entre 1980 y 1999, el país recibió nueve préstamos para ajustes estructurales del Banco Mundial y seis préstamos del

FMI para resolver problemas de la balanza de pagos. Entre 1983 y 1993, registró exactamente un crecimiento medio cero del PIB.²⁴ Dos décadas después del primer programa de ajuste estructural, el Banco Mundial renunció a los préstamos por la sencilla razón de que, en palabras de Walden Bello, profesor de la Universidad de Filipinas, «resultaba imposible seguir negando el fracaso, el espectacular fracaso, sin perder por completo la credibilidad institucional».²⁵

Lo que había empezado en la década de 1980 como un programa de medidas de emergencia para los países endeudados se transformó poco a poco en la rígida ortodoxia del «consenso de Washington» de la década de 1990. El gobierno de Estados Unidos tomó la determinación de imponer la economía neoliberal a todos los países del mundo. Para ello, desveló su plan maestro, las negociaciones sobre el comercio internacional de la «Ronda de Uruguay» (1986 a 1994), y su joya de la corona, la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995. Al actuar de acuerdo con lo que parecía un intento inocente de crear un conjunto común de normas para el comercio y de, por primera vez, incluir la agricultura en esa reglamentación, «muchos países en desarrollo descubrieron que, al firmar su adhesión a la OMC, habían renunciado a su derecho al desarrollo», tal como lo expresó Bello.²⁶

Es necesario comprender que no había necesidad de crear la OMC. No existía ninguna crisis del comercio internacional entre 1986 y 1994 que fuera necesario rectificar. El comercio internacional se expandía tranquilamente con la fórmula del GATT. La OMC fue creada porque Estados Unidos descubrió que podía hacerlo. Tenía dos objetivos en concreto: procurar administrar la creciente rivalidad comercial entre los principales países industrializados, en especial entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, e impedir que el Tercer Mundo empleara el comercio como un instrumento legítimo para lograr su industrialización, y que, en consecuencia, amenazara la estructura económica neoliberal global. Estados Unidos alcanzó este último propósito por medio del Acuerdo sobre la Agricultura y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, dos de los pactos que la Ronda de Uruguay entregó en 1995 a la OMC para que ésta los pusiera en práctica.

Con anterioridad a la Organización Mundial del Comercio, la agricultura, a todos los efectos, se había mantenido fuera del ámbito

del GATT, dado que Estados Unidos siempre había amenazado con retirarse del mismo si no se le permitía continuar protegiendo su producción interna de azúcar, lácteos y otros productos agrícolas. Para evitar resquebrajarse, el GATT sencillamente decidió no aplicar ninguna norma a la agricultura. Sin embargo, en la década de 1970 Europa ya se había transformado en exportadora neta de alimentos, y la competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, las dos superpotencias agrícolas, era cada vez más feroz. Ambos deseaban forzar al Tercer Mundo a abrirse a sus exportaciones agrícolas, pues éste representaba un nuevo mercado. Para conseguirlo, necesitaban apartar del negocio a los agricultores de los países pobres y sustituirlos por las gigantescas empresas agrícolas. En las negociaciones agrícolas de la Ronda de Uruguay, la Unión Europea y Estados Unidos excluyeron a todos los representantes del Tercer Mundo y acordaron entre los dos las reglas concernientes a la agricultura. Con el Acuerdo de Blair House de 1992-1993, prohibieron al Tercer Mundo proteger su agricultura, pero eximieron de tal interdicción sus propios subsidios, que ya se encontraban en vigor antes de la conclusión del acuerdo. Como era de esperar, tuvo lugar un gran aumento de las importaciones agrícolas en los países en vías de desarrollo, sin que hubiera a cambio un aumento significativo de sus exportaciones. Esta intrusión desencadenó grandes cambios en el Tercer Mundo: los trabajadores del sector agrícola perdieron sus empleos y se desplazaron en masa a los centros urbanos, la concentración de la propiedad de la tierra aumentó drásticamente y la violencia rural se elevó a medida que los agricultores intentaban proteger su estilo de vida.

A finales del decenio de 1990, con el Programa Agrícola Común de la Unión Europea, los quince países de la UE acordaron destinar cuarenta y dos mil millones de dólares anuales a subvencionar a sus agricultores, al tiempo que asignaban sólo treinta mil millones al Tercer Mundo en concepto de ayudas al desarrollo de todo tipo. El importe total de las subvenciones a la agricultura en los países occidentales pasó de 182.000 millones de dólares en 1995, cuando se creó la OMC, a 280.000 millones en 1997 y 362.000 millones en 1998. En 2002, los subsidios concedidos por la Unión Europea a la agricultura fueron seis veces superiores al importe total de la ayuda externa que todos los países ricos prestaron a los pobres.²⁷ En el Primer Mundo, esto redundó en el exceso de producción de una extensa gama de productos agrí-

colas, entre ellos, cereales, carne de res y de cerdo, leche, mantequilla, tomates, aceite de girasol y azúcar. Estos bienes inundaron sin disimulo los mercados de los países en desarrollo donde fueron vendidos a un precio inferior al coste de producción. La conclusión de Joseph Stiglitz es inevitable: «Los países ricos, que alaban oficialmente el libre comercio, utilizan a menudo los aranceles aduaneros y los subsidios para limitar las importaciones provenientes de los países pobres, a los que privan de esa forma del comercio que necesitarían para remediar la pobreza y conseguir su propio crecimiento económico».²⁸

Tras haber privado a los países del Tercer Mundo del acceso a las subvenciones agrícolas y entorpecido su capacidad para levantar industrias competitivas, la OMC pasó a impedirles el empleo de la tecnología extranjera de la que hacen uso los países industrializados y a blindar los beneficios monopolistas de las empresas que poseyeran patentes de productos indispensables, como los medicamentos. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que instituyó esas barreras, resultó ser una mina de oro para las empresas multinacionales. Tenía como propósito impedir que los países en desarrollo copiaran o robaran tecnologías patentadas, tal como habían hecho los países hoy desarrollados durante su proceso de crecimiento económico. El acuerdo asegura a las empresas multinacionales la protección de sus patentes por un mínimo de veinte años y, en caso de disputa, coloca la carga de la prueba sobre el presunto violador. Éste es un claro ejemplo de cómo los países ricos tiran de una patada la escalera para evitar que las naciones pobres les alcancen.

Los principales beneficiarios han sido las empresas farmacéuticas norteamericanas y europeas y los conglomerados de empresas agrícolas. En el campo de los medicamentos, los países del Tercer Mundo han reivindicado que se les permita importar o fabricar copias genéricas, más baratas, de las medicinas patentadas, para poder afrontar graves problemas de salud pública, algo que, en la actualidad, la OMC les impide hacer. De hecho, todos los miembros de la OMC, a excepción de Estados Unidos, se han mostrado a favor de no hacer una interpretación estricta del Acuerdo sobre los ADPIC en el caso de los medicamentos. Estados Unidos, en cambio, exige que la exención se limite a los tratamientos para el SIDA, la malaria, la tuberculosis y unas pocas enfermedades tropicales, pues sostiene que la industria farma-

céutica debe seguir contando con precios altos para poder financiar investigaciones futuras.²⁹ Con relación a la agricultura, el sistema de los ADPIC ha otorgado a las empresas, por primera vez, el derecho de patentar formas de vida, en especial semillas. Las compañías que producen alimentos modificados genéticamente (lo que los europeos llaman «alimentos Frankenstein») presionan sin pausa a favor de esa disposición. Monsanto, por ejemplo, posee la patente de las semillas de soja Roundup Ready, las cuales, hasta hace poco, se mostraban resistentes al herbicida de esa misma empresa, Roundup.³⁰ Monsanto tiene una participación importante en los mercados del maíz y la soja en Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y en el del trigo en Europa; esta y otras empresas, como Novartis y DuPont, utilizan el sistema de los ADPIC para desarrollar y patentar plantas genéticamente modificadas que no producen semillas fértiles para las cosechas de los años siguientes y que deben ser fertilizadas mediante costosos productos fabricados por ellas mismas. Por consiguiente, estas firmas se encuentran en posición de extraer beneficios monopolistas de los países pobres, a través del dominio de su sector agrícola y al dictarles, si pueden, lo que van a comer.

Otro de los abusos del sistema de los ADPIC es la llamada «biopiratería». Consiste en que determinadas empresas y universidades obtienen patentes de plantas que el Tercer Mundo conoce y ha utilizado, a menudo durante siglos, y luego cobran derechos a esos países si desean seguir cultivándolas. Un caso clásico fue el intento efectuado en 1997 por RiceTec, Inc., de Alvin, Texas, de obtener la patente de un híbrido del arroz *basmati* de la India que había sido cosechado durante dos siglos en todo el subcontinente; hasta el momento, esa patente sólo es válida en Estados Unidos y el Tercer Mundo la ha denunciado en todas partes.³¹ A causa de estos abusos con las tecnologías médicas y agrícolas, en el presente incluso países que respaldan la OMC afirman que hubiera sido preferible no incluir la agricultura entre las competencias de esta institución, ni extender los derechos de patente a los seres vivos.

En resumen, el sistema de la OMC que nació en 1995 es un instrumento engañoso pero extremadamente eficaz del imperialismo económico que los países ricos ejercen sobre los pobres. Sin embargo, a los pocos años de su fundación, la organización ha empezado a resquebrajarse. Después del 11 de septiembre, el excesivo énfasis de Estados

Unidos en el militarismo y la unilateralidad ha debilitado de forma radical la eficacia de la legislación internacional y ha erosionado la fachada de legalidad que respalda las reglas de la OMC. Al mismo tiempo, los intereses de los militaristas norteamericanos y de los globalizadores económicos habían empezado a entrar en conflicto, en especial con respecto al ascenso de una obvia superpotencia futura: China. Mientras los globalizadores económicos han invertido en la industria china con más intensidad que en cualquier otra fuera del mundo angloamericano, los militaristas estadounidenses ya han empezado a conspirar para contener al país asiático, por la fuerza si fuera necesario, y decidir la futura supremacía mundial.

Además, cuando el gobierno Bush declaró su «guerra al terrorismo», descubrió que la globalización era tan útil a los terroristas, que blanqueaban su dinero y financiaban a sus militantes, como a los especuladores capitalistas. Por consiguiente, empezó a vigilar, a restringir y a cerrar varios canales de interacción económica norteamericana con el resto del mundo, incluido el acceso de los estudiantes del Tercer Mundo a nuestras universidades. Esa tendencia sugiere que la globalización, al menos tal como fue proyectada en la década de 1990, puede tener una vida bastante corta.

Tal vez la primera señal clara de que la globalización y la OMC tenían problemas surgió con la crisis económica asiática de 1997. El gobierno Clinton había ejercido una fortísima presión sobre las pequeñas economías del este asiático para que aceptaran el neoliberalismo y, en especial, para que abrieran su sector financiero a la participación extranjera. Ninguno de los países de la región pensaba que ésa fuera realmente una buena idea y ninguno sabía qué clase de supervisión y regulación bancaria de los mercados de capital era necesaria para controlar una economía al estilo americano para prevenir la quiebra; sin embargo, para lograr una clasificación favorable de su solvencia crediticia y tener acceso a los mercados hacía falta cooperar con Washington. Asimismo, los inversores extranjeros no se preocuparon por las consecuencias; después de que el gobierno de Estados Unidos rescatara a México de sus problemas financieros en 1994-1995, la mayoría de los inversores concluyó que la combinación de Estados Unidos y el FMI no permitiría grandes suspensiones de pagos en los mercados emergentes, de modo que el capital fluía hacia el este asiático desde todo el mundo.

Cuando esos pequeños países resultaron profundamente endeudados y anunciaron que tendrían problemas para cumplir con sus planes de amortización, el capital extranjero desapareció aún más deprisa de lo que había llegado. La mayoría de las economías asiáticas, empezando por Tailandia y continuando por Indonesia y Corea del Sur, de pronto estaban al borde de la suspensión de pagos y tuvieron que implorar ayuda al FMI. Este organismo impuso reformas draconianas como precondition para los préstamos, lo que desencadenó una crisis política abierta que condujo al derrocamiento del gobierno de Indonesia a través de una revolución. Una hostilidad duradera y profunda contra el FMI, el Banco Mundial y Estados Unidos se extendió lenta y silenciosamente por todo el Este asiático.³² Los globalizadores norteamericanos hicieron todo lo posible para que la culpa por el desplome de la región no recayera sobre sus representantes, el FMI y el Banco Mundial, y para que lo acontecido no afectara a la propia globalización. Argumentaron que la causa de la crisis era la corrupción asiática, a la que denominaron capitalismo de amigotes —esto es, el tráfico de información privilegiada y la falta de transparencia—, una expresión que habían creado los filipinos para describir el régimen de Marcos.

Uno de los pocos países del este asiático que logró salir indemne de la crisis financiera, de hecho, lo hizo en mejor estado, fue Malasia, y su éxito al enfrentarse a los «remedios» neoliberales de Washington contribuyó a desacreditar aún más la globalización. Mahathir Mohamad, el primer ministro malasio, se resistió a las exigencias del FMI y restauró de inmediato los controles de capital sobre su economía. La fraternidad de los economistas internacionales declaró que el ministro estaba cometiendo un suicidio comercial. A cambio, Mohamad acusó a las potencias occidentales y a especuladores como George Soros de manipular los mercados y las divisas con el fin de destruir las saludables economías del este asiático. Esa acusación irritó muchísimo a Thomas Friedman, columnista de *The New York Times* y autor de un exitoso himno a la globalización, *The Lexus and the Olive Tree*. Friedman se burló: «Perdóneme, Mahathir, pero ¿en qué país vive usted? Habla de participar en la globalización como si tuviera elección. La globalización no es una elección. Es una realidad. ... Y la verdad más básica acerca de la globalización es ésta: *nadie está al cargo*. ... Todos deseamos creer que alguien se encarga de ella y responde

por ella. Pero el mercado global es hoy un Rebaño Electrónico de negociantes de acciones, bonos y monedas y de inversores multinacionales, con frecuencia anónimos, que se conectan mediante pantallas y redes informáticas». ³³

Dos años más tarde en Seattle, para gran furia de Friedman y de otros apologistas neoliberales, una coalición de organizaciones no gubernamentales empezó a poner nombres y caras a ese rebaño electrónico de políticos y funcionarios del FMI y del Banco Mundial responsable de la globalización y que, según sostenían las ONG, tendría que haber rendido cuentas por sus consecuencias.

Lo que resultó aún más desconcertante para los globalizadores angloamericanos fue que el crecimiento de la pobreza del Tercer Mundo se acelerara después de la creación del Banco Mundial. Es cierto que la corrupción fue un factor en ese proceso. Por ejemplo, Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México, sacó 87 millones de dólares de su país a través de cuentas en el Citibank de Nueva York, Suiza y Londres. Sani Abacha, antiguo dictador de Nigeria, salió de su país con un botín de 110 millones de dólares, que blanqueó también a través del Citibank. Una autoridad calcula que Carlos Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, recaudó cerca de mil millones de dólares en sobornos durante sus dos mandatos. ³⁴ Las estructuras administrativas internas de los países pobres constituyeron otro factor; esas naciones carecían, de acuerdo con De Rivero, «tanto de la clase media como del mercado nacional que necesitarían para ser gobernables y viables». ³⁵

En 1999, en la tercera conferencia ministerial de la OMC en Seattle, un conjunto de personas con experiencia en los programas de desarrollo para el Tercer Mundo —ecologistas, sindicalistas, anarquistas y algunos norteamericanos preocupados por el papel de la «única superpotencia restante»— propuso una explicación alternativa para la pobreza del Tercer Mundo, y desenmascaró al fin los motivos imperialistas y expansionistas que se ocultan tras la teoría neoliberal. Hicieron hincapié en la ausencia de democracia en el interior del FMI, del Banco Mundial y de la OMC: apuntaron que las normas de votación del FMI están amañadas de tal modo que sólo los países más ricos tienen influencia; Estados Unidos se reserva el derecho de nombrar al presidente del Banco Mundial, y la OMC toma sus decisiones por «consenso», de forma que, si algún país rico no acepta una propuesta, tiene, de hecho, el poder de veto. ³⁶

La exigencia de reformas efectuada por los opositores a la globalización resonó con fuerza en todo el mundo, y ese movimiento de contestación ganó más partidarios con rapidez. Ya en 2002 los encuentros internacionales de las potencias globalizadoras desencadenaban manifestaciones de medio millón de personas. En general, los globalizadores, con la colaboración de las grandes empresas de medios de comunicación, decidieron denigrar a los opositores. El primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, los llamó «*hooligans* antidemocráticos» y un «circo ambulante de anarquistas». ³⁷ Robert Zoellick, el delegado comercial estadounidense en la segunda administración Bush, comparó a los opositores con los terroristas del 11 de septiembre, al insinuar con malicia: «Es inevitable que la gente se pregunte si existen conexiones intelectuales con los que se han vuelto hacia la violencia para atacar las finanzas internacionales, la globalización y Estados Unidos». ³⁸ Thomas Friedman, en un artículo en *The New York Times*, afirmó que los manifestantes de Seattle eran «un arca de Noé de defensores de teorías caducas, sindicatos proteccionistas y yuppies en busca de una dosis de los sesenta». Tras el 11-S, Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, los llamó «hordas talibanizadas». ³⁹ Mientras tanto, la OMC y los países del G-8 decidieron realizar sus encuentros en lugares cada vez más inaccesibles, como Doha, Qatar y Kananaskis, en las Montañas Rocosas canadienses. El FMI, en un intento cosmético de mejorar su imagen —y evidenciando el reconocimiento tácito de que la chusma de manifestantes estaba logrando, de hecho, turbar a los globalizadores— cambió el nombre de su programa de «servicio para el ajuste estructural» por el de «servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza», que se consideró que sería mejor recibido por los manifestantes.

Con anterioridad al 11 de septiembre de 2001, ocurrieron otros tres acontecimientos importantes que desacreditaron todavía más la globalización. En marzo de 2000, el Informe Meltzer, realizado por orden del congreso, concluyó que el FMI había «institucionalizado el estancamiento económico», y que el Banco Mundial era «irrelevante, en lugar de fundamental, para el propósito de eliminar la pobreza mundial». Varios años antes, el Tesoro de Estados Unidos había solicitado que el congreso aumentara en dieciocho mil millones de dólares el aval del FMI. En vista de los desastres desarrollistas que entonces estaban teniendo lugar en el este asiático, Brasil y Rusia, el congreso

creó una Comisión Asesora sobre las Instituciones Financieras Internacionales, con el fin de investigar los historiales del FMI y del Banco Mundial, bajo la presidencia del neoconservador Alan Meltzer, de la Universidad Carnegie Mellon y del Instituto de Empresa Americano. Los descubrimientos del Informe Meltzer ya eran por entonces del conocimiento general en el Tercer Mundo, pero fue la primera vez que una figura respetable los presentaba desde el interior del consenso de Washington. Meltzer afirmó: «Las dos entidades se rigen, en gran medida, por los intereses de instituciones políticas y económicas clave de los países del Grupo de los Siete (G-7), en especial, en el caso del FMI, el gobierno de Estados Unidos y los intereses financieros estadounidenses». En lo que al objetivo declarado de eliminar la pobreza mundial se refiere, el desempeño del Banco Mundial era «miserable», concluyó Meltzer.⁴⁰

Poco después, la economía de Argentina se vino abajo de forma desastrosa, en una demostración adicional de la incompetencia del FMI y el Banco Mundial. Ese país había seguido fielmente las ideas del libre mercado del neoliberalismo, así como las prescripciones del FMI; había llegado incluso a vender su sector bancario a los extranjeros, quienes, en 1998, eran propietarios del 80 por 100 de los bancos argentinos, y a establecer la paridad entre el peso y el dólar, esto es, un peso valía un dólar y las dos monedas circulaban libremente en el país. En 2002 Argentina poseía el triste récord de haber acumulado la mayor deuda pública de un solo país en toda la historia, de unos 160.000 mil millones de dólares.⁴¹ La renta nacional se desplomó en dos tercios en el transcurso de un año; más de la mitad de su población, predominantemente de clase media, se encontró viviendo bajo la línea de pobreza, y ningún político, fuera cual fuera su orientación, se atrevía a aparecer en la calle por miedo a un linchamiento público.

El FMI acordó ayudar a Argentina a cumplir con los pagos de los intereses de la deuda, y luego incurrió exactamente en el mismo error que había cometido en 1997 en el este asiático. Exigió, como condición para otorgar los préstamos, un presupuesto de austeridad que comprendía el despido de gran número de funcionarios públicos, el recorte de las pensiones, la reducción de los sueldos y la eliminación de los beneficios complementarios. Las revueltas y la reacción policial violenta a éstas condujeron el país al estancamiento. En diciembre de 2000, el FMI entregó casi cuarenta mil millones a Argentina, con la condición

de que el gobierno siguiera pagando su deuda externa a costa de exprimir a los componentes más pobres de la sociedad. Ningún país podría cumplir esas exigencias sin desencadenar una revolución. Argentina pasó por cinco gobiernos y seis ministros de Economía en catorce meses, y no obstante el FMI concluyó que el país todavía no estaba siendo lo bastante duro y que, de todos modos, tenía poca importancia estratégica para Estados Unidos. Por consiguiente, cerró el grifo y se negó a suministrar más ayudas. Como consecuencia, surgió una inflación de dos dígitos, el peso perdió el 220 por 100 de su valor y el orden social se vino abajo. Argentina, que había sido un día el país más próspero de América Latina, se transformó en un caso perdido, gracias al neoliberalismo, la globalización y el FMI.

El tercer acontecimiento que contribuyó a desacreditar la globalización fue la revelación de la existencia de importantes hechos delictivos en Enron y en otras empresas multinacionales con sede en Estados Unidos. Cuando se descubre que los agentes de la globalización, que son las propias empresas, conspiran de forma delictiva para defraudar tanto a sus clientes como a sus propios empleados y a sus gobiernos, toda la idea de la globalización, y no sólo su práctica, se convierte en algo grotesco. Las indicaciones de que así era ya se acumulaban en los meses precedentes al 11 de septiembre. Después de los atentados, cuando Estados Unidos cambió de forma decidida el imperialismo económico por el militar, la globalización se reveló en toda su desnudez rapaz.

Tras el 11-S, las abundantes ganancias provenientes de los armamentos y de la guerra sustituyeron a las transacciones de patente ilegalidad y el capitalismo de amigotes de finales de la década de 1990, y se convirtieron en el mejor camino para enriquecerse a disposición de los capitalistas con buenas relaciones políticas. Después de la segunda guerra mundial, el complejo militar-industrial y su protector, el Pentágono, habían desempeñado un importante papel en la economía; sin embargo, después del 11-S, se transformaron en las estrellas de nuestra economía. No obstante, la fabricación de armamento no sigue las reglas de la globalización. Acostumbra a tener un solo cliente y no se encuentra sujeta a la disciplina del mercado. Cuando se trata de la seguridad nacional, los gobiernos simplemente no tienen en cuenta los riesgos de pérdidas y beneficios. La producción de armamentos no es un ejemplo de «libre empresa», sino de socialismo de estado.

Estados Unidos se opone, de manera oficial y explícita, a la «política industrial», de la que se dice que corrompe el libre mercado para producir un resultado deseado por el gobierno. Odiosa a los economistas ortodoxos angloamericanos, la política industrial fue prohibida por la OMC de acuerdo con sus disposiciones relativas a las barreras comerciales no arancelarias. No obstante, existe una llamativa excepción a esa regla: la producción y venta de armas. A través del sector de defensa, Estados Unidos gestiona hace mucho una de las políticas industriales más desarrolladas del mundo. Es ilegal, por ejemplo, que Estados Unidos subvencione abiertamente la fabricación de aviones jumbo Boeing 747 para la exportación (tal como hace la Unión Europea con los aviones Airbus), pero el gobierno ha encontrado innumerables formas de soslayar esa restricción, al financiar durante décadas la innovación tecnológica en universidades y empresas con la excusa de las necesidades nacionales de defensa. Los préstamos y las concesiones del Pentágono han financiado con frecuencia las ventas militares al extranjero, y la privatización de gran número de actividades que antes llevaban a cabo las fuerzas armadas sirve a los intereses de las empresas privadas. Dadas las recientes tendencias hacia el militarismo, Estados Unidos se ha convertido, de hecho, en una superpotencia de la política industrial.

El tratado original del GATT de 1947 consideraba que los subsidios militares se diferenciaban de todos los demás en caso de una «excepción por motivos de seguridad nacional», que pasó a formar parte de todos los tratados que se negociaron desde entonces. Esa excepción permite que los estados apoyen la producción, promuevan las ventas e impongan embargos comerciales, siempre que lo hagan en nombre de la seguridad nacional. Asimismo, todos los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial incluyen una cláusula respecto a la excepción de seguridad. Eso significa que aunque el FMI imponga presupuestos de austeridad a los países que buscan préstamos de emergencia, sus programas siempre permiten la compra de armas a una potencia extranjera, por lo general Estados Unidos, incluso en momentos en los que los empleos y la atención sanitaria están siendo recortados. En 1997, cuando Corea del Sur se dobló bajo el peso de la deuda, el FMI le sugirió que suspendiera la compra de material militar hasta que se recuperara, pero el gobierno de Estados Unidos rechazó esa directriz. De forma análoga, Turquía ha contado, durante

años, con los préstamos del FMI para mantener en funcionamiento su sistema financiero, mientras protegía alrededor del 14 por 100 de su producto interior bruto de las reducciones exigidas por el FMI al colocar sus gastos en peligro dentro del presupuesto militar.

En 1993, la administración Clinton presentó una nueva e importante propuesta de ayuda financiera a las empresas: proporcionar rebajas de impuestos a los contratistas de defensa si se fusionaran para formar conglomerados de mayor tamaño y más diversificados. Por ejemplo, el Pentágono suministró mil doscientos millones de dólares en forma de desgravaciones fiscales a Lockheed Aircraft Corporation y Martin Marietta cuando se fusionaron para formar Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo. Algo similar ocurrió en el caso de Boeing. La empresa había empezado a apartarse de la producción de armamento después de que terminara la guerra fría, pero cuando se anunciaron las rebajas impositivas deshizo el camino andado, adquirió McDonnell Douglas y parte de Rockwell International y se convirtió en uno de los principales exportadores de armas del mundo.

La interpretación de la guerra contra las drogas como un componente de la seguridad nacional permite una expansión aún mayor de la economía militar. Pese a que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank) tiene prohibido financiar las ventas de material militar, se efectúa una excepción cuando las armas se destinan al control del tráfico de narcóticos. El banco, por consiguiente, ha sido uno de los principales financiadores de la venta de Sikorsky a Colombia de diecinueve helicópteros Black Hawk, aparatos que presuntamente serían utilizados en la guerra contra las drogas. Con el fin de sortear las demás disposiciones que limitan el uso del dinero prestado por el Ex-Im Bank para compras militares, en 1996 el gobierno dio un paso adelante y creó una nueva agencia, denominada Fondo de Garantía para Préstamos a Exportaciones de Defensa. En su primer año de funcionamiento, esta institución desembolsó casi ocho mil millones de dólares a empresas estadounidenses.⁴²

Suele pensarse que la especulación bélica es algo que hacen unos civiles codiciosos. No obstante, esa opinión subestima el papel que desempeñan los oficiales militares uniformados en la venta de armas a países extranjeros. En innumerables casos, es una campaña de fuertes presiones, dirigida por el Pentágono, la que cierra los negocios. En

abril de 2002, por ejemplo, Estados Unidos jugó de la manera más sucia posible con Corea del Sur. Exigió que Seúl concediera a Boeing, y sus F-15K, el contrato para la compra de cuarenta cazas polivalentes por valor de 4.460 millones de dólares, en lugar de elegir a la empresa francesa Dassault y sus aviones Rafale. Filtraciones del Ministerio de Defensa coreano indican que los Rafale, dotados de los últimos avances tecnológicos, superaban en todo sentido a los F-15K y que, además, eran 350 millones más baratos. No obstante, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz dijo a los coreanos que si seguían adelante con la compra a los franceses, Estados Unidos se negaría a instalar los sistemas criptográficos que permiten a los aviones identificarse unos con otros y a suministrar los misiles aire-aire AIM-120B AMRAAM, fabricados por Raytheon, que utiliza el avión francés.⁴³ Dassault contraatacó afirmando que podía dotar fácilmente al Rafale de un avanzado sistema de identificación electrónico, y que había misiles disponibles de distintas fuentes. Sin embargo, Corea del Sur eligió los Boeing y declaró que lo hacía para garantizar la «interoperabilidad» de sus armas con las de sus aliados. Es importante señalar que el Reino Unido, uno de los aliados más próximos de Estados Unidos, no cuenta con un solo avión de combate estadounidense en su fuerza aérea, lo que no impide que sus aviones y helicópteros trabajen rutinariamente junto a aeronaves de fabricación americana.

La presión que Estados Unidos ejerce sobre los países latinoamericanos para que compren armas es descarada. En octubre de 2002, el Ministerio de Defensa colombiano deseaba comprar cuarenta aviones de combate ligeros Super Tucano a Embraer, de São Paulo, la mayor exportadora de Brasil. La transacción tenía un valor de 234 millones de dólares. De inmediato, el general James T. Hill, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), envió a Bogotá una carta en la que advertía de que la compra de aviones brasileños tendría una «influencia negativa» sobre el apoyo del congreso norteamericano a futuras ayudas militares a Colombia. Hill recomendaba, por el contrario, que Colombia empleara su dinero en modernizar su flota de C-130, aviones fabricados por Lockheed Martin en Georgia.⁴⁴ La transacción con Brasil se vino abajo.

La primera señal de resistencia a esas tácticas coercitivas vino tras la elección de Luiz Inácio «Lula» da Silva como presidente de Brasil, también en octubre de 2002. El anterior gobierno brasileño había es-

tado negociando con Francia y Estados Unidos la compra de veinticuatro aviones de caza para la fuerza aérea brasileña. En junio, el Pentágono procuró mejorar su oferta al prometer que, con los aviones, vendería también misiles aire-aire, lo que haría por primera vez en Latinoamérica. No obstante, cuando Lula da Silva tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2003, canceló la transacción y traspasó 750 millones de dólares del presupuesto de defensa a proyectos de erradicación del hambre.⁴⁵

El nuevo énfasis en el imperialismo militar ha tenido como consecuencia el auge de los contratistas de defensa. En los meses posteriores al 11-S, Boeing estableció dos turnos de trabajadores en la fabricación de su Munición de Ataque Directo Conjunto, una «bomba inteligente» que ha sido sobradamente empleada en Afganistán e Irak, y Raytheon pasó a tener tres turnos para la producción de sus misiles crucero Tomahawk.⁴⁶ El problema era cómo mantener semejantes niveles de actividad. En noviembre de 2002, en una decisión de política exterior dictada de modo significativo por la promesa de la venta de armas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte admitió a siete países de Europa oriental y el Báltico. Estados Unidos se había empeñado durante al menos seis años en conseguir esta ampliación. Inmediatamente hizo que Polonia firmara un contrato para la compra de 48 aviones de caza F-16, de Lockheed, fabricados en Texas, para que la fuerza aérea polaca alcanzara los niveles de la OTAN, y le prestó 3.800 millones de dólares, en términos concesionarios, para ayudarle a pagar los aparatos. Los planificadores del Pentágono esperan que la venta de armas y municiones a los nuevos miembros de la OTAN alcance los 35.000 millones de dólares a lo largo de los próximos diez años.⁴⁷

Otra forma de mantener elevadas las ventas de armamento es a través de las guerras. Tienen la deseable característica de agotar las existencias y demostrar a los clientes potenciales de todo el mundo la eficacia de las nuevas generaciones de armas americanas. El complejo militar-industrial recibió con júbilo las guerras contra Yugoslavia, Afganistán e Irak, que resultaron tan buenas para los negocios. Acciones apenas menores que la guerra, como los bombardeos y los ataques con misiles, representan asimismo, en palabras de Karen Talbot, durante veinte años representante del Consejo Mundial para la Paz en las Naciones Unidas, «gigantescos bazares para vender la mercancía de

los fabricantes de armamento». ⁴⁸ Los militares están constantemente pasando sus últimos artilugios a Taiwán, por ejemplo, aunque los esfuerzos del Pentágono para provocar una guerra con China resultan cada vez menos efectivos, ya que el continente y Taiwán han empezado a integrar sus economías. Israel, sin embargo, continúa siendo uno de los clientes más antiguos y fieles del Pentágono, y parece probable que lo siga siendo en el futuro.

A medida que Estados Unidos dedica cada vez más activos industriales al comercio de armas, se vuelve más y más dependiente de las importaciones de productos no militares que sus ciudadanos han dejado de producir pero necesitan para mantener su estilo de vida. Con un déficit comercial récord en 2002 de 435.200 millones de dólares y una tasa de ahorro cercana a cero, los norteamericanos pueden acabar debiendo al extranjero hasta 3,5 billones de dólares sólo en los próximos años. Tal como concluye el analista económico William Greider: «En lugar de afrontar esa oscura perspectiva, [el presidente George W.] Bush y su equipo descartan el punto de vista general de los países acreedores y los alecciona de forma condescendiente respecto a nuestras superiores cualidades. Todo deudor despilfarrador que insulta a su banquero es insensato, para decirlo con suavidad ... Los líderes estadounidenses ... son cada vez más delirantes —y lo digo en sentido literal— y son incapaces de advertir que el equilibrio de poder está cambiando y que lo hace en su contra». ⁴⁹

Nuestro gobierno parece no comprender la relación entre su unilateralidad militar y el daño colateral que ésta inflinge al comercio internacional, actividad que para funcionar bien depende de relaciones *mutuamente beneficiosas* entre individuos, empresas y países. Si los acreedores concluyen que Estados Unidos ya no es un defensor de la ley internacional, pueden perder todo interés en invertir en un país semejante. Nuestra versión del imperialismo militar unilateral socava las instituciones internacionales, genera el estancamiento del comercio, distorsiona la disponibilidad de fondos y es desastrosa desde el punto de vista medioambiental. Mientras la globalización de la década de 1990 se basaba en estafar a los pobres e indefensos y destruir el único entorno físico que poseemos, es probable que su sustitución por el militarismo y el imperialismo americanos anuncie algo mucho peor tanto para los países desarrollados como para los en vías de desarrollo y los subdesarrollados.

10

Los pesares del imperio

Aunque una tiranía puede gobernar con éxito sobre otros pueblos, cuyo consentimiento no necesita, sólo logrará mantenerse en el poder si antes destruye todas las instituciones nacionales de su propio pueblo.

Hannah Arendt,

Los orígenes del totalitarismo (1951).

TRAS LA CAÍDA DE BAGDAD, el 11 de abril de 2003, los servicios aliados anglófonos de Estados Unidos, los británicos y los australianos, merecían una justa recompensa, y los primeros ministros Blair y Howard fueron invitados a comer con el joven emperador en su rancho de Crawford, Texas. En Irak desplegamos un ejército de 255.000 efectivos, los británicos añadieron otros 45.000 y los australianos contribuyeron con 2.000 especialistas. No se trató de una gran guerra, aunque confirmó la opinión de las fuerzas contrarias al conflicto de que, para afrontar la amenaza de Sadam Husein, no hacía falta una matanza de iraquíes, que apenas ofrecieron resistencia, ni el saqueo mongol de una antigua ciudad. No obstante, la guerra, de forma paradójica, nos dejó a nosotros y a nuestros dos aliados mucho más débiles que antes: la alianza de las democracias occidentales se fracturó; la posibilidad de un liderazgo británico en la Unión Europea se esfumó; los planes del Pentágono para transformar Irak en un estado cliente se hundieron enseguida en la realidad de suníes, chiíes y kurdos; y el concepto mismo de «ley internacional», incluso el de la Carta de las Naciones Unidas, quedó seriamente comprometido. Por qué los británicos y los australianos nos acompañaron en este fiasco, cuando podían haberse man-

tenido con tanta facilidad en una postura distinta a la de «la fuerza hace la ley», es un misterio.

Tal como he expuesto, Estados Unidos lleva años avanzando hacia el imperialismo y el militarismo. Nuestros dirigentes, para disimular la dirección que estaban tomando, ocultaron su política exterior bajo eufemismos como «única superpotencia», «nación indispensable», «policía renuente», «intervención humanitaria» y «globalización». Sin embargo, con la llegada del gobierno de George W. Bush y, en especial, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, esos pretextos cedieron el paso a las aseveraciones sobre la llegada del segundo Imperio Romano. «El imperialismo norteamericano solía ser un producto de la imaginación de la extrema izquierda», escribió la periodista inglesa Madeleine Bunting, «ahora es un incómodo hecho.»¹

En 2003, el gobierno Bush dio el último paso para llevar a cabo su primera guerra «preventiva», y eligió Irak, un país soberano con una duodécima parte de la población de Estados Unidos y prácticamente sin defensas ante la parafernalia bélica y el impresionante poder militar del Pentágono. Esta guerra, efectuada con pocos aliados, sin justificación legal y ante las protestas de todo el mundo, acabó con el sistema del orden internacional que había persistido durante la guerra fría y que se remontaba a las doctrinas del siglo XVII sobre la soberanía, la no intervención y la ilegitimidad de la guerra ofensiva.

Desde el momento en que asumimos un papel que entrañaba un dominio militar permanente del mundo, nos quedamos solos: temidos, odiados, corruptos y corruptores, manteniendo el «orden» a través del terrorismo de estado y el soborno, y dados a una retórica y unos sofismas megalómanos que prácticamente invitaban al resto del mundo a unirse contra nosotros. Un viejo proverbio advierte que a quien se monta a un tigre le resulta difícil bajar de él. El tigre al que hemos subido es el mismo que en su momento eligió Napoleón, y la pregunta es si bajaremos algún día y si podremos hacerlo.

Durante el escándalo del Watergate, a principios de la década de 1970, el jefe de gabinete del presidente, H. R. Haldeman, recriminó en una ocasión a John Dean, consejero de la Casa Blanca, por hablar en el congreso con demasiada franqueza sobre los delitos que el presidente Nixon había ordenado cometer: «John, una vez que la pasta de dientes ha salido del tubo, resulta difícil volver a meterla». Esta metáfora doméstica, pronunciada por un antiguo ejecutivo de la publicidad que ter-

minaría pasando dieciocho meses en la cárcel debido a su implicación en el Watergate, describe asimismo la situación de Estados Unidos el día en que inició la invasión de Irak.

Para nosotros, los pesares del imperio han demostrado ser la consecuencia inevitable del camino que nuestras élites eligieron tras el 11 de septiembre de 2001. El militarismo y el imperialismo siempre traen consigo penas. El símbolo ubicuo de la religión cristiana, la cruz, es quizá el recordatorio más famoso del mundo del dolor que acompañó al Imperio Romano. Representaba la muerte más atroz que los procónsules fueron capaces de idear para mantener la disciplina de sus subordinados, algo que los imperios, invariablemente, descubren que tienen que hacer. De Catón a Cicerón, la consigna de los líderes romanos fue: «Que nos odien, con tal de que nos teman» (*Oderint dum metuant*).

Los pesares del Imperio Romano se prolongaron durante centenares de años. Es probable que los nuestros lleguen con la rapidez de un envío urgente. Si las tendencias actuales continúan, pienso que cuatro pesares castigarán, con seguridad, a Estados Unidos. Su efecto acumulativo garantizará que este país deje de tener el menor parecido con la nación que un día se perfiló en nuestra Constitución. En primer lugar, habrá un estado de guerra permanente, lo que ocasionará que el terrorismo contra los norteamericanos —dondequiera que estén— se incremente y que los países pequeños dependan cada vez más de las armas de destrucción masiva para detener la apisonadora imperial. En segundo lugar, la democracia y los derechos constitucionales se irán perdiendo, hasta que la presidencia eclipse por completo al congreso y deje de ser el «poder ejecutivo» para transformarse en algo así como una presidencia «pentagonizada». En tercer lugar, el principio ya pisoteado de la veracidad será sustituido progresivamente por un sistema de propaganda, desinformación y glorificación de la guerra, la fuerza y las legiones militares. Por último, llegará la quiebra, a la que nos conducirá nuestra tendencia a destinar los recursos económicos a proyectos militares cada vez más grandiosos, mientras reducimos lo que invertimos en la educación, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. El futuro, por supuesto, aún no existe. Es posible oponer resistencia a estas tendencias y, claro está, imaginar otros futuros mejores. Sin embargo, es importante tener muy claras tanto las opciones actuales como el camino que hoy auguran nuestros líderes imperiales. Permítaseme, por consiguiente, establecer las ramificaciones de esos cuatro males y analizar hasta dónde han llegado.

Tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush declaró que nuestra política consistiría en dominar el mundo a través de la superioridad militar absoluta y en llevar a cabo guerras preventivas contra todos los posibles competidores. Empezó a enunciar su «doctrina» en el discurso que pronunció el 1 de junio de 2002 ante los cadetes de la Academia Militar de West Point. La Casa Blanca presentó ese discurso como el prelude explícito de un «marco de seguridad global», que se concretó el 20 de septiembre de 2002 en un documento oficial, la «Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos».²

En West Point, el presidente declaró que teníamos el derecho unilateral de derrocar a cualquier gobierno del mundo que consideráramos una amenaza para nuestra seguridad. Argumentó que deberíamos estar preparados para librar una «guerra contra el terrorismo» en gran número de países, con el fin de mantener las armas de destrucción masiva fuera del alcance de los terroristas. «Debemos librar esa batalla contra el enemigo, desbaratar sus planes y enfrentarnos a las peores amenazas antes de que surjan.» Los estadounidenses hemos de estar «preparados para actuar de forma preventiva, siempre que sea necesario para defender nuestra libertad y nuestra vida. ... En el mundo en que nos hemos adentrado, el único camino para la seguridad es el de la acción. Y este país actuará». Aunque Bush no nombró a ningún país en su discurso, resultó que tenía una lista con sesenta objetivos posibles, lo que elevaba la cifra propuesta por el vicepresidente Dick Cheney, quien en noviembre de 2001 se había referido a los «cuarenta o cincuenta» países que deberíamos considerar incluir en nuestra agenda de ataques, tras deshacernos de los terroristas de Al Qaeda en Afganistán.³ El historiador Arthur Schlesinger, Jr., antiguo consejero especial del presidente John F. Kennedy, se quedó tan horrorizado que escribió: «El presidente ha adoptado una política de “autodefensa anticipada” alarmantemente parecida a la que el Japón imperial empleó en Pearl Harbor en una fecha que, tal como un anterior presidente dijo que sucedería, sigue recordándose como infame. Franklin D. Roosevelt estaba en lo cierto, pero hoy somos nosotros, los estadounidenses, los que vivimos en la infamia».⁴

El presidente justificó en West Point su propuesta de un gigantesco esfuerzo militar apelando a valores supuestamente universales: «Defenderemos la paz de las amenazas de los terroristas y de los tiranos. Preservaremos la paz estableciendo buenas relaciones con las grandes potencias. Y extenderemos la paz fomentando la existencia de sociedades

libres y abiertas en todos los continentes». Y añadió una afirmación que, aunque manifiestamente falsa, al haber sido pronunciada por el presidente de Estados Unidos en una ocasión oficial, equivalía al anuncio de una cruzada: «La verdad moral es la misma en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los sitios». El preámbulo al documento posterior, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, declaraba que existe «un solo modelo sostenible de éxito nacional» —el nuestro—, que es «justo y verdadero para todas las personas en todas las sociedades. ... Estados Unidos debe defender la libertad y la justicia porque estos principios son justos y verdaderos para los pueblos de todas partes».

Resulta paradójico que esa gran estrategia probablemente resulte más perjudicial para el orden mundial que cualquier cosa que los terroristas del 11-S hubieran esperado lograr por su cuenta. Con sus actos, Estados Unidos parece decidido a generar precisamente las amenazas que dice intentar prevenir. Su aparente aceptación del «choque de civilizaciones» y de la guerra como medio para establecer una verdad moral, la misma en todas las culturas, tiene un notable parecido con una *yihad*, sobre todo si se tienen en cuenta los lazos de la administración Bush con el fundamentalismo cristiano. El presidente llegó incluso a compararse con Jesucristo en diversas declaraciones (en especial en la del 20 de septiembre de 2001), en las que aseguró que quienes no están con nosotros están contra nosotros, una argumentación que encierra la clara intención de parafrasear a Mateo 12:30: «Quien no está conmigo, está contra mí».⁵

Los analistas familiarizados con la historia de las relaciones internacionales reaccionaron con escepticismo ante el informe sobre la estrategia del gobierno Bush. El teórico de las relaciones internacionales Stanley Hoffmann declaró que tal documento era «asombrosamente poco realista», «moralmente inconsiderado» y «extrañamente parecido al desastroso pensamiento iluso de la guerra de Vietnam».⁶ Immanuel Wallerstein, el creador de la «teoría de los sistemas mundiales», señaló que la nueva estrategia ha dado lugar a algo que la política exterior norteamericana procuró evitar históricamente: a saber, la posibilidad de una coalición entre Francia, Alemania y Rusia. Esa estrategia puede, asimismo, apartarnos de Arabia Saudí, el único país del mundo que sólo con cerrar su suministro de petróleo transformaría a Estados Unidos en un gigantesco depósito de chatarra (volveré sobre este asunto más adelante). «Cuando George W. Bush deje el cargo, habrá converti-

do a Estados Unidos en un país significativamente más débil», predijo Wallerstein.⁷

A finales de febrero de 2003, John Kiesling, un alto diplomático que entonces servía en la embajada norteamericana en Grecia, dimitió y escribió al secretario de Estado: «Las políticas que ahora nos solicitan promover no sólo son incompatibles con los valores americanos, sino también con los intereses de Estados Unidos. ... Hemos comenzado a deshacer la mayor y más eficaz red de relaciones internacionales que el mundo había conocido jamás. Nuestra orientación actual no traerá la seguridad, sino la inestabilidad y el peligro».⁸

La puesta en práctica de la Estrategia de Seguridad Nacional es considerablemente más problemática que su promulgación, y ofrece abundantes oportunidades de consecuencias imprevistas y efectos bumerán. A mediados de 2003, nuestras fuerzas armadas se encontraban seriamente sobredimensionadas y nos estábamos endeudando fuertemente para financiar nuestra máquina de guerra. Ya entonces, el 93 por 100 de las asignaciones presupuestarias destinadas a los asuntos internacionales iban a parar a los militares, y sólo el 7 por 100 al Departamento de Estado.⁹ En 2003, el Pentágono desplegó un cuarto de millón de efectivos contra Irak, al tiempo que varios miles de soldados se empeñaban en realizar escaramuzas diarias en Afganistán, la tripulación de incontables buques navegaba por las aguas de Corea del Norte, unos pocos miles de infantes de marina estaban en el sur de Filipinas prestando asistencia a las fuerzas locales en su lucha contra un movimiento separatista islámico, con profundas raíces en la historia del país, y algunos cientos de «consejeros» se encontraban en Colombia, envueltos en lo que, algún día, podría convertirse en una insurrección como la de Vietnam (y en la que posiblemente se verían involucrados otros países de la región). Nuestras fuerzas armadas estaban presentes en 153 de los 189 países miembro de las Naciones Unidas, y en 25 de ellos se trataba de despliegues a gran escala. Poseíamos tratados militares o acuerdos de seguridad vinculantes con al menos 36 países.¹⁰

Aparte del coste económico que todo esto implica, existe otro factor a tenerse en cuenta. El pueblo estadounidense se ha mostrado reacio, desde Vietnam, a aceptar un número elevado de bajas en nuestras guerras imperiales. Para lograr lo que el analista militar William Arkin considera un acercamiento de «odontología indolora» a la guerra, o lo que Vladimir Slipchenko, general de división ruso retirado y especialis-

ta en guerras del futuro, denomina «guerra sin contacto», el Pentágono ha emprendido un esfuerzo gigantesco y costosísimo para informatizar el campo de batalla.¹¹ Ha gastado dinero con prodigalidad en bombas inteligentes, sensores para el campo de batalla, proyectiles guiados por ordenador, aviones y buques de alto desempeño y gran complejidad tecnológica, sin realizar un esfuerzo comparable para formar y retener al personal capaz de emplearlos. El resultado, como puede suponer cualquiera que tenga un ordenador, es que esos artilugios se estropean con frecuencia. En un artículo para el periódico *Parameters* de la Escuela de Guerra del Ejército, John A. Gentry, teniente coronel de las Fuerzas Especiales del ejército hoy retirado, detalla un fallo de tres días de duración en los ordenadores de la Agencia de Seguridad Nacional, ocurrido en enero de 2000, y que puso tan en riesgo la seguridad nacional que inmediatamente fue clasificado como alto secreto. Gentry describe la increíble complejidad del millón y medio de ordenadores individuales del Pentágono —que se encuentran organizados en unos diez mil sistemas, de los cuales dos mil trescientos son de «misiones de importancia crítica»—, y la facilidad con que los adversarios pueden interferir, bloquear o engañar a nuestra tecnología de la guerra cibernética.¹²

La principal razón de la insistencia en la guerra de alta tecnología más sofisticada radica en el interés por mantener a nuestras tropas lejos de la línea de fuego. Muchos de los soldados que hoy son enviados a lo que a los senadores pomposos les gusta llamar «camino del peligro» corren hoy en día un riesgo muy inferior al que se enfrentarían si estuvieran en sus coches u hogares. Al trabajar ante pantallas de ordenador en tiendas dotadas de aire acondicionado situadas a kilómetros del campo de batalla, o en un bombardero B-2 a 35.000 pies de altura, no tienen más sensación de estar en combate que un adolescente ante una videoconsola. El coronel Gentry deplora «el efecto debilitador que tienen, sobre la ética militar, las promesas de los tecnólogos de victorias fáciles y vidas cómodas».¹³

No obstante, existe también otro problema. Se suponía que la Operación Anaconda, que tuvo lugar en Afganistán en marzo de 2002, era el escaparate para el «milagro de la moderna tecnología aplicada al combate, con una serie de plataformas de vigilancia sensibles que permitían localizar al enemigo con exactitud para luego bombardearlo con precisión cuando saliera a campo abierto».¹⁴ Sin embargo, una in-

investigación realizada por el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército descubrió que más de la mitad de las posiciones del enemigo no fueron detectadas por nuestros ojos en el espacio, y que muchas bombas guiadas de precisión no dieron en el blanco. La operación fue un fracaso, puesto que un buen número de terroristas de Al Qaeda escapó. Un mes después, el 17 de abril de 2002, uno de nuestros aviones de caza F-16 bombardeó por equivocación a un grupo de soldados canadienses, de los que mató a cuatro e hirió a ocho; un incidente típico, ocasionado por un equipamiento de alta tecnología inapropiado (un avión demasiado veloz que actúa como apoyo en una misión) y por fallos en las comunicaciones de comando y control. El Pentágono, como tiene por costumbre, minimizó el incidente al considerarlo, simplemente, otro «trágico» caso de fuego amigo.

Cuando los proyectiles de la guerra cibernética funcionan, matan con frecuencia a un número tan elevado de no combatientes que su uso constituye un crimen de guerra. Pese a que el poder aéreo puede ser devastador para todas las formas de vida en tierra, nunca ha ganado solo una guerra. Sin embargo, los militares siguen confiando en las variedades más devastadoras de los bombardeos terroríficos con el pretexto de estar atacando con «precisión» importantes instalaciones militares. Esa corriente del pensamiento militar actual puede encontrarse en los textos de Harlan Ullman, antiguo consejero de alto rango del Pentágono y protegido del general Colin Powell, que defiende que Estados Unidos ataque a sus enemigos de la misma forma en que derrotó a Japón en la segunda guerra mundial. «Hay que inventar armas y superinstrumentos, los equivalentes de la era de la información de la bomba atómica. Al igual que las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki convencieron finalmente al emperador y el alto mando japoneses de que incluso la resistencia suicida era inútil, es necesario emplear esos instrumentos para obtener un resultado análogo.» Ullman es el autor de la idea de que Estados Unidos debería «disuadir e imponerse al adversario consiguiendo que éste perciba y tema su propia vulnerabilidad y nuestra invencibilidad». A eso lo llama «dominio rápido», o «cómoción y pavor». Ullman sugirió en una ocasión que sería una buena idea emplear ondas electromagnéticas para atacar el sistema neurológico de las personas y dejarlas aterrorizadas.¹⁵

Con el objetivo de evitar por completo las bajas militares, nuestro gobierno ha llegado a declarar que es necesario retomar las pruebas nu-

cleares y conseguir una serie de armas nucleares de «bajo rendimiento». Además, ha propuesto que en lugar de afrontar la proliferación nuclear mediante los tratados y la presión internacional, es necesario emprender una «contra-proliferación», lo que el analista Jonathan Schell ha llamado las «guerras de desarme». La Revisión de la Postura Nuclear del gobierno, de marzo de 2002, identificó a Rusia, China, Corea del Norte, Irak, Irán, Siria y Libia como objetivos potenciales del armamento nuclear, y presentó un plan para la construcción de un «robust nuclear earth penetrator» (una cabeza nuclear capaz de penetrar en la tierra a gran profundidad), así como de una nueva central para la fabricación de armas nucleares, un nuevo misil balístico intercontinental, un nuevo misil de lanzamiento submarino y un nuevo bombardero. El Pentágono, en un documento que fue filtrado en enero de 2003, reveló que deseaba obtener «mini bombas atómicas», con un poder explosivo inferior a un kilotón (la bomba de Hiroshima era de veinte kilotones) y bombas de neutrones; y abogaba por una «plataforma sobre el arsenal del futuro», para estudiar «qué tipo de pruebas requerirán esos nuevos diseños».¹⁶

Aunque nuestro gobierno promovió de forma activa el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1970, las propuestas armamentistas de la administración Bush constituyen una violación patente de su artículo 6, el cual «exige que los cinco estados que originalmente poseen armas nucleares procedan a tomar medidas para un desarme nuclear efectivo». Todo uso de armas nucleares constituye también una violación a primera vista de la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de las Naciones Unidas de 1948, de la que Estados Unidos es firmante. No obstante, en una declaración efectuada en 1995 ante el Tribunal Internacional de Justicia, nuestro país defendió el uso del armamento nuclear con el argumento de que «la matanza deliberada de un gran número de personas» sólo se considera genocidio si el agresor se propone acabar «total o parcialmente con un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal».¹⁷

La guerra de alta tecnología invita a la especie de judo creativo que emplearon los terroristas de Al Qaeda el 11 de septiembre. Al utilizar como armas de destrucción masiva las aerolíneas nacionales americanas, asesinaron a un gran número de víctimas inocentes. Estados Unidos teme que los terroristas adquieran material de fisión, o que algún «estado canalla» se lo proporcione, aunque resulta mucho más proba-

ble que lo consigan mediante el robo bien sea de las inmensas reservas nucleares de Estados Unidos o de las de Rusia, mucho menos protegidas. Es casi seguro que el ántrax, empleado como arma biológica en los atentados terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos, provino de las reservas del propio Pentágono, y no de algún país del Tercer Mundo azotado por la pobreza.¹⁸

El gobierno tiene otras formas de llevar a cabo su nueva estrategia mundial sin ensuciarse las manos, incluido lo que denomina (como sus aliados israelíes) «asesinatos selectivos». En febrero de 2003, la administración Bush pidió al gobierno israelí que le aconsejara sobre cómo crear una justificación legal para el asesinato de los sospechosos de terrorismo. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2003, el presidente Bush dijo que los casos de algunos presuntos terroristas que no habían sido arrestados y llevados a juicio se habían «resuelto de otra forma», y comentó que «más de tres mil presuntos terroristas han sido detenidos en gran número de países, y muchos otros han encontrado otro fin. Digámoslo del siguiente modo: ya no representan un problema para Estados Unidos, ni para nuestros amigos y aliados».¹⁹

Si la perspectiva de una guerra perpetua se cierne sobre el mundo, difícilmente se podría considerar que la situación de Estados Unidos es mejor. El militarismo y el imperialismo amenazan el gobierno democrático de la nación, al igual que hacen peligrar la independencia y la soberanía de otros países. Que George W. Bush y sus partidarios sean capaces de conseguir un «cambio de régimen» en todo un abanico de países es algo que aún está por verse; sin embargo, ciertamente parecen estar llevando a cabo ese cambio en nuestro propio país. En el segundo debate presidencial, el 11 de octubre de 2000, Bush bromeó: «Si esto fuera una dictadura, sería muchísimo más fácil, mientras fuera yo el dictador». Poco más de un año después, al contestar a una pregunta del periodista Bob Woodward, del *Washington Post*, Bush dijo: «Yo estoy al mando —mira, no tengo que dar explicaciones—, no necesito explicar por qué digo lo que digo. Eso es lo interesante de ser presidente. Tal vez los demás deban explicarme por qué han dicho algo, pero yo no siento que le deba explicaciones a nadie».²⁰

Bush y su administración han trabajado sin descanso para aumentar los poderes de la presidencia, a expensas de los demás poderes del gobierno y de la Constitución. El artículo 1, sección 8 de la Constitución dice de forma explícita: «El congreso ha de tener el poder de de-

clarar la guerra». Prohíbe que el presidente tome esa decisión. El autor más influyente de la Constitución, James Madison, escribió en 1793: «En ninguna otra parte de la Constitución existe más sabiduría que en la cláusula que confiere al legislativo la cuestión de la guerra y la paz, y no al ejecutivo. ... El deber y la tentación serían demasiado fuertes para un solo hombre».²¹ Sin embargo, después del 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush declaró, de forma unilateral, que el país estaba «en guerra», más o menos para siempre, contra el terrorismo, y el portavoz de la Casa Blanca observó más tarde que el presidente «considera que cualquier oposición a su política es nada menos que un acto de traición».²²

Del 3 al 10 de octubre de 2002, durante la «semana de la vergüenza» del congreso (según la expresión del analista de los asuntos militares Winslow T. Wheeler), las dos cámaras votaron a favor de conceder al presidente la autoridad, sin límites de tiempo, para ir a la guerra contra Irak (296 votos a favor y 33 en contra en la cámara de representantes y 77 a favor y 23 en contra en el senado). El presidente recibió, asimismo, poder ilimitado para emplear cualquier medio, incluidas la fuerza militar y las armas nucleares, en un ataque preventivo contra Irak, siempre que él —y sólo él— lo juzgara «adecuado». No hubo debate. Los congresistas se encontraban demasiado acobardados políticamente para abordar el tema. En vez de eso, el senador republicano Pete Domenici ensalzó el 4-H Club, una especie de fraternidad dedicada a ayudar a los jóvenes granjeros, por su centenario; el senador republicano Jim Bunning habló de los Futuros Granjeros de América en su estado; y la senadora demócrata Barbara Boxer dedicó a sus colegas una breve historia de la ciudad de Mountain View, California (aunque votó en contra de la resolución). Después de semejante desastre, concluyó Wheeler, lo único que el pueblo debía a sus representantes era «un billete para un viaje al cubo de la basura de la historia».²³

La administración Bush también se atribuyó la facultad de juzgar de manera unilateral si un ciudadano estadounidense formaba parte de una organización terrorista y podía, por tanto, ser desposeído de todos sus derechos constitucionales, incluidas las garantías, otorgadas por la sexta enmienda, de un juicio justo ante un jurado de iguales, de la asistencia de un abogado defensor, del derecho a enfrentarse a sus acusadores, de la protección contra la autoincriminación y, lo que es más importante, de la exigencia de que el gobierno dé a conocer públicamente los car-

gos en su contra. Los casos clave son aquí los de dos ciudadanos estadounidenses nativos: Yasir Esam Hamdi y José Padilla.

Hamdi, de veintidós años, nació en Baton Rouge, Luisiana, pero creció en Arabia Saudí. El Pentágono declaró inicialmente que había sido capturado cuando luchaba junto a los talibán en Afganistán. En un informe posterior más detallado, reconoció que Hamdi se había entregado a las fuerzas de la Alianza del Norte, los señores de la guerra a los que habíamos pagado para que lucharan a nuestro lado, sin haber participado en ningún tipo de combate. Hamdi fue entregado a los militares norteamericanos y trasladado al campo de detención de Guantánamo, en Cuba, donde muchos extranjeros detenidos en el exterior se encuentran actualmente secuestrados. Los funcionarios de la prisión, al descubrir que el detenido era ciudadano americano, y temer, por consiguiente, la intervención de los tribunales, le enviaron a una prisión naval en Norfolk, Virginia, donde le mantuvieron incomunicado. Como ciudadano, Hamdi tendría que haber recibido las debidas garantías procesales recogidas en la Constitución, pero el Departamento de Justicia alega que, habiendo sido señalado por el presidente como «combatiente enemigo», puede mantenerse detenido de forma indefinida y sin ver a un abogado, simplemente porque el presidente lo dice.

El 19 de junio de 2002, representantes de la administración Bush y el Pentágono trazaron las líneas generales de una demanda dirigida al Cuarto Tribunal Federal de Apelaciones, en la que reivindicaban unos poderes presidenciales de un alcance tan asombroso que no encuentran respaldo ni en la Constitución ni en la ley ni en los precedentes. «Las fuerzas armadas», sostienen, «tienen la facultad de arrestar y detener a las personas que hayan determinado que son combatientes enemigos ... incluso a los combatientes enemigos que declaren poseer la ciudadanía estadounidense. Además, esos combatientes no tienen derecho a un abogado que defienda su puesta en libertad.» Sostuvieron, asimismo, que «los tribunales no podrán revisar la calificación de combatiente enemigo efectuada por los militares», pues en tal caso invadirían la «autoridad plenaria del presidente, como comandante en jefe»; la cual, supuestamente, incluye la facultad de ordenar «la captura, la detención y el tratamiento del enemigo, y la obtención y valoración de las informaciones vitales para la seguridad nacional». Los tribunales deberían confiar en las fuerzas militares «cuando se les solicite que revisen las decisiones militares en tiempo de guerra».

Sin embargo, dado que sólo el congreso puede declarar la guerra, la «guerra contra el terrorismo» proclamada personalmente por el presidente no es más que un ardid retórico. No existe una guerra contra el terrorismo que posea una validez jurídica. Aún más, el presidente no goza de autoridad «plenaria» (absoluta e incondicional) en su papel de comandante en jefe, puesto que tanto él como los militares, en teoría, ejercen su poder sometidos a la autoridad presupuestaria del congreso. La afirmación de que un comandante militar, al actuar bajo las órdenes del presidente, puede ser «el legislador supremo, el juez supremo y el ejecutivo supremo» en su área de responsabilidad fue rechazada por nuestro tribunal supremo tras la guerra civil. En *Ex Parte Milligan* (1866), el tribunal sostuvo que «la ley marcial nunca puede existir donde estén abiertos los tribunales y mantengan el ejercicio propio y sin obstáculos de su jurisdicción».²⁴ El juez federal que presidió la audiencia del caso Hamdi desestimó todas las afirmaciones gubernamentales, a lo que el representante del procurador general sencillamente contestó: «La presente detención es legal». El juez preguntó: «Entonces, ¿la constitución no se aplica al señor Hamdi?». No obtuvo respuesta. Hamdi permanece en confinamiento militar hasta que el tribunal supremo, el mismo que intervino en las elecciones de 2000 para designar a Bush como presidente, considere su apelación, si es que algún día lo hace.

El caso de Padilla es similar. Norteamericano de origen puertorriqueño nacido en Brooklyn, Padilla (conocido como Abdullah al-Muhajir después de su conversión al islam a mediados de la década de 1990) fue detenido por agentes federales el 8 de mayo de 2002 en el aeropuerto O'Hare de Chicago, cuando regresaba de un viaje a Pakistán. Se le mantuvo un mes sin acusación y sin poder comunicarse con un abogado ni con el mundo exterior. Finalmente, el 10 de junio, durante una visita a Rusia, el fiscal general John Ashcroft realizó el sensacional anuncio de que Padilla había estado conspirando con Al Qaeda para hacer explotar una «bomba sucia» en algún lugar de Estados Unidos. En la víspera de la presentación de Padilla ante un tribunal federal de Nueva York, sin embargo, el detenido fue trasladado precipitadamente a una prisión militar en Charleston, Carolina del Sur, al tiempo que el presidente Bush le llamaba públicamente «un mal tío» y «combatiente enemigo». No se levantaron cargos contra él, y todas las solicitudes para que el gobierno presente sus acusaciones, mediante el procedimiento del *habeas corpus*, han sido denegadas con la argu-

mentación de que los tribunales no tienen jurisdicción sobre un prisionero militar.²⁵

Es posible que el gobierno haya recurrido a esta estratagema en vista de que las únicas pruebas que posee contra Padilla son declaraciones de los prisioneros de Guantánamo, que, como es sabido, no son fiables. El fiscal general Ashcroft, un notorio «chupa cámaras», puede haber realizado su anuncio sólo para obtener publicidad personal, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Hasta el representante más duro de la línea dura del gobierno, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, dijo a CBS News: «No creo que existiera de hecho una conspiración, más allá de algunas conversaciones sueltas y de la llegada de Padilla obviamente para planear más acciones».²⁶ Mientras tanto, Padilla permanece detenido en una prisión militar, sin acusación, sin representación y sin libertad.

La administración Bush ha aumentado el poder presidencial a expensas de la Constitución en otro ámbito, gracias al Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, una institución poco conocida y completamente secreta que amenaza con convertirse en la versión estadounidense de la Cámara Estrellada, el tribunal personal de Enrique VIII dedicado a tomar medidas contra sus adversarios y a azotarlos, ponerlos en la picota y marcarlos con hierro candente. El tribunal fue creado tras el escándalo del Watergate. Hasta este episodio, el Buró Federal de Investigación y la Agencia Central de Inteligencia habían actuado ilegalmente durante décadas, pinchando las llamadas telefónicas de los ciudadanos, abriendo su correo y entrando de forma subrepticia en sus casas, para fisgonear en busca de información que pudiera ser utilizada para chantajearlos o difamarlos. Tras la renuncia de Richard Nixon, el comité del senado encargado de investigar estas prácticas reveló que, entre 1953 y 1973, el Servicio Postal de la ciudad de Nueva York había entregado a la CIA, de forma ilegal, más de veintiocho millones de cartas.

En uno de los pocos casos concretos que salieron a la luz, el FBI admitió haber utilizado la información que obtuvo ilegalmente para inventar una historia, que consiguió introducir en la revista *Newsweek*, y difamar a la actriz Jean Seberg; como consecuencia de esto, Seberg, quien entonces estaba embarazada, se suicidó. Quince meses después, su muerte condujo a su vez al suicidio de su marido, el novelista y diplomático francés Romain Gary. La finalidad de la historia, que se fundaba en par-

te en informaciones obtenidas de manera ilegal, era «avergonzarla y rebajar su imagen ante la opinión pública».²⁷ En 1974 el pueblo se enteró por primera vez de que el FBI había espiado ilegalmente a más de diez mil ciudadanos, entre los que se incluían prácticamente todos los políticos del país, al igual que personalidades como Martin Luther King.

Para someter al FBI y la CIA a una apariencia de control, el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), firmada por el presidente Jimmy Carter el 25 de octubre de 1978. Esa ley permitía que el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional continuaran efectuando operaciones de inteligencia contra ciudadanos norteamericanos dentro de Estados Unidos, pero sólo bajo la supervisión de un nuevo tribunal federal secreto, conocido como Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISC). En los casos que no están relacionados con actividades de espionaje, el FBI ha de solicitar a un juez federal ordinario una autorización legal para entremeterse en la vida privada de un presunto delincuente. Debe, además, cumplir el criterio de los «indicios razonables de criminalidad» y proporcionar al juez pruebas de que determinada persona está cometiendo, ha cometido o está a punto de cometer un delito. La Cuarta Enmienda declara sin ambigüedades: «El derecho de las personas a sentirse seguras respecto a sus personas, sus casas, sus papeles y sus pertenencias ante las búsquedas, incautaciones y detenciones irrazonables no ha de ser quebrantado, y no deben emitirse mandatos sino con una causa probable, respaldada por un juramento o afirmación, y esas órdenes han de describir el lugar que tiene que ser registrado y las personas o las cosas que tienen que ser detenidas o incautadas». Al crear el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, el congreso razonó que si bien vigilar espías no era lo mismo que atrapar ladrones, debería existir, en todo caso, alguna forma de supervisión judicial que mantuviera a raya a los investigadores y mirones federales. No ha funcionado de esa manera.

El tribunal estaba conformado originalmente por siete jueces federales designados por el juez presidente del tribunal supremo; la Ley Patriota, firmada por el presidente Bush el 26 de octubre de 2001, elevó su número a once. La identidad de los jueces es secreta. Se reúnen con total privacidad detrás de una puerta protegida por una clave secreta, en una sala acorazada sin ventanas y a prueba de micrófonos, vigilada las veinticuatro horas del día y situada en la última planta del edificio del Departamento de Justicia, en Washington, DC.²⁸ Todo lo que hacen esos

jueces es del «máximo secreto». Desde que se creó el tribunal, el FBI y la NSA han solicitado unas trece mil órdenes judiciales para espiar electrónica o físicamente a los ciudadanos, y los jueces sólo se han negado a proporcionar una de ellas. Los jueces sólo escuchan la versión del gobierno. La corte realiza informes anuales para el congreso, por lo general de dos párrafos, pero éstos contienen únicamente el número total de órdenes judiciales expedidas. Asimismo, el congreso no ejerce ninguna supervisión sobre las actividades del tribunal. Patrick S. Poole, experto en las actividades del tribunal, concluye: «El FISC se ha limitado a ser un tribunal de mero trámite».²⁹

Desde el 11 de septiembre de 2001, la situación, de hecho, ha empeorado. De acuerdo con la antigua Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, los oficiales de la ley sólo podían solicitar una orden judicial si el propósito *principal* de la investigación era la recopilación de información. No obstante, la Ley Patriota, que fue aprobada a toda prisa por 98 votos a favor y 1 en contra en el senado, y por 357 a favor y 66 en contra en la cámara de representantes, autoriza que se expidan órdenes FISA cuando la obtención de información no es más que un propósito *significativo* en la investigación.³⁰ La Ley Patriota también autoriza al gobierno a espiar la navegación por internet de sus ciudadanos, e incluso a recoger las palabras que introducen en buscadores como Google. No es necesario que la persona espiada sea el objeto de la investigación, y el gobierno no está obligado a rendir cuentas al tribunal ni a informar al respecto a los implicados.

Antiguamente, las órdenes FISA sólo se emitían para obtener datos de inteligencia. Esa información no debía ser proporcionada, bajo ninguna circunstancia, a los fiscales federales, que podrían usarla para conseguir un auto de procesamiento, dado que eso es, precisamente, lo que prohíbe la Cuarta Enmienda. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Patriota, la información reunida con una orden judicial FISA se transmite rutinariamente a los fiscales. Numerosos observadores sospechan que los fiscales federales han estado utilizando la FISA habitualmente para derribar las salvaguardias constitucionales. Además, la ley FISA permite que en caso de necesitarse un «registro de emergencia», éste puede ser autorizado por el fiscal general, que debe justificar el registro ante el FISC dentro de las siguientes 72 horas. Entre el 11 de septiembre de 2001 y principios de 2003, el fiscal general John Ashcroft autorizó más de 170 registros de emergencia, más del triple de los 47 que ha-

bían concedido todos los anteriores fiscales generales en los últimos veinte años.³¹

El 17 de mayo de 2002, un acontecimiento inusual permitió que quienes lo desconocen todo sobre este mundo secreto tuvieran por primera vez una idea de lo que ocurre allí dentro. Ashcroft solicitó al FISC que le permitiera desdibujar, aún más de lo permitido por la Ley Patriota, la distinción entre controlar espías y atrapar delincuentes, y el tribunal se lo denegó. Además, el tribunal envió una copia de su parecer al Comité Judicial del senado estadounidense, que lo hizo público el 22 de agosto de 2002. En ese pronunciamiento, los jueces del tribunal criticaron de forma unánime a los agentes del FBI por engañarlos en 75 casos distintos de escuchas, y prohibieron a un agente —el supervisor a cargo de la vigilancia de la organización palestina Hamás en Estados Unidos— volver a presentarse ante ellos. Su reprimenda fue una de las más severas que un tribunal haya dirigido al FBI.

El fiscal general apeló esta decisión ante un tribunal todavía más oscuro —el Tribunal de Revisión de la FISA—, una plataforma especial de tres jueces creada por la FISA con el objetivo de supervisar el tribunal de vigilancia. Este Tribunal de Revisión no se había reunido nunca. La apelación de Ashcroft fue el primer caso llevado ante él en sus veintitrés años de historia. Se compone de tres jueces casi retirados, cuyos nombres, a diferencia de los jueces del FISC, se han hecho públicos; los tres son republicanos y fueron designados para el tribunal federal por el presidente Ronald Reagan y, posteriormente, para períodos de siete años en el tribunal de revisión especial por William Rehnquist, presidente del supremo. No es de extrañar que el Tribunal de Revisión de la FISA desautorizara al FISC y otorgara al fiscal general Ashcroft la autoridad adicional que solicitaba.³² La conclusión es inevitable: un año y medio después del 11 de septiembre de 2001, al menos dos artículos de la Carta de Derechos, el cuarto y el sexto, eran letra muerta, y la segunda parte de la vieja advertencia de Thomas Jefferson, de «que cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad; cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía», era de evidente aplicación.

El 7 de febrero de 2003, la portavoz del Departamento de Justicia, Barbara Comstock, dijo a la prensa: «Las deliberaciones del departamento siempre se toman con el mayor respeto hacia nuestra Constitución y hacia las libertades civiles».³³ Esta declaración nos lleva al tercer mal consecuencia del imperialismo y el militarismo: la sustitución de la

verdad por la propaganda y la desinformación, y la aceptación de la hipocresía como norma para las declaraciones que provienen de nuestro gobierno.

La mentira oficial crece de forma exponencial cuando el imperialismo y el militarismo toman las riendas. Nuestro estamento militar considera la propaganda como una de sus nuevas funciones principales. En el otoño de 2001, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld creó en el Pentágono una «Oficina de Influencia Estratégica», con la función de llevar a cabo lo que los planificadores de la defensa denominan la «guerra de la información»: la utilización de la desinformación y la propaganda contra los enemigos exteriores, así como contra los críticos internos que no apoyen las políticas presidenciales. Sólo cuando resultó evidente que las operaciones de la nueva oficina incluirían la distribución de historias falsas a los medios de comunicación estadounidenses, Rumsfeld declaró que quizá todo había sido una equivocación y, oficialmente, canceló la operación.

Sin embargo, la idea no desapareció. En el otoño de 2002, Rumsfeld creó un nuevo cargo, el de subsecretario adjunto de defensa para «planes especiales» (un eufemismo de «operaciones de engaño»). Esas misiones van más allá de las actividades militares tradicionales, como las de causar interferencias en los radares enemigos, o desbaratar las redes de comando y control. Las operaciones de engaño comprenden administrar (y restringir) la información a disposición del público, controlar las nuevas fuentes de información y manipular a la opinión pública. Tal como explicó la fuerza aérea, los militares deben evitar que «los medios de comunicación se dirijan a otras fuentes [los adversarios y los críticos, por ejemplo] para obtener informaciones. ... Las fuerzas estadounidenses y aliadas deben procurar convertirse en las fuentes de información preferidas». El analista de temas militares William M. Arkin escribe que «la guerra de la información implica controlar tanto como sea posible lo que el público norteamericano ve y lee». ³⁴ En enero de 2003, la Casa Blanca prosiguió con la creación de la «Oficina para las Comunicaciones Globales», su propia versión del organismo de propaganda del Pentágono creado por Rumsfeld. Parece que sus funcionarios se pasan el tiempo aleccionando a los generales para que ofrezcan secciones informativas a los medios de comunicación y fichando a estrellas de la administración para que aparezcan en los programas de noticias nacionales e internacionales. El propósito declarado de la oficina es lograr que «todos los co-

mentarios de los funcionarios del gobierno estadounidense sean antes aprobados por la Casa Blanca». ³⁵

Las operaciones características de la guerra de la información abarcan desde proyectos triviales hasta tareas importantes, como la de inventar pretextos para la guerra. Un ejemplo de los primeros ocurrió el 27 de enero de 2003, cuando el gobierno dispuso que se colocara una gran cortina azul sobre un tapiz colgado junto a la entrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reproducía el *Guernica* de Picasso. La famosa representación del atroz bombardeo de la población vasca por la fuerza aérea de Hitler es, quizá, la declaración antibélica más poderosa del arte moderno. El gobierno estadounidense decidió que la carnicería ocasionada por el bombardeo aéreo resultaba un telón de fondo inadecuado para las declaraciones del secretario de Estado y el embajador ante las Naciones Unidas, declaraciones que serían televisadas y podrían conducir al bombardeo de las ciudades iraquíes.

Otro ejemplo de las operaciones típicas de la guerra de la información fue la campaña emprendida en febrero de 2003 por Bruce Jackson en apoyo de la guerra contra Irak. Jackson, antes funcionario del Departamento de Defensa y luego presidente de un «Comité para la Liberación de Irak», desempeñó un «papel considerable» en la redacción de una declaración «de apoyo» al plan de Estados Unidos para invadir Irak y en conseguir después que diez pequeños países europeos, los llamados Diez de Vilna (Albania, Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia), la suscribieran. Al presidente francés Jacques Chirac le irritó tanto esa intromisión en los asuntos europeos que amenazó con bloquear la entrada de esos países en la Unión Europea durante la cumbre celebrada en Bruselas el 17 de febrero de 2003. ³⁶

Otra función de la guerra de la información es la «descontaminación» de los efectos bumerán y otros incidentes negativos consecuencia de nuestras acciones que, aunque resulten embarazosos, no pueden ser negados. Las técnicas de descontaminación incluyen las mentiras descaradas, declarar secretos documentos importantes, rechazar las solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, negarse a cooperar, las dilaciones, y los intentos deliberados de confundir a la opinión pública (como ocurrió, por ejemplo, en los casos del Agente Naranja y del síndrome de la guerra del Golfo). Una estrategia especial consiste en acuñar nuevas expresiones para sugerir que el Pentágono

siempre ha tenido el control de la situación, para proporcionar al acontecimiento, acción o fenómeno embarazoso un aura falsamente científica, o para reducir su importancia. Un ejemplo clásico es la expresión «daños colaterales» referida a la matanza de inocentes durante un ataque militar. El término más reciente para los incidentes como el de la venta de armas a Sadam Husein por parte de la administración Reagan es «miopía de misión», lo que significa que los esforzados oficiales se encontraban tan centrados en la tarea que llevaban a cabo en ese momento que no se preocuparon por sopesar sus futuras repercusiones.³⁷ El secretario de Defensa Donald Rumsfeld es en extremo aficionado a los neologismos al estilo de «disuasión avanzada» y «ataques no advertidos», a los que parece considerar innovaciones estratégicas. Tal vez no esté más que intentando disimular sus nombres más familiares: «agresión», esto es, lo que la Alemania nazi le hizo a Rusia el 22 de junio de 1941, y «ataque por sorpresa», lo que los japoneses nos hicieron a nosotros en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.

Es probable que la función más corrupta de la guerra de la información sea la de inventar noticias para justificar la política del presidente y su gabinete. Constituye un delito penal, aunque en raras ocasiones conduce a los tribunales. Envuelve una conspiración formada por expertos técnicos, agentes de operaciones, supervisores y líderes, que tiene como fin falsificar pruebas y endosárselas a políticos que, a veces, no se percatan de ello, a periodistas cómplices o timoratos y al público confiado. Cuando se descubre el fraude, resulta inevitable que la credibilidad de los funcionarios y las agencias gubernamentales que lo cometieron quede en entredicho. También hace probable que el pueblo no crea luego al presidente cuando éste advierta sobre verdaderas amenazas inminentes descubiertas por los servicios de inteligencia.

A lo largo del tiempo, muchos gobiernos han fabricado excusas para ir a la guerra. Tal vez el caso paradigmático lo constituye la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939: Alemania sostuvo que venía el ataque de soldados polacos, que, según dijo, habían tomado una estación de radio y transmitían desde ella declaraciones hostiles. Después de la guerra se reveló que los «invasores» eran en realidad tropas alemanas de las SS vestidas con uniformes polacos. El gobierno estadounidense también posee un largo y triste historial de excusas inventadas para las acciones bélicas, que van desde la creación de un clima de histeria con respecto al hundimiento en 1898 del acorazado *Maine* en

La Habana, hasta la utilización por el presidente Lyndon Johnson de un ataque inexistente contra un destructor norteamericano en el golfo de Tonkin, en 1965, para conseguir que el congreso aprobara una campaña de bombardeos masivos contra Vietnam del Norte.

De hecho, durante la década de 1960, el Estado Mayor Conjunto entregó al secretario de Defensa Robert McNamara una propuesta, apodada Operación Bosques del Norte, para que las fuerzas armadas, clandestinamente, tirotearan a personas inocentes en la calle, hundieran barcos con refugiados cubanos y realizaran atentados terroristas en Washington, Miami y otros lugares, para luego acusar de ello a agentes cubanos. El objetivo, después de la fallida operación de la bahía de Cochinos, era proporcionar una excusa para invadir Cuba otra vez. Todos los miembros del Estado Mayor Conjunto suscribieron la propuesta. McNamara, sin hacer ruido, se negó a llevarla a cabo y unos meses después forzó el retiro del general Lyman Lemnitzer, entonces presidente del organismo.³⁸

El 5 de febrero de 2003, el secretario de Estado Colin Powell se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para preparar el escenario bélico mediante la presentación de lo que denominó información secreta «definitiva», información que, aseguró, demostraba la existencia de armas químicas, biológicas y nucleares en Irak. Los esfuerzos del secretario de Estado por imitar al embajador Adlai Stevenson, quien en 1962 presentó ante la ONU las fotografías que mostraban los emplazamientos de los misiles nucleares rusos en Cuba, fueron acaso excesivos. Powell fue con sus propias ampliaciones de las fotos de los satélites de reconocimiento; y, al parecer para dar más credibilidad a su presentación, situó al director de la CIA, George Tenet, en una silla justo detrás de él. Tenet apareció en todas las imágenes televisivas del pronunciamiento de Powell. No realizó ningún comentario, pero su presencia parecía indicar que lo que el secretario de Estado decía contaba con el pleno respaldo de la CIA.

En su declaración ante el Consejo de Seguridad, Powell apuntó a una fotografía sacada por un satélite el 10 de noviembre de 2002 y dijo: «Miren la imagen de la izquierda. A la izquierda tenemos un primer plano de uno de los cuatro búnkeres químicos. ... El camión que también ven es una marca característica. Es un vehículo de descontaminación, para el caso de que algo salga mal. Esto es típico de los cuatro búnkeres». Powell enseñó otra fotografía, que mostraba los vehículos de la ONU lle-

gando al mismo sitio el 22 de diciembre de 2002, y dijo que «los camiones característicos han desaparecido. ... Irak se había preparado para las inspecciones». El 14 de febrero de 2003, el jefe de los inspectores de las Naciones Unidas, Hans Blix, criticó frontalmente ese testimonio y señaló que sus inspectores habían visitado con frecuencia el sitio que mostraba la foto de Powell y que el camión era sólo un camión. Dijo asimismo: «Desde que llegamos a Irak, hemos efectuado más de cuatrocientas inspecciones en más de trescientos emplazamientos. Todas las inspecciones se realizaron sin previo aviso, y casi siempre se nos permitió el acceso con prontitud. No hemos visto en ningún caso pruebas convincentes de que los iraquíes supieran por adelantado que los inspectores iban a llegar».³⁹

Powell declaró en las Naciones Unidas: «Hicieron falta años para que Irak admitiera por fin que había producido cuatro toneladas del letal agente nervioso VX. Una sola gota en la piel mata en minutos. Cuatro toneladas. La admisión sólo se produjo cuando los inspectores obtuvieron documentación, tras la desertión de Husein Kamel, el fallecido yerno de Sadam Husein». El presidente Bush realizó declaraciones parecidas en un discurso el 7 de octubre de 2002, y lo mismo hizo el vicepresidente Cheney en otro pronunciamiento el 27 de agosto de 2002. Lo que los tres sabían era que el teniente general Husein Kamel había dicho también que «después de la guerra del Golfo, Irak destruyó todas sus existencias de armas químicas y biológicas, así como los misiles para lanzarlas». Un ayudante de las fuerzas armadas que desertó con él respaldó su afirmación. Kamel fue interrogado en Jordania por la CIA, por la inteligencia británica (el MI6) y por el director del equipo de inspectores de la ONU en la época, Rolf Ekeus. Los tres acordaron mantener en secreto las declaraciones de Kamel, supuestamente para evitar que Sadam Husein descubriera cuánto sabían. El 26 de febrero de 2003, Glen Rangwala, un especialista en Oriente Próximo de la Universidad de Cambridge, obtuvo una copia completa de la transcripción de las declaraciones de Kamel. Según la transcripción, Kamel dijo sin rodeos: «Todas las armas —biológicas, químicas, misiles y nucleares— fueron destruidas».⁴⁰ Eso es lo que había dicho todo el tiempo Scott Ritter, un alto miembro del equipo de inspectores de armas de la ONU en Irak durante la década de 1990.⁴¹

Husein Kamel, que desertó de Irak en agosto de 1995, fue de lejos la más importante fuente de información respecto a Irak desde la prime-

ra guerra del Golfo. En una carta del 25 de enero de 1999 dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Rolf Ekeus relató que los ocho años de los trabajos de desarme transcurridos desde el fin de la guerra «deben dividirse en dos partes, separadas por los acontecimientos que se siguieron a la marcha ... del teniente general Husein Kamel». Como yerno de Sadam Husein, Kamel fue durante diez años el encargado de los programas de armas nucleares, químicas, biológicas y de misiles de Irak. Cuando huyó a Jordania, llevó consigo cajas de documentos secretos, pues al parecer pensaba que sus revelaciones ocasionarían el derrocamiento de Sadam y que, entonces, podría sustituirlo. Después de seis meses, concluyó que su plan no estaba funcionando y regresó a Bagdad, para intentar reconciliarse con su suegro, algo que no consiguió. Sadam mandó ejecutarlo. Desde 1995, innumerables funcionarios estadounidenses han citado informaciones que Kamel proporcionó a los servicios de inteligencia occidentales, sin hablar jamás del hecho de que él había ofrecido pruebas igualmente contundentes de que las armas de Sadam ya no existían.

Entre las innumerables declaraciones que el secretario de Estado Powell efectuó el 5 de febrero de 2003, se encontraba un imprudente cumplido a la inteligencia británica por presentar un expediente sobre cómo Sadam Husein estaba escondiendo su armamento: «Llamo la atención de mis colegas hacia el excelente documento que ha distribuido el Reino Unido ... el cual describe con exquisito detalle las actividades engañosas iraquíes». Dos días después de la declaración de Powell, la prensa británica, basándose en una indicación del profesor Rangwala, reveló que el documento que Powell había alabado era un plagio de unos artículos publicados en *Jane's Intelligence Review*, uno de los cuales tenía ya seis años, y de un trabajo de Ibrahim al-Marashi, un estudiante norteamericano de origen chií iraquí, del Instituto de Estudios Internacionales de Monterey, California. Marashi publicó su artículo en el número de septiembre de 2002 del *Middle East Review of International Affairs*, una publicación académica israelí. Los servicios de inteligencia británicos no sólo realizaron citas textuales de esas fuentes ya publicadas, sin señalar su verdadera autoría, sino que reprodujeron hasta los errores tipográficos y de puntuación de los originales.⁴²

Tras ese desempeño más que dudoso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario Powell se repitió ante Peter Jennings, el presentador de ABC News: «Pienso que tengo mejor información que los inspec-

tores, pienso que dispongo de más bazas que los inspectores». ⁴³ Una de esas bazas resultaros ser unas cartas entre Irak y Nigeria, con las que se pretendía demostraran que entre 1999 y 2001 Nigeria había acordado vender uranio a Irak. En su discurso del estado de la Unión del 28 de enero de 2003, el presidente Bush hizo referencia a esa prueba: «El gobierno británico ha descubierto que Sadam Husein intentó obtener recientemente cantidades significativas de uranio en África». El secretario Powell hizo entrega de esos documentos a Mohamed el Baradei, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), como prueba de las acusaciones angloamericanas de que Irak había retomado sus esfuerzos para la producción de armas nucleares después de que las inspecciones de la ONU terminaran en 1998.

Las alegaciones acerca de la compra de uranio por Irak en realidad aparecieron por primera vez en un informe del gobierno británico publicado el 24 de septiembre de 2002, que no nombraba a Nigeria como la fuente del material. El 19 de diciembre de 2002 el Departamento de Estado de Estados Unidos explicó con más detalle los originales británicos y dijo por primera vez que Nigeria había suministrado el material de fisión nuclear. No obstante, según el *Washington Post*, aunque los funcionarios de los servicios de inteligencia norteamericanos habían «revisado detalladamente» los documentos, no notaron los «errores relativamente groseros» existentes en las cartas, incluso nombres y títulos que no coincidían con los de las personas que ocupaban los cargos en la época en que, supuestamente, las cartas fueron escritas. ⁴⁴

El 7 de marzo de 2003, El Baradei declaró en el Consejo de Seguridad que «la IAEA pudo revisar la correspondencia proveniente de varios organismos del gobierno nigeriano y comparar la forma, el tamaño, el contenido y las firmas de esa correspondencia con la supuesta documentación relacionada con la adquisición. La IAEA, tras un profundo análisis, ha concluido con la colaboración de expertos externos a la agencia que los documentos, que constituyen la base de los informes sobre recientes transacciones de uranio entre Irak y Nigeria, son en realidad falsos. Por consiguiente, hemos concluido que esas alegaciones específicas son infundadas». ⁴⁵

Un último ejemplo de la fabricación gubernamental de información supuestamente obtenida a través de los servicios de inteligencia lo constituyen los vínculos entre Irak y Al Qaeda. El 7 de octubre de 2002, en una declaración ante el Comité de Inteligencia del Senado, George Tenet,

el director de la CIA, afirmó que la agencia no había conseguido encontrar lazos entre Bagdad y la red de Osama bin Laden. No obstante, Tenet se desdijo en una carta dirigida al mismo comité el 11 de febrero de 2003. Dos días más tarde, Ray McGovern, analista de la CIA durante veintisiete años, denunció a Tenet por «doblegarse ante la presión política». ⁴⁶ McGovern señaló que el 5 de febrero, en el Consejo de Seguridad, Tenet se sentó «como una planta» detrás de Powell y «no pestañeó siquiera» ante lo que oía. Lo que Tenet había conseguido era poner en entredicho las declaraciones basadas en el inmenso y caro aparato de inteligencia estadounidense, que ya no resultarían creíbles. Y al parecer también la integridad del secretario Powell había quedado seriamente comprometida.

Tras la segunda guerra de Irak, no se halló ningún tipo de arma no convencional que en términos de cantidad o letalidad pudiera siquiera aproximarse a las que el gobierno Bush había asegurado que se encontrarían. Los análisis posteriores a la guerra señalan con fuerza a un pequeño grupo de ideólogos a órdenes del subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz. Este grupo habría fabricado las informaciones, en ocasiones basándose en relatos de exiliados iraquíes ya desacreditados por la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, y después se las habrían proporcionado al secretario de Defensa, al secretario de Estado y al presidente. Un miembro de los servicios de inteligencia, entrevistado por el periodista Seymour Hersh para el *New Yorker*, dijo de este grupo: «No les gustaban los informes de inteligencia que recibían [de la CIA y la DIA], así que trajeron a otros para escribir el material. Estaban tan enloquecidos y fuera de sí, que resultaba difícil razonar con ellos, parecían poseídos. Eran dogmáticos, y se comportaban como si estuvieran realizando una misión divina. Si algo no encajaba en su teoría, se negaban a aceptarlo». ⁴⁷

No es usual que los ayudantes y consejeros del presidente de Estados Unidos le permitan utilizar informes de inteligencia falsos en un discurso del estado de la Unión. Aún es más extraño que, habiendo tenido lugar semejante metedura de pata, el director de la CIA conserve su empleo. La única explicación lógica es que los superiores políticos del director le hubieran dicho qué deseaban que se hiciera. De ser así, altos cargos gubernamentales habrían falsificado los pretextos para la segunda guerra de Irak y habrían engañado al congreso y el pueblo estadounidense. En una república constitucional, se trata de delitos que condu-

cen a los tribunales. El hecho de que esto ni siquiera se haya mencionado es otra señal, una más, de la decadencia que el militarismo y el imperialismo traen consigo.

El último de los males con que nos amenaza el imperio, la ruina financiera, difiere de los otros tres en que es posible que la quiebra no sea tan letal para la Constitución como lo son la guerra interminable, la falta de libertad o la mentira como hábito oficial; sin embargo, es la única amenaza que, con seguridad, generará una crisis, con independencia de cuán acobardado, dispuesto a negar las evidencias o mal informado se encuentre el pueblo. En 2003 es posible que Estados Unidos estuviera preparado *militarmente* para librar una guerra contra Irak, e incluso para una guerra contra Corea del Norte e Irán, pero desde el punto de vista económico no lo estaba ni siquiera para una de ellas, y mucho menos para las tres o —lo que es igual de importante— para sus repercusiones.

El dominio militar permanente del mundo es un negocio caro. Para el año fiscal 2003, nuestro proyecto de asignaciones militares, firmado el 23 de octubre de 2002, ascendía a 354.800 millones de dólares. Para el año fiscal 2004, el Departamento de Defensa solicitó al congreso que ese importe se elevara hasta los 379.300 millones de dólares, lo que se le concedió, además de los 15.600 millones para los programas de armas nucleares que administra el Departamento de Energía y de los 1.200 millones para la Guardia Costera. El importe total asciende a 396.100 millones de dólares. Esas cifras no incluyen los presupuestos de los servicios inteligencia, casi todos bajo el control del Pentágono, ni los gastos para la segunda guerra de Irak propiamente dicha, ni la solicitud adicional del Pentágono de 10.000 millones de dólares para la lucha contra el terrorismo. Cuando se presentó este gigantesco presupuesto en la cámara de representantes, sus aduladores se pasaron casi todo el tiempo preguntando al secretario de Defensa si estaba seguro de que no necesitaba más dinero, y sugiriéndole proyectos armamentísticos que podrían desarrollarse en sus respectivos distritos electorales. El mensaje que enviaban parecía ser: no importa cuánto gaste Estados Unidos en «defensa», nunca será suficiente. El presupuesto militar de Rusia, el segundo país con mayores gastos militares del mundo, es sólo un 14 por 100 del nuestro. Habría que sumar los presupuestos de defensa de los siguientes veintisiete países en la lista para igualar nuestros gastos.⁴⁸

La primera guerra del Golfo costó más de 61.000 millones de dólares. No obstante, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Ale-

mania, Japón, Corea del Sur y otros aliados de Estados Unidos contribuyeron con 54.100 millones, cerca del 80 por 100 del total, lo que dejó el aporte financiero norteamericano en apenas 7.000 millones.⁴⁹ Sólo Japón contribuyó con 13.000 millones. Nada de eso volverá a repetirse en el futuro. En vísperas de la segunda guerra de Irak, prácticamente el mundo entero estuvo de acuerdo en que, si la única superpotencia deseaba seguir adelante en la búsqueda de una victoria «preventiva», podía hacerlo por su propia cuenta.

El problema con las políticas unilaterales del gobierno Bush y de su insistencia en el poder militar es que Estados Unidos tiene, de hecho, muy poco dinero disponible. Las previsiones, basándose en el presupuesto de 2003, son de un déficit federal de 480.000 millones de dólares, si se excluyen los costes de la guerra de Irak. Prácticamente todos los estados del país afrontan una grave disminución de la recaudación fiscal y han solicitado ayuda financiera al gobierno federal, en especial para sufragar los programas antiterroristas y de defensa civil ordenados por el congreso. La Oficina de Presupuestos del Congreso proyecta déficit federales durante los próximos cinco años por la asombrosa cantidad de 1,08 billones de dólares, lo que se superpone a los 6,4 billones de dólares que alcanzaba la deuda gubernamental en febrero de 2003.⁵⁰

Lo que entraña igual gravedad, como ya mencionamos anteriormente, es que el déficit comercial del país resulta cada vez más difícil de financiar. En 2002, las importaciones de Estados Unidos superaron a sus exportaciones en la cifra récord de 435.200 millones. Ese déficit, de alrededor de un 5 por 100 del producto interior bruto (PIB), representa un dato estadístico inusual en un país con pretensiones imperiales. Durante el siglo XIX, el Imperio Británico obtuvo inmensos superávits de su cuenta corriente, lo que le permitió pasar por alto las consecuencias económicas de desastrosas empresas imperialistas como la guerra Bóer. En vísperas de la primera guerra mundial, Gran Bretaña tenía un superávit del 7 por 100 de su PIB.

Si se tiene en cuenta el problema del petróleo, el futuro parece todavía más sombrío. Estados Unidos importa alrededor de 3.800 millones de barriles de crudo al año, unos 10,6 millones de barriles al día. Esas importaciones se sitúan en el nivel más elevado jamás registrado, y provienen cada vez más de los países del golfo Pérsico. Las proyecciones de la administración Bush muestran que la dependencia norteamericana

de las importaciones crece de manera sustancial, sobre todo porque el gobierno es reacio a poner en práctica un programa serio con respecto a la eficacia de los automotores en cuanto al consumo de combustible. Algunos estrategas del Pentágono parecían pensar que, al conquistar Irak, Estados Unidos podía asegurarse su futuro suministro de petróleo y, al mismo tiempo, garantizar su dominio sobre otras regiones industrializadas, que verían amenazados sus propios suministros. Sin embargo, las reservas totales demostradas de petróleo iraquí constituyen poco más del 10 por 100 de las reservas mundiales, unos 112.500 millones de barriles.⁵¹ En cambio, Arabia Saudí posee alrededor del 25 por 100, unos 262.000 millones de barriles, y los demás estados del golfo, que a menudo cooperan con ese país, controlan otro 20 por 100. Arabia Saudí y sus aliados cuentan, asimismo, con otra gran ventaja: ellos solos pueden producir de forma rentable incluso si el petróleo alcanza precios muy bajos.

Una de los objetivos declarados de la administración Bush al emprender su guerra contra Irak era el de reemplazar al autoritario gobierno del país por una «democracia», un objetivo que, además, consideraba aplicable a otros países de Oriente Próximo. En vez de ese gran cambio, es muy probable que la estrategia de Bush genere una intensa oposición a los gobiernos islámicos que apoyaron o toleraron la guerra, lo que aceleraría la caída del gobierno saudí y de los pequeños reinos feudales en la zona del golfo. Es muy probable que un gobierno verdaderamente popular en Arabia Saudí sea hostil a Estados Unidos. Una interrupción seria del suministro saudí de petróleo produciría una catástrofe económica en Estados Unidos, aunque éste contara con el control exclusivo de la producción de crudo en Irak.⁵²

Las consecuencias económicas del imperialismo y el militarismo están transformando, asimismo, nuestro sistema de valores, al degradar la «libre empresa», a la que tantos norteamericanos celebran e identifican con la libertad. Nuestro estamento militar es, con mucho, la mayor burocracia de nuestro gobierno. El militarismo sustrae capital y recursos del mercado libre, y los asigna de manera arbitraria, de acuerdo con decisiones burocráticas impermeables a las fuerzas del mercado, pero con frecuencia sensibles a la influencia de la información privilegiada y al capitalismo de amigotes. Por ejemplo, el 10 de marzo de 2003, el gobierno invitó a cinco empresas de ingeniería a un concurso para trabajos de reconstrucción en Irak, entre ellas Kellogg Brown & Root, filial de la Halliburton Company, y Bechtel Group. Brown & Root, como hemos vis-

to, es la vieja empresa del vicepresidente Dick Cheney; Bechtel posee vínculos desde hace medio siglo con la CIA y con políticos republicanos de alto rango.⁵³ Prácticamente todos los contratos que provienen de los militares reflejan transacciones con información privilegiada. Robert Higgs, profesor de economía política del Instituto Independiente, resume el complejo militar-industrial de la siguiente manera: «un gigantesco pozo negro de mala administración, despilfarro y transgresiones que no sólo bordean, sino que a menudo caen de lleno en la conducta delictiva. ... Las grandes empresas de armamento han logrado deshacerse de gran parte de los riesgos inherentes a los negocios en un mercado auténtico, pues han traspasado buena parte de sus costes excesivos a los contribuyentes, al tiempo que siguen obteniendo con sus inversiones unos rendimientos extraordinarios».⁵⁴

De manera similar, cuando el Pentágono asigna fondos al programa de misiles defensivos, ya no especifica cuánto dinero ha de gastarse. El congreso sencillamente da fondos públicos —7.400 millones para la investigación y el desarrollo de misiles para la defensa, en 2004— a la Agencia de Misiles de Defensa, del Pentágono. Esa agencia se ha inventado algo que denomina el concepto del «equipo nacional». El equipo está constituido por funcionarios uniformados de la Agencia de Misiles de Defensa y ejecutivos de Lockheed Martin, Boeing y TRW, los principales contratistas, que deciden entre ellos cuánto dinero se gastará. Tal como observa Fred Kaplan, periodista de *Slate*: «La idea es que el Congreso nos da un montón de dinero; ya decidiremos cómo gastarlo, cuando tengamos una idea más clara de qué estamos haciendo». Esta manera de actuar se está convirtiendo progresivamente en la pauta habitual de la permanente economía de guerra de Estados Unidos.⁵⁵

No importa qué nombre se le dé a esto, lo que cuenta es que no tiene ninguna relación con la «libre empresa». La indiferencia con respecto a cómo se gasta el dinero del pueblo destruye, en última instancia, a aquellos que la toleran. La quiebra es evidentemente un resultado posible, aunque, en algunos aspectos, sea el menos grave. El desdén hacia el gobierno y el departamento responsable por la defensa nacional resulta más corrosivo. Cuando la pasta de dientes ya está fuera del tubo, es muy difícil volver a meterla. El peor mal del imperio es el daño irreversible que nos hacemos a nosotros mismos.

En 1952, el teólogo y experto en relaciones internacionales Reinhold Niebuhr predijo que el «vencedor» de la guerra fría inevitablemente «afrentaría el problema imperial de usar el poder de un modo global, aunque desde un solo centro concreto de autoridad, y se encontraría en una situación de tal preponderancia y ausencia de contestación que su gobierno mundial, casi con seguridad, infringiría las pautas fundamentales de la justicia».⁵⁶ Al creernos que habíamos «ganado» la guerra fría, nos fue aún más difícil reconocer las injusticias que cometemos con los demás, y supusimos, por el contrario, que nuestras «buenas intenciones» en los asuntos mundiales eran evidentes. El resultado de nuestra soberbia fue que transformamos nuestro alcance global en imperialismo pleno y nuestra preocupación por la defensa nacional en militarismo pleno. A mi juicio, las dos tendencias han avanzado tanto y los obstáculos en su camino se encuentran tan neutralizados, que nuestro declive ya ha comenzado. Nuestra negativa a dismantelar nuestro imperio de bases militares cuando desapareció la amenaza de la URSS y nuestra inapropiada respuesta al 11 de septiembre de 2001, consecuencia indeseada de nuestras propias acciones, hacen que ese declive esté cerca de ser inevitable.

Los imperios no duran, y sus finales acostumbra ser desagradables. Los estadounidenses que, como yo, nacieron antes de la segunda guerra mundial han conocido —y, en algunos casos, también experimentado personalmente— la caída de al menos seis imperios: la Alemania nazi, el Japón imperial, el Imperio Británico, Francia, los Países Bajos y la Unión Soviética. Si incluimos a todos los que existieron durante el siglo XX, tenemos otros tres grandes imperios que se vinieron abajo: el chino, el austrohúngaro y el otomano. La combinación de un exceso de imperialismo, de unas instituciones económicas excesivamente rígidas y de la incapacidad de reformarse, debilitó a todos estos imperios y los hizo fatalmente vulnerables a las guerras, guerras que, en muchos casos, ellos mismos provocaron. No existe ninguna razón para pensar que el imperio americano no seguirá el mismo camino, y además por las mismas razones. Si bien el intento de globalización retrasó durante algún tiempo el comienzo del hundimiento, el giro hacia el militarismo y el imperialismo resuelve la cuestión.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que todo estudio acerca de nuestro imperio es una obra abierta. Aunque creamos saber cuál será el resultado final, no es en absoluto claro qué vendrá después. Desde el inicio

del siglo XXI, hace tan sólo tres años, Estados Unidos ha entablado dos guerras imperialistas —en Afganistán e Irak— y está sopesando al menos otras dos, en Irán y Corea del Norte. Durante dieciocho meses, después del fin de las hostilidades en Afganistán, ha mantenido a 680 personas de 43 países diferentes en un campo de detención en Cuba, sin presentar ningún cargo contra ellas. El comandante ha indicado que planea construir allí un corredor de la muerte y una cámara de ejecuciones. El profesor de derecho Jonathan Turley explica: «Ese campo se creó para ejecutar a las personas. El gobierno no está interesado en que aquellos a los que considera terroristas del núcleo duro reciban sentencias largas de prisión». Tampoco tiene interés por ajustarse a las normas de justicia universalmente reconocidas, ni en considerarse a sí mismo parte de la comunidad de naciones, comoquiera que se la defina, y mucho menos en rendirle cuentas de alguna forma.⁵⁷

Estados Unidos está buscando de forma activa más petróleo y más bases, en especial en África occidental, región que probablemente desempeñe en el futuro un papel parecido al que hoy tiene Asia central, excepto en que los costes del transporte desde los puertos del Atlántico Sur son mucho más bajos. Nuestros militares han anunciado que planean construir una base naval en São Tomé, una pequeña isla desesperadamente pobre situada en el golfo de Guinea, que puede encontrarse sobre cuatro mil millones de barriles de crudo de alta calidad. Se espera que Exxon Mobil empiece las perforaciones en la costa guineana en 2004. Los 160.000 habitantes de São Tomé son descendientes de esclavos angoleños, de exiliados políticos portugueses y de judíos que huyeron de la inquisición española. Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial nos suministran alrededor del 15 por 100 del petróleo que importamos, casi tanto como Arabia Saudí; esa cifra podría elevarse al 25 por 100 en 2015. En Latinoamérica está surgiendo un escenario parecido, dado que uno de los principales objetivos de las tropas que tenemos desplegadas en Colombia es la protección de los intereses del petróleo y el gas de Occidental Petroleum en la provincia de Arauca, en el noreste del país.⁵⁸

En una muestra particularmente audaz de la unilateralidad de nuestro estamento militar, el Comando Espacial de la fuerza aérea y la Oficina Nacional de Reconocimiento hablan ahora abiertamente de negar el uso del espacio para fines de inteligencia a todos los demás países, no sólo a los adversarios, sino también a los aliados. En abril de 2003,

en el Simposio Nacional sobre el Espacio que tuvo lugar en Colorado Springs, James Roche, secretario de la fuerza aérea, declaró: «Si a los aliados no les gusta el nuevo paradigma del dominio espacial, tendrán que aprender a aceptarlo». No se les dará «poder de veto». ⁵⁹ Esa nueva política, que está programada para comenzar a funcionar en 2004, implica que empezaremos a destruir los satélites de comunicaciones y de inteligencia de otros países, o a causarles interferencias, con el fin de que empiecen a depender de nosotros.

Hay suficientes cosas en el mundo para mantener ocupados a nuestros militares radicales y a los entusiastas del imperio por el momento. Sin embargo, es indudable que el camino que hemos tomado nos conducirá a nuevas versiones de bahía de Cochinos y a la repetición, acelerada y actualizada, de la guerra de Vietnam. Cuando estos desastres, o versiones todavía desconocidas de ellos, ocurran —y ocurrirán—, un mundo asqueado con la traición al idealismo que antes se asociaba con Estados Unidos les dará la bienvenida, tal como casi todos hicieron cuando la URSS se desintegró. A semejanza de otros imperios del siglo pasado, Estados Unidos no ha elegido vivir con prudencia, en paz y prosperidad, sino como una inmensa potencia militar enfrentada a un mundo airado que se le resiste.

Existe un desarrollo de los acontecimientos que acaso podría detener este proceso: el pueblo podría retomar el control del congreso, reformarlo, así como las leyes corruptas electorales que lo han convertido en un foro para los intereses de determinados grupos, transformarlo en una genuina asamblea de representantes democráticos y cortar el suministro de dinero al Pentágono y a los servicios secretos de información. Poseemos una sociedad civil fuerte, que sería capaz, en teoría, de superar los intereses enfrentados de las fuerzas armadas y del complejo militar-industrial. A estas alturas, sin embargo, resulta difícil imaginar, tal como ocurrió con el senado romano en los últimos días de la república, cómo se podría resucitar al congreso y acabar con la corrupción endémica. Si esa reforma fracasa, Némesis, la diosa del castigo justo y la venganza, la que sanciona el orgullo y la soberbia, espera con impaciencia el momento de reunirse con nosotros.

Notas

PRÓLOGO

1. Paul Sperry, «Defense Department Orders 273,000 Bottles of Sunblock», *WorldNetDaily*, 9 de octubre de 2002, www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=29225.
2. Arthur Schlesinger, Jr., «The Immorality of Preventive War», *History News Network*, 26 de agosto de 2002. Véase también Jimmy Carter, «The Troubling New Face of America», *Washington Post*, 5 de septiembre de 2002.
3. «U.S. Soldiers in Prison Handled Well Thanks to SOFA; Even Beefsteak Served; 40 Percent More in Calories Taken By Them than Japanese, with Even Desserts Served at Every Supper», *Asahi Shimbun* (Tokio), 11 de octubre de 2002, p. 39.
4. Véanse, por ejemplo, «The Pentagon's Colonial Pretensions Thrive in Asia», *Los Angeles Times*, 2 de noviembre de 1995; «Fort Okinawa: Go-banken-sama, Go Home!», *Bulletin of the Atomic Scientists*, 52:4 (julio-agosto de 1996), pp. 22-29; «The Okinawan Rape Incident and the End of the Cold War in East Asia», *California Western International Law Journal*, 27:2 (primavera de 1997), pp. 389-397; *Okinawa: Cold War Island*, Japan Policy Research Institute, 1999, Cardiff, California (compilador y colaborador); «Time to Bring the Troops Home: America's Provocative Military Posture in Asia Makes War with China More Likely», *Nation*, 14 de mayo de 2001, pp. 20-22 y «Okinawa Between the United States and Japan», en Josef Kreiner, ed., *Ryukyuu in World History*, JapanArchiv 2, Bier'sche Verlagsanstalt, Bonn, 2001, pp. 365-394.
5. Véase Chalmers Johnson, «The CIA and Me», *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 29:1 (enero-marzo de 1997), pp. 34-37. Véase también Willard C. Matthias, *America's Strategic Blunders: Intelligence Analysis and National Security Policy, 1936-1991*, Pennsylvania State University Press, University Park, Pensilvania, 2001, pp. 297-298.
6. Tim Weiner, *Blank Check: The Pentagon's Black Budget*, Warner Books, Nueva York, 1990, p. 114.

7. Eric Schmitt y Alison Mitchell, «U.S. Lacks Up-to-Date Review of Iraqi Arms», *The New York Times*, 11 de septiembre de 2002.
8. Tom Bowman, «Special Forces' Role May Expand», *Baltimore Sun*, 3 de agosto de 2002; Lawrence J. Korb y Jonathan D. Tepperman, «Soldiers Should Not Be Spying», *The New York Times*, 21 de agosto de 2002; Rowan Scarborough, «Study Urges Wider Authority for Covert Troops vs. Terror», *Washington Times*, 12 de diciembre de 2002; Scarborough, «Rumsfeld Bolsters Special Force», *Washington Times*, 6 de enero de 2003, y Douglas Waller, «The CIA's Secret Army», *Time*, 26 de enero de 2003. Para un excelente resumen de la historia de «guerras secretas» de la CIA, véase «America's Shadow Warriors», *The New York Times*, 3 de marzo de 2003.
9. Max Weber, *Economía y sociedad* (1922), Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 744-745. Véanse también William Pfaff, «Governments Don't Like To Be Accountable», *International Herald Tribune*, 2 de septiembre de 2002, y Daniel P. Moynihan, *Secrecy: The American Experience*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1999.

CAPÍTULO I

1. Manuel Miles, «The USA Is Not an Empire», www.strike-the-root.com/columns/Miles/miles14.html.
2. Robert M. Gates, *From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the Cold War*, Simon & Schuster, Nueva York, 1996, p. 266. Véase también John Tirman, «How the Cold War Ended», *Global Dialogue* 3:4, otoño de 2001, pp. 80-90. Para la versión de la Casa Blanca, véase George Bush y Brent Scowcroft, *A World Transformed*, Vintage, Nueva York, 1998.
3. Anatoly Dobrynin, *In Confidence: Moscow's Ambassador to America's Six Cold War Presidents (1962-1986)*, Times Books, Nueva York, 1995, p. 620.
4. Citado por Frances Fitzgerald, *Way Out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War*, Simon & Schuster, Nueva York, 2000, p. 410.
5. *Ibid.*, p. 331.
6. Hans-Hermann Hertle, «The Fall of the Wall: The Unintended Self-Dissolution of East Germany's Ruling Regime», en «The End of the Cold War», Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, *Bulletin*, n.º 12-13, otoño-invierno de 2001, pp. 133-134.
7. Vladislav M. Zubok, «New Evidence on the "Soviet Factor" in the Peaceful Revolutions of 1989», en «The End of the Cold War», p. 6.
8. Thomas Blanton, «When Did the Cold War End?», Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, *Bulletin*, n.º 10, marzo de 1998, pp. 185, 191.
9. Véase Chalmers Johnson, «The Three Cold Wars», en Ellen Schrecker, ed., *Cold War Triumphalism*, New Press, Nueva York, 2004.

10. Véanse Ed A. Hewitt [miembro del Consejo de Seguridad Nacional], «An Idle U.S. Debate About Gorbachev», *The New York Times*, 30 de marzo de 1989; Michael Wines, «CIA Accused of Overestimating Soviet Economy», *The New York Times*, 23 de julio de 1990, y Colin Hughes, «CIA Is Accused of Crying Wolf on Soviet Economy», *Independent*, 25 de julio de 1990. Michael R. Gordon, *The New York Times*, 31 de enero de 1990, y *National Security Strategy of the United States*, marzo de 1990, ambos citados por Noam Chomsky, *Detering Democracy*, Hill and Wang, Nueva York, 1992, pp. 29-30. [Hay trad. cast.: *El miedo a la democracia*, Crítica, Barcelona, 2003.] Mis agradecimientos al profesor Chomsky por llamarme la atención acerca de estas importantes fuentes.
11. William A. Galston, «Why a First Strike Will Surely Backfire», *Washington Post*, 16 de junio de 2002.
12. Alfred Vagts, *A History of Militarism*, Meridian, Nueva York, 1959, pp. 14-15, 41.
13. «Battle of the Boffins», *Sydney Morning Herald*, 4 de enero de 2003, y James Dao y Andrew C. Revkin, «Machines Are Filling In for Troops», *The New York Times*, 16 de abril de 2002. Véanse también Neil King, Jr., «CIA Drones Spotted bin Laden But Couldn't Shoot», *Wall Street Journal*, 23 de noviembre de 2001; y Eric Schmitt, «Improved U.S. Accuracy Claimed in Afghan Air War», *The New York Times*, 9 de abril de 2002. Sobre la excesiva complejidad y numerosos errores de los sistemas de dirección aérea en la «guerra de precisión», véase David Wood, «Grisly Accidents Call "Precision Warfare" Into Question», Newhouse News Service, 7 de febrero de 2003, www.newhouse.com/archive/wood020703.html.
14. Jonathan S. Landay, «Missile Kills Top bin Laden Associate: Unmanned CIA Plane Hits al-Qaeda Target in Yemen», *San Diego Union-Tribune*, 5 de noviembre de 2002; Esther Schrader y Henry Weinstein, «U.S. Enters a Legal Gray Zone: Strike in Yemen Raises Thorny Questions of Assassination and the Definition of War», *Los Angeles Times*, 5 de noviembre de 2002; Robert Schroeder, «Tell the Truth About U.S. Assassination Policy», *Baltimore Sun*, 14 de noviembre de 2002; Associated Press, «American al-Qaeda Operatives Can Be Killed: Secret Finding by Bush Gives CIA Authority», *Houston Chronicle*, 3 de diciembre de 2002; Tony Geraghty y David Leigh, «The Name of the Game is Assassination», *Guardian*, 19 de diciembre de 2002; Seymour M. Hersh, «Manhunt», *New Yorker*, 30 de diciembre de 2002, pp. 66-74, y Doyle McManus, «A U.S. License to Kill», *Los Angeles Times*, 11 de enero de 2003.
15. Sven Lindquist, *A History of Bombing*, New Press, Nueva York, 2001. [Hay trad. cast.: *Historia de los bombardeos*, Turner, Madrid, 2002.]
16. John A. Hobson, *Imperialism: A Study*, Pott, Nueva York, 1902 [hay trad. cast.: *Estudio del imperialismo*, Alianza, Madrid, 1985] citado por Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, Meridian Books, Nueva York, 1958, p. 152. [Hay trad. cast.: *Los orígenes del totalitarismo*, Alianza, Madrid, 2003.] Véase también W. G. Beasley, *Japanese Imperialism 1894-1945*, Clarendon Press, Oxford, 1987, p. 2.

17. David B. Abernethy, *The Dynamics of Global Dominance: European Overseas Empires, 1415-1980*, Yale University Press, New Haven, 2000, p. 382.
18. Citado en «History of U.S. Territorial Acquisitions», www.phil-am-war.org/territorial.htm.
19. Abernethy, *Dynamics*, p. 22.
20. Vagts, *A History of Militarism*, pp. 14-15.
21. Citado por John Gerassi, *Los Angeles Times Book Review*, 16 de diciembre de 2001, p. 7.
22. John M. Collins, «Military Bases», *Military Geography for Professionals and the Public*, U.S. National Defense University, Institute for National Strategic Studies, Washington, marzo de 1998, «Military Bases», www.ndu.edu/inss/books/Books%20%201998/Military%20Geography%20March%2098/milgeoch12.html; editorial, «U.S. Military Bases and Empire», *Monthly Review* 53:10, marzo de 2002, y Diana Johnstone y Ben Cramer, «The Burdens and the Glory: U.S. Bases in Europe», en Joseph Gerson y Bruce Birchard, eds., *The Sun Never Sets: Confronting the Network of Foreign U.S. Military Bases*, South End Press for the American Friends Service Committee, Boston, 1991, p. 199.
23. Johnstone y Cramer, «The Burdens and the Glory», p. 219.
24. *Ibid.*, p. 200. Véase también Andrew Alexander, «The Soviet Threat Was Bogus», *Spectator*, 20 de abril de 2002.
25. DeNeen L. Brown, «Trail of Frozen Tears: The Cold War Is Over but to Native Greenlanders Displaced by It, There's Still No Peace», *Washington Post*, 22 de octubre de 2002, y Mike Davis, «Bush's Ultimate Thule», 14 de marzo de 2003, www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?mm=3&yr=2003.
26. Patrick Lloyd Hatcher, «"Base-mania" in Central Asia», *JPRI Critique* IX:3, abril de 2002.
27. Rachel Cornwell y Andrew Wells, «Deploying Insecurity», *Peace Review* 11:3, 1999, p. 410.
28. William Arkin, «U.S. Air Bases Forge Double-Edged Sword», *Los Angeles Times*, 6 de enero de 2002.
29. Véase, por ejemplo, «Bush Plays Caligula while Blair Strews His Path with Rose Petals», *Scotsman*, 16 de septiembre de 2002.

CAPÍTULO 2

1. Hyman G. Rickover, *How the Battleship Maine Was Destroyed*, Government Printing Office, Washington, 1976. [Hay trad. cast.: *Cómo fue hundido el acorazado Maine*, Madrid, Editorial Naval, 1985.]
2. Stuart Creighton Miller, «Benevolent Assimilation»: *The American Conquest of the Philippines, 1899-1903*, Yale University Press, New Haven, 1982, p. 11
3. «The Spanish War», www.smplanet.com/imperialism/splendid.htm.

4. «A Gift from the Gods», www.smplanet.com/imperialism/gift.html.
5. Amy Forliti, «Camp Commander Relieved of Duties», *Associated Press*, 14 de octubre de 2002, y «Too Nice' Jail Commander is Fired», *Sydney Morning Herald*, 17 de octubre de 2002.
6. Miller, «Benevolent Assimilation», p. 1.
7. Citado en Howard Zinn, *A People's History of the United States*, Harper & Row, Nueva York, 1980, p. 306. [Hay trad. cast.: *La otra historia de los Estados Unidos*, Argitaletxe Hiru, Hondarribia, 1997.]
8. Citado por Miller, «Benevolent Assimilation», p. 26.
9. Joseph Leggold y Timothy McKeown, «Is American Foreign Policy Exceptional? An Empirical Analysis», *Political Science Quarterly*, otoño de 1995; www.mtholyoke.edu/acad/intrel/leggold.htm.
10. Para los detalles completos de «Farewell Address, Washington's Final Manuscript», véase www.virginia.edu/gwpapers/farewell/.
11. Citado por Ralph Raico, «American Foreign Policy—The Turning Point, 1898-1919: Part I», www.fff.org/freedom/0295c.asp.
12. Elihu Root, *The Military and Colonial Policy of the United States: Addresses and Reports*, Harvard University Press, Cambridge, 1916, pp. 417-440, www.shsu.edu/~his_ncp/RootGS.htm.
13. *Parameters* (U.S. Army War College Quarterly), 31:1, primavera de 2001, contracubierta.
14. Arthur S. Link, «Woodrow Wilson Biography», ap.grolier.com/article?assetid=0420330-00&templatename=/article/article.html.
15. Véase Peter van den Maas, «The American Tradition in Diplomacy», odur.let.rug.nl/~usa/E/kissinger/kiss03.html.
16. «President Woodrow Wilson's War Message, 2 de abril de 1917», www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1917/wilswarm.html.
17. Alistair Cooke, «Letter from America: The Pursuit of Self-Determination», news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/letter_from_america/288250.stm.
18. *Ibid.*
19. William Pfaff, *Barbarian Sentiments: America in the New Century*, ed. rev., Hill and Wang, Nueva York, 2000, p. 275.
20. James A. Donovan, *Militarism U.S.A.*, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1970, p. 10.
21. James Dunnigan, «A Long American Tradition», *Strategy Page*, 20 de agosto de 2001.
22. United States Civil War Center, «Statistical Summary of America's Major Wars», 13 de junio de 2001, www.cwc.lsu.edu/cwc/other/stats/warcost.htm.
23. Cordell Hull, *The Memoirs of Cordell Hull*, Macmillan, Nueva York, 1948, p. 1.111; citado por Alfred Vagts, *A History of Militarism*, Meridian Nueva York, 1959, p. 474.
24. Donovan, *Militarism U.S.A.*, pp. 114-115.
25. Citado por Telford Taylor, *Sword and Swastika: Generals and Nazis in the Third Reich*, Simon and Schuster, Nueva York, 1952, p. 368.

26. United States Civil War Center, «Statistical Summary». Véase también U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Public Affairs, *America's Wars*, Washington, mayo de 2001, www.va.gov/pressrellamwars01.htm, donde se ofrecen cifras totales ligeramente diferentes, pero ninguna referente al bando confederado de la guerra civil.
27. Véase, en especial, Robert Higgs, «The Cold War: Too Good a Deal to Give Up», *International Magazine Online*, marzo de 2002, y Robert Higgs, «The Cold War Is Over, But U.S. Preparation for It Continues», *The Independent Review* 6:2, otoño de 2001. Las cifras totales que se utilizan aquí se basan en el poder adquisitivo del dólar en 2002. Para los importes reales en mil millones de dólares de 1996, compárese Martin Calhoun, Senior Research Analyst, Center for Defense Information, *U.S. Military Spending, 1945-1996*, www.cdi.org/issues/milspend.html. Calhoun sitúa los gastos militares de 1950 en 133.000 millones de dólares, los de 1953, en 437.000 millones; los de 1968, en 388.900.000 millones, y los de 1989, en 376.200 millones.
28. Peter Pae, «Southland Defense Industry Quietly Heeds War's Drumbeat», *Los Angeles Times*, 27 de septiembre de 2002. Véase también Patrick Lloyd Hatcher, *Economic Earthquakes: Converting Defense Cuts to Economic Opportunities*, Institute of Governmental Studies, University of California, Berkeley, 1994.
29. Jonathan Reingold, «Attack of the Pork Barrel Posse», *AlterNet*, 23 de abril de 2002. Véase también Julian E. Barnes, Peter Cary y Christopher H. Schmitt, «Special Investigative Report: War Profiteering», *U.S. News & World Report*, 13 de mayo de 2002, pp. 20-34; Gopal Ratnam y Gail Kauffman, «A New Way to Pay for Weapons? Boeing, U.S. Air Force Eye Third-Party Financing for B-52 Work», *DefenseNews.com*, 31 de marzo de 2003; Michelle Ciarrocca, «Boeing: "Forever New Frontiers" or "The Purse is Now Open"», The Arms Trade Resource Center, 4 de abril de 2003; y Leslie Wayne, «Creative Deal or Highflying Pork?», *The New York Times*, 20 de abril de 2003.
30. Kelly Patricia O'Meara, «Rumsfeld Inherits Financial Mess», *InsightMag.com*, agosto de 2001.
31. Véanse John Dower, *War Without Mercy*, Pantheon, Nueva York, 1987, y Sheila K. Johnson, *The Japanese Through American Eyes*, Stanford University Press, Stanford, 1991.
32. William Manchester, «The Bloodiest Battle of All», *The New York Times Magazine*, 14 de junio de 1987.
33. Véase William Rivers Pitt, «Think the Days of the Draft Are Gone? Think Again», *Truthout/Perspective*, 11 de septiembre de 2002, www.truthout.com/docs_02/09.12A.wrp.draft.htm.
34. Véase Tom Engelhardt, *The End of Victory Culture: Cold War America and the Disillusioning of a Generation*, Basic Books, Nueva York, 1995, en especial la parte 3: «The Era of Reversals (1962-1975)». [Hay trad. cast.: *El fin de la cultura de la victoria: Estados Unidos, la guerra fría y el desencanto de una generación*, Paidós, Barcelona, 1997]

35. Christian G. Appy, *Working-Class War: American Combat Soldiers and Vietnam*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993, p. 5.
36. Vagts, *A History of Militarism*, p. 463.
37. Véanse, por ejemplo, Walter V. Robinson, «One-year Gap in Bush's National Guard Duty», *Boston Globe*, 23 de mayo de 2000; Wayne Slater, «Records of Bush's Alabama Military Duty Can't Be Found», *Dallas Morning News*, 26 de junio de 2000; «G.W. Bush Went AWOL», *New Republic*, 13 de noviembre de 2000; Richard Sisk, «General Raps Plans for Invasion», *New York Daily News*, 27 de agosto de 2002; James Bamford, «Untested Administration Hawks Clamor for War», *USA Today*, 17 de septiembre de 2002; Eric Margolis, «Bush Looks for Buddies in Bad Times», *Toronto Sun*, 29 de septiembre de 2002; George Johnson, «The Chicken Hawks' War», *TomPaine.com*, 14 de noviembre de 2002, y Linda McQuaig, «What Did Dubya Do in the War, Daddy?», *Toronto Star*, 17 de noviembre de 2002.
38. H. R. McMaster, *Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led to Vietnam*, Harper Perennial, Nueva York, 1997, p. 329.
39. Véanse Frances Fitzgerald, *Way Out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War*, Touchstone, Nueva York, 2000.
40. Véase Chalmers Johnson, «In Search of a New Cold War», *Bulletin of the Atomic Scientists*, septiembre/octubre de 1999, pp. 44-51, y el editorial «China Viewed Narrowly», *The New York Times*, 10 de junio de 2001.
41. Kurt M. Campbell, «China Watchers Fighting a Turf War of Their Own», *The New York Times*, 20 de mayo de 2000. El *Times* no señaló que Campbell era un antiguo miembro del Pentágono.
42. «Pentagon Lines Up Industry Chiefs for Top Jobs», *Newsday*, 1 de junio de 2001.
43. Richard Gardner, «Foreign Policy on the Cheap», *Financial Times*, 8 de junio de 2001.
44. *Newsweek*, 25 de junio de 2001.
45. Ronald Steel, *Pax Americana*, Viking, Nueva York, 1967, pp. 17-18. [Hay trad. cast.: *Pax americana*, Lumen, Barcelona, 1970.]

CAPÍTULO 3

1. Andrew J. Bacevich, «Different Drummers, Same Drum», *National Interest*, verano de 2001, pp. 74-75.
2. Citado por Matthew Engel, «Iraqmania Grips the U.S.», *Guardian*, 5 de diciembre de 2001.
3. Charles Krauthammer, «The Bush Doctrine», *Time*, 5 de marzo de 2001. Véanse también Max Boot, «The Case for American Empire», *Weekly Standard*, 15 de octubre de 2001; Richard Gwyn, «Imperial Rome Lives in the U.S.», *Toronto Star*, 9 de diciembre de 2001.

4. Robert D. Kaplan, «Supremacy by Stealth», *Atlantic Monthly*, julio/agosto de 2003, pp. 67-83.
5. Véase Walter Russell Mead, *Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World*, Knopf, Nueva York, 2001. Cf. Christopher Layne, «Masters of the Universe», *Washington Post*, 23 de diciembre de 2001.
6. National Security Archive, «State Historians Conclude U.S. Passed Names of Communists to Indonesian Army, which Killed at Least 105.000 in 1965-66», 27 de julio de 2001, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/; BBC News, «U.S. Blocks Indonesia History Revelations», 28 de julio de 2001; George Lardner, Jr., «Papers Show U.S. Role in Indonesian Purge», *Washington Post*, 28 de julio de 2001; Isabel Hilton, «Our Bloody Coup in Indonesia», *Guardian*, 1 de agosto de 2001, y Jaechun Kim, «U.S. Covert Action in Indonesia in the 1960s», *Journal of International and Area Studies* 9:2, diciembre de 2002, pp. 63-85.
7. Véanse Thomas Blanton, «When Did the Cold War End?» y documentos anejos, en Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, *Bulletin*, n.º 10, marzo de 1998, pp. 184-191.
8. Citado por Emily Eakin, «“It Takes an Empire”, Say Several U.S. Thinkers», *The New York Times*, 2 de abril de 2002.
9. Un buen análisis de los antecedentes de los intelectuales neoconservadores de la defensa es el proporcionado por Michael Lind, «How Neoconservatives Conquered Washington—and Launched a War», *New Statesman*, 7 de abril de 2003, www.antiwar.com/orig/lind1.html. Véase también Philip Gold, «There Are Some Unflattering Truths to “Neocons”», *Seattle Post-Intelligencer*, 11 de mayo de 2003.
10. Paul Kennedy, «The Perils of Empire», *Washington Post*, 20 de abril de 2003.
11. Véanse, por ejemplo, Lewis H. Lapham, «The American Rome: On the Theory of Virtuous Empire», *Harper's*, agosto de 2001, pp. 31-38; Richard Gwyn, «Imperial Rome Lives in the U.S.», *Toronto Star*, 9 de diciembre de 2001; David Chandler, «Imperialism May Be Out, but Aggressive Wars and Colonial Protectorates Are Back», *Observer*, 14 de abril de 2002; Samuel Brittan, «Liberal Imperialism is a Dangerous Temptation», *Financial Times*, 11 de abril de 2002; «Building “Empire” Shouldn't Be Goal», *Jacksonville Daily News*, 15 de octubre de 2001; Mark Weisbrot, «Should We Police World?», *Philadelphia Inquirer*, 13 de abril de 2001; William Pfaff, «America's Imperial Instinct», *International Herald Tribune*, 8 de abril de 2002; John Pilger, «Behind the Jargon about Failed States and Humanitarian Interventions Lie Thousands of Dead», 23 de noviembre de 2001, pilger.carlton.com/print/88462, y Hugo Young, «A New Imperialism Cooked Up over a Texan Barbecue», *Guardian*, 2 de abril de 2002.
12. Sebastian Mallaby, «The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire», *Foreign Affairs* 81:2, marzo/abril de 2002, pp. 2-7.
13. Véase el informe de la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía de los Estados, *The Responsibility to Protect*, International Development Research Centre, Ottawa, 2001. Véanse también Ernst B. Haas, *Beware the Slippery Slope: Notes Toward the Definition of Justifiable Intervention*, Policy Papers on International Affairs n.º 42, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1993; Stanley Hoffmann, *The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1996, y Samantha Power, *A Problem from Hell: America and the Age of Genocide*, Basic Books, Nueva York, 2002.
14. «U.S. Said Violating International Treaties», Reuters, Washington, 4 de abril de 2002.
15. David Moberg, «Courting Disaster», *In These Times*, 10 de junio de 2002.
16. Carola Hoyos, «Milosevic War Crimes Trial Threatened by U.S. Demand», *Financial Times*, 12 de junio de 2002. Véanse también David Teather, «U.S. Threat to Wreck Treaty System», *Guardian*, 6 de mayo de 2002; Neal A. Lewis, «U.S. to Renounce Its Role in Pact for World Tribunal», *The New York Times*, 5 de mayo de 2002, y Lewis, «U.S. Rejects All Support for New Court on Atrocities», *The New York Times*, 7 de mayo de 2002.
17. La ley es la H.R. 4775, 107.th Congress, 2.nd Session, «A bill making supplemental appropriations for further recovery from and response to terrorist attacks on the United States for the fiscal year ending September 30, 2002, and for other purposes». Véanse también Expatica News, La Haya, «U.S. Invasion Proposal Shocks MPs», 10 de junio de 2002, www.expatica.com/block.gif; «Dutch citizens up in arms over U.S. congressional act that would protect U.S. officials or service personnel from war crimes convictions in The Hague», National Public Radio, *Morning Edition*, 14 de junio de 2002.
18. Elizabeth Becker, «On World Court, U.S. Focus Shifts to Shielding Officials», *The New York Times*, 7 de septiembre de 2002; «U.S. Fears Prosecution of President in World Court», Reuters, 15 de noviembre de 2002.
19. Véanse, por ejemplo, Conn Hallinan, «America's War Criminals», *San Francisco Examiner*, 10 de julio de 2001; Marcus Gee, «Is Henry Kissinger a War Criminal?», *Toronto Globe & Mail*, 11 de junio de 2002.
20. William Burr y Michael L. Evans, eds., «East Timor Revisited: Ford, Kissinger, and the Indonesian Invasion, 1975-1976», National Security Archive, 6 de diciembre de 2001, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/. Véanse también Agencia France-Presse, «U.S. Endorsed Indonesia's East Timor Invasion: Secret Documents», 7 de diciembre de 2001; Jim Wolf, Reuters, «U.S. Agreed to Indonesia's Invasion of E. Timor, Documents Reveal», *San Diego Union-Tribune*, 20 de diciembre de 2001.
21. Véanse, por ejemplo, Jim Mann, «Unilateralism Dead? That's a Myth Perception», *Los Angeles Times*, 24 de octubre de 2001, y Michael Byers, «The World According to Cheney, Rice, and Rumsfeld», *London Review of Books*, 21 de febrero de 2002.
22. Nicholas Watt, Richard Norton-Taylor y Oliver Burkeman, «Camp X-Ray Row Threatens First British Split with U.S.», *Guardian*, 21 de enero de 2002; Caroline Daniel, «Legitimacy of U.S. Detentions Challenged», *Financial Ti-*

- mes, 3 de diciembre de 2002; Neil A. Lewis, «Guantánamo Prisoners Ask for Rights», *The New York Times*, 3 de diciembre de 2002, y Jane Sutton, «A Year Later, Guantánamo Prisoners Still in Limbo», Reuters, 10 de enero de 2003.
23. William D. Hartung, «Making the World Safe for Nuclear Weapons», www.commondreams.org/views02/0514-07.htm, 14 de mayo de 2002; Richard Butler, «Nuclear Testing and National Honor», *The New York Times*, 13 de julio de 2001, y Rebeca E. Johnson, «Who's For a Nuclear Free-For-All?», *Disarmament Diplomacy*, n.º 58, junio de 2001.
 24. *International Herald Tribune*, 14 de julio de 2001.
 25. Michael J. Glennon, «How War Left the Law Behind», *The New York Times*, 21 de noviembre de 2002.
 26. «America as Sparta», *Boston Globe Online*, 12 de marzo de 2002.
 27. Alan W. Bock, «War and Peace and Liberty», *Orange County Register*, 16 de septiembre de 2002.
 28. Edward Alden, «A Spaceman in the Pentagon», *Financial Times*, 25-26 de agosto de 2001, y James Dao, «A Low-Key Space Buff», *The New York Times*, 25 de agosto de 2001.
 29. Véanse Seumas Milne, «The Innocent Dead in a Coward's War», *Guardian*, 20 de diciembre de 2001; Roberto J. Gonzales, «Ignorance of Casualties Isn't Bliss», *San Diego Union-Tribune*, 4 de enero de 2002; Fairness and Accuracy in Reporting, «NYT Buries Story of Airstrikes on Afghan Civilians», 9 de enero de 2002, www.fair.org/activism/nyt-niazi-kala.html; y Marc Herold, «Counting the Dead», *Guardian*, 8 de agosto de 2002. Véanse también las páginas web de Herold para los datos brutos y análisis adicionales: (1) «Dead Afghan Civilians: Disrobing the Non-Counters», www.cursor.org/stories/noncounters.htm, y (2) «Herold's Research», pubpages.unh.edu/~mwherold/. Las Naciones Unidas estiman que los bombardeos norteamericanos mataron alrededor de 5.000 civiles de forma directa, y que hasta 20.000 afganos más murieron a causa de la interrupción de las ayudas para la sequía y otros efectos indirectos del bombardeo. Véase Jonathan Steele, «Counting the Dead», *Guardian*, 29 de enero de 2003. El informe interno de la ONU filtrado está disponible en www.casi.org.uk.
 30. Loring Wirbel, «NRO, Space Command, NASA Tout Common Language of "Space Supremacy" at Conference», *Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space*, 11 de abril de 2002.
 31. *Ibid.*
 32. Sobre la denominada «guerra de cuarta generación», esto es, la guerra basada en el espacio y en amenazas «asimétricas» como el terrorismo, véase Peter J. Boÿer, «A Different War: Is the Army Becoming Irrelevant?», *New Yorker*, 1 de julio de 2002, pp. 54-67.
 33. Véanse Joseph Kay, «Bush Administration Renews U.S. Drive to Militarize Space», 25 de julio de 2001, www.wsws.org/articles/2001/jul2001/spac-j25_pn.shtml; Rob Larson, «Space For Rent: A Free Society Militarizes Space», 23 de agosto de 2001, www.independ.com/2001/Aug09.01/profit.html;

- «The Final Frontier: The U.S. Military's Drive to Dominate Space», *Colorado Springs Independent*, 13 de diciembre de 2001, www.csindy.com/csindy/2001-12-13/cover.html, y Theresa Hitchens, «U.S. Space Policy: Time to Stop and Think», *Disarmament Diplomacy*, n.º 67, octubre-noviembre de 2002. También tienen relevancia: Carlton Meyer, «Preparing for War in Space», *G2mil: The Magazine of Future Warfare*, junio de 2001, www.g2mil.com/June2001.htm; Charles Aldinger, «U.S. Likely to Put Arms in Space—Air Force Chief», Reuters, 1 de agosto de 2001; Hu Xiaoming, «U.S. Will Probably Deploy Weapons in Outer Space», *People's Daily* (Beijing), 3 de agosto de 2001; Steve Boggin, «Space—The Final Frontier in a New and Terrifying Arms Race», *Independent* (Londres), 8 de agosto de 2001; Bill McAllister, «AFA Grad May Lead Era of Space Warriors», *Denver Post*, 12 de agosto de 2001; «U.S. Missile Experts Meet to Save the Nation—and Make a Few Bucks», *Space Daily*, 26 de agosto de 2001, www.spacedaily.com [disponible en: cndyorks.gn.apc.org/yspacel/articles/bmdl/hvillemet.htm].
34. Para los detalles sobre los campos de la muerte británicos y las estadísticas sobre el número de muertos, véase Paul Harris, «Spin' on Boer Atrocities», *Observer*, 9 de diciembre de 2001. Véase también BBC News, «Imperialism in the Dock—The Boer War», 10 de noviembre de 1999.
 35. Citado por Joseph Kay, «Bush Administration».
 36. Véanse Jason Vest, «The Dubious Genius of Andrew Marshall», *American Prospect*, 15 de febrero de 2001, y Nicholas Lemann, «Dreaming About War», *New Yorker*, 16 de julio de 2001, pp. 32-38.
 37. Nora K. Wallace, «Without Space, We're Back to World War II», *Santa Barbara News-Press*, 23 de abril de 2003, www.globalsecurity.org/org/news/2003/030423-space-war-01.htm.
 38. Gail Kaufman y Gopal Ratnam, *Space News*, 13 de junio de 2001. Para más información sobre los intentos de ocultar los problemas de la BMD, véanse William J. Broad, «Missile Contractor Doctored Tests, Ex-Employee Charges», *The New York Times*, 7 de marzo de 2000; Broad, «Pentagon Classifies a Letter Critical of Antimissile Plan», *The New York Times*, 20 de mayo de 2000; Broad, «M.I.T. Studies Accusations of Lies and Cover-Up of Serious Flaws in Antimissile System», *The New York Times*, 2 de enero de 2003; Broad, «U.S. Seeks Dismissal of Suit By Critic of Missile Defense», *The New York Times*, 3 de febrero de 2003; Arianna Huffington, «Blowing the Whistle on Bad Science», AlterNet.org, 14 de marzo de 2002; Bradley Graham, «Secrecy on Missile Defense Grows», *Washington Post*, 12 de junio de 2002, y Graham, *Hit to Kill: The New Battle Over Shielding America from Missile Attack*, Public Affairs, Nueva York, 2001.
 39. Lawrence F. Kaplan, *New Republic*, 12 de marzo de 2001. Kaplan, «senior editor» de *New Republic*, es coautor, con William Kristol, del neoconservador *The War With Iraq*, Encounter Books, San Francisco, 2003.
 40. Jim Walsh, «The Two Faces of Bush on Defense», *Los Angeles Times*, 1 de mayo de 2001.

41. Bill Keller, «Missile Defense: The Untold Story», *The New York Times*, 29 de diciembre de 2001.
42. U.S. Department of Defense, *Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States*, 15 de julio de 1998. Para las implicaciones de este informe, véase Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, 2001 *Quadrennial Defense Review*, 22 de junio de 2001, «classified contents removed», p. 13.
43. Paul Wolfowitz, «Remembering the Future», *National Interest*, primavera de 2000, p. 36. Sobre lo ocurrido en 1992, véase David Armstrong, «Dick Cheney's Song of America: Drafting a Plan for Global Dominance», *Harper's Magazine*, octubre de 2002, pp. 76-83, y Tom Berry y Jim Lobe, «The Men Who Stole the Show», *Foreign Policy in Focus*, Special Report, octubre de 2002.
44. Citado en Quentin Peel, «Face It, The Cold War Is Over», *Financial Times*, 20 de agosto de 2001.
45. Véanse Wen-Ho Lee (con Helen Zia), *My Country Versus Me*, Hyperion, Nueva York, 2001, y Dan Stober e Ian Hoffman, *A Convenient Spy: Wen Ho Lee and the Politics of Nuclear Espionage*, Simon & Schuster, Nueva York, 2001.
46. William Arkin y Robert Windrem, «The U.S.-China Information War», 20 de agosto de 2001, *www.msnbc.com* [disponible en: *www.netforce.mn/chinfo-war.htm*].
47. *Asahi Shimbun*, Tokio, 25 de abril de 2003 (en japonés).
48. Véanse Office of the Deputy Under Secretary of Defense (Installations and Environment), *Base Structure Report (A Summary of DoD's Real Property Inventory)*, Department of Defense, Washington, 2002, y U.S. Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate for Information, Operations, and Reports, *Worldwide Manpower Distribution by Geographical Area*, 30 de septiembre de 2001.
49. Bruce Cumings, *Korea's Place in the Sun: A Modern History*, Norton, Nueva York, 1997, p. 153. Véase también Doug Bandow, *Tripwire: Korea and U.S. Foreign Policy in a Changed World*, Cato Institute, Washington, 1996.
50. Jim Lea, «S. Korean Protesters Hurl Rocks, Eggs at Camp Casey», *Stars & Stripes*, 21 de julio de 2002; K. T. Kim, «Trial of U.S. Soldiers to Open to Media Only», *Korea Times*, 8 de noviembre de 2002; James Brooke, «First of 2 G.I.'s on Trial in Deaths of 2 Korean Girls Is Acquitted», *The New York Times*, 21 de noviembre de 2002; Don Kirk, «2nd U.S. Sergeant Is Cleared In the Death of 2 Korean Girls», *The New York Times*, 23 de noviembre de 2002; BBC News, «S. Koreans Stage Huge Anti-U.S. Rally», 14 de diciembre de 2002; Robert Fouser, «Putting Alliance to a "Democracy Test"», *Korea Now*, 14 de diciembre de 2002; Tim Shorrock, «Roh's Election Victory and the Widening Gap between the U.S. and South Korea», *Foreign Policy in Focus*, 7 de enero de 2003; Jaewoo Choo, «Vigils in Korea: U.S. Alliances on Trial», *Asia Times*, 7 de enero de 2003, y Peter S. Goodman y Joohee Cho, «Anti-U.S. Sentiment Deepens in S. Korea», *Washington Post*, 9 de enero de 2003.

51. Barbara Demick, «A Less Intrusive Presence for Troops in South Korea», *Los Angeles Times*, 2 de abril de 2003.
52. Walter Pincus, «CIA Head Predicts Nuclear Race: Small Nations Pursuing Arms», *Washington Post*, 12 de febrero de 2003.

CAPÍTULO 4

1. Brian Kennedy, «Uncle Sam Wants You to Play This Game», *The New York Times*, 11 de julio de 2002; Steve Osunsami, «Simulated Sniping: U.S. Army Recruits Teens with Internet Game», ABC News, 31 de octubre de 2002, y Steve Rubenstein, «Military Recruits Motivated by Promises of Perks, Not Patriotism», *San Francisco Chronicle*, 13 de diciembre de 2002.
2. Véanse las siguientes páginas oficiales: *www.nhra.com* y *www.goarmy.com*. Véanse también Chris Grenz, «Dragster an Army of One», *Topeka Capital-Journal*, 24 de mayo de 2001, y Jeff Wolf, «Army Mixes Recruiting, Racing», *Las Vegas Review-Journal*, 8 de abril de 2002. Para una fotografía de «El Sargento», véase *Popular Mechanics*, 2002, *www.popularmechanics.com/automotive/motor_sports/2002/2/us_army_pm_dragster*.
3. David Wood, «Shaky Economy Alters Equations of Risk in Today's Military», *San Diego Union-Tribune*, 27 de abril de 2003.
4. Doug Rokke, «Gulf War Casualties», 30 de septiembre de 2002, *www.traprockpeace.org/gulfcasualties.html*; Karsten Strauss, «When the Dust Settles», ABC News, 5 de mayo de 2003; Scott Peterson, «A Rare Visit to Iraq's Radioactive Battlefield», *Christian Science Monitor*, 29 de abril de 1999, y Peterson, «Remains of Toxic Bullets Litter Iraq», *Christian Science Monitor*, 15 de mayo de 2003.
5. Susanna Hecht, «Uranium Warheads May Leave Both Sides a Legacy of Death for Decades», *Los Angeles Times*, 30 de marzo de 2003; Neil Mackay, «U.S. Forces' Use of Depleted Uranium Is "Illegal"», *Glasgow Sunday Herald*, 30 de marzo de 2003; Steven Rosenfeld, «Gulf War Syndrome, the Sequel», *Tom-Paine.com*, 8 de abril de 2003; «UK to Aid DU Removal», BBC News, 23 de abril de 2003; Frances Williams, «Clean-Up of Pollution Urged to Reduce Health Risks», y Vanessa Houlder, «Allied Troops Risk Uranium Exposure», *Financial Times*, 25 de abril de 2003; Jonathan Duffy, «Iraq's Cancer Children Overlooked in War», BBC News, 29 de abril de 2003.
6. Office of the Assistant Secretary of Defense for Force Management Policy, *Population Representation in the Military Services*, Department of Defense, Washington, noviembre de 2000, *www.defenselink.mil/prhome/poprep99*.
7. Leonel Sanchez, «Hispanics Overrepresented in Combat Roles, Report Says», *San Diego Union-Tribune*, 28 de marzo de 2003; «Baja Upset at U.S. Army Bid to Recruit in Tijuana», *San Diego Union-Tribune*, 9 de mayo de 2003; Mark Stevenson, «U.S. Army Recruiter Crosses Mexico Border», Associated Press, 9 de mayo de 2003; «Green Card Marines», *Los Angeles Times*, 25 de mayo de 2003.

8. Adam Clymer, «Service Academies Defend Use of Race in Their Admissions Policies», *The New York Times*, 28 de enero de 2003.
9. «News Transcript: Background Briefing on the All Volunteer Force», 13 de enero de 2003, www.defenselink.mil/news/Jan2003/t01132003_t113bkgd.html; Earl Ofari Hutchinson, «Echoes of “Fragging”», *San Francisco Chronicle*, 27 de marzo de 2003; y Kimberly Hefling, «Military Trial Urged in Kuwait Fraggling», *Washington Times*, 21 de junio de 2003.
10. Marie Tessier, «Sexual Assault Pervasive in Military, Experts Say», *Women's Enews*, 8 de abril de 2003.
11. Michael Janofsky, «Top Air Force Officer, at Academy, Issues Warning», *The New York Times*, 8 de marzo de 2003.
12. Roland Watson y Glen Owen, «Kitty Hawk Captain Loses Control», *Times Online*, «World News», 4 de septiembre de 2002.
13. Norman Solomon, «Media Sizzle for an Army of Fun», *Media Monitors*, 8 de julio de 2002, www.mediamonitors.net/solomon85.html.
14. Kevin Heldman, «On the Town with the U.S. Military in Korea», *Z Magazine*, febrero de 1997, www.zmag.org/zmag/articles/feb97army.html.
15. *Ibid.*
16. Marianne Szegedy-Maszak, «Death at Fort Bragg», *U.S. News & World Report*, 12 de agosto de 2002, p. 44.
17. Bill Vann, «The Fort Bragg Murders: A Grim Warning on the Use of the Military», *World Socialist Web Site*, 2 de agosto de 2002.
18. Colin Soloway, «“I Yelled at Them to Stop”», *Newsweek*, 7 de octubre de 2002, www.msnbc.com/news/814576.asp [disponible en: www.afghania.com/print.php?sid=1583], y Dan Plesch, «Failure of the 82nd Airborne», *Guardian*, 19 de diciembre de 2002. Véase también Marc W. Herold, «Vietnam Redux», 31 de octubre de 2002, www.cursor.org/stories/vietnam_redux.htm, donde se mencionan todos los incidentes ocurridos en Afganistán.
19. Associated Press, «Marine Corps Cancels Annual Sniper Meet», 23 de octubre de 2002.
20. John M. Broder, «Arizona Gunman Chose Victims in Advance», *The New York Times*, 30 de octubre de 2002.
21. Roland Watson y Glen Owen, «Kitty Hawk Captain», y «Kitty Hawk Captain Dismissed Over Crewmen's Incidents», *Yomiuri Shimbun*, Tokio, 4 de septiembre de 2002.
22. Heldman, «On the Town with the U.S. Military in Korea».
23. *Ibid.* Véase también Associated Press, «Uncle Sam Wants Your Kid», 3 de diciembre de 2002, y Suzanne Goldenberg, «Parents Furious as Pentagon Slides Recruiting Officers into Classrooms», *Guardian*, 5 de diciembre de 2002.
24. Véase Rick Jahnkow (Committee Opposed to Militarism and the Draft), «Military Escalates Assault on Civilian Schools», *Draft Notices*, mayo-julio de 2001, www.comdsd.org/article_archive/meacs_article.htm; Carl Campanile, «New Law Lets Army Get Info on High School Kids», *New York Post*, 17 de

- julio de 2002; David Goodman, «No Child Unrecruited: Should the Military Be Given the Names of Every High School Student in America?», *Mother Jones*, noviembre-diciembre de 2002; Helen Thomas, «Military Recruitment: An Invasion of Privacy», *The Jackson Channel.com*, 18 de noviembre de 2002.
25. George Fisher, «Power over Principle», *The New York Times*, 7 de septiembre de 2002. Véase también Rebecca Trounson, «Law Schools Bow to Pentagon on Recruiters», *Los Angeles Times*, 12 de octubre de 2002.
26. Lawrence H. Suid, *Guts and Glory: The Making of the American Military Image in Film*, University Press of Kentucky, Lexington, 2002, p. 8.
27. Nancy Benac, «More Movies with Pentagon Help», Associated Press, 16 de mayo de 2001.
28. V. Dion Haynes, «Hollywood Boosts the Military», *Chicago Tribune*, 27 de mayo de 2001.
29. Claudia Eller y Richard Natale, «Hit Status Elusive Target for “Pearl Harbor”», *Los Angeles Times*, 17 de junio de 2001. Véase también Simon Davis, «U.S. Critics Attack “Pearl Harbor” as Ultimate Hollywood Bilge», *London Telegraph*, 26 de mayo de 2001, y Todd McCarthy, «“Pearl Harbor”, a Film That Will Live in Infamy», Reuters, 25 de mayo de 2001.
30. Dana Calvo, «Military Using Its Promotional Arms in Theaters», *Los Angeles Times*, 15 de octubre de 2002.
31. Rupert Wingfield-Hayes, «Doubts Set In on Afghan Mission», BBC News, 28 de septiembre de 2002. Véase también James W. Crawley, «The War News—With No Last Names Allowed», *San Diego Union-Tribune*, 21 de octubre de 2001.
32. Véase Carol Brightman, «U.S. Military Plans the War of Words», *Los Angeles Times*, 16 de febrero de 2003, y Ralph Blumenthal y Jim Rutenberg, «Journalists Are Assigned to Accompany U.S. Troops», *The New York Times*, 18 de febrero de 2003.
33. *Time*, 16 de abril de 2001; *Honolulu Advertiser*, 16 de abril de 2001; tal como fue citado por John Kifner, «Despite Sub Inquiry, Navy Still Sees Need for Guests on Ships», *The New York Times*, 23 de abril de 2001. Véase también Tony Perry, «Sub Skipper Is Forced into Retirement», *Los Angeles Times*, 24 de abril de 2001.
34. Tony Perry, «Morale Likely a Factor in Decision on Sub Crew», *Los Angeles Times*, 4 de abril de 2001.
35. Phil Patton, «Exposing the Black Budget», *Wired*, noviembre de 1995, www.wired.com/wired/archive/3.11/patton_pr.html.
36. George Caldwell, «U.S. Defense Budgets and Military Spending», Library of Congress, marzo de 1992, www.loc.gov/rr/news/militaryspending.html; Bill Sweetman, «In Search of the Pentagon's Billion Dollar Hidden Budgets», www.geocities.com/Athens/Crete/2546/black.html, y Dan Morgan, «Classified Spending on the Rise; Report: Defense to Get \$23.2 Billion», *Washington Post*, 27 de agosto de 2003.
37. Sweetman, «In Search».
38. *Ibid.*

39. John Kelly, Chris Kridler y Kelly Young, «Billion Dollar Question: Where Has All the Air Force's EELV Money Gone?», *Florida Today*, 25 de agosto de 2002.
40. Robert Windrem, NBC News, «Military Role Grows on Home Front», 18 de abril de 2001, www.msnbc.com/news/546844.asp?Osp=n5b5zl. Véase también el editorial «Domestic Law Enforcement Is Not a Job for the Military», *Atlanta Journal-Constitution*, 19 de julio de 2002.
41. Véase, en especial, Alan W. Bock, *Ambush at Ruby Ridge: How Government Agents Set Randy Weaver Up and Took His Family Down*, Dickens Press, Irvine, California, 1995.
42. *Boston Globe* y Associated Press, «New Command Being Set Up to Defend North America», *San Diego Union-Tribune*, 18 de abril de 2002; Eric Schmitt, «General Backs More Policing Power for Military», *San Diego Union-tribune*, 21 de julio de 2002; David Johnston *et al.*, «Administration Begins to Rewrite Decades-Old Spying Restrictions», *The New York Times*, 30 de noviembre de 2002; Robert Dreyfuss, «Bringing the War Home», *Nation*, 26 de mayo de 2003.
43. U.S. Department of Defense, «Homeland Security», *Defense Link*, 6 de febrero de 2003, www.defenselink.mil/specials/homeland.
44. «Defense Takeover», *Financial Times*, 8 de abril de 2002.
45. Eric Lichtblau y James Risen, «Broad Domestic Role Asked for CIA and the Pentagon», *The New York Times*, 2 de mayo de 2003.
46. Jeanette Steele, «Corps' War with Law: Marines Say Protection of Species Hurts Combat Training», *San Diego Union-Tribune*, 26 de septiembre de 2002; y Esther Schrader, «Defense Seeking Greater Latitude», *Los Angeles Times*, 15 de julio de 2002. Véanse también Katharine Q. Seelye, «Defense Dept. Forum Focuses on Environment», *The New York Times*, 6 de febrero de 2003; Jennifer Lee, «Military Seeks Exemption on Harming Environment», *The New York Times*, 6 de marzo de 2003, y Andrew Gumbel, «Pentagon Seeks Freedom to Pollute Land, Air and Sea», *Independent*, 13 de marzo de 2003.
47. Charlie A. Beckwith, *Delta Force*, Dell Books, Nueva York, 1985, p. 268.
48. Stratfor Global Intelligence Update, «Foreign Policy and the U.S. Military», 9 de julio de 2001, www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=23554.
49. Dana Priest, «A Four-Star Foreign Policy: U.S. Commanders Wield Rising Clout, Autonomy», *Washington Post*, 28 de septiembre de 2000. Véase también Dana Priest, *The Mission: Waging War and Keeping Peace with America's Military*, Norton, Nueva York, 2003.
50. Dana Priest, «Standing Up to State and Congress», *Washington Post*, 30 de septiembre de 2000; Karen DeYoung, «Powell Says U.S. to Resume Training Indonesia's Forcer: Terrorism Fears Overtake Concerns about Army Abuses», *Washington Post*, 3 de agosto de 2002.
51. Daniel Siegel y Joy Hackel, «El Salvador: Counterinsurgency Revisited», en Michael T. Klare y Peter Kornbluh, eds., *Low-Intensity Warfare*, Pantheon,

- Nueva York, 1988, pp. 112-135. Véase también Cynthia J. Arnson, «Window on the Past: A Declassified History of Death Squads in El Salvador», en Bruce B. Campbell y Arthur D. Brenner, eds., *Death Squads in Global Perspective: Murder with Deniability*, St. Martin's Press, Nueva York, 2000, pp. 85-124.
52. Priest, «Standing Up».
53. Eric Schmitt y Thom Shanker, «Pentagon Sets Up Intelligence Unit», *The New York Times*, 24 de octubre de 2002.
54. Canadian Broadcasting Corp., «Experts Doubt Iraq, al-Qaeda Terror Link», 1 de noviembre de 2002.
55. Linda Robinson, «Moves That Matter: In the Intelligence Wars, a Pre-emptive Strike by the Pentagon Surprises Many in Congress», *U.S. News & World Report*, 12 de agosto de 2002, p. 18. Véase también Leona C. Bull, «Rivalry between Defense Department, CIA Reportedly Growing», *Journal of Aerospace and Defense Industry News*, 1 de noviembre de 2002, p. A6; Pat M. Holt, «U.S. Intelligence: Seeing What It Wants to See in Iraq», *Christian Science Monitor*, 7 de noviembre de 2002, Robert Dreyfuss, «The Pentagon Muzzles the CIA», *American Prospect* 13:22, 16 de diciembre de 2002; y Eric Schmitt, «Pentagon Draws Up a 20-to-30-Year Antiterror Plan», *The New York Times*, 17 de enero de 2003.
56. Robert Schlesinger, «Expanding Role of Defense Department Spurs Concerns; Some Say Officials Overstep Bounds, Limit other Agencies», *Boston Globe*, 8 de junio de 2003; Schmitt y Shanker, «Pentagon Sets Up Intelligence Unit».
57. Greg Miller, «Wider Pentagon Spy Role Is Urged», *Los Angeles Times*, 26 de octubre de 2002.
58. Patrick Martin, «Billions for War and Repression: Bush Budget for a Garrison State», *World Socialist Web Site*, 6 de febrero de 2002.
59. Tim Weiner, *Blank Check*, Warner Books, Nueva York, 1990, p. 178.
60. *Ibid.*, pp. 172-198; y Stephen D. Goose, «Low-Intensity Warfare: The Warriors and Their Weapons», en Klare y Kornbluh, *Low-Intensity Warfare*, p. 87.
61. Martin, «Billions for War»; y Rowan Scarborough, «Commandos Resist Loss of Purchasing Authority», *Washington Times*, 17 de octubre de 2002.
62. Tom Bowman, «"Special Forces" Role May Expand», *Baltimore Sun*, 3 de agosto de 2002; Pamela Hess, «Panel Wants \$7 Billion Elite Counter-Terror Units», United Press International, 26 de septiembre de 2002, y William M. Arkin, «The Secret War: Frustrated by Intelligence Failures, the Defense Department Is Dramatically Expanding Its "Black World" of Covert Operations», *Los Angeles Times*, 27 de octubre de 2002.
63. *The New York Times*, página de opinión, 21 de agosto de 2002.
64. Greg Miller, «Military Wants Its Own Spies», *Los Angeles Times*, 4 de marzo de 2003.

CAPÍTULO 5

1. Véase A. J. Langguth, *Our Vietnam: The War, 1954-1975*, Simon & Schuster Nueva York, 2000, pp. 184-185. Peter Schweizer, un investigador de la Institución Hoover, un *think tank* de derechas de la Universidad de Stanford, se muestra partidario de que Estados Unidos solucione las necesidades de personal de las fuerzas armadas por medio de una versión americana de la Legión Extranjera; véase su artículo «All They Can Be, except American», *The New York Times*, 18 de febrero de 2003.
2. Véanse Tamar Gabelnick, «Security Assistance after September 11», *Foreign Policy in Focus*, 7:4, mayo de 2002, y Latin America Working Group, «15,000 Latin Americans Trained by the U.S. Military Last Year», 20 de junio de 2002, www.nacla.org/bodies/body_29.php [disponible en: www.globalresearch.ca/articles/LAW207A.html].
3. Lora Lumpe, «U.S. Foreign Military Training: Global Reach, Global Power, and Oversight Issues», *Foreign Policy in Focus*, Special Report, mayo de 2002.
4. Véanse, por ejemplo, los relatos del ataque de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a la aldea afgana de Uruzgan, el 24 de enero de 2002. Después de matar al menos a diecinueve habitantes, los norteamericanos, que usaban máscaras, hicieron prisioneros a veintisiete hombres. Los prisioneros fueron torturados durante varios días, y algunos fueron asesinados con un tiro en la espalda. Luego se supo que ninguno de ellos pertenecía a los talibán ni a Al Qaeda. Un oficial dijo: «Lo sentimos. Cometimos un error al bombardear este lugar». La CIA indemnizó económicamente a las familias de los asesinados (Molly Moore, «Villagers Released by American Troops Say They Were Beaten, Kept in "Cage"», *Washington Post*, 11 de febrero de 2002).
5. Citado en Victoria García, «U.S. Foreign Military Training: A Shift in Focus», Center for Defense Information, «Terrorism Project», 8 de abril de 2002.
6. Con respecto al papel desempeñado por la CIA y el Pentágono en el derrocamiento de la democracia en Brasil y en los golpes militares que tuvieron lugar en Uruguay, Chile y Argentina, véase A. J. Langguth, *Hidden Terrors*, Pantheon, Nueva York, 1978.
7. Alfred W. McCoy, *The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade*, Lawrence Hill Books, Chicago, 1991, p. 306.
8. Linda Robinson, «America's Secret Armies: A Swarm of Private Contractors Bedevils the U.S. Military», *U.S. News & World Report*, 4 de noviembre de 2002; James Gerstenzang, «Vinnell Corp., Targeted in Riyadh Before, Loses 9 More Workers», *Los Angeles Times*, 14 de mayo de 2003.
9. Dana Priest, «U.S. Instructed Latins on Executions, Torture», *Washington Post*, 21 de septiembre de 1996. Véase también Raymond Ker, «CIA and School of the Americas», *MediaMonitors*, 26 de noviembre de 2001, www.mediamonitors.net/raymondker3.html.
10. The Athenaeum, «The Sepoy Mutiny—India, 1857», www.lexicorps.com/sepoy.htm.
11. George Crile, *Charlie Wilson's War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History—the Arming of the Mujahideen*, Atlantic Monthly Press, Nueva York, 2003.
12. Véanse International Consortium of Investigative Journalists, «Making a Killing: The Business of War», 28 de octubre de 2002, www.public-i.org/bow/report.aspx?aid=147; Deborah Avant, «Private Military Companies Part of U.S. Global Reach», *Progressive Response*, 6:17, 7 de junio de 2002; Robinson, «America's Secret Armies»; Esther Schrader, «U.S. Companies Hired to Train Foreign Armies», *Los Angeles Times*, 14 de abril de 2002; James Dao, «U.S. Company to Take Over Karzai Safety», *The New York Times*, 19 de septiembre de 2002; Leslie Wayne, «America's For-Profit Secret Army», *The New York Times*, 13 de octubre de 2002; David Isenberg, «Security for Sale in Afghanistan», *Asia Times*, 6 de enero de 2003, e Isenberg, «There's No Business like Security Business», *Asia Times*, 30 de abril de 2003.
13. Citado en Lumpe, «U.S. Foreign Military Training».
14. Robinson, «America's Secret Armies», y John J. Lumpkin, «Spy Plane Too Costly for Operations», Associated Press, 28 de agosto de 2002.
15. Halliburton Company Web Site, «Halliburton Unit Awarded Logistics Services Contract to Support U.S. Troops in the Balkans», 18 de febrero de 1999, www.halliburton.com/news/archive/1999/brsnws_021999.jsp.
16. Kathleen Hennessey, «A Contract to Spend», *Mother Jones*, 23 de mayo de 2002; Maj Haakon Haugsboe «The Biggest Camp There Is: Houses Being Built for 5,000 Personnel at Camp Bondsteel», 27 de septiembre de 1999, www.freerepublic.com/forum/la38deddd77282.htm; Global Security Organization, «Camp Bondsteel», www.globalsecurity.org/military/facility/camp-bondsteel.htm. Véase también Ivana Avramovic, «Civilians Take Over Security at Bosnia's Task Force Eagle Base Camps», *Stars & Stripes*, 17 de agosto de 2002.
17. Robert Bryce, «The Candidate from Brown & Root», *Austin Chronicle*, 28 de agosto de 2000.
18. Lee Drutman y Charlie Gray, «Cheney, Halliburton and the Spoils of War», *Citizen Works*, 4 de abril de 2003, www.citizenworks.org/corpldgs3r2.php.
19. Véanse, entre otros, Robert Caro, *LBJ: Master of the Senate*, Knopf, Nueva York, 2002; Knut Royce y Nathaniel Heller, «Cheney Led Halliburton to Feast at Federal Trough», Investigative Report, Center for Public Integrity, www.public-i.org/report.aspx?aid=225&sid=100; Martin A. Lee, «Reality Bites», *San Francisco Bay Guardian*, 13 de noviembre de 2000; Jeff Gerth y Don Van Natta Jr., «In Tough Times, a Company Finds Profits in Terror War», *The New York Times*, 13 de julio de 2002; Frank Rich, «The Road to Perdition», *The New York Times*, 20 de julio de 2002 y Molly Ivins, «Dirtied by Iraqi Oil», Creators Syndicate, *Fort Worth Star-Telegram*, 5 de septiembre de 2002.
20. Paul Stuart, «Camp Bondsteel and America's Plans to Control Caspian Oil», *World Socialist Web Site*, 29 de abril de 2002.
21. James K. Galbraith, «The Unbearable Costs of Empire», *American Prospect*, 13:21, 18 de noviembre de 2002.

22. Sargento Técnico Theresa McCullough, «U.S. Tankers Deploy to Bulgaria», *Air Force Link*, 21 de noviembre de 2001; Ian Traynor, «Payback Time for America's Allies as GIs Set Up Camp in the New Europe», *Guardian*, 4 de marzo de 2003; Doug Sanders, «Ex-Enemy Helping U.S. Fight in Iraq», *Globe and Mail*, 20 de marzo de 2003; Global Security Organization, «Burgas Airport», www.globalsecurity.org/military/facility/burgas-ap.htm.
23. Global Security Organization, «Camp Doha», www.globalsecurity.org/military/facility/camp-doha.htm.
24. «Top 200 Contractors 2000», *Government Executive Magazine*, 1 de agosto de 2000.
25. Global Security Organization, «Camp Doha».
26. Patrick E. Tyler, «Two U.S. Computer Workers Are Shot, One Fatally, Near Army Base in Kuwait», *The New York Times*, 22 de enero de 2003; Craig D. Rose y Penni Crabtree, «Tapestry Solutions Is a Software Supplier», *San Diego Union-Tribune*, 22 de enero de 2003; Kenneth Bredemeier, «Thousands of Private Contractors Support U.S. Forces in Persian Gulf», *Washington Post*, 3 de marzo de 2003.

CAPÍTULO 6

1. Center for Defense Information, «The Global Network of United States Military Bases», *Defense Monitor* 18:2, 1989.
2. U.S. Senate Subcommittee on Security Agreements and Commitments Abroad, Committee on Foreign Relations, 21 de diciembre de 1970; citado en *Monthly Review* 53:10, marzo de 2002.
3. Office of the Deputy Undersecretary of Defense (Installations and Environment), *Base Structure Report (A Summary of DoD's Real Property Inventory)*, Department of Defense, Washington, 2002; y U.S. Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate for Information, Operations, and Reports, *Worldwide Manpower Distribution by Geographical Area*, 30 de septiembre de 2001, web1.whs.osd.mil/mm/mid/m05/m05sep01.pdf. Las mejores fuentes extraoficiales sobre el imperio de bases estadounidense son William R. Evinger, ed., *Directory of U.S. Military Bases Worldwide*, Oryx Press, Phoenix, 1998, y la base de datos de Global Security Organization, www.globalsecurity.org.
4. Charles Glass, «Diary», *London Review of Books*, 21 de febrero de 2002, p. 37.
5. William M. Arkin, «The Underground Military; Israel: Capital of Classified Bases», *Washington Post*, 7 de mayo de 2001. Véase también Agence France-Presse, «U.S. May Use Israeli Army Bases against Iraq», 9 de septiembre de 2002.
6. Michael Moran, «G.I. Joe as Big Brother», MSNBC, 6 de abril de 2001, www.msnbc.com/news/546845.asp?Osp=n5b4b4.

7. Declaración oficial del teniente general de la fuerza aérea Michael V. Hayden, director de la Agencia de Seguridad Nacional y jefe del Servicio Central de Seguridad, ante la Comisión de Investigación del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia y el Comité Selecto Permanente de la Cámara de Representantes, 17 de octubre de 2002. Sobre Intelsat, véase Renae Merle, «U.S. Probes Military Use of Commercial Satellites», *Washington Post*, 6 de diciembre de 2002.
8. Las principales fuentes son Patrick S. Poole, *Echelon: America's Secret Global Surveillance Network*, fly.hiwaay.net/~pspoole/echelon.html; Duncan Campbell, et al., *Development of Surveillance Technology and Risk of Abuse of Economic Information*, Working Document for the Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Program of the European Parliament, Parlamento Europeo, Luxemburgo, abril de 1999; Niall McKay, «Lawmakers Raise Questions about International Spy Network», *The New York Times*, 27 de mayo de 1999; Associated Press, «U.S.-Led Spy Net in Japan», *Washington Post*, 27 de junio de 2001; Duncan Campbell, Richard Norton-Taylor, David Pallister y Jamie Wilson, «The Lessons for the U.S.: Money Can't Buy Safety from Terrorism», *Guardian*, 15 de septiembre de 2001; Tatsushi Doi, «In-depth Study of Echelon», *Sankei Shimbun* (Tokio), 16 de mayo de 2001; Doi, «Intelligence Activities in Taiwan», *Sankei Shimbun*, 30 de mayo de 2001; Hiroaki Horiuchi, «Echelon Has Been Intercepting Japanese Diplomatic Telegrams since 1981», *Mainichi Shimbun* (Tokio), 27 de junio de 2001, y «Echelon», *Tokio Shimbun*, 26 de agosto de 2001. (Los cuatro últimos artículos están en japonés.)
9. Joseph Gerson y Bruce Birchard, eds., *The Sun Never Sets: Confronting the Network of Foreign U.S. Military Bases*, South End Press, Boston, 1991, p. 16; Public Radio News Services, Melbourne, Australia, transcripción, «The CIA in Australia, Part 3», octubre-noviembre de 1986, www.serendipity.li/cial/cia_oz/cia_oz3.htm, y Andrew Clark, «Kerr Briefed on CIA Threat to Whitlam», *Sunday Age*, 15 de octubre de 2000, www.ozpeace.net/OldSite/pinegap/kerrsbriefing.htm.
10. Neil King, Jr., «Spy Agency Taps into Undersea Cable», *Wall Street Journal Online*, 22 de mayo de 2001. Está programado que el Jimmy Carter comience a pinchar cables de fibra óptica submarinos en 2004.
11. Campbell, *Development of Surveillance Technology*, pp. 48-50; Evinger, *Directory of U.S. Military Bases Worldwide*, y Vernon Loeb, «Espionage Demands Prod Navy on Sub Construction», *Washington Post*, 5 de julio de 2002.
12. Mark Thomas, «If the French Had Asked for Military Bases in Britain, We'd Be Torching Citroens and Picketing Patisseries», *New Statesman*, 9 de abril de 2001, y Diana Johnstone y Ben Cramer, «The Burdens and the Glory: U.S. Bases in Europe», en Gerson y Birchard, *The Sun Never Sets*, p. 210.
13. Gerson y Birchard, eds., *The Sun Never Sets*, p. 16. En enero de 2003, el secretario de Defensa británico tomó la decisión, sin consultar al parlamento, de permitir que Estados Unidos modernizara y utilizara la base secreta en Fyling-

- dales, al norte de Yorkshire, como parte de su sistema de defensa antimisiles (Associated Press, *The New York Times*, 16 de enero de 2003).
14. Evinger, *Directory of U.S. Military Bases Worldwide*, p. 291.
 15. Richard Norton-Taylor, «Embarrassed U.S. Blocks Case against Peace Fighter», *Guardian*, 29 de junio de 2002.
 16. Poole, *Echelon*, p. 13; entrevista a James Bamford, autor de *Body of Secrets*, en *WorldNetDaily*, 24 de junio de 2001, www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=23342; y CBS News, *60 Minutes*, «Ex-Snoop Confirms Echelon Network», Nueva York, 27 de febrero de 2000 (transcripción en www.cbsnews.com/stories/2000/02/24/60minutes/main164651.shtml).
 17. Véanse Yorkshire Campaign for Nuclear Disarmament, «Menwith Hill, Commercial Espionage», www.cndyorks.gn.apc.org/mbs/index.htm, y Jeffrey Richelson, «Desperately Seeking Signals», *Bulletin of the Atomic Scientists*, 56:2, marzo-abril de 2000, pp. 47-51; véanse también la página web de American Civil Liberties Union dedicada especialmente a Echelon, www.echelon-watch.org; Stuart Miller, Richard Norton-Taylor e Ian Black, «Worldwide Spying Network Is Revealed», *Guardian*, 26 de mayo de 2001; Rupert Goodwins, «Echelon: How It Works», *ZDNet UK*, news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2079849,00.html, y en ZD Net, «Echelon Bibliography», www.zdnet.co.uk/news/specials/2000/06/echelon.
 18. Para una explicación sencilla de los sistemas de claves aleatorias de uso único (*one-time pads*), véase Francis Litterio, «Why Are One-Time Pads Perfectly Secure?», www.world.std.com/~fran/crypto/one-time-pad.html.
 19. *60 Minutes*, «Ex-Snoop Confirms Echelon Network».
 20. Derrick Z. Jackson, «A Nation Changed—and Unchanged», *Boston Globe*, 11 de septiembre de 2002; Dara Colwell, «The SUV-Terrorism Connection», *AlterNet.org*, 15 de octubre de 2001; Terry Golway, «Time to Junk Gas-Guzzling SUV's», *New York Observer*, 12 de noviembre de 2001, p. 5; Ian Roberts, «Car Wars», *Guardian*, 18 de enero de 2003; Jeff Plungis, «SUV Tax Break May Reach \$75,000», *Detroit News*, 20 de enero de 2003, y Keith Bradsher, *High and Mighty: SUV's—The World's Most Dangerous Vehicles and How They Got That Way*, Public Affairs, Nueva York, 2002.
 21. Federation of American Scientists, «Smedley Butler on Interventionism», www.fas.org/man/smedley.htm; y Hans Schmidt, *Maverick Marine: Gen. Smedley D. Butler and the Contradictions of American Military History*, University Press of Kentucky, Lexington, 1987, p. 2 *et passim*.
 22. Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, *Caspian Sea Region: Reserves and Pipelines Tables*, junio de 2002. Véase también Dale Allén Pfeiffer, «The Forging of “Pipelineistan”: Oil, Gas Pipelines High Priority for U.S. in Central Asian Military Campaigns», *From the Wilderness.com*, 11 de julio de 2002.
 23. Michael T. Klare, «Oil Moves the War Machine», *Progressive*, junio de 2002; y Klare, «Oiling the Wheels of War», *Nation*, 7 de octubre de 2002, p. 6-7. Para otras previsiones sobre las reservas de gas y crudo del mar Caspio, véanse

- Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia*, Yale University Press, New Haven, 2000, pp. 144-145 [hay trad. cast.: *Los talibán: el Islam, el petróleo y el nuevo «gran juego» en Asia central*, Península, Barcelona, 2001, pp.219-221]; Stephen Kinzer, «A Perilous New Contest for the Next Oil Prize», *The New York Times*, 21 de septiembre de 1997, y «Russia Appears to Be Leading in Caspian Sea Resources Export Race», *Alexander's Gas & Oil Connections*, 6:18, 25 de septiembre de 2001.
24. «How Oil Interests Play Out in U.S. Bombing of Afghanistan», *Drillbits & Tailings*, 6:8, 31 de octubre de 2001; Pratap Chatterjee, «Afghan Pipe Dream: Is the U.S. War on Terrorism Really a War for a Caspian Natural Gas Pipeline? Maybe Yes, and Maybe No», *Corp Watch*, 28 de junio de 2002.
 25. Neela Banerjee y Sabrina Tavernise, «As the War Shifts Alliances, Oil Deals Follow», *The New York Times*, 15 de diciembre de 2001.
 26. Phar Kim Beng, «Oil Needs Drive China West», *Asia Times*, 20 de noviembre de 2002; Sabrina Tavernise, «Putin Will Focus on Energy in Visit to China This Week», *The New York Times*, 2 de diciembre de 2002. Véase también Kang Wu y Fereidun Fesharaki, «Managing Asia Pacific's Energy Dependence on the Middle East: Is There a Role for Central Asia?», *Analysis from the East-West Center*, n.º 60, junio de 2002.
 27. J. Eric Duskin, «Permanent Installation: Thousands of U.S. Troops Are Headed to Central Asia, and They're Not Leaving Anytime Soon», *In These Times*, 29 de marzo de 2002; Robert G. Kaiser, «U.S. Plants Footprint in Shaky Central Asia», *Washington Post*, 27 de agosto de 2002.
 28. Chatterjee, «Afghan Pipe Dream». Véanse también Jeff Gerth, «Bribery Inquiry Involves Kazakh Chief, and He's Unhappy», *The New York Times*, 11 de diciembre de 2002; y Joshua Chaffin, «The Kazakh Connection: How Money Buys Access to the Politicians and Power-brokers in Washington», *Financial Times*, 26 de junio de 2003.
 29. Bob Woodward, *Bush at War*, Simon & Schuster, Nueva York, 2002, p. 340 [hay trad. cast.: *Bush en guerra*, Península, Barcelona, 2003], y Mike Allen, «CIA's Cash Toppled Taliban», *Washington Post*, 16 de noviembre de 2002.
 30. Coronel Stanislav Lunev, «Welcoming Our New Ally, Uzbek President Karimov», *NewsMax.com*, 11 de marzo de 2002; Robert Burns, «Rumsfeld Meets Central Asian Leaders», *Washington Post*, 28 de abril de 2002; Ahmed Rashid, «Central Asia Trouble Ahead», *Far Eastern Economic Review*, 9 de mayo de 2002; Duskin, «Permanent Installation»; Kari Huus, «Critical Ally Calling, with Baggage», *MSNBC.com*, 24 de septiembre de 2002; Yonatan Pomrenze, «Uzbekistan Basks in U.S. Spotlight», *MSNBC.com*, 24 de septiembre de 2002.
 31. Véase Kinzer, «Perilous New Contest».
 32. Sabrina Tavernise, «Kazakhstan Reaches Oil Accord with Foreign Group», *The New York Times*, 28 de enero de 2003.
 33. Carla Marinucci, «Chevron Redubs Ship Named for Bush Aide; Condoleezza Rice Drew Too Much Attention», *San Francisco Chronicle*, 5 de mayo de 2001.

34. Andrew Jack y David Stern, «Pipeline Plan for Borjomi Valley Is Approved», *Financial Times*, 3 de diciembre de 2002. Véanse también Jay Hancock, «Is Bush Pro-Azeri or Just Pro-Oil?», *Baltimore Sun*, 2 de abril de 2001; Armen Georgian (Agence France-Presse), «U.S. Eyes Caspian Oil in "War on Terror"», *ZNet*, 1 de mayo de 2002, y Georgian, «Guzzling the Caspian», *Christian Science Monitor*, 27 de septiembre de 2002.
35. Véase Kaiser, «U.S. Plants Footprint».
36. Georgian, «U.S. Eyes Caspian Oil». Véanse también Misha Dzhindzhikhashvili (Associated Press), «Plan for U.S. Troops in Georgian Irks Russia», *San Diego Union-Tribune*, 28 de febrero de 2002, y Patrick Martin, «U.S. Troops Deployed to Former Soviet Republic of Georgia», *World Socialist Web Site*, 1 de marzo de 2002.
37. Patrick Martin, «U.S. Planned War in Afghanistan Long before September 11», *World Socialist Web Site*, 20 de noviembre de 2001. Véanse también James Risen, «New Breed of Roughnecks Battles over Caspian Oil Fields», *Los Angeles Times*, 24 de mayo de 1998, y Pierre Abramovici, «Background to Washington's War on Terror», *Le Monde Diplomatique*, enero de 2002.
38. Steven Levine, «UNOCAL Quits Afghanistan Pipeline Project», *The New York Times*, 5 de diciembre de 1998; Rashid, *Taliban*, p. 160 [trad. cast. pp.247-248]; Jennifer van Bergen, «Zalmay Khalilzad and the Bush Agenda», *Truthout*, 13 de enero de 2001, www.truthout.org/docs_01/01.14A.Zalmay.Oil.htm; «Vital Statistics: Greasing the Machine—Bush, His Cabinet, and Their Oil Connections», *Drillbits & Tailings*, 6:5, 30 de junio de 2001; Daniel Fisher, «Afghanistan: Oil Execs Revive Pipeline from Hell», *Forbes*, 4 de febrero de 2002; Larry Chin, «Players on a Rigged Grand Chessboard: Bidas, UNOCAL, and the Afghanistan Pipeline», *Online Journal*, 6 de marzo de 2002; Halima Kazem, «Afghanistan Eyes a Pipeline, but Prospects Look Dim», *Eurasianet*, 6 de junio de 2002, y «Joe Conason's Journal», *Salon.com*, 3 de diciembre de 2002, www.salon.com/politics/conason/2002/12/03/bush/index.html.
39. Jacob Weisberg, «Bush's Favorite Afghan», *Slate*, 5 de octubre de 2001, www.slate.msn.com/?id=1008402, y Wayne Madsen, «Afghanistan, the Taliban, and the Bush Oil Team», 10 de enero de 2002, www.democrats.com/view2.cfm?id=5496.
40. Rashid, *Taliban*, p. 163 [trad. cast. p.249].
41. Levine, «UNOCAL Quits». Véase también Mary Pat Flaherty, David B. Ottaway y James V. Grimaldi, «How Afghanistan Went Unlisted as Terrorist Sponsor», *Washington Post*, 5 de noviembre de 2001.
42. Pepe Escobar, «Pipelineistan: The Rules of the Game», *Asia Times Online*, 25 de enero de 2002.
43. Allen, «CIA's Cash».
44. Kaiser, «U.S. Plants Footprint».
45. Martin Walker, «Bases, Bases Everywhere», United Press International, 23 de diciembre de 2001; Kamran Khan, «Pakistan Wants Its Airbases Back», *News, Pakistán*, 11 de enero de 2002, y Anwar Iqbal, «U.S. Flew 57,800 Sorties from Pakistan», United Press International, 19 de mayo de 2003.

46. Duskin, «Permanent Installation».
47. Eric Schmitt y James Dao, «U.S. Is Building Up Its Military Bases in Afghan Region», *New York Times*, 9 de enero de 2002.
48. Edmund L. Andrews, «A Bustling U.S. Air Base Materializes in the Mud», *The New York Times*, 27 de abril de 2002. Véanse también Global Security Organization, «Manas International Airport, Ganci Air Base, Bishkek, Kyrgyzstan», www.globalsecurity.org/military/facility/manas.htm; Burns, «Rumsfeld Meets»; Patrick Martin, «U.S. Bases Pave the Way for Long-Term Intervention in Central Asia», *World Socialist Web Site*, 11 de enero de 2002; Duskin, «Permanent Installation», y Steven Lee Myers, «Russia to Deploy Air Squadron in Kyrgyzstan, Where U.S. Has Base», *The New York Times*, 4 de diciembre de 2002.
49. Ahmed Rashid, «New Wars to Fight», *Far Eastern Economic Review*, 12 de septiembre de 2002. Véanse también Global Security Organization, «Khanabad, Uzbekistan», www.globalsecurity.org/military/facility/khanabad.htm; «U.S. Indicates New Military Partnership with Uzbekistan», *Wall Street Journal*, 15 de octubre de 2001; Schmitt y Dao, «U.S. Is Building Up»; Martin, «U.S. Bases Pave the Way»; Duskin, «Permanent Installation»; Andrews, «A Bustling U.S. Air Base»; Baglia Bukharbaeva (Associated Press), «U.S. Still Digging In at Secret Forward Base», *San Diego Union-Tribune*, 29 de mayo de 2002, y Sean Gonsalves, «War on Terrorism Has Oily Undercurrent», *Seattle Post-Intelligencer*, 3 de septiembre de 2002.
50. Chatterjee, «Afghan Pipe Dreams»; «USA Pledges Not to Abandon Central Asia after Afghan War», BBC, de Interfax-Kazakhstan News Agency, 19 de diciembre de 2001, y George Monbiot, «America's Imperial War», *Guardian*, 12 de febrero de 2002.

CAPÍTULO 7

1. El número de bases en Estados Unidos ha sido tomado de William R. Evinger, ed., *Directory of U.S. Military Bases Worldwide*, Oryx Press, Phoenix, 1998³.
2. «The Monroe Doctrine Declared, 1823», <http://campus.northpark.edu/history/WebChron/USA/MonDoc.html>, y «Monroe Doctrine», <http://gi.grolier.com/presidents/ealside/mondoc.html>.
3. Harry Magdoff, introducción a *Remaking Asia: Essays on the American Uses of Power*, Mark Selden, ed., Pantheon, Nueva York, 1974, p. 4.
4. Ronald Steel, *Pax Americana*, Viking, Nueva York, 1968, p. 10. [Hay trad. cast.: *Pax americana*, Lumen, Barcelona, 1970.]
5. Garrett Moritz, «Explaining 1898: Conquest of Empire in the Gilded Age», www.gtexts.com/college/papers/s4.html, y Stuart Creighton Miller, «Benevolent Assimilation»: *The American Conquest of the Philippines, 1899-1903*, Yale University Press, New Haven, 1982, p. 3. Un estimulante libro que cuestiona la tesis de la frontera de Turner es Andro Linklater, *Measuring America*:

- How An Untamed Wilderness Shaped the United States and Fulfilled the Promise of Democracy*, Walker & Co., Nueva York, 2002.
6. «U.S. Intervention in Latin America», www.smplanet.com/imperialism/teddy.html, y «The Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine», www.uiowa.edu/~c030162/Common/Handouts/POTUS/TRoos.html.
 7. Zoltan Grossman, ed., «A Century of U.S. Military Interventions», www.zmag.org/CrisisCurEvs/interventions.htm.
 8. David B. Abernethy, *The Dynamics of Global Dominance: European Overseas Empires, 1415-1980*, Yale University Press, New Haven, 2000, p. 86.
 9. John M. Collins, «Military Bases», *Military Geography for Professionals and the Public*, U.S. National Defense University, Institute for National Strategic Studies, Washington, marzo de 1998, www.ndu.edu/inss/books/Books%20%201998/Military%20Geography%20March%2098/milgeoch12.html, y Kenneth Hunt, *NATO without France: The Military Implications*, Adelphi Paper n.º 32, Institute for Strategic Studies, Londres, diciembre de 1966.
 10. Keith B. Cunningham y Andreas Klemmer, *Restructuring the U.S. Military Bases in Germany: Scope, Impacts, and Opportunities. Report 4*, Bonn International Center for Conversion, Bonn, 1995, p. 6.
 11. *Ibid.*, p. 10.
 12. *Ibid.*, p. 14.
 13. Michael Goldfarb, «Origins of Pax Americana», www.insideout.org/documentaries/pax/notebook.asp. Véase también Mark Landler, «Germans Near Air Base Don't Hate U.S., Just the Noise», *The New York Times*, 17 de febrero de 2003.
 14. Evinger, *Directory of U.S. Military Bases Worldwide*, p. 255.
 15. Véanse Ken Silverstein, «Police Academy in the Alps: The Tax-Supported Marshall Center Offers More Fun and Games Than War Games», *Nation*, 7 de octubre de 2002, pp. 17-22; Rick Emert, «Army Cranking Out New Facilities», *Stars & Stripes*, 14 de diciembre de 2002; David Rennie, «Pentagon Plans NATO Blitz on Germany by Pulling Out», *Sydney Morning Herald*, 12 de febrero de 2003.
 16. Cunningham y Klemmer, *Restructuring the U.S. Military Bases*, p. 23.
 17. Kozy K. Amemiya, «The Bolivian Connection: U.S. Bases and Okinawan Emigration», en Chalmers Johnson, ed., *Okinawa: Cold War Island*, Japan Policy Research Institute, Cardiff, California, 1999, pp. 53-69.
 18. Véanse, en especial, Ichiro Tomiyama, «The "Japanese" of Micronesia», en Ronald Y. Nakasone, ed., *Okinawan Diaspora*, University of Hawaii Press, Honolulu, 2002, pp. 64-68 *et passim*; Koji Taira, «Okinawa's Choice: Independence or Subordination», en Johnson, ed., *Okinawa: Cold War Island*, pp. 171-185, y Steve Rabson, introducción a *Okinawa: Two Postwar Novellas By Oshiro Tatsuhiro and Higashi Mineo*, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1989, pp. 1-30.
 19. Véase Kensei Yoshida, *Democracy Betrayed: Okinawa under U.S. Occupation*, Center for East Asian Studies, Western Washington University, Bellingham, 2001, p. 17.
 20. *Ibid.*, p. 54.
 21. Morton Mintz, «U.S. Stationed A-Bomb Ship 200 Yards off Japan's Coast», *Washington Post*, 22 de mayo de 1981; Edwin O. Reischauer, «Japan: The Meaning of the Flap», *Washington Post*, 5 de junio de 1981, y Hans M. Kristensen, *Japan under the U.S. Nuclear Umbrella*, Nautilus Institute, Berkeley, julio de 1999.
 22. Chii Kyotei Kenkyukai (Status of Forces Agreement Research Association), *Nichi-Bei chii kyotei chikujo hiban* (crítica, punto por punto, del acuerdo americano-japonés sobre el estatus de las fuerzas armadas), Shin Nihon Shupansha, Tokio, 1997, pp. 253-256. En japonés.
 23. Véanse, por ejemplo, Takis Michas, «America the Despised», *National Interest*, primavera de 2002, pp. 94-102; Anthee Carassava, «Anti-Americanism in Greece Is Reinvigorated by War», *The New York Times*, 7 de abril de 2003, y John Brady Kiesling, «Diplomatic Breakdown», *Boston Globe*, 27 de abril de 2003.
 24. Citado en Jim Huck, «1947-1970s, Greece: Helping Fascists in Civil War & Coup», www.ncf.carleton.ca/coat/our_magazinellinks/issue43/articles/1947_1970s_greece.htm.
 25. Citado por William Blum, *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II*, Common Courage Press, Monroe, Maine, 1995, p. 216.
 26. Seymour M. Hersh, *Kissinger: The Price of Power*, 1983; citado en Blum, *Killing Hope*, p. 220.
 27. Helena Smith, «The CIA Claims to Have Changed», *Guardian*, 28 de agosto de 2001; «A U.S. History of Greece Is Kept Secret», *Kathimerini* (edición en inglés), Athens, 30 julio de 2001.
 28. Thomas Patrick Carroll, «Last Tango in Nicosia», *Middle East Intelligence Bulletin*, 3:12, diciembre de 2001.
 29. William J. Pomeroy, «The Philippines: A Case History of Neocolonialism», en Mark Selden, ed., *Remaking Asia: Essays on the American Uses of Power*, Pantheon, Nueva York, 1974, p. 162.
 30. Alva M. Bowen, Jr., «The Historical Setting: 1947-1975», en John W. McDonald, Jr., y Diane B. Bendahmane, eds., *U.S. Bases Overseas: Negotiations with Spain, Greece, and the Philippines*, Westview, Boulder, Colorado, 1990, p. 74.
 31. Véase Bryan Johnson, *The Four Days of Courage: The Untold Story of the People Who Brought Marcos Down*, Free Press, Nueva York, 1987.
 32. Roland G. Simbulan, «How "The Battle of the Bases" Was Won», www.boondocksnet.com/centennial/sctexts/simbulan.html.
 33. Michael Satchell, «Toxic Legacy: What the Military Left Behind», *U.S. News & World Report*, 24 de enero de 2000, pp. 30-31, y Benjamin Pimentel, «Deadly Legacy: Leftover Bombs, Chemicals Wreak Havoc at Former U.S. Bases in Philippines», *San Francisco Chronicle*, 5 de julio de 2001.
 34. Dan Murphy, «Long-Term U.S. Strategy Emerges out of Philippines», *Christian Science Monitor*, 3 de julio de 2002; Michael Satchell, «Back to the Philippines: Eight Years after Base Closings, the U.S. Is Rebuilding a Military Relationship», *U.S. News & World Report*, 24 de enero de 2000, pp. 30-32;

- Doug Bandow, «Instability in the Philippines: A Case Study for U.S. Disengagement», CATO Institute, *Foreign Policy Briefing*, n.º 64, 21 de marzo de 2001; Oliver Teves, «Philippine Base Ready for U.S.-Led Training», Associated Press, *San Diego Union-Tribune*, 20 de enero de 2002; Luis H. Francia, «U.S. Troops in the Philippines», *Village Voice*, 20-26 de febrero de 2002; Jane Perlez, «U.S. Troops Likely to Remain in Philippines Longer Than Planned», *The New York Times Service*, *San Diego Union-Tribune*, 31 de marzo de 2002, y Tyler Marshall y John Hendren, «U.S. to Leave Philippines Despite Hostage Situation», *Los Angeles Times*, 25 de mayo de 2002.
35. Kari Huus, «In Philippines, G.I. Joe Is Back», MSNBC, 2 de agosto de 2002, www.msnbc.com/news/787670.asp; BBC News, «U.S. Unwelcome in Southern Philippines», 17 de marzo de 2003; Karen DeYoung, «Powell Says U.S. to Resume Training Indonesia's Forces», *Washington Post*, 3 de agosto de 2002.
 36. Eric Schmitt, «U.S. to Send Nearly 2,000 Troops to Fight Militants in Philippines», *The New York Times*, 20 de febrero de 2003, y Jim Gomez, Associated Press, «Philippines Says U.S. Troops Not Welcome in Combat Patrols», *San Diego Union-Tribune*, 22 de abril de 2003.
 37. William Greider, *Fortress America: The American Military and the Consequences of Peace*, Public Affairs, Nueva York, 1998, p. 101.
 38. Haroon Siddiqui, «Real American Agenda Now Becoming Clear», *Toronto Star*, 4 de mayo de 2003. Véanse también Peter Grier, «A Reluctant Empire Stretches More», *Christian Science Monitor*, 17 de enero de 2002; Thom Shanker y Eric Schmitt, «Pentagon Expects Long-Term Access to Four Key Bases in Iraq», *The New York Times*, 20 de abril de 2003; Michael R. Gordon y Eric Schmitt, «U.S. Will Move Air Operations to Qatar Base», *The New York Times*, 28 de abril de 2003; Eric Schmitt, «U.S. to Withdraw All Combat Units from Saudi Arabia», *The New York Times*, 30 de abril de 2003; Esther Schrader, «U.S. Expedites Reshuffling of Europe Troops», *Los Angeles Times*, 1 de mayo de 2003; Seth Stern, «New Map for U.S. Outposts», *Christian Science Monitor*, 1 de mayo de 2003.

CAPÍTULO 8

1. Véase Anthony Cave Brown, *Oil, God, and Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kings*, Houghton Mifflin, Boston, 1999. [Hat trad. cast.: *Dios, oro y petróleo: la historia de Aramco y los Reyes Saudíes*, Andrés Bello, Barcelona, 2001.]
2. Sobre los orígenes de la diplomacia norteamericana del petróleo en Oriente Próximo, véase Douglas Little, «Opening the Door: Business, Diplomacy, and America's Stake in Middle East Oil», en *American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2002, pp. 43-75.
3. Véase Robert Fisk, «New Crisis, Old Lessons: The Suez Crisis Has Haunted British Government for Almost 50 Years», *Independent*, 15 de enero de 2003.

4. Global Security Organization, «King Abdul Aziz Air Base, Dhahran, Saudi Arabia», <www.globalsecurity.org/military/facility/dhahran.htm>, y Patrick E. Tyler, «Saudis Plan to End U.S. Presence», *The New York Times*, 9 de febrero de 2003.
5. La fuente indispensable es Ervand Abrahamian, «The 1953 Coup in Iran», *Science & Society*, 65:2, verano de 2001, pp. 182-215. Véanse también Phillip Knightley, «Iraq Chose Saddam for Good Reason: The West Needs a History Lesson», *Independent*, 4 de agosto de 2002, y el importante libro de Stephen Kinzer, *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*, John Wiley & Sons, Nueva York, 2003.
6. Christopher T. Sandars, *America's Overseas Garrisons: The Leasehold Empire*, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 287, 293, 299; Robert Burns, «U.S. Building Up Forces at Obscure but Important Air Base in Qatari Desert», Associated Press, 30 de junio de 2002.
7. Denis F. Doyon, «Middle East Bases», en Joseph Gerson y Bruce Birchard, eds., *The Sun Never Sets: Confronting the Network of Foreign U.S. Military Bases*, South End Press for the American Friends Service Committee, Boston, 1991, pp. 15, 275-307; Sandars, *America's Overseas Garrisons*, pp. 55-59, y BBC News, «Diego García Islanders Battle to Return», 31 de octubre de 2002. Para unos cuantos detalles sobre Diego García en 2002, véase Office of the Deputy Undersecretary of Defense (Installations and Environment), *Base Structure Report (A Summary of DoD's Real Property Inventory)*, Department of Defense, Washington, 2002, s.v. «British Indian Ocean Territory».
8. David Morgan, «Ex-U.S. Official Says CIA Aided Ba'athists», Reuters, 20 de abril de 2003, disponible en <www.commondreams.org/headlines03/0420-05.htm>; CBS News, «Profile: Saddam Hussein», 8 de abril de 2003; Richard Sale, «Saddam Key in Early CIA Plot», United Press International, 10 de abril de 2003; «Bush Topples an Old U.S. Ally», *Socialist Worker Online*, 18 de abril de 2003.
9. Michael Dobbs, «U.S. Had Key Role in Iraq Buildup; Trade in Chemical Arms Allowed Despite Their Use on Iranians, Kurds», *Washington Post*, 30 de diciembre de 2003, y «Arming Iraq: A Chronology of U.S. Involvement», 17 de marzo de 2003, www.rehberg.net/arming-iraq.html.
10. Tony Paterson, «Leaked Report Says German and U.S. Firms Supplied Arms to Saddam», *Independent*, 18 de diciembre de 2002; *Die Tageszeitung*, Berlín, 20 de diciembre de 2002, y James Cusick y Felicity Arbuthnot, «America Tore Out 8,000 pages of Iraq Dossier», *Sunday Herald*, Escocia, 22 de diciembre de 2002. Véanse también Russ W. Baker, «Iraqgate», *Columbia Journalism Review*, marzo-abril de 1993; Christian Dewar, «Arming Iraq: How George H. W. Bush and Ronald Reagan Helped Iraq Develop Weapons of Mass Destruction», *Democratic Underground*, 13 de diciembre de 2002; Stephen Green, «Rumsfeld's Account Book: Who Armed Saddam?», *CounterPunch*, 24 de febrero de 2003; Paul Rockwell, «Who Armed Iraq?», *San Francisco Chronicle*, 2 de marzo de 2003, y «Yes, U.S. Helped Iraq Get Chemical, Biological Weapons», *Be-*

- lleville *News-Democrat*, sur de Illinois y área metropolitana de Saint Louis, 20 de abril de 2003, <www.belleville.com/mld/newsdemocrat/5674107.htm>
11. Jeremy Scahill, «What about Those Chemical Weapons? The Saddam in Rummy's Closet», *CounterPunch*, 2 de agosto de 2002. Para otros artículos sobre el suministro de Estados Unidos a Irak de gas venenoso y cepas de gérmenes para usos bélicos durante la guerra contra Irán de la década de 1980, véanse Eric Margolis, «Old Dreams of Empire Dance in Blair's Head», *Toronto Sun*, 31 de marzo de 2002; Patrick E. Tyler, «Iraqi Gas Use Didn't Stop U.S. Aid in '88», *The New York Times News Service, San Diego Union-Tribune*, 18 de agosto de 2002; Neil Mackay y Felicity Arbuthnot, «How Did Iraq Get Its Weapons? We Sold Them», *Sunday Herald*, Escocia, 8 de septiembre de 2002; Robert Novak, «Following Iraq's Bioweapons Trail», *Chicago Sun-Times*, 26 de septiembre de 2002; Matt Kelley, «U.S. Supplied Germs to Iraq in '80s», Associated Press, 30 de septiembre de 2002; Elson E. Boles, «Helping Iraq Kill with Chemical Weapons», *CounterPunch*, 10 de octubre de 2002; Jost R. Hiltermann, «America Didn't Seem to Mind Poison Gas», *International Herald Tribune*, 17 de enero de 2003; Stephen C. Pelletiere, «A War Crime or an Act of War?», *The New York Times*, 31 de enero de 2003, y Philip Shenon, «Iraq Links Germs for Weapons to U.S. and France», *The New York Times*, 16 de marzo de 2003.
 12. Ritt Goldstein, «Oil Wars Pentagon's Policy since 1999», *Sydney Morning Herald*, 20 de mayo de 2003.
 13. CBS News, tal como fue relatado en *The New York Times* del 5 de septiembre de 2002, p. A10; Bob Woodward, *Bush at War*, Simon & Schuster, Nueva York, 2002, pp. 49, 60-61 [hay trad. cast.: *Bush en guerra*, Península, Barcelona, 2003]; Chris Bury, «A Tortured Relationship: U.S.-Iraq Relations, Part 2: War», ABC News, 18 de septiembre de 2002; Michael T. Klare, «Scheduling War», 12 de febrero de 2003, <www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?pid=391>, y Stephen Fidler, «Just When Did the President Decide to Go to War?», *Financial Times*, 27 de marzo de 2003.
 14. Robert Kagan y William Kristol, eds., *Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy*, Encounter Books, San Francisco, 2000, y *Rebuilding America's Defenses*, <www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf>. Sobre el PNAC y los antecedentes de los neoconservadores del segundo gobierno Bush, véanse Elisabeth Bumiller y Eric Schmitt, «On the Job and at Home, Influential Hawks' 30-Year Friendship Evolves», *The New York Times*, 11 de septiembre de 2002; Tom Barry y Jim Lobe, «The Men Who Stole the Show», *Foreign Policy in Focus*, octubre de 2002; Steven R. Weisman, «Abrams Back in Capital Fray at Center of Mideast Battle», *The New York Times*, 7 de diciembre de 2002; Glenn Kessler, «U.S. Decision on Iraq Has Puzzling Past», *Washington Post*, 12 de enero de 2003; ABC News, «The Plan: Were Neo-Conservatives' 1998 Memos a Blueprint for Iraq War?», 10 de marzo de 2003, y William O. Beeman, «Military Might: The Man behind "Total War" in the Mideast», *San Francisco Chronicle*, 14 de mayo de 2003.
 15. PNAC, *Rebuilding America's Defenses*, p. 51; y Nicholas Lemann, «The Next World Order», *New Yorker*, 1 de abril de 2002, p. 44. Estoy en deuda con John Pilger por llamarme la atención sobre las actividades del PNAC. Véase su artículo en el *New Statesman*, 16 de diciembre de 2002.
 16. Scott Ritter, «Is Iraq a True Threat to the U.S.?», *Boston Globe*, 20 de julio de 2002. El 5 de abril de 2003, el ministro de Interior británico, David Blunkett, admitió que no era probable que se encontraran armas de destrucción masiva en Irak porque no existían. Véase Al-Jazeera (en inglés), 6 de abril de 2003.
 17. PNAC, *Rebuilding America's Defenses*, p. 14.
 18. Véase Tom Regan, «When Contemplating War, Beware of Babies in Incubators», *Christian Science Monitor*, 6 de septiembre de 2002; Associated Press, «Not All Iraq Claims Backed by Evidence», 22 de diciembre de 2002, y Mitchell Cohen, «How Bush Sr. Sold the Bombing of Iraq», *CounterPunch*, 28 de diciembre de 2002.
 19. Véase Victoria Samson, «Unmanned Aerial Vehicles Iraq's "Secret" Weapon?», Center for Defense Information, Terrorism Project, 10 de octubre de 2002.
 20. La fuente más importante sobre este asunto es Seymour Hersh, «A Case Not Closed», *New Yorker*, 1 de noviembre de 1993.
 21. Stephen Zunes, *Tinderbox: U.S. Foreign Policy and the Roots of Terrorism*, Common Courage Press, Monroe, Maine, 2003, p. 86; Robert Dreyfuss, «Persian Gulf—or Tonkin Gulf?», *American Prospect*, 13:23, diciembre de 2002, y Eric Schmitt, «Pentagon Shows Videos of Iraq Firing at Allied Jets», *The New York Times*, 1 de octubre de 2002.
 22. James Harding, Richard Wolffe y James Blitz, «U.S. Will Rebuild Iraq as Democracy, Says Rice», *Financial Times*, 22 de septiembre de 2002.
 23. Anthony Sampson, «West's Greed for Oil Fuels Saddam Fever», *Observer*, 11 de agosto de 2002. Sobre el dudoso pasado del joven Bush como miembro de la junta directiva de Harken Energy Corporation of Houston, véanse «Bush Was Told of Risks before Stock Sale: Harken Memo Went to SEC after Probe», *Boston Globe*, 30 de octubre de 2002, y Michael Lind, *Made in Texas*, Basic Books, Nueva York, 2003, pp. 102-103. Para un completo resumen de las maquinaciones norteamericanas con respecto al petróleo del golfo Pérsico en los últimos cincuenta años, véase Robert Dreyfuss, «The Thirty-Year Itch», *Mother Jones*, 1 de marzo de 2003.
 24. Ed Vulliamy, «Troops 'Vandalize' Ancient City of Ur», *Observer*, 18 de mayo de 2003.
 25. Julian Borger, «Anger at Peace Talks "Meddling"», *Guardian*, 13 de julio de 2000; Brian Whitaker, «U.S. Thinktanks Give Lessons in Foreign Policy», *Guardian*, 19 de agosto de 2002; Jill Junnola, «Perspective: Who Funds Whom?», *Energy Compass*, 4 de octubre de 2002; Eric Margolis, «After Iraq, Bush Will Attack His Real Target», *Toronto Sun*, 10 de noviembre de 2002; Margolis, «Bush's Mideast Plan: Conquer and Divide», *Toronto Sun*, 8 de diciembre de 2002; Sandy Tolan, «Beyond Regime Change», *Los Angeles Times*,

- 1 de diciembre de 2002; Jim Lobe, «Neoconservatives Consolidate Control over U.S. Mideast Policy», *Foreign Policy in Focus*, 6 de diciembre de 2002; Bill Christison y Kathleen Christison, «Too Many Smoking Guns to Ignore: Israel, American Jews, and the War on Iraq», *CounterPunch*, 25 de enero de 2003, y Michael Lind, «The Weird Men behind George W. Bush's War», *New Statesman*, 7 de abril de 2003, <www.newamerica.net/index.cfm?sec=programs&pg=article&pubID=1189&T2=Article>.
26. Dan Plesch, «Weapons of Mass Distraction», *Observer*, 29 de septiembre de 2002, y Brian J. Foley, «War Cries: Weapons of Mass Distraction», *CounterPunch*, 8 de noviembre de 2002.
 27. Sobre las decisiones tomadas por los presidentes durante la guerra de Vietnam, véase Daniel Ellsberg, *Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers*, Viking, Nueva York, 2002. Sobre el análisis de Ellsberg, véase Chalmers Johnson, «The Addiction to Secrecy», *London Review of Books*, 6 de febrero de 2003. Sobre Karl Rove, véase James C. Moore y Wayne Slater, *Bush's Brain: How Karl Rove Made Bush Presidential*, Wiley, Nueva York, 2003.
 28. Jay Bookman, «The President's Real Goal in Iraq», *Atlanta Journal-Constitution*, 29 de septiembre de 2002.
 29. Carol Morello, «Saudi Officials Shield U.S. Troop Presence from Public», *Washington Post*, 22 de marzo de 2003, y Robin Allen, «Gulf States Keep Lid on Extent of Defense Ties», *Financial Times*, 18 de febrero de 2003.
 30. Global Security Organization, «Eskan Village», www.globalsecurity.org/military/facility/eskan-village.htm. La colección de informes sobre las bases del CENTCOM de la Global Security Organization es una fuente de un valor incalculable.
 31. Catherine Taylor, «U.S. Air Base Ready for War after Millions in Upgrades», *Christian Science Monitor*, 31 de diciembre de 2002. Véanse también Vernon Loeb y Dana Priest, «Saudis Balk at U.S. Use of Key Facility», *Washington Post*, 22 de septiembre de 2001; Julian Borger, «U.S. Paves Way for War on Iraq; Attack Base to Be Moved into Qatar to Bypass Saudi Objections», *Guardian*, 27 de marzo de 2002; Kim Sengupta y Andrew Buncombe, «Saudi Bans Use of Its Air Bases to Attack Iraq», *Independent*, 8 de agosto de 2002, y Reuters, «Saudi Says Will Not Help Any U.S. Strike on Iraq», 3 de noviembre de 2002.
 32. «U.S. Military Women Cast Off Abayas», CBS News, 22 de enero de 2002.
 33. Eric Schmitt, «U.S. to Withdraw All Combat Units from Saudi Arabia», *The New York Times*, 30 de abril de 2003, y Maureen Dowd, «Hypocrisy and Apple Pie», *The New York Times*, 30 de abril de 2003.
 34. Global Security Organization, «Ahmed al Jaber Air Base», <www.globalsecurity.org/military/facility/ahmed-al-jaber.htm>.
 35. Global Security Organization, «Ali al Salem Air Base», <www.globalsecurity.org/military/facility/ali-al-salem.htm>.
 36. Global Security Organization, «Manama, Bahrain», <www.globalsecurity.org/military/facility/manama.htm>.

37. Ali Akbar Dareini, «Bahrain Joins Iran in Opposing U.S. Attack on Iraq», Associated Press, 18 de agosto de 2002.
38. Gary C. Gambill, «Qatar's al-Jazeera TV: The Power of Free Speech», *Middle East Intelligence Bulletin* 2:5, 1 de junio de 2000; Andrea Koppel y Elise Labott, «U.S. Pressures Qatar to Restrain TV Outlet», CNN.com, 3 de octubre de 2001; Tariq Ali, «Diary», *London Review of Books*, 22 de agosto de 2002, y Robin Shulman, «From Ramallah to Oakland: Al-Jazeera Is a Rising Star in the New Information Age», *San Francisco Chronicle*, 18 de agosto de 2002. Durante la segunda guerra de Irak, Estados Unidos mantuvo una campaña de críticas contra las informaciones de Al Jazeera. Véase Elizabeth Ptacek, «Backlash against al-Jazeera», *In These Times*, 4 de abril de 2003.
39. 1.º teniente Johnny Rea, 379.ª Air Expeditionary Wing Public Affairs Officer, 198.65.138.161/military/library/news/2002/06/mil-020611-usaf01.htm.
40. Associated Press, «U.S. to Close One Air Base, Upgrade Another», *Washington Times*, 12 de mayo de 2003; Global Security Organization, «Al-Udeid Air Base, Qatar», www.globalsecurity.org/military/facility/udeid.htm.
41. Michael Wolff, «Live from Doha», *New York Magazine*, 7 de abril de 2003; Verne Gay, «Brig. Gen. Vincent Brooks, the Face of the War Effort», *Chicago Tribune*, 10 de abril de 2003.
42. BBC News, «U.S. to Expand Abu Dhabi Air Base», 14 de mayo de 2003.
43. Véase «Oman Open to Closer U.S. Military Ties», *WorldNetDaily.com*, 14 de enero de 2002; Ian Bruce, «U.S. to Spend £90m on Air Base in Oman», *Herald*, 19 de abril de 2002; y «Oman Allocates Land for New Base», *World Tribune.com*, 25 de abril de 2002.

CAPÍTULO 9

1. Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, Nueva York, Meridian Books, 1958, p. 125. [Hay trad. cast.: *Los orígenes del totalitarismo*, Alianza, Madrid, 2003.]
2. World Trade Organization, *Annual Report 1998: International Trade Statistics*, WTO, Ginebra, 1998, p. 12. Citado en Walden Bello, *The Future in the Balance*, Food First Books, Oakland, California, 2001, p. 36.
3. Bruce R. Scott, «The Great Divide in the Global Village», *Foreign Affairs*, 80:1, enero-febrero de 2001, p. 160.
4. Manfred B. Steger, *Globalism: The New Market Ideology*, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2002, pp. 12-13.
5. Para una alegre exposición sobre cómo la globalización reducirá el estado y dará paso a un período de paz duradera, véase Richard N. Rosecrance, *The Rise of the Virtual State: Wealth and Power in the Coming Century*, Basic Books, Nueva York, 2000.
6. Steger, *Globalism*, p. 54.

7. Bill Clinton, «Remarks by the President on Foreign Policy», discurso sólo para invitados, San Francisco, 26 de febrero de 1999, y Sonya Ross, «Clinton Talks of Better Living», Associated Press, 15 de octubre de 1997. Citado en Steger, *Globalism*, p. 55.
8. Véase la conferencia de prensa de Bush después de la Cumbre de las Américas del 22 de abril de 2001 en Québec. Véase también Maude Barlow, *The Free Trade Area of the Americas: The Threat to Social Programs, Environmental Sustainability and Social Justice*, International Forum on Globalization, San Francisco, 2001.
9. Oswaldo de Rivero, *The Myth of Development*, Zed Books, Londres, 2001, p. 138. [Edición original en castellano: *El mito del desarrollo: Los países inviables en el siglo XXI*, Mosca Azul, Lima, 1998.]
10. *Ibid.*, p. 22.
11. Harvey Cox, «The Market as God: Living in the New Dispensation», *Atlantic Monthly*, marzo de 1999, pp. 18-23.
12. Arendt, *Origins of Totalitarianism*, p. 209. Sobre el racismo y el genocidio del Imperio Británico, véase Sven Lindquist, *Exterminate All the Brutes*, New Press, Nueva York, 1996. [Hay trad. cast.: *Exterminad a todos los salvajes*, Turner, Madrid, 2004.]
13. Joseph E. Stiglitz, «A Fair Deal for the World», *New York Review of Books*, 23 de mayo de 2002, p. 24. Véase también Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W. W. Norton, Nueva York, 2002. [Hay trad. cast.: *El malestar en la globalización*, Taurus, Madrid, 2003.]
14. De Rivero, *Myth of Development*, pp. 3, 9, 24.
15. Citado en Ha-Joon Chang, *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*, Anthem Press, Londres, 2002. Chang es profesor de Economía en la Universidad de Cambridge.
16. Sobre cómo Japón se convirtió en la segunda economía más productiva del mundo, véanse Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*, Stanford University Press, Stanford, 1982; Linda Weiss, *The Myth of the Powerless State*, Cornell University Press, Ithaca, 1998, y Meredith Woo-Cumings, ed., *The Developmental State*, Cornell University Press, Ithaca, 1999.
17. De Rivero, *Myth of Development*, p. 109; Ted C. Fishman, «Making a Killing: The Myth of Capital's Good Intentions», *Harper's*, agosto de 2002, p. 34.
18. Thomas Ferguson, «Blowing Smoke: Impeachment, the Clinton Presidency, and the Political Economy», en William J. Crotty, ed., *The State of Democracy in America*, Georgetown University Press, Washington, 2001, p. 233. Sobre el funcionamiento del FMI y del Banco Mundial, véase William Finnegan, «The Economics of Empire: Notes on the Washington Consensus», *Harper's*, mayo de 2003, pp. 41-54.
19. Nicholas Guyatt, *Another American Century? The United States and the World after 2000*, Zed Books, Londres, 2000, p. 8.
20. Bello, *Future in the Balance*, p. 49.

21. John Madeley, *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*, Zed Books, Londres, 2000, p. 58 [hay trad. cast.: *El comercio del hambre*, Intermón Oxfam, Barcelona, 2003]; Guyatt, *Another American Century?*, pp. 12, 37.
22. Lawrence Summers, «The Memo», <www.whirledbank.org/ourwords/summers.html>. Véase también Jonathan R. Pincus y Jeffrey A. Winters, eds., *Reinventing the World Bank*, Cornell University Press, Ithaca, 2002, pp. 13-14.
23. Jeffrey E. Garten, «The Root of the Problem», *Newsweek*, 31 de marzo de 1997. Citado en Guyatt, *Another American Century?*, p. 185. Véase también Garten, «Business and Foreign Policy», *Foreign Affairs*, 76:5, 1997, pp. 67-79.
24. Bello, *Future in the Balance*, p. 52.
25. *Ibid.*, p. 51.
26. *Ibid.*, p. xiv.
27. *Ibid.*, pp. 45, 69; Steve Schifferes, «Doha Trade Deal Unravelling», BBC News, 10 de noviembre de 2002.
28. Stiglitz, «Fair Deal for the World», p. 28.
29. Véanse «WTO Pact on Generic Drugs Blocked by U.S.», *Financial Times*, 21-22 de diciembre de 2002, y Nicola Bullard, «Is the WTO Collapsing under Its Own Ambitions?», *Focus on Trade*, n.º 82, diciembre de 2002. Para el acuerdo de la OMC que reduce la protección de patentes sobre medicamentos, véase World Trade Organization, «Declaration on the TRIPS and Public Health», WTO Ministerial 2001, Doha, Qatar, 14 de noviembre de 2001.
30. Andrew Pollack, «Widely Used Crop Herbicide Is Losing Weed Resistance», *The New York Times*, 14 de enero de 2003.
31. Madeley, *Hungry for Trade*, pp. 100-103.
32. Una completa exposición sobre estos complejos asuntos puede encontrarse en Edith Terry, *How Asia Got Rich*, M. E. Sharpe, Armonk, Nueva York, 2002.
33. Thomas L. Friedman, *The Lexus and the Olive Tree*, Farrar, Straus & Giroux, Nueva York, 1999, pp. 112-113. [Hay trad. cast.: *Tradición versus innovación*, Atlántida, Buenos Aires, 1999.]
34. Fishman, «Making a Killing», p. 41, n. 10; David Hale, «Will Argentina Recover without the IMF?», Zurich Financial Services, 20 de diciembre de 2002. Hale es economista jefe de Zurich Financial Services.
35. De Rivero, *Myth of Development*, p. 17.
36. Robert Naiman (Center for Economic and Policy Research), «Secrecy at the IFIs [instituciones financieras internacionales]», *Progressive Response*, 5:38, 13 de noviembre de 2001, y Bello, *Future in the Balance*, pp. 28-29.
37. *Focus on Trade*, enero de 2002, y James Harding, «Globalization's Children Strike Back», *Financial Times*, 11 de septiembre de 2001.
38. Robert B. Zoellick, «American Trade Leadership: What Is at Stake?», Institute for International Economics, Washington, DC, 24 de septiembre de 2001.
39. Thomas Friedman, «Senseless in Seattle», *The New York Times*, 1 de diciembre de 1999; y Peter Wahl, «European Social Forum», *Focus on Trade*, n.º 83, diciembre de 2002.

40. Véanse J. Bradford DeLong, «The Meltzer Report», <www.j-bradford-delong.net/TotW/meltzer.html>; Christian Weller, «Meltzer Report Misses the Mark: Commission's Recommendations for World Bank, IMF Need Further Consideration», Economic Policy Institute, Issue Brief 141, 13 de abril de 2000, y Bello, *Future in the Balance*, pp. xiv, 60.
41. Shihoko Goto, «Argentina's Menem Says Woes Not His Fault», *Washington Times*, 12 de junio de 2002.
42. Véase el importante análisis de John Feffer, «Military in the Age of Globalization», *Foreign Policy in Focus*, 6 de noviembre de 2001. Véase también William Pfaff, «Bush Team's Military Focus Is Skewing U.S. Foreign Policy», *International Herald Tribune*, 30 de junio de 2001.
43. David Lague, «Gripes over U.S. Grip on Arms Trade», *Far Eastern Economic Review*, 26 de septiembre de 2002; Kim Kwang-tae, «U.S. to Ditch Korea's Weapons Integration if It Buys Non-U.S. Aircraft in F-X Plan», *Korea Times*, 22 de julio de 2001; Hwang Jang-jin, «Boeing F-15K, with GE Engine, Wins Deal Worth \$4.46 Billion», *Korea Now*, 4 de mayo de 2002, p. 24.
44. Larry Rohter, «Jet Purchase Splits Brazil: New Leader Wants Voice», *The New York Times*, 29 de noviembre de 2002.
45. Larry Rohter, «Brazil: U.S. Offers Missiles», *The New York Times*, 24 de mayo de 2002; Raymond Colitt, «Lula to Use Defense Funds in Famine Fight», *Financial Times*, 4-5 de enero de 2003.
46. Michelle Ciarrocca, «Post 9/11 Economic Windfalls for Arms Manufacturers», *Foreign Policy in Focus*, 7:10, septiembre de 2002.
47. Gwyn Kirk y Margo Okazawa-Rey, «Neoliberalism, Militarism, and Armed Conflict», *Social Justice*, 27:4, invierno de 2000, p. 9; Charles M. Sennott, «Arms Deal Criticized as Corporate U.S. Welfare», *Boston Globe*, 14 de enero de 2003.
48. Karen Talbot, «The Real Reasons for War in Yugoslavia: Backing Up Globalization with Military Might», *Social Justice*, 27:4, invierno de 2000, p. 100.
49. William Greider, «The End of Empire», *Nation*, 23 de septiembre de 2002.

CAPÍTULO 10

1. Madeleine Bunting, «Beginning of the End: The U.S. Is Ignoring an Important Lesson from History—That an Empire Cannot Survive on Brute Force Alone», *Guardian*, 3 de febrero de 2003.
2. «Bush's United States Military Academy Graduation Speech», *Washington Post*, 2 de junio de 2002, y «Full Text: Bush's National Security Strategy», *The New York Times*, 20 de septiembre de 2002.
3. Ewen MacAskill, «Up to 50 States Are on Blacklist, Says Cheney», *Guardian*, 17 de noviembre de 2001; James Doran, «Terror War Must Target 60 Nations, Says Bush», *Times*, Londres, 3 de junio de 2002.
4. Arthur Schlesinger, Jr., «Good Foreign Policy a Casualty of War», *Los Angeles Times*, 23 de marzo de 2003.

5. Véanse William Pfaff, «Al Qaeda vs. the White House», *International Herald Tribune*, 28 de diciembre de 2002; Pfaff, «Religiosity and Foreign Policy: When Power Disdains Realism», *International Herald Tribune*, 3 de febrero de 2003; Anatol Lieven, «The Push for War», *London Review of Books*, 3 de octubre de 2002, y Jack Beatty, «In the Name of God», *Atlantic Monthly*, 5 de marzo de 2003.
6. Stanley Hoffmann, «The High and the Mighty», *American Prospect*, 13:24, 13 de enero de 2003.
7. Immanuel Wallerstein, «The Righteous War», Commentary n.º 107, University of Binghamton, 15 de febrero de 2003.
8. Carta de John Brady Kiesling, *The New York Times*, 27 de febrero de 2003.
9. Tom Barry, «The U.S. Power Complex: What's New?», *Foreign Policy in Focus* n.º 11, Special Report, noviembre de 2002.
10. Véanse capítulo 6 *supra*, y Madhavee Inamdar, «Global Vigilance in a Global Village: U.S. Expands Its Military Bases», *Progressive Response*, 6:41, 31 de diciembre de 2002.
11. William M. Arkin, «The Best Defense», *Los Angeles Times*, 14 de julio de 2002; «Russian Expert Predicts 500,000 Iraqi Dead in War Designed To Test Weapons: Interview with military analyst Vladimir Slipchenko», *Rossiyskaya Gazeta*, 22 de febrero de 2003, www.globalresearch.ca/articles/SL1303A.html.
12. John A. Gentry, «Doomed to Fail: America's Blind Faith in Military Technology», *Parameters*, invierno 2002-2003, pp. 88-103. Véase también Mike Davis, «Slouching toward Baghdad», *Tomdispatch.com*, 26 de febrero de 2003. Para el apagón informático de enero de 2000, véase James Bamford, *Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency*, Anchor Books, Nueva York, 2002, pp. 451-453.
13. Gentry, «Doomed to Fail», p. 99.
14. Jason Vest, «The Army's Empire Skeptics», *Nation*, 3 de marzo de 2003, pp. 27-30. Véase también Thomas E. Ricks y Vernon Loeb, «Unrivaled Military Feels Strains of Unending War», *Washington Post*, 16 de febrero de 2003.
15. Véase Ira Chernus, «Shock & Awe: Is Baghdad the Next Hiroshima?», *CommonDreams.org*, 27 de enero de 2003. Sobre las propuestas angloamericanas del uso de láseres para producir ceguera y atontamiento y microondas capaces de calentar el agua de la piel humana hasta que hierva, véase Antony Barnett, «Army's Secret "People Zapper" Plans», *Observer*, 3 de noviembre de 2002. Estados Unidos está patrocinando investigaciones sobre armas químicas y biológicas que infringen la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 y otros tratados internacionales. Uno de los proyectos busca producir ántrax resistente a los antibióticos (Julian Borger, «U.S. Weapons Secrets Exposed», *Guardian*, 29 de octubre de 2002, y Thomas Fuller, «Microwave Weapons: The Dangers of First Use», *International Herald Tribune*, 17 de marzo de 2003).
16. Julian Borger, «U.S. Plan for New Nuclear Arsenal», *Guardian*, 19 de febrero de 2003; Véase también Ellen Goodman, «War Is Now the Cover Story for

- Making More Terror», *Newsday*, 14 de marzo de 2002; Tad Daley, «America's Nuclear Hypocrisy», *International Herald Tribune*, 21 de octubre de 2002; Jonathan Schell, «The Bomb Is Back», *Sojourners Magazine*, noviembre-diciembre de 2002, pp. 20-25, 58-59; Ira Chernus, «Brandishing Nukes—A Self-Defeating Policy», *CommonDreams.org*, 4 de febrero de 2003; Dan Stober, «Administration Moves Ahead on Nuclear “Bunker Busters”», *San Jose Mercury News*, 23 de abril de 2003, y Noah Shachtman, «Embattled Lab Unveils New Nukes», *Wired*, 23 de abril de 2003.
17. Elaine Scarry, «A Nuclear Double Standard», *Boston Globe*, 3 de noviembre de 2002.
 18. Véanse Marilyn W. Thompson, *The Killer Strain: Anthrax and a Government Exposed*, HarperCollins, Nueva York, 2003, y Chuck Murphy, «Not Iraq, but Anniston, Ala.», *St. Petersburg Times*, 16 de marzo de 2003. Según Murphy, el ejército de Estados Unidos está almacenando en la actualidad 395.994 kilos de gas sarín, 751.819 kilos del agente nervioso VX y 896.642 kilos de gas mostaza.
 19. «Complete Text of President Bush's State of the Union Address», *Los Angeles Times*, 28 de enero de 2003. Véanse también Ian Urbina, «On the Road with Murder, Inc.», *Asia Times*, 24 de enero de 2003; Ori Nir, «Bush Seeks Israeli Advice on “Targeted Killings”», *Forward*, 7 de febrero de 2003.
 20. Bob Woodward, *Bush at War*, Simon & Schuster, Nueva York, 2002, pp. 145-146. [Hay trad. cast.: *Bush en guerra*, Península, Barcelona, 2003.]
 21. James Madison, tal como lo citó el senador demócrata Robert C. Byrd el 3 de octubre de 2002, al hablar en contra de una resolución que concedía al presidente autoridad ilimitada para hacer a la guerra cuando quisiera. Véase John C. Bonifaz, «War Powers: The White House Continues to Defy the Constitution», *TomPaine.com*, 4 de febrero de 2003.
 22. Doug Thompson, «Role Reversal: Bush Wants a War, Pentagon Urges Caution», *Capitol Hill Blue*, 22 de enero de 2002; citado en Winslow T. Wheeler, «The Week of Shame: Congress Wilts as the President Demands an Unclogged Road to War», Center for Defense Information, Washington, enero de 2003, p. 17.
 23. Wheeler, «Week of Shame», p. 17. Véase también Steve Lopez, «Hindsight Casts Harsh Light on Use-of-Force Resolution», *Los Angeles Times*, 5 de marzo de 2003.
 24. Estoy en deuda con William Norman Grigg por el análisis que ofrece en «Suspending Habeas Corpus», *New American*, 18:14, 15 de julio de 2002. Véanse también «Detaining Americans», *Washington Post*, 13 de junio de 2002, y Nat Hentoff, «George W. Bush's Constitution», *Village Voice*, 3 de enero de 2003.
 25. Benjamin Weiser, «U.S. to Appeal Order Giving Lawyers Access to Detainee», *The New York Times*, 26 de marzo de 2003.
 26. Dick Meyer, «John Ashcroft: Minister of Fear», *CBSNews.com*, 12 de junio de 2002. Véanse también Geov Parrish, «Hello? Is Anybody Getting This Down?», *WorkingForChange.com*, 11 de junio de 2002, y Edward Alden y

- Caroline Daniel, «Battle Lines Blurred as U.S. Searches for Enemies in the War on Terrorism», *Financial Times*, 2 de enero de 2003.
27. Para más detalles, véase Paul Brodeur, *Secrets: A Writer in the Cold War*, Faber and Faber, Boston, 1997, pp. 159-165. Sobre el espionaje ilegal de la CIA a ciudadanos estadounidenses, véase Angus Mackenzie, *Secrets: The CIA's War at Home*, University of California Press, Berkeley, 1997. Existe una relación directa entre los atentados de hace treinta años contra las libertades civiles y la propuesta de la administración Bush en 2003 de conceder poderes de citación al Pentágono y la CIA, lo que permitiría a sus agentes solicitar registros personales y financieros de personas en Estados Unidos como parte de unas supuestas operaciones de contraterrorismo. Véase Eric Lichtblau y James Risen, «Broad Domestic Role Asked for CIA and the Pentagon», *The New York Times*, 2 de mayo de 2003.
 28. James Bamford, «Washington Bends the Rules», *The New York Times*, 27 de agosto de 2002.
 29. Patrick S. Poole, «Inside America's Secret Court: The Foreign Intelligence Surveillance Court», fly.hiwaay.net/~pspoole/fiscshort.html.
 30. Anita Ramasastry, «Why the Foreign Intelligence Surveillance Act Court Was Right to Rebuke the Justice Department», 4 de septiembre de 2002, writ.news.findlaw.com/ramasastry/20020904.html. Ramasastry es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en Seattle.
 31. Richard B. Schmitt, «U.S. Expands Clandestine Surveillance Operations», *Los Angeles Times*, 5 de marzo de 2003.
 32. Bob Egelko, «Spy Court to Review Prosecutors' Powers», *San Francisco Chronicle*, 1 de septiembre de 2002, y Anita Ramasastry, «The Foreign Intelligence Surveillance Court of Review Creates a Potential End Run around Traditional Fourth Amendment Protections for Certain Criminal Law Enforcement Wiretaps», 26 de noviembre de 2002, writ.news.findlaw.com/ramasastry/20021126.html.
 33. «U.S. Considers New Anti-Terrorism Legislation», Reuters, 7 de febrero de 2003.
 34. William M. Arkin, «The Military's New War of Words», *Los Angeles Times*, 24 de noviembre de 2002.
 35. Bob Kemper, «Team Makes Sure War Message Is Unified, Positive», *Chicago Tribune*, 7 de abril de 2003.
 36. «U.S. Lobbyist Helped Draft Eastern Europeans' Iraq Statement», Yahoo News, 20 de febrero de 2003.
 37. Pervez Hoodbhoy, «America's Dreams of Empire», *Los Angeles Times*, 26 de enero de 2003; Chris Floyd, «Bush Uses War to Bury Probe of 9/11», *CounterPunch*, 22 de marzo de 2003.
 38. James Bamford, *Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-secret National Security Agency*, Anchor Books, Nueva York, 2002, pp. 78-91. Véanse también Bamford, «Bush Wrong to Use Pretext as Excuse to Invade Iraq», *USA Today*, 29 de agosto de 2002; Adam Hochschild, «War of Peace? The U.S. Is Looking for an Excuse to Fight», *San Francisco Chronicle*, 19 de enero de 2003, y Jen-

- nifer A. Gritt, «Weapons of Mass Delusion», 30 de abril de 2003, *www.antiwar.com/orig/gritt2.html*.
39. «Weighing the Evidence», *The New York Times*, 15 de febrero de 2003.
 40. La transcripción se encuentra en internet, en *www.fair.org/press-releases/kamel.pdf*. Véanse también «Star Witness on Iraq Said Weapons Were Destroyed», *Fairness and Accuracy in Reporting*, 27 de febrero de 2003; John Barry, «The Defector's Secrets», *Newsweek*, 3 de marzo de 2003; Andrew Gumbel, «Anthrax, Chemicals, and Nerve Gas: Who Is Lying?», *Independent*, 20 de abril de 2003, y «So Where Are They, Mr. Blair?», *Independent*, 20 de abril de 2003.
 41. Las declaraciones más relevantes de Ritter fueron pronunciadas durante su entrevista en el programa *Frontline* de la PBS en 1999, *www.pbs.org/wgbb/pages/frontline/shows/unsc/interviews/ritter.html*.
 42. Jonathan Rugman, «Downing Street Dossier Plagiarized», Channel 4 News, 6 de febrero de 2003, *www.channel4.com/news/2003/02/week_1/06_dossier.html*; y Alexander Cockburn, «The Great "Intelligence Fraud"», *CounterPunch*, 15 de febrero de 2003.
 43. «U.N. Inspectors: U.S. Used Forged Reports», *Guardian*, 8 de marzo de 2003.
 44. Joby Warrick, «Some Evidence on Iraq Called Fake», *Washington Post*, 8 de marzo de 2003; Stephen Fidler, «Niger Documents Fake, Says ElBaradei», *Financial Times*, 8-9 de marzo de 2003, Louis Charbonneau, «"Proof" That Iraq Sought Uranium Was Fake», Reuters, 7 de marzo de 2003; Bob Drogin y Greg Miller, «Intelligence Value in Iraq Questioned», *Los Angeles Times*, 8 de marzo de 2003; Mark Phillips, «Inspectors Call U.S. Tips "Garbage"», *CBS-News.com*, 20 de febrero de 2003; carta del congresista Henry A. Waxman al presidente George W. Bush, 17 de marzo de 2003, *www.house.gov/waxman/text/admin_iraq_march_17_let.htm*; Dana Priest y Karen De Young, «CIA Questioned Documents Linking Iraq, Uranium Ore», *Washington Post*, 22 de marzo de 2003, y Seymour M. Hersh, «Who Lied to Whom?», *New Yorker*, 31 de marzo de 2003, pp. 41-43.
 45. Citado en Ray Close, «A CIA Analyst on Forging Intelligence», *CounterPunch*, 10 de marzo de 2003.
 46. Ray McGovern, «CIA Director Caves In», *CommonDreams.org*, 13 de febrero de 2003.
 47. Seymour M. Hersh, «Selective Intelligence», *New Yorker*, 12 de mayo de 2003, pp. 44-51. Véanse también Paul Harris, Martin Bright, Taji Helmore y Ed Helmore, «U.S. Rivals Turn On Each Other as Weapons Search Draws a Blank», *Observer*, 11 de mayo de 2003; Barton Gellman, «Frustrated, U.S. Arms Team to Leave Iraq; Task Force Unable to Find Any Weapons», *Washington Post*, 11 de mayo de 2003, y Harold Meyerson, «Enron-like Unreality», *Washington Post*, 13 de mayo de 2003.
 48. Thom Shanker y Richard W. Stevenson, «Pentagon Wants \$10 Billion a Year for Antiterror Fund», *The New York Times*, 27 de noviembre de 2002; Leslie Wayne, «Rumsfeld Warns He Will Ask Congress for More Billions», *The New York Times*, 6 de febrero de 2003. Llewellyn H. Rockwell, Jr., «War and the Economy», *Mises.org*, 10 de marzo de 2003.
 49. David R. Sands, «Allies Unlikely to Help Pay for Second Iraq Invasion», *Washington Times*, 10 de marzo de 2003.
 50. Edmund L. Andrews, «Federal Debt Near Ceiling; Second Time in 9 Months», *The New York Times*, 20 de febrero de 2003.
 51. David Hale, «Are the Financial Markets Ready for One War or Two?», Zurich Financial Services, 12 de marzo de 2003.
 52. Vincent Cable, «The Economic Consequences of War», *Observer*, 2 de febrero de 2003.
 53. Laton McCartney, *Friends in High Places. The Bechtel Story: The Most Secret Corporation and How It Engineered the World*, Balantine, Nueva York, 1989; «U.S. Invites Bids for Iraq Reconstruction Work», Reuters, 10 de marzo de 2003; Joshua Chaffin, «Halliburton's Links Sharpen Bids Dispute», *Financial Times*, 27 de marzo de 2003; Oliver Morgan y Ed Vulliamy, «Cronies Set to Make a Killing», *Observer*, 6 de abril de 2003, Stephen Glain, «Halliburton Unit Could Make \$7 Billion», *Boston Globe*, 11 de abril de 2003, y David Ivanovich, «Pentagon Defends Halliburton Job», *Houston Chronicle*, 10 de abril de 2003.
 54. Robert Higgs, «Free Enterprise and War, a Dangerous Liaison», Independent Institute, 22 de enero de 2003, *www.independent.org/tii/news/030122-Higgs.html*.
 55. Fred Kaplan, «Star Wars Spending Spree», *Slate*, 7 de noviembre de 2002; y Seymour Melman, «In the Grip of a Permanent War Economy», *Bear Left!*, 9 de marzo de 2003, *www.bear-left.com/original/2003/0309permanent.html*.
 56. Reinhold Niebuhr, *The Irony of American History*, Scribner, Nueva York, 1952 [hay trad. cast.: *La ironía de la historia americana*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1958]; citado en Joseph C. Hough, Jr., «President's Newsletter», Union Theological Seminary, Nueva York, marzo de 2003.
 57. «U.S. Plans Death Camp», *Herald Sun*, Australia, 26 de mayo de 2003, *news.com.au* [disponible en: *www.prisonplanet.com/us_plans_death_camp.htm*]; «Guantánamo Courtrooms Being Prepared», *Los Angeles Times*, 2 de junio de 2003.
 58. Michael Klare, *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*, Owl Books, Nueva York, 2002 [hay trad. cast.: *Guerras por los recursos: el futuro escenario del conflicto global*, Urano, Barcelona, 2003]; Ken Silverstein, «The Crude Politics of Trading Oil», *Los Angeles Times*, 6 de diciembre de 2002.
 59. Loring Wirbel, «U.S. "Negation" Policy in Space Raises Concerns Abroad», *EETimes*, 22 de mayo de 2003.

Agradecimientos

NO ME RESULTÓ FÁCIL ESCRIBIR ESTE LIBRO. No me gusta lo que tiene que decir sobre mi país. Sin embargo, los acontecimientos que condujeron a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como los acaecidos posteriormente, me han convencido de que este análisis es correcto. No me agrada declarar que es probable que Estados Unidos se haya rendido al militarismo, por eso el libro tiene una documentación bastante amplia: deseo asegurarme de que los lectores sepan por qué afirmo saber ciertas cosas. Por supuesto, dejo a los demás la decisión de si he sido convincente y si tiene fundamento mi alarma acerca del camino en el que nuestro país se está adentrando. Pienso que no hará falta esperar demasiado para descubrirlo.

Mientras lo escribía, recibí una gran ayuda editorial e innumerables comentarios útiles de Sheila K. Johnson, mi compañera durante cuarenta y seis años y una escritora e intelectual llena de talento. Debo mucho a Tom Engelhardt, mi editor, que se implicó a fondo en la búsqueda de analogías y precedentes que pudieran arrojar luz sobre el suicidio de Estados Unidos en cuanto democracia. Sandra Dijkstra, mi agente, y su socia, Babette Sparr, trabajaron sin descanso para que mis ideas llegaran al público. Otros que me llamaron la atención sobre algunos aspectos del imperialismo y el militarismo que desconocía o había pasado por alto son Kozy Amemiya, Maricler y Alfredo Antognini, Walden Bello, Steve Clemons, Patrick Hatcher, Barry Keehn, Brian Loveman, Thomas Royden, Odete Sousa, Yoshihiko Nakamoto y los editores de *www.antiwar.com*.

Índice

<i>Prólogo: la revelación del imperio americano</i>	7
1. VIEJOS Y NUEVOS IMPERIALISMOS	23
2. LAS RAÍCES DEL IMPERIALISMO AMERICANO	49
3. HACIA UNA NUEVA ROMA	79
4. LAS INSTITUCIONES DEL MILITARISMO AMERICANO	111
5. SOLDADOS SUSTITUTOS Y MERCENARIOS PRIVADOS	151
6. EL IMPERIO DE LAS BASES	173
7. EL BOTÍN DE GUERRA	209
8. LAS GUERRAS DE IRAK	241
9. ¿QUÉ OCURRIÓ CON LA GLOBALIZACIÓN?	285
10. LOS PESARES DEL IMPERIO	315
<i>Notas</i>	347
<i>Agradecimientos</i>	389